

SUPLEMENTO  
AL  
CÓDIGO PENAL  
REFORMADO  
DE 1870

(Es el **Suplemento 4.º** de las ediciones 1.ª, 2.ª y 3.ª del Código penal concordado y comentado, y el 1.º de la **cuarta**, hoy en preparación.)



SUPLEMENTO  
AL  
CÓDIGO PENAL  
REFORMADO  
DE 1870

(Es el **Suplemento 4.º** de las ediciones 1.ª, 2.ª y 3.ª del Código concordado y consensado  
y el **1.º** de la **cuarta**, hoy en preparación)

**COMPRENDE**

TODAS LAS CUESTIONES Y CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS POR LA JURISPRUDENCIA  
DEL TRIBUNAL SUPREMO EN MÁS DE **QUINIENTAS** SENTENCIAS DICTADAS EN MATERIA  
DE CARACIÓN CRIMINAL EN LOS AÑOS 1887 Á 1889

**SEGUIDO**

DE  
**UN EXTENSO Y MINUCIOSO REPERTORIO ALFABÉTICO**

DE LAS MISMAS

Y DE UN **APÉNDICE** CON LAS  
CUESTIONES Y CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS POR EL PROPIO TRIBUNAL SUPREMO  
RESPECTO DE LAS LEYES PENALES ESPECIALES

POR

**DON SALVADOR VIADA Y VILASECA**

**Abogado Fiscal del Tribunal Supremo**

*Longum iter per praecepta: breve  
et efficax per exempla.*

(Séneca.)

---

MADRID

LIBRERÍA DE FERNANDO FÉ

Carrera de San Jerónimo, 2.



1889

LIBRERÍA DE A. SAN MARTÍN

Puerta del Sol, 6.

Esta obra es propiedad del autor, y está bajo la garantía de la ley de 10 de Enero de 1879, por haberse cumplido lo dispuesto en el art. 36 de la misma.

El autor dispondrá como de legítima procedencia todo ejemplar que carezca de su firma y rúbrica y de la anotación correspondiente.

Nº 1493 *Salvador Nader*



Al dar hoy á la estampa el **Suplemento cuarto** al Código penal concordado y comentado, después de año y medio de haber publicado el **Suplemento anterior**, más que á impulso personal nuestro, que habría sido atender preferentemente á la confección de la 4.<sup>a</sup> edición de dicho Código, imperiosamente exigida por el total agotamiento, hace ya más de un año, de las tres ediciones anteriores, damos satisfacción al deseo que nos han manifestado muchísimos de nuestros constantes favorecedores de poseer al corriente, en cuanto cabe, dada la especial estructura de nuestro trabajo, las decisiones del Tribunal Supremo dictadas en materia de casación criminal, cuya importancia y transcendencia acreciéntanse diariamente por extraordinario modo.

Comprenderá este tomo parte de la jurisprudencia del año 1887 que no pudo tener cabida en el **Suplemento tercero** y la posterior hasta el presente año de 1889.

De esta suerte, poseerán nuestros lectores en un corto número de volúmenes relativamente toda la jurisprudencia sustancial del Tribunal Supremo dictada en los 18 años que llevamos en España de casación criminal, y concluida que esté la publicación, podremos emprender libre y desembarazadamente la de la 4.<sup>a</sup> edición de nuestro Código, que comprenderá, además del texto, concordancias y comentarios, toda la materia jurisprudencial contenida en las

ediciones anteriores de dicha obra y sus tres Suplementos, sirviendo, por lo tanto, el que hoy publicamos, así para los suscriptores y adquirentes de las tres anteriores ediciones del Código, como para los que lo sean de la cuarta, hoy en preparación.

Todo ello se entiende contando con la ayuda de Dios, factor principalísimo en la realización de todo humano propósito.

*Madrid, 1.º de Marzo de 1889.*

# SUPLEMENTO

AL

## CÓDIGO PENAL

(Es el Suplemento 4.º de las ediciones 1.ª, 2.ª y 3.ª del Código penal concordado y comentado, y el 1.º de la 4.ª edición.)

### LIBRO PRIMERO

Disposiciones generales sobre los delitos y faltas,  
las personas responsables y las penas.

### TÍTULO I

DE LOS DELITOS Y FALTAS Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE EXIMEN  
DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL, LA ATENUAN Ó LA AGRAVAN

#### CAPÍTULO I

De los delitos y faltas.

#### Art. 1.º

DEFINICIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS

**CUESTION I.** *La responsabilidad de los actos constitutivos de delito ó falta, habrá de estar subordinada á la intención especial del agente de quebrantar la ley, ó bastará que siendo libre la acción produzca este resultado?*—El Tribunal Supremo ha declarado que esto último basta para determinar la responsabilidad criminal: «Considerando que la sentencia reclamada no contiene afirmación de hecho directa ni indirectamente contraria á la presunción legal establecida en el art. 1.º del Código penal, de ser involuntarias (1) las acciones constitutivas de delito, cuya responsabilidad no deriva ni se subordina á la intención especial del agente de que-

(1) Así dice la Gaceta, debiendo decir, sin duda alguna, voluntarias.



brantar la ley, si aquélla es libre y produce este resultado.» (Sentencia de 19 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 5 de Enero de 1888, pág. 19.)

**CUESTION II.** *Si habiéndose propuesto el criminal realizar la muerte de una sola persona, por medio de una materia explosiva de gran potencia, contenida en una caja que al efecto le remitiera, al estallar ésta en el acto de abrirla no sólo se produce la muerte de aquel á quien el culpable quiso hacer víctima de su venganza, sino además la de otra persona que casualmente se hallaba en la misma habitación, ¿cabrá alegar válidamente que por la especialidad del caso en cuanto al pensamiento generador, medio de ejecución ideado y usado y resultado producido en un solo momento, no es posible apreciar legalmente más que la existencia de un solo delito?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que justificada la intención del procesado D. Ricardo Peris de matar á D. Manuel Palomero por el medio que lo realizó, recayendo á la vez su acción en D.ª Dolores González, es evidente la existencia de dos delitos de asesinato efecto del mismo hecho, y por más que su voluntad no se dirigiera contra la D.ª Dolores, le son imputables legalmente las muertes de ambos, según la prescripción terminante del párrafo final del art. 1.º del Código penal, cuyos delitos no deben penarse separadamente, sino de la manera y en la forma que especialmente prescribe y determina el art. 90 del expresado Código, etc.» (Sentencia de 5 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 19 de Noviembre, página 316.)

**CUESTION III.** *El que incomodado con una persona la acomete dándole un empuellón que la derriba al suelo, produciéndose en la caída varias lesiones graves, ¿será responsable de este delito intencional y malicioso, ó lo será tan sólo de una simple imprudencia?*—El Tribunal Supremo ha declarado una vez más (V. Suplemento 3.º, Cuestión I, pág. 7) que la calificación y penalidad del expresado hecho en concepto de delito de lesiones no infringe el art. 1.º del Código: «Considerando que por haber sido libre y voluntario el acto de acometer Antonia Cantarell á Francisca Aracena, dándole un empuellón que la derribó en tierra, por cuyo golpe se causaron las lesiones sufridas por la última, es la primera responsable de esta consecuencia directa también de la acción suya, que aparece encaminada á utilizar la fuerza en daño de su contendiente, la cual es incompatible con la doctrina legal sobre que se establece la punibilidad de la imprudencia, que requiere, como condición indispensable, total ausencia de malicia en el acto productor del mal, etc.» (Sentencia de 12 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 31 de Diciembre, pág. 286.)



## Art. 3.º

SON PUNIBLES NO SÓLO EL DELITO CONSUMADO, SINO EL **frustrado** Y LA **tentativa**.—DEFINICIÓN DE ESTOS DOS ÚLTIMOS

## I Delito frustrado.

**Hurtos QUE DEBEN CALIFICARSE DE frustrados Y NO consumados.**

**CUESTION I.** *Cuando el procesado es sorprendido en el mismo campo ó dehesa donde acaba de coger frutos ó leñas, ¿deberá calificarse el hurto de frustrado ó consumado?*—Contra la opinión del Ministerio Fiscal que sostuvo la procedencia de esta última calificación, ha declarado el Tribunal Supremo que en tal caso el hurto es meramente *frustrado*: «Considerando que habiendo sido sorprendidos los procesados en el momento de hallarse realizando el delito, no llegó éste á consumarse, porque no practicaron aquéllos todos los actos precisos para ello, y que, por lo mismo, el Tribunal á quo, calificando el hecho procesal y penándolo como delito frustrado de hurto, no ha cometido la infracción legal y el error de derecho que el Ministerio Fiscal le atribuye.» (Sentencia de 10 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 12 de Abril de 1888, pág. 99.)—Igual doctrina se establece en otra Sentencia posterior (de 14 de Diciembre de 1887, inserta en la *Gaceta* de 13 de Abril de 1888, pág. 106).

**CUESTION II.** *El que en el momento mismo de apoderarse de la cosa ajena, viéndose sorprendido la arroja al suelo, ¿será responsable del delito de hurto frustrado ó consumado?*—Contra la opinión también del Ministerio Fiscal recurrente, ha resuelto el Tribunal Supremo que en tal caso el delito debe estimarse como meramente *frustrado*: «Considerando que para que el apoderamiento de la cosa sustraída sea determinante de la consumación del delito de hurto es preciso que se haga en circunstancias tales, que permitan al sustraedor la libre disposición de aquélla, siquiera sea más ó menos momentáneamente, pues de otra suerte, dado el concepto del delito de hurto, no puede decirse en realidad que se haya producido en toda su extensión, sin materializar demasiado el acto de tomar la cosa ajena: Considerando que, según se desprende de la sentencia recurrida, los dependientes de la sastrería de D. Joaquín Gabino sorprendieron al penado Juan Gómez López al tomar una capa que había en un maniquí, por lo que hubo de arrojarla al suelo, siendo detenido después por agentes de la Autoridad, y que, esto supuesto, es evidente que el delito no aparece realizado en toda la extensión precisa para poderlo calificar como consumado, por lo que la Audiencia de Sevilla no ha incurrido en el error de derecho que le atribuye el Ministerio Fiscal, etc.» (Sentencia de 24 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 6 de Mayo, páginas 185 y 186.)

**Estafa CALIFICADA COMO consumada, DEBIENDO SERLO TAN SÓLO COMO frustrada.**

**CUESTION.** *El que habiendo sido nombrado Comisionado de apremios para el cobro de débitos á la Hacienda pública por derechos de superficie que adeudaba cierta sociedad minera, se presenta en una tienda y exige de su dueño una cantidad determinada para no presentar denuncia en virtud de la cual habría de pagar una fuerte multa por no estar clasificado el establecimiento en la clase correspondiente, logrando así que se le entregue parte de la cantidad pedida, siendo sorprendido en aquel acto por los agentes de la Autoridad apostados al efecto, ¿será responsable del delito de estafa consumada ó simplemente frustrada?*—La Sala de lo criminal de la Audiencia de Sevilla estimó lo primero y condenó al procesado á la pena de dos meses y un día de arresto mayor. Mas interpuesto contra esta sentencia recurso de casación por la defensa del reo en el concepto de que el hecho constituía sólo *tentativa* de estafa, si bien no estuvo con esto conforme el Tribunal Supremo, declaró si que el delito merecía sólo la calificación de *frustrado*: «Considerando que si bien los actos ejecutados por el recurrente no merecen tan sólo la calificación de tentativa, invocada en el recurso, por no haberse limitado á dar principio á la ejecución del delito, y si el de frustrado, toda vez que el culpable practicó todos los actos de ejecución que deberían producirle como resultado, tales como haberse apoderado de la cantidad exigida, logrando aparentemente su propósito, y sin embargo no lo produjeron por causas independientes de su voluntad, cual fué la presencia de los agentes de la Autoridad en el sitio del suceso, á consecuencia de la denuncia hecha por D.<sup>a</sup> Candelaria Polanco al Delegado de Hacienda, que impidieron la consumación del expresado delito, que había de consistir en el *desapoderamiento completo* del dinero, materia del delito, de poder de su legítimo dueño, término y consecuencia que imposibilitaba la vigilancia de los agentes de la Autoridad: Considerando que al no estimarlo así la Sala sentenciadora, ha incurrido en el error de derecho que se le atribuye, ó infringido los artículos del Código penal á que el recurso se refiere, etc.» (Sentencia de 18 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 6 de Enero de 1889, páginas 2 y 3.)

**Expendición de billetes de Banco falsos, CALIFICADA INDEBIDAMENTE DE tentativa, SIENDO DELITO frustrado.**

**CUESTION.** *El que presentándose en un comercio y concertada la compra de un objeto, entrega para su pago un billete de Banco falso, y siendo rechazado, da otros tres igualmente falsos, por lo que se le detuvo en el acto, ocupándosele dichos cuatro billetes y otro más, también falso, ¿será responsable de tentativa de expendición de dichos billetes, ó de delito frustrado?*—La Sala de lo criminal de la Audiencia de esta Corte estimó lo primero. Mas el Tribunal Supremo, á petición del Fiscal recurrente, declaró lo segundo:



«Considerando que, supuesta la definición del delito frustrado con arreglo al párrafo segundo del art. 3.º del Código penal, los hechos realizados por Eduardo García Títo para lograr la expedición de unos billetes de Banco falsos se encuentran comprendidos en el concepto de *delito frustrado*, puesto que el culpable realizó todos los actos que por su parte podía ejecutar para producir aquél, y si no se produjo, fué por causas independientes de su voluntad, ó sea porque el comerciante, que conoció la falsedad de los billetes, se negó á recibirlos, habiendo incurrido, por lo tanto, la Audiencia de Madrid en error de derecho al calificar el delito como mera tentativa, etc.» (Sentencia de 15 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 7 de Septiembre, pág. 133.)

HECHOS CALIFICADOS INDEBIDAMENTE DE homicidio ó asesinato frustrado, CONSTITUYENDO TAN SÓLO LOS DE disparo de arma de fuego y lesiones.

**CUESTION I.** *¿Cuándo constituirá el delito de homicidio ó asesinato frustrado el acto de disparar un arma de fuego contra una persona?*—El Tribunal Supremo ha declarado que sólo cuando concurren circunstancias especiales que revelen por modo indudable la intención única y decidida del agresor de quitar la vida al agredido con exclusión consiguiente de cualquier otro mal menor: «Considerando que de los hechos que se consignan en la sentencia recurrida no se deriva la existencia de circunstancia alguna que demuestre la intención exclusivamente homicida de D. José Cervilla y Escobar, sino muy al contrario, tanto por la accidentalidad del encuentro entre el penado y D. Francisco Muñoz Henares, como por haber sido éste quien, con su actitud y palabras, provocó el lance, como por la rapidez y dirección del único disparo que Cervilla hizo con la pistola de dos cañones que al efecto sacó, no se le puede atribuir más intención que la que vaga y generalmente revela cualquiera que acomete á otro con instrumento que lo mismo puede producir la muerte que algún otro mal menor: Considerando que, esto supuesto, la Sección primera de la Audiencia de esta Corte no ha incurrido en error de derecho al no apreciar como homicidio frustrado el acto realizado por don José Cervilla, y mucho menos como asesinato frustrado, puesto que éste no hizo más que contestar, aunque de un modo violento é inadecuado, á la provocación de D. Francisco Muñoz, apercibido consiguientemente para todo, por razón de su misma actitud, y que aparece bien calificado el delito que resulta perpetrado, etc.» (Sentencia de 4 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 23 de Noviembre, páginas 333 y 334.)

Otra Sentencia posterior del propio Tribunal Supremo, en que se *casa* la pronunciada por la Audiencia de Madrid calificando un hecho de *homicidio frustrado*, cuya calificación y pena impuesta declara el Supremo improcedentes, por no resultar de la sentencia hecho ni dato alguno que demuestre que, al lesionar el ofensor gravemente con arma blanca á la ofendida, *lleva intención resuelta y decidida de matarla*: «Considerando que conforme

al art. 3.º del Código penal, en su segundo párrafo, hay delito frustrado cuando el culpable practica todos los actos de ejecución que deberían producir como resultado el delito y, sin embargo, no lo producen por causas independientes de la voluntad del agente: Considerando que en la sentencia de cuya casación se trata no hay hecho alguno ni dato declarado probado que demuestre que el procesado Manuel Toledo y Matallanos, al herir con arma blanca y producir las lesiones graves que ha padecido Francisca Prada, llevara intención resuelta y exclusiva de matarla, integrando de ese modo el propósito que le guiaba, y por este motivo, al suponer la Sala de esta Audiencia que aquél es reo de delito de homicidio frustrado, condenándole en once años de prisión mayor, ha infringido dicho art. 3.º del Código, incurriendo en el error de derecho que señala el núm. 3.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, según acertadamente se alega en el recurso, etc.» (Sentencia de 7 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 23 de Noviembre, pág. 337.)

**CUESTION II.** *La reiteración de disparos de arma de fuego hechos contra determinada persona, será por sí sola suficientemente inductiva de que la intención del que los hizo fue matar á su contrario, para calificar el hecho de homicidio frustrado?*—Así lo estimó la Sala de lo criminal de la Audiencia de Barcelona, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo, por indebida apreciación, en este caso, del art. 3.º en relación con el 419 del Código: «Considerando que, según el art. 419 del Código penal, es reo de homicidio el que, sin estar comprendido en art. 417, matare á otro, no concurriendo alguna de las circunstancias enumeradas en el 418, y que conforme al párrafo segundo del art. 3.º, hay delito frustrado cuando el culpable practica todos los actos de ejecución que debieran producir como resultado el delito, y sin embargo no lo producen por causas independientes de la voluntad del agente: Considerando que el homicidio frustrado implica en el que comete el atentado la intención de matar, y que en el caso á que se refiere el presente recurso no hay otro dato para presumir que José Domenech y Figueras quisiera matar á José Batista Lastre que la reiteración del disparo de pistola que hizo contra él, dato por sí solo insuficiente, principalmente cuando no consta que semejante acción obedeciese á resentimientos anteriores, ni fuese efecto de otra cosa que las palabras que entre los mismos mediaron en aquellos mismos momentos y haber cesado el ofensor en todo acto de hostilidad en el instante que le vió herido: Considerando en su virtud que la Sala sentenciadora ha cometido error de derecho é infringido los mencionados artículos 419 en relación con el párrafo segundo del 3.º del Código, al calificar el hecho de que se trata como homicidio frustrado, debiéndose, por lo tanto, casar el fallo recurrido por los motivos alegados en el recurso: Considerando que con arreglo al art. 423 del expresado Código, el acto de disparar un arma de fuego contra cualquiera persona por sí solo, y cuando, atendidas las circunstancias del hecho, no debe calificarse de tentativa ó de delito frustrado de homicidio ó de alguno de los otros que en el mismo artículo se mencionan, constituye un



delito especial, penable con la prisión correccional en sus grados mínimo y medio, y habiendo, además, resultado del propio hecho en el presente caso unas lesiones igualmente constitutivas del delito conforme al párrafo cuarto del art. 431, procede, con aplicación del art. 90, imponer al culpable la pena señalada al primero de dichos delitos por ser el más grave, en el grado máximo.» (Sentencia de 11 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 3 de Mayo, pág. 158.)

**CUESTION III.** *Aun cuando al disparo de arma de fuego hecho contra determinada persona y consiguiente lesionamiento de ésta preceda la amenaza de matarla, deberá calificarse el hecho de homicidio frustrado, si la forma y términos en que aquél se ejecutó y el resultado del acto no guardan relación con la amenaza proferida por el agente?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa. Fué el caso el siguiente: Mariano Moreno estaba enemistado con Benito Sopeña porque éste tenía sospechas de que aquél sostenía relaciones con su mujer. En cierta tarde, estando el Sopeña en el portal de su casa, se acercó el Moreno, y sin que aquél diera motivo para nada, principió éste á decirle que le había de matar, y sacando una pistola, á distancia de unos dos metros, hizo dos disparos al Sopeña, causándole en un brazo una lesión, que curó á los once días, metiéndose en su casa, de la que salió al poco rato con una escopeta, amenazando de nuevo al Sopeña, diciendo que lo iba á matar, ya que antes no lo había conseguido, retirándose luego del sitio. La Audiencia de lo criminal de Sigüenza calificó el referido hecho de *homicidio frustrado*, y condenó al procesado á ocho años y un día de prisión mayor. Mas interpuesto por la defensa del mismo recurso de casación contra dicha sentencia, que coadyuvó el Ministerio Fiscal, porque el hecho procesal debió calificarse del delito de disparo de arma de fuego y lesiones, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar á él*: «Considerando que el problema jurídico planteado en el presente recurso se reduce á determinar si el hecho procesal constituye el delito de homicidio frustrado, según se califica y pena en la sentencia reclamada, ó si es generador de dos delitos, el de disparo de arma de fuego y el de lesiones, como se sostiene en dicho recurso: Considerando que los hechos consignados en la sentencia demuestran por modo claro que el procesado Mariano Moreno no practicó todos los actos que debieron producir como resultado el homicidio de Benito Sopeña, puesto que habiendo disparado aquél contra éste dos tiros de pistola á distancia de unos dos metros, ocasionándole con uno de aquéllos una lesión menos grave en el antebrazo izquierdo, cuando por las circunstancias del lugar en que el suceso se verificó y las condiciones en que el agresor y el ofendido se encontraban, sólo dependió de la voluntad del procesado no haber disparado la pistola á más corta distancia y dirigir la puntería con toda seguridad y acierto para privar de la existencia al Sopeña, si éste hubiera sido su propósito, y que fácilmente pudo conseguir también por lo próximo que se hallaba al ofendido al hacerle los dos disparos sin que uno de éstos le tocara, es evidente que la agresión del recurrente no justifica que su intención fue-

ra la de producir el homicidio, sino la de ocasionar lesiones de mayor ó menor gravedad, y si bien al acto de disparar el arma precedió la amenaza de matar, la forma y términos en que aquél se ejecutó y el resultado de la acción no obedecen ni guardan relación con la amenaza proferida por el agente: Considerando que afirmándose también en la sentencia recurrida que el procesado, inmediatamente después de haber hecho los dos disparos de pistola, penetró en su casa, contigua al lugar del suceso, que al poco rato salió de ella armado de una escopeta, que amenazó nuevamente al Sopeña con matarlo, ya que antes no lo había conseguido, y que se retiró sin haber ejecutado acto alguno de agresión, es visto que esta segunda amenaza, como la primera, no revelan el verdadero y formal propósito en el recurrente de dar muerte al ofendido, y consiguientemente el suceso de autos constituye los delitos de disparo de arma de fuego contra persona determinada y lesiones: Considerando, por tanto, que el Tribunal *á quo*, al calificar de homicidio frustrado el hecho procesal, ha incurrido en el error de derecho ó infringido las disposiciones legales que le atribuye el recurrente, etc.» (Sentencia de 19 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 5 de Mayo, páginas 178 y 179.)

**CUESTION IV.** *El que al ver á una hija suya derribada al suelo por un sujeto que estando jugando con otro tropezó con ella, lo coge por el cuello y con una pistola le hace un disparo en la región posterior del mismo, infiriéndole una lesión de la que sanó sin defecto ni deformidad á los cincuenta y cinco días, ¿deberá ser calificado de autor de homicidio frustrado, ó simplemente de disparo de arma de fuego y lesiones?*—La Sala de lo criminal de la Audiencia de Granada estimó lo primero y condenó al procesado á ocho años y un día de prisión mayor, compensando la circunstancia agravante de reincidencia con la atenuante de arrebató y obcecación. Mas interpuesto contra dicha sentencia recurso de casación por la defensa del reo, citando como infringidos los artículos 3.º y 419 del Código por indebida aplicación, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar á él*: «Considerando que de los hechos que como probados consigna la sentencia reclamada en el primero de sus resultandos no aparece de una manera clara y evidente que la intención de Francisco Torres Hernández, que al disparar la pistola sobre su cuñado Rafael Lacomba procedió de una manera repentina ó indeliberada por haber éste derribado al suelo á una hija pequeña de aquél, fuera la de matar á Lacomba: Considerando que no apareciendo demostrado que la intención de Torres Hernández fuera la de matar á Lacomba, los hechos de autos han de calificarse por el mal que produjeron y no por el que debieron producir: Considerando que en este concepto, los hechos justiciables de que es responsable el recurrente son el de disparo de arma de fuego contra persona determinada y el de lesiones que produjeron al ofendido enfermedad por más de treinta días, sin haber quedado deforme ni impedido para el trabajo; y como estos dos delitos fueron el resultado de un solo hecho, ha de tenerse presente para la im-



sición de la pena lo que dispone el art. 30 de dicho Código: Considerando, por lo expuesto, que el Tribunal sentenciador ha incurrido en error de derecho por haber aplicado indebidamente los artículos 3.º, 419 y 66, y por no haber aplicado el 431 en su número 4.º y el 423, todos del Código penal, y es por tanto procedente el recurso de casación propuesto, etc.» (Sentencia de 28 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 27 de Julio, páginas 21 y 22.)

**CUESTION V.** *Un disparo de arma de fuego aun cuando sea reiterado, hecho á quemarropa y dirigido á la cabeza, ¿determinará suficientemente, sin otros datos acerca de la verdadera intención del agente, la existencia del delito de homicidio ó asesinato frustrado?*—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Avila, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por indebida aplicación del art. 3.º del Código: «Considerando que en buenos principios de interpretación en materia penal no cabe atribuir al autor de un hecho concreto, determinada é individualmente penado, una mayor intención en la extensión del mal causado, salvo que circunstancias muy señaladas no demuestren de una manera clara y terminante la mayor transcendencia en la intención: Considerando que tratándose del delito de homicidio frustrado es preciso que esté demostrado por los hechos que la sentencia declare probados que la intención del agente fué la de causar la muerte á la persona contra quien atentó; así como ha de resultar también de los hechos probados que los medios de que se valió eran adecuados para la comisión del delito, que, si no llegó á consumarse, fué por causas extrañas á la voluntad del culpable: Considerando que haciendo aplicación de esta doctrina, repetida por esta Sala en distintas sentencias, los hechos que como probados consigna el fallo recurrido no demuestran la intención de matar por parte del agente, porque ni el arma de que se valió, ni el haber repetido el disparo, que por ser inmediato y en el mismo acto se estiman acertadamente en la sentencia como uno solo, ni el sitio en que fué lesionado Juan Samaniego son por sí solos elementos bastantes para formar seguro convencimiento de que la intención del recurrente Hernández Alvarez, al disparar dos veces su pistola sobre Samaniego, fueron de matarlo, y más si se atiende á que la deficiencia del resultando primero, en que se consignan los hechos en que descansa la sentencia recurrida, deja duda en el ánimo acerca de si la lesión inferida á tan corta distancia, y que sólo tardó en su completa curación veinte días, fué producida sólo por la pólvora ó por el proyectil: Considerando que en este concepto han de calificarse los hechos por el resultado que produjeron, sin suponer á su autor una mayor intención en la extensión del mal causado; es decir, disparo de arma de fuego y lesiones menos graves, que por ser ambos delitos el resultado de un solo hecho habrá de tenerse presente para la imposición de la pena lo que dispone el art. 30 del Código: Considerando que, por lo expuesto, la Audiencia de lo criminal de Avila, al calificar los hechos de autos de homicidio frustrado, ha infringido por

indebida aplicación los artículos 3.º en su párrafo segundo y 419; y por no haberlos aplicado, el 423, 433 y 90, todos del Código penal, é invocados por el recurso, que es procedente, etc.» (Sentencia de 20 de Abril de 1888, publicada en las *Gacetas* de 16 y 17 de Mayo, páginas 268 y 269.)

**CUESTION VI.** *El que arrebatado y obcecado porque dos sujetos habían intentado subir á casa de su novia para hablar y divertirse con ella, sin tener cuestión ni palabra con los mismos, les disparó sucesivamente un tiro de revólver á cada uno, á tres pasos de distancia, causándole al uno una herida en el cuello, de la que sanó á los ciento cincuenta y nueve días, y al otro una lesión en la cara de la que curó á los ciento setenta, será responsable del delito de homicidio frustrado, ó del doble delito de disparo de arma de fuego y lesiones graves, penable con arreglo al art. 90 del Código?*—La Sala de lo criminal de la Audiencia de la Coruña estimó lo primero y condenó al procesado, en quien apreció la circunstancia atenuante de arrebató y ninguna agravante, á la pena de siete años de prisión mayor. Y si bien tres letrados nombrados sucesivamente para la defensa de aquél manifestaron ser improcedente el recurso de casación por el mismo preparado, sostúvolo el Ministerio Fiscal en beneficio del reo, dando lugar á é! el Tribunal Supremo por indebida aplicación de los artículos 3.º y 419 del Código, pues que el hecho procesal constituía la delincuencia, menos grave que la del homicidio frustrado, de los dos hechos justiciables que definen los artículos 423 y 431, núm. 3.º del Código: «Considerando que hay delito frustrado, según el art. 3.º del Código penal, cuando el culpable practica todos los actos de ejecución que deberían producir como resultado el acto justiciable, y sin embargo no lo producen por causas independientes de su voluntad: Considerando que para estimar frustrado en el caso procesal el delito de homicidio, sería indispensable que la resultancia inculpativa demostrase que José Ramos Pita obró con intención de matar; que practicó todos los actos adecuados á este fin, y que no logró su propósito por causas independientes de su voluntaria acción: Considerando que los hechos probados patentizan el concepto contrario, puesto que el procesado, en vez de persistir en su agresión para consumar un homicidio, cuando José Rey y Ricardo Casal estaban heridos y relativamente imposibilitados para la defensa, se retiró apelando á la fuga: Considerando que las circunstancias del proceso muestran además en el reo la intención única de ofender á los que con su conducta irregular produjeron en su ánimo un estímulo pasional rectamente apreciado por la Sala sentenciadora como elemento de atenuación: Considerando que el delito cometido por José Ramos debe ser juzgado en relación con los medios utilizados para cometerlo y á la gravedad del daño causado: Considerando, por consiguiente, que el Tribunal á quo ha incurrido en error de calificación é infringido, por haberlos indebidamente aplicado, los artículos 419, 66 y 3.º, párrafo segundo del precitado Código, etc.» (Sentencia de 26 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 8 de Septiembre, páginas 139 y 140.)



HECHOS, POR EL CONTRARIO, QUE DEBEN CALIFICARSE DE **homicidio** ó **asesinato frustrado** Y NO DE **disparo de arma de fuego** y **lesiones**.

**CUESTION I.** *Si el culpable cargó primero friamente la escopeta con bala y perdigones; sacó después de su casa al ofendido con el pretexto de que le acompañara á vigilar la suya, y después de haber andado un rato y á cinco pasos de aquél le disparó un tiro dirigiendo la puntería hacia el centro de la cavidad torácica, aun cuando, por causa inexplicable, el tiro sólo le atravesara el muslo, deberá calificarse este hecho de simple disparo de arma de fuego y lesiones, ó de homicidio frustrado?*—El Tribunal Supremo ha declarado que esta última calificación es la procedente en este caso: «Considerando que, si bien por regla general, tanto los delitos de lesiones como el de disparo de arma de fuego se determinan por el resultado, cuando la agresión no es accidental, sino que se revela por modo evidente una intención especial y decidida en el agresor de matar al agredido, con exclusión de cualquier otro mal menor, esta intención es la que sirve de base para caracterizar el delito perpetrado; Considerando que en el caso del presente recurso aparece manifiesta la intención homicida del recurrente al cargar primero friamente su escopeta con bala y perdigones, al sacar después con engaño de su casa á Juan Carreras Bordejo y á su hijo Juan Carreras Benedi, y al disparar su escopeta contra éste cuando estaban á cien pasos de la casa y á cinco del ofendido, dirigiendo la puntería hacia el centro de la cavidad torácica, según estima el Tribunal sentenciador, aun cuando por causa inexplicable el tiro sólo haya atravesado el muslo del Carreras Benedi, etc.»—(Sentencia de 10 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 12 de Abril de 1888, pág. 98.)

**CUESTION II.** *El que de noche llama desde la calle á un sujeto que estaba tranquilamente sentado en una taberna, diciéndole que salga afuera; y haciéndolo así y sin mediar disputa ni motivo conocido, le dispara un tiro de revólver á muy corta distancia y á la cabeza, causándole lesiones que tardaron en curar más de treinta días, con pérdida completa de la visión de un ojo, será responsable del delito de lesiones graves, ó del de homicidio ó asesinato frustrado?*—El Tribunal Supremo ha declarado que en este caso procede la calificación más grave del delito frustrado (que en este caso debió ser de asesinato) (1): «Considerando que la única cuestión que se propone y discute en este recurso está reducida á si se ha de calificar y penar el hecho que ejecutó Vázquez Suárez por los efectos que produjo, ó si teniendo

(1) El Tribunal sentenciador calificó y penó el hecho como homicidio frustrado; pero como el recurso se interpuso sólo para censurar la calificación, es claro que el Tribunal Supremo no puede agrandarla, calificando el hecho de asesinato frustrado, por la absurdez, cual lo hubiera hecho, á no dudarlo, si el Ministerio Fiscal hubiera podido interponer, y hubiera interpuesto, el recurso en el sentido de aquella más grave calificación.

en cuenta una mayor intención en la extensión del mal que causó se ha de calificar el hecho más gravemente, ó lo que es igual, si se ha de estimar que el hecho que ejecutó Vázquez Suárez constituye el delito de lesiones graves, como pretende su defensa, ó si, por el contrario, se ha de declarar que se ajusta á la ley penal la calificación de homicidio frustrado que de los hechos probados hace el Tribunal sentenciador: Considerando que si bien en el resultado de los actos que realmente se ejecutan y constituyen un delito ha de buscarse la medida de la responsabilidad del agente, esta doctrina de aplicación de la ley penal sufre excepción cuando los hechos que la sentencia declara probados demuestran claramente que la intención del agente fué cometer un delito más grave que el ejecutado, y que, si se frustró el que estaba en su intención y resultó otro menos grave después de haber practicado todos los actos de ejecución, fué por causas ajenas á su voluntad, en este caso ha de aumentarse la responsabilidad del agente, calificándolo y penándolo como autor del delito frustrado: Considerando que los hechos que la sentencia reclamada declara probados son cumplida demostración de que la intención de Vázquez al llamar á Vigueira, que estaba en compañía de otros en una taberna, disparándole el tiro de revólver á muy corta distancia y á la cabeza, fué la de matar á Vigueira, para lo cual practicó todos los actos de ejecución, y si no consumó el delito preconcebido fué por causas ajenas á su voluntad: Considerando que en este concepto la Sala de lo criminal de la Audiencia de la Coruña no ha incurrido en el error de derecho ó infracciones legales que le atribuye el recurso, etc.—(Sentencia de 19 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 6 de Enero de 1889, pág. 5.)

## II Tentativa

ACTOS ENCAMINADOS Á EJECUTAR EL DELITO, PERO NO ADECUADOS NI EFICACES PARA SU REALIZACIÓN.

**CUESTION.** *Cuando por el culpable no se han empleado los medios adecuados ó eficaces para producir el mal del delito, aun siendo indudable la intención con que practicó los actos de ejecución, ¿podrán éstos calificarse de tentativa de delito?*—A la Sentencia de 26 de Noviembre de 1879, inserta en el *Suplemento* 1.º, pág. 20, resolviendo la cuestión en sentido *negativo*, hay que añadir otra posterior en que se confirma en un todo la misma doctrina en contra de lo resuelto por la Sala de lo criminal de la Audiencia de esta Corte: «Considerando que aun cuando, por estar declarado probado en la sentencia recurrida, sea un hecho indiscutible en casación la introducción por Rafael Gómez en una botella de vino de que hablan de beber á la comida tres personas, de 11 gramos 282 miligramos de láudano de Sidenham, este hecho por sí solo, aun llevando la idea de causar mal, no constituye delito por falta de idoneidad del medio empleado para realizarlo, porque necesitándose, cual se consigna en la sentencia, de 10 á 15 gramos de esa sustancia para causar la muerte de una persona, como



todo el que contenía la botella apenas podría dar ese resultado en un adulto, repartido entre tres, aun suponiendo, lo que no es probable, por ser dos de ellas señoras, que la consumieran por completo, los cuatro gramos escasos que á cada una corresponderían únicamente habrían podido producir, según opinión facultativa, efectos tóxicos que no habían de tener resultados nocivos de gravedad, por lo que el hecho, dada la poca importancia del mal material que en todo caso había de ocasionar, no podía salir de la esfera de una falta, que, habiendo quedado en los límites de una tentativa, no es punible, según el art. 5.º del Código penal: Considerando en su virtud que no habiéndose la Sala sentenciadora ajustado á este criterio jurídico, ha infringido los artículos que han servido de base á la sentencia é incurrido en el error de derecho que señala el número 1.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, etc.» (Sentencia de 26 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 20 Julio, páginas 15 y 16.)

EXPENDICIÓN DE BILLETES FALSOS DE BANCO CALIFICADA DE DELITO frustrado, DEBIENDO SERLO DE tentativa.

**CUESTION.** *Si los procesados sólo concertaron la compra de billetes del Banco falsos á ciertos sujetos para expendierlos ellos después por su cuenta, practicando gestiones y celebrando conferencias para adquirirlos y revenderlos luego, siendo sorprendidos cuando aun no habían adquirido dichos billetes, deberá calificarse el hecho de delito frustrado de expendición de billetes falsos comprendido en el art. 304 del Código, ó de mera tentativa del mismo?*—La Sala de lo criminal de la Audiencia de Valencia estimó lo primero. Mas el Tribunal Supremo, al decidir el recurso interpuesto por los procesados por infracción del art. 3.º del Código, declaró lo segundo: «Considerando, en orden á los recursos interpuestos por Godofredo Codoner y Salvador Fontana, que su participación en el delito la constituye, según los hechos declarados probados, el concierto de venta de billetes de Banco falsos, las gestiones que practicaron y reuniones que celebraron para adquirirlos y entregarlos al comprador; pero no declarándose probado que la adquisición de los billetes por parte de los recurrentes llegara á realizarse, su participación en el delito no pasa los límites de la tentativa, según la define el último párrafo del art. 3.º del Código, porque dieron principio á su ejecución directamente por actos exteriores, y no desistieron de él voluntariamente; pero no practicaron todos los de ejecución que debieran producirlo, que es lo que constituye el delito frustrado, puesto que les faltaba aún para su consumación el adquirir los billetes y su entrega al comprador; y al calificarse y pensarse en la sentencia como autores de delito frustrado, ha cometido la Sala sentenciadora el error de derecho que determina el núm. 3.º del artículo 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, é infringido el último párrafo del art. 3.º del Código penal.» (Sentencia de 22 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 29 de Septiembre, páginas 203 y 204.)

## PROPIO Y VOLUNTARIO DESISTIMIENTO

**CUESTION.** *¿Podrá estimarse como propio y voluntario desistimiento á los efectos del último párrafo del art. 3.º del Código, ó sea para librar de pena al agente, el hecho de existir ésta de los actos de violencia empezados á ejecutar para cohabitar con una mujer, por el sobrecogimiento y temor de que acudiera alguna persona á las voces y gritos de la perjudicada?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que el desistimiento que priva á la tentativa de delito de carácter punible es el exclusivamente nacido de la voluntad del culpable que por propio impulso retrocede en el camino del mal y regresa al del deber, y no el impuesto por circunstancias y accidentes independientes de su libre determinación, siquiera influyan en ésta: Considerando que el de.... fué debido, según expresa la sentencia, al temor y sobrecogimiento que le causaran los gritos y voces de la ofendida, por cuyo medio ésta resistía la violenta agresión de que fué objeto, y á la vez defendía su honor, puesto en peligro, lo cual no es ciertamente el voluntario apartamiento de la prosecución del delito que excluye la responsabilidad, etc.» (Sentencia de 11 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 29 de Diciembre, página 282.)

Véanse además las *Cuestiones* del art. 4.º

## Art. 4.º

## DE LA CONSPIRACIÓN Y PROPOSICIÓN PARA COMETER UN DELITO

Hechos que no deben calificarse de **proposición**, sino de verdadera **tentativa** de delito.

**CUESTION I.** *El acto de dirigirse un sujeto á la señora de un Gobernador civil para que interese á su marido á fin de que consienta el juego, mediante la entrega de cierta cantidad que se obligaba á entregarle por decenas ó quincenas adelantadas, ¿constituirá tan sólo una proposición de cohecho, y por lo tanto no penable según el art. 4.º del Código, ó deberá calificarse de verdadera tentativa del propio delito?*—El Tribunal Supremo ha declarado que esta última calificación es la procedente: «Considerando que para apreciar en cada delito si se ha dado ó no comienzo á su ejecución por actos exteriores, es preciso tener en cuenta su índole, así como la manera propia de realizarlo, para no confundir aquéllos, ni con los actos realmente indiferentes, ni con los que sólo constituyan simple proposición; y que supuesta la naturaleza del delito de cohecho, es evidente que el acto de dirigirse D. Pedro Santa Marina y Gorbea á la Duquesa de Frias para que interesase á su marido á fin de que consintiese el juego, mediante la entrega de cierta cantidad, que se obligaba á entregarle por decenas ó quincenas adelantadas, era una manera natural de buscar



una inteligencia con el Gobernador, á quien se quería cohechar, y constituye un medio propio, directo y adecuado para la realización del intentado delito, característico de la *tentativa* que define el art. 3.º del Código, y no de simple proposición, que por su naturaleza está concretada á la asociación que un delincuente busca, exponiendo á la persona cuyo auxilio requiere su criminal proyecto.» (Sentencia de 22 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 10 de Enero de 1888, páginas 60 y 61.)

**CUESTION II.** *Instruidas diligencias sumariales por un Juez municipal sobre cierto hecho en virtud de denuncia del Alcalde, el Secretario del mismo Juzgado y el del Ayuntamiento proponen á los que fueron objeto del proceso que romperán dichas diligencias si les abonan una cantidad determinada de dinero, á cuya exigencia se niegan los interesados: ¿hay aquí tentativa del delito de cohecho, ó meramente la proposición del mismo, y por tanto no punible según la regla general del art. 4.º del Código?*—El Tribunal Supremo ha declarado que también en este caso está suficientemente determinada la *tentativa* del delito de cohecho: «Considerando que, dada la índole del cohecho y manera de realizarse, no pueden estimarse como actos de mera proposición los realizados por el recurrente y el otro penado González Navarro, sino como hechos exteriores encaminados directamente á la ejecución del delito intentado, cuya consumación sólo dependía, después de la exigencia formulada por el recurrente y su compañero, de la aceptación de los requeridos y entrega consiguiente de la cantidad pedida por aquéllos.» (Sentencia de 23 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 6 de Agosto, pág. 52.)

**CUESTION III.** *El hecho de ofrecer un Abogado á un penado la obtención del informe favorable del Tribunal en un expediente de indulto, mediante la entrega de cierta cantidad para cuyo cobro practicó algunas gestiones, sin que llegara á realizarlo empero, por haber desistido de las mismas al comprender que el interesado y su familia revelaban algún engaño, ¿será constitutivo de una mera proposición del delito de estafa, y por lo tanto no punible según los términos del párrafo primero del art. 4.º del Código, ó constituirá una verdadera tentativa del expresado delito?*—Contra la pretensión del recurrente, que alegó en casación la existencia de una mera proposición de delito, no punible, declaró el Tribunal Supremo que los hechos expuestos traspasaban los límites de la proposición, constituyendo una verdadera *tentativa* de estafa: «Considerando que, según el núm. 1.º del art. 548 del Código penal, comete el delito de estafa el que defraudare á otro, usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia ó cualidades supuestas, como lo realizó el recurrente al ofrecer obtener el informe favorable en un expediente de indulto, pretendiendo la entrega de cantidades al efecto, practicando actos para conseguirlo, y renunciando á su propósito, no por su propio y voluntario desistimiento, y sí al comprender que los perjudicados, al ser advertidos por otras personas, se habían enterado del engaño: Considerando, por lo tanto, que los actos llevados á cabo por D. José Giner y Giner constituyen el delito de tentativa de estafa,

por haber dado el culpable principio á la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, y no haber practicado todos los actos de ejecución que debieran producirle, por la razón indicada, y no haber acudido los perjudicados á entregar la cantidad exigida y en (1) la proposición invocada por el recurrente.» (Sentencia de 29 de Septiembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 1.º de Diciembre, páginas 259 y 260.)

### Art. 7.º

LOS DELITOS PENADOS POR LEYES ESPECIALES NO ESTÁN SUJETOS Á LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO

**QUESTION.** *Las Ordenanzas de Farmacia vigentes, de 18 de Abril de 1860, tienen carácter de ley penal especial á los efectos del art. 7.º del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que los motivos del recurso interpuesto y las infracciones de ley invocadas se fundan en el concepto único de no ser aplicable en este proceso el Código penal vigente, sino las Ordenanzas aprobadas por Real decreto de 18 de Abril de 1860 para el ejercicio de la profesión de Farmacia, comercio de drogas y venta de plantas medicinales; Considerando que estas Ordenanzas no tienen carácter de ley penal especial, pues la infracción de sus disposiciones sólo puede ser corregida gubernativamente cuando no implica la comisión de un delito de que deban conocer los Tribunales de justicia, según terminantemente prescribe el art. 73.» (Sentencia de 27 de Septiembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 30 de Noviembre, páginas 254 y 255.)

## CAPÍTULO II

### De las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal.

### Art. 8.º... 4.º

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL Á FAVOR DEL QUE OBRA EN JUSTA DEFENSA DE SU PERSONA Ó DERECHOS

Hemos de repetir una vez más lo que ya en los otros *Suplementos* anteriores dijimos: que algunas Audiencias persisten en la tendencia contraria á la apreciación de la *exención de responsabilidad criminal*, completa ó incompleta, cuando realmente se manifiesta en los sucesos procesales, estimando como simples circunstancias atenuantes de *provocación*, de *vindicación próxima de una ofensa grave* y de *obcecación y arrebató*, actos de verdadera *agresión ilegítima*, limitándose así á imponer al procesado la pena del delito en el grado mínimo, en vez de decretar la total exen-

(1) Así dice la *Gaceta*, debiendo de ir «sic».



ción de responsabilidad criminal, por concurrir todos los requisitos que exige el núm. 4.º del art. 8.º del Código para que se estime como *justa* la defensa, ó en lugar de aplicar la pena inferior en uno ó dos grados á la señalada por la ley al delito, con arreglo al art. 87, por concurrir el *mayor número* de los requisitos que aquélla exige para la referida exención de responsabilidad criminal. Otro caso, más notable y lastimoso aún que el que apuntamos en nuestro *Suplemento* 3.º, se ha presentado á la resolución del Tribunal Supremo: el de unas *lesiones* en que su autor obró con todos los requisitos del art. 8.º, núm. 4.º, procediendo, por tanto, su *absolución libre* por estar exento de toda responsabilidad criminal, y sin embargo, la Audiencia sentenciadora no apreció en el referido hecho ni aun la más insignificante circunstancia de atenuación.—V. la *Cuestión* primera de la pág. 27.

### I Agresión ilegítima.

LA AGRESIÓN ILEGÍTIMA NO PUEDE DETERMINARSE JAMÁS POR MERAS palabras, POR MUY GROSERAS Ó OFENSIVAS QUE SEAN.

**CUESTION.** *¿Será posible apreciar la exención incompleta de responsabilidad criminal á los efectos del art. 87 del Código, ó cuando menos la circunstancia atenuante 1.ª del art. 9.º, si no ha habido verdadera agresión ilegítima por parte del damnificado?—¿Podrán considerarse como tal las palabras más ó menos groseras que éste pronunciara?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que la circunstancia de exención á que se refiere el núm. 4.º del art. 8.º del Código penal requiere la concurrencia de los tres requisitos que en el mismo se mencionan, sirviendo de base y fundamento á la misma el de *agresión ilegítima*, sin el cual no puede suponerse el caso de defensa ni como *eximente* ni como *atenuante* de responsabilidad: Considerando que el origen y ocasión de la riña ó pelea que se entabló entre el recurrente Aguilera y el después interfecto Arandilla, en manera alguna revela la existencia de requisitos propios de una defensa legítima; porque no aparece de los hechos probados acto de fuerza alguna del que tuviera que defenderse el supuesto agredido, ni pueden equipararse á él para este efecto las palabras más ó menos groseras que mediaron, puesto que con ellas no se veía amenazada su integridad personal, resultando, por el contrario, que el primer acto de fuerza fué realizado por el recurrente al dar un empujón á su adversario, después del cual se sucedieron los accidentes propios de una riña; y faltando todos los requisitos de la propia defensa, no puede apreciarse ni aun como circunstancia atenuante, que exige la concurrencia de alguno de ellos.» (Sentencia de 28 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 5 de Enero de 1888, páginas 27 y 28.)



EL ACTO DE ASIR FUERTEMENTE A UNA PERSONA Y DERRIBARLA VIOLENTAMENTE AL SUELO CONSTITUYE VERDADERA agresión ilegítima.

**CUESTION.** Si hallándose el procesado con tres sujetos más jugando al dominó en una taberna, se promovió cuestión sobre una jugada, recibiendo con tal motivo aquél una bofetada de uno de los jugadores, en cuyo acto, acercándosele un amigo de éstos lo **agarró fuertemente retirándolo con violencia hasta la trastienda, donde cayeron ambos al suelo forcejeando, y en esta situación, por desasirse del que así le acometiera, dióle un mordisco en la oreja causando una lesión grave, pdeberá apreciarse en este hecho tan sólo la circunstancia atenuante de arrebató y obcecación, ó bien declararse la exención completa del procesado por haber obrado en defensa de su persona con todos los requisitos de la Ley?**—La Sala de lo criminal de la Audiencia calificó el hecho de delito de lesiones graves, con la circunstancia atenuante de arrebató y obcecación, y condenó al procesado á seis meses de arresto mayor. Mas interpuesto por la defensa de éste recurso de casación contra dicha sentencia, que coadyuvó el Ministerio Fiscal, por infracción del art. 8.º, núm. 4.º del Código, declaró el Tribunal Supremo haber lugar á él: «Considerando que en el hecho que ha sido materia del juicio concurren los tres requisitos ó circunstancias que exige el núm. 4.º del art. 8.º del Código penal para declarar la exención de responsabilidad del procesado, porque éste fué ilegítimamente agredido, no hubo por su parte provocación de ningún género, y el medio que empleó para repeler la ilegítima agresión de que era víctima fué racional: Considerando que al no apreciarlo así el Tribunal sentenciador ha cometido error de derecho ó infringido el art. 8.º del Código penal en su circunstancia 4.º que invoca el recurso, y es procedente la casación, con arreglo al núm. 5.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, etc.» (Sentencia de 9 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 4 de Enero de 1888, pág. 5.)

CASOS EN QUE UNA bofetada CONSTITUYE agresión ilegítima.

**CUESTION 1.** Si habiendo sospechado un sujeto que un compañero suyo de tienda había dicho al dueño de la misma que iba tarde al establecimiento, le invitó á salir á la calle, y ya en ella le pidió una satisfacción, y acto seguido le pegó una bofetada, en vista de lo cual el ofendido sacó un revólver y disparó un tiro contra su adversario, aunque sin herirle, pdeberá apreciarse en este hecho la concurrencia tan sólo de la circunstancia atenuante de provocación, ó bien la eximente incompleta del art. 8.º, núm. 4.º (agresión ilegítima y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende)?—La Sala de lo criminal de la Audiencia de Madrid estimó lo primero, y condenó, por tanto, al procesado á la pena del delito en su grado mínimo. Mas en virtud del recurso interpuesto por la defensa del procesado, declaró el Tribunal Su-

premo que en el caso de que se trata concurrieron los dos requisitos antedichos de la justa defensa, faltando tan sólo el de la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión, por lo que debía imponerse al reo la pena inferior en uno ó dos grados, con arreglo al art. 87 del Código: «Considerando que el hecho probado en la sentencia de invitar Emilio Fernández á su compañero de la librería Rafael Hernández á salir á la calle, y ya en ella pedirle una satisfacción, por suponer había dicho al jefe que iba tarde al establecimiento, dándole en seguida una bofetada, constituye un acto de verdadera é ilegítima agresión; y apareciendo de la sentencia que el Hernández, lejos de provocar el suceso, fué provocado á él por su adversario, es visto que concurrieron el primero y tercero de los requisitos para la propia defensa, faltando únicamente el de la necesidad del medio empleado para defenderse, toda vez que habiendo hecho Hernández á su contrario un disparo de arma de fuego al recibir de éste una bofetada, lo hizo sin la debida proporción entre la intensidad del ataque y el medio usado para repelerlo: Considerando que al no estimarlo así la Sala sentenciadora ha incurrido en error de derecho é infringido el núm. 4.º del art. 8.º y el 87 del Código penal, que se invocan en los fundamentos del recurso.» (Sentencia de 29 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 10 de Enero de 1888, páginas 63 y 64.)

Igual doctrina se establece en otra Sentencia posterior: «Considerando que el presente recurso se funda en la infracción del número 4.º del art. 8.º del Código penal, sosteniéndose en él que el procesado obró en propia defensa con dos de los requisitos exigidos por aquél, y en no haberse hecho aplicación de lo dispuesto en el art. 87 imponiendo menor pena: Considerando que el acto de haber dado Martín Martín Redondo una bofetada al recurrente Vicente Ragel constituye uno de los requisitos exigidos por el número 4.º del art. 8.º del Código penal para la exención de responsabilidad criminal, ó sea el de agresión ilegítima, caracterizada por el maltrato de obra y la grave ofensa inferida: Considerando que también concurre en el presente caso en favor del procesado la falta de provocación suficiente por su parte, por no merecer tal calificación la manifestación de que Martín Martín Redondo jugaba peor á la rayuela que Felipe Jimeno, y que apostaba por éste, juicio y concepto no ofensivo á quien iba dirigido, ni suficiente para producir la agresión de que fué objeto el recurrente: Considerando que habiendo concurrido en su favor dos de los tres requisitos exigidos por el núm. 4.º del art. 8.º del Código penal para eximirle de responsabilidad criminal, por no haber concurrido el de necesidad racional del medio empleado para impedir ó repeler la agresión, y no serlo el medio inadecuado de hacer uso de una faca, acometer y causar la muerte del que lo realizó: Considerando que en su consecuencia debe aplicarse la pena inferior en uno ó dos grados á la señalada por la ley al delito, y que, al no estimarlo así la Sala sentenciadora, ha incurrido en el error de derecho que se le atribuye, é infringido los artículos del Código penal á que el recurso se refiere, etc.» (Sentencia de 24 de



Octubre de 1888, publicada en la Gaceta de 9 de Enero de 1889, página 12.)

EL INSULTAR Á UNA PERSONA Y DIRIGIRSE HACIA LA MISMA NAVAJA EN MANO, EN ACTITUD AMENAZADORA, DETERMINA UNA VERDADERA agresión ilegítima.

**CUESTION.** *Una mujer embarazada, desprecada contra una convecina suya por razón de un juicio instado por ésta y en el que había sido condenada en las costas, profiere insultos contra la misma, y como la advirtiera que se callase, se dirige hacia ella navaja en mano en actitud amenazadora, estrechándola contra una pared, por lo cual la ofendida la cogió por el pelo y la dió en el vientre con un instrumento punzante un golpe que no necesitó asistencia facultativa, produciéndose sin embargo á los pocos días el aborto de la agresora á consecuencia de esta lucha y de la impresión moral que la causó: ¿deberá apreciarse á favor de la autora del hecho la exención completa de toda responsabilidad criminal?—La Audiencia de lo criminal de Baza calificó aquél de delito de aborto comprendido en el art. 426 y de la falta de lesiones del art. 603, con las circunstancias atenuantes 4.ª y 5.ª del artículo 9.º, y condenó á la procesada á cuatro meses de arresto mayor por el delito y á cinco días de arresto menor y reprensión por la falta. Mas interpuesto contra dicha sentencia recurso de casación por la defensa de la procesada, por infracción del caso 4.º del art. 8.º del Código, declaró el Tribunal Supremo haber lugar á él: «Considerando que insultada gravemente é ilegítimamente agredida Rosa Fernández, sin provocación alguna de su parte, por su convecina Antonia García, hasta el punto de dirigirse hacia ella con una navaja en la mano en actitud amenazadora, estrechándola contra la pared y poniéndola en una situación expuesta y comprometida, natural y justo era que se defendiera, y al sujetar á su adversaria por el pelo y darle un golpe en el vientre con un instrumento punzante, que le produjo una lesión que no necesitó asistencia facultativa, no es dable desconocer la racionalidad del medio empleado para la defensa, único que pudo tener á mano y escoger en aquel momento para librarse de una acometida á mano armada que podía tener para ella fatales consecuencias, pues la importancia del instrumento empleado no era superior al con que fué acometida, y de cualquier modo, no teniendo otro, y estando en su derecho al defenderse de un injusto agresor, preciso sería aceptarlo como legítimo: Considerando que cualesquiera que fueran las consecuencias que la lesión producida en defensa en esas condiciones hubiera ocasionado en aquel momento ó con posterioridad por circunstancias naturales ó especiales de la agresora; concurriendo, como en este hecho concurren, en favor de la agredida todas los requisitos determinados en el núm. 4.º del art. 8.º del Código penal, la irresponsabilidad criminal por la lesión que infringió es de estricto derecho, y si no tiene que responder del hecho principal, menos tiene aún que hacerlo de las consecuencias que produjo en la*



García, que, no habiendo tenido en cuenta para acometer su estado de embarazo, menos pudo tenerlo la Fernández para defenderse: Considerando, en su virtud, que al no interpretar en este sentido la Sala sentenciadora las citadas disposiciones del Código, las ha infringido al no aplicar en toda su extensión el número 4.º del art. 8.º del Código penal, haciendo indeclinable la casación de la sentencia, conforme al núm. 1.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, etc.» (Sentencia de 29 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 10 de Enero de 1888, pág. 64.)

**Exención completa de responsabilidad, NO APRECIADA NI AUN COMO CIRCUNSTANCIA ATENUANTE.**

**CUESTION.** *Si de la causa resulta que yendo varios mozos por la calle de un pueblo tocando la guitarra, uno de ellos entonó una copla pretendiendo que los demás se parasen ó le acompañasen con la guitarra, y como no hicieron caso de esta excitación, se ofendió, y dirigiéndose á uno de dichos compañeros le infirió una herida incisa, quien entonces le disparó dos tiros de pistola, hirindole menos gravemente, deberá apreciarse á favor de este último la circunstancia de exención completa de responsabilidad criminal por haber obrado en justa defensa de su persona, con todos los requisitos de la Ley?*—Ni aun siquiera una sola circunstancia atenuante estimó á su favor la Audiencia de Almería, que lo condenó á un año, once meses y quince días de prisión correccional. Mas interpuesto contra dicha sentencia recurso de casación por la defensa del procesado, citando como infringido el art. 8.º, núm. 4.º del Código, declaró el Tribunal Supremo haber lugar á él: «Considerando que, según los hechos probados, la provocación y la agresión partieron de Torcuato Egea; que herido Francisco Hernández por el Egea, se vió racionalmente en la necesidad de hacer uso de su arma para repeler aquel imprevisto, directo é imotivado ataque y para impedir su continuación; y que, por consiguiente, obran á favor del procesado todos los requisitos constitutivos de exención de responsabilidad criminal: Considerando que, por no haber aplicado el Tribunal sentenciador el núm. 4.º del art. 8.º del Código penal, ha incurrido en error de derecho, infringiendo esta disposición de la ley, y también, por indebida aplicación, el art. 423 del mismo Código, etc.» (Sentencia de 7 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 9 de Abril de 1888, pág. 88.)

**EN UNA RIÑA EN QUE LOS CONTENDIENTES SE GOLPEAN MUTUAMENTE, NO HAY AGRESIÓN ILEGÍTIMA POR PARTE DEL QUE PEGA PRIMERO.**

**CUESTION.** *En caso de riña, cuando dos ó más se maltratan mutuamente, ¿la circunstancia de ser uno el que pega primero determinará la agresión ilegítima según los términos del artículo 8.º, núm. 4.º del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que, si bien es evidente que Juan Manuel Pleta y Severiano Velasco se concertaron para buscar á Nicolás Ramírez con objeto de provocarle, y que con este motivo

se suscitó entre ellos una acalorada disputa, que concluyó viniendo á las manos los contendientes; aparte de esto, no se consigna en la sentencia hecho alguno que caracterice el caso de defensa alegado por el penado en su recurso; pues ni se explica en qué consistió la disputa que precedió á las vías de hecho para poder apreciar la actitud de cada uno, ni en caso de ríña, cuando dos ó más se maltratan mutuamente, la circunstancia accidental de ser uno de ellos el que pegue primeramente no es determinante de la agresión ilegítima á que el Código se refiere.» (Sentencia de 14 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 18 de Abril de 1888, pág. 114.)

**CASO EN QUE MEHOS GOLPES DADOS Á UNA PERSONA DETERMINAN, SÍ, PROVOCACIÓN, PERO EN MODO ALGUNO AGRESIÓN ILEGÍTIMA Á LOS EFECTOS DEL ART. 8.º, NÚM. 4.º DEL CÓDIGO.**

**CUESTION.** *Varios golpes dados con un estoque y de plano por un sujeto á otro, con quien estaba disputando, determinan una verdadera agresión ilegítima, ó tan sólo una provocación?*—El Tribunal Supremo ha declarado que en este caso sólo procede apreciar la circunstancia atenuante 4.ª del art. 9.º del Código: «Considerando que es de apreciarse la circunstancia 4.ª del artículo 8.º del Código cuando sin provocar el agente á su contrario obra previa agresión ilegítima de éste y haciendo uso de un medio racional de defensa, requisitos que no concurrieron en el hecho que ha motivado el proceso seguido al recurrente Antonio Barrera y Pérez, porque, reducido á que éste y el ofendido Facundo Carifena, yendo juntos á un punto determinado y comenzando á disputar sin dirigirse ofensas, el último, por fin, sacó un estoque y de plano dió con él al primero algunos golpes de escasa importancia, á los que contestó Barrera disparando un tiro de pistola que produjo la muerte de Carifena, por modo claro resulta que en favor de aquél no puede darse como existente más que la atenuante de provocación ó amenaza adecuada que determina el uso que contra él se hizo del estoque, y de ninguna manera la exención de responsabilidad á que se refiere dicha circunstancia 4.ª del art. 8.º del Código; y al fundar en estas apreciaciones jurídicas su fallo condenatorio la Audiencia de Albuñol no ha incurrido en el error de derecho que determina el núm. 1.º del artículo 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, porque no ha infringido ni el repetido artículo del Código ni los demás que en relación al mismo se invocan en el recurso, etc.» (Sentencia de 9 de Diciembre de 1887, publicada en las *Gacetas* de 9 y 12 de Abril de 1888, páginas 90 y 91.)

**EL ACTO DE apuntar con una pistola ES CONSTITUTIVO DE agresión ilegítima.**

**CUESTION.** *El que cuestionando con otro por motivos fútiles, saca una pistola y apunta á éste, deberá ser considerado como agresor ilegítimo, determinando, por ende, su acometimiento,*



*el requisito 1.º del art. 8.º, núm. 4.º del Código, con respecto al procesado que en tal situación saca una faca y mata á su adversario?*—No lo estimó así la Audiencia de Granada, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por preterición indebida de ese elemento esencial de atenuación de responsabilidad con arreglo al art. 9.º, núm. 1.º del Código, con relación al 8.º, núm. 4.º: «Considerando que establecido en la sentencia que Ramírez Rosales, hallándose en cuestión por motivos frívolos con Vela Lozano, sacó una pistola y apuntó á éste, es indudable que por parte del primero hubo verdadera agresión ilegítima, constituida por este acto; porque no «expresándose por el Tribunal á que la cuestión entre aquéllos suscitada tuviera carácter de reyerta personal inductiva de acometimiento, ni permitiendo tampoco suponerlo la índole desconocida de los motivos de ella, calificados de frívolos, no puede entenderse en este caso, sin riesgo de error, como accidente más ó menos probable y esperado de la contienda: Considerando que determinado el acto del procesado por el de su agresor, éste constituye por sí una circunstancia atenuante de la responsabilidad en que incurrió el primero al herirle y matarle, según el núm. 1.º del art. 9.º del Código penal, en relación con el núm. 4.º del 8.º, el cual infringió la Sala sentenciadora al no darle su propio valor jurídico.» (Sentencia de 27 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 21 de Abril de 1888, páginas 138 y 139.)

EL INSULTAR Á UNA PERSONA Y DIRIGIRSE HACIA ELLA PARA MAL-TRATARLA DE OBRA DETERMINA UNA **agresión ilegítima.**

**CUESTION.** *Si hallándose la procesada recogiendo trapos en la calle, llegó otra mujer, trapera también de oficio, y después de insultar á aquélla duramente se fué hacia la misma para maltratarla de obra, dando esto lugar á que ambas se agarraran y resultasen lesionadas, la procesada levemente, y la agresora de un mordisco que ésta le dió, habiendo tardado en quedar sana diez y siete días, ¿procederá apreciar á favor de la procesada la exención de responsabilidad por haber obrado en defensa de su persona con todos los requisitos del art. 8.º, núm. 4.º del Código?*—La Sala de lo criminal de la Audiencia de esta Corte sólo estimó á favor de la acusada la circunstancia atenuante de provocación, y la condenó á un mes y un día de arresto mayor. Mas interpuesto por su defensa recurso de casación por infracción de ley, citando la del art. 8.º, núm. 4.º del Código, declaró el Tribunal Supremo haber lugar á él: «Considerando que, según los hechos declarados probados en la sentencia, la recurrente Carmen Moya, sin motivo alguno por su parte, fué insultada por la ofendida, como lo había hecho en días anteriores, y sin réplica ni demostración alguna por parte de la Carmen, se fué hacia ella para maltratarla de obra, lo que dió lugar á que se trabasen en lucha, de la que resultó la Josefa Fernández con un mordisco en un dedo, que tardó en sanar diez y siete días, y, por lo tanto, es visto que hubo por parte de la Josefa Fernández una verdadera ó ilegíti-



ma agresión sin que la Moya la hubiera provocado, y que ésta, al repelerla, usó de un medio racional y adecuado al ataque, y, por lo tanto, concurrieron todos los requisitos exigidos por la ley para la propia defensa, y al no apreciarlo así la Sala sentenciadora ha incurrido en el error de derecho ó infringido las disposiciones legales que se citan como fundamento del recurso, etc.» (Sentencia de 30 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 4 de Abril de 1888, páginas 72 y 73.)

EL PROFERIR DEXUESTOS CONTRA UNA PERSONA Y EL HACER ADEMÁS DE SACAR UN ARMA CONSTITUYE **agresión ilegítima y NO MERA provocación.**

**CUESTION.** *Cuando del proceso resulta que habiendo ido un sujeto á una taberna y hecho servir varias copas de aguardiente, al reclamarle el tabernero su pago se negó á verificarlo, profiriendo malas palabras y ejecutando movimientos que demostraban su propósito de sacar un arma, por lo que el tabernero se echó sobre él y comenzaron á luchar, saliendo el sujeto herido gravemente y el tabernero con unas lesiones leves: deberá ser declarado éste exento de toda responsabilidad?*—No lo estimó así la Audiencia de lo criminal de Málaga, que apreciando tan sólo en el hecho la atenuante de provocación á favor del tabernero, lo condenó á seis meses de arresto mayor. Mas interpuesto contra dicha sentencia recurso de casación por la defensa del procesado, alegando como infringido el art. 8.º, núm. 4.º del Código, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar á él*: «Considerando que partiendo del supuesto de que Juan López Sánchez, en estado de embriaguez, fué á la taberna de Juan Ramírez Garrido, que no quería pagar las copas de aguardiente que en la misma había bebido, y que con malas palabras y con movimientos que demostraban que proyectaba sacar un arma se echó sobre éste y comenzó á luchar, las lesiones graves que recibió fueron causadas en justa y legítima defensa, porque el mencionado Ramírez no provocó el suceso, procuró repeler de un modo adecuado y racional una agresión ilegítima y usó á ese fin de los medios más propios que en tan críticos momentos estaban á su alcance; y al no estimar el Tribunal sentenciador todos estos motivos de exención de responsabilidad penal ha infringido en su núm. 4.º el art. 8.º del Código, incurriendo en el error de derecho que con gran acierto se invoca en el recurso, etc.» (Sentencia de 31 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 7 de Mayo, páginas 198 y 199.)

EXEXCIÓN TOTAL DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL APECIADA INDEBIDAMENTE COMO CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES DE **provocación y arrebató.**

**CUESTION.** *El que insultado y amenazado por un sujeto le quiere para que le deje y no lo comprometa, y al verse acometido por el mismo, navaja en mano, le dispara dos tiros de pistola, hirándole gravemente, deberá ser declarado exento de responsa-*

**bilidad criminal por haber obrado en justa defensa de su persona con todos los requisitos de la Ley?**—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa al casar la sentencia de la Audiencia de lo criminal de Jerez de la Frontera, que sólo apreció como concurrentes en el hecho las dos circunstancias atenuantes de *provocación y arrebató*: «Considerando que al hacer Antonio Monje los dos disparos que produjeron la lesión grave padecida por Gaspar Monje Jiménez, obró evidentemente así para rechazar la agresión ilegítima de éste, quien, cuchillo en mano, le acometió después de haber logrado desasirse de un tercero que intentó contenerle, siendo de apreciar además en la defensa la racionalidad del medio empleado en relación con la gravedad de la agresión y la falta de provocación por parte del Antonio Monje, que ante los insistentes insultos y amenazas de muerte proferidas por el Gaspar se limitó á requerirle para que le dejase y no le comprometiera y á sacar á prevención la pistola, de que no hizo uso hasta el último extremo: Considerando que la Audiencia de Jerez de la Frontera ha incurrido en error de derecho al no estimar, según lo expuesto, la circunstancia eximente alegada en el recurso, etc.» (Sentencia de 11 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 10 de Mayo, páginas 218 y 219.)

**EL MERO ACTO DE echar mano de un revólver PARA OFENDER  
Á OTRO CONSTITUYE agresión ilegítima**

**CUESTION.** *El salir una persona al encuentro de otra con ánimo decidido y resuelto de ofenderla y el acto de echar mano de un revólver, ¿constituirán suficientemente á los efectos de la Ley un acto de verdadera agresión?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que, no sólo hay agresión ilegítima en el acto material de acometer á una persona, dando principio á la ejecución de un hecho justiciable, sino que la hay también para los efectos jurídicos cuando una persona sale al encuentro de otra con ánimo y propósito tan decidido y resuelto de ofenderla, y el acto de echar mano de un revólver constituye un verdadero acto de agresión inmediatamente, imponiéndole la necesidad racional de impedirle ó repelerla: Considerando que en estas condiciones se encontró el recurrente D. José García Recio cuando D. Tomás Ortiz de Zárate, que dos días antes había tenido contestaciones con aquél y le había dado una bofetada, le salió al encuentro en la plaza de Chinchón, y diciéndole en alta voz, á distancia de diez ó doce pasos, «prepárate», echó mano á un revólver que llevaba á la cintura y le disparó contra García Recio, que á la vez le contestó con otro disparo, aunque no salió el proyectil; ambos se cambiaron varios disparos sin consecuencias; García arrojó al suelo su arma por ineficaz, y entonces Ortiz de Zárate le acometió con un bastón de estoque, siendo separados en este acto por los testigos que allí había: Considerando que apreciados rectamente los hechos que la sentencia declara probados, es evidente que D. José García Recio fué víctima de una agresión ilegítima, que debió alarmarle, tanto más, cuanto que tenía el



precedente de lo ocurrido entre ambos dos días antes; que así mismo está demostrada la necesidad racional del medio que empleó para repeler la agresión, y por último, que no hubo provocación de ningún género por parte de García Recio, que se limitó única y exclusivamente á defenderse: Considerando que concurriendo, como concurren en el hecho de autos, las tres condiciones que exige el núm. 4.º del art. 8.º del Código penal, es visto que el recurrente no delinquiró al disparar su revólver contra don Tomás Ortiz de Zárate, y que está, por consiguiente, exento de responsabilidad criminal, y al no estimarlo así la Audiencia de lo criminal de Alcalá de Henares ha incurrido en el error de derecho é infracciones legales que sirven de fundamento al presente recurso, etc.» (Sentencia de 17 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 30 de Junio, páginas 313 y 314.)

**UNA MERA SUSTRACCIÓN Ó HURTO NO CONSTITUYE AGRESIÓN ILEGÍTIMA DEL DERECHO AJENO Á LOS EFECTOS DEL ART. 8.º, NÚM. 4.º DEL CÓDIGO.**

**CUESTION.** *El guarda de una finca que al ver de noche á un hombre subido á un árbol cogiendo fruta le apunta con la escopeta y le dispara un tiro, infringiéndole una lesión que le produjo la muerte una hora después, deberá ser considerado como habiendo obrado en defensa de los derechos dominicales de su padre, á quien pertenecía la finca que guardaba, contra la agresión ilegítima constituida por el acto de hurtar la fruta, sin provocación por su parte, si bien no empleando para ello medio racionalmente necesario?*—Así lo entendió la Audiencia de lo criminal de Cartagena, la que estimando que concurrían dos de los requisitos de los tres que exige el art. 8.º, núm. 5.º en relación con el 8.º, núm. 4.º del Código, y haciendo aplicación del art. 87 del mismo, condenó al procesado á diez años y un día de presidio mayor. Mas interpuesto contra esta sentencia recurso de casación por el Ministerio Fiscal, alegando que sólo debió apreciarse en el hecho la circunstancia atenuante de arrebató y obcecación, y en manera alguna la exención incompleta más benignamente estimada por la Sala, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar* al expresado recurso: «Considerando que la Audiencia sentenciadora ha incurrido en las infracciones señaladas por el Ministerio Fiscal en cuanto estimó que Miguel Martínez obró á virtud de agresión ilegítima consistente en la sustracción de la fruta, porque este hecho punible, ofensivo de los derechos que guardaba en aquella ocasión y propio para excitar su ánimo y producirle el arrebató y la obcecación apreciadas sin impugnación actual en la sentencia reclamada, no constituye la agresión que es base y supuesto necesario de toda defensa total ó parcialmente legítima; la cual agresión solamente en esta calidad es estimable cuando se dirige como acto de violencia contra las personas ó cuando entraña para éstas riesgo inminente de su integridad, de su honor ó de otros derechos que en el momento de ser atacados ó puestos en peligro no pueden ser sostenidos de otra suerte que con la fuerza, pero de ninguna ma-



nera lo es por la mera violación de derechos en caso en que tiene lugar con independencia ó en ausencia de su dueño ó defensor, porque entonces las leyes ofrecen medio de repararla sin daño mayor que el ya inferido: Considerando que la falta de la agresión excluye por lo dicho el concepto de defensa legítima en los actos del procesado, etc.» (Sentencia de 3 de Abril de 1888, publicada en las *Gacetas* de 27 y 28 de Julio, páginas 24 y 25.)

EN EL CASO DE lesiones mutuas, NO ES POSIBLE APRECIAR LA agresión ilegítima, SI NO SE DETERMINA QUIÉN DE LOS CONTENDIENTES ACOMETIÓ EL PRIMERO.

**CUESTION.** *¿Cabe apreciar la agresión ilegítima si no se determina en la sentencia del Tribunal á quo quién de los dos contendientes que se hirieron mutuamente precedió al acto en su actitud agresiva?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que, inferida por Senén Fernández á Gil Ponce la lesión ó lesiones que éste sufrió cuando, después de trabarse ambos de palabras, llegaron á las manos, aunque el golpe dado por el primero al segundo determinara el causante de la muerte de aquél, lo cual estima la sentencia reclamada como motivo de atenuación, tales antecedentes, de necesaria consideración en el juicio del hecho procesal por integrarle, excluyen la aplicación á éste de la doctrina legal de la justa defensa invocada en el recurso, porque aquellas recíprocas violencias tienen carácter de accidente no imprevisto de una reyerta personal, que debe entenderse mutuamente aceptada, por no decir el Tribunal á quo que uno de los contendientes, y no el otro, precediera á su adversario en la actitud agresiva á que los dos llegaron antes de los golpes que les hirieron; actitud individual de indispensable conocimiento para afirmar en quien, no tomándola igual, es objeto de ella, el derecho de impedir ó de repeler sus probables efectos, etc.» (Sentencia de 19 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 5 de Agosto, pág. 47.)

UN puñetazo DADO EN ACTITUD HOSTIL DETERMINA UNA agresión ilegítima, Y NO UNA SIMPLE provocación.

**CUESTION.** *El arrojar un cubo de agua á una persona desde un balcón; el presentarse el autor del hecho á ésta cuando, dentro de la casa, averiguaba quién lo era y decirle en tono agresivo que había sido él, dándole al propio tiempo un puñetazo, acompañado de una blasfemia, ¿perda actos constitutivos tan sólo de provocación, ó de verdadero acometimiento?*—La Audiencia de Lérida estimó que los expresados hechos sólo constituían la circunstancia atenuante de provocación. Mas el Tribunal Supremo, al casar dicha sentencia, en virtud del recurso interpuesto por la defensa del reo, declaró que eran aquéllos actos de fuerza constitutivos de una verdadera ó ilegítima agresión: «Considerando que los hechos declarados probados en la sentencia reclamada, de haber arrojado Andrés Ramón Maciá un cubo de agua al recurrente

desde un balcón, cuando se hallaba de fiesta en el jardín del café con otras personas; el presentarse á él cuando, en el interior de la casa, averiguaba quién le había arrojado el agua, diciéndole en tono agresivo que había sido él, dándole al mismo tiempo un puñetazo en el hombro, acompañado de una blasfemia, son actos de fuerza que constituyen una verdadera é ilegítima agresión, sin que aparezca hecho ni aun indicación que revele provocación alguna por parte del agredido, y por lo tanto, está fuera de duda que concurren el 1.º y el 3.º de los requisitos que el Código exige al que obra en defensa de su persona, etc.» (Sentencia de 3 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 22 de Agosto, páginas 71 y 72.)

CUANDO DOS INTENTAN ACOMETERSE MUTUAMENTE, EL GOLPE QUE DA UNO DE ELLOS PRIMERO NO DETERMINA UNA **agresión ilegítima** Á LOS EFECTOS DEL ART. 8.º, NÚM. 4.º DEL CÓDIGO.

**CUESTION.** *Cuando salen dos sujetos de un sitio en actitud de desafío, dispuestos á acometerse mutuamente, el golpe que dá primero el uno, ¿puede constituir agresión ilegítima respecto del otro?*—El Tribunal Supremo ha declarado que en tal caso ésta no existe: «Considerando que consignándose como probado en la sentencia recurrida que Juan Martín Cocinas y Acisclo Alfonso González, en manifiesta actitud de desafío, se dirigieron al portal de la taberna donde se acometieron mutuamente, arrojando primero el Juan una piedra, con la que lastimó á su contrario; la situación en que voluntariamente se colocaron los contendientes excluye la agresión ilegítima de parte del ahora interfecto, en el sentido ó concepto de defensa personal eximente de responsabilidad, puesto que sólo cabe apreciarse cuando la agresión es inesperada y no provocada, que obligue á repeler un riesgo ajeno á la propia voluntad: Considerando que no existiendo agresión ilegítima, tampoco puede haber la de falta de provocación, porque ésta es consecuencia necesaria de aquélla, etc.» (Sentencia de 25 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 30 de Agosto, página 113.)

EL ARROJAR PIEDRAS Á UNA PERSONA, CON ÁNIMO DE OFENDERLA, NO CONSTITUYE UNA MERA **provocación**, SINO UNA VERDADERA **agresión ilegítima**.

**CUESTION.** *Dos sujetos, después de haber comido en una posada, al presentarles la cuenta el posadero, pareciéndoles ésta excesiva, empiezan á insultarlo y se salen á la calle sin pagar; van tras ellos el posadero y su criado, y en vez del dinero reciben sendas pedradas que les dirigen aquéllos; desisten de perseguirlos, pero vuelven á tropezar en otra calle con los deudores que les vuelven á tirar piedras, y entonces amo y criado, con un palo y horca que llevaban, causan á uno de sus perseguidores varias lesiones graves: ¿deberán los autores de éstas ser declarados exentos de responsabilidad criminal?*—La Audiencia de lo criminal de Ciudad Real



estimó, si, que habían obrado á impulsos de la *provocación* de que fueron objeto y de completo *arrebato y obcecación*, y los condenó á dos meses y un día de arresto mayor. Mas el Tribunal Supremo, á instancia de los recurrentes apoyada por el Ministerio Fiscal, *casó* dicha sentencia, declarando exentos de toda responsabilidad á los procesados: «Considerando que el lesionado Chaguy y sus compañeros ejecutaron agresión ilegítima contra Ocaña y su criado, á quienes, después de los insultos é injurias dirigidas al primero y á su mujer en su propia casa, acometieron á pedradas, no sólo cuando éstos, ejerciendo legítimo derecho, salieron de ella en su busca para reclamarles un pago debido, sino también cuando, desistiendo los últimos de su propósito por tal resistencia, volvieron á encontrarles, puesto que estos repetidos é insistentes actos de fuerza, de que sin razón ninguna fueron objeto, pusieron en natural peligro la integridad de sus personas; Considerando que ni Ocaña ni Castellanos provocaron el suceso, porque su reclamación era hecha en los términos en que parece hecha; Considerando que dado el riesgo en que la actitud agresiva de Chaguy y sus dos compañeros colocó á los procesados al repeler éstos, respectivamente, con golpes de palo y de la horca que llevaban, sin duda apercibidos á las contingencias probables de una defensa que la actitud anterior de aquéllos pudo hacerles presumir precisa, emplearon un medio en tales circunstancias racional para impedir sus consecuencias, como proporcionado al peligro de la acometida insistente de que fueron objeto ya de noche en el lugar del suceso, y sin cuyo uso era temible les resultara daño personal; Y considerando, por tanto, que la Audiencia sentenciadora, al estimar estas mismas circunstancias del hecho como meros motivos atenuantes, señalados en los números 4.º y 7.º del art. 9.º del Código penal, ha cometido el error de derecho y la infracción legal invocada por el recurrente, no reconociendo el valor jurídico que es propio del acto de defensa personal realizado por éste juntamente con Encarnación Castellanos, etc.» (Sentencia de 27 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 12 de Enero de 1889, pág. 16.)

VARIOS EMPELLONES DADOS Á UNA PERSONA CON UN PALO Ó CAYADA, EN ADEMÁN HOSTIL, DETERMINAN UNA **agresión ilegítima**.

**CUESTION.** *El que, en actitud hostil, da á otro varios empujones con un palo ó cayada, realiza una agresión ilegítima que, no siendo provocada por el que es objeto de ella, determinará, por lo menos, á favor de este último la exención incompleta de responsabilidad y, por lo tanto, la aplicación de la disminución especial de penalidad que establece el art. 87 del Código penal?*—No lo estimó así la Audiencia de lo criminal de Benavente, la que haciendo caso omiso en absoluto de ese accidente ó causa impulsiva del delito, condenó á su autor á catorce años, ocho meses y un día de reclusión. Mas interpuesto recurso de casación contra dicha Sentencia por la defensa del procesado, el Tribunal Supremo de-

claró la existencia en este caso de una verdadera *agresión legítima*: «Considerando que conforme al art. 87 del Código, cuando el hecho no fuere del todo excusable por falta de alguno de los requisitos anteriormente señalados, si concurre el mayor número de ellos, se aplicará la pena inferior en uno ó dos grados á la señalada por la ley al delito, y se impondrá en la extensión que se estime conveniente, atendiendo el número y entidad de los requisitos que faltaren ó concurrieren: Considerando que la disposición legal precedente debe aplicarse al Presbítero D. Felipe de Prada Méndez, según así lo pretende su defensa en la primera parte del segundo motivo del recurso deducido, porque á su favor concurre la circunstancia de no haber provocado á su contrario D. Ramón San Román, quien no obstante en el día del suceso le amenazó con tirarlo desde un puente al río, fué detrás de él á corta distancia por el camino que conduce á Donadillo, de donde los dos eran vecinos, al encontrarle en la casa de José Esteban tuvo con él algunas contestaciones, y por fin, en otra segunda entrevista en la casa de D. Enrique Ferrer le llamó pape-lón, y con un palo ó cayada le dió algunos empujones, que, como ofensa de obra y en semejantes circunstancias, determinan un verdadero acontecimiento (1) la agresión legítima que motivó la defensa de Prada, no proporcionada y racional, porque no lo fué, ni cabe en buenos principios el que á un empujón con una cayada ó bastón se conteste disparando á un tiempo los dos tiros de una pistola y ocasionando la muerte de su agresor: Considerando que la Audiencia de Benavente, en la sentencia recurrida, se ha separado del criterio jurídico expuesto, y al condenar á Prada como culpable de homicidio, sin circunstancias modificativas de su penalidad, ha infringido los artículos del Código citados, etc.» (Sentencia de 16 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 4 de Marzo de 1889.)

## II Necesidad racional del medio empleado para impedir ó repeler la agresión.

EL MAYOR ALCANCE Ó POTENCIA DEL ARMA CON QUE UNO SE DEFIENDE CON RELACIÓN Á LA EMPLEADA EN EL ATAQUE NO EMPECA Á LA APRECIACIÓN DEL REQUISITO DE LA **NECESIDAD RACIONAL**.

**CUESTION I.** *El haberse rechazado con arma blanca la acometida que con un palo hiciera el agresor, causándole de aquel modo la muerte, ¿determinará acaso un exceso en la defensa, y por ende la imposibilidad de apreciar el requisito de la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión?*—Así lo entendió la Sala de lo criminal de la Audiencia de Madrid que, apreciando tan sólo en el caso de que se trata la atenuante 1.ª del artículo 9.º del Código, condenó al autor del homicidio á doce

(1) Así dice la *Gaceta*, debiendo decir sin duda alguna «acontecimiento».



años y un día de reclusión. Mas interpuesto recurso de casación contra dicha sentencia por la defensa del procesado, por no haberse estimado también á su favor la circunstancia 2.ª del artículo 8.º, núm. 4.º del Código, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar* á él por el expresado concepto: «Considerando que no es de estimar la exención completa de responsabilidad alegada por la representación de Antonio Chiveto en su recurso, porque él fué quien provocó la agresión de José Fernández Ramos, dándole poco antes una bofetada sin razón ni aun pretexto para ello, que resulte al menos de la sentencia, cuya provocación implica la falta de uno de los requisitos esenciales que el Código requiere para la declaración de irresponsabilidad, con arreglo al núm. 4.º del art. 8.º del Código penal: Considerando que, esto no obstante, aparece de la Sentencia recurrida que Antonio Chiveto, al inferir á Ramos las lesiones que produjeron su muerte, obró en defensa de su persona para rechazar la agresión de aquél, posterior, con solución de continuidad, á la bofetada que primero le diera, lo que constituye el primer requisito de la defensa; concurriendo asimismo el segundo, porque la racionalidad del medio empleado para defenderse debe apreciarse teniendo en cuenta las circunstancias del momento, y aun cuando un arma blanca sea, por regla general, más peligrosa que un palo, no resulta que Chiveto hubiese tenido á su disposición y podido escoger friamente un medio ó instrumento menos ofensivo para rechazar la agresión: Considerando que, esto supuesto, la Sala de lo criminal de la Audiencia de esta Corte no ha incurrido en error de derecho al no declarar exento de responsabilidad á Antonio Chiveto Serrano, pero sí al no aplicar la disposición del art. 87, teniendo en cuenta que en la defensa han concurrido el mayor número de requisitos que exige el núm. 4.º del art. 8.º del Código, etc.» (Sentencia de 5 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 23 de Noviembre, páginas 336 y 337.)

**CUESTION II.** *¿Deberá estimarse como excesiva, y por lo tanto racionalmente innecesaria, la defensa que con arma de fuego se oponga á una agresión ilegítima verificada con arma blanca?*—Así lo estimaron la Audiencia de Tarragona y tres letrados del Colegio de esta Corte nombrados sucesivamente para sostener el recurso preparado por la defensa del procesado. Mas habiéndolo interpuesto en beneficio de éste el Ministerio Fiscal, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar* al mismo: «Considerando que reconocido por el Tribunal sentenciador que el procesado José Isern Magranó, al disparar tres tiros de revólver contra Juan Batet, lo hizo en defensa de su padre, cuando el Batet, sin decir palabra, cuchillo en mano, hirió varias veces á éste, y cuando era de presumir que continuara la agresión, debe reconocerse también que aquella defensa fué racional y proporcionada á esta agresión, porque el oponer á una arma blanca otra de fuego por un orden regular, en casos como el presente, no implica diferencias entre ambas circunstancias: Considerando que la Audiencia de Tarragona ha prescindido de la acepción jurídica expuesta, y estimando que Isern obró en defensa de su

padre, sin que él provocase el suceso, y después de una agresión legítima, pero sin usar un medio racional de defensa, le ha condenado, entre otras penas de menos importancia, en cinco meses de arresto mayor, y ha infringido el art. 8.º, circunstancia 5.ª del Código, incurriendo en el error de derecho que, con fundamento, invoca en su recurso el Ministerio Fiscal, etc.» (Sentencia de 27 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 24 de Noviembre, páginas 357 y 358.)

**CUESTION III.** *El que sin provocación alguna por su parte se siente golpeado de pronto con un palo en la cabeza, y repele esa agresión con una navaja ó faca, con la que inflige á su contrario una lesión en la cabeza, curada en trece días sin impedimento ni deformidad, habrá empleado un medio racionalmente necesario para rechazar el injustificado acometimiento de que fué objeto?—*No lo estimaron así ni la Audiencia de Albuñol ni tres Letrados nombrados sucesivamente de oficio para la defensa del procesado! Mas interpuesto recurso de casación contra dicha sentencia por el Ministerio Fiscal en beneficio de aquél, solicitando su total exención de responsabilidad criminal, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar* al expresado recurso: «Considerando que, según aprecia el Tribunal sentenciador como punto de hecho, el recurrente José Beltrán fué repentinamente agredido sin haber provocado la agresión: Considerando que el medio empleado por Beltrán para defenderse debe ser estimado como racionalmente necesario, porque el ataque fué imotivado, imprevisto, violento, con arma contundente y con efecto inmediato: Considerando, por consiguiente, que concurren todas las circunstancias previstas en el art. 8.º, núm. 4.º del Código penal para eximir al procesado de responsabilidad, y que el Tribunal sentenciador ha infringido la precitada disposición legal por no haberla aplicado, etc.» (Sentencia de 5 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 23 de Agosto, páginas 77 y 78.)

LA NECESIDAD RACIONAL NO ESTÁ PRECISAMENTE SUBORDINADA Á LA EXISTENCIA DEL **daño causado**, SINO Á LA **inminencia y peligro del mismo**.

**CUESTION I.** *La circunstancia de no haberle alcanzado al agredido los palos que le descargara el agresor, será obstáculo para apreciar que empleó un medio racionalmente necesario al rechazar aquel ataque con un palo que dió á su vez á la cabeza de su adversario, aun cuando le produjera así la muerte?—*La Audiencia de Santander estimó en el caso de que se trata los dos requisitos de la *agresión legítima* y *falta de provocación* por parte del procesado; pero considerando que éste se excedió en la defensa, ó sea que el medio empleado no fué racionalmente necesario, lo condenó á cuatro años de prisión correccional. Mas interpuesto por su defensa recurso de casación por infracción de ley, que apoyó en el acto de la vista el Ministerio Fiscal, porque procedía estimar la completa exención de responsabilidad criminal del acusado, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar* al expresado recurso:



«Considerando que reconociendo la Audiencia sentenciadora la existencia de agresión ilegítima por parte del ofendido y falta de provocación por la del procesado, ha cometido las infracciones legales y el error de derecho que se le atribuyen al no estimar racionalmente necesario el medio empleado por el último para repeler é impedir la primera, puesto que de los hechos consignados en la sentencia reclamada aparece que Obregón, hallándose en actitud pacífica y aun humilde, á pesar de la injustificada amenaza de Pila, cuando éste descargó dos golpes de palo contra él, se limitó, movido por natural impulso, á darle uno también de palo en la cabeza; cuyos hechos ponen de manifiesto que el recurrente, con un acto proporcionado á la agresión y al peligro, tendió solamente, usando de medio racionalmente necesario en aquellas circunstancias, á repeler, de una parte el agresivo de que fué objeto, que no perdía este carácter por no haber producido efecto en su persona, y á impedir también el riesgo de su repetición que, en la confusión y rapidez del suceso, podía hacerle temer la insistencia del acometimiento después de la amenaza; condiciones todas que acreditan la procedencia de la total exención de responsabilidad del procesado, que al ejecutar el hecho procesal obró en defensa de su persona, con todos los requisitos señalados en el número 4.º del art. 8.º del Código penal, etc.» (Sentencia de 22 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 20 Abril de 1888, página 127.)

**CUESTION II.** *Si sorprendido infraganti un ladrón, de noche, en el campo, por el Alcalde pedáneo del lugar y dos individuos del somatén comisionados al efecto por el Alcalde para descubrir á los autores de varios hurtos, al requerirle aquellos para que les siguiera á casa del Alcalde, se le encaró el ladrón diciendo con tono airado: «qué Alcalde ni qué c..... de Alcalde;» y echando mano á la faja en ademán que creyeron de sacar un arma, arrojando al suelo el bulto que en la cabeza llevaba, se lanzó hacia los individuos del somatén, en cuyo instante, dos de éstos dispararon contra el que suponían agredirles, produciéndole la muerte: ¿deberán ser declarados los autores de este homicidio exentos de responsabilidad in totum?—No lo estimó así la Audiencia de lo criminal de Tresp, que apreciando que concurrieron tan sólo en el hecho los dos requisitos de la agresión ilegítima y falta de provocación, mas no el de la necesidad racional del medio empleado, condenó á los procesados á tres años de prisión correccional. Mas interpuesto por su defensa contra dicha sentencia recurso de casación por infracción del art. 8.º, núm. 4.º, porque el medio empleado para repeler la agresión fué racional y proporcionado á ésta, declaró el Tribunal Supremo haber lugar al expresado recurso: «Considerando que el acometimiento de José Antonio Torres contra el cabo y uno de los individuos del somatén y contra el Alcalde pedáneo del pueblo de Tarrós, realizado cuando en cumplimiento de un deber, propio de sus cargos, trataron de detener de noche y extramuros de la población y de conducir ante el Alcalde del distrito al primero, que acababa de cometer y acaso de repetir un delito de hurto, hizo racionalmente necesario por*

parte de los dos últimos más próximos á él, y por ello en mayor peligro, el disparo de las carabinas que llevaban, puesto que la actitud resueltamente agresiva en actos y en palabras de aquél, que con ella respondía á la prudente y legítima intimación que recibió, era natural en aquellas circunstancias que inspirara á tales agentes de la Autoridad, á la sazón en ejercicio de una función de policía por ésta encomendada, el temor de ser víctimas de una agresión brusca, que hecho posterior consignado en la sentencia induce á creer fuera armada, y que de todas suertes con tal carácter se ofrecía, y les compelió á impedir la defensa de sus personas, gravemente amenazadas de un riesgo que la propia rapidez con que se presentó y lo urgente de su apartamiento aconsejaban eludir en el acto con las armas de que, con derecho y precisamente para casos semejantes, usaban; y Considerando que reconocido en la sentencia reclamada que los recurrentes obraron en propia defensa, á virtud de agresión ilegítima y sin provocar el suceso, aparece evidente el error de derecho y la infracción legal invocados, por no haber juzgado procedente la total exención de responsabilidad de aquéllas, que para impedir la agresión emplearon medio racionalmente necesario, etc.» (Sentencia de 11 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 3 de Mayo, páginas 159 y 160.)

LA NECESIDAD RACIONAL NO EXIGE PRECISAMENTE QUE EL MAL CAUSADO POR EL QUE SE DEFIENDE SEA IGUAL AL CAUSADO POR EL AGRESOR.

**CUESTION I.** La poca ó ninguna entidad del mal causado por el agresor al agredido, será bastante á determinar la innecesidad del medio empleado por éste para repeler la agresión, aun cuando sea de importancia y gravedad el daño que á su vez haya producido con este repulimiento al agresor?—La Audiencia de lo criminal de Albuñol, fundándose en que el ofendido al agredir con una faca al procesado sólo le causó unas lesiones leves, y que éste al rechazar la agresión con el disparo de una pistola produjo á aquél lesiones graves con deformidad é impotencia del miembro lesionado, declaró que hubo exceso en la defensa, y dejó de decretar, por falta de la circunstancia 2.ª del núm. 4.º del art. 8.º, la total exención de responsabilidad criminal del acusado. Mas el Tribunal Supremo, al casar dicha sentencia, estimó también la concurrencia de dicho requisito: «Considerando que supuesta la agresión ilegítima y la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, estimadas ambas por la Sala sentenciadora, es de apreciar también la necesidad racional del medio que Antonio Jiménez empleó para defender su persona de la violenta é insistente agresión de que era objeto por parte de Antonio Fernández, quien, según los hechos declarados probados en la sentencia, no sólo dió una bofetada al primero, sino que en seguida le acometió repetidas veces con una faca, causándole varias lesiones en las manos y en el cuello, y por consiguiente, fué racional el medio adecuado que empleó



para defenderse al apoderarse de una escopeta que se hallaba en un rincón de la habitación donde los hechos ocurrían y dispararla contra su agresor, sin que pueda desvirtuar la racional necesidad de este medio, como apreció la Sala sentenciadora, que fueran leves las lesiones que recibió el agredido, porque la inminencia del peligro, que es lo que justificó su acción, existió en la forma del ataque, siendo, en efecto, casual la mayor ó menor gravedad en las lesiones, que también pudieran causar la muerte. Considerando, por lo expuesto, que la Sala sentenciadora, al no apreciar la circunstancia de exención completa de responsabilidad criminal, ha incurrido en error de derecho é infringido el caso 4.º del art. 8.º del Código penal, etc.» (Sentencia de 10 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 13 de Mayo, pág. 248.)

**QUESTION II.** *Unos golpes dados con un roncal por un hombre de cuarenta años á un muchacho de diez y ocho, autorizarán como medio racional el disparo que haga este de una pistola contra aquél, aun cuando á consecuencia del mismo se produzca la muerte del agresor?*—No lo estimó así la Audiencia de Granada, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por infracción de la circunstancia 2.ª del art. 8.º, núm. 4.º que dejó aquélla de aplicar indebidamente: «Considerando que supuesta la agresión realizada por Atilano Sedillo, sin que conste el motivo de ella, contra Marcos Rodríguez, procede estimar como racionalmente necesario el medio de defensa empleado por Marcos Rodríguez, ya se atiende á la desigualdad de edad y fuerzas entre ambos contendientes, ya á la insistencia de la agresión y duda que pudiera caber á Marcos Rodríguez sobre la trascendencia y finalidad de la misma, que si comenzó con los golpes dados con un roncal, pudo terminar de modo más grave, á no cortarla el agredido con el acto de defensa, etc.» (Sentencia de 7 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 12 de Mayo, pág. 243.)

**QUESTION III.** *Sean cuales fueren las consecuencias del acto de defensa, si ésta fué proporcionada é indispensable para impedir ó repeler el acometimiento, deberá estimarse la necesidad racional de la misma?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa al casar cierta sentencia de la Audiencia de lo criminal de Albuñol, en que dejó de apreciarse dicho requisito de la exención de responsabilidad criminal: «Considerando que el acto de defensa contra una agresión ilegítima que el agente no haya provocado, para que sea racional no ha de ser absoluto, y si proporcionado y necesario á fin de evitar esa agresión, circunstancias que concurrieron en el ejecutado por el recurrente José Rodríguez Alonso, porque al acometimiento inesperado, repetido é insistente, con arma blanca, de su contrario Manuel Pérez Bravo, el disparar contra éste una de fuego, después que no hizo caso de sus súplicas, y cuando había evitado los golpes refugiándose detrás de una pared, fueran las que fuesen las consecuencias de semejante disparo, no puede dudarse que determina una racional defensa, á que se refiere la circunstancia 2.ª del núm. 4.º, artículo 8.º del Código penal, de la cual ha prescindido en su sentencia condenatoria la Audiencia de Albuñol, infringiendo dicho

artículo é incurriendo en el error de derecho que señala el número 1.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, y que con acierto se invoca en el recurso, etc.» (Sentencia de 5 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 28 de Julio, pág. 26.)

**CUESTION IV.** *¿Será alguna vez medio racional y adecuado de defensa el rechazar con un disparo productor de lesiones menos graves el bofetón que á la cara recibe una persona?*—El Tribunal ha resuelto la afirmativa en el siguiente caso: «Considerando que es de apreciarse la circunstancia que señala el número 4.º del art. 8.º del Código penal aplicable á Cuba cuando el agente obra en defensa de su persona, precediendo agresión legítima que él no haya provocado suficientemente y haciendo uso de una racional defensa: Considerando que aceptado como indiscutible el supuesto declarado probado respecto á que D. Generoso Rodríguez Acosta, joven de veintidós años, reconvino á D. Faustino Díaz Menéndez por atreverse á galantear á una de las tres señoritas que paseaban en su compañía, que en vez de reconocer su falta le dió una bofetada en la cara, y él inmediatamente disparó un arma de fuego, con cuyo proyectil infirió á su contrario lesiones menos graves, por modo claro aparece que no sólo no provocó el suceso y que fué previamente agredido por el citado Díaz, según así lo estima el Tribunal sentenciador, sino que también á tan ofensiva acometida, á lo irritante de verse abofetecido en la cara delante de las jóvenes cuyos respetos debía y quería amparar y en las demás circunstancias que le rodeaban, el hacer uso del arma que llevaba consigo, sin otras consecuencias que las que produjo, determina igualmente un medio racional y adecuado de defensa, necesario para repeler y rechazar la agresión, y al prescindir de esta apreciación jurídica la Audiencia de la Habana, en la sentencia que ha dictado, ha infringido el expresado artículo del Código en su núm. 4.º, incurriendo en el error de derecho que señala la regla 56, en su número 5.º, de la ley Provisional que acompaña á dicho cuerpo legal, y que fundadamente se invoca en el recurso, etc.» (Sentencia de 21 de Abril de 1888, publicada en las *Gacetas* de 5 y 6 de Agosto, páginas 48 y 49.)

**CUESTION V.** *¿Podrá dejar de apreciarse el requisito de la necesidad racional del medio empleado para impedir ó repeler la agresión, porque al defenderse el agredido pudo dirigir la puntería del arma de fuego á otra parte menos importante del cuerpo de su agresor, y por lo tanto causarle un mal menos grave que el de la muerte?*—Fundada en esta consideración, dejó la Audiencia de Barcelona de estimar el referido requisito y de absolver *in totum* al acusado. Mas interpuesto por la defensa de éste recurso de casación contra dicha sentencia por infracción de la condición 2.ª del núm. 4.º del art. 8.º del Código, en cuanto no se había aplicado al igual que la 1.ª y 3.ª ya estimadas, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar* al expresado recurso: «Considerando que los hechos que la sentencia declara probados, no sólo demuestran que en el homicidio de José Puig concurrieron en favor del recurrente las circunstancias de agresión legítima y falta de provocación



suficiente por su parte, según aprecia la Sala sentenciadora, sino que debe estimarse como necesariamente racional el medio que empleó el recurrente Bartolomé Torres Pascual para impedir la agresión, porque buena prueba es de la prudencia con que procedió el guardabosque Torres Pascual que, cuando se vió acometido por Puig con un palo, se limitó á desarmarlo con la culata de la escopeta, y sólo cuando vió que el insistente y temerario Puig requería para acometerle con el hacha ó destrál, arma que podía ser de golpe seguro y mortal, fué cuando disparó su escopeta, sin que pueda extremarse el cumplimiento de la condición 2.ª del número 4.º del art. 8.º del Código penal, hasta el punto de exigir que, haciendo uso de un arma de fuego el que se defiende, dirija á ésta ó la otra parte del cuerpo de su agresor la puntería; porque sobre ser esto impropio en casos tales, es poco frecuente, aun en tiradores muy habituados, el poner el proyectil en el punto exacto y preciso de la puntería. Considerando que habiendo concurrido en el homicidio de José Puig todos los requisitos determinados en el núm. 4.º del art. 8.º del Código penal, es visto que la Sala de lo criminal de la Audiencia de Barcelona ha incurrido en error de derecho al no apreciar dichas circunstancias de exención á favor del recurrente, etc.» (Sentencia de 8 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 27 de Diciembre, páginas 279 y 280.)

**SIN PELIGRO EN LA AGRESIÓN NO SE JUSTIFICA LA NECESIDAD DEL MEDIO EMPLEADO PARA REPELERLA.**

**CUESTION.** *¿Podrá invocar válidamente á su favor la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión el que al recibir un puñetazo de otro, que no consta tuviera arma ó la sacara, le inflige con una lanceta ó bisturí una lesión productora de la muerte?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que del contexto general de la Sentencia reclamada, y según aprecia la Audiencia sentenciadora, aparece que la herida que recibió Andrés Ramón, y que fué la causa ocasional de su muerte, no se la causara el recurrente con el caudil que le arrojó al recibir el puñetazo en el hombro, sino más bien con una lanceta ó bisturí de los que usan los albéitares, cuya profesión ejerce, cuando ya estaban en lucha, sin que el Andrés hubiera sacado arma alguna, es indudable que traspasó los límites de una justa y legítima defensa, empleando un medio que no era racionalmente necesario para repeler la agresión, y por lo tanto, falta el segundo de los requisitos exigidos para la defensa completa, etc.» (Sentencia de 3 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 22 de Agosto, páginas 71 y 72.)

**EL DESARME DEL AGRESOR NO EXCLUYE LA NECESIDAD RACIONAL DEL MEDIO EMPLEADO, SI SUBSISTE EL PELIGRO.**

**CUESTION.** *El haber el procesado dado muerte á su agresor después de haberse apoderado del cuchillo que éste esgrimía contra*

*¿Excluye ipso facto la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión?*—El Tribunal ha resuelto que no la excluye cuando las circunstancias del hecho demuestran que, aun después de estar desarmado el agresor, no ha dejado de estar ni un solo momento en peligro la vida del agredido: «Considerando que en los autos ejecutados por el recurrente Arnant Oyharzabal y Echeverri, que dieron por resultado la muerte del caminero Manuel Martínez, concurren todos los expresados requisitos, ó sean la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, toda vez que, estando aquél arreglando los caballos sin tomar la menor parte en la cuestión suscitada, asistió al sitio del suceso excitado por uno de sus amos que le dijo: «Sujeta á este hombre, que nos va á matar á todos», encontrando en él herido de muerte al D. Hilario, y gravemente amenazado del mismo peligro al don Francisco, y sin mediar más palabras que las dirigidas por Arnant al caminero: «¿qué has hecho?» le dió éste un golpe con arma blanca en la cara palmar del dedo índice de la mano izquierda, cuyos hechos constituyen la agresión ilegítima respecto de éste y la falta de provocación en cuanto á aquél: Considerando que al ser objeto el Arnant de tan injustificada agresión, se arrojó sobre el Manuel Martínez con el propósito de sujetarle y apoderarse del arma con que le había herido, como lo consiguió, cayendo en la lucha emprendida tres veces al suelo, unas encima y otras debajo, resultando de ella la muerte del caminero; actos todos que demuestran la necesidad racional del medio empleado por Arnant para repeler la injustificada agresión de que fué objeto: Considerando que, por más que el procesado dió muerte á su adversario después de haberse apoderado del cuchillo que esgrimía contra él, este acto no excluye tan esencial requisito, por no haber dejado de estar ni un solo momento en grave peligro su vida, unido á la posibilidad de que pudiera tener otra arma con que ofenderle, ó de que recobrase la que le arrebató de manos del Martínez en una lucha que aun no había terminado, y cuyo desenlace y contingencias no era dado prever, en cuyo estado de ánimo y tan grave situación, no puede exigirse la debida meditación dirigida á calcular el medio más adecuado para librarse del peligro que amenaza causando el menor daño al adversario: Considerando que al no estimarlo así la Sala sentenciadora, apreciando tan sólo en favor del procesado las circunstancias de agresión ilegítima y de arrebató y obcecación, ha incurrido en el error de derecho que se le atribuye, é infringido los artículos del Código penal á que el recurso se refiere, etc.» (Sentencia de 16 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 27 de Septiembre, pág. 187.)

PARA GRADUAR SI EL MEDIO EMPLEADO FUÉ RACIONALMENTE NECESARIO NO DEBE SER TOMADA EN CUENTA LA POSIBILIDAD DE QUE PERSONAS EXTRAÑAS ACUDAN EN AUXILIO DEL AGREDIDO.

**QUESTION.** *¿Excluye la necesidad racional del medio empleado para impedir ó repeler una agresión el que personas extrañas puedan acudir en auxilio del agredido?*—El Tribunal Supremo



ha resuelto la negativa: «Considerando que las infracciones de ley invocadas en el recurso para obtener la casación de la Sentencia reclamada tienen por fundamento único el de haber sido racionalmente necesario el medio empleado por D. Antonio San Miguel para defenderse de la agresión contra él dirigida por don Martín Moraleda; Considerando que, según los hechos probados, la agresión fué repentina, á mano armada, con instrumento contundente de uso prohibido, y sin provocación por parte del ofendido; que los actos de defensa fueron consecutivos, y que deben estimarse racionalmente necesarios, por la persistencia del ataque y la inminencia del peligro; Considerando que el Tribunal sentenciador ha incurrido en error de derecho al excluir esta circunstancia, admitiendo la eventual posibilidad de que personas extrañas acudieran en auxilio del agredido, porque el motivo racional del medio empleado para defenderse no se rige por un caso fortuito, sino por el criterio de la imputabilidad de las acciones, según el propósito, intención y grado de malicia del agente, revelados por su propio comportamiento y por el caso y resultancia procesal, etc.» (Sentencia de 19 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 28 de Septiembre, páginas 193 y 194.)

### III Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

**CUESTION 1.** *¿Deberá estimarse como provocación bastante, y por ende como exclusión de la exención total de responsabilidad criminal, la negativa del procesado á entregar al ofendido, con quien servía en calidad de cochero en un establecimiento, parte de la propina que recibiera de un parroquiano, á quien con el coche que guiaba venia sirviendo semanalmente?*—La Sala de lo criminal de la Audiencia de esta Corte, apreciando en el hecho las dos circunstancias de agresión ilegítima y necesidad racional del medio empleado para repelerla, estimó que aquella negativa constituía una provocación por parte del acusado que empecía á su total exención de responsabilidad criminal, y lo condenó, como autor del delito de lesiones menos graves, á 125 pesetas de multa. Mas interpuesto por la defensa de aquél recurso de casación, alegando como infringida la circunstancia 3.ª del núm. 4.º del artículo 8.º del Código, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar á él*. «Considerando que la negativa de Vicente Gesto á entregar á Isidoro García parte de la propina que aquél recibiera de un parroquiano cuyo coche servía, no tiene, por su índole, carácter alguno de provocación, y mucho menos no constando, como no consta, si la voluntad del que la dió fué el obsequiar con ella exclusivamente al Vicente Gesto, según éste afirma; por cuya razón es evidente que el penado obró en defensa propia, no sólo con el concurso de las dos circunstancias que el Tribunal sentenciador aprecia, sino con el de las tres que el Código requiere para la exención completa de responsabilidad, habiendo incurrido la Sección segunda de la Sala de lo criminal de esta Corte en el error de derecho que se le atribuye al no estimarlo así, etc.» (Senten-

cia de 11 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 10 de Mayo, pág. 219.)

**CUESTION II.** *Cuando en la Sentencia recurrida no se expresa si el que hirió ó mató á otro en su justa defensa provocó ó no con sus palabras ó con sus actos la agresión de que fué objeto y que repelió, ¿podrá decirse que, en la duda, debe ésta resolverse á favor del reo, estimando por tanto que no hubo provocación por su parte, y que por lo mismo procede su total exención de responsabilidad criminal?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que todos y cada uno de los requisitos que el Código requiere para la exención de responsabilidad deben ser probados por quien los alega, por constituir como constituyen excepción de principio ó regla general, y que no estimando el Tribunal sentenciador si hubo ó no provocación por parte de Marcos Rodríguez que determinase la agresión ilegítima de Atilano Sedillo, no se puede apreciar consiguientemente para los efectos de la exención completa, cual pretende el recurrente, etc.» (Sentencia de 7 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 12 de Mayo, pág. 243.)

**CUESTION III.** *El solo hecho de haber rehusado el agredido ilegítimamente el ofrecimiento de aguardiente que le hiciera el agresor, ¿deberá estimarse como provocación bastante para la agresión de que fué objeto y de que se defendió por medio racionalmente necesario?*—La Audiencia de lo criminal de Llerena estimó que la no aceptación del ofrecimiento era un *désaire*, y por tanto provocación, y por falta del tercer requisito del art. 8.º núm. 4.º dejó de absolver al procesado, estimando que sólo concurrieron dos requisitos de los tres que exige la Ley para eximir de responsabilidad al que obra en defensa de su persona. Mas interpuesto recurso de casación contra dicha sentencia por la defensa del procesado, que alegó que también concurría el requisito de la falta de provocación, el Tribunal Supremo declaró haber lugar al expresado recurso y absolvió por lo tanto libremente al acusado: «Considerando que siendo un hecho declarado probado en la Sentencia recurrida, y admitido con fundamento legal de la misma, que Rafael Molina, por el sólo hecho de no aceptar como sus compañeros el ofrecimiento de aguardiente que les hizo José Morillo, fué insultado y agredido ilegítimamente por éste con una faca, teniendo necesidad racional de defenderse, haciendo uso para ello de una pequeña navaja con que causó al Morillo lesiones que curaron en catorce días, ha debido apreciarse también en favor del recurrente el tercer requisito exigido por el núm. 4.º del art. 8.º del Código penal, ó sea la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, toda vez que no reviste el carácter de provocación la aceptación del ofrecimiento hecho por el Morillo: Considerando que al no estimarlo así la Sala sentenciadora ha incurrido en el error de derecho que se le atribuye, é infringido los artículos del Código penal á que el recurso se refiere, etc.» (Sentencia de 15 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 31 de Diciembre, pág. 293.)



## Art. 8.º... 5.º

DEFENSA DE LA PERSONA Ó DERECHOS DE LOS PARIENTES.

**CUESTION I.** *El que al ver á un primo suyo acosado por un sujeto que le acometía navaja en mano, y de cuyos golpes se defendía con un palo y un tapabocas, da al agresor dos puñaladas que le derriban al suelo y le producen la muerte, deberá ser declarado exento de responsabilidad criminal, en el supuesto de no haber provocado ni en poco ni en mucho el suceso, por haber obrado en justa defensa de su pariente con todos los requisitos de la Ley?*—La Audiencia de Segovia apreció el mayor número de los que señala el núm. 5.º del art. 8.º del Código, mas no el de la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión. Mas el Tribunal Supremo, á excitación del acusado recurrente, declaró la total exención de responsabilidad criminal de éste: «Considerando que, dado por cierto que Félix Toledano y Marugán, sin provocar él el suceso, cuando acababa de defender legítimamente á su padre, salió también en auxilio de su primo Rufino Agüero, que se veía en grave peligro acosado por Félix González, que le acometía con una navaja, evitando los golpes con un palo y con una bufanda ó tapabocas, hasta que dicho Toledano dió á éste dos puñaladas que le hicieron caer en tierra y le produjeron la muerte, por modo evidente resulta que aquél usó un medio racional de defensa, ya que también en el segundo hecho empleó un arma parecida á la del ofensor y repelió su ataque en la forma que mejor pudo y proporcionalmente; y al no estimarlo así la Audiencia de lo criminal de Segovia en la Sentencia condenatoria que ha dictado ha infringido el art. 8.º, circunstancia 5.ª del Código, incurriendo en el error de derecho que señala el núm. 1.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, que con acierto se invoca en el recurso, etc.» (Sentencia de 9 de Diciembre de 1887, publicada en la Gaceta de 9 de Abril de 1888, pág. 90.)

**CUESTION II.** *Aun cuando el procesado haya obrado en defensa de su hermano, al verle en peligro, si éste fué quien acometió y se colocó en esta situación peligrosa por la defensa que contra su ataque hiciera el agredido, podrá aquél alegar á su favor la exención de responsabilidad criminal del art. 8.º, número 5.º del Código, ó será responsable del propio delito cometido por su dicho hermano, atenuado, empero, por la circunstancia de arrebató y obcecación?*—El Tribunal Supremo ha declarado que en tal caso no cabe más que esta última solución; en modo alguno la exención de responsabilidad pretendida: «Considerando que aparte de que el segundo de los requisitos que para la exención de responsabilidad requiere el núm. 5.º, en relación con el 4.º del artículo 8.º del Código penal, supone la existencia de una agresión ilegítima, con la cual haya de ponderarse, y en el caso del proceso, no sólo no partió tal agresión de los agentes de la Autoridad, sino que se dirigió contra ellos por el propio hermano del recurrente y á la vista de éste, aparece evidente que ninguna necesidad

verdaderamente racional tenía de repeler los actos de defensa de los acometidos, cuando le era más fácil, y hubiera sido además más justo, contribuir á contener al agresor; por lo que la Sentencia, apreciando y dando valor jurídico al móvil que determinó la intervención también agresiva de Juan Alcolea en la reyerta, no ha incurrido en el error de derecho que se le atribuye ni en la infracción legal á este fin alegada, por no estimar aquel motivo de atenuación además del consignado en el núm. 7.º del art. 9.º del Código penal, etc.» (Sentencia de 26 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 21 Abril de 1888, pág. 136.)

### Art. 8.º... 8.º

EL QUE EN OCASIÓN DE EJECUTAR UN ACTO LÍCITO CON LA DEBIDA DILIGENCIA, CAUSA UN MAL POR MERO ACCIDENTE, SIN CULPA NI INTENCIÓN DE CAUSARLO.

**CUESTION.** *El que hallándose entretenido en tirar al blanco y á los pajarillos en el patio jardín de su casa con una escopeta de las llamadas de salón, aprovechando la ocasión en que, con motivo de la lluvia, los trabajadores habían suspendido sus tareas, hiere gravemente de un disparo á uno de éstos que por casualidad se asomara en aquel instante á una de las ventanas del patio, será responsable del delito de lesiones por imprudencia temeraria, ó deberá ser declarado exento de responsabilidad por haber ejecutado un acto lícito, con la debida diligencia, y sin culpa ni intención de causar el mal producido?*—La Audiencia de Málaga estimó lo primero y condenó al procesado á dos meses y un día de arresto mayor. Mas interpuesto recurso de casación contra dicha Sentencia por infracción del art. 8.º, núm. 8.º del Código, declaró el Tribunal Supremo haber lugar á él: «Considerando que al dedicarse D. Francisco Luque á tirar al blanco y á los pájaros con una escopeta de salón en el patio jardín de su casa aprovechó para ello la ocasión de estar suspendidos, por causa de la lluvia, los trabajos de los almacenes, y, por tanto, en la fundada y racional creencia de que en éstos no había quedado operario alguno, es visto que aquel acto era lícito y fué ejecutado con la debida diligencia, no siendo, en su virtud, imputable al Luque el mal que por mero accidente sufrió D. Miguel Sellés con uno de los disparos de la referida arma en el momento de asomarse á una de las ventanas de los expresados almacenes, de que era encargado: Considerando, en consecuencia de lo expuesto, que el Tribunal á quo, condenando al mencionado Luque como responsable del delito de imprudencia temeraria, ha incurrido en el error de derecho é infringido las disposiciones legales que se le atribuyen en el recurso, etc.» (Sentencia de 17 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 18 de Abril de 1888, pág. 120.)



## Art. 8.º... 11.

OBRAR EN EL CUMPLIMIENTO DE UN DERECHO Ó EN EL EJERCICIO LEGÍTIMO DE UN DERECHO, OFICIO Ó CARGO.

**CUESTION I.** *¿Cuándo podrá alegar válidamente que ha obrado en el ejercicio legítimo de su cargo la Autoridad que al hacer uso de la fuerza contra el ciudadano le causa un mal material mayor ó menor?—A esta pregunta contesta categóricamente el siguiente: «Considerando que el ejercicio de la Autoridad pública no autoriza á hacer uso de la fuerza sino en el caso extremo de ser acometido y no hallar otro medio de cumplir su misión y hacerse respetar y obedecer, y que en el presente caso pudo conseguirlo por los medios que la prudencia aconseja, sin riesgo para su persona ni menoscabo de la autoridad que ejercía en el establecimiento penal, etc.» (Sentencia de 6 de Octubre de 1887, publicada en la Gaceta de 19 de Noviembre, pág. 318.)*

**CUESTION II.** *El que al preparar un recurso de responsabilidad criminal contra una Sala de justicia, dice en su escrito que ésta ha faltado á sabiendas á la verdad y que «la sentencia se había redactado antes de la celebración del juicio», ¿podrá eximirse de la pena del delito de desacato so pretexto de que obró en el ejercicio legítimo de su derecho?—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que si la circunstancia de obrar en el ejercicio legítimo de un derecho exime de responsabilidad y pena, no pueden ser comprendidos en esta indemnidad los actos justiciables que con exceso y sin motivo se cometan al ejercitarlo: Considerando que si D. Francisco Navarro pudo preparar, como preparó, el recurso de responsabilidad contra el Tribunal que le había condenado, no pudo, sin incurrir en delito y en la pena correspondiente, ofender é injuriar gravemente á los Magistrados que pronunciaron el fallo, suponiendo con repetición que el Ponente había redactado la sentencia con anterioridad al acto del juicio oral, y que todos faltaron á sabiendas á la verdad: Considerando que el recurrente ha sido procesado y penado en esta causa, no por el legítimo uso del derecho definido en el artículo 757 de la ley de Enjuiciamiento criminal, sino porque al plantearlo ha consignado en su escrito afirmaciones y conceptos inadecuados á la petición deducida y tan notoriamente injuriosos que son constitutivos del delito de desacato, por referirse á una Autoridad en el ejercicio de sus funciones y con ocasión de las mismas: Considerando que al apreciarlo así el Tribunal sentenciador no ha incurrido en error de derecho ni ha infringido por indolencia omisión la precitada circunstancia 11 del art. 8.º del Código vigente, etc.» (Sentencia de 17 de Abril de 1888, publicada en la Gaceta de 4 de Agosto, páginas 43 y 44.)*

**CUESTION III.** *El guarda de un término municipal que yendo de orden del Juez en busca de un sujeto sobre quien recaían sospechas de ser autor de un hurto, al avistarlo y ordenarle que se fuera con él, pues le llamaba el Juez municipal, como no quisiera*

*detenerse, le advierte que si daba un paso más le encendía de un tiro, y como echase á correr, le disparó su escopeta por la espalda, dejándole cadáver en el acto, ¿podrá alegar válidamente á su favor la exención de responsabilidad criminal que determina el art. 8.º, núm. 11 del Código, por haber obrado en el cumplimiento de su deber?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que la calidad de guarda del término municipal que el recurrente ostentaba no le imponía el deber, ni tampoco ejercía su legítimo derecho al disparar la escopeta que llevaba y causar la muerte á Sebastián Alifa, porque ni éste ejecutaba acto alguno punible cuya reprensión estuviera encomendada al recurrente por razón de su cargo, ni las funciones que desempeñaba le daban legítimo derecho para atentar contra la vida de aquél por el solo hecho de manifestar el propósito de recoger la llave de la casa de poder de su mujer para entregarla, cumpliendo así la orden recibida, y huir ante la amenaza de muerte que se le hacía, y no concurriendo ninguno de los requisitos que el núm. 11 del art. 8.º, ya citado, determina para la exención de responsabilidad criminal completa, tampoco puede estimarse como incompleta para los efectos de atenuarla, porque esta circunstancia exige la concurrencia de alguno de aquellos requisitos, siendo por lo tanto improcedente el recurso por el primero y segundo de los motivos alegados, etc.» (Sentencia de 23 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 29 de Agosto, pág. 108.)

Véase confirmada la misma doctrina en un caso análogo al anterior: «Considerando que el derecho y el deber de guarda recurrente no llegaron, en el caso procesal, al extremo de imponerle el disparo del arma de fuego de su uso con el solo fin de detener en la huida á los infractores de la ley sobre la caza, porque no ejecutaron éstos en contra suya acto ninguno de violencia ó amenaza; y que estando en realidad su obligación limitada á la práctica de investigaciones encaminadas á comprobar hechos de que pudiera derivarse responsabilidad, resulta, contra lo que se alega, que la Sentencia reclamada no contiene los errores de derecho que se le atribuyen, ni en la extensión con que se expresa el primer motivo del recurso (1), ni siquiera de la manera más restringida con que se expone en el segundo (2), como fundamento de una infracción legal que, en rigor, no es congruente con los casos de casación invocados, etc.» (Sentencia de 24 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 29 de Agosto, pág. 111.)

**CUESTION IV.** *La circunstancia 11.ª del art. 8.º del Código es susceptible de ser apreciada en el concepto de eximente incompleta?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que la Audiencia sentenciadora no ha infringido las disposiciones citadas en los números 3.º y 4.º, porque el precepto del artículo 87 del Código penal sólo es aplicable á las circunstancias de exención de responsabilidad que se integran con la concurren-

(1) O sea un concepto de circunstancia eximente del art. 8.º núm. 11.

(2) O sea como circunstancia eximente incompleta (art. 8.º, núm. 1.º, en relación con el 8.º, núm. 11.)



cía de requisitos distintos entre sí, entre los cuales no se halla la del núm. 11 del art. 8.º, y porque, siendo de todo punto legítima la acción de los guardias, no puede servirles de atenuación el haber obrado con este carácter, etc.» (Sentencia de 19 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 6 de Enero de 1889, páginas 4 y 5.)

Véase además el art. 213, núm. 6.º

### CAPÍTULO III

#### De las circunstancias que atendan la responsabilidad criminal.

##### Art. 9.º... 1.ª

Son circunstancias atenuantes:

1.ª Las expresadas en el capítulo anterior cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos.

Véase la *Cuestión IV* del art. 8.º, núm. 11.

##### Art. 9.º... 3.ª

CIRCUNSTANCIA ATENUANTE DE NO INTENCIÓN DE CAUSAR UN MAL TAN GRAVE COMO EL QUE SE PRODUJO.

**CUESTION I.** *El mero hecho de no haber sido mortal de necesidad una herida que produjo, no obstante, la muerte del que la recibió, la cual hubiera podido tal vez evitarse con el inmediato auxilio y asistencia del lesionado, ¿será bastante á determinar en este homicidio la existencia de la circunstancia atenuante de no intención de causar un mal tan grave?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que apareciendo que el culpable empleó medio adecuado para realizar la muerte de Fernández, y no constando que otra distinta fuera su intención, ni pudiéndose inferir esto racionalmente del mero hecho de no haber sido mortal de necesidad la herida, cuando es evidente que sólo por ella y no por causa derivada de la voluntad del ofendido se produjo la muerte, por más que acaso la hubiera evitado un instantáneo socorro, la Audiencia sentenciadora no ha cometido la infracción legal que se le atribuye al no estimar en favor del procesado falta de intención de causar mal tan grave como el que resultó de acto libre é idóneo, etc.» (Sentencia de 21 de Septiembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 22 de Octubre, páginas 292 y 293.)

**CUESTION II.** *¿Es compatible con el delito de injurias la circunstancia atenuante de no intención de causar un mal tan grave?*—A las Sentencias del Tribunal Supremo, insertas en los anteriores *Suplementos*, que resuelven la cuestión en sentido negativo, hay que agregar otra posterior: «Considerando que, según tiene declarado este Supremo Tribunal, la circunstancia ate-

cuante de no haber tenido el procesado intención de causar un mal de tanta gravedad como el producido, es incompatible con la naturaleza é índole especial del delito de injurias, y al apreciarlo así el Tribunal á *quo* ha procedido con acierto, etc.» (Sentencia de 1.º de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 16 de Noviembre, pág. 298.)—Igual doctrina se establece en la Sentencia de 6 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 19 de Noviembre, pág. 317.

**CUESTION III.** *Al que mata á otro de un golpe de ahijada descargado sobre la cabeza, ¿deberá apreciársele la circunstancia atenuante de no intención de causar un mal tan grave?*—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Málaga, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo á excitación del Ministerio Fiscal, recurrente por aplicación indebida del art. 9.º, núm. 3.º del Código: «Considerando que el único punto objeto de discusión en el presente recurso, y sobre el que ha de resolver este Supremo Tribunal, está limitado á determinar si, dados los hechos declarados probados en la Sentencia recurrida, está bien apreciada en ella la circunstancia atenuante 3.ª del art. 9.º del Código penal: Considerando que aceptado el hecho de que Francisco Domínguez fué autor voluntario de la muerte de Antonio Sánchez, no cabe apreciar en su favor la circunstancia atenuante de no haber tenido intención de causar un mal tan grave como el que produjo, porque este motivo de atenuación nace de la falta de armonía entre la intención conocida del agente criminal y el resultado producido, y no cabe sostener dentro de las probabilidades racionales que la muerte de una persona herida en sitio y con instrumento adecuado y capaz para producirla sea resultado imprevisto, y no la natural eficacia del instrumento empleado; y al apreciar esta circunstancia la Sala sentenciadora ha incurrido en el error de derecho é infringido la circunstancia 3.ª del art. 9.º y la regla 5.ª del 82 del Código penal, que se invocan como fundamento del recurso, etc.» (Sentencia de 7 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 9 de Enero de 1888, pág. 43.)

**CUESTION IV.** *En el delito de falsedad en documento público, y en cualesquiera otros en que la entidad ó importancia del mal causado no afecta en nada á la calificación y penalidad del hecho delictivo, ¿cabrá estimar en el agente la circunstancia atenuante 3.ª del art. 9.º del Código?*—En cierta causa por falsedad en la inscripción de un niño en el Registro civil, que se supuso ser de hijo de padres distintos de los verdaderos, el Tribunal Supremo hubo de rechazar como improcedente la pretensión de la defensa del recurrente, de que se tomara en cuenta la expresada circunstancia de atenuación: «Considerando que la circunstancia atenuante 3.ª de las que señala el art. 9.º del Código penal no es aplicable á delitos cuya calificación y penalidad no depende de la identidad (1) del mal causado, etc.» (Sentencia de 19 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 5 de Enero de 1888, páginas 19 y 20.)

(1) Así se lee en la *Gaceta*, debiendo decir *entidad*.



**CUESTION V.** Si al reclamarle al procesado una joven, con la que acababa de tener acceso carnal, el pago de la cantidad al efecto convenida, la impulsó al silencio amenazándola de pegarle fuego, y al propio tiempo, encendiendo una cerilla que aplicó á una lata de petróleo que había en la habitación, la arrojó el líquido inflamado á la expresada joven que, al verse envuelta en llamas, salió afuera pidiendo socorro, logrando un sujeto cubrirla con sus ropas y sofocar el fuego, no sin que éste la causara gravísimas lesiones, de las que falleció el mismo día, podrá apreciar en este asesinato por medio de incendio la circunstancia atenuante de no haber tenido el culpable intención de causar un mal tan grave como el producido?—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Huelva, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo, á excitación del Ministerio Fiscal, por indebido aprecio en este caso de la referida circunstancia de atenuación: «Considerando que ninguno de los hechos consignados en la sentencia reclamada revela que el procesado no tuviere intención de causar el mal producido, y, antes al contrario, el uso consciente del medio peligrosísimo que empleó para dañar, inmediatamente después de hacer conocer su propósito á la víctima de su acción, demuestran armonía y correspondencia perfecta de su intención con el resultado que naturalmente se produjo, etc.» (Sentencia de 29 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 6 de Enero de 1888, páginas 31 y 32.)

**CUESTION VI.** El que disputando con una señora la descarga un puñetazo en la cara, ocasionándola una lesión con hundimiento del pómullo, que exige cuarenta días de asistencia facultativa y le produce deformidad incurable, podrá invocar válidamente á su favor la circunstancia atenuante de no intención de causar un mal tan grave?—No lo estimó así la Audiencia de lo criminal de Bilbao, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por no haber aplicado en este caso la susodicha circunstancia de atenuación: «Considerando que en los delitos de la índole del que se trata en el presente recurso la circunstancia de no haber tenido el agente intención de causar un mal de tanta gravedad como el producido se demuestra principalmente por la desproporción resultante entre el medio empleado para la ejecución del acto punible y las consecuencias del mismo: Considerando que en el caso de autos no puede afirmarse ni inferirse racionalmente de los datos consignados en la sentencia que la intención del procesado fuera la de causar un mal de tanta gravedad como el producido al dar con el puño un golpe en la cara á la D.ª Teresa Cristantes, demostrándose, por tanto, la desproporción entre el medio empleado y el resultado del acto justiciable; y consiguientemente la Audiencia sentenciadora, al no estimar la circunstancia atenuante 3.ª del art. 9.º del Código penal, ha incurrido en error de derecho é infringido dicha disposición legal, etc.» (Sentencia de 27 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 17 de Mayo, páginas 274 y 275.)

**CUESTION VII.** En un homicidio realizado por varios al tomar parte á favor de un sujeto que estaba luchando con otro, sobre quien, caído al suelo, se arrojaron golpeándole con los pies y

*rodillas en el pecho, cuello y vientre, produciéndole su muerte á los pocos momentos de haber llegado por su propio pie á su casa, á consecuencia de conmoción cerebral, efecto de dicho golpeamiento, deberá apreciarse la circunstancia atenuante de no intención de causar un mal tan grave como el producido!—No lo estimó así la Audiencia de lo criminal de Benavente, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, que coadyuvó en este punto el recurso del procesado, por no haberse apreciado en este caso la referida circunstancia de atenuación: «Considerando que por no apreciar en favor de todos los procesados la circunstancia, también atenuante, que consiste, según el número 3.º del art. 9.º del Código penal, en no tener los culpables intención de causar mal de tanta gravedad como el producido, ha incurrido dicha Audiencia en la infracción alegada de aquella disposición; porque esa circunstancia minoradora de la responsabilidad normal, que, como reiteradamente ha declarado esta Sala, deriva de desarmónia, revelada por hechos conocidos generalmente por los medios de acción usados, entre el propósito del delincuente y el resultado de su acción, se muestra por los actos de los procesados, quienes con voluntad indudable de causar daño personal á Olivera, á causa de lo cual responden integramente del homicidio, con el hecho importante de haber empleado para maltratar sus propios miembros y no instrumento ni arma ninguna, y con no haber continuado la agresión cuando el ofendido se levantó del suelo, hicieron manifiesta su intención limitada á golpear, sin perseguir fin de tan graves consecuencias como el sobrevenido, el cual, además, consta ser debido á herida no directamente causada, sino á la que el propio Olivera recibió en la cabeza, acaso por contragolpe, puesto que los culpables, según dice la sentencia, le golpearon en el pecho, cuello y vientre, etc.» (Sentencia de 21 de Mayo de 1888, publicada en la Gaceta de 29 de Agosto, páginas 105 y 106.)*

**CUESTION VIII.** *El que disputando con otro coge una banqueta y con ella le da un golpe en la cabeza, causándole lesiones de más de treinta días, con pérdida completa de la visión de un ojo, podrá invocar válidamente á su favor la circunstancia atenuante de no intención de causar un mal tan grave!—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que es de estimarse la circunstancia 3.ª del art. 9.º del Código penal cuando el delincuente no ha tenido intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo, lo cual no acontece al apreciarse el hecho atribuido al procesado Julián de Lera Causeco, y que ha dado origen á esta causa; porque consistiendo en haber éste inferido á su contrario una lesión que le duró sesenta y tres días, dándole un golpe con una banqueta en el ojo izquierdo, y haciéndole perder por completo éste órgano visual, los medios y modos usados para dañar determinan y convence, por lo adecuados que son al efecto y fin logrado, que el propósito del agente se realizó en su integridad, y al apreciarlo así el Tribunal á quo, no concediendo semejante circunstancia, no ha incurrido en el error de derecho que señala el núm. 5.º del art. 849 de la ley de Enjuicia-*



miento criminal, ni infringido el citado artículo del Código, etc.» (Sentencia de 24 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 9 de Enero de 1889, pág. 11.)

**CUESTION IX.** *El que da d otro un palo en la cabeza, causándole lesiones menos graves, ¿podrá invocar á su favor la no intención de causar un mal tan grave?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que no puede estimarse superior el daño causado á la intención del reo cuando éste toma un instrumento contundente, lo emplea para herir y dirige el golpe á la cabeza del ofendido, causándole una lesión calificada de menos grave: Considerando que por haber obrado en esta forma el recurrente, no puede invocar como infringidos por indebida omisión el art. 9.º, circunstancia 3.ª, y el art. 82, regla 5.ª, del Código penal, porque estas disposiciones legales son inaplicables al caso procesal, etc.» (Sentencia de 24 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 9 de Enero de 1889, pág. 12.)

**CUESTION X.** *¿Cabe admitir que no tuvo intención de causar un mal tan grave el que asalta á una joven de doce años un golpe con el puño de un arma blanca, fracturándole una clavícula?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que apareciendo de los hechos que como ciertos se consignau en la sentencia recurrida que el procesado Anastasio Bustos Vega asaltó á la joven Ana Burgos, de doce años de edad, un golpe con el puño de un arma blanca, fracturándole la clavícula derecha, que hizo necesaria la asistencia facultativa por tiempo de cincuenta y cinco días, no cabe suponer ni puede admitirse que por sus actos ni por el resultado de éstos no tuviese el expresado Anastasio intención de causar todo el mal que produjo, etc.» (Sentencia de 26 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 12 de Enero de 1889, pág. 13.)

### Art. 9.º... 4.ª

#### CIRCUNSTANCIA ATENUANTE DE PROVOCACIÓN INMEDIATA Ó AMENAZA ADECUADA POR PARTE DEL OFENDIDO.

**CUESTION I.** *El haber el perjudicado promovido la cuestión y excitado en son de desafío al procesado á que le siguiese á un monte próximo, donde éste dispuso contra aquél una pistola, ¿serán hechos bastantes á determinar la existencia de la circunstancia atenuante de haber precedido inmediatamente provocación de parte del ofendido?*—No lo estimó así la Audiencia de Puerto Príncipe, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo, por no haber aplicado en este caso la expresada circunstancia de atenuación: «Considerando que es de apreciar en el hecho la circunstancia atenuante 4.ª del art. 9.º, ó sea la de provocación; porque, según se declara probado en la sentencia recurrida, fué D. Francisco Rocio quien promovió la cuestión y excitó en son de desafío á D. Manuel Catalá á que le siguiese al monte próximo, donde se perpetró el delito, habiendo, consiguientemente, incurrido también en error de derecho la Audiencia de Puerto Príncipe al no apreciar dicha

circunstancia atenuante, etc.» (Sentencia de 18 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 16 de Noviembre, páginas 307 y 308.)

**CUESTION II.** *La grosera manifestación del ofendido hecha al procesado de «que tenía tantos tales como él», y al contestarle éste «que tendría tantos», el retarle á que saliera fuera para verlo, verificado lo cual, el procesado le dió un navajazo que le produjo la muerte, ¿constituirán la circunstancia atenuante de provocación, comprendida en el núm. 4.º del art. 9.º del Código?*—La Sala de lo criminal de la Audiencia de Cáceres hizo caso omiso de ella y condenó al procesado á la pena señalada al delito en su grado medio. Mas interpuesto contra dicha sentencia recurso de casación por la defensa del reo, con la pretensión de que se apreciara á su favor la expresada circunstancia de atenuación, declaró el Tribunal Supremo haber lugar á él: «Considerando que el hecho de haber invitado José San Juan, sin precedente justificativo, á Manuel Cortijo á comprobar una grosera afirmación inmotivada por aquel hecho, dando á sus palabras carácter notorio de reto que el último aceptó, constituye la inmediata provocación del primero, señalada en el núm. 4.º del art. 9.º del Código penal como circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal de los que á impulso de ella obran como obró el recurrente, llamado por su adversario, con significativas frases, al terreno de la fuerza, delante de varias personas; y por lo tanto, que la Sala sentenciadora ha incurrido en el error de derecho que autoriza la casación, conforme al núm. 5.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, por haber infringido aquella disposición de carácter sustantivo, etc.» (Sentencia de 21 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 6 de Agosto, páginas 49 y 50.)

#### Art. 9.º... 5.ª

CIRCUNSTANCIA ATENUANTE DE VINDICACIÓN PRÓXIMA DE UNA OFENSA GRAVE CAUSADA AL AUTOR DEL DELITO, Ó Á SU CÓNYUGE, ASCENDIENTES, DESCENDIENTES, HERMANOS LEGÍTIMOS, NATURALES Ó ADOPTIVOS Ó AFINES EN LOS MISMOS GRADOS.

**CUESTION.** *¿Cabe estimar que obró en vindicación de una ofensa grave el que mata á un sujeto porque éste dijera momentos antes á otro que si no le había contestado al saludo era porque estaba en compañía de aquel, con quien tenía enemistad?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que la única cuestión propuesta en este recurso consiste en que, á juicio de la defensa de Angel Sahuquillo, éste cometió el delito de homicidio que se pena en vindicación próxima de una ofensa grave, que consistió, según se consigna en los hechos que se declaran probados, en que el muerto Juan Ayllón dijo á Antonio Bernardo, que estaba á la puerta del recurrente Sahuquillo, que si había negado su contestación al saludo que el Bernardo le hiciera era que no tenía por qué saludar, y menos estando en compañía de quien estaba, que era el Angel Sahuquillo, con el cual estaba en-



emistado el Ayllón; y como éste oyera tales palabras, se echó á la calle con una navaja abierta en la mano, y causó al Juan Ayllón la lesión que pocos momentos después le produjo la muerte: Considerando que la explicación que dió el Juan Ayllón de su falta de contestación al saludo de Manuel Antonio Bernardo no puede estimarse ofensa grave, en vindicación de la cual ejecutara el recurrente el delito de homicidio, como sería preciso para apreciar la circunstancia atenuante 5.ª del art. 9.º del Código, etc.» (Sentencia de 26 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 12 de Enero de 1889, pág. 14.)

### Art. 9.º... 7.º

#### CIRCUNSTANCIA ATENUANTE DE ARREBATO Y OBCECACIÓN.

**CUESTION I.** *El que, llamado á una diligencia judicial, acude puntualmente, y no habiéndolo verificado las demás personas con quienes había aquella también de practicarse, y viéndose desatendido en su manifestación de que le precisaba marcharse á los quehaceres de su oficio, profiere expresiones más ó menos injuriosas contra la Autoridad judicial fuera de su presencia, ¿será responsable de este delito de injurias con la atenuante de arrebató y obcecación?*—No lo estimó así la Audiencia de Sevilla, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo, por la no apreciación de la referida circunstancia de atenuación: «Considerando que de los hechos que como probados se consignau en la sentencia recurrida aparece que el procesado, obedeciendo al mandato que se le hizo, se presentó con la debida puntualidad en el local del Juzgado para ser reconocido por los Médicos forenses; que no habiendo comparcido éstos, se le obligó á esperarlos largo tiempo, sin que fuese atendido en su manifestación de que le precisaba prepararse para salir de la ciudad á desempeñar las funciones de su oficio, cuyas dilaciones y entorpecimientos influyeron en el ánimo del recurrente, produciéndole arrebató y obcecación al ejecutar el delito, y al no estimarlo así el Tribunal sentenciador, ha infringido la circunstancia 7.ª del art. 9.º, etc.» (Sentencia de 1.º de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 16 de Noviembre, pág. 298.)

**CUESTION II.** *La mujer que al hacérsele un requerimiento, en ausencia de su marido, para el pago de contribución al Estado que adeudaba, profiere palabras injuriosas y amenazas contra el comisionado de apremio, encargado de la práctica de aquella diligencia, ¿podrá invocar válidamente á su favor que obró en este caso con arrebató y obcecación?*—Aun cuando el Ministerio Fiscal apoyó este extremo del recurso en el acto de la vista, el Tribunal Supremo declaró no haber lugar á él: «Considerando que la Audiencia sentenciadora no ha incurrido tampoco en error de derecho ni cometido las infracciones legales que se le atribuyen por no estimar las circunstancias atenuantes que se alegan, porque el acto del agente comisionado, como legítimo que era, no reviste por ello carácter jurídico de provocación, á causa del obligado respeto de todos á la Ley y á quienes tienen la misión de ejecutarla,

y porque el estímulo, bajo el que se dice, sin justificación derivada de la sentencia, que obró la procesada, aunque hubiera existido, no sería de aquellos que por su natural influencia ocasionan arrebatos u obcecación impulsivos de una acción criminal, etc.» (Sentencia de 20 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 19 de Noviembre, páginas 326 y 327.)

**CUESTION III.** *La circunstancia atenuante de arrebatos y obcecación, ¿podrá fundarse en un hecho lícito y legal, por más que este impresión más ó menos el ánimo del agente?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que no puede estimarse como atenuante la circunstancia de arrebatos y obcecación que el recurrente supone que produjo en su ánimo el hecho de presentarse aquéllos en su casa para embargarle bienes, porque este hecho era perfectamente lícito y legal, que el Francisco Pérez estaba obligado á respetar, y las atenuantes de la naturaleza de la alegada nunca pueden fundarse en actos que deban ser acatados, cualquiera que sea la impresión que en el ánimo produzcan, etc.» (Sentencia de 11 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 23 Noviembre, páginas 339 y 340.)

**CUESTION IV.** *En el delito de infanticidio, previsto y penado en el art. 424 del Código, ¿cabe apreciar á favor de la madre la circunstancia atenuante de arrebatos y obcecación?*—Así lo estimó en cierto caso la Sala de lo criminal de la Audiencia de esta Corte. Mas interpuesto contra esta sentencia recurso de casación por infracción de ley por el Ministerio Fiscal, el Tribunal Supremo casó dicha sentencia por indebida apreciación de dicho elemento de atenuación: «Considerando que el proceder de Gumerinda Berrocal, al dar muerte á su hijo en el momento de nacer, no revela hecho ni dato alguno de que pueda derivarse la circunstancia atenuante de haber obrado por estímulos tan poderosos que la produjeran arrebatos y obcecación, puesto que habiendo la procesada efectuado su parto de una manera sigilosa y precavida, no cabe afirmar, como con error lo hace la Sala sentenciadora, que aquél fuera imprevisto y revistiera accidentes y condiciones determinantes de la existencia de la expresada circunstancia; Considerando que el propósito de la Gumerinda al cometer el delito de autos fué evidentemente ocultar su deshonra, motivo esencial que cualifica el infanticidio, según el art. 424 del Código penal; Considerando, por tanto, que el Tribunal sentenciador ha cometido el error de derecho y la infracción de ley que han servido de fundamento al recurso, etc.» (Sentencia de 14 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 23 de Noviembre, pág. 346.)

**CUESTION V.** *El que, al intentar embargarle bienes de su propiedad para el pago de unas costas, insulta é injuria á los agentes de la Autoridad encargados de aquella diligencia, ¿podrá alegar válidamente á su favor la circunstancia atenuante de arrebatos y obcecación?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que la obcecación y el arrebatos, para que sean causa de atenuación, es necesario que se hallen justificados por estímulos poderosos, que naturalmente produzcan ese estado



del ánimo, y no puede considerarse bastante á producirlo el hecho de intentar el embargo de bienes por mandato judicial para el pago de unas costas, que es del que se hace derivar esta circunstancia atenuante, etc.» (Sentencia de 16 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 5 de Enero de 1888, pág. 13.)

**CUESTION VI.** *La simple vista de un adversario ó enemigo, bastará para determinar la circunstancia atenuante de arrebato y obcecación en el homicidio que se perpetre en la persona de aquél?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que la profunda y mutua y antigua enemistad entre Alonso y Leyguarda, proveniente de cuenta de intereses en que ambos se consideraban perjudicados por mala fe respectiva, sin un hecho posterior y además y principalmente inmediato al suceso, que sirviera para excitar la pasión ó el sentimiento, al cual no equivale la simple vista del adversario, no constituye estímulo suficiente para producir naturalmente arrebato y obcecación de los que la ley y la moral señalan como motivos de atenuación de la responsabilidad, por afectar de ordinario al dominio á que el hombre está obligado sobre sus acciones, etc.» (Sentencia de 29 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 7 de Enero de 1888, páginas 32 y 33.)

**CUESTION VII.** *El empleado que por haber sido amonestado por su superior jerárquico por una falta que éste creyó había cometido en el desempeño de su cargo, le dirige una carta injuriosa, ¿podrá alegar válidamente á su favor, para atenuar la pena de este delito de desacato, que obró con obcecación y arrebato?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que el acto de amonestar severamente al Director de Comunicaciones de Puerto Rico, D. Ricardo Rey, á D. Francisco Galán, como superior jerárquico de éste, por faltas que aquél juzgó cometidas en el desempeño de las funciones de su cargo, es legítimo, como uacido de sus facultades y atribuciones y por la forma en que lo hizo, no pudiendo, por tanto, derivarse del expresado acto la circunstancia atenuante de arrebato y obcecación, según pretende el recurrente, cuando, por otra parte, el hecho de la redacción de la carta en que se consignan las frases injuriosas é insultos supone deliberación en el D. Francisco Galán, excluyente de la atenuante invocada en el recurso, y consiguientemente, al no apreciar el Tribunal á que la indicada circunstancia, no ha incurrido en el error de derecho que se le atribuye, ni infringido las disposiciones legales que se citan en el recurso, etc.» (Sentencia de 30 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 4 de Abril de 1888, pág. 70.)

**CUESTION VIII.** *El que hiere á un sujeto por haber pegado á una hermana suya una bofetada el día antes, ¿podrá invocar válidamente á su favor la circunstancia atenuante de arrebato y obcecación?*—No lo estimó así la Audiencia de lo criminal de Cangas de Onís, que hizo caso omiso del expresado elemento de atenuación. Mas interpuesto recurso de casación contra dicha sentencia por infracción del art. 9.º, núm. 7.º del Código, declaró el Tribunal Supremo haber lugar al recurso interpuesto: «Consi-

derando respecto al segundo motivo de casación alegado que, habiendo sido la causa impulsiva del delito el bofetón que el ofendido Jacinto Díaz dió el día anterior á su perpetración á la hermana del recurrente, dicho acto es motivo suficientemente poderoso para producir en el ánimo del procesado arrebató y obcecación, y que al no haber estimado la Sala sentenciadora la circunstancia 7.ª del art. 9.º del Código penal en su favor ha incurrido en el error de derecho que en el recurso se le atribuye é infringido dicha disposición legal, etc.» (Sentencia de 10 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 15 de Mayo, pág. 259.)

**CUESTION IX.** *¿Deberá estimarse la circunstancia atenuante de arrebató y obcecación á favor del guarda de una heredad que al sorprender en ella á un cazador furtivo, á quien había sorprendido ya y denunciado varias veces, le dispara su escopeta y le hiera?*—No lo estimó así la Audiencia de lo criminal de Manzanares, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo, por no haber apreciado en tal caso la susodicha circunstancia de atenuación: «Considerando, en cuanto al otro motivo, que al ver ese guarda invadida la finca, cuya custodia le estaba confiada, por un cazador que, burlando su vigilancia, se había introducido en ella furtivamente, tal acto, en una persona á quien había sorprendido y denunciado en otras varias ocasiones, tuvo que ser un poderoso estímulo, que naturalmente le arrebató y obcecó para obrar como lo hizo, atenuando el hecho y haciendo aplicable el núm. 7.º del art. 9.º del Código penal: Considerando, en su virtud, que al prescindir la Sala sentenciadora de esa circunstancia atenuante, al castigar el delito cometido por dicho guarda al herir gravemente de un disparo al indicado cazador, ha infringido el referido artículo é incurrido en el error de derecho que señala el núm. 5.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, etc.» (Sentencia de 3 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 5 de Junio, pág. 279.)

**CUESTION X.** *El acto de sujetar los brazos á un individuo que estaba riñendo con otro, si bien no puede considerarse como agresión violenta al sujetado, y por tanto no pueda legitimar el homicidio que éste realice en la persona del que lo sujeta, ¿será, sin embargo, bastante á determinar un estímulo poderoso de arrebató y obcecación?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa al casar la sentencia de la Sala de lo criminal de la Audiencia de Valladolid, que en el caso expuesto hizo caso omiso del susodicho elemento de atenuación: «Considerando que el acto de sujetar el Antolín los brazos al Mariano, por consecuencia de la disputa que aquél sostenía con Juan Arranz, hermano de éste, no era objeto de agresión alguna violenta de parte del mismo al Mariano, que le pusiera en la necesidad de defenderse, y que, por tanto, no cabe afirmar que obrase el recurrente en uso del legítimo derecho de defensa, y que la Sala sentenciadora, no estimando que concurriría en el hecho ninguna de las circunstancias eximentes mencionadas en el núm. 4.º del art. 8.º del Código penal, haya infringido esta disposición legal al incurrir en el error de derecho que por este concepto se le atribuye en el recurso: Considerando que el hecho de ser el procesado sujeto de los brazos por Antolín



Arranz, en ocasión que disputaba con Juan Arranz, fué indudablemente motivo poderoso que debió producir en su ánimo obcecación y arrebató, nacido del medio de fuerza con él empleado, que le colocaba en situación de indefensión si hubiera sido agredido por una tercera persona; y al no apreciar la Sala sentenciadora la circunstancia atenuante 7.ª del art. 9.º del Código penal ha infringido esta disposición legal, invocada también en el recurso, etc.» (Sentencia de 30 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 16 de Junio, pág. 296.)

**CUESTION XI.** *El hombre casado que mata por celos á una mujer con quien sostuviera relaciones ilícitas, ¿podrá invocar á su favor la circunstancia atenuante de arrebató y obcecación?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que los estímulos de arrebató y obcecación que atenúan la responsabilidad criminal en los delinquentes son los que se originan en sentimientos legítimos, y no aquellos que nacen de pasiones viciosas y censurables, como lo eran las relaciones ilícitas que el recurrente, no obstante de ser casado, había sostenido con su víctima, no teniendo tampoco aplicación por analogía los celos que estas pasiones puedan engendrar, etc.» (Sentencia de 12 de Julio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 10 de Septiembre, página 153.)

**CUESTION XII.** *El que hiere á una persona por el solo hecho de negarle ésta cierta cantidad que le reclama, ¿podrá invocar á su favor la circunstancia atenuante de haber obrado con arrebató y obcecación?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que el solo hecho de negar Prima Tedejo á su hermano la cantidad que éste decía adendarle no es estímulo poderoso para producir en su ánimo obcecación y arrebató que pueda y deba tenerse en consideración para atenuar la responsabilidad criminal en que por sus actos incurrió, etc.» (Sentencia de 16 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 31 de Diciembre, páginas 295 y 296.)

### Art. 9.º... 8.º

ES CIRCUNSTANCIA ATENUANTE CUALQUIERA OTRA DE IGUAL ENTIDAD Y ANÁLOGA Á LAS ANTERIORES.

**CUESTION.** *La devolución espontánea por los autores de un robo de los efectos sustraídos al perjudicado, ¿podrá estimarse como circunstancia atenuante análoga, según el núm. 8.º del art. 9.º del Código penal?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que aun cuando en la sentencia recurrida no se consigna fundamento de hecho ninguno para poder apreciar en el delito de robo perpetrado por Raimundo Suárez y Pedro Páiz la circunstancia atenuante de haber obrado por estímulos poderosos que les impulsaran á delinquir, siempre sería de estimar la de haber devuelto espontáneamente los efectos sustraídos al perjudicado, con cuya conducta repararon en gran parte el mal causado, siendo ésta una atenuante que cabe

dentro del núm. 8.º del art. 9.º del Código, etc.» (Sentencia de 14 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 9 de Enero de 1888, pág. 53.)

## CAPÍTULO IV

### De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal.

#### Art. 10... 1.º

ES CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE Ó ATENUANTE, SEGÚN LA NATURALEZA Y EFECTOS DEL DELITO, EL SER EL AGRAVIADO CÓNYUGE Ó ASCENDIENTE, DESCENDIENTE, HERMANO LEGÍTIMO, NATURAL Ó ADOPTIVO Ó AFIN EN LOS MISMOS GRADOS DEL OFENSOR.

**CUESTION.** *En el delito de suposición de parto cometido por una viuda con objeto de privar á una cuñada cuya de los bienes que poseyera su marido y que, según disposición testamentaria de un tío de éste, de quien procedían aquellos, debían pasar, en el caso de fallecer sin hijos, á la susodicha cuñada, ¿deberá estimarse el parentesco de la procesada con la perjudicada como circunstancia atenuante ó agravante?*—El Tribunal Supremo ha declarado que aun tratándose en este caso de un delito atentatorio en el fondo contra la propiedad, debe apreciarse el parentesco como circunstancia de agravación: «Considerando que la naturaleza especial del delito cometido por la Bonal y los efectos que había de producir en perjuicio de una hermana afín, sin consideración del inmediato parentesco que las ligaba, exige consignar esta circunstancia como agravante, con arreglo al núm. 1.º del art. 9.º (1) del Código penal, etc.» (Sentencia de 31 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 8 de Mayo, páginas 201 y 202.)

#### Art. 10... 2.º

##### CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DE ALEVOSÍA.

**CUESTION I.** *Entra un sujeto en una taberna donde se jugaba al monte, pide cinco duros, y como nadie le contestara, los toma de la banca y trata de salir con ellos; mas apercibido de esto uno de los jugadores, le sale al encuentro y le sujeta por el cuello, llevándolo hacia el mostrador, con ánimo de que voltara el dinero sustraído; y estando en la expresada situación, otro de los espectadores saca una pistola y á muy corta distancia le hace un disparo, causándole en la sien una herida de la que falleció al siguiente día: ¿deberá calificarse de alevosa esta muerte, aun cuando realmente el interfecto no pudo defenderse de la agresión de que fue objeto?*—De asesinato por alevosía calificó el hecho la Audiencia de Sevilla, cuya sen-

(1) Así dice la *Gaceta*, debiendo decir el a. 1.º.



tencia *casó* el Tribunal Supremo, por indebida aplicación en este caso del art. 10, núm. 2.º, y por tanto del 418 del Código penal: «Considerando que, estimados en su conjunto los precedentes del hecho procesal, la impresión que en Eduardo Molina produjo la manera extraña y violenta con que obró Manuel Mejías al penetrar en la habitación en que se jugaba, apoderándose de cinco duros; la rapidez con que todo ello ocurrió hasta el acto en que Manuel Herrera consiguió sujetar al Mejías para evitar su fuga, y el haber inmediatamente de esto disparado el recurrente el arma de fuego contra el indicado Mejías, bajo la influencia del temor que la presencia de éste le produjera, son fundamentos bastantes para que no deba apreciarse en el hecho la circunstancia cualificativa de alevosía, quedando reducido, por tanto, á un homicidio; Considerando, en su virtud, que habiéndose estimado en la sentencia recurrida la circunstancia cualificativa de alevosía, á que se contrae el primer fundamento en que se apoya el recurso, se ha infringido el art. 418 del Código penal é incurrido en el consiguiente error de derecho invocado en el recurso, etc.» (Sentencia de 22 de Octubre de 1887 publicada en la *Gaceta* de 17 de Noviembre, pág. 311.)

**CUESTION II.** *En la muerte violenta causada á una persona por medio de una caja contentiva de materias explosivas que al efecto le fué remitida por el ofensor, podrá alegar la inexistencia de la circunstancia cualificativa de alevosía, bajo el supuesto de que ésta exige que el agresor se encuentre en contacto más ó menos inmediato ó á presencia del agredido?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que, según el concepto de la alevosía tal cual se define en el núm. 2.º del art. 10 del Código penal, no sólo no es preciso para su existencia que el agresor se encuentre en contacto más ó menos inmediato ó á presencia del agredido, sino que, por el contrario, el alejamiento de aquél del lugar del crimen, cuando el empleo de determinados medios hace innecesaria dicha presencia, asegura más y de un modo absoluto la inmunidad de su persona contra la defensa que de otro modo pudiera hacer el ofendido, y que, esto supuesto, es indudable que el medio de que se valió D. Ricardo Peris para dar muerte á don Manuel Palomero tendía directa y especialmente á asegurarla sin riesgo absolutamente ninguno procedente de la defensa que pudiera hacer el ofendido, lo que, constituye la expresada circunstancia de alevosía, etc.» (Sentencia de 5 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 19 de Noviembre, pág. 316.)

**CUESTION III.** *Cuando se ha calificado un hecho como delito de asesinato por medio de incendio, podrá apreciar además como concurrente en la comisión del delito la circunstancia agravante genérica de alevosía?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que tampoco es de apreciar la circunstancia agravante de alevosía, porque su esencia jurídica se encuentra en el caso presente contenida en la circunstancia cualificativa de incendio, cuya índole especial la hace participar de su carácter propio, en cuanto es medio de ordinario encaminado á la seguridad del resultado perseguido, sin riesgo para el ejecutor del de-

lito, proveniente de defensa del ofendido, etc.» (Sentencia de 29 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 6 de Enero de 1888, páginas 31 y 32.)

**CUESTION IV.** *El que se estime á favor del autor de un delito contra las personas la circunstancia atenuante de arrebato y obcecación, ¿obstará á que se aprecie en contra del mismo la agravante de alevosía si, aunque sin buscarlo, empleó en la ejecución del delito un medio que la constituye?*—El Tribunal Supremo ha declarado una vez más la posible compatibilidad de una y otra circunstancias: «Considerando que la circunstancia 7.<sup>a</sup> del art. 9.<sup>o</sup> del Código penal, apreciada en la sentencia, no es incompatible absolutamente con la alevosía, acertadamente estimada también, porque el arrebato y la obcecación á que aquélla alude no excluye nunca la responsabilidad del culpable, y por tanto, el que éste busque ó aproveche ó emplee, sin buscarlos, medios, modos ó formas en la ejecución de un delito, con tendencia, cualquiera que sea por otra parte el estado de su ánimo y el móvil de su acción, de eludir el peligro proveniente del ofendido, en que pudiera ponerle la ejecución del delito cuando aspire á asegurarla, etc.» (Sentencia de 17 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 16 de Mayo, pág. 267.)

**CUESTION V.** *El que estando guardando una finca de la propiedad de su padre, al ver de noche subido á una higuera á un hombre que estaba cogiendo brevas, le apunta con la escopeta y le dispara un tiro, infiriéndole una lesión que le produce la muerte, ¿deberá ser calificado de autor del delito de asesinato, ó simplemente de homicidio?*—La Audiencia de lo criminal de Cartagena, aplicando la disposición del art. 10, núm. 2.<sup>o</sup> por la letra que mata, estimó lo primero. Mas el Tribunal Supremo, interpretándola por el espíritu que vivifica, declaró que no existía alevosía en el hecho expuesto. Véanse los notables fundamentos de su Sentencia: «Considerando que es condición esencial de la alevosía que califica de asesinato la muerte violenta de alguna persona que los hechos que la determinen, ya preparados, ó ya ejecutados sin anterior preparación, sean libre expresión y resultado de pensamiento y propósito del culpable de aprovechar para el éxito de su acción las ventajas que le ofrezca la situación en que en el momento del delito se halla, siquiera accidentalmente, respecto del ofendido; y que se encaminen con especial dirección á evitar al primero el riesgo personal en que racionalmente pueda temer que le pondrían los actos de defensa con que el último tratara de rechazar la agresión: Considerando que los términos en que se describe la alevosía en el núm. 2.<sup>o</sup> del art. 10 del Código penal implican este concepto, puesto que requieren que los medios, modos ó formas de ejecución en que consiste y por donde se revela tiendan directa y especialmente, es decir, como resultado consciente de determinación de la voluntad, á la seguridad del éxito intentado y á eludir á la vez probables ó siquiera temidas consecuencias de retorsión, por lo que no es aplicable al caso procesal, á causa de que el procesado, al disparar un arma contra la persona para él entonces desconocida que vió en el árbol sustrayendo fru-



tos que él guardaba, obró no tanto con el deseo y la intención de darle segura muerte sin riesgo propio, como por el de castigar, sin cuidarse del resultado natural de su acto, la acción ilícita que en perjuicio de su padre se realizaba á su propia vista por quien, cualquiera que fuese, debía temer alguna consecuencia por ejecutar sigilosamente un hecho punible: Considerando que la Audiencia sentenciadora ha cometido por tanto las infracciones alegadas en los motivos 1.ª y 2.ª del recurso del procesado, calificando de asesinato un hecho que por no aparecer ejecutado con alevosía debió serlo de homicidio, etc.» (Sentencia de 3 de Abril de 1888, publicada en las *Gacetas* de 27 y 28 de Julio, páginas 24 y 25.)

**CUESTION VI.** *El guarda de un término municipal que dando de orden del Juez en busca de un sujeto sobre quien recaían sospechas de ser autor de un hurto, y al avisarlo y ordenarle que se fuera con él, como no quisiera detenerse, le advierte que si da un paso más le enciende de un tiro, y como echase á correr le dispara su escopeta por la espalda, dejándole cadáver en el acto, será responsable de esta muerte, como autor del delito de asesinato por alevosía?*—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Baza, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por indebida apreciación en este caso de la expresada circunstancia *calificativa* del delito: «Considerando que caracterizándose la alevosía por los medios ó formas de ejecución que el culpable emplea, con tendencia directa á conseguir su mal propósito sin riesgo para él procedente de la defensa del ofendido, los términos en que se consigan los hechos en la sentencia reclamada hacen incompatible la existencia legal de esta circunstancia, en razón á que, según en la misma se declara probado, Juan Rodríguez no sólo apercibió reiteradamente á su contrario Sebastián Alifa, sino que le persiguió con insistencia en la fuga, que éste buscó como medio de salvación, y estando como estaba apercibido de la agresión y en actitud para defenderse, no es posible estimar que los medios empleados tendían directamente al logro de su propósito sin riesgo ni peligro alguno por la defensa que pudiera hacer su contrario: Considerando que en este concepto la Audiencia sentenciadora ha incurrido en error de derecho al apreciar la circunstancia de alevosía y calificar por ella de asesinato el delito cometido, infringiendo por indebida aplicación el art. 418 del Código penal, etc.» (Sentencia de 23 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 29 de Agosto, pág. 108.)

**CUESTION VII.** *Al que obra en defensa de un tercero, con el mayor número de los requisitos que exige la Ley para eximir de responsabilidad criminal, por muy rápida é inesperada que sea su acción de matar al agresor, ¿podrá calificarse nunca de autor de asesinato por alevosía?*—Contra la pretensión de la mujer del interfecto, acusadora privada y recurrente, ha resuelto el Tribunal Supremo la *negativa*: «Considerando que para que el hecho de matar á otro merezca la calificación de delito de asesinato es necesario que en su perpetración concurre alguna de las circunstancias enumeradas en el art. 418 del Código penal, y

para poder apreciar la de alevosía, en que el recurrente funda la infracción de dicho artículo, por no haber sido aplicado, era preciso que su autor hubiera empleado medios, modos ó formas en su ejecución que, sin riesgo para su persona que procediera de la víctima, tendiera á asegurarla intencionalmente: Considerando que José Portero, según demuestran los hechos procesales, sólo tenía el propósito de acudir á la defensa de su hijo, sin demostrar otra intención, y ni la de emplear los medios, modos ó formas que determinan la alevosía: Considerando que no pudo ser otro el propósito de José Portero que el de obrar en defensa de su cónyuge ó hijo, como lo demuestra el desconocer por completo la reyerta habida entre éstos, el Sebastián y su familia, hasta el momento en que fué avisado en su casa de los malos tratos de que eran objeto, con cuyo motivo se apoderó de un cuchillo, dirigiéndose precipitadamente al sitio del suceso, en que vió herida á su mujer, y á su hijo derribado en tierra, y sobre él el Sebastián, á quien se dirigió rápidamente, infiriéndole la lesión de que falleció: Considerando, por lo expuesto, que el hecho constituye el delito de homicidio, definido y penado en el art. 419 del Código, toda vez que el procesado dió muerte al Sebastián sin concurrir ninguna de las circunstancias enumeradas en el 418 del mismo, siendo de estimar en el hecho la concurrencia de dos de los tres requisitos que exige el núm. 5.º del art. 8.º para eximir de responsabilidad criminal, ó sea el de agresión ilegítima sufrida por su hijo, y el de no haber provocado el suceso, no siendo de estimar el tercero por no haber tenido necesidad racional del medio empleado para impedir ó repeler dicha agresión: Considerando que al considerarlo así acertadamente la Sala sentenciadora no ha incurrido en el error de derecho que se le atribuye, ni infringido los artículos de Código penal á que el recurso se refiere, etc.» (Sentencia de 13 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 26 de Septiembre, pág. 180.)

### Art. 10... 3.ª

COMISIÓN DEL DELITO MEDIANTE PRECIO, RECOMPENSA Ó PROMESA.

**CUESTION.** *La recompensa posterior pedida por el ejecutor material de un delito al instigador ó inductor del mismo, ¿será bastante á determinar la circunstancia agravante de haberse ejecutado aquél mediante precio, recompensa ó promesa?*—Así lo estimó la Sala de lo criminal de la Audiencia de Valladolid, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por indebida apreciación, en este caso, de la referida circunstancia de agravación: «Considerando que las circunstancias modificativas de la penalidad deben fundarse en hechos clara y expresamente probados, y cualquiera que sea el concepto moral que pueda formarse acerca del móvil de la participación de Catón en el delito, no se consigna en la sentencia recurrida afirmación ninguna que constituya la circunstancia agravante 3.ª del art. 10, porque la recompensa posterior pedida por Catón á Diéguez no significa necesariamen-



te que procediera de promesa, ni menos que á creencia recibiera alguna cantidad, cual fuera preciso para estimar dicha circunstancia, etc.» (Sentencia de 7 de Junio de 1888, publicada en las *Gacetas* de 24 y 25 de Septiembre, páginas 168, 169 y 170.)

### Art 10... 5.<sup>a</sup>

REALIZACIÓN DEL DELITO POR MEDIO DE LA IMPRENTA, LITOGRAFIA, FOTOGRAFIA Ó OTRO MEDIO ANÁLOGO QUE FACILITE LA PUBLICIDAD.

**CUESTION I.** *En el delito de escarnio á la Religión, precepto y penado en el art. 240 del Código, deberá apreciarse al efecto de aumentar la pena la circunstancia de haberse realizado por medio de la imprenta?*—En la Sentencia de 8 de Abril de 1877, citada en el *Suplemento 3.º* (pág. 90), resolviendo la cuestión en sentido negativo, hay que añadir otra posterior, confirmatoria en un todo de la anterior doctrina: «Considerando que en esta sentencia sólo debe resolverse la cuestión concerniente al segundo motivo del recurso, y sólo debe apreciarse si ha concurrido ó no en el hecho justiciable la circunstancia agravante 5.<sup>a</sup> del art. 10 del Código penal: Considerando que la publicidad, sin distinción de grados, es elemento integrante del delito que define el número 3.º del art. 240 del Código mencionado: Considerando que las circunstancias características de un acto punible no producen el efecto de aumentar la pena como agravantes: Considerando que por no haberlo estimado así el Tribunal sentenciador, ha incurrido en error de derecho, con infracción de lo dispuesto en el artículo 79 del Código vigente, etc.» (Sentencia de 3 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 16 de Noviembre, pág. 299.)

**CUESTION II.** *En un delito de injurias á la Autoridad cometido en un suelto de periódico, sin que su autor haya intervenido para ello en debate alguno político mantenido por la prensa (V. *Suplemento 3.º*, Cuestión II, pág. 90), deberá apreciarse como circunstancia agravante la de haberse cometido el delito por medio de la imprenta?*—El Tribunal Supremo, en un caso de injurias inferidas á un Juez municipal en un suelto de periódico, ha resuelto la afirmativa: «Considerando que en la sentencia reclamada se aprecia con recto criterio, y como agravante, la circunstancia 6.<sup>a</sup>, artículo 10 del expresado Código (1), porque la publicidad por medio de la imprenta extiende y gradúa más la difamación de la persona agraviada: Considerando que el empleo de este medio de publicidad no modifica las disposiciones sustantivas de la ley penal, aplicable á éste y á todos los demás medios de delinquir, conforme al art. 16 del Real decreto de 11 de Octubre de 1886, según el cual no existen delitos de imprenta, etc.» (Sentencia de 16 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 10 de Mayo, páginas 223 y 224.)

**CUESTION III.** *En la calumnia inferida por medio de la*

(1) Núm. 1.º del art. 10 del Código de la Península.

**imprensa, deberá estimarse esta circunstancia como agravación del delito?**—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que propagada la calumnia por medio de la *imprensa*, y llevado el descrédito de los funcionarios á quienes se dirigía á todas partes adonde ha ido el periódico en que se consignó, los efectos del delito realizado en esta forma constituyen por lo mismo la circunstancia agravante 6.ª del art. 10 del Código penal antedicho (1), que no es en modo alguno inherente al delito, cual se supone en el recurso, puesto que la misma imputación pudo dirigirse en otras formas de menor publicidad, etc.» (Sentencia de 13 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 3 de Agosto, páginas 35 y 36.)

**CUESTIÓN IV. En el delito de injurias graves hechas por escrito y con publicidad (párrafo primero del art. 473), ¿cabe apreciar como circunstancia agravante la de haberse cometido por medio de la imprenta?**—Así lo estimó la Sala de lo criminal de la Audiencia que conoció del hecho, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por indebida apreciación en este caso del expresado elemento agravatorio de la responsabilidad: «Considerando que siendo elemento integrante del delito penado, según el art. 477 del Código penal de Cuba (2), la publicidad de la injuria, aquella Audiencia ha cometido la infracción, en último término señalada, al estimar concurrente en él, como circunstancia agravante, la 6.ª de las numeradas en el art. 10 (3), ó sea la de realizarse por medio de la imprenta; porque en esto precisamente consistió la publicidad, á la que no es posible atribuir doble valor jurídico sin infracción del principio consignado en el artículo 77 (4) del mismo Código, que le niega á las circunstancias agravantes constitutivas del delito mismo á que afecten, etc.» (Sentencia de 8 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 23 de Agosto, páginas 83 y 84.)

Igual doctrina se consigna en otra Sentencia posterior: «Considerando que apreciándose por ese mismo Tribunal comprendida la injuria de que se trata, para los efectos de la penalidad, en el art. 473 del Código, que se refiere á las hechas por escrito y con publicidad, sin distinción de casos, el que se verificara por medio de la imprenta periódica no da mayor gravedad al delito, porque siendo una forma de publicidad no exceptuada en el artículo citado, no puede apreciarse por separado, siendo como es parte constitutiva del mismo, y al separarse la Sala sentenciadora de este criterio, sostenida en otras decisiones por este Supremo Tribunal, ha incurrido en esta parte en el error de derecho que señala el núm. 5.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, etc.» (Sentencia de 17 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 25 de Agosto, páginas 96 y 97.)

(1) Art. 10, núm. 6.º del Código penal de Cuba y Puerto Rico; concordante con el número 5.º del art. 10 del Código de la Península.

(2) Art. 173 del Código de la Península.

(3) Art. 10, núm. 6.º de id. id.

(4) Art. 79 de id. id.



## Art. 10.. 7.ª

## CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DE PREMEDITACIÓN CONOCIDA.

**CUESTION I.** *La existencia de un móvil apasionado excluye la circunstancia agravante de premeditación, cuando se demuestra que para preparar el crimen en todos sus detalles y pormenores necesitó el delincuente un tiempo extraordinario, y que á su consumación precedió, tres ó cuatro meses antes, el frustramiento de idéntico hecho punible dirigido contra la misma persona?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que la premeditación significa una meditación reflexiva sobre el crimen que se intenta cometer, que no excluye la existencia de un móvil apasionado cualquiera determinante de la voluntad del agente, y que tanto por la naturaleza del medio empleado por D. Ricardo Peris para ejecutar el delito de asesinato en la persona de D. Manuel Palomero, como por la relación directa que existe evidentemente entre el anterior delito frustrado y el consumado, se comprende, sin duda de ningún género, que no era posible perpetrar ninguno de dichos delitos en un momento de arrebato excluyente de la premeditación, por ser preciso tiempo realmente extraordinario para prepararlo en todos sus detalles, aun descartado el que D. Ricardo Peris empleara en resolverse, y porque la consumación del segundo después del primer frustramiento revela la tenaz persistencia del delincuente en conseguir la muerte de Palomero, lo que constituye la premeditación conocida del Código, que cualifica el homicidio ó agrava genéricamente la pena cuando hay otra circunstancia que la cualifique, como en el caso del presente recurso, etc.» (Sentencia de 5 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 19 de Noviembre, páginas 314 á 316.)

**CUESTION II.** *¿Es incompatible con el delito de robo ó inherente al mismo la circunstancia agravante de premeditación conocida?*—El Tribunal Supremo ha resuelto una vez más la negativa: «Considerando que si la perpetración de un delito se concibe, concierta y prepara reflexivamente con un afán de anticipación, excogitando los medios adecuados al criminal propósito, buscando ocasión propicia, aplazando la ejecución para evitar el peligro, procurando con astucia y artificiosos contratos lograr la confianza de la persona damnificada, disponiendo de una llave falsa y pretextando enfermedad grave, á fin de conseguir por este medio la sorpresa, existe con evidencia la circunstancia agravante de premeditación conocida: Considerando que así obraron los cuatro procesados; que la circunstancia de premeditación no es incompatible con el delito de robo ni inherente al mismo, pues no debe ser confundida con el mero propósito de cometerlo ó el concierto de dos ó más individuos para efectuarlo; y que al estimarlo así la Sala sentenciadora no ha infringido por indebida aplicación el art. 10 del Código penal, con relación á la circunstancia mencionada, etc.» (Sentencia de 12 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 4 de Enero de 1888, pág. 10.)

**CUESTION III.** *La circunstancia de premeditación conocida, ¿es compatible con la de alevosía, ó deberá estimarse que, cuando concurre ésta, aquélla está embebida y es inherente á la misma?*—El Tribunal Supremo ha resuelto que son perfectamente compatibles una y otra circunstancia, y debe por lo tanto producir cada una su efecto: «Considerando que la premeditación con que obró José Feliciano por razón del tiempo transcurrido desde que resolvió dar muerte á Catalino de Paula hasta que consumó su persistente intento es perfectamente compatible con la de alevosía, y no puede ni debe confundirse con ella, porque la idea preconcebida de buscar á una persona para inferirle un daño cualquiera ó matarla no implica la necesidad de hacerlo de modo y manera que se imposibilite la defensa del agredido, que es como obró José Feliciano, etc.» (Sentencia de 25 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 1.º de Octubre, páginas 209 y 210.)

### Art. 10... 8.ª

#### CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DE EMPLEO DE ASTUCIA, FRAUDE Ó DISFRAZ.

**CUESTION I.** *El que concurre á la perpetración de un delito con un pañuelo puesto en la cabeza en la forma que lo llevan las mujeres, para no ser conocido, ¿será responsable del delito con la circunstancia agravante de empleo de disfraz?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que existe la circunstancia 8.ª del precitado art. 10, y es de estimar el empleo de disfraz siempre que el criminal usa de cualquier artificio para desfigurar los rasgos característicos ó apariencia verdadera de su persona; que así obró Nicanor Cuesta para no ser conocido, y que, por consiguiente, ha sido respecto á este procesado apreciada con arreglo á derecho la referida circunstancia 8.ª, etc.» (Sentencia de 12 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 4 de Enero de 1888, pág. 10.)

**CUESTION II.** *Si el procesado, sin motivo alguno, disparó con bala y perdigones contra un sujeto á quien sacó de su casa con el engañoso pretexto de que le acompañara á vigilar la suya, ¿deberá apreciarse en este delito la circunstancia agravante de empleo de astucia?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que, esto supuesto, la Audiencia de Zaragoza no ha cometido infracción ninguna al calificar y penar como homicidio frustrado el delito que perpetró Francisco Maizal; porque habiendo podido bastar el disparo que hizo contra Juan Carreras Benedi para matarle, si no lo logró, fué por causas independientes de su voluntad; ni tampoco al apreciar la circunstancia agravante 8.ª del art. 10, porque acto de verdadera astucia fué el empleado por el penado al sacar de su casa á los Carreras con el pretexto de que le acompañaran para vigilar su casa, etc.» (Sentencia de 10 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 12 de Abril de 1888, pág. 98.)



## Art. 10... 9.ª

## CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DE ABUSO DE SUPERIORIDAD.

**CUESTION I.** *La circunstancia de hallarse el ofendido encorvado á causa de un antiguo padecimiento reumático y de no poder apenas correr, encontrándose además inerme, ¿será bastante á determinar la existencia de la circunstancia agravante de abuso de superioridad, aun cuando sea uno solo quien acometa y hiera mortalmente en tal situación?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que demostrado, como se halla, por la declaración de hechos probados que se consignan en la sentencia recurrida que Domingo Muñoz, á causa de su antiguo padecimiento reumático, estaba encorvado, sin que apenas pudiera correr, y que se encontraba inerme cuando el procesado, armado de un cuchillo, le perseguía y acometió, es evidente que las condiciones físicas de aquél, y la falta, por otra parte, de recurso alguno que oponer á la agresión, le colocaron en grave dificultad, si no imposibilidad de la defensa que exigía la desproporción de los medios de que se valió el recurrente, y por tanto tiene aplicación al delito la circunstancia agravante 9.ª del artículo 10 del Código penal, según ha apreciado el Tribunal sentenciador, y consiguientemente no ha incurrido el mismo en el error de derecho ni cometido la infracción que se le atribuye, etc.» (Sentencia de 19 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 17 de Noviembre, páginas 309 y 310.)

**CUESTION II.** *El que en estado de embriaguez se dirige arma en mano á herir á un sujeto que iba de paseo por una carretera con varios amigos, y huyendo el amenazado le persigue, y por haber éste tropezado, le alcanza y le clava el arma en la espalda, produciéndose la muerte, ¿será responsable de este homicidio con la circunstancia agravante de abuso de superioridad?*—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Huelva. Mas interpuesto recurso de casación por la defensa del reo, citando como infringido el artículo 10, núm. 9.ª del Código, declaró el Tribunal Supremo haber lugar á él: «Considerando que la sentencia reclamada no expresa cual debiera el fundamento jurídico de la apreciación de la circunstancia agravante que en el auto aclaratorio se ha estimado concurrente en el delito, la cual no se manifiesta en la relación consignada en el resultando primero, porque del mero hecho de acometer con arma blanca un hombre ebrio á otro á quien su actitud clara desde luego advierte de su propósito ante varios que le acompañan, no se deduce necesariamente abuso de superioridad, cuando, como en el caso presente, no consta que el agresor aguardara el paso de su víctima para herirle con ventaja, sin que supiera que habría de encontrarle ni si se hallaba también armado y en situación de afrontar la acometida, etc.» (Sentencia de 29 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 7 de Enero de 1888, páginas 32 y 33.)

**CUESTION III.** *Cuando dos acometen á uno por mero acci-*

**dente, ó sea á consecución de una riña sobrevenida de improviso, deberá apreciarse en el hecho la circunstancia agravante de abuso de superioridad?**—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa al casar una sentencia de la Audiencia de Zaragoza que en el caso expuesto estimó la concurrencia de la expresada circunstancia de agravación: «Considerando que la circunstancia de abuso de superioridad implica el empleo consciente de algún medio que tienda á inutilizar ó hacer más difícil la defensa del agredido, y que esto no puede deducirse racionalmente del mero accidente de ser dos contra uno los agresores, cuando de los hechos probados aparece que no obran así con la intención convenida de paralizar la resistencia de su adversario, y si más bien por el impulso aislado que les mueve á atentar contra su persona: Considerando que, esto supuesto, la Audiencia de Zaragoza ha incurrido en error de derecho al apreciar dicha circunstancia en el caso del presente recurso, por no resultar que Nicolás Garvi y su hijo, aun cuando acometieron simultáneamente á Juan Abadía, lo hicieron para consumar de este modo más fácilmente su atentado, ó sea con menos riesgo para sus personas, etc.» (Sentencia de 7 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 8 de Mayo, páginas 207 y 208.)

**CUESTION IV. En el delito de robo, con motivo ó ocasión del cual resulta homicidio, ¿cabe aplicar la circunstancia agravante de abuso de superioridad?**—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que se funda el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal en que al determinar la responsabilidad en que han incurrido los procesados Alfonso Tamaño y Pío Arozarena como autores de robo del cual resultó homicidio, no se ha tenido presente que mediaron en el mismo las circunstancias agravantes de abuso de superioridad, el ser mujer la ofendida y el cometerse el hecho en su morada, y aunque no cabe dudar que debe estimarse esta última, porque ella no es inherente al crimen, y á que pudo en toda su integridad cometerse en distinto sitio, y porque la víctima no había de provocar á los que la robaron y mataron, respecto á las dos restantes, al abuso de superioridad y al respeto que el sexo de aquella merecía, no tienen igual consideración legal, porque la primera en el caso actual debe comprenderse entre las violencias que determinan la especialidad del delito, y la segunda, atendida la índole de éste, hijo de la codicia, no puede tampoco señalar diferencia, ya sea varón ó hembra la persona perjudicada, etc.» (Sentencia de 12 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 19 de Junio, páginas 305 y 306.)

Sin embargo, en otra Sentencia, dictada ocho días después de la anterior, el propio Tribunal Supremo ha reconocido la existencia de la circunstancia agravante de *abuso de superioridad* en el mismo delito de robo con homicidio, fundada en haber sido dos los malhechores que robaron y mataron á un indefenso anciano: «Considerando que no procede la casación de la sentencia tratándose del delito complejo de robo y homicidio, y habiendo concurrido en la comisión del mismo las circunstancias agravantes de



alevosía por los medios de ejecución que emplearon; de premeditación conocida por los actos anteriores preparatorios del delito; de *abuso de superioridad*, porque fueron dos los que acometieron y asesinaron al indefenso anciano José Tur, etc.» (Sentencia de 19 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 18 de Julio, pág. 3.)—Nosotros entendemos que esta última es la buena doctrina: pues siendo el delito de *robo con homicidio* un delito atentatorio á la vez contra la *propiedad* y contra las *personas*, así como debe apreciarse, cuando concurre, la circunstancia agravante de *alevosía* que es exclusiva de los delitos contra las *personas*, según la definición del art. 10, núm. 2.º del Código, y el Tribunal Supremo no ha podido menos de declarar su compatibilidad con el expresado delito, no vemos por qué ha de declararse incompatible con el mismo la de abuso de superioridad, cuando realmente concurre en la ejecución del delito.

**CUESTION V.** *Aun cuando sea uno solo el agresor, si acrió con arma blanca un golpe al ofendido, que le produjo la muerte, cuando éste estaba luchando con dos personas, de quienes tenía que defenderse, deberá apreciarse en contra de aquél la circunstancia agravante de abuso de superioridad?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que, aun cuando el haberse valido de un arma blanca el recurrente para causar á Julián Royuela la lesión que lo llevó al sepulcro no constituye por sí sólo un abuso de superioridad que deba apreciarse como circunstancia agravante, porque el instrumento en este caso fué sólo el medio de realizar el delito, que sin él á otro apropiado no habría podido llevarse á cabo, por lo que en nada lo modifica ni acrece su gravedad, como la acrece y aumenta á modo cierto el haberlo ejecutado en ocasión de hallarse aquél luchando con dos personas, de quien tenía que defenderse y que le imposibilitaron evitar el golpe que el recurrente le dirigió, abusando evidentemente con ello de la superioridad que esta circunstancia le daba sobre su adversario, por lo que el aprecio que de ella se hace en la sentencia recurrida, aplicando el núm. 9.º del art. 10 del Código penal, no envuelve, cual con equivocación notoria se supone, la infracción de ese artículo ni el error de derecho que señala el número 5.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, etc.» (Sentencia de 24 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 29 de Agosto, páginas 110 y 111.)

**CUESTION VI.** *El que acomete y hiere con una vara de hierro á un sujeto indefenso á quien otro derribara al suelo y según maltratando, ¿será responsable del delito con la circunstancia agravante de abuso de superioridad?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que manifiesta é indudablemente abusa de superioridad el que, armado con instrumento contundente de hierro, acomete á una persona inermes y derribada al suelo por otra que persevera en los actos de agresión, etc.» (Sentencia de 6 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 16 de Enero de 1889, pág. 28.)

Art. 10... 10.<sup>8</sup>

## CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DE ABUSO DE CONFIANZA.

**CUESTION I.** *El conductor de un carruaje de los que se colocan en las estaciones de ferrocarril para el servicio de los viajeros, que al conducir el equipaje de uno de éstos le sustrae algún efecto, será responsable del delito de hurto con la circunstancia agravante de abuso de confianza?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que al apreciarse como cierto en el primer considerando de la sentencia recurrida el hecho expuesto en el segundo resultando de la misma, de que los conductores del ómnibus que D. Indalecio Hernández al llegar de Valladolid tomó en la estación del ferrocarril del Norte para que á él y su equipaje lo llevaran á su casa, le habían extraído de unas alforjas dos cajones tasados en 12 pesetas, preciso es, según jurisprudencia de este Supremo Tribunal, aceptar ese hecho como probado, el cual, aunque no lo declarara expresamente, aceptó luego el Tribunal sentenciador, que al calificarlo como hurto no ha infringido el núm. 4.º del art. 531 del Código penal, así como tampoco el número 10 del art. 10 del mismo Código al apreciar la concurrencia en el delito de la circunstancia agravante de abuso de confianza, puesto que al hacer entrega de su equipaje á los dueños ó encargados de esos carruajes, dedicados exclusivamente á la conducción de las personas y efectos que se traen de viaje, se hace contando con su honradez y exactitud, á la que los recurrentes han faltado, defraudando las esperanzas del que los aceptó con una confianza legítima de que han abusado, agravando con ello la responsabilidad de los autores del delito, de que la Sala ha hecho por lo mismo la debida apreciación, etc.» (Sentencia de 25 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 17 de Noviembre, páginas 311 y 312.)

**CUESTION II.** *El mozo de carros de mudanza que al verificar el traslado de muebles de una casa sustrae uno de éstos, será responsable del delito cometido, con la circunstancia agravante de abuso de confianza?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que al apreciar también el Tribunal sentenciador la concurrencia en el hecho de la circunstancia agravante 10.<sup>8</sup> del art. 10 del Código penal no ha infringido ese artículo, puesto que al encargar la mudanza de los muebles de una casa se hace contando con la honradez y exactitud de esos servidores del público, á la que ha faltado el recurrente al apoderarse del reloj, defraudando la esperanza del que lo aceptó con una confianza de que ha abusado, agravando con ello el delito que cometió, de que la Sala ha hecho la debida apreciación, etc.» (Sentencia de 19 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 5 de Mayo, pág. 181.)

**CUESTION III.** *El sepulturero de una iglesia parroquial que habiéndose quedado oculto en la escalera que desde la iglesia conduce á la torre, y saliendo á la misma iglesia siendo ya de noche y*



*estando cerradas las puertas, violenta los cepillos de las limosnas y se apodera de su contenido, resultando además que días antes sustrajo los pendientes de una Virgen de la propia iglesia, sin que consten los medios de que se valió para cometer esta sustracción, será responsable de estos dos delitos, de robo el uno y de hurto el otro, con la circunstancia agravante de abuso de confianza?*—Así lo estimó la Sala de lo criminal de la Audiencia de esta Corte, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por indebida apreciación, en este caso, de la referida circunstancia de agravación: «Considerando que el primer motivo de casación alegado en el recurso impugna la apreciación de la circunstancia agravante de abuso de confianza, estimada por la Sala sentenciadora como concurrente en cada uno de los delitos de hurto y robo de que es autor el recurrente: Considerando que al formar este juicio el Tribunal á que ha incurrido en error de derecho, porque respecto al hurto no consta en la sentencia los medios de que se valiera el procesado para cometerlo, y en cuanto al de robo no revelan aquel abuso los accidentes de su perpetración, pues cualquiera hubiera podido ejecutarlo en la misma forma y por los mismos medios: Considerando que la mera circunstancia de ejercer Luis Matallana el cargo de sepulturero en la parroquia de Chamberí no demuestra que le dispensaran confianza los encargados de la custodia y vigilancia de aquella iglesia, ni que el reo abusara de este favorable concepto para delinquir, etc.» (Sentencia de 4 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 6 de Septiembre, página 125.)

### Art. 10... 11.<sup>a</sup>

CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DE PREVALERSE EL CULPABLE DEL CARÁCTER PÚBLICO QUE TIENE.

**CUESTION I.** *El agente de orden público que, hallándose vestido de uniforme en una taberna, y puesto de acuerdo con el dueño, pretextando que un forastero que allí había adeudaba una cantidad por consumo hecho en dicho establecimiento, le compele á su abono, y oponiéndose el enaguado, lo derriba al suelo, y mientras le sujeta el tabernero le sustrae del pecho un pañuelo contenido de una cantidad de dinero, será responsable de este delito de robo con violencia en la persona, con la circunstancia agravante de haberse prevalido para cometerlo del carácter público que tenía?*—Así lo estimó la Audiencia de Santander, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por indebida apreciación, en este caso, de la referida circunstancia de agravación: «Considerando que la circunstancia que, según el núm. 11 del art. 10 del Código penal, agrava la responsabilidad criminal, y consiste en el hecho de prevalerse el culpable del carácter público que tenga, existe cuando este carácter se pone al servicio de la acción punible y se utiliza para lograr su más fácil ó más segura ejecución: Considerando que si bien el recurrente, concertado con los otros reos, trató por medios de seducción, y hasta por injustas exigencias, de obtener de

Niella alguna cantidad no debida, al ejecutar, con posterioridad á estos ilícitos intentos, el hecho constitutivo del delito de robo, por que con aquéllos ha sido penado, derribando al suelo al perjudicado, para apoderarse así, por la fuerza y merced á su vencimiento, del pañuelo en que guardaba el dinero, no utilizó para facilitar este acto ni su éxito el carácter de agente de la autoridad de que se hallaba revestido, ni esta cualidad contribuyó en manera alguna á proporcionarle ventaja que sin ella le hubiera faltado; y considerando, por tanto, que la Audiencia sentenciadora, al apreciar concurrente en el delito la expresada circunstancia agravante, ha cometido el error de derecho y las infracciones legales que se invocan, etc.» (Sentencia de 10 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 3 de Mayo, páginas 157 y 158.)

**CUESTION II.** *El cartero de una oficina de Correos que, concertado con otros sujetos para llevar á cabo la sustracción de valores declarados conducidos en un tren, aprovechando para realizarla el abandono en que quedaba ordinariamente la cartera en que dichos valores eran conducidos, por la mala costumbre del ambulante de meterse por las dependencias de la estación hasta la señal de aviso de la salida del tren; y valido de la facilidad que para el acceso al despacho de certificados y de los expresados valores tenía como tal cartero, da previo aviso á los ejecutores materiales del hecho de la expedición en que había de tener lugar la salida de valores de alguna importancia, ¿será responsable de la sustracción que de éstos se realice, con la circunstancia agravante de haberse prevalido del carácter público que tenía?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que apareciendo evidente que Vidosa, por su cualidad oficial de cartero, y con manifiesto abuso del conocimiento que su intervención en alguna parte del servicio le ofrecía, de modo que á otro desprovisto de tal carácter no le hubiera sido tan fácil conocer los actos que realizara la oficina de Correos, aprovechó esa ventajosa situación y consiguientemente aquella cualidad para la realización del delito, la Audiencia sentenciadora ha procedido acertadamente al estimar agravada la responsabilidad del procesado recurrente por el hecho de haberse prevalido de su carácter público, etc.» (Sentencia de 2 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 12 de Mayo, páginas 241 y 242.)

**CUESTION III.** *En las estafas u otros delitos que por razón de sus cargos cometen los agentes matriculados de negocios, ¿deberá estimarse la circunstancia agravante de haberse prevalido los culpables del carácter público que como tales agentes matriculados tienen?*—Así lo estimó la Sala de lo criminal de la Audiencia de esta Corte, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por indebida apreciación de la referida circunstancia aumentativa de responsabilidad: «Considerando que las funciones que ejercen los agentes de negocios no son, por su índole y naturaleza, de carácter público, por limitarse á representar á los particulares en los asuntos meramente privados que les encomiendan, previo el correspondiente poder, y que en tal concepto no ha debido la Sala sentenciadora estimar en perjuicio de los procesados la cir-



circunstancia agravante 11.<sup>ª</sup> del art. 10 del Código penal, ó sea la de haberse prevalido del carácter público de que estaban investidos como tales agentes, habiendo incurrido en el error de derecho que por esta razón se le atribuye en el recurso, etc.» (Sentencia de 8 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 19 de Junio, páginas 304 y 305.)

**CUESTION IV.** *El agente de la Autoridad que al intervenir como tal para poner coto á una disputa, es insultado por uno de los que la sostienen, por lo que desenvainando el sable infiere con él una lesión menos grave al que lo insultó, ¿será responsable de este hecho con la circunstancia agravante de haberse prevalido del carácter público que tenía?*—Así lo estimó la Audiencia de la criminal de Badajoz, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por indebida aplicación, en este caso, de la referida circunstancia de agravación: «Considerando, en cuanto al primer motivo de casación alegado, que resultando de los hechos declarados probados en la sentencia recurrida que el procesado, acalorado con las palabras que le dirigió en sentido provocativo José Rodríguez al tratar de evitar la disputa suscitada entre él y Narciso Palacios, cumpliendo su deber como guardia municipal, desenvainó el sable que llevaba, dándole con él un golpe en la cabeza, cuyo acto pudo ejecutar del mismo modo aun no hallándose revestido del cargo que desempeñaba, y que la circunstancia 11 del art. 10 supone el empleo de influencia debida al prestigio que pueda dar al actor el carácter de empleado público de que se halla investido, lo que no ha tenido lugar en el presente caso; Considerando que al no estimarlo así la Sala sentenciadora ha incurrido en el error de derecho que se le atribuye, é infringido los artículos del Código penal á que el recurso se refiere, etc.» (Sentencia de 10 de Julio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 9 de Septiembre, páginas 149 y 150.)

#### Art. 10... 15.<sup>ª</sup>

CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DE HABERSE EJECUTADO EL DELITO DE NOCHE, Ó EN DESPOBLADO, Ó EN DESPOBLADO Y CUADRILLA.

**CUESTION I.** *Aun cuando el art. 10, núm. 15 del Código deja al criterio de los Tribunales la apreciación, según la naturaleza y efectos del delito, de las circunstancias agravantes de nocturnidad y despoblado, ¿procederá la casación de la sentencia cuando en la determinación de aquel juicio se ha procedido sin sujeción á las reglas de la crítica racional y por conjeturas incongruentes con la resultancia de los hechos?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa, en recurso interpuesto por el Fiscal contra cierta sentencia del Tribunal de lo criminal de Guadalajara, que dejó de aplicar la pena de muerte en un delito de robo con homicidio, desestimando la circunstancia agravante de la noche, que de hecho concurrió, por entender, fundado en conjeturas inverosímiles, que los procesados no se aprovecharon de ella *expresae*: «Considerando que el único motivo de casación alegado por el Minis-

terio Fiscal establece la cuestión de si ha incurrido en error de derecho el Tribunal sentenciador al desestimar la circunstancia agravante de nocturnidad, ó la de haberse perpetrado el delito en despoblado, contra lo expuesto por la acción pública en el escrito de conclusiones: Considerando que si bien el Código penal somete al criterio de los Tribunales, según la naturaleza y accidentes del acto justiciable, la apreciación de aquellas circunstancias, no es conforme al derecho la determinación de este juicio cuando se procede arbitrariamente, sin sujeción á las reglas de crítica racional y por medio de conjeturas incongruentes con la resultancia de las actuaciones procesales: Considerando que así se ha procedido al dictar la sentencia reclamada, porque en ella se supone, sin dato alguno conocido, que los reos no pudieron presentir el tránsito nocturno de José y Justo Horcajo por el punto donde fueron sorprendidos y robados; porque en ella se desconoce que los malhechores estaban en acecho, y obraron favorecidos por la oscuridad de la noche y la soledad del lugar como verdaderos saltadores, y porque en ella no se estima que los accidentes del tiempo y sitio fueron utilizados con ventaja para sorprender, robar y separar del camino á Justo y José Horcajo, causando con una faca trece lesiones al primero y asesinando al segundo: Considerando que los procesados obraron intencionadamente, de noche y en despoblado, porque de noche se apostaron en el camino; siguieron á los Horcajo desde las inmediaciones de la población, escogieron para detenerlos ó internarlos en un olivar el punto llamado de la Presquilla y huyeron al arrojar una piedra Justo Horcajo, por creer que acudían personas extrañas al suceso en auxilio de aquellos desgraciados: Considerando, por consiguiente, que el Tribunal á quo ha incurrido en notorio error de derecho y ha infringido el art. 10 del mencionado Código, por no haber apreciado como concurrente la 15.ª circunstancia de agravación, y la regla 1.ª del art. 81, por no haber impuesto la pena mayor de las señaladas en el núm. 1.º del artículo 516, etc.» (Sentencia de 26 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 5 de Enero de 1888, páginas 24 y 25.)

**CUESTION II.** *En un delito de homicidio causado en riña tumultuaria, ¿cabe apreciar la circunstancia agravante de haberse ejecutado de noche?*—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Manzanares, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por indebida aplicación, en este caso, del art. 10, núm. 15 del Código: «Considerando que si bien el hecho procesal tuvo lugar de noche, esta circunstancia no fué elegida ni procurada por los culpables á sus fines, sino puramente accidental, y por consiguiente, no cabe apreciarla como de influencia para determinar la responsabilidad penal del recurrente Juan López; y al estimarlo en contrario sentido el Tribunal á quo, ha incurrido en el error de derecho ó infringido las disposiciones legales que con fundamento se alegan en el recurso, etc.» (Sentencia de 25 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 6 de Mayo, pág. 182.)

**CUESTION III.** *Aun cuando no haya el culpable buscado expreso la noche, ¿basta para apreciarla como circunstancia*



*agravante que se haya aprovechado de ella para perpetrar así más fácilmente el delito y lograr, á ser posible, su impunidad?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa de nuevo sobre este importante extremo: «Considerando que es de apreciarse la circunstancia 15 del art. 10 del Código penal cuando el culpable elige la noche ó se aprovecha de ella para cometer más fácilmente el delito ó para conseguir su impunidad; y como el recurrente Braulio Sanz Solana y otro desconocido utilizaron la del 13 de Mayo del año pasado para, sin inconveniente ni contrariedad del momento, asaltar al Presbítero D. Pablo Anaya, amenazarlo con puñales, obligarlo á ir á su casa, y ya en ésta robarle varias y distintas alhajas y cierta cantidad de dinero, por modo indiscutible aparece que al estimarse tal hecho, y al graduar la responsabilidad de los que lo ejecutaron, debe tenerse en cuenta ese motivo de agravación, etc.» (Sentencia de 14 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 4 de Agosto, pág. 40.)

**CUESTION IV.** *En el delito de estupro, ¿deberá apreciarse como agravante la circunstancia de haberse ejecutado de noche?*—Así lo estimó cierta Audiencia, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por indebida aplicación de la expresada circunstancia agravante: «Considerando que si por esto, en cuanto toca á la calificación del delito, el Tribunal sentenciador no ha cometido error de derecho ni infracción legal, ha incurrido en los que sirven de apoyo al motivo segundo, al estimar concurrente como agravante la circunstancia de haberse ejecutado de noche, inadecuada en este concepto generalmente á la naturaleza del delito mismo á que se aplica, por constituir un accidente indiferente como significación de malicia, y no indicador por sí de la aspiración á la impunidad, ni de más acentuada tendencia á facilitarle que la propia de la índole especial del hecho mismo, etc.» (Sentencia de 2 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 1.º de Diciembre, páginas 261 y 262.)

**CUESTION V.** *Para que se estime el despoblado como circunstancia agravante, ¿será menester que se haya buscado de propósito?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando, en cuanto al segundo motivo admitido, que, declarándose en la sentencia recurrida haberse cometido el hurto de una oveja, causa de este procedimiento, en el predio Mayden, donde se hallaba pastando con otras, es claro que si el delito fué cometido en el campo, tuvo que serlo en despoblado, y como no aparece que concurriera accidente alguno que modifique esta circunstancia, con acierto ha sido considerada como agravante, pues el que no hubiera sido buscada de propósito no afecta á la esencia de esta circunstancia, etc.» (Sentencia de 23 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 29 de Agosto, pág. 109.)

Art. 10... 16.<sup>a</sup>

EJECUTAR EL DELITO EN DESPRECIO Ó CON OFENSA  
DE LA AUTORIDAD PÚBLICA.

**CUESTION.** *La circunstancia agravante de ejecutar el delito en desprecio ó con ofensa de la Autoridad pública, deberá apreciarse en un homicidio perpetrado en la persona de una Autoridad, aun cuando sea por motivo no relacionado con sus funciones oficiales?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que conocida del procesado la cualidad de Alcalde que investía á D. Francisco Béjar en el lugar en donde le acometió y causó las lesiones productoras de su muerte; y siendo además esa cualidad, según afirmación de la sentencia reclamada, una de las causas de los resentimientos que parecen determinantes del delito, la Audiencia sentenciadora no ha cometido el error de derecho ni la infracción legal atribuidos á causa de haber apreciado dicha circunstancia, porque establecida ésta en consideración y como garantía del respeto debido á las personas revestidas de Autoridad pública, aun en casos no relacionados directamente con sus funciones oficiales, en los cuales el hecho criminal adquiere distinta gravedad, ha debido estimarse tal motivo de agravación, puesto que con menosprecio y con ofensa, no ya de la persona privada, que esto contenido se halla en el simple homicidio, sino también de su carácter de Autoridad, que es accidente á él unido, fué acometido y muerto el Alcalde Béjar en territorio de su jurisdicción, en el que muy singularmente merecía respeto y consideración, á que faltó el delincente, etc.» (Sentencia de 3 de Noviembre de 1887, publicada en la Gaceta de 9 de Enero de 1888, pág. 42.)

Art. 10... 17.<sup>a</sup>

CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DE HABER SIDO CASTIGADO EL CULPABLE ANTERIORMENTE POR DELITO Á QUE LA LEY SEÑALE IGUAL Ó MAYOR PENA, Ó POR DOS Ó MÁS DELITOS Á QUE AQUELLA SEÑALE PENA MENOR.

**CUESTION.** *Al que fué penado antes de 1870 por vagancia, ¿cabrá apreciarle, en un delito menor que cometa, la circunstancia agravante de haber sido castigado el culpable anteriormente por delito á que la Ley señale mayor pena?*—Así lo estimó la Audiencia de Talavera, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo, á excitación del Ministerio Fiscal recurrente, por indebida apreciación de la referida circunstancia agravante: «Considerando que, según el art. 23 del Código, las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorecen al reo de un delito ó falta, aunque al publicarse aquéllas hubiere recaído sentencia firme, y el condenado estuviese cumpliendo la condena: Considerando que este precepto no puede menos de comprender en buenos principios el



caso de no deber estimarse la circunstancia agravante 17 del artículo 10 del Código en contra del procesado que hubiera sido penado por un hecho reputado como delito al tiempo de su comisión, pero que había dejado de serlo al ser sentenciado después en otra causa, porque, de lo contrario, no tendría efecto la retroactividad favorable al reo establecida por la Ley. Considerando que habiendo aplicado la Sala sentenciadora al procesado Norberto Jiménez la circunstancia agravante de haber sido penado anteriormente por un delito á que la Ley señala igual ó mayor pena, por un hecho que ha dejado de ser delito en el Código vigente, cual es el de vagancia, é impuesto por ella la pena en el grado máximo, ha incurrido en error de derecho é infringido los artículos 10, circunstancia 17, y 82, regla 3.<sup>a</sup>, por su indebida aplicación, y el 23 y la regla 1.<sup>a</sup> del 82 del Código penal por no haberlos aplicado, etc.» (Sentencia de 28 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 21 Abril de 1888, pág. 140.)

### Art. 10... 18.<sup>a</sup>

#### CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DE REINCIDENCIA.

**QUESTION.** *¿Será susceptible de casación por infracción del artículo 10, núm. 18 del Código la sentencia que afirmando que el procesado ha sido penado anteriormente por el mismo delito, aunque sin añadir ejecutoriamente, estima en contra de aquél la circunstancia agravante de reincidencia?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que la Audiencia sentenciadora, al dictar el fallo contra el que se ha recurrido, afirma que los penados han sido anteriormente condenados por el mismo delito, y que, esto supuesto, cuando no se ha reclamado por medio del recurso correspondiente contra semejante afirmación de hecho, que sirve de fundamento á la apreciación de la circunstancia agravante 18 del art. 10 del Código, hay que entender racionalmente que dicha condena fué ejecutoria y se refiere á hechos distintos del que ha motivado la presente, por lo que la Audiencia de Bilbao no ha incurrido en el error de derecho que se la atribuye, etc.» (Sentencia de 16 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 4 de Marzo de 1889, páginas 37 y 38.)

### Art. 10... 20.<sup>a</sup>

CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DE HABER EJECUTADO EL HECHO CON OFENSA Ó DESPRECIO DEL RESPETO QUE POR LA DIGNIDAD, EDAD Ó SEXO MERECE EL OFENDIDO, Ó EN SU MORADA, CUANDO NO HAYA PROVOCADO EL SUCESO.

#### I Desprecio de la dignidad.

**QUESTION I.** *En un delito de calumnia inferida á un Sacerdote, deberá apreciarse la circunstancia agravante de ofensa de la dignidad del ofendido?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la

afirmativa: «Considerando que también debe tenerse en cuenta para elevar la pena imponible en el máximo del grado máximo de la señalada al delito más grave, la circunstancia de la dignidad y carácter sacerdotal de que se hallaba investido el ofendido Sr....; pues si bien en la injuria determina ese carácter la gravedad de la misma, en la calumnia no sucede lo propio, ya porque no es inherente á ella y hay verdadera diferencia moral y legalmente apreciada entre ofender públicamente y ante sus feligreses con la imputación falsa de un crimen á un Sr...., á hacerlo á cualquiera otra persona que no reuna las mismas ó análogas circunstancias, etc.» (Sentencia de 17 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 18 de Abril de 1888, páginas 118 y 119.)

**CUESTION II.** *En el delito de denuncia falsa hecha contra un Juez ó Magistrado, y por el cual se mandó proceder de oficio contra el denunciador ó acusador al desestimar el Tribunal la querrela de antejuicio interpuesta por aquél (V. art. 340, párrafo segundo), deberá apreciarse la circunstancia agravante de haberse cometido el delito con ofensa del respeto que por su dignidad merezca el perjudicado?*—Así lo estimó la Sala de lo criminal de la Audiencia de Valladolid, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por indebida apreciación, en este caso concreto, de la referida circunstancia de agravación: «Considerando... que tampoco es de apreciar en este caso la segunda infracción de dicho artículo (circunstancia 20.\* del art. 10), porque originado el delito en la querrela que sirvió de base al antejuicio, y siendo éste sólo aplicable por las imputaciones de delito hechas á Jueces y Magistrados en ejercicio de sus cargos, resulta, por la especialidad de la imputación, inherente al delito así cometido, la calidad de la persona ofendida, y al apreciarse por la Sala sentenciadora como agravante, ha infringido la circunstancia 20.\* del art. 10 del Código.» (Sentencia de 7 de Junio de 1888, publicada en las *Gacetas* de 24 y 25 de Septiembre, páginas 168, 169 y 170.)

## II Ofensa de la edad.

**CUESTION.** *La circunstancia agravante de ofensa del respeto que por su edad merezca el ofendido, deberá estimarse como embebida en la de alevosía, de modo que apreciado el hecho como asesinato por la concurrencia de esta última, haya de hacerse caso omiso de aquélla para la correspondiente agravación de la penalidad?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que dependiendo la circunstancia agravante antedicha (1) de una cualidad especial de la persona ofendida, independiente de todo punto de los medios, modos y formas puestas en juego por el agresor para llevar á efecto el delito, la alevosía, que estos medios producen no tiene relación alguna con la edad de la víctima, que á tener ocasión y medios, que en este caso le faltaron, no habría dejado, á pesar de su edad, de defender su existencia, prueba clara de que no está embebida una en otra circunstancia, sino que

(1) Circunstancia 20.\* del art. 10 del Código.



ambas tienen que producir por separado sus efectos: Considerando que siendo la base de toda penalidad corregir y castigar los delinquentes, según la mayor perversidad de sus actos, indudablemente existe ésta en un orden superior cuando al hecho criminal se agrega haberse ejecutado en una señora, que, á más del respeto que merecía del agresor como dependiente de la misma, debía merecérselo aún mayor por su edad septuagenaria, etc.» (Sentencia de 7 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 25 de Septiembre, páginas 170 á 173.)

### III Ofensa del sexo.

**CUESTION I.** *En el delito de robo con motivo ó ocasión del cual resulta el homicidio de una mujer, deberá apreciarse la circunstancia agravante de ofensa del sexo?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que se funda el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal en que al determinar la responsabilidad en que han incurrido los procesados Alfonso Tamayo y Pío Arozarena como autores de robo del cual resultó homicidio, no se ha tenido presente que mediaron en el mismo las circunstancias agravantes de abuso de superioridad, el ser mujer la ofendida y el cometerse el hecho en su morada, y aunque no cabe dudar que debe estimarse esta última, porque ella no es inherente al crimen, y á que pudo en toda su integridad cometerse en distinto sitio, y porque la víctima no había de provocar á los que la robaron y mataron, respecto á las dos restantes, al abuso de superioridad y al respeto que el sexo de aquélla merecía, no tiene igual consideración legal, porque la primera en el caso actual debe comprenderse entre las violencias que determinan la especialidad del delito, y la segunda, atendida la índole de éste, hijo de la codicia, no puede tampoco señalar diferencia, ya sea varón ó hembra la persona perjudicada, etc.» (Sentencia de 12 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 19 de Junio, páginas 305 y 306.)

**CUESTION II.** *El que mata alevosamente á una mujer sólo por resentimiento ó venganza, será responsable de este asesinato con la circunstancia agravante de ofensa del sexo?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que para apreciar la concurrencia de circunstancias agravantes deben ser atendidas las del caso procesal, y que si Eduardo Rico Castro, en actos muy anteriores al delito de asesinato, originario de esta causa, procedió con menoscabo del respeto debido por su sexo á la persona injuriada, posteriormente, al dar á la misma muerte alevosa, obró tan sólo inspirado por un propósito de resentimiento y venganza, no relacionado con idea alguna de ofensa y menosprecio á las cualidades de la desgraciada D.ª Isabel Fraguas: Considerando, por consiguiente, que el Tribunal á quo no ha incurrido en error de derecho respecto al motivo único á que se refieren las infracciones de ley invocadas, etc.» (Sentencia de 24 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 20 de Abril de 1888, páginas 130 y 131.)

**IV Ejecución del delito en la morada del ofendido, no habiendo éste provocado el suceso.**

**CUESTION.** *Cuando el delito de robo, con motivo ó ocasión del cual resulta homicidio, se ha cometido en la propia casa de la víctima, ¿deberá estimarse la circunstancia agravante de haberse ejecutado el hecho en la morada del ofendido?*—Una vez más ha resuelto el Tribunal Supremo la afirmativa sobre este punto al casar cierta sentencia de la Audiencia de la Habana, en que se hizo caso omiso del expresado elemento de agravación de la responsabilidad criminal del culpable: «Considerando que se funda el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal en que al determinar la responsabilidad en que han incurrido los procesados Alfonso Tamayo y Pío Arozarena como autores de robo del cual resultó homicidio, no se ha tenido presente que mediaron en el mismo las circunstancias agravantes de abuso de superioridad, el ser mujer la ofendida y el cometerse el hecho en su morada, y aunque no cabe dudar que debe estimarse esta última, porque ella no es inherente al crimen, y á que pudo en toda su integridad cometerse en distinto sitio, y porque la víctima no había de provocar á los que la robaron y mataron, respecto á las dos restantes, al abuso de superioridad y al respeto que el sexo de aquélla merecía, no tienen igual consideración legal, porque la primera en el caso actual debe comprenderse entre las violencias que determinan la especialidad del delito, y la segunda, atendida la índole de éste, hijo de la codicia, no puede tampoco señalar diferencia, ya sea varón ó hembra la persona perjudicada, etc.» (Sentencia de 12 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 19 de Junio, páginas 305 y 306.)

**Art. 10... 21.º**

**CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DE ESCALAMIENTO.**

**CUESTION.** *¿Dejará de existir el escalamiento cuando se entra en una casa ó corral por una brecha ó abertura que se encuentra practicada en ella?*—El 13 de Mayo de 1887 Josefa Bonet subió al tejado de su casa y se introdujo en el porche de la casa contigua por una grande abertura que tenía al nivel de aquel tejado, desde cuyo porche pasó á la despensa, encontrando abiertas todas las puertas interiores de la casa, sustrayendo de aquélla 35 kilos de maíz que se llevó. Calificado este hecho por el Fiscal de robo en casa habitada con escalamiento, la Audiencia de Manresa, estimando que el *escalamiento* sólo existe cuando se salta por encima de pared que presenta resistencia y ofrece de ordinario seguridad, y no cuando se entra en una casa ó corral por una brecha que se encuentra ya practicada, calificó el hecho de delito de *hurto*. Mas interpuesto recurso de casación contra esta sentencia por el Ministerio Fiscal por infracción del art. 521 y 10, circunstancia 21.º de Código, declaró el Tribunal Supremo *haber*



lugar á él: «Considerando que cometen delito de robo los que se apoderan de cosa ajena en casa habitada introduciéndose en ella por medio de escalamiento, en cuyo medio consiste, según los terminos y sentido racional y jurídico del art. 521 del Código penal, la fuerza determinante de aquel delito, que define el 515 en uno de sus extremos: Considerando que hay escalamiento, conforme al núm. 21 del art. 10 del mismo Código, cuando se entra en un lugar por una vía que no sea la destinada al efecto: Considerando que apareciendo de la sentencia reclamada que la procesada entró en la casa habitada por Salvador Casals por una grande abertura existente al nivel del tejado de la suya, al cual, para ello, tuvo necesidad de subir, resulta manifiesto que se introdujo por medio de escalamiento en el lugar en que realizó la sustracción, por no ser aquella abertura la vía destinada al ingreso de dicha casa, y que, por tanto, la Audiencia sentenciadora, al desestimar como insignificante tal elemento jurídico, integrante de la calificación de robo, propia del hecho procesal, limitando el sentido también jurídico del escalamiento, dentro del que la ley para todos los casos le atribuye, ha cometido el error de derecho y las infracciones legales invocadas, etc.» (Sentencia de 14 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 3 de Mayo, páginas 163 y 164.)

## TÍTULO II

### DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS DELITOS Y FALTAS.

#### CAPÍTULO I

##### De las personas responsables criminalmente de los delitos y faltas.

##### Art. 13.

##### QUIÉNES SON AUTORES DE UN DELITO Ó FALTA.

##### I Los que toman parte directa en la ejecución del hecho.

**CUESTION I.** *Promuévese cuestión entre A y B, tomando también parte á favor del último C, de cuyas resultas B da un golpe de puñal á A, agujereándole la faja sin causarle lesión, y C tira un vaso á la cabeza del mismo, causándole una lesión que tarda cuarenta dias en curarse; ¿deberán ser declarados B y C coautores de las lesiones graves causadas á A, ó será tan sólo responsable de éstas el segundo, y el primero de la falta comprendida en el art. 604 del Código?—La Audiencia de lo criminal de Carmona declaró que estos hechos constituían el delito de lesiones graves, del que eran coautores los dos procesados, á quienes condenó á la pena de cuatro meses y un día de arresto mayor á cada uno. Mas interpuesto por la defensa de B recurso de casación al que se adhirió el Ministerio Fiscal, declaró el Tribunal Supremo*

*haber lugar* al mismo, por haberse considerado al recurrente como coautor de unas lesiones graves en que no tuvo participación alguna: «Considerando que si bien inmediatamente después de haber Juan Suárez dado un golpe de puñal ó faca á Gabriel Pérez, agujereándole la faja sin causarle lesión, Eladio Durán, tomando parte en el suceso, tiró un vaso á la cabeza del mismo Pérez, produciéndole una lesión que tardó en curarse cuarenta días, es lo cierto que de los hechos probados no resulta ni cabe inferirse que al acto realizado por el Durán procediera acuerdo, connivencia ni inducción de parte de Suárez, y en tal concepto, sólo procede legalmente hacer responsable al recurrente del hecho ejecutado por el mismo de haber golpeado al ofendido sin causarle lesión, que viene á constituir una falta sujeta á las prescripciones del libro 3.º del Código penal: Considerando, en consecuencia de lo expuesto, que el Tribunal sentenciador, condenando á Juan Suárez como coautor del delito de lesiones, ha incurrido en el error de derecho que determina el núm. 3.º del artículo 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, ó infringido el artículo 431, núm. 4.º del Código penal, que se le atribuyen, etc.» (Sentencia de 14 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 23 de Noviembre, pág. 347.)

**CUESTION II.** *Varios mozos de la estación de un ferrocarril se reparten entre sí varios efectos, que uno de ellos, á presencia de los demás, sustrae de un bulto que estaba en el muelle: ¿deberá calificarse á todos de autores del hurto, ó tan sólo al que verificó la sustracción, reservando para los demás la más benigna calificación de meros encubridores por propio aprovechamiento de los efectos del delito?*—El Tribunal Supremo ha declarado que en este caso deben ser considerados todos como copartícipes del hecho en concepto de autores: «Considerando que son encubridores, conforme á lo dispuesto en el núm. 1.º del art. 16 del Código penal, los que, con conocimiento de la perpetración del delito, sin haber tenido participación en él como autores ni cómplices, intervienen con posterioridad á su ejecución, entre otros modos, aprovechándose por sí mismos de los efectos que procedan del delito: Considerando que los recurrentes Pedro Sánchez López, Apolinar San Miguel y Luna y Manuel Fernández intervinieron, tomando parte directa en la ejecución del hecho, ya que se apoderaron de las navajas que uno de ellos, á la vista y con aquiescencia de los demás, mozos todos de la estación del ferrocarril, había sacado de un bulto ó paquete que había en dicha estación, y los tres se hicieron responsables como autores del delito de hurto, según así acertadamente lo ha declarado en su sentencia la Audiencia de Lugo, sin que haya infringido el artículo del Código antes citado, ni por consiguiente incurrido en el error de derecho en que se funda el recurso, etc.» (Sentencia de 26 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 17 de Noviembre, pág. 312.)

**CUESTION III.** *Cuando varios acometen á un tercero con palos y navajas, obrando todos á una y en combinación contra el agredido, ¿será cada cual responsable del daño que haya inferido á éste, ó lo serán todos del mal mayor que se le haya causado?*—El



Tribunal Supremo ha declarado que esto último es lo procedente: «Considerando que al determinarse en la sentencia reclamada que el recurrente Mansilla Escudero dió un palo en la pierna al ofendido Antonio Alvarez, y que otro á otros le infirieron á éste varias lesiones con arma blanca, alguna grave, no libra á aquél de la responsabilidad de autor del delito que califica y pena la sentencia, porque en la misma se consigna como hecho probado que los agresores del herido Antonio Alvarez obraban todos á una y en combinación contra el mismo, y por tanto, es evidente que Mansilla Escudero, como todos sus compañeros, tomaron parte directa en los hechos justiciables que aquí se persiguen, etc.» (Sentencia de 3 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 4 de Enero de 1888, pág. 4.)

**CUESTION IV.** *Si el que dispara por tres veces una pistola contra un sujeto que luchaba con otro, y que pereció en la refriega, no lo hizo de acuerdo con el matador, y no causó con dichos disparos lesión alguna al interfecto, ¿deberá ser declarado responsable tan sólo del delito de disparo de arma de fuego, ó calificado de coautor del homicidio perpetrado?*—El Tribunal Supremo ha declarado que en este caso la simultaneidad de los actos no produce identidad de responsabilidad: «Considerando que para constituir el delito de homicidio el hecho de haber dirigido Benito Cabezas tres disparos sin causar con ellos lesión alguna á once pasos de distancia del sitio en que luchaban á mano armada Francisco Jiménez y Ramón Bello, de cuyas resultas falleció este último, era preciso que de los hechos declarados probados en la sentencia recurrida apareciera, lo que no tiene lugar, que este acto había influido más ó menos directamente en el ánimo de Ramón Bello, enervando ó imposibilitando de algún modo su defensa, y que de otro modo esos actos deben ser jurídicamente conceptuados y penados como distintos á pesar de haber sido simultáneos, en razón á que no habiendo influido el ejecutado por Ramón Cabezas directa ni indirectamente en el lamentable resultado de la lucha sostenida entre el interfecto y el Francisco Jiménez, no pueda sostenerse que aquél cooperase en manera alguna á la ejecución del delito de homicidio, siendo sólo responsable de el de disparo de arma de fuego, acertadamente calificado por la Sala sentenciadora, etc.» (Sentencia de 23 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 29 de Agosto, páginas 109 y 110.)

## II Los que fuerzan ó inducen directamente á otro á ejecutar el hecho.

**CUESTION I.** *El que instiga á un niño de quince años para que sustraiga unas alhajas á su abuela, y verificada la sustracción se encarga de empeñarlas en varias casas de préstamos, entregando á aquél la cantidad obtenida por el empeño y recibiendo, á su vez, del mismo una pequeña suma por su comisión, ¿será responsable del delito como simple encubridor, ó como coautor por inducción directa?*—El Tribunal Supremo ha declarado que esta última más grave responsabilidad es la que le corresponde: «Consi-

derando que la inducción del Juan Santiso al joven Ramón Carballo para que sustrajera de la casa de su abuela las alhajas fué directa é influyente de la acción criminal, de tal modo que sin ella no se habría ejecutado el delito, toda vez que aquél se previó de la corta edad é inexperiencia de éste; y consiguientemente, habiendo declarado la Sala sentenciadora, según los hechos que aceptó como probados, que el Santiso indujo al Carballo á la comisión del hurto de que se trata, no ha infringido el art. 13 del Código penal en su núm. 2.º al aplicarle como fundamento de la responsabilidad del recurrente en concepto de autor del expresado delito, ni cometido el error de derecho que se le atribuye, etc.» (Sentencia de 26 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 6 de Mayo, páginas 190 y 191.)

**CUESTION II.** *Porque un Secretario de Ayuntamiento haya aconsejado al Alcalde que no cumpla cierta orden del Gobernador, ¿podrá ser declarado autor por inducción de la desobediencia en que incurra el susodicho Alcalde?*—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Benavente, cuya sentencia *casó* el Tribunal Supremo por indebida aplicación en este caso del art. 13, núm. 2.º del Código: «Considerando que en este concepto el recurrente Dámaso Gallego Calvo, Secretario del Ayuntamiento de San Agustín, no se hizo responsable de la desobediencia al Gobernador de la provincia, por la que ha sido condenado el Alcalde de dicho pueblo, D. José Labra Villafañila, porque limitado el proceder de aquél á aconsejar á éste que no hiciera caso y dejara de cumplimentar las órdenes que había recibido de la indicada Autoridad gubernativa, no puede sostenerse legalmente que empleara por su parte una inducción eficaz y bastante á producir el hecho origen del proceso, ya que ni por las circunstancias de ese hecho ni por la distinta categoría de uno y otro procesado cabe sostenerse que obrara el uno impulsado por el otro: Considerando que la Audiencia de Benavente, en la sentencia que ha dictado, ha prescindido del criterio jurídico expuesto y ha infringido el mencionado art. 13 en su núm. 2.º del Código y demás que se citan en el recurso, incurriendo en el error de derecho que señala el núm. 1.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, según fundadamente se alega, etc.» (Sentencia de 27 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 15 de Enero de 1889, pág. 20.)

### III Los que cooperan á la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado.

**CUESTION I.** *El que se queda vigilando las inmediaciones del lugar donde otro compañero suyo, con quien está de acuerdo, se halla verificando un robo, ¿deberá ser considerado como coautor, ó simplemente como cómplice del expresado delito?*—El Tribunal Supremo, confirmando la doctrina sentada ya en anteriores decisiones, ha declarado que la primera calificación más grave es la que le corresponde: «Considerando que el hecho que como probado se consigna en la sentencia reclamada, de que el procesado Pedro Roure se hallaba situado á las inmediaciones de la ta-



plia durante su compañero Miguel Gaya verificaba la sustracción del conejo, determina su responsabilidad en concepto de autor del indicado delito, puesto que, constituido en vigilante para prevenir cualquier contingencia que pudiera ocurrirles, su participación fué directa y encaminada al éxito de los propósitos de ambos procesados, etc.» (Sentencia de 4 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 16 de Noviembre, pág. 300.)

**CUESTION II.** *El que facilita á otro la llave falsa con que verifica un robo, quedándose á la puerta mientras éste tiene lugar, deberá ser calificado de coautor ó de cómplice del delito?*—El Tribunal Supremo ha declarado que la primera calificación más grave es la procedente: «Considerando que el recurrente, Eustaquio Ruesca García, facilitó á Victoriano Linares las llaves falsas con que éste penetró en la habitación durante la ausencia de su dueño para realizar los robos proyectados, quedándose á la puerta mientras tenía efecto su perpetración, para asegurarla más, y que, por lo tanto, tomó parte directa en la ejecución del hecho, cooperando eficazmente á ello por actos sin los que no se hubiera efectuado, en cuyo concepto merece la calificación de autor, y la pena ha sido debidamente aplicada, etc.» (Sentencia de 17 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 5 de Enero de 1888, páginas 14 y 15.)

**CUESTION III.** *El que facilita al autor material de un hurto datos acerca de la existencia de la cantidad que obra en poder de un tercero y del lugar en que la tiene guardada, y mientras aquél realiza la sustracción, le espera frente á la casa en que la perpetró, recibiendo del mismo parte del dinero hurtado, deberá ser calificado como simple encubridor del delito, ó como coautor del mismo?*—La Sala de lo criminal de la Audiencia de Barcelona estimó lo primero. Mas el Tribunal Supremo, á excitación del Ministerio Fiscal recurrente, declaró lo segundo: «Considerando que el procesado Miguel Pujol cooperó á la ejecución del hecho de autos con actos sin los cuales no se hubiera efectuado, suministrando á Francisco Benet las noticias indispensables del punto en que se hallaba colocado el dinero sustraído, y además la circunstancia de haberse situado el Pujol frente á la casa en que tuvo lugar el suceso la mañana en que éste se realizó, esperando al Benet y recibiendo del mismo la cantidad de 150 duros procedentes del hurto; relacionados estos actos con el primero, se demuestra por modo evidente que el expresado Miguel Pujol tomó parte directa en la ejecución del mencionado delito, y en su consecuencia que tuvo en él la participación de coautor; Considerando que al no estimarlo así el Tribunal sentenciador ha incurrido en el error de derecho ó infringido las disposiciones legales que se le atribuyen, etc.» (Sentencia de 4 de Enero de 1888, publicada en las *Gacetas* de 23 de Abril y 2 de Mayo, páginas 148 y 149.)

**CUESTION IV.** *Aun cuando uno de los procesados no haya ejecutado acto alguno material de agresión contra el ofendido, si estaba unido y de concierto con el autor material del delito, y juntos y armados esperaron y acecharon á la víctima, y además enseñó á su compañero quién era ésta, deberá ser considerado como*

**coautor ó como cómplice del homicidio ó asesinato cometido?**—El Tribunal Supremo ha declarado que la primera y más grave calificación es la procedente: «Considerando que habiendo Saturnino León, de concierto con Fabriciano Villagrà, concurrido armado á la ejecución del delito, y designado luego al D. Francisco Ruiz como la persona que esperaban para que lo acometiese, cual lo hizo, indudablemente cooperó á la ejecución con ese hecho, sin el cual no se hubiera efectuado, y que ciertamente lo coloca en la categoría de autor, que justamente le atribuye la Sala sentenciadora, etc.» (Sentencia de 21 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 5 de Mayo, pág. 182.)

**CUESTION V.** *La mujer que teniendo relaciones con un hombre casado, y de acuerdo con éste para envenenar á su esposa, compra la sustancia tóxica con que intenta su consorte en el crimen producir dicho envenenamiento, ¿será responsable del delito por ella cometido (tentativa de asesinato, véase art. 417) en concepto de autora ó meramente cómplice?*—El Tribunal Supremo ha declarado que la primera y más grave calificación es la que le corresponde: «Considerando que los hechos determinantes de la participación de los culpables acusados por un delito cualquiera deben apreciarse, para graduar su importancia y transcendencia, de una manera concreta, ó sea con relación al hecho punible; y que apreciada así la intervención de Eduarda Nebot en la tentativa de envenenamiento de Vicenta Sancho, mujer de Salvador Taus, es evidente que el acto de comprar la sustancia tóxica, realizado por la Eduarda, y de entregársela después á Salvador Taus para que envenenase con ella á la Vicenta, según tenían concertado, son actos de participación directa en el delito, ya en el sentido del núm. 1.º, ya en el 3.º del art. 13 del Código, por el fin á que iban encaminados, por ser necesarios para el fin propuesto, y porque cada uno de los penados ejecutó así los que pudieron dentro de su respectiva situación, etc.» (Sentencia de 7 de Febrero de 1888, publicada en las *Gacetas* de 8 y 9 de Mayo, páginas 208 y 209.)

**CUESTION VI.** *En el caso de la Cuestion II del art. 10-11.º (Véase), aun cuando el cartero no haya concurrido á la ejecución material del delito, ¿deberá ser declarado responsable como coautor ó como cómplice del mismo?*—El Tribunal Supremo ha declarado que la primera y más grave responsabilidad es la que le corresponde: «Considerando que declarada en la propia sentencia, no sólo la participación directa de Videsa en el concierto criminal previo al delito, sino que por sí propio, y para que se realizara, dió el aviso de la salida de los valores; como este hecho era necesario para la ejecución convenida, su participación no fué la de cómplice, sino la de autor en los términos previstos en el número 3.º del art. 13 del Código penal, etc.» (Sentencia de 2 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 12 de Mayo, páginas 241 y 242.)

**CUESTION VII.** *El dueño de una finca que, llamado por su colono, que estaba golpeando á un sujeto, coge á éste por la chaqueta y excita repetida é insistentemente á aquél para que le pegue más*



y lo mate, dándole, en efecto, el colono otro golpe en el brazo con unos garfios que llevaba, causándole una lesión grave, aun cuando él por su parte no produjera materialmente lesión alguna al ofendido, ¿deberá ser considerado como coautor, ó como cómplice de la causada?—La Audiencia de lo criminal de Manresa estimó esto último. Mas el Tribunal Supremo, á excitación del Ministerio Fiscal recurrente, declaró que la primera y más grave calificación es la que le correspondía: «Considerando que los actos ejecutados por Simón Paradell no fueron los de mera cooperación anterior ó simultánea al delito que, cuando no se hallan comprendidos en las disposiciones del art. 13 del Código penal, determinan la categoría de la complicidad, sino que se ajustan con exactitud á las prescripciones de dicho artículo, invocadas por el recurrente, ya porque en realidad toma parte directa en la ejecución de un delito de lesiones, según esta Sala ha declarado con repetición, no sólo el que materialmente produce las heridas, sino el que por acto voluntario y cooperando expresamente al de aquél, sujeta á la persona ofendida con propósito de ponerla á la fácil disposición del agresor, que es lo que en el caso procesal hizo Simón, y ya también porque la repetida é insistente excitación que dirigió á Rivas en el momento crítico de su actitud agresiva para que repitiera los golpes sobre su adversario, como los repitió, produciéndole graves lesiones, constituye la inducción directa señalada en el núm. 2.º de dicho artículo, por aparecer de los hechos consignados en la sentencia reclamada que ése fué motivo determinante de la repetición de los golpes: Considerando, por tanto, que al declararse á Simón Paradell cómplice, y no autor del delito perseguido, se han cometido las infracciones y el error de derecho señalados por el recurrente, etc.» (Sentencia de 2 de Julio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 7 de Octubre, pág. 224.)

### Art. 15.

QUIÉNES SON CÓMPLICES DE UN DELITO Ó FALTA.

**CUESTION I.** *El que aconseja á varios sujetos que cometan un robo y les facilita noticias sobre la situación y condiciones de la casa en que había aquél de perpetrarse, sus moradores y medios de que podían valerse para penetrar en ella, ¿podrá decirse que no determinó acto alguno de verdadera cooperación á la ejecución del hecho criminal, como exige el art. 15 del Código para calificarlo de cómplice del expresado delito?*—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Zamora, la que absolvió al referido sujeto. Mas interpuesto contra dicha sentencia recurso de casación por el Ministerio Fiscal, que alegó que los hechos expuestos, si no colocaban al procesado en la categoría de autor, le convenceran por lo menos de cómplice, pues que cooperó á la ejecución del delito por actos anteriores, importantes para el mejor éxito del proyecto, declaró el Tribunal Supremo haber lugar al referido recurso: «Considerando que son cómplices de los delitos, según el art. 15 del Código penal, los que no hallándose comprendidos en el art. 13 cooperan á

la ejecución del hecho por actos anteriores ó simultáneos: Considerando que los ejecutados por el procesado Javier Ballón de incorporarse á los cuatro sujetos que habían de realizar el robo en la casa del Cura párroco de Sanzoles, D. José Hernández, animándoles al afecto y manifestándoles, para el mejor éxito del propósito de aquéllos, la situación y condiciones de la expresada casa, medios de que habían valerse para penetrar en ella y respecto de las personas que la habitaban, tendían á facilitar la ejecución del delito y determinan por modo claro y evidente la concurrencia indirecta que tuvo el procesado en el de robo de que se trata y su responsabilidad en el concepto de cómplice del mismo, siendo de apreciar la circunstancia agravante de nocturnidad, que fué buscada de propósito para realizar dicho delito: Considerando, en su virtud, que el Tribunal sentenciador ha incurrido en el error de derecho y cometido las infracciones de ley que han servido de fundamento al presente recurso, etc.» (Sentencia de 23 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 10 de Enero de 1888, pág. 62.)

**CUESTIÓN II.** *¿Cabe determinar la complicidad en un delito de homicidio, respecto de actos anteriores ó simultáneos del procesado, si éste no procedió de acuerdo con el matador ni aquéllos contribuyeron al fatal resultado producido?*—Con motivo de ser los días ó cumpleaños de D.<sup>a</sup> Concepción Pérez, esposa de D. Luis Gracián, hubo serenata y hasta baile en casa de éste la noche del 7 de Diciembre de 1885, á la cual concurren diferentes personas, entre ellas Sandalio Pagán, José de la Paz Tirado y Jovino Sánchez Estrada; ocurriendo en dicho baile el incidente de que Jovino Sánchez pidió á Sandalio Pagán, que bailaba con Eufemia Gracián, que le permitiese dar una vuelta con su pareja, á lo que Pagán no accedió, por lo que Sánchez refirió este hecho á José de la Paz Tirado, el cual le dijo que no debía dejarlo así, y que era preciso dar de palos á Pagán. Concluido el baile, salieron de la casa de Gracián Tirado y Sánchez, antes que los otros concurrentes, y se quedaron de espera, Tirado con un cuchillo y un palo, y Sánchez sólo con otro palo; y saliendo después Pagán acompañado de Juan Rivera, José Ramón Quifiones y José Liberato Morales, gritó Sánchez: «¿Quién vive?», y Pagán le dió un bofetón, á consecuencia de lo que Sánchez dió á Pagán un garrotazo, pero fué desarmado por éste; Rivera dió dos garrotazos á Sánchez, haciéndole caer en tierra, y entonces Tirado, con el cuchillo que llevaba, dirigió varios golpes á Pagán, derribándole al suelo, sin atender la mediación de Quifiones, y produciéndole varias heridas que le ocasionaron la muerte. La Sala de justicia de la Audiencia de Puerto Rico calificó los hechos expuestos como constitutivos del delito de homicidio, de que era autor José de la Paz Tirado y cómplice Jovino Sánchez Estrada, condenando á éste á ocho años y un día de prisión mayor, accesorias, indemnización y mitad de costas. Mas interpuesto contra esta sentencia por el Ministerio Fiscal recurso de casación por infracción de ley, fundado en las reglas 54, 55 y 56, caso 4.<sup>o</sup> de la ley provisional para la aplicación del Código penal en Cuba y Puerto



Rico, designando como infringidos los artículos del Código penal citado 13 y 1.º, aquél indebidamente aplicado, y éste que debió aplicarse, porque Jovino Sánchez no ejecutó actos anteriores ó simultáneos encaminados á producir la muerte de Sandalio Pagán, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar* al expresado recurso: «Considerando que Jovino Sánchez no es responsable en concepto alguno del homicidio de Sandalio Pagán, según así se alega por el Ministerio Fiscal en su recurso; porque si bien ofrece la sentencia de la Audiencia de Puerto Rico como hechos ciertos que el primero tuvo un disgusto con el segundo, porque se opuso á cederle para bailar la joven con quien él lo hacía; que á la salida del baile le estuvo esperando, aconsejado por José de la Paz Tirado, que le indicó vengara la ofensa, y que trató de hacerlo, intentando pegarle con un palo de que iba provisto, no se consigna además en semejante fallo, ni cabe deducirse de dato alguno, que dicho Sánchez estuviera de acuerdo con el expresado Tirado, al usar éste, en defensa de aquél, el puñal con que causó la muerte al ofendido Pagán, para con seguridad determinar su participación en el delito, y por ello la Audiencia citada, al condenar en el concepto de cómplice á Jovino Sánchez, ha infringido los artículos 1.º y 13 del Código penal aplicable á la mencionada isla, incurriendo en el error de derecho que señala el núm. 4.º de la regla 56 de la ley provisional, que con acierto se invoca en el recurso, etc.» (Sentencia de 12 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 4 de Enero de 1888, pág. 8.)

**CUESTION III.** *Cuando en la sentencia no resulta que los calificados de cómplices de un homicidio tomaran parte en la agresión que lo produjo ni hicieran otra cosa más que presenciaria, y si bien habla de la actitud hostil de los mismos, no así se dice en qué consistía ésta, ni se determina tampoco en qué consistió el anterior concierto que se dice rompieron al no tomar parte en la agresión, ¿deberá prosperar el recurso que contra dicha calificación de culpabilidad se interponga?*—Indudablemente; y así lo resolvió el Tribunal Supremo en el caso en que nos ocupamos: «Considerando, en orden al segundo motivo alegado en el recurso, que el concepto jurídico de la complicidad nace de la relación que media entre el acto ó los actos anteriores ó simultáneos ejecutados por la persona á quien se califica de cómplice y el acto ó los actos atribuidos al autor de un delito; y como de los hechos que la sentencia declara probados no resulte que los calificados de cómplices tomaran parte en la agresión ni hicieran otra cosa que presenciaria; y como no se diga en qué consistía esa actitud hostil, de la que pretende derivar la complicidad, ni se determine tampoco en qué consistió el concierto anterior que rompieron los calificados de cómplices en el hecho de no tomar parte en la agresión, es visto que los calificados de cómplices no tomaron parte anterior ni simultánea en los hechos justiciables que la sentencia califica y pena, y por tanto, que al calificar de cómplices á Eugenio Ordóñez Sevilla, Esteban Toral Santos, Fernando López González, Santiago Alfayate Sevilla, Lorenzo Santos López, Rafael Fernández López, Antonio Toral Alvarez, Carlos Fernández Mar-

tínez, Manuel Fernández López, Tomás Martínez Ferrero y Tomás Alfayate Sevilla, ha incurrido en el error de derecho é infracción del art. 15 del Código, que cita el recurso en el segundo motivo alegado, etc.» (Sentencia de 21 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 10 de Enero de 1888, páginas 58 y 59.)

### Art. 16.

#### QUIÉNES SON ENCUBRIDORES DE UN DELITO.

**CUESTION I.** *El que se concierta con otro para comprarle el trigo que pudiera robar á un tercero, ¿deberá ser calificado de coautor del delito, ó simplemente de encubridor del mismo?*—La Audiencia de lo criminal de Tremp estimó lo primero. Mas el Tribunal Supremo, llamado á resolver el recurso de casación interpuesto por la defensa del reo, por infracción del art. 13 del Código, aplicado en vez del 16 que debió aplicarse, resolvió lo segundo: «Considerando que apareciendo sólo como cierto en la sentencia recurrida el concierto de José Viola con Tomás Arnán para comprarle el trigo que le proporcionase del que Ramón Rius tenía almacenado en el exconvento de San José, no puede deducirse de ello que tomara parte, en ninguna de las formas que precisa el art. 13 del Código penal, en la ejecución del robo de ese mismo trigo, que luego verificó el Arnán con otros dos co-reos en cantidad de seis cuarteras, para que pueda ser calificado Viola, como lo ha sido, de coautor del delito, pues por más que el conocimiento que es de suponer tenía de que la adquisición que aquél podía hacer del trigo no sería legítima, cuando fueron á llevarse á la medianoche, y él los esperaba vestido para recibirlo inmediatamente y hacerse cargo del trigo, que vendió al día siguiente, esta intervención en el delito con posterioridad á su ejecución, auxiliando á los autores con la compra del grano robado para que se aprovecharan de los efectos del mismo, no saca al recurrente de la categoría de encubridor, que es la que le corresponde por sus actos, con arreglo al art. 16 del mismo Código, que la Sala sentenciadora ha infringido al no aplicarlo, como ha infringido el 13 al aplicarlo indebidamente, sacando al Viola de la única esfera en que debió colocarlo, caso de casación previsto en el núm. 3.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, etc.» (Sentencia de 27 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 21 de Abril de 1888, pág. 137.)

**CUESTION II.** *Cométase un delito de sangre en una calle, y uno de los transeúntes recoge del sitio mismo del suceso donde se halla tendido el herido un cuchillo ensangrentado y un estoque y los entrega, para evitar compromisos, al dueño de una tienda para que los guarde, quien, al saber el hecho, tira el cuchillo al pozo y manda á un su dependiente que eche el estoque donde nadie lo coja: ¿determinarán estos actos el encubrimiento que define el núm. 2.º del art. 16 del Código?*—No lo estimó así la Audiencia de lo criminal de Cádiz, que absolvió á dichos sujetos, que acusara el Fiscal como encubridores del delito. Mas interpuesto por dicha representación pú-



hlica recurso de casación por infracción de ley contra la expresada sentencia, alegando como infringido el art. 16, núm. 2.º del Código, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar* á la casación solicitada: «Considerando, en cuanto al recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, que siendo un hecho evidentemente demostrado en la sentencia que Manuel Púa Ruiz recogió del sitio mismo del suceso, donde se hallaba herido gravemente Carbós, un cuchillo ensangrentado y un estoque sin mancha, que entregó para que los guardara, á fin de evitar compromisos, al dueño de la tienda de bebidas Romualdo Rubin, quien tan pronto como supo la comisión del delito tiró el cuchillo al pozo y mandó que saliera fuera un dependiente á que tirase el estoque donde nadie lo cogiera; estos hechos, ejecutados por aquéllos con conocimiento de la perpetración del delito, en que no habían intervenido como autores ni cómplices, con idea de inutilizar los instrumentos del mismo para impedir sin duda el descubrimiento de su autor, que es primordialmente el objeto de la investigación judicial en todo delito conocido, á modo cierto son actos de encubrimiento, perfectamente definidos y previstos en el núm. 2.º del art. 16 del Código penal, que la Sala sentenciadora ha infringido, al no aplicarlo, incurriendo con ello en el error de derecho que señala el núm. 4.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal; en cuya virtud, etc.» (Sentencia de 22 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 16 de Junio, páginas 290 y 291.)

**CUESTION III.** *El que se concierta con unos sujetos para que éstos perpetren un robo, comprometiéndose él á poner en seguridad en su casa los efectos sustraídos, deberá ser considerado como coautor del delito, como cómplice del mismo ó simplemente como encubridor?*—La Audiencia de Burgos estimó lo primero. La defensa del procesado interpuso el recurso, alegando en primer término que fué sólo *encubridor* del delito, y cuando más, *cómplice* del mismo; y el Tribunal Supremo, al *casar* la sentencia reclamada, declaró que la responsabilidad de aquél no era ni la de coautor ni encubridor, pero sí la de *cómplice*: «Considerando que el hecho probado, en concepto de la Sala sentenciadora, de haber obrado Mariano Camarero de acuerdo con los otros penados, cuyo convencimiento deriva de los hechos indiciarios que consigna en los resultandos, demuestra que el recurrente no se limitó á intervenir posteriormente á la ejecución del delito, vendiendo las aves sustraídas, para aprovechar así los efectos del delito, sino que cooperó á la realización de éste por actos anteriores que debieron contribuir á afirmar el propósito criminal de los otros procesados con la perspectiva de tener asegurada la colocación y custodia de dichos efectos, y que la responsabilidad del Mariano Camarero es consiguientemente superior á la del mero encubridor, que no tiene intervención ninguna en el delito sino después de consumado: Considerando que, esto no obstante, la participación de Mariano Camarero en el delito no fué tan eficaz y directa como fuera menester para calificarle de autor, y que, consistiendo la diferencia entre autores y cómplices en la menor graduación de los actos anteriores ó simultáneos realizados por estos últimos, el

concierto de Mariano Camarero con los otros dos penados, Julián Salvatella y Raimundo Santa María, que sólo puede entenderse, según los hechos realizados, para que aquéllos perpetrasen el robo y pusieran en seguridad en casa del Camarero los efectos sustraídos, constituye un acto de mera *complicidad*, bajo cuyo aspecto ha incurrido en error de derecho la Audiencia de Burgos, que calificó de autor al recurrente, etc.» (Sentencia de 26 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 30 de Agosto, páginas 114 y 115.)

**CUESTION IV.** *Cuando en la sentencia recurrida sólo se consigna á cargo del procesado que en su poder se hallaron unos bocoyes de vino hurtados que introdujo en su casa de noche, borrándoles sus marcas distintivas y pintándolas con otro color, sin que diera razón de su legítima procedencia, deberá calificarse la responsabilidad de aquél en concepto de autor del delito, ó de mero encubridor del mismo?*—La Sala de lo criminal de la Audiencia de Valencia estimó lo primero. Mas el Tribunal Supremo, al casar dicha sentencia, declaró lo segundo: «Considerando que para calificar á un acusado por razón de un delito cualquiera como autor del mismo no basta que se diga que ha tenido participación directa en él, sino que es preciso que se señalen los hechos determinantes de tal supuesta participación, pues sólo así es como puede estimarse si han sido bien ó mal apreciados; y la Audiencia de Valencia no hace más que deducir vagamente la participación directa de Ignacio Fayos en un delito de hurto de los hechos que como indiciarios consigna, á saber: el abrir la puerta del corral de su casa á la una de la madrugada para introducir las pipas sustraídas, el haber borrado las marcas distintivas de las mismas, pintándolas con otro color, y el no haber dado razón de su legítima procedencia, sin que por otra parte se diga ni se dé á entender siquiera de qué modo tomó el procesado parte directa en el hurto: Considerando que, esto supuesto, y no revelándose claramente en la sentencia recurrida otro concepto que el del conocimiento que Ignacio Fayos tuvo del delito de hurto perpetrado, el hecho de haber recibido en su casa las pipas sustraídas, sabedor de su legítima procedencia, sólo le hace responsable como encubridor del mismo, á tenor de lo dispuesto en el núm. 1.º del art. 16 del Código: Considerando que la Audiencia de Valencia ha incurrido en error de derecho al calificar y penar á Ignacio Fayos en concepto de autor por participación directa en el delito, sin fundamento de hecho conocido determinante de dicha participación, etc.» (Sentencia de 14 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 4 de Marzo de 1889, pág. 36.)



## CAPÍTULO II

De las personas responsables civilmente  
de los delitos y faltas.

## Art. 20.

SON TAMBIÉN RESPONSABLES CIVILMENTE, EN DEFECTO DE LOS QUE LO SEAN CRIMINALMENTE, LOS POSADEROS, TABERNEROS Y CUALESQUIERA PERSONAS Ó EMPRESAS POR LOS DELITOS QUE SE COMETIEREN EN LOS ESTABLECIMIENTOS QUE DIRIJAN, SIEMPRE QUE POR SU PARTE Ó LA DE SUS DEPENDIENTES HAYA INTERVENIDO INFRACCIÓN DE LOS REGLAMENTOS GENERALES Ó ESPECIALES DE POLICÍA.

**CUESTION.** *En un delito de robo de efectos de un tren, ¿deberá ser considerada responsable civil y subsidiariamente la Empresa del ferrocarril, por el hecho de haber sus empleados ó dependientes dejado de colocar, con arreglo al Reglamento privado de orden interior de la Compañía, el candado correspondiente en la clavija de la puerta del vagón en donde iban los equipajes, materia del robo?*—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Avila, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por infracción del artículo 20 del Código, en virtud del recurso interpuesto por la Compañía interesada, y apoyado *in voce*, en cuanto á dicho extremo, por el Ministerio Fiscal en el acto de la vista: «Considerando que la responsabilidad civil subsidiaria consiguiente á otra criminal, en que el art. 20 del Código penal declara incursoas á las Empresas por los delitos cometidos en los establecimientos que dirijan, siempre que por su parte ó la de sus dependientes intervenga infracción de los reglamentos generales ó especiales de policía, responsabilidad distinta de la que nace de los contratos, y exigible por ello ante los Tribunales de represión, requiere para serlo, á más de la existencia del delito que lo origina, la inobservancia, por unos ó por otros, de preceptos de carácter obligatorio, no voluntario ni facultativo, consignados en concepto de garantía directa ó indirecta ó de precaución en reglamentos dictados por el Poder ó Autoridad pública, encaminados á asegurar, por la obediencia que les es debida, los intereses á cuya defensa ó protección afectan: Considerando que ni la ley de 23 de Noviembre de 1877, ni el Reglamento de 8 de Septiembre de 1878, dictado para la ejecución de esa misma ley de Policía de los ferrocarriles, ni otra disposición de semejante carácter que haya sido promulgada, impone á las Empresas de caminos de hierro el deber de llevar constantemente cerrados con candado, durante la marcha de los trenes, los carruajes ó furgones destinados al transporte de equipajes, ni de la sentencia reclamada aparece si quiera como elemento de hecho, que en su caso debió contener, que tal precaución, en el supuesto que se indica, aunque no se afirma, de estar acordada por la Compañía recurrente entre las

instrucciones de su régimen y servicio interiores, dejara de ser revocable á su voluntad absoluta ó parcialmente; y Considerando, por tanto, que al declararse á dicha Compañía subsidiariamente obligada á indemnización derivada de delito de robo, sin constar su autor, ni que interviniera infracción de reglamentos oficiales de policía, se ha cometido la del citado art. 20 del Código penal, cuya inaplicación al caso procesal en los términos dichos no afecta á las relaciones jurídicas, ni prejuzga los derechos y deberes nacidos del contrato de transporte entre la Empresa porteadora y los remitentes y consignatarios que sufrieron perjuicio, etc.» (Sentencia de 31 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 14 de Mayo, pág. 256.)

### CAPÍTULO III

#### De la duración y efectos de la pena.

##### SECCIÓN SEGUNDA.

##### EFECTOS DE LAS PENAS SEGÚN SU NATURALEZA RESPECTIVA.

#### Art. 50... 2.ª

CUANDO LA PENA PRINCIPAL IMPUESTA NO SE HUBIERE DE CUMPLIR POR EL REO ENCERRADO EN UN ESTABLECIMIENTO PENAL Y TUVIERE FIJADA SU DURACIÓN, CONTINUARÁ SUJETO, POR EL TIEMPO SEÑALADO EN EL NÚMERO ANTERIOR, Á LAS MISMAS PRIVACIONES EN QUE CONSISTA DICHA PENA.

**CUESTION.** *Cuando la Ley castiga un delito con las penas de destierro y multa, como sucede, por ejemplo, en el caso del artículo 473 del Código, deberá estimarse la multa como pena principal y condenarse al reo insolvente respecto del pago de la misma y de las costas del acusador privado, á que sufra en la cárcel de partido la detención que establece la regla 3.ª del art. 50 del Código, ó deberá, por el contrario, entenderse que la pena principal es, en este caso, la de destierro, y suplirse por lo tanto el pago de la multa y costas antedichas con la continuación del propio destierro, con sujeción á la regla 2.ª del art. 50 y por el tiempo señalado en la regla 1.ª del mismo?*—En cierta causa por injurias graves, la Audiencia de Santander condenó al culpable á la pena de seis meses y un día de destierro, multa y costas y al arresto, caso de insolvencia de la multa y de las costas del acusador privado. Mas interpuesto á nombre del procesado recurso de casación contra dicha sentencia por infracción del art. 52, regla 2.ª del Código, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar á él*: «Considerando que los motivos de casación expuestos y las infracciones alegadas determinan como única cuestión del recurso si la responsabilidad personal subsidiaria de la procesada, por falta de bienes para satisfacer la pecuniaria, debe imponerse conforme á la regla 1.ª



del art. 50 del Código penal, como lo ha efectuado el Tribunal sentenciador, ó con sujeción á la regla 2.<sup>a</sup> del mismo artículo: Considerando que la precitada regla 1.<sup>a</sup> es inaplicable, y al aplicarla ha sido infringida, porque la pena de destierro no presupone ni exige la detención del reo en un establecimiento penal: Considerando que, excluida la regla 1.<sup>a</sup>, debe determinarse cuál de las dos restantes rige cuando, impuesta la pena de destierro, haya de exigirse responsabilidad personal subsidiaria por el importe de las costas del acusador privado y de la multa: Considerando que la regla 2.<sup>a</sup> del mencionado artículo alude á la imposición de penas conjuntas sin expresarias, estableciendo como régimen de la responsabilidad subsidiaria la pena estimable como principal, y que la regla 3.<sup>a</sup> se refiere al caso en que la sanción penal sea de reprensión, multa ó caución: Considerando que para fallar en esta causa ha de apreciarse cuál de las penas de destierro y multa revista el carácter de principal: Considerando que las penas en su clasificación técnico-jurídica son únicamente aflictivas, correccionales, leves, comunes y accesorias, y que el adjetivo principal sólo se usa para distinguirlas de las accesorias, ó para establecer relativa calificación entre las comunes ó conjuntas: Considerando que para aquilatar esta relación debe atenderse tanto al orden prelativo de las penas como á su respectiva gravedad é importancia: Considerando que, según el art. 93 del Código vigente, la multa es la pena última de todas las escalas graduales del artículo anterior; que el destierro implica limitación de libertad; que esta pena es muy superior en gravedad é importancia á una mera exacción pecuniaria, y que sería injusto suplir esta responsabilidad por la privación absoluta de libertad cuando no la comprende el destierro: Considerando, por tanto, que atendidas las penas impuestas en el fallo, debe estimarse como principal la de destierro; que es, en su consecuencia, aplicable la regla 2.<sup>a</sup> del art. 50, y que por no haberla aplicado el Tribunal á *quo* resulta infringida, etc.» (Sentencia de 3 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 4 de Enero de 1888, páginas 3 y 4.)

## CAPÍTULO IV

### De la aplicación de las penas.

#### SECCIÓN PRIMERA

REGLAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS PENAS Á LOS AUTORES DE DELITO CONSUMADO, DE DELITO FRUSTRADO Y TENTATIVA Y Á LOS CÓMPLICES Y ENCUBRIDORES.

#### Art. 65.

APLICACIÓN DE LA PENA EN LOS CASOS EN QUE EL DELITO EJECUTADO ES DISTINTO DEL QUE SE PROPUSO EJECUTAR EL CULPABLE.

**QUESTION.** ¿Qué circunstancias se requieren para que proceda la aplicación de art. 65 del Código penal?—A esta pregunta con-

testa cumplidamente el siguiente considerando: «Considerando que la aplicación del art. 65 del mismo Código, que desarrolla el principio establecido en el 1.º, según el cual el que cometiere voluntariamente un hecho incurre en responsabilidad aunque el mal ejecutado sea distinto, exige la realidad de dos hechos: uno el delito ejecutado, que aquí es el de homicidio; y segundo, que el culpable se propusiese ejecutar otro distinto de éste, extremo que ni se alega con determinación ni acerca del cual la sentencia indica en el culpable propósito diferente al de dañar á la persona víctima de aquél; cuyo propósito y acción, adecuada al resultado, excluyen además la infracción alegada, etc.» (Sentencia de 28 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 10 de Marzo de 1889, páginas 58 y 59.)]

### Art. 66.

PENA DEL "AUTOR" DE DELITO FRUSTRADO.

Véase el art. 400.

### SECCIÓN SEGUNDA

REGLAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS PENAS EN CONSIDERACIÓN Á LAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES.

### Art. 79.

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES QUE NO PRODUCEN EL EFECTO DE AUMENTAR LA PENA.

**CUESTION.** *Calificado un delito de asesinato por haberse verificado por medio de incendio, deberá estimarse además este último delito y castigar al culpable con la pena del más grave en su grado máximo, con arreglo al art. 90 del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que, constituyendo el incendio elemento integrante del delito de asesinato, no puede estimarse á la vez como delito especial, porque con tal calificación resultaría apreciado y consiguientemente castigado dos veces, una como medio determinante de un gravísimo delito, que no lo sería tanto sin el uso de tal medio, y otra con independencia del mismo, con manifiesta infracción de los principios fundamentales de derecho penal sancionados en el art. 79 del Código, puesto que si las circunstancias agravantes inherentes á un delito no producen el efecto de aumentar la pena á virtud de su ordinario valor jurídico, menos deben ser aisladamente apreciadas como delitos distintos, productores de mayor responsabilidad, etc.» (Sentencia de 29 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 6 de Enero de 1888, páginas 31 y 32.)



**Art. 80 (Párrafo segundo).**

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES QUE CONSISTEN EN LA EJECUCIÓN MATERIAL DEL HECHO Ó EN LOS MEDIOS EMPLEADOS PARA REALIZARLO.

**QUESTION.** *La circunstancia agravante de alevosía concurrente en un delito de asesinato determinado ya por haber mediado precio, será aplicable como genérica aun á los que no concurrieron á la ejecución del crimen, si éstos fueron los que mediante el precio indujeron á los autores materiales, diéronles instrucciones sobre el modo y forma de cometer el delito y no ignoraban que la muerte había de ser alevosa, puesto que al efecto indicaron el sitio donde habían de colocarse aquellos en acecho y hasta les facilitaron el arma para realizarlo?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que determinado el delito de asesinato, por haber mediado precio ó promesa remuneratoria, la circunstancia de alevosía, apreciable con carácter de agravante genérica, por serlo en todo caso, cuando otra semejante integra la calificación jurídica del hecho punible, es aplicable no sólo al ejecutor material, sino á todos los otros procesados; porque según el párrafo segundo del art. 80 del Código penal, «las circunstancias agravantes, que consisten en la ejecución material del hecho, ó en los medios empleados para realizarlo, agravan la responsabilidad de los que tienen conocimiento de ellas en el momento de la acción ó de su cooperación para el delito»; en cuyos dos casos se encuentran respectivamente Insa, Gambín y Navarrete, aquél porque la conoció al realizarse el delito y contribuyó á que así se realizara, y estos otros porque al inducir, que fué el momento principal de su cooperación, y dar instrucciones sobre los modos y medios de consumar el delito, tuvieron conocimiento de que habría de ser alevosa la muerte, para lo cual señalaron el sitio de acecho y facilitaron el arma, etc.» (Sentencia de 27 de Octubre de 1888, publicada en las Gacetas de 12 y 15 de Enero de 1889, páginas 16, 17 y 18.)

**Art. 81.**

APLICACIÓN, SEGÚN LOS CASOS, DE LA PENA COMPUESTA DE DOS INDIVISIBLES.

**QUESTION.** *En el caso de un parricidio ó otro delito castigado con la pena de cadena perpetua á muerte, aun cuando concurren dos ó más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, ¿podrá tomarse, como regla supletoria del art. 81, la 5.ª del 82, é imponer en su virtud al culpable la pena inmediatamente inferior á la señalada por la Ley al delito, ó deberá limitarse la atenuación de la pena á la imposición de la misma en su grado mínimo?*—La Sala de lo criminal de la Audiencia de Sevilla estimó lo primero é impuso al procesado, autor de parrici-

dio con tres circunstancias atenuantes y ninguna agravante, la pena de doce años y un día de cadena, ó sea la *inmediata inferior en grado* á la señalada por el art. 417. Mas interpuesto por el Ministerio Fiscal recurso de casación contra dicha sentencia, alegando que á pesar de las atenuantes del hecho, la pena imponible era la de *cadena perpetua*, con arreglo al art. 81 del Código, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar* al expresado recurso: «Considerando que en los casos en que la Ley señalare al delito una pena compuesta de dos indivisibles, y en el hecho hubiere concurrido alguna circunstancia atenuante y ninguna agravante, los Tribunales impondrán la pena menor de las dos indivisibles señaladas al delito, conforme á lo dispuesto en la regla 3.<sup>a</sup> del párrafo segundo del art. 81 del Código penal: Considerando que siendo la pena señalada al delito de parricidio de cadena perpetua á muerte, según lo que dispone el art. 417 del Código, la que debe imponerse cuando sólo concurren circunstancias atenuantes es la de cadena perpetua, por ser la menor, cualquiera que sea el número y entidad de esta clase de circunstancias que concurren, puesto que, por muy calificadas que sean, no producen el efecto de rebajar la pena al grado inferior, lo cual sólo tiene lugar, según la disposición terminante del art. 82, regla 5.<sup>a</sup>, en los casos en que la pena señalada al delito contenga tres grados, bien sea una sola pena divisible, bien sea compuesta de tres distintas, en cuyo caso cada una de ellas forma un grado de penalidad: Considerando, por lo tanto, que al imponer la Sala sentenciadora la pena inferior en grado á la señalada en el Código para los autores del delito de parricidio, por calificadas que sean las circunstancias atenuantes apreciadas por la misma, ha incurrido en error de derecho, é infringido las disposiciones legales que se citan como fundamentos del recurso, etc.» (Sentencia de 18 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 5 de Junio, pág. 288.)

### Art. 82 (Regla 5.<sup>a</sup>).

CONCURRENCIA DE DOS Ó MÁS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES MUY CALIFICADAS, SIN NINGUNA AGRAVANTE.

**CUESTION.** *¿Deberán ser consideradas como muy calificadas, á los efectos de la regla 5.<sup>a</sup> del art. 82 del Código, las circunstancias atenuantes de provocación y arrebató cuando concurren simultáneamente en la comisión de un delito?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que aun supuesta la concurrencia de la provocación y arrebató y obcecación, nunca podrían ser tenidas como muy calificadas, porque, según el precepto de la regla 5.<sup>a</sup> del art. 82 del Código penal, no sólo supone la distinción de actos generadores de las mismas, independientes entre sí, sino que por su naturaleza obren con tal eficacia sobre la libertad del agente que influyan sobre ella de modo que merezcan ser estimados en el expresado concepto, etc.» (Sentencia de 30 de Noviembre de 1887, publicada en las *Gacetas* de 11 de Enero y 4 de Abril de 1888, páginas 68 y 69.)



SECCIÓN TERCERA.

DISPOSICIONES COMUNES Á LAS DOS SECCIONES ANTERIORES.

Art. 88.

AL CULPABLE DE DOS Ó MÁS DELITOS Ó FALTAS DEBE IMPONÉRSELE TODAS LAS PENAS CORRESPONDIENTES Á LAS DIVERSAS INFRACCIONES QUE HA COMETIDO.

**CUESTION I.** *¿La unidad del móvil será bastante á determinar la unidad del delito cuando los actos ejecutados lo han sido en sitios distintos, han recaído en diferentes personas y mediado entre uno y otro cierto espacio de tiempo?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que las violencias ejecutadas por la recurrente contra los guardias de Seguridad que, hallándose ejerciendo las funciones de su cargo, y con ocasión de ellas, trataron de detenerla, no lo fueron á la vez y en el mismo acto, sino que tuvieron lugar en sitios distintos, recayendo en diferentes personas, mediando entre una y otra cierto espacio de tiempo, siendo las primeras producidas con ocasión de la detención de la Laureana Lucía Santa María por escándalo producido con su marido, y las segundas al acudir con el mismo objeto otra pareja, noticiosa de los malos tratamientos inferidos á la primera, y que dichos actos constituyen dos delitos independientes de atentado á los agentes de la Autoridad, poniendo manos en ellos, previstos y penados en el núm. 2.º del art. 263 y último párrafo del 264 del Código penal, etc.» (Sentencia de 8 de Octubre de 1887, publicada en la Gaceta de 23 de Noviembre, páginas 337 y 338.)

**CUESTION II.** *Aun cuando se haya perpetrado el delito de robo en una misma habitación y siendo uno mismo el perjudicado, si se realizó aquél en dos noches distintas, ¿deberán calificarse y penarse dos delitos de robo ó uno sólo?*—La siguiente Sentencia del Tribunal Supremo demuestra que en tal caso son dos los delitos que hay que castigar: «Considerando que perpetrado el delito de robo en dos distintas noches, por más que éste fuese ejecutado en una misma habitación y uno solo el perjudicado, dicha circunstancia constituye dos actos distintos é independientes, y, por lo tanto, han debido ser calificados de dos delitos de robo, etc.» (Sentencia de 17 de Noviembre de 1887, publicada en la Gaceta de 5 de Enero de 1888, pág. 15.)

**CUESTION III.** *El que con una pistola dispara dos tiros á un sujeto é inmediatamente con arma cortopunzante le inflige lesiones menos graves, ¿deberá ser responsable separadamente de cada uno de dichos dos delitos, de disparo el uno, y de lesiones el otro, ó tan sólo del más grave en el grado máximo, con arreglo al artículo 90?*—Esto último estimó la Audiencia de lo criminal de Avila, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por infracción

en este caso del art. 88 del Código, que es el que debió aplicarse: «Considerando que la única cuestión planteada y discutida en este recurso consiste en si el doble disparo de pistola que, sin otras consecuencias que una ligera contusión que no exigió asistencia facultativa, hizo el recurrente Benigno Peralta Rivero contra Antonio Bermejo, y las lesiones menos graves que, con arma cortopunzante le infligió después, aunque *sin pérdida de tiempo*, según la frase de la sentencia, es un solo hecho constitutivo de dos delitos, y debe tener aplicación el art. 90 del Código penal, como ha creído la Audiencia de lo criminal de Avila; ó, por el contrario, si el disparo y las lesiones inferidas con arma blanca, aunque inmediatamente después del disparo, son, como sostiene el recurso, dos hechos distintos que constituyen dos delitos que deben castigarse con las penas correspondientes á cada uno de ellos, conforme con lo que se dispone en el art. 88 del Código: Considerando que de los hechos que la sentencia reclamada consigna como probados aparece primero el disparo y después la agresión y lesiones con arma blanca, y no puede confundirse en un solo hecho dos acciones distintas, separadas en el tiempo y hasta por las diversas armas de que se valió el recurrente: Considerando que al estimar la Audiencia de lo criminal de Avila como un solo hecho el disparo de arma de fuego que hizo el recurrente contra Antonio Bermejo y la agresión posterior que produjo á éste las lesiones menos graves inferidas con arma blanca, ha incurrido en error de derecho y ha infringido, por indebida aplicación, el art. 90 del Código y el 88 del mismo, por no haberlo aplicado, ambos citados por el recurso, etc.» (Sentencia de 22 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 12 de Mayo, pág. 235.)

### Art 89 (Regla 2.ª).

EL MÁXIMUM DE DURACIÓN DE LA CONDENA DEL CULPABLE NO PODRÁ EXCEDER DEL TRIPLE DE TIEMPO POR QUE SE LE IMPUSIERE LA MÁS GRAVE DE LAS PENAS EN QUE HAYA INCURRIDO, DEJANDO DE IMPONÉRSELE LAS QUE PROCEDAN, DESDE QUE LAS YA IMPUESTAS CUBRIEREN EL MÁXIMUM DEL TIEMPO PREDICHO.

**QUESTION.** *La limitación en la imposición de las penas establecida en la regla 2.ª del art. 89 del Código, ¿será sólo aplicable á los delitos que se persigan en un mismo procedimiento?*—El Tribunal Supremo, modificando su anterior jurisprudencia (V. *Suplemento* 2.º, Cuestión I y II, páginas 105 y 106), ha resuelto la afirmativa: «Considerando respecto al primer motivo aceptado del recurso y adhesión al mismo del Ministerio Fiscal que, procesados los recurrentes por seis distintos delitos de hurto, de los que uno se ha perseguido en esta causa con absoluta independencia de los demás, que lo han sido todos en otra distinta, por haberse acordado por la Audiencia, á virtud de las atribuciones que el número 5.º del art. 17 de la ley de Enjuiciamiento criminal le concede para apreciar la relación ó analogía que entre sí tengan unos hechos con otros, la formación de ramo separado, mal pudo tener



aquella causa como parte de ésta, habiéndose terminado una y otra en distintas fechas y tenido diferente sustanciación, y menos pudo aún aglomerar después las penalidades de todos los delitos, cual en el recurso se sostiene á los efectos del núm. 2.º del artículo 89 del Código penal, porque este artículo *es sólo aplicable á los delitos que se persiguen en un mismo procedimiento, etc.*» (Sentencia de 23 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 29 de Agosto, pág. 109.)

### Art. 90.

APLICACIÓN DE LA PENA CUANDO UN SOLO HECHO CONSTITUYE DOS Ó MÁS DELITOS, Ó CUANDO UNO DE ELLOS ES MEDIO NECESARIO PARA COMETER EL OTRO.

**CUESTION.** *Cuando por la explosión de una materia de gran potencia se produce por el culpable alevosa y premeditadamente la muerte de dos personas en el mismo instante, y se aplica por el Tribunal sentenciador al procesado la pena del delito de asesinato en el grado máximo, ¿cabrá alegar válidamente en casación la infracción del art. 90 del Código por aplicación indebida y extensiva interpretación, y la del 88, que sería en su caso el aplicable, porque el precepto de aquél se contrae á delitos de diversa gravedad, pero no á delitos idénticos?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que justificada la intención del procesado D. Ricardo Peris de matar á D. Manuel Palomero por el medio que lo realizó, recayendo á la vez su acción en D.ª Dolores González, es evidente la existencia de dos delitos de asesinato efecto del mismo hecho, y por más que su voluntad no se dirigiera contra la D.ª Dolores, los son imputables legalmente las muertes de ambos, según la prescripción terminante del párrafo final del artículo 1.º del Código penal, cuyos delitos no deben pensarse separadamente, sino de la manera y en la forma que especialmente prescribe y determina el art. 90 del expresado Código, etc.» (Sentencia de 5 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 19 de Noviembre, pág. 316.)

Véase además el art. 521.

### Art. 95.

REGLA PARA ELEVAR Ó BAJAR LA PENA DE MULTA UNO Ó MÁS GRADOS.

**CUESTION.** *¿Cómo deben formarse los grados inferiores de la pena de multa con arreglo al art. 95 del Código?*—Al ocuparnos de esta cuestión en el comentario de dicho artículo (V. Código penal concordado y comentado, tercera edición, pág. 139), opinamos nosotros que dada la redacción del mismo, tanto para formar los grados superiores como los inferiores de la multa, había que añadir ó restar del máximo la cuarta parte, pero sin tocar al mínimo, que había de quedar siempre el mismo, añadiendo á esta nuestra opinión la advertencia de que la disposición de la Ley,

por lo menos tal cual lo entendíamos nosotros, no nos parecía de todo acertada, ya que para que hubiese verdadero ascenso ó descenso deberían verificarse uno y otro aumentando ó rebajando dicha cuarta parte respectivamente, tanto del maximum como del minimum. Pues bien: el Tribunal Supremo, en el primer recurso de casación interpuesto precisamente por el Ministerio Fiscal para provocar una decisión de aquél sobre tan importante extremo, ha resuelto el caso en contra de nuestra opinión, aunque á favor de nuestro deseo, declarando que los grados inferiores de la pena de multa deben formarse rebajando la cuarta parte, tanto del minimum como del maximum, pero sin que pueda rebasar el primero el límite de 125 pesetas: «Considerando en cuanto á la segunda cuestión promovida por el Ministerio Fiscal, relativa á la manera de formar los grados inferiores de la pena de multa con arreglo al art. 95 del Código, que del contexto de dicho artículo se infiere que los grados inferiores de dicha pena deben formarse reduciendo el maximum y el minimum de la señalada al delito, ó sea rebajando al efecto por cada grado inferior la cuarta parte de este mismo minimum, como se rebaja del maximum sus cuartas partes, sin que pueda rebasar dicho minimum el límite de 125 pesetas, determinante del carácter correccional de la pena de multa, etc.» (Sentencia de 15 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 7 de Septiembre, pág. 133.)

## TÍTULO V

DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS QUE QUEBRANTAN LAS SENTENCIAS Y LOS QUE DURANTE UNA CONDENA DELINQUEN DE NUEVO.

### CAPÍTULO I

De las penas en que incurren los que quebrantan las sentencias,

#### Art. 129 (Regla 3.ª).

LOS SENTENCIADOS Á PRESIDIO, PRISIÓN Ó ARRESTO QUE HUBIEREN QUEBRANTADO SU CONDENA, SUFRIRÁN UN RECARGO DE LA MISMA PENA, QUE NO PODRÁ EXCEDER DE LA SEXTA PARTE DEL TIEMPO QUE LES FALTARE POR CUMPLIR SU PRIMITIVA CONDENA.

**CUESTION.** *¿Será responsable del delito de quebrantamiento de condena el penado que, aprovechando un descuido de los vigilantes, sale del establecimiento penal, da algunos paseos por el pueblo y al cabo de una hora vuelve espontáneamente á la cárcel?*—No lo estimó así la Audiencia de lo criminal de Cangas de Onís, fundándose en que, para que exista dicho delito, son condiciones



esenciales la voluntad y el hecho de evadirse de cumplir la condena ó de hacerla ilusoria, lo cual no se propuso el procesado al abandonar la cárcel y al regresar á ella espontáneamente. Mas interpuesto por el Ministerio Fiscal recurso de casación contra dicha sentencia, por infracción de los artículos 129, regla 3.ª, y último párrafo del 130 del Código, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar á éli*: «Considerando que comete el delito de quebrantamiento de condena el que, extinguiendo la de presidio correccional en el establecimiento destinado al efecto, se fuga, y permaneciendo más ó menos tiempo fuera del establecimiento, se procura la libertad de que estaba privado, sin que el hecho de volver espontáneamente á la prisión borre la infracción legal que castiga el núm. 3.º del art. 129 del Código penal, en relación con el último párrafo del 130: Considerando que, en este concepto, el Tribunal sentenciador, al absolver á Pedro Celestino Prieto, que estaba extinguiendo condena en la cárcel de Cangas de Onís, ha infringido los artículos que cita el Ministerio Fiscal, y es procedente el recurso, etc.» (Sentencia de 22 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 29 de Septiembre, páginas 204 y 205.)

## CAPÍTULO II

**De las penas en que incurren los que, después de haber sido condenados por sentencia firme no cumplida ó durante el tiempo de su condena, delinquen de nuevo.**

### Art. 131.

**PENA ESPECIAL PARA LOS QUE COMETEN UN DELITO Ó FALTA DESPUÉS DE CONDENADOS POR SENTENCIA FIRME, Ó DURANTE EL TIEMPO DE SU CONDENA.**

**CUESTION.** *La agravación especial de penalidad que impone el art. 131 del Código á los que cometen un delito después de haber sido condenados por sentencia firme no empezada á cumplir ó durante el tiempo de su condena, ¿será extensiva al caso en que el culpable del nuevo delito hubiere sido condenado ejecutoriamente ó estuviere cumpliendo su condena por un delito exclusivamente militar?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que los que cometieren algún delito durante el tiempo de una condena anterior serán castigados, según la regla 1.ª del artículo 131 del Código, con la pena señalada al nuevo delito en su grado máximo: Considerando que castigado con anterioridad el recurrente Gregorio Blasco Hurtado en seis años y un día de prisión militar por el delito de segunda desertión, y hallándose sufriendo esta condena en la cárcel de Serranos de Valencia cuando infringió las lesiones graves que han dado origen á su proceso, no puede dudarse que se hizo merecedor de la pena señalada á las referidas lesiones graves en su grado máximo, ya porque aquella disposición legal no distingue entre una y otra clase de

presidarios, y ya porque, fundándose la agravación que determina en la falta de enmienda y arrepentimiento, es justo que se aplique á dicho Blasco, que no ha dado pruebas de éste, cometiendo un nuevo delito; y Considerando que estas razones de derecho han servido de fundamento al fallo condenatorio dictado por la Audiencia de Valencia, en el que no se han infringido los artículos 131 y 83 del Código, ni se ha incurrido en el error que se invoca en el recurso, etc.» (Sentencia de 7 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 6 de Abril de 1888, pág. 85.)

## TÍTULO VI

### DE LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL.

#### Art. 133.

##### TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS.

**QUESTION.** *La circunstancia agravante de reincidencia, ¿será prescriptible con arreglo al art. 133 del Código?*—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Talavera, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo, á excitación del Ministerio Fiscal recurrente: «Considerando que si bien el transcurso del tiempo desde la primera sentencia que condenó al procesado Casimiro Muñoz por los delitos de hurto es suficiente, con arreglo á lo dispuesto en el art. 133 del Código, para que aquéllos hubiesen prescrito, no es razón para suponer, como con manifiesto error hace la Audiencia sentenciadora, prescrita por ello la circunstancia de reincidencia, porque ni para ésta ni para ninguna de las que el Código consigna existe disposición alguna que las haga prescriptibles, etc.» (Sentencia de 21 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 19 de Julio, páginas 9 y 10.)



## LIBRO SEGUNDO

### Delitos y sus penas.

## TÍTULO II

### DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN.

#### CAPÍTULO I

#### Delitos de lesa majestad, contra las Cortes, el Consejo de Ministros y contra la forma de gobierno.

##### SECCION PRIMERA

##### DELITOS DE LESA MAJESTAD

#### Art. 162.

INJURIAS Ó AMENAZAS AL REY POR ESCRITO Y CON PUBLICIDAD FUERA DE SU PRESENCIA.

**CUESTION I.** *¿Será constitutiva de injuria, y, por ende, del delito de lesa majestad, comprendido en el art. 162 del Código, la siguiente frase estampada en un artículo de periódico: «Y si por acaso alguna vez se levantara á defender tímida y vergonzosamente á la actual dinastía, es seguro que el que tal haga lo hace defendiendo sus intereses. Sin temor de equivocarse, es un empleado público ó un poseedor de papel del Estado?»—Así lo pretendió el Ministerio Fiscal al recurrir contra el fallo absolutorio dictado por la Audiencia de Burgos. Mas el Tribunal Supremo mantuvo la absolución decretada por ésta, por no constituir delito el hecho procesal: «Considerando que, conforme á los artículos 471 y siguientes del Código penal, comete injuria quien con ánimo de causar deshonor, descrédito ó menosprecio de alguna persona, de palabra ó por actos, le atribuye ó imputa acción ó cualidad de que racionalmente se derive en las circunstancias ó condiciones en que se haga semejante ofensa para el honor y fama: Considerando que las frases materia de este proceso no atribuyen ni imputan á la augusta persona de S. M. el Rey acción ni cualidad ninguna de tal carácter, ni en concepto, ni dentro de la natural amplitud del concepto expresado con la palabra Dinastía que, si realmente contienen imputación, más bien se dirige á personas*

distintas de ella; y porque no debe racionalmente entenderse siempre que lo que se defiende tímida y vergonzosamente, ó sea con temor, ó con miedo, ó con irresolución, ó con cortedad, sentido natural y propio de aquellos adversarios (1), ha de ser precisa y necesariamente lo indigno y abyecto; ya que el modo de defender antes deriva de las condiciones del defensor que de la entidad defendida, á la cual pueden ó no acomodarse, con independencia de ésta, los medios y formas por aquél empleados; y Considerando que, por esta razón, la Audiencia sentenciadora no ha cometido los errores de derecho y las infracciones que se le atribuyen, porque, no siendo constitutivo de injuria el hecho procesal, no existen el delito de lesa majestad ni responsabilidad exigible, etc.» (Sentencia de 21 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 19 de Abril de 1888, páginas 123 y 124.)

**CUESTION II.** *El decir en un periódico «que el liberalismo, ó sea el alfonsismo, en contraposición al carlismo, está condenado por la Iglesia y no es lícita su defensa desde ningún lugar, ni por católico alguno,» ¿constituirá el delito de injurias á S. M. el Rey, previsto y penado en el art. 162 del Código?»*—Contra la opinión del Ministerio Fiscal, que recurrió en casación contra el fallo absolutorio del Tribunal que conoció del hecho, el Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que es injuria, según la define el art. 471 del Código penal, toda expresión proferida ó acción ejecutada en deshonra, descrédito ó menosprecio de otra persona; y conforme á esta disposición es indispensable que la expresión, acción, frase ó concepto injurioso aparezca sin género alguno de duda dirigido á persona determinada, sin cuya precisa circunstancia no existe el delito; Considerando que si bien los conceptos y afirmaciones consignados en el artículo «El liberalismo,» publicado en el periódico tradicionalista *La Fidelidad Castellana*, y que ha sido objeto de la denuncia, revelan una marcada tendencia á atacar la institución monárquico-constitucional en contraposición con la monarquía absoluta, es lo cierto que no pueden determinarse palabras ni conceptos que inferan injurias á S. M. el Rey D. Alfonso XIII, porque dichas afirmaciones dirigidas á una agrupación ó partido político, y cualquiera que sea el alcance que se les dé, no se pueden suponer encaminadas á la augusta persona del Rey como Jefe supremo del Estado, porque esta alta investidura, consignada en la Constitución, la tiene con relación á toda la Monarquía y no sobre determinado partido político, por numeroso y respetable que sea: Considerando, por lo expuesto, que al absolver la Audiencia de Burgos á D. Desiderio José Castells no ha cometido ninguna de las infracciones legales ni errores de derecho que han motivado este recurso, etc.» (Sentencia de 26 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 21 de Abril de 1888, páginas 137 y 138.)

(1) Así dice la *Gaceta*, debiendo decir «adverbios.»



## Art. 164.

INJURIAS Ó AMENAZAS AL REGENTE DEL REINO, HECHAS POR ESCRITO Y CON PUBLICIDAD FUERA DE SU PRESENCIA.

**CUESTION.** *El llamar «extranjera» á la Reina Regente, y después de calificar de «bochornosos» ciertos proyectos de ley votados en Cortes, decir que dicha augusta señora los sancionará y firmará todos, ¿constituirá el delito de injurias á la Reina Regente, comprendido en el art. 164 del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que, sirviendo de fundamento dicho artículo y número al recurso por infracción de ley, deducido á nombre de Antonio Pérez Velasco, no puede ser estimado, porque del contexto todo del artículo, cuyo epígrafe es «La sanción regia,» publicado bajo su dirección en el periódico *El Progreso*, aparecen, en primer lugar, graves imputaciones contra los Ministros de la Corona, á quienes tacha de inmorales, suponiendo que explotan el país y dilapidan el dinero del contribuyente, conceptos éstos y otros igualmente injuriosos, que determinan el delito de desacato, y en segundo, porque constituyen el de lesa majestad, penado en el art. 164 del Código, aquellos que tienden á rebajar el mejor concepto público y la dignidad y acierto con que ejerce la sanción regia la augusta persona de la Reina Regente, á quien después de llamarla extranjera la atribuye intencional y maliciosamente la mayor indiferencia en el uso de aquella prerrogativa constitucional, toda vez que presta su asentimiento á los proyectos de ley votados por las Cortes, que califica de negocios bochornosos, etc.» (Sentencia de 9 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 12 de Abril de 1888, páginas 91 y 92.)

## SECCIÓN TERCERA

## DELITOS CONTRA LA FORMA DE GOBIERNO

## Art. 181.

QUIÉNES SON REOS DE DELITO CONTRA LA FORMA DE GOBIERNO.

Véanse los artículos 185 y 582,

## Art. 185.

DELITO CONTRA LA FORMA DE GOBIERNO SIN ALZAMIENTO  
NI HOSTILIDAD ABIERTA CONTRA ÉSTE.

**CUESTION.** *Aun cuando la coalición republicana no tenga en definitiva más objeto que el reemplazar con esta forma de gobierno el monárquico-constitucional que rige en España, la defensa que de aquélla se haga en periódicos ó discursos, ¿constituirá el de-*

*lito contra la forma de gobierno, previsto y penado en el artículo 185 del Código, en relación con el 181, núm. 1.º del mismo?—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que el artículo del periódico semanal que se publica en Segorbe con el título *La Nueva Unión*, copiado en el resultando primero de la sentencia recurrida, como constitutivo del delito que ha sido materia del juicio, no contiene frase ni concepto alguno que de lejos ni de cerca pueda estimarse como provocación directa ó fuera de las vías legales á cambiar la forma de gobierno establecida en la Constitución, ni menos se encuentra en dicho artículo denunciado el propósito de sustraer al Ejército de la obediencia al Gobierno constituido; Considerando que el citado artículo, que la Audiencia de lo criminal de Castellón de la Plana ha estimado justificable, no tiene otro alcance que defender la coalición republicana, lo cual es permitido, en uso del derecho que á todo ciudadano otorga la Constitución del Estado para emitir libremente sus ideas y opiniones dentro de los límites que señalan las leyes; Considerando que en este concepto la sentencia reclamada ha incurrido en el error de derecho ó infracción legal que le atribuye el recurso, etc.» (Sentencia de 29 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 31 de Diciembre, pág. 361.)*

## CAPÍTULO II

**De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos individuales garantizados por la Constitución.**

### SECCIÓN SEGUNDA

**DE LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CONTRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES SANCIONADOS POR LA CONSTITUCIÓN**

#### Art. 210.

**DETENCIÓN DE UN CIUDADANO, Á NO SER POR RAZÓN DE DELITO, NO ESTANDO EN SUSPENSO LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.**

**CUESTION.** *Los Alcaldes ó Gobernadores civiles están autorizados por alguna Ley del Reino para detener á los ciudadanos españoles por carecer en un determinado momento de documentos justificativos de su personalidad?—Aun cuando hayan procedido á la detención del ciudadano por presunta responsabilidad criminal de éste, incurrirán en el delito de detención arbitraria ó ilegal si no lo pusieron á disposición de la Autoridad judicial?—¿Será imputable á los mismos la total duración de la detención, aun cuando se haya dilatado ésta sin culpa de otras personas, por razón de los mismos medios empleados por dichas Autoridades para la conducción del detenido de un punto á otro?—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa sobre el primer punto y la afirmativa sobre los demás. Véanse los fundamentos de tan importante*



resolución: «Considerando que el art. 210 del Código penal castiga al funcionario público que, no estando en suspenso las garantías constitucionales, detuviere á un ciudadano, á no ser por razón de delito: Considerando que el primero de los considerandos de la sentencia reclamada afirma, de conformidad con los hechos establecidos en los resultandos, que la causa de la extensión (1) de Payá fué la de no llevar los documentos que acreditaran su personalidad, omisión que no es constitutiva de delito: Considerando que no habiendo procedido el Alcalde de Alcoy á la detención de dicho Payá por razón de presunta responsabilidad criminal de éste, la cual, en su caso, le hubiera obligado á poner al supuesto reo á disposición de la Autoridad judicial, por virtud de lo mandado en los artículos 282, 284 y 496 de la ley de Enjuiciamiento criminal, incurrió en el delito por que ha sido penado, como hubiera incurrido, según lo dispuesto en la última de esas citadas disposiciones aun en el caso de proceder por causa de delito, por el mero hecho de dejar transcurrir veinticuatro horas sin someter el detenido al Juez más próximo al lugar de la detención: Considerando que ninguna ley del Reino autoriza á los Alcaldes ni á los Gobernadores civiles para detener á ciudadanos españoles por carecer en un determinado momento de documentos justificativos de su personalidad, y que, por lo tanto, el recurrente no cumplió deber ninguno al ejecutar el hecho procesal, y tampoco el de obediencia, que en este caso no sería debida á órdenes que no constan de su inmediato superior jerárquico: Considerando que, responsable exclusivamente el Alcalde de la detención, lo es de la duración de ésta, como consecuencia directa y también exclusiva de su acto, supuesto que para llevarla á cabo empleó un medio que no por ser el ordinario deja de ser generalmente dilatorio, sin culpa de otras personas, etc.» (Sentencia de 19 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 5 de Agosto, páginas 46 y 47.)

### Art. 212.

PENA DEL FUNCIONARIO PÚBLICO QUE, NO SIENDO AUTORIDAD JUDICIAL Y NO ESTANDO EN SUSPENSO LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, DETUVIERE Á UN CIUDADANO POR RAZÓN DE DELITO Y NO LO PUSIERE Á LA DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL EN LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES EN QUE SE HUBIERE HECHO LA DETENCIÓN.

**CUESTION.** *El Teniente Alcalde de un pueblo que, encargado del mando por delegación del Alcalde que había de presidir una mesa electoral, con el cometido especial de que velara por la conservación del orden público que había fundado temor de que alguien se proponía alterar, al encontrar en la esquina de una calle un grupo de cinco personas, las intimó que se disolvían, y no siendo obedecido, las manda detener y conducir á la casa de la*

(1) Así dice la *Gaceta*, debiendo decir «detención».

villa, donde permanecieron ocho horas, después de las cuales las puso en libertad, aunque sin dar conocimiento del hecho á la Autoridad judicial, *perd responsable del delito de detención arbitraria, previsto y penado en el art. 212 del Código?*—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Tortosa, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por indebida aplicación en este caso de la referida disposición legal: «Considerando que, según el art. 210 del Código penal, comete el delito de detención arbitraria el funcionario público que detuviere á un ciudadano, á no ser por razón de delito; y que el 212 castiga al mismo funcionario que no siendo autoridad judicial y no estando en suspenso las garantías constitucionales ejecutare dicha detención sin poner al detenido á disposición de la Autoridad judicial en las veinticuatro horas siguientes á la que se hubiere hecho la detención: Considerando que D. Juan Bautista Ferrer no ha incurrido en la responsabilidad antes señalada, porque, conforme á los hechos consignados como ciertos, al ordenar en concepto de Teniente de Alcalde del pueblo de Uldecona la detención de Joaquín Vizcarro, Ramón Cabanes, Manuel Gibla, Miguel Nadal y Lucas Gifé, al creerse desobedecido y ante el fundado temor, que reconoce la sentencia, de que se alterara el orden público, pudo juzgar que los expresados hechos, en los momentos de su comisión, revistieran carácter de delito: Considerando que al decretar el mencionado Teniente de Alcalde la libertad de los detenidos dentro de las veinticuatro horas se ajustó al precepto contenido en el párrafo segundo del artículo 4.º de la Constitución de la Monarquía y en el 496 de la ley de Enjuiciamiento criminal, y por tanto no ha incurrido en la sanción penal que se determina en la sentencia reclamada: Considerando, consiguientemente, que la Audiencia de lo criminal de Tortosa ha cometido el error de derecho é infringido las disposiciones legales invocadas en el recurso, etc.» (Sentencia de 18 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 6 Enero de 1889, páginas 3 y 4.)

#### Art. 213... 6.º

PENA DEL ALCAIDE DE CÁRCEL Ó JEFE DEL ESTABLECIMIENTO PENAL QUE IMPUSIERE Á LOS PRESOS Ó SENTENCIADOS PRIVACIONES INDEBIDAS Ó USARE CON ELLOS DE UN RIGOR INNECESARIO.

**CUESTION.** *El Director ó Jefe de un establecimiento penal que por haber inferido uno de los penados una lesión al Vigilante del mismo, y produciéndose con este motivo un tumulto entre los reclusos, castiga con calabozo á varios y amarra con cadena á la pared á dos más, amenazándolos con revolver y pegándoles con un bastón de hierro, con cuyos golpes les produjo varias lesiones que no necesitaron para su curación asistencia facultativa, *perd responsable por este hecho del delito consistente en la imposición á presos ó sentenciados de privaciones indebidas á uso con los mismos de un rigor innecesario?*—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Alcalá de Henares, que lo condenó á la pena estable-*



cida en el art. 213, núm. 6.º del Código. Mas interpuesto por el mismo recurso de casación contra dicha sentencia, que apoyó en el acto de la vista el Ministerio Fiscal, por infracción del expresado artículo y número, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar á él*: «Considerando que incurre en la responsabilidad que señala el núm. 6.º del art. 213 del Código penal el Jefe del establecimiento presidial que usare con los confinados de un rigor innecesario; Considerando que, una vez que es cierto que uno de los penados del establecimiento cuya dirección estaba á cargo del recurrente D. Juan Peñaranda había inferido una lesión al Vigilante D. Eduardo Bes; que con este motivo se produjo un tumulto en el penal, y que aquél, haciendo uso de sus facultades reglamentarias, metió en el calabozo á algunos, y después de amarrar á dos con una cadena les amenazó con un revólver y les pegó con un bastón de hierro, sin causarles lesión alguna, no puede sostenerse legalmente que el rigor que empleó en tales castigos, en momentos críticos y cuando por la intimidación había de imponerse el orden, era innecesario, y en este concepto dicho Peñaranda no ha cometido el delito á que se refiere el artículo del Código antes citado, que ha infringido al aplicarlo en su sentencia la Audiencia de Alcalá, como igualmente ha infringido el 1.º y el 8.º, circunstancia 11, incurriendo en el error de derecho que con acierto se invoca en el recurso, etc.» (Sentencia de 22 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 29 de Agosto, páginas 107 y 108.)

### Art. 218.

DETENCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA PRIVADA CONFIADA AL CORREO, VERIFICADA POR FUNCIONARIO PÚBLICO QUE NO ES AUTORIDAD JUDICIAL.

**CUESTION I.** *El Alcalde de un pueblo que, á virtud de quejas producidas por varios particulares contra el cartero y el peatón de la correspondencia, respecto á faltas en el servicio, y que la correspondencia no se recogía y conducía por dichos funcionarios, sino por otros, al personarse al buzón de la ambulancia y cerciorarse de la verdad de esta queja, detiene el paquete que había recogido un sujeto que no era el cartero, aunque, al parecer, con autorización de éste, y lo deposita en poder de un vecino que para ello nombró en el acto, previo inventario y recibo de la correspondencia que dicho paquete contenía, ¿será responsable por este hecho del delito de detención de la correspondencia privada, previsto y penado en el art. 218 del Código?*—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Orense, la que condenó á dicho Alcalde á la pena del expresado artículo. Mas interpuesto, por infracción del mismo y del 1.º del Código penal, recurso de casación contra dicha sentencia, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar á él*: «Considerando que los hechos que como probados consigna y pena la sentencia recurrida están determinados por el deseo del recurrente, estimulado por las quejas de los particulares y del Juzgado municipal, de

corregir las faltas que se cometían por los encargados de recoger y conducir la correspondencia, que abusivamente se valían de terceras personas para aquel servicio, que sólo á ellos estaba atribuido, por razón del cargo público de que estaban investidos: Considerando que por más que ni la corrección de los abusos, ni los procedimientos de que para cortar aquéllos se valió D. Aníbal Losada encajen en las atribuciones que da la Ley al cargo de Alcalde, es lo cierto que no hubo en los hechos que ejecutó éste la intención de cometer un delito, y si sólo la de cortar un abuso: Considerando, por otra parte, que no resulta de la sentencia, con la necesaria precisión, que el recurrente detuviera la correspondencia y ésta llegara con retraso á poder de aquéllos á quienes iba dirigida, sino que más bien aparece que no hizo otra cosa que cambiar la persona que la había de conducir y repartir, por no ser el funcionario nombrado el que la recogió de la administración ambulante de Correos: Considerando, por lo expuesto, que al calificar y penar la Audiencia de lo criminal de Orense los hechos que en la sentencia se consignan como delito, comprendido en el art. 218 del Código, ha incurrido en la infracción reclamada en el recurso, etc.» (Sentencia de 22 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 12 de Mayo, páginas 233 y 234.)

**CUESTION II.** *¿Será responsable del delito de detención de la correspondencia, comprendido en el art. 218 del Código, el Administrador de Correos que por sospechas de que se hubiesen sustraído algunas cartas del paquete de correspondencia dirigido á cierto punto, manda á un subalterno de un pueblo por donde debía dirigirse la correspondencia que abra la calija y le remita el paquete antedicho, sufriendo éste por tal devolución el consiguiente retraso?*—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Tafalla, cuya sentencia, á excitación del Fiscal, y después de haber manifestado tres Letrados que era improcedente el recurso preparado por el procesado, *casó* el Tribunal Supremo por indebida aplicación del referido artículo: «Considerando que, si bien por orden del Administrador de Correos de Estella, D. Martín Urtasun Osacar, el paquete destinado á Madrid fué detenido en la cartería ó subalterna de Allo y devuelto á Estella, no aparece ni cabe inferir tampoco que el propósito del D. Martín, al proceder de esta manera, fuese distraer ó retrasar en todo ó en parte las cartas dirigidas á esta Corte, sino confirmar las sospechas que con fundamento ó sin él abrigaba de que por uno de los carteros se sustraieran algunas cartas: Considerando que, faltando la intención punible en el hecho de que se trata, éste no constituye delito, y por tanto el Tribunal sentenciador al estimar lo contrario ha incurrido en el error de derecho é infringido la disposición legal alegada por el Ministerio Fiscal como fundamento de su recurso, etc.» (Sentencia de 21 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 10 de Marzo de 1889, páginas 45 y 46.)



## Art. 224.

PENA DE LA AUTORIDAD QUE MANDA PAGAR UN IMPUESTO PROVINCIAL Ó MUNICIPAL NO APROBADO LEGALMENTE POR LA RESPECTIVA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Ó AYUNTAMIENTO.

**CUESTION.** *¿Será responsable del delito de exacciones ilegales, comprendido en el art. 224 del Código, el Ayuntamiento que habiendo procedido al nombramiento de unos guardas de campo para la custodia del término municipal, verifica un reparto entre los vecinos terratenientes para obtener la suma fijada y destinada á retribuir á aquéllos, y la hace efectiva por medio del recaudador nombrado al efecto, sin haber sido incluida ni aprobada esta partida en presupuesto alguno, ni ordinario ni adicional?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando, en cuanto al recurso interpuesto por D. José Iborra Lloret, que, según terminante prescripción de la ley Municipal en sus artículos 133, 142, 146, 147 y 150, los Ayuntamientos deben formar todos los años un presupuesto comprensivo de los gastos que por cualquier concepto hayan de hacerse y de los ingresos destinados á cubrirlos; que cuando para cualquier objeto de importancia no determinado en el presupuesto ordinario fueren insuficientes los recursos consignados en éste, han de formar un extraordinario de la propia manera y por el mismo procedimiento determinado para los ordinarios; que el proyecto de presupuesto, ya sea ordinario ó extraordinario, aprobado por la Corporación municipal, previa censura del Síndico, quedará expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento por espacio de quince días desde la fecha en que se haga el anuncio en la forma ordinaria; y que dicho Ayuntamiento formará el indicado presupuesto y lo aprobará la Junta municipal, sin perjuicio de que la mencionada Corporación comunique al Gobernador el presupuesto aprobado para el solo efecto de corregir las extralimitaciones legales, si las hubiese, cabiendo contra los acuerdos de la expresada Autoridad superior civil la alzada que determina el art. 150 de la referida ley: Considerando que habiendo el Ayuntamiento de Alcolecha, de que era Alcalde el recurrente D. José Iborra Lloret, procedido al nombramiento de dos guardas de campo para la custodia en aquel término durante el año económico de 1882 á 1883, verificado el reparto entre los vecinos terratenientes para obtener la suma fijada y destinada á retribuir á aquéllos, y hecha efectiva por medio del recaudador nombrado al efecto, sin haber sido incluida ni aprobada esta partida en presupuesto alguno, no ajustándose por tanto el Ayuntamiento á los trámites y formalidades de ineludible observancia que determinan los artículos antes citados, es evidente que el recurrente, como Alcalde de la expresada Corporación, ha cometido el delito de exacción ilegal, pues aun suponiendo que por el tiempo en que entró á ejercer sus funciones no hubieran existido términos hábiles para comprender en el presupuesto ordinario el ingreso de la referida partida, pudo y debió al efecto

formar un extraordinario ó adicional con las formalidades y requisitos que la mencionada ley Municipal prescribe, y someterlo al conocimiento del Gobernador, etc.» (Sentencia de 12 de Diciembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 11 de Marzo de 1889, página 64.)

### Art. 228 (Párrafo segundo).

PENA DEL FUNCIONARIO PÚBLICO QUE PERTURBA Á UN CIUDADANO Ó EXTRANJERO EN LA POSESIÓN DE SUS BIENES, Á NO SER EN VIRTUD DE MANDATO JUDICIAL.

**CUESTION I.** *El Alcalde que prohíbe extraer grava de terrenos de propiedad particular, no obstante la autorización dada para ello por los dueños de las respectivas fincas, será responsable del delito de perturbación en la posesión de bienes, previsto y penado en el segundo párrafo del art. 228 del Código, aun cuando alegue en su descargo que obró dentro de las facultades que le conceden los artículos 114 y 115 de la ley Municipal, porque, según la denuncia que se le hizo, la grava se sacaba de la ribera del río, y con las excavaciones se perjudicaba á las fincas colindantes, ocasionando peligro de hundimiento?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que el fundamento del recurso interpuesto por D. Ildefonso Garrido y D. Joaquín Cros consiste en afirmar que los hechos que se consignan como probados por el Tribunal á quo no son constitutivos de delito, por haber obrado sus autores en el círculo de sus atribuciones administrativas y en materia administrativa; Considerando que, si bien los artículos 114 y 115 de la ley Municipal de 2 de Octubre de 1877 conceden á los Alcaldes y Tenientes la inspección en la policía é higiene rural, y en cuanto á estos asuntos se refiere obran en materia peculiar de sus atribuciones, no puede por esto entenderse facultados también para impedir á los particulares dueños de fincas rústicas ejercer actos dominiales en ellas, perturbándolos en la posesión que legítimamente disfrutaban de las mismas, porque estas facultades, por su naturaleza y la materia de que es objeto, no son propias de funcionarios de la Administración, sino que corresponde su conocimiento á otro orden de autoridades; Considerando que incurre en la sanción que determina el párrafo segundo del art. 228 del Código penal el funcionario público que perturbare en la posesión de sus bienes á cualquier ciudadano, á no ser en virtud de mandato judicial; Considerando que los hechos declarado probados en la sentencia recurrida, de haber prohibido D. Ildefonso Garrido primero, y D. Joaquín Cros después, como Alcalde y Teniente, respectivamente, el sacar grava en terrenos de propiedad particular, no obstante el consentimiento y autorización dada para ello por los dueños de las respectivas fincas, constituyen el delito que castiga el párrafo segundo del citado art. 228, puesto que con estos actos perturbaron á los dueños en la posesión legítima en que se hallaban de sus propiedades, sin la competencia ni con los requisitos



previos que la Ley exige; y al apreciarlo así la Sala sentenciadora no ha incurrido en error de derecho ni infringido las disposiciones legales que se invocan en el recurso, etc.» (Sentencia de 8 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 9 de Mayo, páginas 211 y 212.)

**CUESTION II.** *El Alcalde de un pueblo que sin respetar la antigua posesión de un sujeto en cierto terreno, como roturador del mismo, destruye los bardos que lo acotaban y pega fuego á la leña y ramaje que tenía aquel preparados para la construcción del chozo en el propio sitio, ¿podrá eximirse de la pena aneja al delito de perturbación en la posesión de bienes, comprendido en el artículo 228 del Código, aun cuando la base del reparto hecho de la dehesa en que estaba enclavado el terreno en cuestión hubiese sido la de que las suertes no pudiesen ser poseídas por forasteros, cuya calidad tenía el despojado, y aun cuando por el núm. 5.º del artículo 73 de la ley Municipal correspondiera al Alcalde la administración, custodia y conservación de las fincas, bienes y derechos del pueblo, á cuyo objeto iban encaminados los actos ejecutados por el mismo?—* A pesar de que el procesado fundó en estas consideraciones la casación de la sentencia condenatoria contra él dictada por la Audiencia sentenciadora, declaró el Tribunal Supremo no haber lugar al recurso interpuesto: «Considerando que el hecho de la posesión constituye por sí sólo un derecho que ha de respetarse en tanto que no sea invalidado legítimamente, y que como el derecho de propiedad está sancionado por la ley fundamental del Estado, y garantido contra las demasías de los funcionarios públicos por la sanción penal del art. 228 del Código: Considerando que el recurrente, como Alcalde de Niebla y sin respetar la antigua posesión en que como roturador del terreno venía Sebastián Padilla, y sin consideración al arbolado de cinco á seis años y á la valla de uno á dos, destruyó y allanó los bardos de acotamiento y linde, y dió fuego á los materiales de leña y ramaje que tenía Padilla preparados para hacer un chozo, diciendo á uno de los operarios, que por su orden ejecutaba tales hechos, que lo hiciera de tal manera que se supiera que él había estado allí; y como tan arbitrario proceder constituye una perturbación en la posesión de la suerte que disfrutaba Sebastián Padilla, y el Alcalde obrara fuera de los derechos y de las facultades que le atribuye el número 5.º del art. 73 de la ley Municipal vigente y deberes de su cargo, es visto que carecen de fundamento legal el primero y segundo motivos de casación alegados: Considerando que asimismo es improcedente el tercer motivo que aduce el recurrente, porque el hecho de expropiar ó perturbar el funcionario público en la posesión de sus bienes á un ciudadano es el que constituye por sí sólo el delito previsto y penado en el artículo 228 del Código, ya se haya cometido la expropiación ó perturbación de la posesión para un servicio ó obra pública, ya sea con otro motivo cualquiera de menos justificación aparente; y al el Alcalde de Niebla, al perturbar á Sebastián Padilla en la posesión de la suerte que cultivaba, cometió también el delito de daño y no lo apreció el Tribunal sentenciador para los efectos

del art. 90 del Código, esta Sala no ha de ocuparse de tal omisión, porque no puede agravar la pena del recurrente, no habiendo, como no hay, recurso sobre este extremo: Considerando que, por lo expuesto, el Tribunal sentenciador no ha incurrido en el error de derecho ó infracciones legales que cita el recurrente, etc.» (Sentencia de 15 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 30 de Junio, páginas 310 y 311.)

### Art. 231... 1.º

PENA DEL FUNCIONARIO PÚBLICO QUE ORDENA LA DISOLUCIÓN DE UNA REUNIÓN Ó MANIFESTACIÓN PACÍFICA.

**CUESTION.** *¿Será responsable del delito de disolución de una reunión lícita, comprendido en el núm. 1.º del art. 231 del Código, el Alcalde que manda suspender un baile dado en un Casino de recreo por los socios del mismo, fundado en que no se le dió parte de la celebración de aquél, conocimiento que estimó necesario por haber asistido á dicha reunión algunas personas forasteras y además dos individuos que, si bien habían sido presentados como socios del Casino, no lo eran aún?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que siendo un hecho probado, según la sentencia recurrida, que el Casino de Alfaro era una asociación establecida legalmente para recreo de los socios, cuyos estatutos fueron aprobados por el Gobernador civil de la provincia, es indudable que todos los actos de recreo lícito que se realizaran dentro del local elegido para la reunión de aquéllos, son actos propios del objeto con que se establecen tales asociaciones, cual acontece en los bailes que periódicamente ó en días determinados suelen darse por las mismas, y que esto supuesto, ni con arreglo á la vigente ley de Asociación de 30 de Junio de 1887, ni á la de Reuniones de 15 de Junio de 1880, se necesita dar parte á la Autoridad de esta clase de reuniones, después de celebrada la primera con conocimiento de aquélla: Considerando que el baile cuya suspensión acordó el Alcalde de Alfaro no está tampoco comprendido entre las reuniones excepcionales á que se refiere el segundo párrafo del art. 9.º, porque si concurrieron D. Pedro Ochoa y D. Julio Ruiz, fué con el carácter de socios presentados, lo cual excluye la suposición de que fueran personas extrañas á la Sociedad, y la concurrencia de señoras forasteras invitadas al efecto es una condición normal y corriente, propia de todas ó casi todas estas clases de Sociedades, por lo que no puede interpretarse la Ley en sentido tan estricto que excluya la posibilidad de esta suerte de invitaciones sin licencia de la Autoridad: Considerando que, esto supuesto, el Alcalde de Alfaro, D. Protasio Rueda Ramírez, ha cometido el delito que define y pena el artículo 231 del Código penal al acordar la suspensión del expresado baile, etc.» (Sentencia de 20 de Noviembre de 1888, publicada en las *Gacetas* de 6 y 10 de Marzo de 1889, páginas 44 y 45.)



## SECCIÓN TERCERA

## DELITOS RELATIVOS AL LIBRE EJERCICIO DE LOS CULTOS

## Art. 240... 3.º

ESCARNIO PÚBLICO DE DOGMA Ó CEREMONIA DE CUALQUIERA RELIGIÓN QUE TENGA PROSÉLITOS EN ESPAÑA.

**CUESTION I.** *¿Constituirán el delito de escarnio público de los dogmas y ceremonias de la Religión católica las frases y conceptos siguientes consignados en un artículo de periódico: «Esas catedrales soberbias en que altísimas dignidades se congregan para insultar la miseria del pueblo con fastuosas ostentaciones.... El dogma católico es un monstruoso cuerpo de doctrina que rayando en el absurdo ó en el ridículo fomenta la hipocresía y determina los más criminales atentados, así en la vida particular como en la pública, etc.»—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que el escrito titulado «Las Notas» no es licita y razonada exposición de opiniones religiosas ni sería é imposible impugnación de la religión del Estado, sino que se menosprecian, vituperan y escarnecen en su contexto dogmas y ceremonias del catolicismo, suponiendo éstas un insulto á la miseria del pueblo; calificando de monstruoso, próximo al absurdo y al ridículo, el cuerpo de la doctrina católica; afirmando que fomenta la hipocresía y determina los más criminales atentados, así en la vida particular como en la pública; presentando á los católicos como hombres transformados á prueba de absurdos; aseverando que el catolicismo romano, tal como ha sido sancionado por decretos dogmáticos del Concilio del Vaticano, no es más que el brahmanismo del Occidente, y que es la corrupción del dogma y de la moral; y atribuyendo, por último, á los Sumos Pontífices tendencias de egotismo y de interés en el ejercicio de una alta prerrogativa del poder espiritual: Considerando que no sólo estos párrafos y conceptos, sino el conjunto del escrito denunciado en su texto y en espíritu implican menosprecio y escarnio de una religión que tiene prosélitos en España, injurian á sus ministros y ofenden gravemente tanto los sentimientos como la dignidad de los que profesan el catolicismo: Considerando, por consiguiente, que el Tribunal sentenciador no ha incurrido en error de derecho al calificar el hecho procesal con arreglo al caso 3.º del artículo 240 del Código penal, etc.» (Sentencia de 25 de Octubre de 1889, publicada en las Gacetas de 19 y 22 de Noviembre, páginas 328 y 329.)*

**CUESTION II.** *Un artículo de periódico cuya tendencia no es otra que el hacer burla y mofa de una peregrinación católica, y en el que á la vez se ridiculizan las bendiciones del Obispo que la preside y se hace otro tanto con el dogma de las indulgencias, ¿será constitutivo del delito de escarnio público de las ceremonias y*

**dogmas de la Religión católica?**—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que el sentido y alcance del artículo denunciado no es otro que el de zaherir en tono de mofa y burla los católicos sentimientos de aquellos fieles que, presididos por su Prelado, fueron desde Santander en piadosa peregrinación al santuario de la Virgen de las Caldas, poniendo a la vez en ridículo el autor de este artículo la bendición episcopal y el dogma católico de las indulgencias: Considerando que este hecho está dentro de la sanción del núm. 3.º del art. 240 del Código penal, que acertadamente aplica el Tribunal sentenciador, sin que sea preciso acto material alguno más que el hecho de la publicación del artículo para que se estime cometido el delito, y, por tanto, no ha infringido el artículo citado, ni cometido el error de derecho que se le atribuye, etc.» (Sentencia de 18 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 9 de Enero, páginas 54 y 55.)

**QUESTION III.** *El que en un suelto de periódico, refiriéndose al caso del hallazgo en una buhardilla del cadáver de un niño que había estado tres días insepulto, porque era pobre y no figuraba en el padrón, dice «que los pobres se mueren de hambre y frío, mientras los muñecos de los templos católicos están cubiertos de alhajas y piedras preciosas,» será responsable del delito de escarnio público de dogma de la Religión católica?*—No lo estimó así la Audiencia de Las Palmas, que absolvió al autor del suelto, fundada en que el hecho no constituía delito. Pero interpuesto contra esta sentencia recurso de casación por el Ministerio Fiscal, por infracción del art. 240, núm. 3.º del Código, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar* á él: «Considerando que, según el núm. 3.º del art. 240 del Código penal, comete el delito contra el libre ejercicio de los cultos el que escarneciere públicamente alguno de los dogmas ó ceremonias de cualquiera religión que tenga prosélitos en España: Considerando que las definiciones de fe pronunciadas por los Concilios generales de la Iglesia constituyen dogma de la Religión católica, y que el segundo Concilio de Nicea, séptimo Ecuménico, declaró en su definición de fe que se debe culto y veneración á las imágenes y anatematizó é impuso penas canónicas á los que sostenían que dicho culto era idolátrico; por lo que esta declaración, que fué ratificada por el Concilio de Trento, sesión 25, tiene el carácter de dogma: Considerando que al calificar de muñecos de los templos católicos las sagradas imágenes que en ellos se veneran, toda vez que á éstas y no á otro objeto se refiere notoriamente el autor del suelto, se cometió dicho delito por escarnecer con tan despreciativa comparación el dogma referente al culto de las imágenes de los templos católicos, y que en tal concepto, al no estimarlo así la Sala sentenciadora, ha incurrido en el error de derecho que se le atribuye é infringido los artículos del Código penal á que el recurso se refiere, etc.» (Sentencia de 29 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 23 de Abril de 1888, páginas 143 y 144.)

**QUESTION IV.** *¿Caerá bajo la sanción del art. 240, núm. 3.º del Código, como escarnio de los dogmas de la Religión católica, el artículo de periódico en que se califica á la Santísima*



**Trinidad de «rompecabezas que nos representa en mismo ser bajo tres formas distintas» y al bautismo y al matrimonio de majaderías?**—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que, si bien al amparo de los derechos que la Constitución de la Monarquía reconoce, puede hacerse una crítica científica y razonada de los dogmas de cualquiera religión que tenga prosélitos en España, no es permitido que dichos dogmas sean escarneados públicamente, puesto que el hecho cae bajo la sanción penal del núm. 3.º del art. 240: Considerando que en el artículo publicado en el periódico *El Terror*, correspondiente al día 26 de Junio de 1887, bajo el epígrafe «La Masonería», se escarnece por modo expreso y terminante en su espíritu y general contexto el dogma de la Religión católica, que es la del Estado, y especialmente al ocuparse del misterio de la Santísima Trinidad, llevando el articulista sobre este punto su mofa y desprecio hasta considerarle como una especie de rompecabezas, y, por tanto, es de rigurosa aplicación al caso la disposición penal antes indicada: Considerando que igual calificación corresponde al otro artículo que, bajo el epígrafe «Cielón clerical», se publicó en el mencionado periódico *El Terror*, perteneciente al día 3 de Julio del año próximo pasado, toda vez que al tratar de los sacramentos del bautismo y del matrimonio lo hace con mofa y de una manera despreciativa, ofendiendo y lastimando el sentimiento de la inmensa mayoría de los españoles que profesan estos dogmas de la Religión católica, y consiguientemente este hecho cae también bajo la sanción del art. 420, núm. 3.º (1), etc.» (Sentencia de 4 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 22 de Agosto, pág. 75.)

**CUESTION V.** *El suelto de periódico en que, hablando de otro que había sido denunciado por escarnio de la Religión, se dice á manera de cuento «que cierto cura, cansado ya de oír muchas trolas que le refería otro de su misma especie, hubo de exclamar colérico: «To eso es hostia consagrada», es decir, «todo eso es mentira», será constitutivo del delito de escarnio público de un dogma de la Religión católica, comprendido en el núm. 3.º del art. 240 del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que el suelto publicado con el epígrafe «Excomuniones» no se limita á discutir mesurada y científicamente sobre los dogmas de cualquiera religión que tenga prosélitos en España, como puede hacerse al amparo de los derechos que la ley fundamental del Estado reconoce, sino que con menosprecio se escarnece el dogma católico de la Eucaristía y sus ceremonias, etc.» (Sentencia de 21 de Septiembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 30 de Noviembre, páginas 251 y 252.)

**CUESTION VI.** *El decir en un periódico que «los curas han inventado el purgatorio, esa gran cárcel modelo, con las paredes y techo de fuego infernal, cuyos carceleros son todos los curas, con su correspondiente director de cárceles, adonde van á parar todos ó casi todos los católicos difuntos (según ellos), y ya no se sale de allí*

(1) Así dice la *Gaceta*, debiendo decir art. 240.

*sin aflojar la mosca», constituirá el delito de escarnio público de un dogma de la Religión católica?—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que el núm. 3.º del art. 240 del Código penal castiga al que públicamente escarneciera algunos de los dogmas ó ceremonias de cualquier religión que tenga prosélitos en España: Considerando que este precepto de la ley penal no está en oposición con el derecho que la ley fundamental del Estado consagra á todo ciudadano de emitir libremente sus ideas, pero la controversia razonada y científica que está garantizada tiene, como todo derecho, su límite, y de aquí que, si se abusa, lesionando el de los demás ciudadanos, se incurre en responsabilidad criminal: Considerando que al afirmarse en el comunicado, origen de esta causa, que el purgatorio es una invención de los curas para sacar dinero, comparando aquel lugar de purificación con una cárcel y á los curas de carceleros, de donde no se consigue salir sin dejar antes algunas cantidades con el nombre de treintenarios, aniversarios y otros, más que razón y fundamento para una discusión científica es un concepto encaminado á poner en ridículo, con befa y escarnio, un dogma de la Religión católica, y este hecho cae en la sanción del artículo del Código citado, etc.» (Sentencia de 9 de Octubre de 1888, publicada en la Gaceta de 29 de Diciembre, pág. 281.)*

**CUESTION VII.** *Un artículo de periódico en que, entre otras cosas, se dice «que el Dios de los cristianos es un Dios de contradicciones, preparado siempre á disputas, y que sólo sirve de pretexto para alterar la tranquilidad; que la Trinidad la han encontrado aquellos en apretadas interpretaciones; que la Encarnación es una noción absurda; que el Dios de la redención, por el hecho de la resurrección, se parece al Osiris de los egipcios, y que en el Dios de Moisés sólo se advierte un déspota colérico, poseído de crueldad, injusticia, parcialidad y malignidad, cuya conducta debe confundir á todo hombre que lo medite, pero constitutivo del delito de escarnio de los dogmas de la Religión católica, comprendido en el art. 240 del Código?—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Málaga, que condenó al autor del artículo á dos años, cuatro meses y un día de prisión correccional, accesorias, multa de 250 pesetas y costas. Mas interpuesto recurso de casación contra dicha sentencia, declaró el Tribunal Supremo haber lugar á él: «Considerando que el Código penal vigente sólo castiga la negación ó crítica de los dogmas de la Religión católica, como los de cualquiera otra que tenga prosélitos en España, en tanto en cuanto se escarnezan públicamente, y que el escarnio consiste en hacer mofa ó burla de aquello que se contradice, en vez de emplear la crítica más ó menos seria y razonada: Considerando que si en el artículo que ha motivado la condena del recurrente D. Juan Herrera de la Rosa se examinan los dogmas de la Religión católica para negar la verdad de sus fundamentos, resulta de su sentido y contexto general que el autor de dicho artículo se propuso hacer un estudio meramente crítico, con cuyo motivo aduce argumentos y establece comparaciones, que aun cuando por la tendencia que revelan produzcan natural alarma y*



escándalo en cuantos creen en las verdades de dicha Religión, y sean además poco serios y nada oportunos, no por esto puede decirse que el penado se haya valido para su critica del escarnio, que es la condición esencial para que el hecho revistiese los caracteres de delito: Considerando que, esto supuesto, la Audiencia de Málaga ha incurrido en error de derecho al calificar y penar como delito un hecho que, por censurable que sea ante el juicio de cualquiera persona sensata, no reviste los caracteres de tal delito dentro de la legislación positiva á que los Tribunales deben ceñirse estrictamente, etc.» (Sentencia de 27 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 10 de Marzo de 1889, pág. 55.)

### Art. 241.

EJECUCIÓN CON ESCÁNDALO, EN UN LUGAR RELIGIOSO, DE ACTOS QUE OFENDEN EL SENTIMIENTO RELIGIOSO DE LOS CONCURRENTES.

**CUESTION.** *Al pasar unos sujetos algo borrachos por un camino llamado de los Pasos, en las afueras de una ciudad, donde existen las casetas del Calvario ó Vía Crucis, arrojan piedras contra algunas de las puertas que las cierran, fuerzan una de ellas, é introduciéndose en la caseta, rompen un vaso de vidrio destinado á alumbrar, y tomando uno de ellos un Cristo, al querer apoderarse otro de él, forcejeando ambos lo rompen, cayendo al suelo un trozo de dicho Crucifijo, cuyos hechos, presenciados por dos mujeres y llegados á noticia del público, produjeron la consiguiente alarma ó escándalo: deberán los mismos calificarse como delito de profanación pública de imágenes sagradas, previsto y penado en el número 4.º del art. 240, ó como delito de escándalo con ofensa de los sentimientos religiosos, comprendido en la sanción más benigna del 241?*—La Audiencia de Albacete declaró que tales hechos no constituían delito, y si simplemente una falta, para cuyo conocimiento mandó pasar testimonio al Juez municipal. El Fiscal, al recurrir en casación, pretendió que debía calificarse el hecho del delito de *profanación* antedicho. Mas el Tribunal Supremo, si bien casó el fallo absolutorio de la Audiencia, declaró que el delito cometido era el del art. 241: «Considerando que la Sala sentenciadora pronunció juicio en esta causa bajo el equivocado criterio de constituir los hechos procesales un delito contra la Religión del Estado, como lo demuestran los fundamentos jurídicos de su fallo al invocar, sin concreta referencia, disposiciones canónicas y litúrgicas notoriamente inaplicables: Considerando que el art. 240 del Código penal y los demás de la sección en que está comprendido sólo tienden á garantir un derecho constitucional: Considerando que infringe este derecho é incurre en delito el que no respeta la libertad ó ofende los sentimientos religiosos de los demás, en alguna de las formas ó por alguno de los medios y modos que definen y penan los artículos 236 á 241 inclusive del mencionado Código: Considerando que el art. 241 estima punible el hecho de ejecutar con escándalo en un lugar religioso actos que, sin estar comprendidos en alguno de los anteriores artículos,

ofendan el sentimiento religioso de los concurrentes: Considerando que en esta responsabilidad penal ha incurrido Alonso Cortés Areta al ejecutar, con escándalo, en una caseta del Vía Crucis, actos que, si no revisten esencialmente los caracteres de una profanación, cuya finalidad sea el escarnio de un dogma ó de una ceremonia, ofendieron, sin duda alguna, los sentimientos religiosos de sus mismos compañeros, de Catalina Martínez y de Angela Sanz, y produjeron alarma y repulsión, según se consigna en la sentencia, al adquirir mayor notoriedad el hecho justiciable: Considerando, por consiguiente, que el Tribunal á quo ha incurrido en error de derecho al estimar que no es delito un hecho que lo constituye, según el precitado art. 241, etc.» (Sentencia de 22 de Junio de 1888, publicada en las *Gacetas* de 7 y 8 de Septiembre, páginas 136 y 137.)

## TÍTULO III

### DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO.

#### CAPÍTULO III

##### Disposiciones comunes á los dos capítulos anteriores.

#### Art. 258.

CUANDO LOS REBELDES Ó SEDICIOSOS SE DISOLVIEREN Ó SOMETIEREN Á LA AUTORIDAD LEGÍTIMA ANTES DE LAS INTIMACIONES Ó Á CONSECUENCIA DE ELLAS, QUEDARÁN EXENTOS DE PENA LOS MISMOS EJECUTORES DE CUALQUIERA DE AQUELLOS DELITOS, Y TAMBIÉN LOS SEDICIOSOS COMPRENDIDOS EN EL ART. 251, SI NO FUEREN EMPLEADOS PÚBLICOS.

LOS TRIBUNALES EN ESTE CASO REBAJARÁN Á LOS DEMÁS CULPABLES DE UNO Á DOS GRADOS LAS PENAS SEÑALADAS EN LOS CAPÍTULO ANTERIORES.

**CUESTION.** *Cuando por haberse disuelto los grupos de sediciosos y restableciéndose la tranquilidad á la intimación que les hiciera el Coronel jefe de la zona militar, no es posible ya penar la sedición, según el art. 258 del Código, podrá calificar el propio hecho del tumulto como delito de desorden público, comprendido en el art. 271 del Código?*—Así lo entendió é hizo la Sala de lo criminal de la Audiencia de la Coruña, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo, en virtud del recurso interpuesto por los procesados y apoyado in voce por el Fiscal, por infracción del citado artículo 271: «Considerando que, conforme al art. 250 del Código penal, son reos de sedición los que se alzan pública y tumultuariamente para conseguir por la fuerza ó fuera de las vías legales,



entre otros objetos que el expresado artículo determina, impedir el cumplimiento de las providencias administrativas, prescribiendo el art. 258 que cuando los rebeldes ó sediciosos se disolvieren ó sometieren á la Autoridad legítima antes de las intimaciones ó á consecuencia de ellas, quedarán exentos de pena los meros ejecutores: Considerando que las procesadas, al alzarse pública y tumultuariamente, no tuvieron otro fin, según aparece de los hechos probados consignados en la sentencia recurrida, que impedir se cobrara el arbitrio ó impuesto establecido por el Ayuntamiento de Betanzos sobre los puestos que durante la feria se colocasen en la vía pública, caso comprendido en el núm. 2.º del art. 260 del Código penal: Considerando que, habiéndose disuelto los grupos de sediciosos y restablecido la tranquilidad á la intimación que les hizo el Coronel jefe de la zona militar, es evidente que, con arreglo á lo dispuesto en el art. 258 del expresado Código, los recurrentes quedaron exentos de toda pena: Considerando, por lo tanto, que el Tribunal *á quo*, al calificar y penar el suceso de autos como comprendido en el art. 271, ha incurrido en el error de derecho ó infringido las disposiciones legales que se citan en el recurso, etc.» (Sentencia de 19 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 5 de Mayo, pág. 180.)

#### CAPÍTULO IV

**De los atentados contra la Autoridad y sus agentes, resistencia y desobediencia.**

#### Art. 263... 2.º

COMETEN ATENTADO LOS QUE ACOMETEN Á LA AUTORIDAD Ó Á SUS AGENTES, Ó EMPLEAN FUERZA CONTRA ELLOS Ó LOS INTIMIDAN GRAVEMENTE, Ó LES HACEN RESISTENCIA TAMBIÉN GRAVE, CUANDO SE HALLAN EJERCIENDO LAS FUNCIONES DE SUS CARGOS, Ó CON OCASIÓN DE ELLOS.

**I Acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave, resistencia grave.**

**CUESTION I.** *El Alcalde de un pueblo que, al presentársela un comisionado de apremio, nombrado por el Ayuntamiento de la cabeza de partido, para el cobro de ciertos atrasos de fondos carcelarios, manifiesta deseos de enterarse del expediente, y al serle entregado por el comisionado intenta romperlo; y al pretender éste quitárselo se agarran ambos, forcejeando cada cual por quedarse con él, terminando la lucha con la presentación del Juez municipal y entrega del expediente, será responsable por este acto del delito de atentado á un agente de la Autoridad?—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Huelva, la que condenó al Alcalde á tres años y ocho meses de prisión correccional, multa de 500 pesetas, nueve años de inhabilitación absoluta y costas. Mas ha-*

biéndose adherido el Ministerio Fiscal al recurso interpuesto por la defensa del reo, que pretendió su libre absolución, en el concepto de no ser el hecho constitutivo de atentado, sino de tentativa del delito de *estafa*, comprendido en el núm. 9.º del art. 548 del Código, por haber intentado cometer una defraudación, sustrayendo é inutilizando un expediente, no siendo la lucha entablada entre el Alcalde y el comisionado más que un accidente motivado por la justa aunque violenta oposición de éste á los propios actos del procesado, encaminados á la ejecución de su punible propósito, el Tribunal Supremo declaró *no haber lugar* al recurso interpuesto por la defensa del reo, pero *si haber lugar á la adhesión* formulada por el Ministerio Fiscal en beneficio de aquél: «Considerando que el hecho de haber intentado el procesado D. Alonso Alvarez romper primero y guardarse después el expediente de apremio para hacer efectivo el adeudo de 7.894 pesetas 88 céntimos, en que se hallaba el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán á los fondos carcelarios, reúne todos los caracteres del delito de estafa, previsto y castigado en el núm. 3.º del artículo 547, en relación con el párrafo primero del núm. 9.º del 548 del Código penal: Considerando que habiendo el culpable dado principio á la ejecución del expresado delito, y no practicado todos los actos de ejecución que debieron producirle, por causa ajena á su propio y voluntario desistimiento, no puede menos de apreciarse como tentativa, según la definición contenida en el párrafo tercero del art. 3.º del indicado Código: Considerando que, de haber realizado su propósito el procesado Alvarez, habría existido como elemento esencial del delito el perjuicio consiguiente á no hacerse efectivo por entonces el crédito de las 7.894 pesetas 88 céntimos que motivó el expediente de apremio: Considerando, en consecuencia, que el Tribunal á quo ha incurrido en el error de derecho é infringido las disposiciones legales que le atribuye el Ministerio Fiscal en su adhesión al recurso deducido por la representación del procesado D. Alonso Alvarez, y que el de éste, por los motivos en que le apoya, es improcedente y no cabe estimarse, según los fundamentos consignados en los anteriores considerandos: Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso interpuesto por D. Alonso Alvarez Domínguez por los motivos que alega, y que ha lugar en cuanto á la adhesión al mismo del Ministerio Fiscal en beneficio del D. Alonso, etc.» (Sentencia de 23 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 10 de Enero de 1888, páginas 62 y 63.)

**CUESTION II.** *La amenaza á un Juez municipal, al presentarse en el sitio donde se hacían unas descargas de fusil contra paisanos por la Guardia civil, dirigida por el cabo de la propia fuerza de disparar contra dicho Juez si no se retiraba, y la descarga hecha inmediatamente por la misma en la dirección que la expresada Autoridad tomara por virtud de la actitud rebelde de aquélla, ¿constituirán el delito de atentado, comprendido en el art. 263 del Código?—¿Podrá eximirse el expresado cabo de la responsabilidad criminal derivada de este delito, no pretexto de que obró en el cumplimiento de su deber, ó en el ejercicio legítimo de su derecho, oficio*



ó cargo, por su obligación de sostener el orden público y sofocar y reprimir cualquier desorden, debiendo emplear la fuerza desde luego, sin esperar órdenes de la Autoridad civil, cuando los amotinados hacen uso de cualquier medio violento, conforme á los artículos 26, 27 y 39 del Reglamento de la Guardia civil, aprobado por Real decreto de 2 de Agosto de 1852, y á lo dispuesto en la Cartilla de su instituto, aprobada por Real orden de 30 de Octubre de 1879, en cuya virtud, tomada por la Guardia civil la actitud militar que tomó, era allí entonces la única Autoridad y podía haber disparado contra el Juez municipal y sus acompañantes si aquél persistía en mandarles retirar?—El Tribunal Supremo ha resuelto que no cabe en este caso la exención de responsabilidad criminal alegada. Véanse los importantes fundamentos de su Sentencia: «Considerando que cometen atentado, según el art. 263 del Código penal, los que sin alzarse públicamente emplean la fuerza ó intimidación para impedir á cualquiera Autoridad el libre ejercicio de sus funciones, núm. 2.º del art. 260, y los que cuando éstas se ejercen ó con ocasión de ellas la acometen, emplean fuerza en su contra ó la intimidan ó resisten gravemente: Considerando que á los Jueces municipales incumbe, conforme al núm. 2.º del art. 271 de la ley sobre organización del Poder judicial, instruir á prevención las primeras diligencias en las causas criminales, y á los 259, 264 y 269 de la de Enjuiciamiento criminal, poner en ejercicio su autoridad cuando se les denuncia ó conocen un delito público; procediendo á la formación del correspondiente sumario, según el 303, aun en el caso previsto en el 12, de presunta responsabilidad de personas sujetas á fuero excepcional: Considerando que el Juez municipal de Nava de la Asunción cumplió ineludible deber de su cargo al constituirse en la estación del ferrocarril desde el momento en que, por las detonaciones de los disparos hechos por la Guardia civil, podía presumir racionalmente la comisión de un delito público, aun cuando también presumiera por subsiguientes noticias la responsabilidad de personas aforadas, supuesto que por éstas se habían causado lesiones á otras personas: Considerando que requerida por estas circunstancias la intervención del Juez municipal, era también obligación suya en aquel momento impedir la continuación de un hecho que se presentaba con apariencias de delito público, y consiguientemente ordenar á la Guardia civil que, según el núm. 4.º del art. 263 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, forma parte de la policía judicial, y es, por este carácter, auxiliar de los Jueces municipales, que no hiciera nuevos disparos y se retirase para evitar ulteriores desgracias; orden acertada y prudente que la Guardia civil debió acatar, puesto que no había sido objeto de agresión, y al dictarse (1) todo estaba concluido, según frase de la sentencia reclamada: Considerando que la amenaza de hacer fuego sobre el Juez sí á su vez no se retiraba, aunque se prescindía

(1) Así dice la Gaceta, debiendo decir «al presentarse», como lo indica el buen sentido, y se colige además del penúltimo resultando de la sentencia de casación.

de la descarga posterior, inmediatamente hecha en la dirección que esta Autoridad tomó por virtud de la actitud rebelde de la fuerza que le debía auxilio y protección, como lo imponen los términos en que fué resuelta una contienda jurisdiccional, sobre la que esta Sala nada puede ya resolver, constituye una intimidación de manifiesta gravedad en aquellas circunstancias, por serlo rigurosamente de muerte, y el delito de atentado, tanto por dirigirse á una Autoridad en el desempeño de sus funciones, y con ocasión de las que legítimamente intentaba ejercer y comenzaba á poner en acción, como porque mediante ella se la impidió ejercerlas, casos ambos previstos en el art. 263 del Código penal, y no constitutivos por ello de la desobediencia grave que se afirma en el motivo 3.<sup>o</sup> del recurso: Considerando que el cabo procesado no tuvo necesidad ninguna, según las declaraciones de hecho, con precisión suficiente consignadas en la sentencia, de emplear fuerza contra las personas que, cuando la usó, se hallaban en la estación, por no ser hostil su actitud, ni sediciosa, ni armada, ni requerirla la repulsión de medios violentos, que tampoco se emplearon en su contra; y que por ello, ni las disposiciones reglamentarias que se invocan en su defensa, ni otra ninguna, la obligó á persistir en la que él tomó, sin hacerla preceder de aquellas racionales persuasiones y advertencias que para legitimarla y prevenir punibles excesos ordenan los artículos 21, 22, 23 y 24 del Reglamento del Cuerpo de 2 de Agosto de 1852, sin contradicción de otro precepto posterior, y menos, que es de lo que aquí se trata, le era lícito impedir el desembarazado ejercicio de las funciones del Juez municipal, á quien en todo caso hubiera podido exponer con acatamiento las razones, si las tenía, que le aconsejaran no respetar la orden recibida: Considerando, por todo lo expuesto, que la Audiencia no ha cometido los errores de derecho ni las infracciones legales invocadas por el recurrente, etc.» (Sentencia de 9 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 12 de Abril de 1888, páginas 93 y 94.)

## II Á la Autoridad ó á sus agentes.

**CUESTION 1.** *Para que los dependientes del resguardo de consumos puedan ser considerados como agentes de la Autoridad, será indispensable que lleven la chapa que, como distintivo propio de su cargo, previene el art. 31 del reglamento de 29 de Septiembre de 1885?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que para que los individuos del resguardo de consumos sean considerados como agentes de la Autoridad para todos los efectos del Código penal, es preciso, según dispone el art. 37 del reglamento especial del ramo de 29 de Septiembre de 1885, que se hallen cumpliendo actos propios del servicio que les está encomendado, llevando el distintivo propio de su cargo que, como previene el art. 31 del mismo reglamento, consiste en una chapa con la inscripción *Resguardo de consumos. Número....* Considerando que, como se afirma en el considerando tercero de las entencias reclamadas, el individuo del resguardo de consumos



de Burgos Teodoro Martín y Martín no llevaba el distintivo de su cargo cuando tuvieron lugar los hechos que han sido materia del juicio, y faltando aquí esta condición, que terminantemente exige el citado art. 37 del reglamento para que los individuos del resguardo sean considerados como agentes de la Autoridad, no puede dársele este carácter al dependiente Martín y Martín, y al considerarlo la Audiencia de Burgos como tal agente de la Autoridad ha incurrido en el error de derecho que se le atribuye en el recurso: Considerando que aun cuando por la forma en que está escrita la palabra del considerando tercero de la sentencia recurrida se presta lo mismo á leer *sucaba* que *llevaba* refiriéndose al distintivo del cargo de dependiente de consumos que debía llevar Teodoro Martín, como es elemento integrante del delito en este caso el llevar la chapa de que se deja hecho mérito, desde el momento en que no se afirma en la sentencia el expresado hecho, no se puede partir de él para declarar que se cometió el delito de desacato; y por consiguiente, que, ya se afirme que no llevaba el dependiente Martín la placa, ya se dude si la llevaba ó no, faltan elementos de hecho para declarar que se cometió el delito de atentado que pena la sentencia reclamada, etc.» (Sentencia de 6 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 16 de Enero de 1889, pág. 24.)

**CUESTION II.** *Además de hallarse cumpliendo actos de su servicio y de llevar el distintivo de su cargo, ¿qué precisa condición que los individuos del resguardo de consumos hayan prestado el debido juramento, para que gocen del carácter de agentes de la Autoridad, á los efectos del art. 263 y siguientes del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que para que los individuos del resguardo de consumos tengan la consideración de agentes de la Autoridad que les da el artículo 37 del reglamento del impuesto de consumos de 27 de Septiembre de 1885 para todos los efectos del Código penal, no sólo han de estar cumpliendo actos propios del servicio que les esté encomendado, llevando el distintivo de su cargo, sino que han de haber prestado el juramento que como primer deber les impone el art. 30 del expresado reglamento; porque el juramento es para estos servidores del resguardo de consumos la investidura de su cargo y el vínculo que los une á la Autoridad, en cuyo nombre y representación han de ejercer las funciones que se les encomiendan: Considerando que, consignándose como hecho probado en la sentencia reclamada que el dependiente de consumos José García Franco no había prestado el juramento que previene el artículo 30 del citado reglamento, la omisión de este esencial deber por parte de García Franco no consiente tener á éste como agente de la Autoridad, y al considerarlo la Audiencia de lo criminal de Jerez de la Frontera como á tal agente, y calificar y penar el hecho de atentado comprendido en los artículos 263 y 264 del Código, ha infringido estos artículos, y cometido, por tanto, error de derecho.» (Sentencia de 6 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 16 de Marzo de 1889, pág. 65.)

**CUESTION III.** *El haber omitido el arrendatario de consu-*

mos poner en conocimiento de las Autoridades que expresan los artículos 3.º y 16 del reglamento de 29 de Septiembre de 1885 los nombramientos de sus dependientes, *¿será parte á despojar á éstos de su carácter de agentes de la Autoridad en los atentados que se cometan contra los mismos cumpliendo actos del servicio y llevando el distintivo de su cargo?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando en cuanto al primer motivo alegado en el recurso que, según el art. 3.º del reglamento especial de 29 de Septiembre de 1885, los arrendatarios del impuesto de consumos, en representación, ya de la Hacienda, ya de los Municipios, pueden nombrar libremente, sin limitación alguna, el personal que estimen oportuno, de cuyos nombramientos deben dar noticia circunstanciada al Alcalde, y éste con su informe al Gobernador de la provincia, prescribiendo el art. 16 que del nombramiento del personal de agentes y dependientes de resguardo den conocimiento los arrendatarios á la Administración de Hacienda después de haber jurado sus plazas los nombrados: Considerando que por el contexto de las disposiciones antes citadas se demuestra con toda claridad que los dependientes de consumos nombrados por los arrendatarios revisten carácter de agentes de la Autoridad, no sólo por la representación con que aquéllos hacen los nombramientos, si que también por la naturaleza de las funciones que éstos desempeñan y participaciones que los mismos puedan tener en cuestiones que afecten al orden público: Considerando que limitada la obligación del arrendatario á dar conocimiento á las Autoridades antes expresadas de los nombramientos de dependientes que haga, la omisión de este requisito ó formalidad no afecta en manera alguna á la validez y eficacia de dichos nombramientos, ni obsta á que los designados entren desde luego en el desempeño de las funciones de su cargo como medio de garantizar y hacer efectivos los derechos del arrendatario: Considerando que perteneciendo al resguardo de consumos Rafael Rozas como cabo interino por nombramiento del arrendatario, es evidente su calidad de agente de la Autoridad para los efectos del Código penal, conforme al art. 37 del precitado reglamento, toda vez que fué lesionado en ocasión de hallarse cumpliendo actos propios del servicio que le estaba encomendado, llevando el distintivo de su cargo, etc.» (Sentencia de 16 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 4 de Agosto, páginas 41 y 42.)

### III En el ejercicio de las funciones de sus cargos ó con ocasión de ellas.

**CUESTION I.** *Si se desconoce de todo punto el origen y circunstancias de una lucha habida entre un particular y un agente de la Autoridad, lucha de la cual resultó el primero lesionado, y el segundo despojado de uno de los distintivos de su cargo, ¿cabrá apreciar el hecho como constitutivo del delito de atentado ó del de resistencia definido en el art. 265, ni aun de mera falta prevista en el núm. 6.º del art. 589 del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa al casar, de acuerdo con el Ministerio fiscal,



cierta sentencia de la Audiencia de Cádiz que calificó y penó el hecho como *atentado*, á pesar de ignorar la misma la causa ó motivo que lo produjo: «Considerando que de los hechos declarados probados por la Audiencia de Cádiz en la sentencia recurrida no se deriva la existencia del delito de atentado atribuido al recurrente Francisco Mota Bolaños, ni siquiera el de resistencia grave, previsto y definido en el art. 265, pues habiendo habido una agresión por parte del sereno Antonio Macías, por consecuencia de la que resultó aquél lesionado, y desconociéndose el origen y circunstancias de la lucha promovida entre ambos, sería temerario é injustificado fundar en este hecho, así como en el de haberse apoderado Bolaños, durante aquélla, del chuzo del sereno, la existencia de ninguno de los elementos esenciales y característicos de los expresados delitos: Considerando que dentro de los límites del recurso interpuesto, tal cual ha sido planteada la cuestión jurídica por el defensor del recurrente, no debe ser calificado el hecho imputado á Francisco Mota Bolaños mas que como mera falta prevista y definida en el núm. 6.º del art. 589 del Código, habiendo incurrido en error de derecho la Audiencia de Cádiz, que ha castigado como delito un hecho que en todo caso sólo merece la calificación de falta,» etc. (1). (Sentencia de 22 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 29 de Agosto, páginas 106 y 107.)

**CUESTION II.** *Aun cuando el agente de la Autoridad se halle prestando el servicio de su cargo, si no interviene en el acto ocasional del golpeamiento de que fud objeto por parte de una persona poniendo en ejercicio sus funciones, sino como compañero y allegado de aquélla y de otra que estaban disputando y con las cuales estuvo bromeando y bromearando en una taberna, ¿podrá calificarse el hecho de atentado?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa al casar una sentencia de la Audiencia de Bilbao en que se calificó y penó en el caso expuesto el susodicho delito. Véanse los importantes fundamentos de aquella resolución: «Considerando que es condición esencial del delito de atentado, á causa de determinarse y calificarse por cualidad oficial y funcional de la persona ofendida, que el ofensor no sólo conozca este carácter, sino que voluntariamente emplee fuerza ó violencia contra el que le ostente en momento á ocasión en que le ponga en ejercicio: Considerando que de los hechos consignados en el auto supletorio aparece que el sereno Laburu formaba parte de reunión alegre en una taberna con varias personas y entre ellas los hermanos Menchaca, á uno de los cuales se hallaba ligado por próximo parentesco de afinidad, y que por esto su intervención pacificadora en la riña surgida entre su pariente y el hermano de éste Miguel

(1) Como se comprenderá fácilmente por el contexto de este Considerando, el Tribunal Supremo ha entendido que ni aun en este caso existió la falta del art. 589, núm. 6.º Mas como el recurso se fundó, no en el núm. 1.º del art. 549, ó sea en el concepto de no constituir el hecho ni delito ni falta, sino en el núm. 2.º del propio artículo, ó sea en el concepto de ser errónea la calificación del hecho justiciable, tuvo que aceptar dicho Supremo Tribunal la misma calificación posible del mismo procesal, ó sea la de la expresada falta.

con el recurrente, primo además de ambos, en ocasión de hallarse embriagado como el propio sereno, no fué motivada por este carácter de agente de la Autoridad, cuyas funciones, aunque las debiera ejercer, las tuvo en olvido y desatendidas con su permanencia en la taberna y su cooperación activa al acto que allí les juntó, sino por su cualidad privada de camarada y pariente de los contendientes; lo que excluye la existencia del delito de atentado, por no haberse tenido en cuenta por Juan Menchaca al golpearle levemente la pública que le investía y que no consta pudiese en ejercicio; y Considerando, por tanto, que la Audiencia sentenciadora ha cometido error de derecho y las infracciones legales invocadas, etc.» (Sentencia de 2 de Julio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 8 de Septiembre, pág. 143.)

**CUESTION III.** *Aun cuando los vigilantes del ramo de consumos ejerzan en un momento dado sus funciones fuera del radio de adeudo, ¿constituirá el delito de atentado el acometimiento que contra los mismos se verifique?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que los empleados en el servicio de vigilancia del ramo de consumos tienen el carácter de agentes de la Autoridad, según las disposiciones vigentes: Considerando que el cabo José Domínguez y los dependientes Juan Lazo y Antonio Fernández ejercían sus funciones cuando fueron acometidos á mano armada por Manuel y José García de Sé: Considerando que esta agresión constituye el delito de atentado, porque fue intencionalmente dirigida contra aquellos empleados para impedir con violencia actos propios de su cargo: Considerando que no pueden desvirtuar la calificación jurídica del hecho punible las circunstancias de haber obrado los agentes dentro ó fuera del radio de adeudo, porque el abuso que se pueda ó no imputar no está sometido al criterio particular ni excusa de responsabilidad á los que conociendo la investidura oficial de la Autoridad ó de sus agentes, les acometen, intimidan ó amenazan en el ejercicio de su cargo ó con ocasión del mismo: Considerando, por consiguiente, que el Tribunal sentenciador no ha incurrido en error de derecho al aplicar los artículos 263, núm. 2.º, y 264, núm. 1.º, del Código penal.» (Sentencia de 29 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 23 de Abril de 1888, página 144.)

**CUESTION IV.** *El que resentido contra un guarda jurado por haberle denunciado éste en varias ocasiones por determinadas faltas, de noche ya, y oculto detrás de un montón de piedras y en acecho, le dispura al pasar un trabuco cargado con varios proyectiles, causándole en un muslo una lesión grave, además del delito de asesinato frustrado, será responsable del de atentado, por haber acometido al referido agente de la Autoridad con ocasión del ejercicio de sus funciones?*—No lo estimó así la Sala de lo criminal de la Audiencia de Zaragoza, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo, á petición del Ministerio fiscal, que interpuso el recurso, por no haberse calificado dicho delito de atentado á la vez que el de asesinato, producidos ambos por un solo acto: «Considerando que cometen el delito de atentado, conforme á lo dis-



puesto en el párrafo segundo del art. 263 del Código, los que acometen, intimidan ó resisten gravemente á la Autoridad ó á sus agentes en el ejercicio de las funciones de su cargo ó con ocasión de ellas; Considerando que es un hecho declarado probado en la sentencia que el delito de asesinato frustrado que en la misma se pena se cometió contra Francisco Budría cuando regresaba del servicio que como guarda jurado del Municipio prestaba, y consignándose también por el Tribunal á que la afirmación de hecho de que el motivo determinante que impulsó al procesado á cometerlo fué el odio y rencor que profesaba al guarda por haberle denunciado en cumplimiento de su cargo por faltas que había cometido (1), es evidente que el delito de asesinato frustrado se cometió con ocasión de las funciones que como guarda jurado, y en este concepto agente de la Autoridad, ejercía el ofendido, y por consiguiente existe conjunto con él y ejecutado por un solo hecho también, el de atentado; y al no calificarlo así la Sala sentenciadora, en conformidad á lo dispuesto en el art. 80 del Código penal, ha incurrido en error de derecho é infringido las disposiciones legales que invoca el Ministerio fiscal como fundamento del recurso, etc.» (Sentencia de 7 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 16 de Marzo de 1889, pág. 67.)

## Art. 264.

### PENA DEL DELITO DE ATENTADO.

#### I Si la agresión se verifica á mano armada.

**CUESTION I.** *¿Deberá calificarse de á mano armada la agresión que se verifica contra un agente de la Autoridad dándole un palo?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que afirmándose en la sentencia recurrida que para apaciguar el tumulto promovido en el *restaurant Petit Fornos* intervinieron un sereno y dos guardias de seguridad, y que á uno de éstos, en ocasión de hallarse ejerciendo las funciones de su cargo, le acometió y dió un golpe con un bastón el procesado Fabián Rodrigo Peláez, produciéndole en la cabeza una lesión leve, es

(1) En los resultandos de la Sentencia de casación cuyos considerandos transcribimos, no se consignó el de la sentencia del Tribunal á que en que se hace semejante afirmación de hecho. No podemos, empero, sino darla por cierta, pues que, de no ser así, no la habrían invocado el Ministerio fiscal ni la Sala, como fundamento de su recurso el primero, de su resolución la segunda. Ello prueba, sin embargo, que por quien corresponde no se cumple con escrupulosidad bastante el precepto del número 1.º del art. 809 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, que ordena que «baja la palabra resultando se transcriban literalmente los de la sentencia ó auto recurridos, excepto aquellos que sean de manifiesta impertinencia; y no hay para qué demostrar cuán pertinente sea en este caso la consignación del resultado relativo al móvil determinante del delito cometido, pues que, como se ha dicho antes, sirvió de base y fundamento al recurso interpuesto y á la resolución recaída. Para que se corrijan tan graves deficiencias en lo sucesivo, llamamos muy especialmente la atención de los dignísimos señores Magistrados que componen la Sala segunda del Tribunal Supremo.

evidente que el expresado guardia se presentó con tal carácter, que no se ha puesto en duda ni discutido en la sentencia reclamada: Considerando que existe la circunstancia 1.<sup>a</sup> del art. 264 del Código penal cuando el agente, armado de un instrumento cualquiera, capaz de producir un mal de mayor gravedad que el que pudiera resultar sin el empleo de dicho medio, verifica la agresión, etc.» (Sentencia de 12 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 3 de Mayo, pág. 161.)

**CUESTION II.** *Cuando varios acometen simultáneamente á los agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones, y por uno de los agresores se causa á aquellos con arma lesiones más ó menos graves, ¿serán responsables de la agresión verificada á mano armada y del delito complejo de lesiones, según el art. 90, aun aquellos de los procesados que no llevaban armas ni infirieron daño alguno á los agentes?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que son reos de atentado los que acometen á los agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones con ocasión de ellas, y que agrava la pena de este delito la circunstancia calificativa de verificarse la agresión á mano armada: Considerando que si los agresores son varios y atacan simultáneamente, cada uno de éstos es responsable del hecho criminal con todas sus consecuencias y circunstancias específicas, porque tomaron participación directa en el mismo: Considerando que la calificación jurídica de un delito cometido por varios es individual cuando la naturaleza de los hechos demuestra que obraron de concierto y de común propósito, si las condiciones personales de alguno de los reos no determinan respecto á él otra calificación especial: Considerando que la responsabilidad criminal de los autores es asimismo indivisible en cuanto al concepto de su participación, pues el mayor ó menor grado de acción de cada uno de ellos no puede ocasionar calificaciones distintas: Considerando por ello que José María Méndez, llevase ó no armas, es responsable del ataque colectivo á mano armada y de las lesiones causadas por efecto de la agresión, y que, por consiguiente, decaen el primero y segundo de los motivos del recurso, y no resultan infringidos por indebida aplicación los artículos 264, circunstancia 1.<sup>a</sup>, y 433 del Código penal, etc.» (Sentencia de 13 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 3 de Mayo, página 162.)

**CUESTION III.** *Si al pretender los conductores de un carro introducirlo en la ciudad sin pagar los derechos de los géneros que conducían, el Inspector de consumos trató de detener el caballo y apoderarse de la escopeta que llevaba uno de los conductores, resistiendo éste la entrega y forcejeando con aquél para no entregarla ni detenerse, en cuyo momento otro de los conductores del carro que iba un poco más atrás hizo un disparo contra dicho Inspector sin causarle daño, ¿deberá hacerse extensiva al primero la responsabilidad de este delito de atentado á mano armada ejecutado por el segundo, ó será aquél tan sólo responsable del delito de resistencia grave, comprendido en el art. 265 del Código?*—El Tribunal Supremo declaró esto último al casar la sentencia de la Au-



diencia de lo criminal de Antequera, que condenó á ambos procesados á la misma pena por el delito más grave: «Considerando que se funda el recurso de casación interpuesto por la representación de José Sáenz Moreno en que el hecho que ha dado origen á su proceso no constituye el delito de atentado, por el que se le condena, y el sólo una resistencia grave á los agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones, y ciertamente que, ignorándose si estaba de acuerdo con José Ramos Román, que fué el que disparó un arma de fuego contra el Inspector de arbitrios D. Juan Perea, limitada su conducta, según se dice en el fallo reclamado, á empeñarse en entrar á las diez de la noche en la ciudad de Antequera un carro cargado de tocino, y á resistir hasta que no pudo más la entrega á dicho Inspector de una escopeta que llevaba en la mano, pero no en actitud amenazadora, por modo claro resulta que su proceder se halla castigado, no en el artículo 264, con relación al núm. 2.º del 263, sino en el 265 del Código penal, que por no haberle aplicado el Tribunal sentenciador le ha infringido, como ha infringido los dos primeros por aplicación indebida, incurriendo en el error de derecho que señala el núm. 3.º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento criminal y que con fundamento se invoca en el recurso; Fallamos que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por José Sáenz Moreno contra la sentencia dictada por la Audiencia de lo criminal de Antequera, cuya sentencia casamos y anulamos, declarando de oficio las costas de este recurso; y comuníquese esta resolución, con la que á continuación se dicta, al Tribunal sentenciador á los efectos correspondientes.» (Sentencia de 26 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 17 de Mayo, páginas 272 y 273.)

### III Si los delinquentes pusieren manos en la Autoridad.

**CUESTION.** *¿Deberá ser calificada de atentado con imposición de manos en la Autoridad, previsto y penado en el núm. 3.º del artículo 264 del Código, el hecho de abofetear un preso al Alcalde de la cárcel en el ejercicio de sus funciones?*—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Ponferrada, la que impuso al procesado la pena de siete años de prisión mayor, multa de 1.500 pesetas y costas. Preparado recurso de casación por infracción de ley contra dicha sentencia por la defensa del reo, tres Abogados del Colegio de esta Corte manifestaron sucesivamente no hallar motivo alguno para interponerlo; mas pasado el expediente al Fiscal del Tribunal Supremo, usando del derecho que le concede el penúltimo párrafo del art. 876 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, interpuso el recurso en beneficio del reo, citando como infringido el art. 264, núm. 3.º del Código penal, por su indebida aplicación y los párrafos penúltimo y último del propio artículo, en cuya sanción más benigna debió comprenderse, á su juicio, el hecho procesal, por no tener el Alcalde de cárcel el carácter de Autoridad, según los términos del art. 277 del Código y corresponderle tan sólo el de delegado ó agente de la misma. En su virtud, el

Tribunal Supremo *casó* la sentencia recurrida por los propios fundamentos alegados por la Representación pública: «Considerando que no puede reputarse Autoridad al Alcalde de la cárcel de Ponferrada, según la terminante disposición del art. 277 del Código penal, por no ejercer por sí sólo jurisdicción propia, correspondiéndole tan sólo el carácter de delegado ó agente de la misma, de conformidad con dicha disposición legal y constante jurisprudencia de este Tribunal Supremo, y que en tal concepto, el hecho de haber sido abofeteado por los hermanos de Barrio no constituye el delito de atentado, previsto y penado en el núm. 2.º del art. 263, y si el menos grave comprendido en los dos últimos párrafos del 264 de dicho Código, por haber puesto manos en un agente de la Autoridad: Considerando que al no estimarlo así la Sala sentenciadora ha incurrido en el error que en el recurso se le atribuye é infringido la circunstancia 3.ª del art. 264 del Código penal por su indebida aplicación, y los párrafos penúltimo y último del propio artículo por no haberse aplicado; Fallamos que debemos declarar y declaramos *haber lugar* el recurso interpuesto por el Ministerio fiscal contra la sentencia dictada por la Audiencia de lo criminal de Ponferrada, la cual casamos y anulamos, etc.» (Sentencia de 21 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 19 de Noviembre de 1887, pág. 327.)

#### Art. 264 (párrafo último).

PENA DEL ATENTADO CUANDO LOS CULPABLES HUBIEREN PUESTO MANOS EN LAS PERSONAS QUE ACOUDIEREN EN AUXILIO DE LA AUTORIDAD Ó EN SUS AGENTES Ó EN LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

**CUESTION 1.** *El dar un mordisco á un agente de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones, deberá estimarse como imposición de manos en el mismo, á los efectos del último párrafo del art. 264 del Código?*—No lo entendió así la Audiencia de lo criminal de Ciudad Rodrigo, que calificó el hecho de delito de *resistencia grave* á los agentes de la Autoridad, comprendido en la sanción más benigna del art. 263 del Código. Mas interpuesto contra dicha sentencia recurso de casación por el Ministerio Fiscal, citando como infringido el art. 264, que era el que debió aplicarse al caso procesal, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar* al expresado recurso: «Considerando que cometen atentado, según el núm. 2.º del art. 263 del Código penal, los que resistieren gravemente á los agentes de la Autoridad cuando se hallan ejerciendo las funciones de su cargo ó con ocasión de ellas, calificando el hecho según el último párrafo del art. 264, el poner manos en los mismos: Considerando que está evidentemente demostrado en la sentencia recurrida que no bastando á dos guardias de Orden público los medios persuasivos para lograr que la recurrente abandonara el sitio donde hacía horas permanecía en ademán agresivo contra su suegro, se vieron en la necesidad, para conseguirlo, de retirarla á la fuerza, cogiéndola cada uno de un bra-



zo, á lo que opuso también una fuerte resistencia, causando á uno de ellos de un mordisco una lesión que curó á los cuatro días; con lo que, á no dudarlo, cometió un verdadero atentado, comprendido en el núm. 2.º del art. 263 del Código, en relación con el último párrafo del 264, que lo pena por la grave resistencia que hizo á aquellos agentes con ocasión de las funciones de su cargo, que llevó al extremo de poner manos en uno, pues en ese sentido hay que tomar haberlo lesionado de un bocancho; y aun cuando la Audiencia sentenciadora cita como aplicable el art. 264, la penalidad que impone no es, sin embargo, la que ese artículo señala, sino la del art. 263, que no es congruente al caso, cambio que constituye la infracción de ambos artículos por la aplicación indebida de uno y la falta de aplicación del otro, habiendo incurrido con ello en el error de derecho que señala el núm. 3.º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, que con razón ha hecho valer el Ministerio fiscal, etc.» (Sentencia de 23 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 13 de Mayo, pág. 252.)

**CUESTION II.** *Aun cuando al hablar el art. 263, núm. 2.º, de los sujetos pasivos del delito de atentado, sólo hace mención de la Autoridad ó de sus agentes, y no de los funcionarios públicos, ¿deberá calificarse de atentado con imposición de manos, con arreglo al último párrafo del art. 264, el acto de acometer á un funcionario público en el ejercicio de sus funciones ó con ocasión de ellas, y de producirle con un arma lesiones de mayor ó menor gravedad?—El Director de un Hospicio nombrado por la Diputación provincial, ¿ tendrá el carácter de funcionario público á los efectos expresados?—*Sobre ambos extremos ha resuelto el Tribunal Supremo la afirmativa: «Considerando que, según el art. 416 del Código penal, se debe reputar funcionario público todo el que por disposición inmediata de la ley, ó por elección popular, ó por nombramiento de Autoridad competente, participe del ejercicio de funciones públicas: Considerando que el Presbítero D. Mariano Gil Plaza ejercía funciones públicas al desempeñar el cargo de Director de un establecimiento provincial de beneficencia en Segovia, y que la Diputación de aquella provincia acordó, como Autoridad competente, su nombramiento: Considerando por ello que el Presbítero Gil Plaza era y debía ser tenido como funcionario público en el acto de sufrir la agresión del procesado Vicente San Gil, con motivo de una disposición peculiar á su cargo y al régimen interior del Hospicio: Considerando que el art. 264 del precitado Código, en su párrafo último, especifica el hecho de poner mano en algún funcionario público y lo equipara para determinar la penalidad al concepto de atentado señalando sanción especial y superior á la que presupone el delito de lesiones menos graves: Considerando que, según el art. 90, cuando un mismo hecho constituye dos ó más delitos, debe imponerse la pena correspondiente al de mayor gravedad y en el grado máximo: Considerando, por consiguiente, que el Tribunal á quo ha incurrido en error de calificación, infringiendo, por no haberlas aplicado, las disposiciones legales expuestas; Fallamos que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso interpuesto por el Minis-

terio fiscal contra la sentencia dictada por la Audiencia de lo criminal de Segovia, etc.» (Sentencia de 24 de Marzo de 1888, publicada en las *Gacetas* de 13 y 14 de Mayo, páginas 252 y 253.)

**CUESTION III.** *El que con objeto de evitar que unos guardias de seguridad aprehendieran á un sujeto á quien perseguian, da á uno de aquellos un empujón que casi le derribó al suelo, será responsable del delito de atentado á los agentes de la Autoridad con imposición de manos en los mismos?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que se incurre en la responsabilidad penal señalada en el último párrafo del art. 264 del Código cuando se ponen manos en los agentes de la Autoridad siempre que ejerzan las funciones de su cargo ó con ocasión de ellas; Considerando que el hecho probado de que el recurrente Manuel Filló Balandrín, con objeto de evitar que se aprehendiera á uno á quien seguian de cerca dos guardias de seguridad, dió á uno de éstos un empujón que casi le hizo caer al suelo, determina el delito de que antes se ha hecho mérito, pues, como se ve, puso manos en los agentes de la Autoridad cuando en cumplimiento de su deber perseguian á un delincuente; Considerando que de igual opinión ha sido la Audiencia de Madrid, dictando el fallo condenatorio recurrido, sin infringir los artículos del Código penal que se citan, ni incurrir en el error de derecho de calificar mal el delito perseguido, etc.» (Sentencia de 14 de Diciembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 22 de Abril de 1889, página 113.)

### Art. 265.

RESISTENCIA Á LA AUTORIDAD Ó Á SUS AGENTES, Ó DESOBEDIENCIA GRAVE Á LOS MISMOS EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE SUS CARGOS.

**CUESTION I.** *El contribuyente moroso que al ser requerido por el comisionado de apremio, precia las formalidades de la Ley, á fin de que franquee la puerta de su casa para realizar el embargo, se niega resueltamente á ello, pero sin proferir injuria ó amenazas, por cuyo motivo hubo de retirarse el comisionado con las personas que le acompañaban, será responsable del delito de desobediencia, previsto y penado en el art. 265 del Código, ó tan sólo de la falta comprendida en el núm. 5.º del 589?*—La Audiencia de lo criminal de Huesca entendió lo primero y condenó al procesado á dos meses y un día de arresto mayor, multa de 125 pesetas y costas. Mas el Tribunal Supremo, llamado á resolver el recurso de casación interpuesto por la defensa del reo contra dicha sentencia, declaró que el hecho constituía una simple falta: «Considerando que no apareciendo de la sentencia recurrida los hechos en que consistiera la oposición de Valero Samplón á franquear la puerta al comisionado de apremio que, acompañado de un alguacil, iba á practicar el embargo decretado, no puede esta Sala apreciarlos, y en la forma que se consigna no constituyen el delito de resistencia ni desobediencia grave, que castiga el art. 265



del Código penal, porque bien pudo el comisionado entrar en la casa apelando á los medios coactivos que le daba la Ley: Considerando que los hechos que como probados consigna la sentencia recurrida constituyen una falta, comprendida en el núm. 5.º del artículo 589 del Código penal: Considerando, por lo expuesto, que el Tribunal sentenciador ha incurrido en el error de derecho é infracciones legales que cita la representación del recurrente, etc.» (Sentencia de 7 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 16 de Noviembre, pág. 302.)

**CUESTION II.** *La circunstancia de haberse la Autoridad judicial atemperado más ó menos á las disposiciones legales al dictar una resolución, será obstáculo á la calificación y castigo del delito de desobediencia grave, determinada por la reiterada negativa del procesado á cumplir y ejecutar dicho mandato?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que, según el artículo 265 del Código penal, cometen el delito de desobediencia grave á la Autoridad los que se niegan á cumplir sus órdenes, dictadas en el ejercicio de las funciones de su cargo, y que el recurrente, al negarse repetidamente al cumplimiento y ejecución del auto dictado por el Juez municipal, incurrió en dicho delito, sin que obste para ello que al dictarle dicha Autoridad se atemperase más ó menos á las disposiciones legales, como pretende el recurrente, porque su deber era cumplir lo ordenado, sin perjuicio, si no las consideraba justas, de acudir en queja, como lo hizo, á sus superiores, y aun de usar el derecho de exigir la responsabilidad á que hubiere lugar, etc.» (Sentencia de 13 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 19 de Noviembre, páginas 321 y 322.)

**CUESTION III.** *El arrendatario de unas fincas rústicas que después de haber sido desahuciado y lanzado con las prevenciones y apercibimientos de ley y prohibición expresa de que volciera á penetrar en ellas, sigue cultivándolas y en posesión de las mismas, ¿será responsable del delito de desobediencia grave, previsto y penado en el art. 265 del Código, ó lo será tan sólo de la falta comprendida en el núm. 5.º del 589?*—El Tribunal Supremo ha declarado que la primera y más grave calificación es la que le corresponde: «Considerando que afirmándose en la sentencia recurrida como hechos probados que sin embargo de haber sido desahuciado en el juicio correspondiente Manuel Camín de las fincas rústicas que de la pertenencia de D. Elías Díaz llevaba en arrendamiento, y de haberse practicado en forma la diligencia de lanzamiento, con las prevenciones y apercibimientos de ley y prohibición expresa de que se abstuviera de penetrar en las referidas fincas, siguió el Camín cultivándolas y en posesión de las mismas, es evidente que estos actos constituyen el delito de desobediencia grave á cumplir la resolución y mandato de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones, previsto en el art. 265 del Código penal, y que al apreciarlo así el Tribunal á quo no ha incurrido en el error de derecho ni infringido las disposiciones legales que se le atribuyen, etc.» (Sentencia de 7 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 2 de Mayo, pág. 150.)

**CUESTION IV.** *El que se niega reiteradamente á la exhibición de sus libros mercantiles ordenada por la Autoridad judicial en juicio civil, ¿podrá eximirse hoy de la responsabilidad criminal inherente al delito de desobediencia grave, comprendido en el artículo 265 del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que el art. 261 de aquel cuerpo de derecho (1) define como punible la desobediencia grave á la Autoridad, y que así debe ser estimada la de D. Juan Félix Jano, por haber reiteradamente omitido la exhibición de sus libros mercantiles, ordenada en juicio civil por el Juez de Toabaya: Considerando que la exhibición acordada como medio probatorio se halla establecida por el art. 51 del Código de Comercio de 1829 y por el artículo 47 del promulgado en 22 de Agosto de 1885, y que aun supuesta la falta de estas disposiciones legales, no sería excusable la desobediencia de Jano, quien pudo utilizar los recursos procedentes al conceptuaba contraria á derecho la resolución del Juez: Considerando que el art. 54 del Código de Comercio de 1829, según el cual los libros mercantiles se han de llevar en idioma español, es notoriamente inaplicable al caso procesal, y que aun rectificadas la equivocación de cita en que se ha incurrido por transposición de guarismos, tampoco tendría aplicación el art. 45, donde se castiga la ocultación de libros comerciales, porque, según los resultandos aceptados por el Tribunal sentenciador, la desobediencia de Jano se efectuó en Mayo de 1886, y desde el día 1.º de este mes regía en Cuba y Puerto Rico el Código de Comercio de 1885, según dispone el art. 1.º del Real decreto de 28 de Enero del citado año 1886; Considerando que el nuevo Código no contiene sanción penal para el caso de desobediencia concerniente á la exhibición de los libros de los comerciantes ó á su ocultación, y que, por consiguiente, carece en absoluto de aplicación el art. 7.º del Código penal: Considerando que no procede el recurso de casación cuando se invocan como infringidas leyes inaplicables por la naturaleza de los hechos, por su incongruencia con los mismos ó por haber sido derogadas, etc.» (Sentencia de 6 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 8 de Mayo, pág. 205.)

**CUESTION V.** *El no cumplimiento de la orden judicial de lanzamiento hecha saber á una mujer para que deje á disposición de su dueño una finca que su difunto marido había llevado en arrendamiento, ¿constituirá por sí sólo el delito de desobediencia grave, aun cuando á dicho su marido se le hubiesen hecho ya diferentes intimaciones para la dejación del susodicho inmueble?* (2).—La Sala de lo criminal de la Audiencia de Valladolid estimó que existía el expresado delito y condenó á la procesada á la pena del art. 265 del Código. Mas interpuesto por infracción de éste recurso de casación por la defensa de aquélla, declaró el Tribu-

(1) Artículo 261 del Código penal de Cuba y Puerto Rico, concordante con el 245 del de la Península.

(2) De este último hecho no se hace mención en el considerando de la Sentencia que extractamos; pero consta como probado en los resultandos de la sentencia del Tribunal a quo.



nal Supremo *haber lugar* á la casación solicitada: «Considerando que el requerimiento de lanzamiento hecho á Aureliana Rodríguez de Santiago para que dejara á disposición de su dueño las fincas que su marido había llevado en arrendamiento, no constituye por sí sólo, á pesar de no haberlo verificado, el delito de desobediencia, previsto y penado en el art. 265 del Código penal, porque, además de no habérsela requerido como á los otros procesados anteriormente, ni imputársela los actos de violencia que á éstos, es requisito indispensable que el que le cometa resista y desobedezca gravemente el mandato de la Autoridad en el ejercicio de las funciones de su cargo, cuyos elementos no han concurrido en el presente caso: en que si la recurrente no cumplía, como no cumplió, la orden judicial, el dueño de las fincas pudo ejercitar su derecho, y el Juzgado en su vista llevar á puro y debido cumplimiento la ejecución de su providencia de lanzamiento: Considerando que al no estimarlo así, la Sala sentenciadora ha incurrido en el error de derecho que se le atribuye, é infringido el artículo del Código penal á que el recurso se refiere, etc.» (Sentencia de 2 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 16 de Junio, pág. 298.)

**CUESTION VI.** *Si de la causa resulta que constituida en la tienda de los procesados una Comisión del Ayuntamiento del pueblo para examinar el peso con que despachaban la carne, se ordenó al alguacil que lo recogiera, bajo el concepto de que estaba defectuoso, y al tratar de verificarlo se negó la dueña, echando el peso debajo del mostrador y luego dentro de un cuarto de la casa, y llegando el marido, resistiéndose también á que se lo llevaran, acreditándose que el motivo de la resistencia de ambos esposos fué porque el peso no tenía ningún defecto, pues si caía algo del lado del plato donde se colocaba la carne era por las partículas que se van adhiriendo con el uso del mismo, en términos que colocados tres gramos en el plato contrario quedaba al fiel, y habiéndose probado además que en la localidad la Comisión de repeso no estima el peso falto mientras no exceda de cinco gramos; habrá aquí términos hábiles para calificar esta desobediencia como grave, según el art. 265 del Código, ó simplemente como falta, comprendida en el núm. 5.º del 589.*—La Audiencia de Valencia estimó lo primero. El defensor de los procesados entendió que el hecho no era en modo alguno delictivo; el Ministerio fiscal, que se adhirió oportunamente al recurso fundándose en el núm. 3.º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, lo calificó de *falta*. Y el Tribunal Supremo, al desechar el recurso de los procesados, declaró *haber lugar* á la adhesión del Fiscal por los fundamentos siguientes: «Considerando que la desobediencia á la Autoridad ó á sus agentes cuando obran en el ejercicio de las funciones de sus cargos es siempre justiciable como delito ó como falta si no existe alguno de los motivos que, según las disposiciones legales vigentes, eximan de responsabilidad criminal: Considerando que la Comisión del Ayuntamiento de Pedralba, al presentarse en la casa de los recurrentes para cumplir un servicio oficial de inspección, obró en el ejercicio indiscutible de sus atribuciones, y que por consiguiente

no puede prosperar el recurso interpuesto por la representación de Antonio Pascual Diago y Desamparados Plasencia Muedra, porque sólo se ha invocado para autorizarlo el núm. 1.º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, que carece de congruencia con los hechos originarios del proceso: Considerando que el Ministerio fiscal ha formalizado oportunamente su adhesión al recurso con arreglo al caso 3.º del precitado art. 849, y que es por ello susceptible de examen el error en que haya podido incurrir el Tribunal á *quo* en la calificación de los hechos procesales; Considerando que para calificar como delito ó falta la desobediencia á la Autoridad ó á sus agentes, según el artículo 265 del Código penal, debe apreciarse la gravedad del hecho conforme á las circunstancias del caso, por la transcendencia del acto ó de la omisión y por sus accidentes de modo, lugar, ocasión, motivo, efectos, intención y publicidad; Considerando que regida por estos principios de crítica racional y jurídica, la desobediencia de los procesados no puede estimarse como grave, pues ni produjo escándalo, ni medió acto alguno de violencia, ni existía razón suficiente para la ocupación de la balanza, que, según las costumbres locales, tenía condiciones adecuadas á su legítimo uso, ni se inspiró la conducta de los cónyuges Diago y Plasencia en un propósito de rebelión á los mandatos de la Autoridad, sino en el deseo de evitar el desprestigio que aquella medida pudiera ocasionarles; Considerando por lo expuesto que la Sala sentenciadora ha incurrido en error de calificación, infringiendo, por indebida aplicación, el art. 265 del Código y el artículo 589, por no haber aplicado las prescripciones de su número 5.º; Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso interpuesto por Antonio Pascual Diago y Desamparados Plasencia, y *haber lugar* al formulado por el Ministerio fiscal, etc.» (1) (Sentencia de 7 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 19 de Junio, pág. 301.)

**CUESTION VII.** *La resistencia de un tabernero á obedecer la orden que le da en persona el Alcalde del pueblo de que cierre su establecimiento por ser ya las doce de la noche, teniéndolo abierto una hora más, constituirá el delito de desobediencia grave del art. 265, ó la falta de desobediencia leve del 589, número 5.º—El permiso que verbalmente le diere el Gobernador de la provincia para tener abierta la taberna hasta la una de la noche, podrá ser parte á desvirtuar la indole de dicha desobediencia?—El Tribunal Supremo ha declarado que tal desobediencia debe calificarse de grave, sin que desvirtúe esta gravedad la cir-*

(1) Sin la prudente adhesión del Ministerio fiscal al recurso interpuesto por la defensa de los procesados, no hubieran éstos obtenido el provecho de la casación intentada, consistente en haber rebajado el Tribunal Supremo el hecho calificado y penado por la Audiencia como delito á la categoría de una simple falta; pues que, á excepción de las causas de muerte, en los demás casos el recurso de casación es un recurso tan estricto que obliga al Tribunal Supremo á resolver únicamente las cuestiones planteadas y según los términos en que lo han sido, penitenciándolo, por lo tanto, de cualquiera otra infracción que no haya sido alegada.



circunstancia antedicha: «Considerando que la resistencia manifestada por Pedro Gómez Díaz á obedecer la orden del Alcalde de Badajoz para que cerrase un café cantante de su propiedad, por ser ya pasada la hora de las doce de la noche, constituyó una desobediencia que merece la calificación de grave, no tanto por la mayor ó menor transcendencia de la orden desobedecida, cuanto por el desprestigio que las circunstancias de la desobediencia hicieron recaer sobre la Autoridad desobedecida *personal y directamente*, á pesar de obrar en ejercicio de sus funciones, logrando el recurrente que *prevaleciese su voluntad sobre la orden é intimación de aquélla*: Considerando que el permiso verbal del Gobernador de la provincia con que contaba el recurrente para mantener abierto su café hasta la una de la noche *no desvirtúa la índole de la gravedad* de la desobediencia bajo el aspecto expresado en el anterior considerando, y que la Audiencia de Badajoz no ha incurrido, consiguientemente, en ninguno de los errores que por la representación del recurrente se le atribuyen, etc.» (Sentencia de 14 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 26 de Septiembre, pág. 181.)

**CUESTION VIII.** *Al que, una vez comparecido ante la Autoridad judicial, desobedece insistente y gravemente sus mandatos, ¿podrá eximirse de la responsabilidad criminal, determinada en el art. 265 del Código, la circunstancia de que la citación de comparecencia se efectuase ó no con las debidas formalidades?*—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Gerona, la que absolvió á los procesados, fundándose en que su citación para comparecer ante el Juez municipal no se había ajustado á lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley de Enjuiciamiento criminal. Mas interpuesto recurso de casación contra dicha sentencia por el Ministerio fiscal, citando como infringido el art. 265 del Código por no haberlo aplicado á los hechos imputados á los procesados, porque éstos concurrieron al despacho del Juez, con lo que quedó subsanado el vicio de la citación, y ya ante la Autoridad se resistieron á cumplir sus órdenes, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar* al expresado recurso por los fundamentos siguientes: «Considerando que Pedro y Catalina Ferres y Peiris comparecieron, previa citación, ante el Juez municipal de Villalonga; que se negaron reiteradamente á cumplir las órdenes de aquella Autoridad, relativas á una diligencia de reconocimiento; que persistieron en su resistencia, á pesar de haber intervenido una pareja de la Guardia civil, y que su tenacidad dió ocasión á un pequeño alboroto, producido por varias personas reunidas en grupo delante del Juzgado: Considerando que estos hechos, expuestos como probados en los resultandos primero y segundo de la sentencia reclamada, constituyen notoriamente el delito previsto y penado en el artículo 265 del Código vigente: Considerando que el Tribunal á que ha incurrido en error de derecho no calificando y castigando como delito hechos que lo constituyen, sin que pueda eximir de responsabilidad la circunstancia de que la citación de comparecencia se efectuase ó no con las debidas formalidades, porque este concepto, único fundamento del fallo absolutorio, no guarda

congruencia con la cuestión procesal, pues no se ha perseguido la falta de presentación de los procesados, sino su desobediencia insistente y grave á las órdenes del Juez municipal: Considerando, por consiguiente, que ha sido infringido el precepto art. 265, por no haberlo aplicado, ni juzgado con arreglo á sus disposiciones, etc.» (Sentencia de 8 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 27 de Diciembre, páginas 278 y 279.)

**CUESTION IX.** *¿Constituirá el delito de desobediencia á los agentes de la Autoridad el hecho de hacer desaparecer un comerciante de su almacén unos comestibles averiados que, descubiertos por la policía, dejó ésta en su custodia y bajo su responsabilidad para inutilizarlos el día siguiente, dando lugar esa ocultación á que no pudiera procederse al comiso de los mismos?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que es una verdad indiscutible que el recurrente Gaspar Melchor Serrano Delgado, comerciante de ultramarinos, tenía en una bodega varias arrobas de bacalao podrido; que una vez descubiertas y para inutilizarlas las dejaron hasta el día siguiente en custodia y bajo su responsabilidad al cuidado de dicho Serrano, dos inspectores de plazas y mercados y un guardia municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, y que en lugar de cumplir sus órdenes las hizo aquél desaparecer, sin que se lograra el comiso de ellas; hechos todos que por lo menos determinan el delito de desobediencia grave á los agentes de la Autoridad, como con arreglo á la Ley eran aquellos funcionarios y en ejercicio de sus cargos, y al apreciarlo así la Audiencia de Zaragoza en la sentencia condenatoria reclamada no ha infringido, aplicándolo, el artículo del Código ya citado, ni incurrido en el error de derecho que se invoca en el recurso, etc.» (Sentencia de 30 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 10 de Marzo de 1889, página 59.)

**CUESTION X.** *La verdadera resistencia constituida por tenaz oposición á hacer lo que la Autoridad ó sus agentes mandan, hasta el punto de tener que apelar éstos á la fuerza para compeler al ciudadano á hacer lo que se le ordena, ¿podrá constituir una simple falta de desobediencia, aun cuando la resistencia haya sido meramente pasiva, ó sea no caracterizada por acto alguno de fuerza ejercido por el procesado contra la Autoridad ó sus agentes?*—El Tribunal Supremo, de acuerdo con la opinión del Ministerio fiscal, ha resuelto que tales hechos constituyen el delito de resistencia, que prevé y castiga el art. 265 del Código: «Considerando que la mayor ó menor gravedad de la desobediencia cometida para con la Autoridad ó sus agentes debe ser apreciada teniendo en cuenta, ya el objeto y trascendencia del asunto á que se refiere aquélla, ya las circunstancias que concurran en el acto; y si bien por el primer concepto pudiera merecer la calificación de leve el motivo de la resistencia realizada por los recurrentes, este acto de resistencia constituye por sí, independientemente del móvil, el delito que define y pena el art. 265 del Código, puesto que la resistencia implica siempre la existencia de una desobediencia calificada, y en tal concepto resulta castigada en dicho artícu-



lo, etc.» (Sentencia de 11 de Diciembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 15 de Abril de 1889, páginas 104 y 105.)

## CAPÍTULO V

**De los desacatos, insultos, injurias y amenazas á la Autoridad, y de los insultos, injurias y amenazas á sus agentes y á los demás funcionarios públicos.**

### Art. 266.

QUIÉNES COMETEN EL DELITO DE DESACATO.

**CUESTION I.** *El que en un acto de la vida social dice á un sujeto, á la sazón Alcalde interino de la población, «que es un chismoso, enredador, que lleva todo el pueblo revuelto,» y al contestarle el aludido «que calle y no maltrate á la Autoridad,» replica «que no le reconoce por tal y que lo mismo que le había dicho allí se lo diría en cualquiera otra parte,» ¿será responsable del delito de desacato á la Autoridad?*—De desacato menos grave calificó el hecho la Audiencia de Cartagena, y condenó á su autor á un año y un día de prisión correccional. Mas interpuesto contra dicha sentencia por la defensa del reo recurso de casación, que apoyó en el acto de la vista el Ministerio fiscal, por infracción del art. 266 del Código, declaró el Tribunal Supremo haber lugar á él: «Considerando que cometen desacato, conforme determina el párrafo primero del art. 266 del Código penal, los que amenazan, calumnian, injurian ó insultan de hecho ó de palabra á la Autoridad á su presencia y en ejercicio de sus funciones ó con ocasión de ellas, delito que no es de imputarse al recurrente Antonio Ramón Sevilla Franco, porque si bien llamó chismoso y enredador y dirigió otras palabras más ó menos ofensivas al segundo Teniente Alcalde don Angel Esparza, lo hizo cuando no ejercía las funciones de su cargo y sin que se relacionaran con éstas aquellas ofensas, razón por la que la Audiencia de Cartagena, al condenar á dicho Sevilla como culpable de desacato menos grave, ha infringido al aplicarlo el artículo ya citado, y el 267, párrafo segundo del expresado Código, incurriendo en el error de derecho que se invoca en el recurso, etc.» (Sentencia de 14 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 4 de Enero de 1888, pág. 11.)

**CUESTION II.** *El que llamado á prestar declaración en un proceso ante un Juez municipal, se resiste á declarar en el fondo, expresando desconfianza en dicho Juez y sus suplentes, afirmando «que tanto aquella oficina como las demás dependencias públicas eran manejadas bajo fines particulares,» ¿será responsable del delito de desacato á la Autoridad?*—Caso afirmativo, ¿podrá eximirle de la pena de este delito la alegación de que obró en el ejercicio legítimo de un derecho al recusar de este modo al Juez?—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa sobre el primer punto, y la negativa por lo que toca al segundo: «Considerando

que cometen delito de desacato los que, hallándose una Autoridad en el ejercicio de sus funciones ó con ocasión de ellas, la calumniaren, injuriaren ó insultaren de hecho ó de palabra en su presencia, ó en escrito que le dirigieren ó la amenazaren; y que el recurrente, después de resistirse al mandato del Juzgado municipal para que declarase en causa que se le seguía por falsedad de un documento público, manifestó, á presencia del Juez, que tanto éste como sus suplentes y demás dependencias públicas eran manejadas bajo fines particulares, cuyos conceptos son injuriosos y ofensivos para la Autoridad á quien eran dirigidos, por redundar en su desprestigio y menosprecio, y constituyan el expresado delito: Considerando que no constando de los hechos declarados probados en la sentencia recurrida que las expresiones injuriosas de que queda hecho mérito fueran dirigidas por el recurrente al Juez municipal por hacer uso del derecho de recusación, y que aun en este caso sólo pueden y deben invocarse los motivos consignados en la Ley que lo autoriza, etc.» (Sentencia de 10 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 3 de Mayo, página 157.)

**CUESTION III.** *Una simple disputa ó altercado con una Autoridad, el pedirle en tono más ó menos agrio ó destemplado explicaciones por un acto que aquella realizara en el ejercicio de sus funciones, será bastante para determinar la existencia del delito de desacato?—¿Cabrá ni aun calificar el hecho como simple falta, si no se precisan en la sentencia los hechos que en su caso pudieran determinar la falta de consideración y respeto á dicha Autoridad?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa sobre ambos extremos. Fué el hecho el siguiente: D. Rafael Herce, como Facultativo médico de Fuentes de Andalucía, expidió una certificación de óbito de la niña Josefa Ruiz Pérez, que presentada al Juzgado municipal para su inscripción en el Registro fué atendida, ordenándose por dicha Autoridad la inspección ocular del cadáver con asistencia de otros dos Facultativos de la misma localidad; y como este proceder molestase al referido D. Rafael Herce, se personó en la audiencia del Juzgado en ocasión de no encontrarse en ella el Juez, y dirigiéndose al auxiliar del mismo, don Victoriano Arce, con palabras y maneras descompuestas le exigió satisfacción de por qué su certificación había sido desatendida, á lo que repetidas veces se contestó por aquél que moderase su actitud y sus palabras, viéndose obligado, por último, ante la intemperancia del Herce, á cogerle de un brazo y ponerle fuera del local. Mas situado D. Rafael Herce en la antesala del Juzgado, llegó en esto el Juez D. Eduardo Aguilar, quien se dirigió á su despacho, siguiéndole aquél y entrando tras de él; y ya dentro el procesado, con el mismo tono é igual actitud, reclamaba del Juez que le diera la explicación de su proceder, ordenándole aquél que se moderase y guardase compostura; y como el Herce insistiese en su pretensión, el Juez le hizo salir de la audiencia, quedando la puerta entreabierta; y situado otra vez el procesado en el antedespacho, dirigiéndose á aquél en tono agrio y altanero, le decía: que ni como Juez ni como Eduardo Aguilar le tolera-



ba que le insultase; repitiendo la frase cara á cara con el Juez, cuando éste, aproximándose á la puerta, manifestó á D. Rafael Herce que ni le había insultado ni se ocupase de él; y como persistiera éste en su dicho, el Juez ordenó que fuera detenido en la prevención, expresando al salir: «Sí, señor: la cárcel se ha hecho para los hombres honrados;» habiendo alegado el procesado en su exculpación que hallándose en el antedespacho del Juez, creyó entender que éste hablaba de él en términos inconvenientes, oyendo las palabras de: «Á ese títere ya lo arreglaré,» lo que motivó que él se expresara en los términos indicados. Instruida causa y seguida por todos sus trámites, la Audiencia de lo criminal de Osma calificó los hechos expuestos como constitutivos del delito de *desacato*, consistente en dirigir insultos á la Autoridad en su presencia, de que era autor D. Rafael Herce, en cuyo favor era de estimar la circunstancia atenuante de arrebato, y lo condenó á cuatro meses y un día de arresto, accesorias y costas. Mas interpuesto contra esta sentencia por dicho procesado recurso de casación por infracción de ley, que fundó en el núm. 1.º del artículo 849 de la de Enjuiciamiento criminal, designando como infringidos: 1.º el 266, caso 1.º, del Código penal, porque no se cometió por el recurrente el delito que éste castiga; y 2.º el 471, por la misma razón; cuyo recurso fué admitido y apoyado *in voce* por el Ministerio fiscal, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar á él*: «Considerando que las frases dirigidas por el recurrente al Juez municipal de Fuentes de Andalucía, objeto del proceso y que han sido calificadas por la sentencia recurrida como delito de desacato, no son constitutivas de este delito ni otro alguno, porque ni ellas ni la petición más ó menos conveniente de explicaciones son por su propia índole ni por las circunstancias del suceso ofensivas bajo concepto alguno para dicha Autoridad por no ser insultantes, injuriosas, ni atribuirle acción que la desacreditara, ni menos implican amenaza: Considerando que aunque el tono y maneras con que la Audiencia dice que procedió el recurrente induzca á sospecharlas dignas de alguna corrección en concepto de simple falta, hace esto imposible, en el estado actual del proceso, la indeterminación de los hechos realizados por aquél, porque la calificación con que la Audiencia se limita á expresarles no es un hecho á que deba de atenerse esta Sala, sino la aplicación de un criterio á hechos que desconoce por su omisión en la sentencia recurrida, surgiendo de ello la duda de su procedencia, que autoriza más el que, no por ellos, sino por las frases que le siguieron, hizo uso de su autoridad el Juez: Considerando que al no estimarlo así la Sala sentenciadora ha incurrido en el error de derecho que se le atribuye é infringido los artículos del Código penal á que el recurso se refiere, etc.» (Sentencia de 14 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 3 de Mayo, pág. 164.)

**CUESTION IV.** En un escrito dirigido á un Juez pidiéndole su recusación se consigna el párrafo siguiente: «La enemistad de V. S., dada nuestra respectiva posición de Juez y Abogado, la deducimos de una latente prevención que hemos advertido en los actos de V. S. hacia nosotros, que determinan prevenciones y corre-

ciones disciplinarias impuestas, algunas de las cuales lo fueron con tal precipitación, que V. S. propio las revocó, y sobre otras existían recursos: ¿determinarán tales frases y conceptos el delito de desacato á la Autoridad judicial?—Así lo estimó la Audiencia de la Habana, que condenó al autor de dicho escrito á un año y un día de prisión correccional, accesorias, multa de 325 pesetas y costas. Mas interpuesto por la defensa del procesado recurso de casación contra dicha sentencia por infracción del art. 262 del Código de Cuba y Puerto Rico (266 del de la Península), en relación con el que define la injuria, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar* al expresado recurso: «Considerando que los Magistrados, Jueces y Asesores pueden ser recusados, y que el ejercicio de este derecho, aunque se funde en motivos de enemistad manifiesta, no implica ofensa alguna, si en la exposición de los hechos y en el razonamiento empleado para apoyar el recurso se guardan las consideraciones debidas al funcionario recusado: Considerando que las guardó el recurrente, pues su alegación se limita á la significación de datos procesales no desmentidos, en que se funda el concepto de la recusación, sin calificaciones depresivas, ni frase alguna injuriosa: Considerando, por consiguiente, que el Tribunal sentenciador ha incurrido en el error de derecho, calificando de delito un acto que no lo constituye, con infracción de los artículos 1.º y 262, núm. 1.º del Código penal vigente en las provincias de Cuba y Puerto Rico, etc.» (Sentencia de 31 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 8 de Mayo, página 202.)

**CUESTION V.** *El Letrado defensor de un querellante por injuria, que en escrito interponiendo recurso de súplica contra un auto dictado por el Juez de instrucción dice entre otras cosas «que no puede consentir» la equivocada teoría que contiene la providencia suplicada, en la que la parcialidad de V. S. por el procesado (protesto mi respeto) le lleva á sostener que el delito no denigra al procesado, ¿será responsable por estas frases y conceptos del delito de desacato á la Autoridad judicial?—*Así lo estimó la Sala de lo criminal de la Audiencia de la Habana, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por no constituir delito el expresado hecho: «Considerando que para apreciar si un concepto ó frase consignada en un escrito es injurioso no basta considerar aisladamente la frase ó concepto que se suponga lo es, sino que hay que ponerla en relación con el general del escrito, y aun con el propósito del autor al escribirlo, para interpretar rectamente su sentido y alcance: Considerando que atendida la ocasión, circunstancias y objeto del escrito y explicaciones dadas por su autor, no puede suponerse en D. Antonio Germán Castiñeira intención de causar deshonor, descrédito ó menosprecio al Juez á quien va dirigido, que es lo que constituiría la injuria, según el art. 475 del Código penal de Cuba, y en este caso el desacato, porque la frase de *parcialidad*, que se supone injuriosa, dicha en términos de defensa combatiendo la teoría sustentada por el Juez en los fundamentos de un auto denegatorio de recusación por amistad íntima



con una de las partes, no tiene otro alcance que la posibilidad de ofuscar su razón y privarle de la serenidad de juicio, tan necesaria en el que ha de juzgar; y aunque este error de juicio se atribuya á la parcialidad que pueda engendrar la amistad íntima, como esto lo reconoce la misma ley al establecerlo como causa de recusación, y la imputación de amistad no envuelve deshonor, descrédito ni menosprecio al que la sustenta, no puede ser constitutiva del delito de injuria, ni por consecuencia del desacato, y al no estimarlo así la Audiencia sentenciadora ha incurrido en el error de derecho é infringido las disposiciones legales que se citan como fundamento del recurso, etc.» (Sentencia de 6 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 19 de Junio, pág. 299.)

**CUESTION VI.** *El que enfurecido con un contrincante en un juicio verbal al sentirse insultado por éste, y al correr tras él desatendiendo las exhortaciones del Juez municipal, y por haberle entonces sujetado éste, dice con referencia al mismo: «Mé c.... en D.... y en el Juez, y esto pasó porque no tienes c.... de Juez,» ¿puede ser responsable del delito de desacato ó de la falta de ofensa á la Autoridad, comprendida en el núm. 5.º del art. 589 del Código?*—La Audiencia de lo criminal de Colmenar Viejo estimó lo primero. Mas el Tribunal Supremo declaró que el hecho procesal sólo constituía la falta antedicha: «Considerando que el recurso de casación deducido á nombre de Apolonio Rozas Labradero se funda en que el hecho que ha dado origen á su proceso no constituye delito, determinando una falta comprendida en el núm. 4.º del artículo 589 del Código penal, lo cual es cierto, porque limitado á haber dirigido al Juez municipal de Majadahonda, su pueblo, y proferido á su presencia ciertas frases incultas y hasta obscenas, dadas las circunstancias del ofendido y ofensor, el instante de acaloramiento en que esas frases se pronunciaron y que no tendían al menosprecio, no constituyen realmente el delito de desacato y si sólo una falta de respeto y consideración debida á la Autoridad, y al no estimarlo así la Audiencia de Colmenar Viejo en la sentencia recurrida ha infringido el expresado artículo del Código, incurriendo en el error de derecho que se cita en el recurso, etc.» (Sentencia de 27 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 10 de Marzo de 1889, pág. 55.)

**CUESTION VII.** *El que en un escrito dirigido á un Tribunal pidiendo testimonio de ciertas particulares para entablar un recurso de responsabilidad contra el mismo, califica de injustos sus providencias y de prevaricadores á sus individuos, ¿podrá eximirse de la pena del delito de desacato alegando que obró en el ejercicio de un derecho?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que las injurias se caracterizan, aun más que por la significación material de las palabras, por la intención y tendencia con que son proferidas, cuando su autor se propone lastimar con ellas la honra ó crédito de la persona contra quien se dirige; Considerando que si bien es indiscutible el derecho de todo procesado á pedir al Tribunal sentenciador los testimonios necesarios para interponer el recurso de casación en los casos que la Ley se lo otorga, esa petición, completamente independiente

del recurso que ha de interponerse después, debe concretarse al objeto único á que se dirige, sin entrar en razonamientos, que sólo corresponde exponer, siempre en forma respetuosa, al Tribunal llamado á conocer y decidir: Considerando que la forma de que se ha valido el recurrente en el escrito, causa del procedimiento, al hacer á la Audiencia de Huesca la crítica de sus mismas determinaciones, diciéndole «que trataba de dilatar con poco serias providencias los procedimientos, pretendiendo quizás por estos medios ponerse á cubierto de las responsabilidades que el recurrente quiere exigirle,» y que detalla dando por seguro el resultado aun antes de haber presentado el recurso, es, á más de inoportuna é inconveniente en el fondo, tan irrespetuosa y despreciativa en la forma para aquel Tribunal, y se ve tan patente en el escrito el menosprecio que de él se hace y la intención de mortificarlo y rebajarlo, que, á no dudarlo, constituye una verdadera injuria, que, dirigida directamente á él, se eleva á un desacato, comprendido ciertamente en el núm. 1.º del art. 266 del Código penal, etc.» (Sentencia de 28 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 10 de Marzo de 1889, páginas 57 y 58.)

### Art. 269.

CALUMNIA, INJURIA Ó INSULTO Á LA AUTORIDAD FUERA DE SU PRESENCIA, Ó EN ESCRITO NO Á ELLA DIRIGIDO, HALLÁNDOSE LA MISMA EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Ó CON OCASIÓN DE ELLAS.

**CUESTION I.** *Las expresiones «tío, cara de caballo, que hacia falta meterle en el pilón,» aplicadas á un Juez de instrucción, ¿constituirán el delito de injurias á la Autoridad, previsto y penado en el art. 269, ó simplemente la falta de respeto y consideración á la misma, comprendida en el núm. 5.º del 589?—El Tribunal Supremo ha declarado que la primera más grave calificación es la que corresponde al hecho: «Considerando que el concepto injurioso que entrañan las expresiones: tío, cara de caballo, que hacia falta meterle en el pilón, con otros de igual índole, aplicados á un Juez de instrucción, tiende evidentemente á su menosprecio y afecta á su Autoridad, toda vez que la injuria se profirió con ocasión y en desprestigio de las funciones como Juez ejercidas; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no ha incurrido en el error de derecho que expresa el núm. 1.º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, ni infringido el 269 del Código penal.» (Sentencia de 1.º de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 16 de Noviembre, pág. 298.)*

**CUESTION II.** *¿Se cometerá el delito de injurias á la Autoridad en un suelto de periódico en el que, después de quejarse su autor de varios abusos que dice se cometen en el felato de consumos del pueblo y de que el Alcalde no los corrige, se da como razón para esto el tener dicho Alcalde interés en el asunto?—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que al imputar en un suelto del periódico que se publica en Valencia ti-*



tulado *El Polleter* al Alcalde de Benicarló que no corregía los abusos que se cometían en el felato de consumos porque tenía interés en el asunto, á modo cierto se le atribuye una falta de moralidad que perjudica notablemente la fama y crédito del agraviado, pues aunque no se determinan los abusos, esa misma vaguedad da campo á que cada uno forme el juicio que le parezca, pero nunca favorable, porque, sean graves ó leves los abusos, siempre constituyen un exceso, y su imputación una injuria, que en este caso se eleva á desacato, comprendido en el art. 269 del Código penal, por estar dirigido á una Autoridad con ocasión de sus funciones en escrito que no estaba á ella dirigido; y, por tanto, al aplicar la Sala sentenciadora aquel artículo imponiendo ajustadamente á él la pena que determina en el grado correspondiente, en modo alguno lo ha infringido ni incurrido en el error de derecho que gratuitamente le atribuye el recurrente, etc.» (Sentencia de 3 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 23 de Noviembre, páginas 335 y 336.)

**CUESTION III.** En un suelto de periódico se dice: «Han sido condenados á reclusión perpetua 84 soldados y cabos de Albuera y 83 de Gurrellana; total 167; mas cuatro sargentos de Albuera, 171 hombres que no han hecho tanto contra la Ordenanza como los que los condenan; irresponsables por su clase, como héroes anónimos de esos que han servido á los Generales de las rebeliones indisculpables, Martínez Campos, Dabón, Pavía y Primo de Rivera. ¡Castigo á estos inconscientes y premio á los otros!»: ¿constituirán estas frases y conceptos el delito de injurias á la Autoridad?—La Sala de lo criminal de la Audiencia de Barcelona calificó el hecho de desacato (1), comprendido en el art. 269 del Código, y condenó á su autor á dos meses y un día de arresto mayor. Mas interpuesto recurso de casación contra dicha sentencia por la defensa del reo, declaró el Tribunal Supremo haber lugar á él: «Considerando que el recuerdo y comparación que hace el autor del suelto que ha motivado la condena del recurrente entre el delito contra la Ordenanza cometido por los rebeldes del 19 de Septiembre del año anterior y el que imputa, no precisamente al Tribunal que los juzgó, sino á Generales determinados en quienes personifica el poder de juzgarles, sólo tiende conocidamente á lamentar, bajo la influencia y apasionamiento de un ideal, el éxito de determinados sucesos y el fracaso de otros, lo que no constituye injuria para nadie ni hecho alguno punible con arreglo al Código, por lo que la Audiencia de Barcelona, al calificarlo y penarlo como delito, ha incurrido en el error de derecho alegado en el recurso, etc.» (Sentencia de 10 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 23 de Noviembre, pág. 339.)

**CUESTION IV.** En un suelto de periódico se dice: «No se desacata al funcionario del orden judicial señalándolo ante la sociedad que sufre y gime por su ineptitud atrevida. Los hechos de

(1) El delito que prevé y castiga el art. 269 del Código no es el de desacato, sino el de injurias á la Autoridad, pues aquí sólo puede cometerse á presencia de la Autoridad ó en escrito á ella dirigido.

*este funcionario por prevaricato se repiten, y pocas veces se habrá visto en los anales del foro escándalos de naturaleza análoga en unos autos que tienden á consumar la ruina y deshonra de dos familias. ¿Posee los conocimientos teóricos y prácticos de la jurisprudencia D. Pedro Agüero? ahora bien: siendo este Juez de uno de los distritos de la capital donde se publica el periódico, ¿cabe afirmar que no existe aquí el delito de injurias á la Autoridad porque no se determina y concreta la persona contra quien se dirige?—Así lo estimó la Audiencia de la Habana, la que absolvió al procesado fundándose en que los hechos no constituían el delito de injurias, porque en el suelto denunciado no se ofendía directa y singularmente á persona alguna determinada, pues aunque al final se nombraba á D. Pedro de Agüero, pudiendo presumirse que se designaba al Juez de primera instancia de este nombre, tal presunción no era suficiente para estimar que estuviese determinada la persona á que el suelto se refiere. Mas interpuesto contra dicha sentencia recurso de casación por el Ministerio fiscal, declaró el Tribunal Supremo haber lugar á él: «Considerando que la existencia de la injuria con relación á una persona determinada es una cuestión de calificación jurídica cuando para ello hay que apreciar el sentido y contexto del escrito ó impreso en que se contienen ó encierran ambos elementos, á saber, el de la frase y el del sujeto á quien se dirige, como acontece en el suelto que motivó la querrela criminal presentada por el Promotor fiscal del Juzgado de la Catedral; porque residiendo en este caso la totalidad del hecho en dicho escrito ó impreso, no se puede ni debe dividir su íntegra apreciación como cuestión de derecho: Considerando que en el suelto á que se refiere este recurso existe una evidente relación entre las imputaciones injuriosas que se hacen á un funcionario público del orden judicial y la pregunta con que termina, es á saber: ¿posee los conocimientos teóricos y prácticos de la jurisprudencia D. Pedro Agüero?, que obliga á reconocer que á este funcionario, Juez á la sazón del distrito de Jesús y María, se refiere el autor del suelto, por cuya razón no tiene fundamento ninguno la apreciación del Tribunal sentenciador, en cuanto estima para absolver al acusado que no aparece determinada la persona á quien se hacen las imputaciones ofensivas, en cuyo sentido ha incurrido en el error de derecho que señala el Ministerio fiscal, etc.» (Sentencia de 28 de Octubre de 1887, publicada en la Gaceta de 24 de Noviembre, página 358.)*

**CUESTION V.** *El periodista que tratando de la suspensión gubernativa de un Ayuntamiento dice en un suelto «calculamos desde luego que es una iniquidad del Sr. .... (el Gobernador) ó de sus inspiradores: en algo había de conocerse que las elecciones municipales se avicinan», será responsable del delito de injurias á la Autoridad, comprendido en el art. 269 del Código?—Así lo estimó la Audiencia de Cáceres, que condenó al autor del suelto á dos meses y un día de arresto mayor, accesorias y costas. Mas interpuesto contra dicha sentencia recurso de casación por infracción de ley, por la defensa del procesado, por indebida aplicación del*



referido artículo del Código, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar* al expresado recurso: «Considerando que el fundamento capital de este recurso consiste en negar el carácter de injuria que atribuye la sentencia reclamada á las frases contenidas en el resultando primero, estimadas por el Tribunal á *quo* con independencia de otros precedentes; Considerando que si bien el hecho de haber sido revocado por Autoridad superior el acuerdo criticado en dicho suelto, cual se afirma en uno de los considerandos, no privaría al procesal de carácter punible, si le tuviese, llana y naturalmente entendido el concepto y el usual significado de las palabras y de las frases con que dicho acuerdo se censura, aparecen equivalentes en este caso al de injusticia, cuya imputación sólo es criminosa cuando se dirige manifiestamente á la intención de su autor, porque entonces se atribuye á éste acción deshonrosa, pero no cuando recae la apreciación sobre el acto que, aun contra la voluntad del que lo ejecuta y sin menoscabo de su honor, puede resultar injusto y contrario á la equidad; Considerando, por lo tanto, que el hecho procesal no es constitutivo de injuria, por resultar realizado solamente en censura del acto gubernativo, y, por consiguiente, no existe el delito declarado por la Sala sentenciadora con infracción del art. 269 del Código penal, que ha dado lugar al error de derecho atribuido por el recurrente, etc.» (Sentencia de 16 de Noviembre de 1887, publicada en la Gaceta de 4 de Enero de 1888, pág. 12.)

**CUESTION VI.** *El que estampa en un suelto de periódico las frases siguientes: «Se ha de hacer una recluta forzosa entre los mozos de 1885 porque así lo ordena el Ministro de la Guerra, sin obligar antes á una Empresa ó embarcar 1.000 voluntarios que viene obligada á embarcar; pero ya se ve, esa Empresa habrá hecho callar al Ministro tapándole la boca con unos cuantos miles de...» ¿podrá eximirse de la pena señalada en el art. 269 al delito de injuria y calumnia á la Autoridad, aun cuando se alegue y justifique que no había habido ningún Ministro que hubiera mandado reclutar gente para Cuba, y por consiguiente, no pudo haber en el suelto denunciado materia de censura ni injuria á persona determinada?*

—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que se comete el delito definido en el art. 269 del Código penal cuando se injuria ó calumnia á un Ministro de la Corona ó una Autoridad en el ejercicio de sus funciones ó con ocasión de éstas, fuera de su presencia ó en escrito que no estuviere á ellas dirigido, cuyo delito aparece cometido en el suelto que ha motivado la condena del recurrente, porque partiendo su autor del hecho, *falso ó verdadero*, de haber dado el Ministro de la Guerra orden para la recluta forzosa entre los mozos del sorteo de 1885 de los que debieran ir á servir á Cuba, se injuria gravemente al Ministro, que lo era en la época del suelto, con la suposición de que pueda haber recibido algunos miles con objeto de favorecer los intereses de una Empresa determinada, suposición que implica la imputación manifiesta de una falta de moralidad afrentosa, constitutiva de delito, y que la Sala de lo criminal de la Audiencia de esta Corte no ha incurrido consiguientemente en ninguno de

los errores de derecho que por la representación de D. Luis Hernández se le atribuye, etc.» (Sentencia de 16 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 5 de Enero de 1888, pág. 14.)

**CUESTION VII.** *Al ocuparse del Gobernador general de Puerto Rico, dice un periódico de aquella isla: «que aunque al olmo es una estupidez pedirle peras, aquella Autoridad debió haber hecho sobreeser por delicadeza cierta causa para atenuar los errores que por falta de talento cometiera»;* ¿deberán estimarse estas frases y conceptos como constitutivos del delito de injurias a la Autoridad, previsto y penado en el art. 265 del Código de Cuba y Puerto Rico, 269 del de la Península?—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que el carácter ofensivo al Gobernador general de Puerto Rico que domina en la carta inserta en el periódico *El Criterio*, que se publica en Humacao, se completa con el párrafo en que expresa «que aunque al olmo es una estupidez pedirle peras, aquella Autoridad debería haber hecho sobreeser por delicadeza la causa que al autor de la carta se le seguía, para atenuar los errores que por falta de talento ha ido cometiendo,» pues ésa no es una crítica razonada de los actos de aquella Autoridad, á que todos tienen derecho, sino un medio de rebajarla y desprestigiarla á los ojos de sus subordinados, presentándola sin condiciones de mando y sin talento, con cuyos conceptos se tiende á modo claro al menosprecio de dicha Autoridad, á quien se presentó con carencia de toda clase de condiciones para el ejercicio de su alta dignidad en aquella apartada región, en que tan necesaria es la fuerza moral para hacerse obedecer y respetar, y por lo mismo, con esos conceptos se le ofende y se le injuria en escrito que no estaba á ella dirigido, cometiéndose el delito previsto en el art. 265 del Código penal en Cuba y Puerto Rico, que la Audiencia ha calificado y penado con acierto, sin incurrir en las infracciones y errores que sin razón le atribuye el recurrente, etc.» (Sentencia de 17 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 18 de Abril de 1888, páginas 119 y 120.)

**CUESTION VIII.** *El que al ocuparse en un artículo de periódico de dos Ministros de la Corona y al apreciar los actos propios de sus cargos los califica de «dos pobres hombres, dos Juan Lanas, que no hay más que pedir»;* ¿será responsable del delito de injurias a la Autoridad, comprendido en el art. 269 del Código?—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que las expresiones que contiene el artículo inserto por el recurrente en el periódico titulado *El Manifiesto*, que se publica en Cádiz, dirigidas al Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Gobernación, al apreciar actos propios de su cargo, calificándolos de ser «dos pobres hombres, dos Juan Lanas, que no hay más que pedir», en cuanto que estas frases significan apocamiento, facilidad en prestarse á hacer todo cuanto se quiera de ellos, son injurias por lo que tienen de despreciativas, tanto más cuanto mayor es el carácter de que se hallan revestidas las personas á quienes la imputación se dirige, y, por lo tanto, constituyen el delito que define y pena el citado art. 269 del Código, sin que haya con-  
siguientemente cometido error ninguno la Audiencia de Cádiz al



calificar así el hecho procesal, etc.» (Sentencia de 27 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 16 de Junio, pág. 232.)

**CUESTION IX.** *El autor de un artículo de periódico que ocupándose de los representantes de la Hacienda dice que «bien pudieran llamarse verdugos sin más ley que su capricho,» y que «no reparan en llevar á cabo todo género de arbitrariedades, atropellando á los contribuyentes,» y califica de ineficaz la apelación de tales resoluciones á la Delegación de Hacienda, porque «preside el mismo absurdo criterio en ambas dependencias, ligadas para los funestos fines que se proponen,» ¿podrá responsable por estas frases y conceptos del delito de injurias á la Autoridad del Delegado de Hacienda de la provincia?—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que los párrafos que se consignan en el primero de los resultandos de la sentencia reclamada del periódico *La Defensa*, que se publica en Badajoz, perjudican el prestigio y crédito del Delegado de Hacienda de aquella provincia, toda vez que después de decir el articulista que los representantes de la Hacienda «bien pudieran apellidarse verdugos sin más ley que su capricho» y que «no reparan en llevar á cabo todo género de arbitrariedades, atropellando una clase contribuyente,» se afirma que la apelación de tales resoluciones á la Delegación de Hacienda es ineficaz, porque «preside el mismo absurdo criterio en ambas dependencias, ligadas para los funestos fines que se proponen;» y al calificar el Tribunal sentenciador tales conceptos de injuriosos para la Autoridad del Delegado de Hacienda de aquella provincia, á quien van dirigidos, y aplicar el art. 269 del Código, no ha incurrido en error de derecho, como pretende el recurso, etc.» (Sentencia de 17 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 30 de Junio, pág. 313.)*

**CUESTION X.** *El que en escrito dirigido á un Juzgado municipal solicitando celebrar acto de conciliación con un Ministro de la Corona para que le pague una cantidad como indemnización de perjuicios que supone le ha irrogado al no colocarle en su carrera, expone que al preterirlo obró el expresado Ministro «con infracción manifiesta del derecho constituido y con evidente mala fe,» ¿podrá eximirse de la pena del delito de injurias á la Autoridad, prevista y penado en el art. 269 del Código, so pretexto de que las referidas frases responden á la necesidad de la defensa ejercida ante un Tribunal de justicia, y no constituyen por lo tanto injuria?—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que al achacarle el recurrente al Sr. Ministro de Gracia y Justicia que había obrado con infracción manifiesta del derecho constituido y con evidente mala fe al no colocarlo, como debía, en su carrera de Secretario de Instrucción ó de Tribunales de partido, causándole con ello 200.000 pesetas de perjuicio, para cuyo abono lo demandaba á juicio de conciliación ante el Juez municipal del distrito de Buenavista, en escrito que presentó al efecto; tales imputaciones, con las que se achaca á ese Ministro, con ocasión de sus funciones, una falta de moralidad que puede perjudicar considerablemente su fama, á modo cierto constituye una injuria que, inferida en escrito que no estaba á él dirigido,*

constituye un verdadero delito que prevé y castiga el artículo antes citado del Código penal: Considerando que la mala fe imputada de antemano al que no es litigante ni ha tomado aún parte en un litigio no tiene explicación aceptable, ni lo es en modo alguno que esa frase responda á la necesidad de legítima defensa y al propósito de reclamar la imposición de costas, pues no habiendo aún controversia ni juicio, en cuyo sostenimiento pudiera apreciarse la intención del demandado, sino pura y simplemente la preparación de un acto conciliatorio, cuyo único objeto es buscar una avenencia ó llenar un trámite legal para el que sólo debe presentarse las papeletas que han de servir para la citación en que se expresen las sencillas indicaciones que el art. 465 de la Ley de Enjuiciamiento civil prescribe y detalla, la reclamación de las costas de ese acto es de todo punto improcedente, pues aunque por tal pudieran entenderse los gastos, cual la Ley los llama, que en él se causen, estando determinado en el art. 475 de ese mismo cuerpo legal sean de cuenta del que los promueve, es de todo punto impertinente, como contraria á derecho, la reclamación de una cosa que no debe pedirse, porque no puede concederse, etc.» (Sentencia de 27 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 14 de Mayo, páginas 253 y 254.)

**CUESTION XI.** *Constitución el delito de injurias á la Autoridad las siguientes frases consignadas en un artículo de periódico: «La ineptitud de los Gobernadores generales, superada al último grado de los posibles por el Sr. General Dabán, ha entregado el país atado de pies y manos á un grupo de hombres dirigidos por el Sr. Uarri.»*—Así lo estimó la Sala de Justicia de la Audiencia de Puerto Rico, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por indebida aplicación en este caso de los artículos 265 y 475 del Código de Cuba y Puerto Rico (artículos 269 y 471 del Código de la Península): «Considerando que el artículo reproducido de *El Resumen* en el núm. 644 del periódico *El Pueblo*, que se publica en Ponce (Puerto Rico), correspondiente al 2 de Febrero de 1886, que contiene entre otras las siguientes frases: «La ineptitud de los Gobernadores generales, superada al último grado de los posibles por el Sr. General Dabán, ha entregado el país atado de pies y manos á un grupo de hombres dirigidos por el Sr. Uarri.» no constituyen el delito de injurias, por no afectar á la honra ni al crédito y prestigio moral de la Autoridad á que dichos conceptos se dirigen, aunque revistieran el carácter de una crítica poco prudente y apasionada, á que son ocasionadas alguna vez las contiendas periódicas: Considerando que al no haberlo estimado así la Sala sentenciadora ha incurrido en el error de derecho que se le atribuye ó infringido los artículos del Código penal á que el recurso se refiere, etc.» (Sentencia de 24 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 30 de Agosto, pág. 113.)

**CUESTION XII.** *El sueldo de un periódico en que se dice literalmente: «Está señalada para estas días una causa por delitos de simulación de contratos y falsificación; pero Alonso Martínez es hombre que no se duerme en las pajas; por el hay condena está ya redactando los decretos de indulto», será constitutivo del delito de*



**injurias á la Autoridad del Ministro de Gracia y Justicia?**—Así lo estimó la Audiencia de Madrid, cuya sentencia *casó* el Tribunal Supremo, en contra de la opinión fiscal, por indebida apreciación del expresado delito: «Considerando que ni por las palabras ni por los conceptos que contiene el suelto denunciado se deduce la imputación al Ministro de Gracia y Justicia de ningún proyecto preconcebido de indultar en determinada causa, sino que el sentido recto y natural del suelto no es otro que el de, con el pretexto de anunciar la vista de una causa indeterminada, censurar la concesión de indultos, que el articulista estima excesivos, lo cual no envuelve ataque ninguno á la honra, crédito y dignidad del Ministro aludido, y por lo tanto no hay imputación injuriosa, como con error supone el Tribunal sentenciador, etc.» (Sentencia de 14 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 26 de Septiembre, pág. 182.)

**CUESTION XIII.** *Las frases consignadas en un periódico y dirigidas á un Gobernador civil «de que no sirve para el caso y si para pasar todo el santo día de Dios metido en la Escuela de Veterinaria, como si necesitara de los servicios de los Profesores de aquel centro, y para hacer otras cosas que todo el mundo sabe y no son para dichas en letras de molde», deberán ser consideradas como injuriosas y constitutivas, por ende, del delito comprendido en el artículo 269 del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que es injuria, al tenor de lo dispuesto en el art. 471 de dicho Código, toda expresión proferida ó acción ejecutada en deshonra, descrédito ó menosprecio de alguno, y que las frases consignadas en el periódico *El Cabecilla*, dirigidas al Gobernador de Madrid, Sr. Duque de Frias, de que no servía para el caso, y si para pasar todo el santo día de Dios metido en la Escuela de Veterinaria, como si necesitara de los servicios de los Profesores de aquel Centro, y para hacer otras cosas que todo el mundo sabe y no son para dichas en letras de molde, atribuyen á dicha Autoridad conceptos que redundan en su menosprecio fuera de su presencia y en escrito no dirigido á él, que constituyen el expresado delito de desacato: Considerando que tratándose de injurias inferidas á la Autoridad en el ejercicio de sus funciones constituyen, sean ó no encubiertas, el delito de desacato, sin que sean bastantes las explicaciones que suponen dadas para desvirtuar la responsabilidad criminal en que el recurrente ha incurrido, sin que por otra parte se haya justificado la verdad de los conceptos injuriosos imputados, etc.» (Sentencia de 13 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 4 de Marzo de 1889, página 34.)

**CUESTION XV.** *El decir en un artículo de periódico que el Capitán general de Cuba es íntimo amigo de un sujeto desacreditado, al que se califica con los epítetos más denigrantes y de quien se dice que se vale dicha Autoridad para defender sus actos, y que de los fondos secretos del Tesoro de la Isla ha salido una cantidad determinada de dinero para subvencionar periódicos enemigos de la Patria, será constitutivo del delito de injuria y calumnia á la Autoridad, preciso y penado en el art. 265 del Código penal de*

*Cuba y Puerto Rico, concordante con el 269 del de la Península?*  
 —No lo estimó así la Sala de lo criminal de la Audiencia de la Habana, la que absolvió libremente al autor del artículo, fundada en que en éste no se revelaba el propósito ni la intención de deshonrar, desacreditar ni menospreciar á la Autoridad del Gobernador general de aquella isla. Mas interpuesto contra dicha sentencia recurso de casación por el Ministerio fiscal, que sostuvo que dicho artículo era verdaderamente injurioso y calumnioso para la expresada Autoridad, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar á él*: «Considerando que cometen el delito de desacato, conforme á lo prescrito en el art. 265 del Código penal de Cuba y Puerto Rico, los que injurian, calumnian ó insultan á una Autoridad en el ejercicio de sus funciones ó con ocasión de ellas, fuera de su presencia ó en escrito que no fuese á la misma dirigido, y se entiende por injuria, según se define en el 475, toda expresión proferida ó acción ejecutada en deshonra, descrédito ó menosprecio de otra persona; Considerando que el afirmarse en los dos artículos insertos en el periódico de la Habana *El Intransigente*, con los epígrafes, el primero de «Una visita misteriosa,» y el segundo, «Ciento ochenta onzas,» que el Capitán general de Cuba don Sabas Marin se halla en amistad íntima con un hombre desacreditado, al que se califica por el articulista con los epítetos más denigrantes, para aseverar después en tono de admiración que de esa persona se vale la primera Autoridad de la Isla para que defienda sus actos, suponiendo en el segundo artículo que de los fondos secretos han salido 180 onzas de oro para subvencionar periódicos enemigos de la Patria, son imputaciones que redundan en desprestigio y se dirigen á desacreditar y menospreciar en el concepto público al Capitán general de la Isla de Cuba, constituyendo por este motivo el delito que define el citado art. 265, atendido el carácter de que se halla revestida la persona á quien la imputación se refiere, y al no apreciarlo así la Audiencia sentenciadora ha infringido el art. 265, en relación con el 475 del Código penal de Cuba y Puerto Rico, é incurrido en el error de derecho que señala el número 2.º de la regla 56 de la ley Provisional para la aplicación de dicho Código; Fallamos que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el Ministerio fiscal, etc.» (Sentencia de 14 de Diciembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 22 de Abril de 1889, páginas 113 y 114.)

### Art. 270.

INJURIAS, INSULTOS Ó AMENAZAS DE HECHO Ó DE PALABRA Á LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Ó Á LOS AGENTES DE LA AUTORIDAD EN SU PRESENCIA Ó EN ESCRITO QUE SE LES DIRIGIERE.

**CUESTION 1.** *El hecho de pasar un sujeto por delante de un Fiel de consumos y sin mediar palabra alguna arrancarle la chapa que ostenta en el sombrero como distintivo del cargo, ¿constituirá*



*el delito de insulto á un agente de la Autoridad, previsto y penado en el art. 270 del Código, ó la falta de ofensa leve al mismo, comprendida en el núm. 6.º del 589.*—La Audiencia de lo criminal de Mondoñedo estimó lo primero. Mas el Tribunal Supremo, al casar dicha sentencia, declaró lo segundo: «Considerando que el hecho de haber arrancado el recurrente José Rey, que usa los apellidos de Incógnito y Ruiz, la chapa de metal que como distintivo del cargo de Fiel de consumos llevaba en el sombrero Andrés Tejedor, sin que precedieran contestaciones entre ambos, ni tuvieran anteriores motivos de resentimiento, ni aquella acción fuera acompañada de ninguna palabra injuriosa, reviste tales caracteres de simplicidad y escasa malicia que no cabe dentro del artículo 270 del Código penal que aplica la Audiencia de Mondoñedo, siendo sólo una ofensa leve, que está comprendida en el núm. 6.º del art. 589; y, por tanto, el Tribunal sentenciador ha incurrido en las infracciones legales que cita el recurso, aplicando indebidamente el art. 270, y dejando de aplicar el 589 en su núm. 6.º etc.» (Sentencia de 22 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 12 de Mayo, pág. 235.)

**CUESTION II.** *El decir á un agente de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones que salga á la calle «para romperle el alma,» ¿constituirá una verdadera amenaza, ó los efectos del artículo 270 del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que las expresiones dirigidas por el Manuel Sánchez á agentes de la Autoridad, al excitarlos á que salieran á la calle para romperles el alma, son constitutivas de verdaderas amenazas, porque implican el amago de un mal, siquiera sea indeterminado, y han sido bien calificadas por la Sala sentenciadora, etc.» (Sentencia de 12 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 15 de Mayo, pág. 260.)

**CUESTION III.** *Al ser requerido un sujeto que iba dando voces por las calles por los agentes de la Autoridad para que se calle, contesta que no se calla por ningún guardia; y dirigiéndose á éstos, los apostrofa con las frases de «Valientes plantones; si creerdn que les voy á obedecer; mañana hablaré yo con el Alcalde y quedarán ustedes cesantes,» ¿constituirán estos hechos el delito de injurias ó amenazas á los agentes de la Autoridad, previsto y penado en el art. 270 del Código, ó simplemente la falta de ofensa y desobediencia leve, comprendida en el núm. 6.º del 589?*—La Audiencia de Santander estimó lo primero; mas el Tribunal Supremo, llamado á resolver el recurso interpuesto por la defensa del procesado, declaró lo segundo: «Considerando que las expresiones dirigidas por Gumeriando Ulpiano Córdoba á los guardias municipales Francisco Muñiz y Santos Alvarez, y los actos por aquél ejecutados, constituyen una ofensa y una desobediencia leves, sin que revistan el carácter jurídico de injurias ó de amenazas constitutivas de delito: Considerando, por consiguiente, que los hechos procesales deben ser calificadas de falta, con arreglo al núm. 6.º del art. 589 del Código penal, y no de delito, según el art. 270 del mismo Código, y que el Tribunal á que ha incurrido en error de derecho ó infringido ambas disposiciones

legales por indebida omisión de la primera y equivocada aplicación en la segunda, etc.» (Sentencia de 23 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 9 de Enero de 1889, pág. 10.)

## CAPÍTULO VI

## Desórdenes públicos.

## Art. 271.

TUMULTO Ó GRAVE TURBACIÓN DEL ORDEN EN LA AUDIENCIA DE UN TRIBUNAL Ó JUZGADO, EN LOS ACTOS PÚBLICOS PROPIOS DE CUALQUIERA AUTORIDAD Ó CORPORACIÓN, EN ALGÚN COLEGIO ELECTORAL, OFICINA Ó ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, EN ESPECTÁCULOS Ó SOLEMNIDAD Ó REUNIÓN NUMEROSA.

**QUESTION.** *Celebrándose una romería en el campo, promuévese un tumulto por varios de los concurrentes, haciéndose al aire un disparo de arma de fuego y empujando algunos armas blancas, por lo que se ocasiona tan grave alarma, que la gente se dispersa, siquiera transcurrido algún tiempo vuelva á reunirse: ¿deberá calificarse á los autores del hecho como responsables del delito de desorden público, previsto y penado en el art. 271 del Código, ó simplemente de la falta comprendida en el núm. 1.º del 588?*—La Audiencia de lo criminal de Orense estimó lo primero y condenó á los procesados á la pena de cuatro meses de arresto mayor, multa de 150 pesetas, accesorias y costas. Mas interpuesto por infracción del art. 588, núm. 1.º del Código, recurso de casación por la defensa de los procesados, que coadyuvó el Fiscal en el acto de la vista, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar* á él: «Considerando que la gravedad del desorden público que pena el art. 271 del Código se ha de apreciar por el sitio, ocasión y circunstancias en que tuvo lugar, y apareciendo de los hechos declarados probados en la sentencia que el recurrente, si bien disparó al aire un arma de fuego y sacó otras blancas en la romería que se celebraba en el campo, no produjo ni era fácil que produjese, atendido el sitio y circunstancias en que lo verificó, otro resultado que la momentánea dispersión de los concurrentes, es cierto que con ello no turbó gravemente el orden, y lo confirma el hecho, también probado, de continuar después la romería sin accidente alguno: Considerando que no habiéndose turbado gravemente el orden por el recurrente, el hecho no reviste los caracteres del delito que pena el citado art. 271, y está comprendido en la sanción del 588, párrafo primero, que pena como falta el hecho de turbar levemente el orden en reuniones numerosas, y, por lo tanto, al calificarlo y penarlo como delito la Sala sentenciadora ha incurrido en error de derecho é infringido las disposiciones legales que se citan como fundamentos del recurso, etc.» (Sentencia de 24 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 30 de Abril de 1888, páginas 129 y 130.)

Véase además la *Cuestión* única del art. 258.



## TÍTULO IV

## DE LAS FALSEDADES

## CAPÍTULO II

## De la falsificación de moneda.

## Art. 297.

FABRICACIÓN DE MONEDA FALSA, IMITANDO MONEDA QUE NO TENGA CURSO LEGAL EN EL REINO.

**CUESTION.** *Aun cuando en Cuba y Puerto Rico se ha admitido generalmente la moneda mejicana y peruana, y que por un Decreto del Gobernador general se acordara que la moneda de plata mejicana circulante en la Isla se tomase á razón de 90 centavos por peso, la fabricación de esta moneda falsa hecha con anterioridad á la publicación de aquel Decreto, ¿podrá comprenderse en el artículo 290 del Código de Cuba y Puerto Rico, concordante con el 294 de la Península, ó sea como fabricación de moneda que tiene curso legal?—Así lo estimó la Audiencia de Puerto Príncipe, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por haberse comprendido el delito en la sanción de dicho artículo, en vez de la del 293, concordante con el 297 de la Península: «Considerando que el presente recurso se funda en haberse cometido error de derecho en la calificación de los hechos declarados probados por el Tribunal á quo en la sentencia recurrida, castigando como delito cometido el de la fabricación de moneda de valor inferior á la legítima y de curso legal en el Reino, siendo así que dicha moneda peruana y mejicana, de que aquí se trata, no tenía curso legal en España ni en las islas de Cuba y Puerto Rico cuando el delito se perpetró: Considerando que aunque en las expresadas islas se admitiera más ó menos generalmente en cambios y transacciones la mencionada moneda peruana ó mejicana cuando el delito tuvo lugar, y á pesar de que con fecha 13 de Mayo de 1886 se expidiese un Decreto por el Gobernador general de Cuba, por el que acordó que la moneda de plata mejicana que circulaba en la Isla se tomase á razón de 90 centavos por peso, ó sea con un descuento de 10 por 100, es lo cierto que la época en que se cometió y persiguió el delito era anterior á su publicación, y que, por consiguiente, la Sala sentenciadora ha cometido el error de derecho y las infracciones de ley alegadas en el recurso etc.» (Sentencia de 14 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 26 de Septiembre, pág. 181.)*

## Art. 300.

EXPENDICIÓN, SIN CONNIVENCIA CON LOS FALSIFICADORES Ó INTRODUCIDORES, DE MONEDAS FALSAS Ó CERCENADAS, ADQUIRIDAS SABIENDO QUE ERAN FALSAS, PARA PONERLAS EN CIRCULACIÓN.

**CUESTION.** *Aun cuando no en los resultandos de una sentencia, pero sí en un considerando de la misma, se consigna que las circunstancias todas que precedieron y acompañaron á la comisión del delito evidencian que los procesados adquirieron las monedas falsas expendidas con perfecto conocimiento de su falsedad y con el propósito de ponerlas en circulación, ¿podrá prosperar el recurso de casación que se intenta para recabar que el hecho se comprenda en la sanción más benigna del art. 301 del Código, establecida para el que habiendo recibido de buena fe moneda falsa la expende después de constarle su falsedad?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que en los recursos interpuestos por los procesados, el primer motivo en que lo fundan es que en el fallo recurrido no se ha declarado probado que las monedas que expendieron las adquirieran sabiendo que eran falsas para ponerlas en circulación; mas aunque sea cierto que esa declaración no se haya hecho en los resultandos, habiendo el Tribunal sentenciador apreciado en el primer considerando, como punto de hecho de su exclusiva competencia, reconocida por esta Sala en diferentes decisiones, que las circunstancias todas que precedieron y acompañaron á la comisión del delito evidencian que las monedas falsas las adquirieron con perfecto conocimiento de su falsedad y el deliberado propósito de expenderlas y someterlas á la libre circulación, no es dable, después de esta explícita y terminante declaración, discutir ni poner en duda la necesaria é imprescindible aplicación que al hecho tiene el mencionado artículo 300 del Código penal, que por lo mismo no ha sido infringido por la Sala sentenciadora al ajustar la penalidad impuesta á sus prescripciones, ni tampoco el 301 al no aplicarlo, por no ser congruente con el caso, etc.» (Sentencia de 26 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 5 de Enero de 1888, páginas 23 y 24.)

## CAPÍTULO III

De la falsificación de billetes de Banco, documentos de crédito, papel sellado, sellos de telégrafos y correos y demás efectos timbrados, cuya expendición esté reservada al Estado.

## Art. 304.

ADQUISICIÓN, SIN CONNIVENCIA CON LOS FALSIFICADORES Ó INTRODUCIDORES, DE BILLETES DE BANCO Ó OTROS TÍTULOS AL PORTADOR Ó SUS CUPONES, PARA PONERLOS EN CIRCULACIÓN, SABIENDO QUE SON FALSOS.

**CUESTION.** *La venta hecha á un tercero de billetes de Banco*



*falsos, aun sin ocultarle esta circunstancia de su falsedad, ¿será constitutiva del delito consumado de expendición de dichos billetes, que prevé y castiga el art. 304 del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando, respecto á los recurrentes Salvador y Juan Bautista Pérez Villaplana, que el delito penado en el art. 304 del Código se caracteriza por el hecho de adquirir para poner en circulación billetes del Banco falsos, constando su falsedad, y declarándose probado en la sentencia reclamada que los recurrentes, dedicados á este tráfico, con conocimiento de su falsedad enajenaron á un tercero varios billetes, es visto que han incurrido en la sanción del citado art. 304, sin que se oponga á esta declaración la circunstancia de no haber ocultado al comprador la cualidad de falsos que los billetes tenían, porque lo que la Ley pena es la adquisición para ponerlos en circulación, ocultan ó no al adquirente la falsedad, y es indudable que con la venta que de ellos hicieron consiguieron ponerlos en circulación, que era el objeto que se habían propuesto al adquirirlos, concurriendo, por lo tanto, todos los requisitos necesarios para que el hecho sea punible, como justamente ha apreciado el Tribunal á quo, etc.» (Sentencia de 22 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 29 de Septiembre, páginas 203 y 204.)

### Art. 306.

EXPENDICIÓN DE BILLETES DE BANCO FALSOS Ó OTROS TÍTULOS AL PORTADOR Ó SUS CUPONES, ADQUIRIDOS DE BUENA FE, PERO EXPENDIDOS SABIENDO SU FALSEDAD.

**CUESTION.** *La expendición de un solo billete de Banco, mas que sea de 50 pesetas, hecha con conocimiento de su falsedad, y aun cuando se haya adquirido aquél de buena fe, ¿constituirá el delito comprendido en el art. 306 del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que la expendición de billetes de Banco falsos, cuando al expendedor le consta su falsedad, constituye el delito definido en el art. 306 del Código, cualquiera que sea el valor representado por el billete, porque al legislador no le pareció oportuno distinguir como distingue cuando se refiere á la expendición de moneda, teniendo acaso en cuenta el especial daño que el crédito del establecimiento encargado de la emisión puede recibir con estos hechos de falsificación, por cuya razón la Audiencia de esta Corte no ha incurrido en error de derecho al calificar y penar así el acto punible realizado por Laura Sarro Remis, etc.» (Sentencia de 14 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 9 de Enero de 1888, páginas 53 y 54.)

## CAPÍTULO IV

## De la falsificación de documentos.

## SECCIÓN PRIMERA

DE LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, OFICIALES Y DE COMERCIO,  
Y DE LOS DESPACHOS TELEGRÁFICOS

## Art. 314.

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO, COMETIDA POR FUNCIONA-  
RIO PÚBLICO, CON ABUSO DE SU OFICIO

**CUESTION I.** *La inscripción hecha por un Registrador de la Propiedad en los libros del Registro, de unas fincas en nombre de los herederos de una persona, sin que se presentara por éstos la partida de defunción de la misma, pero sí por su viuda un poder para testar que otorgara su difunto marido y además las escrituras acreditativas de la propiedad de los inmuebles inscritos; la anotación por el propio Registrador de un embargo, sin el mandamiento judicial, pero practicado por el Juez municipal en virtud de exhorto del de primera instancia, en los expresados bienes; la nota consignada por el mismo Registrador en un mandamiento librado por otro Juez de primera instancia para la toma de razón de un embargo practicado en parte de dichos inmuebles, de que los mismos estaban afectos á un gravamen por mandamiento del primer Juez de primera instancia antes mencionado; y finalmente, la intercalación en una certificación literal expedida por el expresado Registrador de las palabras «un mandamiento despachado,» que no constan en el asiento del libro diario, constituirán el delito de falsedad en documentos públicos, cometido por funcionario público con abuso de su oficio, que define y castiga el caso 4.º del artículo 310 del Código penal de Cuba y Puerto Rico, concordante con igual número del 314 del de la Península.—La Sala de Justicia de la Audiencia de Puerto Principe declaró que los hechos expuestos constituían cuatro delitos de falsedad antes dicha y condenó al Registrador á cuarenta años de cadena como máximo imposible. Mas el Tribunal Supremo, llamado á resolver el recurso de casación interpuesto por aquél contra dicha sentencia, declaró que los tres primeros hechos no constituían delito alguno, y el cuarto tan sólo una imprudencia temeraria: «Considerando que ni el hecho de haber tomado razón el Registrador de Holguín del embargo, sin el mandamiento judicial, ni el de haber inscrito en los libros del Registro á nombre de la sucesión de D. José María Marquina las casas que éste dejó por su muerte, sin que se presentara para archivarla la partida de defunción del mismo, constituyen, como ha estimado con error la Audiencia de Puerto Principe, los delitos de falsificación, siendo sólo faltas en el cumpli-*



miento de la ley Hipotecaria y Reglamento para su aplicación, que no caen dentro de los límites del Código, porque el embargo de que tomó razón el recurrente existía, y bien ó mal practicado había tenido lugar en virtud de orden ó mandato de Autoridad competente; y que la inscripción que en los libros del Registro hizo D. José Beaumud, á nombre de la sucesión de Marquina, de las casas que éste dejó por su fallecimiento, fué en virtud del poder para testar que de su difunto marido presentó la viuda doña Carmen Rodríguez y de las escrituras que acreditaban la propiedad de los inmuebles que se inscribieron. Considerando que tampoco constituye el delito de falsificación que estima el Tribunal sentenciador el hecho de haber consignado el Registrador Beaumud á continuación del mandato librado por el Juez de Holguín, en los autos ejecutivos á nombre de D. José Angel Santiesteban para la toma de razón de cuatro casas de D. José María Marquina, que las fincas que pertenecieron á éste estaban afectas á un gravamen por virtud de un exhorto y mandamiento del Juzgado del Pilar de la Habana, procedente del juicio ejecutivo que contra la viuda D.<sup>a</sup> Carmen Rodríguez seguía D. Daniel Droops; porque en realidad, y aunque con todas las informalidades de que se deja hecho mérito, la anotación que hizo el Registrador en la ejecución de Droops derivaba de un exhorto del Juzgado del Pilar de la Habana. Considerando, en orden á la falsedad que califica y pena la sentencia por la diferencia que se advierte entre el asiento núm. 997 del libro diario y la certificación literal que del mismo dió el Registrador de Holguín, que si bien en ésta se han intercalado las palabras *un mandamiento despachado* que no se leen en el asiento, en lo cual faltó á la verdad el Registrador, por todos los hechos que la sentencia consigna, porque esa alteración no cambia ni modifica esencialmente la diligencia á que se refiere, se demuestra que no hubo en su autor la dañada intención ó malicia que en otro caso constituiría el delito grave de falsedad que estima la sentencia, aunque sí existe el de imprudencia temeraria, que castiga el art. 592 del Código penal de Cuba y Puerto Rico, en cuyo sentido ha cometido error la Audiencia de Puerto Príncipe, etc.» (Sentencia de 12 de Julio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 26 de Octubre, páginas 247 y 248.)

**CUESTION II.** *¿Deberá ser considerado como documento oficial la certificación expedida por el Facultativo de cabecera acerca del fallecimiento de una persona que exige la Ley para autorizar el sepelio del cadáver?—Siendo falsa la certificación en su contenido, ¿deberá calificarse la falsedad como cometida por funcionario público?—*El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa sobre ambos puntos: «Considerando, en cuanto al recurso interpuesto por D. Santiago de la Torre Beades, que el hecho por éste realizado de haber librado la certificación de defunción de doña Josefa Rodríguez Bruzón, que tenía que servir de fundamento al Juzgado municipal respectivo para autorizar el sepelio del cadáver, consignando á sabiendas y falsamente en ella que la expresada señora había fallecido á las cinco de la tarde del día 17

de Junio de 1885, siendo así que el fallecimiento no ocurrió hasta la una de la mañana del siguiente día, constituye un delito de falsedad cometido en *documento oficial*, que es el carácter que tiene dicha certificación, atendida la transcendencia y efectos que la Ley atribuye á esta clase de certificaciones, y por *funcionario público*, cuyo carácter revisten todos cuantos por disposición inmediata de la Ley participan del ejercicio de funciones públicas, cuales son las que los Facultativos autorizados al efecto desempeñan al extender para los efectos indicados y demás del Registro civil certificaciones de esta clase, etc.» (Sentencia de 7 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 8 de Mayo, página 206.)

Véase además el art. 349.

**CUESTION III.** *No obstante de que por el art. 330 del Código se establece que cuando sea estimable el lucro que hubieren reportado ó se hubiesen propuesto los reos de falsificación se les impondrá una multa del tanto al triplo del lucro, si una falsedad en documento público ó oficial se ha cometido, perjudicando y defraudando á un tercero, á la vez que el expresado delito de falsedad, gleberá apreciarse el de estafa, y penarse el más grave en el grado máximo, con arreglo al art. 90 del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que declarado probado por el Tribunal sentenciador que Antero Ibáñez, escribiente temporero del Ayuntamiento de Haro, alteró los guarismos de un libramiento expedido oficialmente para pago de bagajes, convirtiendo en 7 un 3 para que resultasen 70 pesetas en vez de 30, á fin de apropiarse indebidamente las 40 que resultaban de más, no cabe poner en duda que al defraudar al Ayuntamiento en esa cantidad cometió una estafa, prevista en el núm. 1.º del art. 547 del Código penal, por medio de la falsedad de un documento oficial, comprendida en el art. 315 del mismo; porque no apareciendo en la sentencia que tuviera á su cargo el Negociado de bagajes, ni los libros que le son propios, el hecho que ejecutó no fué con abuso de su oficio, circunstancia esencial para que pudiera tener aplicación al caso el art. 314 de dicho cuerpo legal, por más que al realizarlo se prevalliera de su carácter de escribiente del Ayuntamiento, porque esto sólo puede considerarse como una circunstancia agravante comprendida expresamente en el núm. 11 del art. 10 del Código penal; Considerando que, habiendo sido la falsedad medio necesario de cometer la estafa, el art. 90 del Código es de rigurosa aplicación al caso para imponer, con estricta sujeción al mismo, la pena del delito más grave en su grado máximo, que, con arreglo al 97, hay que distribuir en tres partes iguales para poder apreciar la circunstancia agravante antedicha, *sín que el artículo 330 tenga influencia en la calificación, por referirse á la cuantía de la multa en relación con el lucro reportado con la falsificación de documento oficial ó público en el caso que aquél exista, etc.*» (Sentencia de 14 de Diciembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 22 de Abril de 1889, pág. 112.)



## Art. 315.

FALSIEDAD COMETIDA POR EL PARTICULAR EN DOCUMENTO PÚBLICO Ó OFICIAL, Ó EN LETRAS DE CAMBIO Ó OTRA CLASE DE DOCUMENTOS MERCANTILES.

**CUESTION I.** *El detentador de una letra de cambio, que fingiéndose legítimo tenedor de la misma, la endosa y firma con el nombre y apellido de aquel á cuya orden está librado, y la presenta al cobro, que no hizo efectivo por haberse descubierto la trama, aun cuando no haya fingido ni contrahecho la letra y firma de la persona cuyo nombre tomó, será responsable tan sólo de un delito de estafa frustrada, ó del de falsedad en letra de cambio.*—La Audiencia de Albacete estimó lo primero y condenó al procesado á la pena correspondiente al delito de estafa. Y aun cuando el Tribunal Supremo sólo declaró que en el presente caso debía penarse la falsedad en letra de cambio, porque en este solo sentido interpuso el recurso el Ministerio fiscal, claramente dió á entender que había que penar algo más en este hecho procesal, ó sea el doble delito de estafa frustrada y de falsedad en letra de cambio, ejecutado éste como medio de perpetrar el primero, y con imposición de la pena del más grave en el grado máximo, pues que el perjuicio ó defraudación, que es elemento inherente del delito de falsedad en documento privado (art. 318), no lo es en el de falsedad en documento público (art. 314) ni en documento mercantil ó letra de cambio (art. 315), debiendo apreciarse, por lo tanto, en estos dos últimos casos, cuando concurren, los dos delitos de estafa y falsedad, con la consiguiente aplicación del art. 90 del Código. Véanse ahora los fundamentos de dicha Sentencia: «Considerando que el detentador de una letra de cambio que la endosa, fingiéndose legítimo tenedor de la misma y firmando el endoso con el nombre y apellido de aquel á cuya orden está librada, comete el delito de falsificación, penado en el art. 315 del Código, en relación con los números 2.º y 4.º del 314, aunque no haya fingido la letra, firma y rúbrica de aquel cuyo nombre tomó; porque en este caso la falsificación está comprendida en los números 2.º y 4.º del citado art. 314, que oportunamente cita el Ministerio fiscal; Considerando que dentro de los términos del recurso no es posible resolver otra cuestión que la propuesta en el mismo; y como el Ministerio fiscal no ha alegado otra que la de que se declare y pene el de falsificación, esto es lo único que la Sala tiene que resolver: Considerando que al calificar y penar la Sala de lo criminal de la Audiencia de Albacete los hechos que declara probados en la sentencia recurrida como dos delitos frustrados de estafa, ha cometido el error de derecho ó infracciones legales que invoca el Ministerio fiscal, etc.» (Sentencia de 22 de Diciembre de 1887, publicada en la Gaceta de 20 de Abril de 1888, página 128.)

**CUESTION II.** *La falsedad cometida en las matrices y talones de un libro talonario destinado para la recaudación de un im-*

*puesto municipal, deberá considerarse como cometida en documento privado ó en documento oficial?—Si los autores de la falsedad, aunque Administrador ó Interventor respectivamente del expresado arbitrio ó impuesto, no tenían á su cuidado y custodia el libro talonario en que aquella se cometió, deberá estimarse el delito como de falsedad realizada por funcionario público con abuso de su oficio, comprendida en el art. 314 del Código, ó de falsedad cometida por un particular, aunque con la circunstancia agravante de haberse prevalido de su carácter público para realizar el hecho?—La Sala de lo criminal de la Audiencia de Zaragoza lo calificó como constitutivo de delito de falsedad, pero no en documento público ni oficial, comprendido en el art. 318 del Código. El Ministerio fiscal recurrió contra dicha sentencia, pretendiendo que la falsedad se cometió en documento oficial y por funcionario público con abuso de su oficio. Y el Tribunal Supremo declaró que efectivamente el documento falsificado era oficial, como alegaba el Ministerio público, pero que la falsedad en este caso fué cometida por meros particulares, aunque con la circunstancia agravante antedicha: «Considerando que por su naturaleza, objeto y fin revisten carácter de documentos oficiales el libro talonario, sus matrices y talones que el Municipio de Zaragoza destinó para la recaudación del impuesto que como arbitrio tiene establecido sobre las uvas, cuyo libro se confía al Fiel pesador para la práctica de las operaciones necesarias á dicho servicio: Considerando que, si bien los procesados Enrique Arnau y Modesto Reviejo desempeñaban respectivamente los cargos de Administrador é Interventor del expresado arbitrio al tener lugar el suceso de autos, y que por razón de sus funciones se servían de los talones para la comprobación del peso de la uva, es lo cierto que el libro estaba al cuidado y custodia del Fiel pesador, sin ninguna intervención en él de parte de aquéllos, según lo justifica el hecho de que para hacer las enmiendas les fué preciso apoderarse del indicado libro, y, por tanto, deben ser considerados como meros particulares con relación al acto que ejecutaron, por más que se prevallieran del carácter público que tenían de Administrador é Interventor para realizar sus propósitos: Considerando, en su virtud, que los procesados han cometido la falsedad definida y castigada en el art. 315, en relación con el 314, núm. 6.º, del Código penal, mediante la circunstancia 11.ª del 10, y consiguientemente el Tribunal sentenciador, al no apreciarlo así, ha incurrido en error de derecho, é infringido las disposiciones legales citadas que subsidiariamente se invocan en el recurso, etc.» (Sentencia de 30 de Mayo de 1888, publicada en la Gaceta de 6 de Septiembre, páginas 122 y 123.)*

**CUESTION III.** *El que al otorgar un poder para pleitos, de que hizo uso su Procurador presentando la correspondiente demanda contra un tercero, supone en él tener la edad de veinticinco años cumplidos, no teniéndolos, prevaleciéndose para ello de un borrón que tenía su cédula personal, que impidió al Notario cerciorarse de la verdad de su aserto, será responsable del delito de falsedad en documento público, comprendido en el art. 315 del C6.*



*digo?*—No lo estimó así la Audiencia de lo criminal de Bilbao, que absolvió al procesado, fundándose en que la inexacta afirmación de éste no afectaba al fondo del documento. Mas interpuesto contra dicha sentencia recurso de casación por el querellante particular, por infracción, entre otros, del art. 315 del Código, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar* á él: «Considerando que al no requerir el art. 315 del Código penal para que exista el delito de falsedad en documento público el elemento del lucro ni el ánimo de causar perjuicio á tercero, demuestra que lo que principalmente castiga en estos hechos justiciables es la violación de la fe pública y de la verdad solemnemente consignada, y, por lo tanto, si la mutación ó ocultación de ésta afecta de algún modo á la integridad del documento y á los efectos que debe producir, existe el delito que castiga el citado art. 315; Considerando que la edad del otorgante de un documento público, cuando determina su capacidad legal, es esencial para la validez del documento, porque sin ella no se podría otorgar, y, por lo tanto, su ocultación maliciosa con este propósito afecta de un modo tan importante, que hace producir efectos á un documento que legalmente no podía existir; Considerando que el hecho probado de haber supuesto Herminio Gana Remontería al otorgar un poder, que surtió sus efectos legales, tener la edad de veinticinco años cumplidos, cuando en realidad le faltaban ciento treinta días, prevaleciéndose para ello de un borrón que tenía su cédula personal, que impidió al Notario cerciorarse de la verdad de su aserto, constituye el delito de falsedad en documento público, que castiga el art. 315 del Código, porque con su falsa aseveración se revistió de una aptitud de que carecía para el acto que celebraba, dando así vida á un documento que no podía otorgar sin la intervención de su representante legal, dada su menor edad; Considerando que al estimar la Sala sentenciadora no constitutivos de dicho delito los hechos objeto del procedimiento, ha incurrido en el error de derecho que determina el caso 2.º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, é infringido los arts. 1.º y 315, en relación con el núm. 4.º del 314 del Código penal, etc.» (Sentencia de 13 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 26 de Septiembre, páginas 179 y 180.)

**QUESTION IV.** *Después de la publicación del nuevo Código de Comercio, deberá reputarse como falsedad en documento mercantil la que se cometa en los cheques ó talones que se suponen expedidos contra un Banco por quien tiene cuenta corriente con el mismo?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que, según el párrafo segundo del art. 2.º del vigente Código de Comercio, se reputan actos de comercio los comprendidos en el Código y cualesquiera otros de naturaleza análoga, y en su consecuencia, los documentos que representen ó simbolice esos actos son de naturaleza mercantil; Considerando que, teniendo por objeto los mandatos de pago ó cheques retirar el librador en provecho propio ó de un tercero todos ó parte de los fondos que tiene disponibles en poder del librado, representan por su objeto un acto de comercio, reconociéndose además como

documentos mercantiles estos mandatos en el art. 534, al determinar su objeto y nombre con que son conocidos en el comercio, y el 535, al fijar los requisitos y condiciones que han de tener para su validez en concepto de tales documentos: Considerando por lo expuesto que la falsificación hecha por el recurrente de la firma del comerciante D. Ignacio Sáenz en los 18 cheques que cortó de los tres cuadernos talenararios sustraídos con este objeto de la Sucursal del Banco, y con propósito, según su propia confesión, de utilizar el que más parecido tuviera con la firma indubitada de dicho comerciante, constituye el delito de falsificación de documento mercantil, previsto y penado en el art. 315 del Código, sin que pueda oponerse á esta declaración lo dispuesto en el art. 222 del reglamento del Banco de España, porque además de no poderse privar por un reglamento de una Sociedad de crédito á un documento del carácter que la Ley le reconoce, el artículo 543 del Código de Comercio establece de una manera terminante que para las órdenes de pago en cuenta corriente de los Bancos, que se conocen con el nombre de talones, regirán las disposiciones del Código que les sean aplicables, etc.» (Sentencia de 14 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 26 de Septiembre, páginas 182 y 183.)

**CUESTION V.** *El tenedor de libros y á la vez apoderado de una casa mercantil que recibe para sí de un sujeto una cantidad en préstamo mediante un abonaré firmado por el mismo, pero con estampación, antes de la firma, de la estampilla expresa del poder de dicha casa, cuya cantidad ni devolvió al que se la prestó, ni reintegró en la caja social, ¿será responsable por este hecho del delito de falsedad y del de estafa, ó lo será tan sólo de este último?*—La Sala de lo criminal de la Audiencia de Valladolid no estimó la existencia ni de uno ni de otro delito. El querellante particular pretendió en casación la calificación y penalidad de ambos, con arreglo al art. 90 del Código, y el Tribunal Supremo, si bien casó la sentencia reclamada, hizolo tan sólo en cuanto no se apreció ni penó en ella el delito de *estafa*, único existente en el hecho expuesto: «Considerando que las infracciones alegadas con referencia al Código penal son las siguientes: primera, la de los artículos 315 y números 2.º y 4.º del 314, porque no fueron calificales como constitutivos del delito de falsedad los hechos procesales; segunda, los artículos 547, núm. 3.º, y 548, núm. 1.º, porque los mismos hechos constituyen también el delito de estafa; tercera, el art. 90 por no haber sido aplicado, sin embargo de que los hechos probados determinan dos delitos: Considerando en cuanto á la primera designación de infracciones que la falsedad ha sido alegada en el concepto de extrínseca, por haberse ejecutado alteraciones materiales en el abonaré de 3 de Septiembre de 1883, y en el concepto de intrínseca, por suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido y por faltar á la verdad en la narración de los hechos: Considerando que la primera proposición no ha sido ni podido ser mantenida en el recurso, porque la Sala sentenciadora, al apreciar las pruebas, ha formado el juicio indiscutible de no existir alteración material en el abonaré



de 3 de Septiembre: Considerando que la proposición segunda no está confirmada, ni por el texto del documento redarguido de falso, ni por los hechos consignados en la sentencia; porque en el abonar sólo se determina la intervención real y positiva de las dos personas contratantes, y el contrato no contiene directa ni indirectamente narración alguna contraria á la verdad de los hechos, sin que la circunstancia de haber firmado Moral por poder de Semprán Hermanos implique falsedad; porque el firmante era en aquella fecha factor de la casa de D. José María Semprán, mediante poder constituido con cláusulas generales y las especiales de negociar, expedir y aceptar giros, de modo que si Moral abusó de sus facultades, pudo incurrir en responsabilidad penal de otra especie, pero no en la de falsario por haberse titulado representante de Semprán Hermanos, siéndolo real y efectivamente: Considerando, respecto al segundo grupo de infracciones alegadas, que en la sentencia han sido infringidos, por no haberlos aplicado, los artículos 547 y 548 del Código vigente, porque D. Isaac Moral es notoriamente reo de estafa consumada en cantidad superior á la de 2.500 pesetas, pues recibió y tomó para sí 183.000 con el descuento del 6 por 100, mediante un título que le obligaba á entregarlas ó devolverlas: Considerando que al concertar Moral con D. Mariano Mateo el préstamo de la cantidad expresada, ó gestionó por cuenta propia, ó en representación de Semprán Hermanos; que en el primer caso engañó á Mateo, sustituyendo su crédito personal por el de una razón social muy respetada, y con este engaño le defraudó no restituyendo la suma recibida; y que en el segundo caso, defraudó y perjudicó á Semprán Hermanos, apropiándose el importe del préstamo, sin darle ingreso en la caja social: Considerando que, bajo uno ú otro aspecto, el hecho constituye delito, según los números 1.º ó 5.º del precitado art. 548, y debe ser penado con arreglo al núm. 3.º del art. 547: Considerando que el tercer motivo del recurso no puede ser estimado, porque el hecho definido como delito no constituye otro ú otros más, ni ha sido cometido por medios especialmente punibles: Considerando, por último, que el Tribunal sentenciador ha incurrido en error de derecho, no calificando y penando como delito hechos probados que lo constituyen, etc.» (Sentencia de 7 de Julio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 16 de Octubre, páginas 233 á 236.)

**CUESTION VI.** *El que asociado mercantilmente con otra persona y autorizado por ésta para hacer giros, pero con la condición indispensable de su previo conocimiento ó permiso, sabedor de que su socio tiene un crédito contra un tercero, gira una letra á cargo de éste y á su propia orden, firmada con el nombre de su socio, cuya letra aceptó el librado, si bien no llegó á pagarla por haber recibido aviso de haber sido suplantada la firma del supuesto librador, ¿será responsable del delito de estafa, ó del más grave de falsedad en documento mercantil?*—El Tribunal Supremo ha declarado que está bien calificado el hecho expuesto en este último y más grave concepto: «Considerando que cae bajo la sanción penal del art. 315, en combinación con los números 1.º y 2.º del 314

del Código, el particular que en documento público ó oficial ó en letras de cambio ó otra clase de documentos mercantiles contrahiere ó fingiere letra, firma ó rúbrica de alguna persona: Considerando que apareciendo como hecho indiscutible que el recurrente había girado á Juan Cristo sin autorización ni conocimiento de su hermano uterino Salvador Vila, con quien estaba unido para el comercio, llevando el nombre el Salvador, una letra sobre París á su orden, de 500 pesetas, suponiendo la intervención de aquél sin tenerla, y contrahaciendo la firma del mismo, á modo cierto cometió un delito de falsedad previsto en aquellos artículos, por concurrir cuantos requisitos se exigen en los mismos para que esa calificación, que es la hecha por la Sala sentenciadora, sea oportuna y acertada, sin que ese hecho pueda, en modo alguno, confundirse con los que establece el núm. 1.º del art. 348 del Código, cuya base es el medio engañoso que se pone en juego particular y directamente para defraudar al engañado, que en este caso pudo verse defraudado, sin haber podido sospecharlo ni precaverlo, siendo inadecuada, por lo tanto, la aplicación que se pretende se haga al caso de ese número y artículo: Considerando, en su virtud, que al calificar la Sala sentenciadora de falsedad el delito y penarlo con sujeción á los artículos citados, no ha cometido las infracciones y consiguiente error de derecho que como motivo de casación se ha alegado infundadamente por la representación del procesado, etc.» (Sentencia de 17 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 25 de Marzo de 1889, páginas 75 y 76.)

**QUESTION VII.** *El que en un expediente instruido ante un Tribunal de quintas se da á conocer con un nombre que no es el suyo y se atribuye condiciones y cualidades que no tiene; y los testigos que identifican su supuesta personalidad corroborando conscientemente sus falsas manifestaciones, serán responsables del delito de falsedad en documento oficial, ó lo serán tan sólo del de falso testimonio en causa civil, comprendido en el art. 335 del Código?*—El Tribunal Supremo ha declarado que uno y otros son responsables, en este caso, del más grave delito de falsedad, previsto y penado en el art. 315 del Código: «Considerando que incurre en la sanción del art. 315 del Código penal el particular que en documento público ó oficial cometiere alguna de las falsedades designadas en el 314, cuyo delito se caracteriza, en los diferentes casos que señala este artículo, por la mutación ó ocultación que se hace de la verdad cuando afecta de algún modo á la integridad del documento y á los efectos que deba producir: Considerando que tanto Manuel Contero, al usar un nombre que no era el suyo y suponerse con condiciones y cualidades que no tenía, y que le eran necesarias para el objeto que se propuso, como los testigos de conocimiento, Antonio Rivas y Miguel Real, corroborando conscientemente las falsas afirmaciones de aquél en el acta levantada ante la Autoridad, y por la cual se declaró prófugo al primero del reemplazo de 1885, cometieron el delito de falsificación de un documento público, cual es el acta, porque con sus falsas afirmaciones le dieron vida y existencia real, ha-



ciendo que produjera sus legales efectos, habiendo incurrido por ello en la sanción del art. 315, en relación con el 314, como acertadamente aprecia la Sala sentenciadora, y no en la del 335, como equivocadamente se supone en el recurso, porque en esta disposición se pena el falso testimonio dado en causa civil, delito que se diferencia de aquel en que éste consiste en contradecir la verdad, pero cuya contradicción no afecta á la existencia legal del acto ó documento en que se hace, el cual produce en la generalidad de los casos sus efectos legales no obstante el falso testimonio, mientras que en aquél la falsedad afecta esencialmente á la integridad del documento, privándole de todo valor y eficacia, etc.» (Sentencia de 12 de Diciembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 15 de Abril de 1889, pág. 106.)

## SECCIÓN SEGUNDA

## DE LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS

## Art. 318.

## FALESDAD EN DOCUMENTO PRIVADO

**CUESTION.** *El que deseando imponer en la Caja de Ahorros 1.500 pesetas, y por ser la suma de 500 pesetas el límite máximo de cada imposición, hace tres de éstas, una á su propio nombre y las dos restantes á nombre de otras personas, de una de las cuales se finge ser el marido, haciendo efectivas á su tiempo dichas imposiciones y sus réditos valiéndose de igual engaño, será responsable del delito de falsedad en documento privado, ó del de estafa, comprendido en el núm. 1.º del art. 548, ó por lo menos en el 554?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que para que exista el delito de falsificación en documento privado, definido y penado en el art. 318 del Código penal, es indispensable que el que le cometa lo haga con perjuicio de tercero, ó con ánimo de causarlo, y que no habiendo el procesado Pedro Molina defraudado ni irrogado perjuicio á Juana Jiménez ni á la Caja de Ahorros al imponer y cobrar el importe del depósito que exclusivamente le pertenecía, no cometió el delito de falsedad ni el de estafa, por más que al realizar la imposición y al hacerla efectiva se valiera del engaño de fingirse marido de aquélla para eludir los reglamentos, toda vez que con este ardid á nadie perjudicó, circunstancia esencial para la perpetración de dichos delitos; Considerando que al estimarlo así acertadamente la Sala sentenciadora, declarando no constituir delito los hechos ejecutados por el procesado y absolviéndolo en su consecuencia, no ha cometido el error de derecho que se le atribuye, ni infringido los artículos del Código penal á que el recurso se refiere, etc.» (Sentencia de 15 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 26 de Septiembre, pág. 184.)

## SECCIÓN TERCERA

## DE LA FALSIFICACIÓN DE CÉDULAS DE VECINDAD Y CERTIFICADOS

## Art. 324.

CERTIFICACIÓN FALSA DE MÉRITOS Ó SERVICIOS, DE BUENA CONDUCTA,  
DE POBREZA Ó DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS ANÁLOGAS

**CUESTION.** *¿Dejó de ser penable una certificación falsa de buena conducta, expedida por un Secretario de Ayuntamiento, con arreglo á lo dispuesto el núm. 7.º del art. 125 de la ley Municipal, aun cuando carezca del V.º B.º del Alcalde, si su presentación aurtió los correspondientes efectos legales?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que, según el artículo 324 del Código penal, comete el delito de falsificación el funcionario público que librare certificación falsa de buena conducta; Considerando que la expedición de esta clase de documentos implica siempre el conocimiento de la persona á que se refiere ó de sus antecedentes sobre que se certifica; Considerando que conforme á los hechos probados que se consignan en la sentencia reclamada, el procesado D. José Fernández ha incurrido voluntariamente en el expresado delito, puesto que, como Secretario del Ayuntamiento de Carabanchel, expidió la certificación falsa de buena conducta á favor de Manuel Abad, cuya falsedad se deriva de que éste ni al tiempo de librarse dicho documento ni antes había sido vecino del indicado pueblo; Considerando que, con arreglo al núm. 7.º del art. 125 de la ley Municipal, los Secretarios se hallan facultados para expedir certificaciones de la clase de que se trata en pueblos de las condiciones como el de Carabanchel, si bien requieren para ser valederas el V.º B.º del Alcalde; pero aparte de que este requisito no afecta al contenido de dichos documentos, sino á la identidad de las personas que los autorizan, es lo cierto que de los hechos consignados en la sentencia recurrida no se infiere, como pretende el recurrente, que la certificación librada por el mismo careciera de aquella circunstancia, sino más bien que la reunía, toda vez que la presentación del certificado produjo todos sus efectos legales, etc.» (Sentencia de 26 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 6 de Mayo, páginas 191 y 192.)



## CAPÍTULO V

Disposiciones comunes á los cuatro capítulos anteriores.

## Art. 327.

TENENCIA DE ÚTILES Ó INSTRUMENTOS DESTINADOS CONOCIDAMENTE Á LA FALSIFICACIÓN DE QUE SE TRATA EN LOS CAPÍTULOS PRECEDENTES, SIN DAR DESCARGO SUFICIENTE SOBRE SU ADQUISICIÓN Ó CONSERVACIÓN.

**CUESTION.** *Aun cuando á ninguno de los procesados se le haya ocupado individual y determinadamente útil alguno destinado á la falsificación, ¿deberán ser considerados, sin embargo, como autores del delito previsto y penado en el art. 327 si todos tenían á su disposición dichos instrumentos y trataban de utilizarlos formando para ello expresa ó tácitamente una sociedad ilegítima?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que en los hechos declarados probados en la sentencia recurrida se consignó que el recurrente Pablo Andreu Braguera presenció el contrato y conferencias habidas para la adquisición de los útiles destinados á la fabricación de billetes falsos del Banco de España y alquiló el carro donde los condujo, cuyo actos de participación directa para la ejecución del delito le constituyen en autor del mismo, y no en el de cómplice ni encubridor, como en el recurso se pretende; y que si bien no puede asegurarse que individual y determinadamente fueran ocupados á ninguno de los procesados, todos los tenían á su disposición y trataban de utilizarlos, formando expresa ó tácitamente una sociedad ilegítima, debiendo, por lo tanto, conceptuarse al Andreu como tenedor real de dichos útiles, y, por consiguiente, como autor del delito definido y penado en el art. 327 del Código penal, etc.» (Sentencia de 31 de Enero de 1888, publicada en las Gacetas de 7 y 8 de Mayo, páginas 200 y 201.)

## CAPÍTULO VI

De la ocultación fraudulenta de bienes ó de industria, del falso testimonio y de la acusación ó denuncia falsas.

## Art. 323.

FALSO TESTIMONIO, EN CAUSA CRIMINAL, Á FAVOR DEL REO.

**CUESTION.** *¿Cabe calificar y penar el delito de falso testimonio en causa criminal sólo por la diferencia existente entre la primera declaración de un testigo prestada en el sumario, y la*

*segunda prestada en el acto del juicio oral, si por el Tribunal que conoció de éste no se ha declarado cuál de las dos es verdadera, si una y otra son falsas, ó sin que conste si en el sumario se consignaron manifestaciones no comprendidas en el testimonio del actual proceso?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que no siendo legalmente posible declarar la existencia del delito de falso testimonio prestado en juicio por la mera contradicción de las declaraciones dadas por un mismo testigo en cada uno de los diversos periodos del proceso criminal; y siendo, por el contrario, indispensable condición de aquél que la afirmación falsa que le constituya se haga en el acto del juicio oral, la índole especial del procedimiento vigente que defiere á la conciencia del Tribunal respectivo el juicio sobre la falsedad ó certeza de los hechos á su consideración y examen expuestos ó alegados, impone á los Jueces ante quienes se presta un testimonio, del que no queda comprobación susceptible de ser apreciada por otros en condiciones propias, el deber de declarar la realidad de la falsedad que estimasen, con determinación concreta y detallada de sus particulares todos, á fin de que el Tribunal llamado á juzgar después de tal hecho, ejercite su competencia indudable para la definición en su caso del delito y de la responsabilidad, sin chocar con el insuperable obstáculo que á falta de aquella previa declaración ofrecería á su acuerdo la imposible reproducción fiel de las pruebas del primer proceso, y el desconocimiento del mérito que, comparándolas entre sí, como es forzoso, las diera en su conciencia el que conoció en él y apreció el verdadero valor jurídico de los elementos probatorios que se suministraron: Considerando que de los hechos consignados en la sentencia reclamada sólo resulta la diferencia existente entre la primera y la segunda declaración de Antonio No, sin que conste hecha por el Tribunal, ante quien prestó la última, la de cuál de ellas sea verdadera, si una y otra son falsas, ó si en el sumario se consignaron manifestaciones no comprendidas en el testimonio del actual procesado: Considerando que estas deficiencias sustanciales, por lo que queda expuesto, no pueden ser eficazmente suplidas por manifestaciones más ó menos explícitas del Tribunal que ha dictado la sentencia recurrida, que no juzgó ni ha podido apreciar íntegramente las pruebas del primer proceso: Considerando, por consiguiente, que el Tribunal sentenciador ha incurrido en error de derecho, ó infringido los arts. 1.º y 333 del Código penal, calificando y penando como delitos hechos que, según han sido expuestos, no lo constituyen, etc.» (Sentencia de 28 de Septiembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 1.º de Diciembre, páginas 257 y 258.)

#### Art. 334.

FALSO TESTIMONIO, DADO EN CAUSA CRIMINAL POR DELITO, QUE NO PERJUDICA NI FAVORECE AL REO.

**CUESTION.** *El testigo que en el acto del juicio oral, no obstante haberse acreditado en el mismo que no sólo presencié el suceso,*



*sino que levantándose del asiento en que estaba se interpuso entre los que reñían y los separó, y por lo tanto debió ver como los demás que el herido arrojaba sangre por la nariz, manifiesta en su declaración «que no se movió del sitio en que estaba sentado y no vió al herido echar sangre,» será responsable del delito de falso testimonio dado á favor del reo, previsto y penado en el art. 333 del Código, ó incurrirá en la sanción más benigna que establece el artículo 334 para el que en causa criminal por delito dá falso testimonio que no perjudica ni favorece al reo!—La Audiencia de lo criminal de Manzanares estimó lo primero. Mas el Tribunal Supremo, al casar esta sentencia en virtud del recurso interpuesto á nombre del reo, declaró que la segunda y más benigna calificación era la que le correspondía: «Considerando que el falso testimonio queda consumado en el acto de prestar declaración el testigo faltando á la verdad por él conocida ó sabida, y debe ser calificado por la intención del declarante, según su ánimo de favorecer ó perjudicar al reo, ó de ocultar, alterar ó desfigurar la realidad de los hechos sin propósito transcendental: Considerando que Ventura Punzón López se limitó á negar un acto y una impresión personales, de ningún modo influyentes como elementos de cargo ó de exculpación: Considerando que el Tribunal sentenciador, al conceptuar por aquella mera negativa que Ventura Punzón trataba de favorecer á sus amigos los procesados, ha incurrido en error de apreciación jurídica, y por consiguiente, de calificación personal, infringiendo por indebida aplicación el art. 333 del Código vigente, y, por no haberlo aplicado, el artículo 334, etc.» (Sentencia de 5 de Julio de 1888, publicada en la Gaceta de 8 de Octubre, páginas 226 y 227.)*

### Art. 335.

#### FALSO TESTIMONIO EN CAUSA CIVIL.

Véase la *Cuestión VII* del art. 315, pág. 174.

### Art. 340

#### ACUSACIÓN Ó DENUNCIA FALSA.

**CUESTION I.** *El que imputa falsamente á su contrario en un pleito que trataba de sobornar á varios testigos para que se retractaran de las declaraciones prestadas en aquél, por cuyo hecho se incoó la correspondiente causa que terminó por sentencia absolutoria, será responsable del delito de denuncia falsa, comprendido en el art. 340 del Código!—*Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Salamanca, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo en virtud del recurso interpuesto por el acusado, que coadyuvó el Ministerio fiscal en el acto de la vista: «Considerando que, según declara probado el Tribunal sentenciador, Juan Manuel Martín

Hernández y Mariano Hernández Plaza manifestaron ante varias personas que D. Juan María Muñoz los perseguía ofreciéndoles dinero, y aun les amenazaba, con el fin de que se retractaran de las declaraciones prestadas en un juicio ejecutivo que seguía contra Julián García Delgado: Considerando que este hecho, supuesta su realidad, constituiría mera proposición del delito definido y penado en el art. 335 del Código vigente, en los términos que presupone el párrafo último del art. 4.<sup>o</sup>: Considerando que, según el párrafo primero del mismo artículo, la proposición de un delito sólo es punible en los casos designados especialmente por la Ley, y que en ellos no está comprendido el acto imputado á D. Juan María Muñoz: Considerando que si la denuncia de este acto dió motivo racional para proceder de oficio al esclarecimiento de los hechos, carecería (1) de base legal el proceso para exigir después la responsabilidad criminal al denunciador, por no ser en este caso justiciable la proposición, etc.» (Sentencia de 28 de Marzo de 1888, publicada en la Gaceta de 27 de Julio, pág. 21.)

**CUESTION II.** *El que ordena á un hijo suyo que vaya á dar parte á la Guardia civil de que un sujeto le habia detenido unos cerdos, será responsable del delito de denuncia falsa si habiendo el hijo encontrado por el camino y dado cuenta del encargo de su padre á su abuelo y á otro pariente, éstos denunciaron á la Guardia civil que el expresado sujeto habia robado á aquél una porción de cerdos, por cuyo hecho se instruyó causa que fué sobreseída libremente?*—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Jerez de la Frontera, que condenó al dueño de los cerdos, como autor de denuncia falsa, á la pena de un año, ocho meses y veintidós días de prisión correccional, multa de 250 pesetas, accesorias y costas. Mas interpuesto por la defensa del procesado recurso de casación contra dicha sentencia por infracción del art. 380 del Código, declaró el Tribunal Supremo haber lugar á él: «Considerando que según el art. 340 del Código penal, para la comisión del delito de acusación ó denuncia falsa es requisito indispensable que el que lo cometa impute falsamente á alguna persona hechos que si fuesen ciertos constituirían un delito de los que dan lugar á procedimientos de oficio ante funcionario que deba proceder á su averiguación ó castigo, y que el hecho de haber detenido Antonio Domínguez Duarte el ganado de cerda, único que le imputa Mateo Rodríguez Sánchez, no se halla castigado dentro de las prescripciones del Código, faltando, por lo tanto, la condición más esencial de las consignadas en dicho artículo para que exista el expresado delito: Considerando que debiendo ser tan sólo responsable el recurrente de los actos por él ejecutados, y no habiendo tenido la menor participación en la denuncia hecha por su suegro Mateo Gallegos á la Guardia civil, consistente en que Domínguez Duarte le habia robado unos cerdos, no ha incurrido en el mencionado delito: Considerando que al no estimarlo así la Sala sentenciadora ha incurrido en el error de derecho que

(1) Así dice la Gaceta, debiendo decir *carecería*.



se le atribuye, é infringido los artículos del Código penal á que el recurso se refiere, etc.» (Sentencia de 27 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 16 de Agosto, páginas 57 y 58.)

**CUESTION III.** *Aun cuando alguno de los hechos denunciados sea cierto, si el desfiguramiento ó silencio de algunos detalles, indujo á la Autoridad judicial á creer que se trataba verdaderamente de un delito perseguible de oficio, por no ser otros el natural sentido y clara tendencia de la denuncia formulada, y por esto se incoó el oportuno proceso que hubo de terminar por auto de sobreseimiento libre motivado por la no existencia del delito objeto de la denuncia ó querrela, ¿procederá declarar la falsedad de ésta, y aplicar á su autor la pena del art. 340 del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que el recurrente denunció al Juez municipal encargado de la averiguación de los delitos públicos los hechos referidos en el primer resultado, los cuales el Tribunal sentenciador estima imputados á los querellantes, relacionando con acierto los distintos párrafos del escrito, cuyo natural sentido y clara tendencia no son otros que los de inducir á la Autoridad judicial á suponer cometido un delito contra la propiedad por las personas que violentando las puertas penetraron en la casa del procesado; y que si bien de tales hechos resultó cierto éste de la entrada y la ocupación á título de embargo de algunas monedas de plata, y en la misma denuncia se expresó, según los términos de dicho resultado primero, la causa de tal hecho, calificado de ilegítimo y no de delito, lo cual podría privar á la denuncia en esta parte de carácter punible, mantiene éste el falso en opinión del Tribunal á quo referente á la falta, más tarde llamada sustracción por el mismo denunciador, de los tres billetes que se dijo quedaron sobre una mesa, puesto que la sentencia, además de juzgar inverosímil su existencia en aquel lugar y otros accidentes con ella relacionados, afirma en sustancia, como resultado del mérito de las pruebas procesales, la aviesa intención con que fué presentada la denuncia después de constar á Sogarra el carácter oficial, por él llamado, con que obraron las personas que nombró, como antes del hecho sabía que había de procederse como se procedió: Considerando que la desaparición de los billetes, ejecutárase su ocupación por los encargados de efectuar el embargo á título de tales fraudulenta, ó como particulares, constituiría un delito perseguible de oficio que merecería el nombre de hurto, y por tanto, la imputación falsa de tal hecho, acerca del cual se sobreyó en el primer proceso por falta de indicios racionales de su realidad, constituye á su vez el de denuncia falsa, definido en el citado art. 340 del Código penal, etc.» (Sentencia de 12 de Octubre de 1888, publicada en las *Gacetas* de 29 y 31 de Diciembre, páginas 284 y 285.)

**CUESTION IV.** *La resolución de un Tribunal desestimando la querrela de antejuicio necesaria para exigir responsabilidad criminal á los Jueces y Magistrados será equivalente á un auto de sobreseimiento, á los efectos del párrafo segundo del art. 340 del Código penal, de tal suerte que si entiendo que hay fundamen-*

*tos para creer que son falsos los hechos imputados al funcionario judicial, pueda, al par que desestima la querella, mandar proceder contra el querellante por acusación ó denuncia falsa?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa. Véanse los fundamentos de tan importante decisión: «Considerando que la disposición contenida en el párrafo segundo del art. 340 del Código penal es una garantía de carácter procesal, otorgada á favor del denunciante ó acusador, para que por razón de la denuncia ó acusación no pueda ser procesado criminalmente sino por motivos muy fundados, rectamente apreciados por el Tribunal que conoce del hecho á que se refiere la denuncia ó acusación: Considerando que el procedimiento constitutivo del antejuicio es bajo este aspecto una garantía tan eficaz cuando menos como las de las diligencias sumariales que terminan por auto firme, pues tiene el objeto de comprobar el fundamento de la querella formulada, y consiguiendo la resolución del Tribunal, desestimando la querella en vista del resultado de las pruebas, equivale á un auto de sobreseimiento después de trámite más solemne que los que preceden á los autos de dicha clase que se acuerdan en los sumarios: Considerando que para reducir estrictamente dicha garantía á las resoluciones que tengan el carácter de sentencias firmes ó autos igualmente firmes de sobreseimiento es preciso penetrar en el pensamiento del legislador del Código de 1870, é inquirir la extensión de dichas locuciones, según su significado legal cuando se publicó, el cual se manifiesta claramente en la Ley provisional de 18 de Junio del mismo año sobre el establecimiento del recurso de casación en los juicios criminales, en la que después de sentar el principio de que el recurso se establece contra las sentencias de las Audiencias, no sólo se atribuye este carácter para los efectos de la casación á las resoluciones por virtud de las que se deniega la admisión de cualquier denuncia ó querella, sino que al enumerarlas, las designa con el nombre de sentencia, sin contradicción de ninguna ley entonces vigente, cuyo tecnicismo es tanto más de apreciar cuanto que las mismas Cortes y el mismo Ministro de Gracia y Justicia fueron los que intervinieron en la formación de dicha ley y del Código, aprobados y publicados muy seguidamente y éste después de aquélla; con lo que resulta evidente que, tanto por la índole del procedimiento que constituye el antejuicio, como por el verdadero carácter de la resolución que lo termina, se cumple la condición de los párrafos segundo y tercero del art. 340 cuando el Tribunal que desestima la querella manda proceder contra el denunciador ó acusador, por concebir falsos los hechos imputados en concepto de delito, y no se puede dar así el caso ni de que se infrinja el principio de responsabilidad que con arreglo á la Ley de Enjuiciamiento criminal contrae el denunciador ó querellante por los delitos que cometa con ocasión de la denuncia ó querella, ni que el trámite del antejuicio sea un escudo de impunidad para aquéllos: Considerando que el Tribunal que conoció del antejuicio seguido contra el Juez de Peñaranda de Bracamonte, D. Celso Romano Zugarrondo, desestimó la querella, entendiéndolo que había fundamento para



creer que eran falsos los hechos imputados al expresado Juez, por lo que mandó proceder contra el querellante Ramón Mateo Catón, con lo que se cumplieron los dos requisitos del art. 340 del Código; que en la causa que ha motivado el presente recurso aparece reconocida dicha falsedad por el Tribunal á quo; que con arreglo á los principios generales del Código, es responsable, en concepto de autor, lo mismo el que toma parte directa en la ejecución del hecho que el que induce directamente á otro á ejecutarlo, cuando, como sucede en el presente caso, la inducción fué de tal eficacia sobre el autor material, que lo determinó á cometer el delito contra una persona que no conocía; que la resolución mandando abrir el proceso contra el denunciador ó acusador no puede menos de trascender por su índole á los demás que resulten responsables de la denuncia ó acusación falsa, por ser esto una consecuencia racional, lógica y consiguientemente necesaria del principio en que se ha fundado la declaración del Tribunal, según ha declarado esta Sala en caso semejante, y que los hechos imputados por Ramón Mateo Catón al Juez D. Celso Romano son constitutivos de delito determinado, entre los que merecen la calificación de graves los relativos á las falsedades cometidas en la instrucción de las causas, por lo que la Audiencia de Valladolid no ha incurrido en error de derecho ni cometido infracción ninguna al calificar y penar á los recurrentes como autores del delito de denuncia falsa, previsto y castigado en la primera parte del artículo 341 del Código, etc.» (Sentencia de 7 de Junio de 1888, publicada en las *Gacetas* de 24 y 25 de Septiembre, páginas 168, 169 y 170.)

Véase además el art. 10..... 20.<sup>a</sup>, *Cuestión II*, pág. 82.

## CAPÍTULO VII

**De la usurpación de funciones, calidad y títulos, y uso indebido de nombres, trajes, insignias y condecoraciones.**

### Art. 342

**EJERCICIO, SIN TÍTULO Ó CAUSA LEGÍTIMA, DE ACTOS PROPIOS DE UNA AUTORIDAD Ó FUNCIONARIO PÚBLICO, ATRIBUYÉNDOSE CARÁCTER OFICIAL.**

**CUESTION I.** *¿Serán responsables del delito de usurpación de atribuciones, previsto y penado en el art. 342 del Código, el Concejal de Ayuntamiento y varios electores que después de verificada la elección bajo la presidencia del Alcalde, con arreglo á la Ley, constituyen nueva Mesa y verifican segunda elección, firmando las actas que lo justifican?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que, según el art. 342 del Código penal, comete el delito de usurpación de funciones el que sin título ó causa legítima ejerce actos propios de una Autoridad

ó funcionario público, atribuyéndose un carácter oficial que no tiene: Considerando que al reunirse los recurrentes y demás procesados en la casa antigua del Ayuntamiento del término municipal de Peseiro, constituyéndose en Mesa electoral bajo la presidencia del Concejal D. Francisco Cacheldora y procediendo á la elección de compromisarios, cuyas actas firmaron con objeto de justificar este acto, llevado á efecto á pesar de haberles manifestado el Alcalde que ya había terminado la elección, es indudable que usurparon las funciones públicas conferidas expresamente por la Ley al Alcalde y demás individuos que con arreglo á ella formaban la Mesa legitimamente constituida, toda vez que los Concejales sólo pueden sustituir al Alcalde, en conformidad á lo que la ley Electoral dispone, por delegación de éste, y que por lo tanto incurrieron en el expresado delito, etc.» (Sentencia de 3 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 15 de Mayo, páginas 237 y 238.)

**CUESTION II.** *¿Cabe calificar de delito de usurpación de funciones, previsto y penado en el art. 342 del Código, el hecho de haber un Concejal de Ayuntamiento, en ausencia del Alcalde y Teniente de Alcalde, pero sin corresponderle funcionar por existir en la localidad antes que el otro individuo del Ayuntamiento, mandado reconocer por Facultativo al Secretario de la Corporación municipal por no haber concurrido á la oficina alegando enfermedad?*—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Ciudad Real, que condenó al procesado á la pena de un año, ocho meses y veintidós días de prisión correccional, accesoria, indemnización y costas. Mas interpuesto contra dicha sentencia por la defensa del procesado recurso de casación, citando como infringidos los artículos 342 y 1.º del Código, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar á él*: «Considerando que, aparte la insignificancia del acuerdo atribuido al recurrente D. Eugenio Morales, insignificancia que impide realmente fundar en el supuesto de usurpación de atribuciones, la que debe resultar muy caracterizada y marcada, aparece de todos modos que si el procesado mandó reconocer al Secretario del Ayuntamiento por el mismo Médico de su particular asistencia, para ver si estaba justificada la abstenición en el desempeño de un servicio, lo hizo por ausencia del Alcalde y Teniente Alcalde, sin que en la sentencia conste si el otro Concejal, que al parecer tenía mejor derecho para sustituir á aquéllos, se hallaba ó no en la localidad, si este mejor derecho era claro y había sido deslindado anteriormente, por lo cual al atribuirse en dicha circunstancia el Concejal D. Eugenio Morales carácter de Alcalde, con el exclusivo objeto antes referido, no ha cometido delito alguno, aunque haya podido incurrir en algún error respecto de sus facultades, etc.» (Sentencia de 30 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 28 de Marzo de 1889, pág. 91.)



## Art. 346 (párrafo segundo).

USO DE NOMBRE SUPUESTO CON OBJETO DE OCULTAR ALGÚN DELITO, ELUDIR UNA PENA Ó CAUSAR ALGÚN PERJUICIO AL ESTADO Ó Á LOS PARTICULARES.

**CUESTION.** *Para que exista el delito previsto y penado en el párrafo segundo del art. 346 del Código, ¿será preciso que el culpable haya usado el nombre supuesto públicamente, aun cuando en él no se haga mérito de esta circunstancia, como se hace en el párrafo primero?—El haber usado el procesado un nombre supuesto en una venta donde paró, con objeto de ocultar su condición de cumplido de presidio, sin que conste que lo hubiera usado antes ni después ante otras personas ni en otros sitios, ¿constituirá el expresado delito?—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa sobre el primer punto y la negativa respecto del segundo al casar cierta sentencia de la Audiencia de lo criminal de Almería, en que se calificó y penó el expresado hecho como delito de uso de nombre supuesto: «Considerando, en cuanto á la primera infracción alegada en apoyo del recurso, que no habiendo llevado el recurrente, al mudar de nombre en la venta en que paró, otro objeto que el de ocultar su condición de cumplido de presidio á los venteros y otra persona que en la misma había, sin que aparezca en la sentencia que ese nombre supuesto lo hubiera usado antes ni después ante otras personas ni en otros sitios, falta al hecho, para que pudiera constituir el delito previsto en el núm. 2.º del artículo 346 del Código penal, la condición esencial de haber usado el nombre supuesto públicamente, cual la Ley exige, pues no habiéndolo hecho con continuidad en el trato común con diversas personas, y por un tiempo más ó menos largo, el hecho, siendo común á todos los casos del art. 346 aquella condición, no cae bajo la sanción de ninguno de los del citado artículo, que ha sido ciertamente infringido al ser indebidamente aplicado; caso de casación previsto en el núm. 1.º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, etc.» (Sentencia de 2 de Julio de 1888, publicada en la Gaceta de 7 de Octubre, páginas 220 y 221.)*

## TÍTULO V

DE LA INFRACCIÓN DE LAS LEYES SOBRE INHUMACIONES, DE LA VIOLACIÓN DE SEPULTURAS Y DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA.

## CAPÍTULO I

De la infracción de las leyes sobre inhumaciones y de la violación de sepulturas.

## Art. 349.

INHUMACIÓN PRACTICADA Ó HECHA PRACTICAR CONTRAVINIENDO Á LO DISPUESTO POR LAS LEYES Ó REGLAMENTOS RESPECTO AL TIEMPO, SITIO Y DEMÁS FORMALIDADES PRESCRITAS PARA LAS INHUMACIONES.

**CUESTION.** *El médico de cabecera que expide certificación expresiva de que uno de sus enfermos ha fallecido algunas horas antes de la en que realmente tuvo lugar la muerte, con el fin de complacer á la familia del finado á fin de que pudiera dársele sepultura al cadáver en la tarde del mismo día en que ocurrió su fallecimiento, además del delito de falsedad (véase el art. 314, Cuestión II), ¿será responsable como coautor de la inhumación practicada antes de tiempo, según los términos del art. 349 del Código penal?*—La Audiencia de lo criminal de Cádiz, que hubo de entender en este caso, lo hizo omiso del expresado delito. Mas interpuesto recurso de casación por el Ministerio fiscal contra dicha sentencia, alegando la infracción del art. 90 del Código, en relación con los artículos 314 y 349, porque siendo el primer delito (de falsedad) medio necesario para cometer el segundo (de inhumación indebida), debió imponerse la pena del más grave en el grado máximo, declaró el Tribunal Supremo haber lugar al referido recurso: «Considerando que el que practicare ó hubiere hecho practicar una inhumación, contraviniendo á lo dispuesto por las leyes ó reglamentos respecto al tiempo, sitio y demás formalidades prescritas para la inhumación, comete el delito definido en el art. 349 del Código penal, cuyo delito se cometió al inhumar antes de tiempo el cadáver de D.<sup>a</sup> Josefa Rodríguez Bruzón: Considerando que de dicho delito es autor D. Santiago da la Torre y Boades, por haber cooperado á la ejecución con un acto sin el que no se hubiera verificado, ó sea extendiendo con tal objeto la certificación falsa que ha motivado su condena: Considerando que aun cuando la Audiencia de Cádiz haya esti-



mado, según queda expuesto, que dicha falsedad fué cometida por imprudencia, es evidente que el fin realizado con que se extendió la certificación falsa fué conscientemente previsto, por lo que la responsabilidad de D. Santiago de la Torre, respecto de este segundo delito, es la de autor malicioso del mismo: Considerando que la Audiencia de Cádiz ha incurrido en error de derecho al limitarse á castigar la falsedad por imprudencia, dejando de hacerlo en cuanto á la inhumación indebida realizada, y que en este sentido procede el recurso del Ministerio fiscal, etc.» (Sentencia de 7 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 8 de Mayo, pág. 206.)

## CAPÍTULO II

### De los delitos contra la salud pública.

#### Art. 351.

ELABORACIÓN, SIN AUTORIZACIÓN COMPETENTE, DE SUSTANCIAS NOCIVAS Á LA SALUD Ó DE PRODUCTOS QUÍMICOS QUE PUEDAN CAUSAR GRANDES ESTRAGOS, CON OBJETO DE EXPENDERLOS, Ó DESPACHO, VENTA Ó COMERCIO DE LOS MISMOS.

**CUESTION.** *El que, sin la competente autorización, expende entre varias sustancias algunas exclusivamente medicinales, y otras venenosas, cuyo uso sin prescripción facultativa pueda ser nocivo á la salud, será responsable del delito contra la salud pública, comprendido en el art. 251 del Código, ó quedará sujeto á las penas que en el capítulo VIII de las Ordenanzas de Farmacia, de 18 de Abril de 1860, se señalan á sus infractores?*—El Tribunal Supremo ha declarado que la penalidad del Código es aplicable al caso expuesto: «Considerando que los motivos del recurso interpuesto, y las infracciones de ley invocadas se fundan en el concepto único de no ser aplicable en este proceso el Código penal vigente, sino las Ordenanzas aprobadas por Real decreto de 18 de Abril de 1860 para el ejercicio de la profesión de Farmacia, comercio de drogas y venta de plantas medicinales: Considerando que estas Ordenanzas no tienen carácter de ley penal especial, pues la infracción de sus disposiciones sólo puede ser corregida gubernativamente cuando no implica la comisión de un delito de que deban conocer los Tribunales de Justicia, según terminantemente prescribe el art. 73: Considerando que, con arreglo al art. 351 del expresado Código, constituye delito la venta de sustancias nocivas á la salud sin la competente autorización, y que incurre en responsabilidad criminal el que las expende ó comercia con ellas: Considerando que, según declara probado el Tribunal sentenciador, el recurrente expendía, cual si fuese farmacéutico, toda clase de medicamentos y productos químicos,

sin atender á la eficacia ó resultado que pudiesen producir, ni menos á la clase y circunstancias de las personas que los demandaban, sin exigir nota ó documento de garantía y sin haber obtenido para tales ventas ó tráficos la competente autorización: Considerando que entre los objetos naturales, drogas y productos químicos, á cuya informal y no autorizada expendición se dedicaba el recurrente, figuran sustancias exclusivamente medicinales y alguna venenosa, cuyo uso sin prescripción facultativa puede ser nocivo á la salud: Considerando, por consiguiente, que el Tribunal á quo no ha infringido, sino aplicado rectamente el mencionado art. 351, y que tampoco ha infringido las disposiciones legales que se citan en el recurso, por ser notoriamente inaplicables al caso procesal, etc.» (Sentencia de 27 de Septiembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 30 de Noviembre, páginas 254 y 255.)

### Art. 356.

ALTERACIÓN, CON MEZCLA NOCIVA Á LA SALUD, DE LAS HERIDAS Ó COMESTIBLES DESTINADOS AL CONSUMO PÚBLICO, Ó VENTA DE GÉNEROS CORROMPIDOS, Ó FABRICACIÓN Ó VENTA DE OBJETOS CUYO USO SEA NECESARIAMENTE NOCIVO Á LA SALUD.

**CUESTION.** *Para que exista la consumación del delito contra la salud pública, comprendido en la sanción del art. 356 del Código, será indispensable, tratándose de quien está habitualmente dedicado á la expendición de un artículo, que la aprehensión de este mismo género adulterado se haga precisamente en el acto de su venta, ó bastará que se le encuentre en el almacén ó puesto donde lo expone ó exhibe para su expendición?*—El Tribunal Supremo ha declarado que esto último basta para determinar la consumación del hecho criminal: «Considerando que dedicado habitualmente Antonio Alcántara á la expendición de pimienta molida, no es necesario para que el delito de que se trata se consuma que la aprehensión del género adulterado haya de hacerse en el acto de la venta, sino que basta, por razón de su habitual industria, el encontrarlo en sus almacenes ó puestos donde lo presente á la venta, y mucho más cuando se aprehende, como en el presente caso, al conducirlo en cantidad considerable á la estación del ferrocarril para transportarlo á un mercado, donde no podía tener otro propósito que el de realizar su venta, etc.» (Sentencia de 19 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 6 de Enero de 1889, pág. 61.)



## TÍTULO VI

## DE LOS JUEGOS Y RIFAS.

## Art. 358.

## CASAS DE JUEGO DE SUESTE, ENVITE Ó AZAR.

**CUESTION.** *El jugar á los prohibidos en una casa particular, ¿constituirá el delito definido en el art. 358 del Código?*—Antonio Ortega y Antonio Márquez estuvieron jugando al monte en la casa de su convecino Salvador Ruiz, ganando el primero al segundo 100 pesetas, cuya deuda se consignó en documento privado; y este hecho probado lo calificó la Audiencia de Ronda de delito de juegos prohibidos, y condenó al dueño de la casa á dos meses y un día de arresto mayor y multa de 200 pesetas, y á los dos jugadores á un mes y once días de igual arresto, y 125 pesetas de multa. Mas interpuesto contra esta sentencia recurso de casación, que coadyuvó el Fiscal en el acto de la vista, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar á él*: «Considerando que el juego de suerte, envite ó azar sólo se pena como delito en el Código cuando se realiza en casa propiamente de juego, sea ó no pública, es decir, dedicada al fomento ó mantenimiento de dicho vicio, pero no si se verifica sin dicha condición, y más ó menos accidentalmente, en la morada particular de cualquiera; Considerando que de la sentencia recurrida no aparece que la casa de Salvador Ruiz Martín sea de juego en el sentido expuesto, por cuya razón, al jugar en ella Antonio Ortega Martín y Antonio Márquez Granados, no se cometió por ninguno de ellos el delito que define y pena el art. 358 del Código, pues falta, consiguientemente, uno de los elementos esenciales y constitutivos de dicho delito, habiendo incurrido el Tribunal sentenciador en error de derecho al calificar y penar como delito un hecho que no lo constituye, etc.» (Sentencia de 28 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 21 de Abril de 1888, páginas 139 y 140.)

## TÍTULO VII

DE LOS DELITOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN EL EJERCICIO  
DE SUS CARGOS.

## CAPÍTULO I

## Prevaricación.

## Art. 369.

PROVIDENCIA Ó RESOLUCIÓN INJUSTA DICTADA Ó CONSULTADA POR  
FUNCIONARIO PÚBLICO EN NEGOCIO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  
Ó MERAMENTE ADMINISTRATIVO.

**CUESTION.** *¿Será responsable del delito de prevaricación, previsto y penado en el art. 369 del Código, el Alcalde que, habiéndosele presentado en el día y antes de la hora señalada para la subasta de unos bienes el propio deudor de fondos municipales á quien habían sido éstos embargados, con el objeto de hacer pago de la deuda principal y obligarse al del importe de las costas, se niega á recibir el dinero, así como á suspender el remate?—Así lo estimó la Sala de lo criminal de la Audiencia de Valladolid, la que condenó al expresado Alcalde á la pena de once años y un día de inhabilitación. Mas interpuesto por el mismo recurso de casación contra dicha sentencia, por infracción, entre otros, del art. 369 del Código y de los 34 y 65 de la Instrucción para el procedimiento de apremio, de 3 de Diciembre de 1869, declaró el Tribunal Supremo que en el presente caso no existía el delito de prevaricación penado por la Audiencia sentenciadora: «Considerando que, según el art. 34 de la Instrucción de 3 de Diciembre de 1869, relativo al modo de proceder para hacer efectivos los débitos á favor de la Hacienda pública, la venta de los bienes muebles ha de hacerse en pública subasta dentro de los tres días siguientes al embargo, y prescribiendo también el expresado artículo que la referida venta se verifique en el sitio y hora que el Juez municipal señale con anticipación por medio de anuncio público ó pregón, previa notificación de la providencia al deudor, es visto que el procesado obró en conformidad á la mencionada disposición, puesto que no establece término alguno que deba mediar entre la providencia y la subasta que en aquélla se ordena: Considerando que, si bien por el art. 65 de la referida Instrucción el deudor tiene el derecho de librar sus bienes antes de verificarse el remate, se le exige necesariamente para ello como requisito pre-*



vio el pago del principal, interés, dietas y demás gastos del procedimiento; y no habiéndolo hecho así el deudor D. Ambrosio Franco, ni intentado en manera alguna, sin que bastara el pago del principal y suscribir el importe de las costas, el recurrente, al no suspender el remate, se ajustó al cumplimiento de la indicada disposición: Considerando que, aun ofreciendo dudas la aplicación al presente caso de los precitados artículos, relacionados con otros de la Instrucción, esta sola circunstancia bastaría por sí á justificar la no existencia del delito de prevaricación, de haberse dictado á sabiendas y con manifiesta injusticia providencia ó resolución en negocio administrativo, ó que fuere manifiestamente injusta por negligencia ó ignorancia inexcusables, toda vez que, según queda consignado, el procesado se ajustó al precepto del art. 34 al dictar como Alcalde las providencias de 18 y 20 de Noviembre de 1883, y cumplió también con lo dispuesto en el 65 al negar la suspensión del remate por no haberse llenado todos los requisitos que este artículo prescribe: Considerando por tanto que el Tribunal sentenciador, estimando lo contrario, ha incurrido en el error de derecho é infringido las disposiciones legales que se le atribuyen en el recurso, etc.» (Sentencia de 14 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 25 de Agosto, pág. 91.) Véase, además, el art. 380.

## CAPÍTULO II

### Infidelidad en la custodia de presos.

#### Art. 373.

CONNIVENCIA DEL FUNCIONARIO PÚBLICO EN LA EVASIÓN DE UN PRESO CUYA CONDUCCIÓN Ó CUSTODIA LE ESTUVIERE CONFIADA.

**CUESTION I.** *El Alcalde que se pone de acuerdo con el Alcalde de la cárcel donde un penado se halla extinguiendo una pena de arresto, para que éste salga del establecimiento de día para ganar un jornal, como así lo verificó en varias ocasiones, será responsable, lo mismo que el Alcalde, del delito de infidelidad en la custodia de presos!*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que incurre en la responsabilidad que establece el art. 373 del Código penal el funcionario público cuando es connivente en la fuga de un preso cuya conducción ó custodia le hubiese sido confiada, y también cuando su consentimiento es causa de que un penado salga indebidamente del establecimiento en que cumple la condena, porque de esta manera desnaturaliza ó hace ilusoria la corrección impuesta, según tiene declarado con repetición esta Sala: Considerando que al ponerse de acuerdo el Alcalde Arcena, á cuya disposición se hallaba el sentenciado Nicomedes Revuelta para extinguir una pena impuesta por sen-

tencia firme, con el Alcalde de la cárcel en que se había de cumplir, para que dicho penado saliese del establecimiento, por más que sólo fuera durante el día, para ganar un jornal, cometieron el delito que castiga el citado art. 373, porque siendo los dos funcionarios públicos encargados de la custodia el uno y de la policía de inspección y seguridad como Autoridad gubernativa el otro, voluntariamente contribuyeron á la salida del penado del establecimiento en que debía permanecer por todo el tiempo de la condena, y al estimarlo así la Audiencia de Bilbao no ha incurrido en error de derecho ni infringido las disposiciones que se citan como fundamentos del recurso, etc.» (Sentencia de 20 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 7 de Septiembre, páginas 133 y 134.)

**CUESTION II.** *El Alcalde de cárcel que permite que un preso condenado por ejecutoria, y cuya custodia le fuera confiada hasta que tuviere efecto su conducción al establecimiento penal correspondiente, salga de la cárcel y ayude en las faenas agrícolas á ciertas familias del pueblo, ¿será responsable del delito de infidelidad en la custodia de presos, aun cuando el de que se trata no se haya fugado?*—La Sala de lo criminal de la Audiencia de Burgos estimó que el hecho expuesto constituía tan sólo una falta administrativa y absolvió al Alcalde. Mas interpuesto por el Ministerio fiscal recurso de casación contra dicha sentencia por infracción del art. 373 del Código, declaró el Tribunal Supremo haber lugar á él: «Considerando que incurre en la responsabilidad que señala el art. 373 del Código penal el funcionario público culpable de connivencia en la evasión de un preso cuya conducción ó custodia le estuviere confiada: Considerando que al recurrido D. Calixto Martínez Puente, como Alcalde de la cárcel de Villadiego, le fué entregado en custodia, hasta que fuera conducido al establecimiento penal correspondiente, el preso y condenado por ejecutoria en tres años de prisión correccional, por el delito de robo, Rafael Díez López, y en lugar de impedir el que faltara á las prescripciones legales relajando dicha pena, le mandó á prestar servicios no sólo fuera del edificio en que se hallaban y en bien de todos sus habitantes, lo cual podría tal vez tolerarse, sino en favor de personas de la familia de dicho Martínez, á quienes ayudó en las faenas agrícolas, cometiendo éste el citado delito del art. 373 del Código, porque, según repetidamente tiene declarado esta Sala, hay evasión de un preso cuando, sea el tiempo que fuese, más corto ó más largo, haya estado en libertad no autorizada ni consentida por los reglamentos, y es connivente en esta evasión el Alcalde ó funcionario público que la permite ó ordena: Considerando que la Audiencia de Burgos, en la sentencia de cuya casación se trata, ha prescindido de las razones legales anteriormente expuestas, absolviendo á D. Calixto Martínez Puente, y ha infringido el repetido art. 373 y demás que invoca en su recurso el Ministerio fiscal, incurriendo en el error de derecho que señala el núm. 2.º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, etc.» (Sentencia de 3 de Julio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 8 de Septiembre, páginas 143 y 144.)



—Igual doctrina vemos consignada en otra Sentencia anterior: «Considerando que incurre en la responsabilidad que establece el art. 373 del Código penal el funcionario público connivente en la fuga de un preso cuya conducción ó custodia le hubiere sido confiada, entendiéndose también cuando con su consentimiento es causa de que un penado salga indebidamente del establecimiento en que cumpía la condena, porque de esta manera desnaturaliza ó hace ilusoria la corrección impuesta, según con repetición tiene declarado esta Sala: Considerando que al consentir el recurrente, como encargado de la custodia del penado José Miralles en el hospital donde se hallaba por estar enfermo, su salida del establecimiento, en el que debía permanecer durante el tiempo de la condena, cometió el delito previsto y penado en el art. 373, y al apreciarse así por la Audiencia sentenciadora no ha incurrido en error de derecho ni infringido disposición legal ninguna, etc.» (Sentencia de 22 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 29 de Septiembre, páginas 201 y 202.)

## CAPÍTULO V

## Desobediencia y denegación de auxilio.

## Art. 380.

NEGATIVA ABIERTA DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES Ó ADMINISTRATIVOS Á DAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO Á SENTENCIAS, DECISIONES Ó ÓRDENES DE AUTORIDAD SUPERIOR DICTADAS DENTRO DE LOS LÍMITES DE SU RESPECTIVA COMPETENCIA Y REVESTIDAS DE LAS FORMALIDADES LEGALES.

**CUESTION I.** *El Alcalde que habiendo recibido orden del Gobernador de la provincia de reponer á los Concejales dimitentes del año anterior, pone en conocimiento de dicho Superior que no le era posible darles posesión por ser deudores á los fondos públicos; y reiterada la orden por el Gobernador para que la cumpliera en el término de veinticuatro horas, deja de hacerlo, dando la posesión, empero, dentro de dicho plazo el Teniente de Alcalde, y ratificándola el propio Alcalde tres días después, será responsable del delito de desobediencia, comprendido en el art. 380 del Código?*—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Albuñol, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por indebida aplicación, en este caso, del referido artículo: «Considerando que los hechos declarados probados por el Tribunal á quo, en cuanto demuestran que el Alcalde recurrente no se negó abiertamente á dar posesión al Ayuntamiento dimitente como se le ordenaba por el Gobernador civil, puesto que consultó á dicha Autoridad si cumplimentaba la orden, no obstante la incapacidad legal que á su juicio existía en los nombrados por ser deudores á los fondos públicos, no incurrió

en la sanción del art. 380 del Código penal, por faltar la desobediencia abierta á las órdenes recibidas, que es lo que caracteriza esta clase de delitos: Considerando que aun en el supuesto de que la segunda orden recibida fuera denegatoria de la consulta hecha al Gobernador, lo cual no aparece como probado, tampoco habría incurrido por ello en responsabilidad, puesto que dicha orden fué cumplida, y el Ayuntamiento dimitente posesionado de su cargo, dentro del plazo de veinticuatro horas que en la segunda orden se señalaba; y aunque la posesión fué dada por el Teniente, como de la sentencia no resultan las causas que impedirían darla al Alcalde, no puede afirmarse que lo hiciera por el propósito de desobedecer la orden, y mucho menos cuando consta probado en la sentencia que al tercer día de darse la posesión por el Teniente fué ésta ratificada por el Alcalde: Considerando que al calificarse y penarse por la Sala sentenciadora los hechos de esta causa como constitutivos de delito, ha incurrido en el error de derecho que señala el número 1.º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento criminal é infringido el art. 380 del Código penal, etc.» (Sentencia de 12 de Junio de 1887, publicada en la *Gaceta* de 26 de Septiembre, páginas 177 y 178.)

**CUESTION II.** *¿Podrá calificarse y penarse como delito de desobediencia, comprendido en el art. 380 del Código, el incumplimiento por parte de una Municipalidad de órdenes reiteradas del Gobernador de la provincia sobre el cierre de una calleja y otorgamiento de la escritura de venta de varias parcelas al comprador de las mismas, si no se corrigió antes gubernativamente la conducta resistente de dicho Ayuntamiento, con arreglo á lo dispuesto en los artículos 180, 181 y 182 de la ley Municipal vigente?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa al casar la sentencia condenatoria de la Audiencia de lo criminal de Llerena, dictada en el proceso á que dió lugar el caso de que se trata: «Considerando que si bien de los hechos consignados en la sentencia recurrida aparece que los procesados, como Alcalde y Concejales respectivamente del Ayuntamiento de Fregenal, no cumplieron las órdenes que con reiteración les comunicó el Gobernador civil de la provincia para el cerramiento de la calleja de Anea y el otorgamiento de la correspondiente escritura de enajenación de varias parcelas pertenecientes á la misma en favor del comprador don Rodrigo Sánchez Arjona, es lo cierto que esta conducta de dichos procesados pudo en su caso corregirse gubernativamente, con arreglo á lo prescrito en los artículos 180, 181 y 182 de la ley Municipal, de 2 de Octubre de 1877, no constando, como no consta en la expresada sentencia reclamada, fundamento alguno de que pueda inferirse que el hecho procesal revista el carácter de delito de desobediencia abierta á cumplimentar las órdenes de la indicada Autoridad superior civil de la provincia: Considerando, por tanto, que el Tribunal sentenciador ha incurrido en el error de derecho é infringido el art. 380 del Código penal que se le atribuye en el recurso, etc.» (Sentencia de 6 de Marzo de 1888, publicada en las *Gacetas* de 16 y 19 de Junio, páginas 298 y 299.)

**CUESTION III.** *¿Será responsable del delito de desobediencia*



*cia, previsto y penado en el art. 380 del Código, ó de algún otro, el Alcalde que manda retirar del local señalado como colegio electoral á un Notario no elector, que con el distintivo de su cargo, y á requerimiento de uno de los electores, se constituyera allí para presenciar y dar fe de cuanto ocurriera desde la constitución de la Mesa interina hasta la votación y escrutinio de la definitiva?*— Como desobediencia á lo mandado en la Real orden de 8 de Abril de 1884, la Audiencia de lo criminal de Manresa calificó el hecho de delito previsto y penado en el art. 380 del Código, y condenó al Alcalde á once años y un día de inhabilitación, multa de 150 pesetas y costas. Mas interpuesto recurso de casación contra dicha sentencia por el Ministerio fiscal y por la defensa del procesado, citando ambos como infringido el art. 380 mencionado, y el Ministerio fiscal además el 369 del propio Código, bajo cuya sanción estimó que debía comprenderse el hecho procesal, declaró el Tribunal Supremo haber lugar al recurso en el primer concepto, mas no en el segundo, declarando á la vez que aquél no constituye hecho punible alguno por no estar comprendido en los artículos del Código citados, ni en ningún otro, ni resultar definido como delito ó falta en la ley Electoral de 20 de Agosto de 1870, invocada por el Fiscal ante el Tribunal sentenciador: «Considerando que el recurso interpuesto por el Ministerio fiscal se funda en el núm. 3.º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, por conceptuar que la sentencia reclamada contiene error jurídico, por calificar los hechos procesales con arreglo al art. 380 del Código penal, y no conforme á las disposiciones del art. 369: Considerando que, en efecto, el Tribunal sentenciador ha dado aplicación indebida al art. 380 precitado, bajo el supuesto de haber sido desobedecida la autoridad de la Real orden de 8 de Abril de 1884, porque aquella prescripción penal no significa la desobediencia á las leyes, sino falta de cumplimiento á las sentencias, decisiones ó órdenes de los Tribunales y funcionarios que ejerzan autoridad superior y hayan dictado sus resoluciones en casos especiales con las formalidades debidas y dentro de los límites de su respectiva competencia: Considerando que para la genuina aplicación del art. 369 del mencionado Código, es indispensable la existencia y planteamiento de un negocio contencioso administrativo, ó meramente administrativo, en cuyo tracto ó terminación se consulte ó dicte á sabiendas providencia ó resolución injustas; que estas circunstancias no guardan relación alguna con el mandato verbal dirigido por el Alcalde D. Pedro Bafares al Notario D. Narciso Moner; y que, por consiguiente, si procede el recurso fiscal en cuanto al primero de sus fundamentos, no procede respecto al segundo, por ser inaplicable también la disposición penal invocada como infringida: Considerando que el recurso interpuesto por D. Pedro Bafares es procedente en el concepto de no constituir delito el hecho que se le imputa, porque no está comprendido en los artículos del Código precedentemente citados ni en otro alguno, y no resulta definido como delito ó falta en la ley Electoral de 20 de Agosto de 1870, invocada por el Fiscal ante el Tribunal sentenciador: Considerando, por lo ex-

puesto, que el Tribunal á quo ha infringido por indebida aplicación el art. 380 del Código vigente, y ha incurrido en el error de calificación que respectivamente definen los números 1.º y 3.º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, etc.» (Sentencia de 18 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 5 de Agosto, pág. 45.)

**CUESTIÓN IV.** *El Alcalde de un pueblo que se opone y resiste á que por el de otro pueblo se proceda á la corta de leñas de un monte de su término jurisdiccional, que al segundo le fuera concedido por el Gobernador civil de la provincia, cuyo acuerdo, así como el nombramiento del Ayudante de montes que habla de autorizar la corta, no consta que se le comunicara, ¿será responsable, aun suponiéndosele conocedor de dicha resolución del Gobernador, del delito de desobediencia, previsto y penado en el art. 380 del Código?*—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Lerma, que lo condenó á once años y un día de inhabilitación, multa de 1.000 pesetas y costas. Mas interpuesto por el procesado recurso de casación contra dicha sentencia, al que conyuvó el Ministerio fiscal en el acto de la vista, por infracción del art. 380 del Código, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar* al expresado recurso: «Considerando que para que la negativa de los funcionarios judiciales ó administrativos á dar el debido cumplimiento á sentencias, decisiones ó órdenes de Autoridad superior constituya el delito de desobediencia, previsto en el art. 380 del Código penal, es condición esencial, exigida en el mismo artículo, que abiertamente se niegue la obediencia, que la decisión esté dictada dentro de los límites de su respectiva competencia y revestida de las formalidades legales: Considerando que, aunque la determinación del Gobernador de la provincia de Burgos concediendo al pueblo de Villafruela el aprovechamiento de parte de los productos forestales del monte Carrascal, sito en el término jurisdiccional del de Torresandino, al que pertenecía su dominio, no estuviera, como está, fuera de los límites de su competencia, que no le permite decidir cuestiones de propiedad, que sólo pueden resolverse judicialmente por sentencia firme dictada en juicio contradictorio, todavía no apareciendo en parte alguna de la recurrida que ese acuerdo se comunicara al Ayuntamiento de Torresandino, sino única y exclusivamente al de Villafruela, que fué el que se dirigió á aquél para que nombrase una comisión de su seno que en unión de la que él tenía designada pasara al indicado monte á hacer la división de las leñas que le habían sido concedidas, nada obligaba por lo mismo al de Torresandino á obedecer un acuerdo que no le había sido comunicado con las formalidades prescritas en el art. 146 de la ley Provincial, para que le constara la realidad de su existencia, ni á respetar la decisión de aquel Ayuntamiento, que en el orden jerárquico no era una Autoridad superior á él; en cuyo mismo caso se hallaba respecto al Ayudante de montes, nombrado después por el Gobernador delegado suyo á instancia del Ayuntamiento de Villafruela, porque, aun prescindiendo de que la delegación para hacer ejecutar su decisión debió recaer, según el art. 199 de la ley de Ayuntamientos, en el Juez



municipal ó sus suplentes, no habiéndole sido tampoco comunicado el nombramiento debidamente al Ayuntamiento de Torresandino, no estaba obligado á reconocer al Ayudante referido como Autoridad superior, sino únicamente por el cargo oficial que desempeñaba, que no le daba jurisdicción alguna sobre los Municipios: Considerando, además, que aunque el Gobernador hubiera dictado la decisión indicada dentro de los límites de su competencia, y la hubiera comunicado oportuna y legalmente, así como el nombramiento de delegado, al Ayuntamiento de Torresandino, todavía era necesario que éste se hubiera negado abiertamente á darle cumplimiento para que constituyera el delito de desobediencia, que en el caso de autos no llegó á existir en ningún sentido, por no haber concurrido ninguno de los requisitos que exige el artículo 380 del Código penal, que ha sido ciertamente infringido al ser indebidamente aplicado por la Sala sentenciadora, que ha incurrido con ello en el error de derecho que señala el núm. 1.º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, etc.» (Sentencia de 4 de Julio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 8 de Octubre, página 226.)

## CAPÍTULO VI

**Anticipación, prolongación y abandono de funciones públicas.**

### Art. 385.

CONTINUACIÓN POR EL FUNCIONARIO PÚBLICO EN EL EJERCICIO DE EMPLEO, CARGO Ó COMISIÓN, DESPUÉS QUE DEBIERE CESAR CONFORME Á LAS LEYES, REGLAMENTOS Ó DISPOSICIONES ESPECIALES DE SU RAMO RESPECTIVO.

**CUESTION I.** *El delito de prolongación de funciones en que incurrén los Concejales interinos que no reintegran á los propietarios en sus cargos dentro del plazo marcado en el art. 190 de la ley Municipal, dejará de existir por razón de procesamiento que no sea el que se manda formar en virtud de lo que resulta del expediente gubernativo que determinó la suspensión?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que, según dispone el art. 190 de la ley Municipal vigente, la suspensión gubernativa de los Regidores ha de limitarse al plazo de cincuenta días, y cuando éste ha transcurrido y no se ha mandado proceder á la formación de causa, de hecho y de derecho recobran los Concejales suspensos el ejercicio de sus funciones, siendo culpables de usurpación de atribuciones, que para el efecto de la penalidad ha de entenderse el de prolongación de funciones, que castiga el art. 385 del Código penal, según lo tiene declarado esta Sala en repetidas sentencias, los Concejales interinos que ocho días después de espirado el plazo de los cincuenta días y de requeridos por los Concejales propietarios para que cesen en el cargo continúan ejerciendo funciones municipales, de que ya es-

tán despojados por la Ley: Considerando que la clara redacción del citado art. 190 y el sentido jurídico que lo informa no tiene otro alcance que garantizar y poner á cubierto de toda demasia gubernativa el derecho de los Concejales que debieron el cargo á la elección popular, y todo procedimiento y toda interpretación que tiendan á ampliar el plazo de la suspensión más allá del término fijado por la Ley y por otros motivos que no sean *el procesamiento de los Concejales propietarios por virtud de lo que resulte del expediente gubernativo que determinó la suspensión*, han de rechazarse como contrarios al espíritu y letra de la Ley, y más aún en el presente caso, que revela sin género alguno de duda que el propósito de los Concejales interinos, al declarar de nuevo suspensos á los propietarios por virtud del expediente de apremio que contra ellos idearon y siguieron, no obstante se apresuraron á consignar la cantidad reclamada en el mismo día en que se expedía el apremio, no fué otro que el de prolongar indebidamente el plazo de la suspensión: Considerando que la declaración de incapacidad que hizo el Gobernador civil de la provincia de los Concejales deudores que se consigna en el resultando primero de la sentencia recurrida en nada afecta á la responsabilidad en que incurrieron los Concejales interinos, etc.» (Sentencia de 18 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 5 de Enero de 1888, páginas 17 y 18.)

**CUESTION II.** *Suspendida por Real orden una Diputación provincial; nombrados los Diputados interinos; confirmada dicha suspensión por Real decreto, previa consulta del Consejo de Estado; mandado pasar el oportuno tanto de culpa á los Tribunales; declarado por éstos no haber lugar por entonces á proceder criminalmente contra la Diputación suspensa, acordando poner esta resolución en conocimiento del Gobernador civil de la provincia á los efectos oportunos, y requeridos los Diputados interinos, con notificación del auto antedicho, para que cesen en el desempeño de sus cargos; continúan en ellos hasta algunos meses después, en que cesan á virtud de Real orden del Ministerio de la Gobernación, resolviendo en este sentido la consulta del Gobernador de la provincia: ¿serán responsables esos Diputados interinos del delito de prolongación de funciones, comprendido en el art. 385 del Código?*

—La Sala de lo criminal de la Audiencia de Valencia, considerando que las leyes de carácter penal son de interpretación estricta; que la regla 3.ª del art. 138 de la ley Provincial, de 29 de Agosto de 1882, no define los derechos de los Diputados suspensos cuando se ha mandado proceder á la formación de causa ó se ha dictado auto declarándolos procesados, ni establece los trámites que han de preceder á la reposición en tales casos, declaró que los hechos objeto del proceso no constituían delito y absolvió á los Diputados interinos. Mas interpuesto por los propietarios recurso de casación contra dicha sentencia, que coadyuvó in voce el Ministerio fiscal en el acto de la vista, por infracción de los artículos 138, regla 3.ª, y 139, párrafo segundo de la ley Provincial, de 29 de Agosto de 1882, y el 385 del Código, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar á él*: «Considerando que según el genuino y



recto espíritu del precepto consignado en la regla 3.<sup>a</sup> del art. 138 de la ley Provincial, tan luego desaparezca la razón ó motivo en que se funde la suspensión de los Diputados provinciales, éstos vuelven de hecho y de derecho al ejercicio de sus funciones; puesto que de no ser ésta su inteligencia, la suspensión gubernativa llevaría consigo indefectiblemente la separación absoluta y definitiva cuando dentro de los sesenta días se mandara proceder á la formación de causa, y quedaría ineficaz el derecho que la expresada disposición concede á los Diputados suspensos de volver al desempeño de sus cargos cuando la Audiencia les absolviera ó declarara en cualquier tiempo no haber lugar á proceder criminalmente contra ellos; y seguramente esta doctrina jurídica sirvió de fundamento á la Real orden del Ministerio de la Gobernación, dictada á consulta del Gobernador civil de Castellón de la Plana, mandando en el caso de autos que los Diputados interinos cesaran en sus funciones: Considerando que habiendo declarado la Sala de lo criminal de la Audiencia de Valencia, en auto de 6 de Diciembre de 1884, no haber lugar á proceder contra los Diputados propietarios suspensos, y apareciendo que requeridos los interinos en forma legal á instancia de aquéllos en 30 del expresado mes, para que por virtud de la indicada resolución judicial cesaran en sus cargos, continuaron, sin embargo, en ellos hasta el 5 de Marzo de 1885, que cesaron en sus funciones por consecuencia de la Real orden antes citada, es evidente que los tres procesados D. Vicente Bueso, D. Antonio Oliver y D. Angel Graugel se encuentran comprendidos en el párrafo segundo de la regla 3.<sup>a</sup> del mencionado art. 138 de la ley Provincial, que guarda perfecta relación con el art. 385 del Código penal para los efectos de la responsabilidad criminal que ambas disposiciones prescriben, según tiene declarado con repetición este Supremo Tribunal: Considerando que la citada regla 3.<sup>a</sup> del art. 138 es terminante en su redacción y concepto, sin que pueda dar lugar á duda alguna su inmediato cumplimiento, y, por tanto, no cabe estimar como motivo de exculpación para los que debiendo dejar sus puestos continuaron en funciones de Diputados provinciales á pretexto de que el Ministro de la Gobernación resolviera previamente sobre el auto de 6 de Diciembre de 1884, dictado por la Sala de lo criminal de la Audiencia de Valencia, etc.» (Sentencia de 30 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 11 de Enero de 1888, páginas 67 y 68.)

**CUESTION III.** *¿Bastará á los efectos del art. 190 de la Ley Municipal que el requerimiento de los Concejales propietarios suspensos á los interinos se haga por simple manifestación verbal á presencia de dos ó más testigos?—¿Incurrirán los Concejales interinos en la responsabilidad que determina el art. 385 del Código penal si, después de requeridos en la forma antedicha, continúan desempeñando sus cargos, aun cuando hubiesen declarado á los propietarios incapacitados por ser deudores á los fondos municipales como segundos contribuyentes, y aun cuando por tal razón les hubiese ordenado el Gobernador de la provincia que siguieran en el ejercicio de sus funciones?—Sobre ambos extremos ha resuelto*

el Tribunal Supremo la afirmativa, al *casar* el fallo absolutorio dictado por la Audiencia de lo criminal de Calatayud: «Considerando que, conforme al art. 190 de la ley de 2 de Octubre de 1877, la suspensión gubernativa de los Regidores no excederá de cincuenta días, después de los que, si no se hubiere mandado proceder á la formación de causa contra ellos, volverán de hecho y de derecho al ejercicio de sus funciones; y los que les hubieren reemplazado serán considerados como culpables de usurpación de atribuciones si ocho días después de espirado aquel plazo y de requeridos para cesar por los Concejales propietarios continuaran desempeñando funciones municipales: Considerando que el funcionario público que continuare ejerciendo su cargo después que debiere cesar conforme á las leyes, comete el delito de prolongación de funciones, que define y pena el art. 385 del Código: Considerando que en la responsabilidad señalada en este artículo han incurrido los procesados D. Vicente Terraz Leda, D. Manuel Solsona Cavanillas y D. Tomás Pascual Moreno, y también, sin que hoy se prejuzgue, los demás Concejales interinos del Ayuntamiento de Pedrola; porque la Ley, al no determinar la forma en que habían de ser requeridos para que cesaran en sus funciones, ya que de hecho y de derecho no les competían desde que había pasado el término de cincuenta días sin mandar procesar criminalmente á los suspensos, con sólo la manifestación que éstos hicieron ante aquéllos, y por falta de Notario, á presencia de cuatro testigos, de que querían ser reintegrados en sus cargos, se cumplió el requisito de dicha ley; y como no sólo ocho días, sino por tiempo indefinido, continuaron en sus puestos los interinos, por modo evidente resulta que prolongaron sus funciones, usurpándolas á los propietarios, sin que les sirva de disculpa la declaración parcial é interesada, y sin justificación, de que éstos eran deudores á fondos municipales como segundos contribuyentes, ni tampoco el que el Gobernador de la provincia les había ordenado que no dejaran los cargos, porque éste, según se ve, partía del supuesto de que fuera una verdad el que los suspensos se hallaban incapacitados por ser deudores á fondos municipales, contra quienes ejecutoriamente se hubiera expedido apremio, y porque en todo caso, ante la prescripción clara y terminante del citado art. 190 de la ley Municipal vigente, no cabe alegar la obediencia debida, que no la hay cuando el que manda fuera de sus atribuciones y el que cumple el mandato faltan á preceptos tan conocidos: Considerando que la Audiencia de Calatayud, en la sentencia absolutoria que ha dictado, se ha separado de las razones legales expuestas y ha infringido el art. 385 del Código, y el 8.º, circunstancia 12, que se citan en el recurso interpuesto por la representación de D. Mariano Algora, incurriendo en el error de derecho que señala el núm. 2.º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, que le sirve de apoyo, etc.» (Sentencia de 28 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 12 de Mayo, páginas 238 y 239.)



## Art. 386.

EL FUNCIONARIO PÚBLICO CULPABLE DE LOS DELITOS DE ANTICIPACIÓN Ó PROLONGACIÓN DE FUNCIONES DEBE SER CONDENADO Á LA RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS Ó EMOLUMENTOS PERCIBIDOS POR RAZÓN DE SU CARGO Ó COMISIÓN ANTES DE DESEMPEÑARLO Ó DESPUÉS DE HABER DEBIDO CESAR EN ÉL, Y ADEMÁS Á LA MULTA DEL 10 AL 50 POR 100 DE SU IMPORTE.

**CUESTION** El art. 386 del Código, que condena al funcionario á restituir con la multa del 10 al 50 por 100 de su importe los derechos ó emolumentos que hubiere percibido por razón de su cargo después de haber debido cesar en él, ¿será aplicable á los Diputados interinos de una Diputación provincial que hubieren continuado desempeñando sus cargos después que debieron cesar en ellos, con sujeción á la regla 3.ª del art. 138 de la ley Provincial, de 29 de Agosto de 1882, por lo que hace relación á las dietas que hubieran percibido por su asistencia á las sesiones durante dicho tiempo, aun cuando hicieran de ellas donativo á favor de un Establecimiento de beneficencia de la provincia?—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que habiendo los tres procesados percibido en concepto de dietas por asistencia á sesiones como Diputados provinciales interinos diferentes cantidades, de las que el D. Vicente ingresó parte en la Depositaria de la Diputación como donativo para las obras del Hospital de la provincia de Castellón, y el total de lo percibido para el mismo objeto el D. Antonio y el D. Angel, es visto que con arreglo á lo prescrito en el art. 386 del Código penal vienen obligados á restituir dichas cantidades devengadas y percibidas desde el día en que legalmente debieron cesar en sus funciones, con la multa que el indicado artículo establece; no cabiendo estimar como renuncia el donativo expresado, puesto que los procesados dispusieron libremente y de la manera que mejor les pareció de las sumas percibidas, etc.» (Sentencia de 30 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 11 de Enero de 1888, páginas 67 y 68.)

## CAPÍTULO VII

Usurpación de atribuciones y nombramientos ilegales.

## Art. 389 (párrafo segundo).

ARROGACIÓN, POR FUNCIONARIO DEL ORDEN ADMINISTRATIVO, DE ATRIBUCIONES JUDICIALES, Ó IMPEDIMENTO PUESTO POR EL MISMO Á LA EJECUCIÓN DE PROVIDENCIA Ó DECISIÓN DICTADA POR JUEZ COMPETENTE.

**CUESTION I.** El Alcalde que, á pesar del mandato del Juez municipal de que se pusiera en libertad á un detenido que lo es-

*taba á su disposición, prolonga su detención en el depósito municipal, donde se hallaba, por espacio de ocho días más, ¿será responsable, además del delito de detención ilegal, previsto y penado en el artículo 210 del Código, del de usurpación de atribuciones, comprendido en el párrafo segundo del 389?*—La Audiencia de lo criminal de Colmenar Viejo estimó lo primero; y aun cuando el Tribunal Supremo declaró *no haber lugar* al recurso interpuesto contra dicha sentencia por el acusado, afirmando la existencia del delito de detención ilegal que aquél negara, claramente dió á entender que existía además el de *usurpación*, antes dicho, por más que no hubiera sido éste materia del juicio: lo cual, como se comprende, exigía la imposición al culpable de la pena del delito más grave en su grado máximo, con arreglo al art. 90, por ser ambos delitos producidos por un solo hecho: «Considerando que, si bien la primera detención de Aniceto Alvarez se realizó por la Guardia civil á disposición del Juez municipal de Torrelodones, tal hecho perdió, respecto de aquél, su eficacia y virtud desde que este Juez acordó la libertad, haciendo saber su acuerdo por medio de su Secretario, primero, y después por sí mismo, al encargado de la custodia: Considerando que la continuación del detenido en el depósito municipal fué debida exclusivamente al mandato del Alcalde procesado al Alcaide de dicho depósito, su subordinado, de que no diera soltura á Alvarez sin orden suya; y que, aparte del valor jurídico que pudiera corresponderle á esa orden, dentro de los términos del art. 389 del Código penal, por contrariar abiertamente resoluciones judiciales extrañas á la competencia de quien la dictó, bajo cuyo aspecto no ha sido examinado en el juicio el hecho procesal, aunque sería ahora suficiente para la desestimación de un recurso que, en lo esencial, impugna el carácter penable de aquél, ese mandato mismo, por cuya virtud el Alcaide desatendió el insistente del Juez municipal, produjo la ilegítima permanencia de Alvarez en el depósito, privado consiguientemente de la libertad á que le daba derecho el del Juez, que el recurrente, en todo caso, estaba en el deber de acatar y de facilitar y no impedir su cumplimiento: Considerando que al proceder el Alcalde de Torrelodones de la manera que expresa el resultando segundo de la sentencia cometió delito por las razones expuestas, y la Audiencia, que en tal concepto le condena, no ha cometido las infracciones ni los errores de derecho alegados, cualesquiera que fueran otras omisiones en que pudiera haber caído el Juez municipal, y los derechos que la ley de Prisiones confiera á la Autoridad administrativa, ninguno de los cuales llega á otorgarle facultades semejantes á las que se atribuyó el recurrente, etc.» (Sentencia de 26 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 30 de Agosto, pág. 117.)

**CUESTION II.** *El Alcalde que por desobediencia á sus mandatos impone á un particular una multa, mas que sea en la cantidad ínfima de 15 pesetas, ¿será responsable del delito de usurpación de atribuciones judiciales, previsto y penado en el párrafo segundo del art. 389 del Código?*—Así lo estimó la Sala de Justicia de la Audiencia de Pamplona; y aun cuando el procesado al re-



currir en casación alegó como fundamento de su inculpabilidad el art. 1.º del Código y el 199 de la ley Municipal vigente, declaró el Tribunal Supremo *no haber* lugar al expresado recurso, por las consideraciones legales siguientes: «Considerando, en orden al primero de los dos motivos de casación alegados, que la Autoridad que obra fuera de las facultades que le atribuye su cargo y por ella incurre en responsabilidad, nunca puede alegar con provecho para eludir ésta la falta de intención, porque deber suyo es conocer toda la extensión de los derechos y obligaciones inherentes á las funciones que desempeña: Considerando que al exigir el Alcalde recurrente la multa que no tenía derecho á imponer cometió el delito de usurpación de atribuciones, porque dados los hechos que la sentencia estima probados, si en las contestaciones que con el Alcalde Petrirena y Arrechea tuvo Galzagorri, con motivo á la reclamación que éste le hiciera sobre el pago de cierta cantidad que se le debía por haber servido en el Ejército, se excedió Galzagorri hasta el punto de incurrir en responsabilidad criminal, á los Tribunales ordinarios y no al Alcalde tocaba imponer en el juicio correspondiente la corrección de la ley; siendo, por tanto, improcedente el recurso por el primero de los motivos alegados: Considerando que también está destituido de todo fundamento legal el segundo de los motivos expuestos por la defensa de Petrirena y Arrechea, porque ni de lejos ni de cerca tienen aplicación al hecho que se pena en la sentencia reclamada los artículos de las leyes Municipal y Provincial que se suponen infringidos; bastando sólo, para la más cumplida demostración de la improcedencia de tales citas, advertir que los artículos de la ley Municipal que se invocan son el 199, que habla de que el Alcalde es el representante del Gobierno, y en tal concepto es deber suyo desempeñar las atribuciones que las leyes le encomienden, el 73, que se ocupa de las atribuciones de los Ayuntamientos en lo que se refiere á conservación y arreglo de la vía pública, policía urbana y rural, instrucción primaria, policía de seguridad, administración de los bienes y derechos del pueblo ó instituciones de beneficencia, y el 77, que trata de las penas que por infracción de las Ordenanzas y reglamentos impongan los Ayuntamientos; siendo no menos arbitraria y fuera de lugar la cita que se hace del art. 22 de la ley Provincial, porque nadie puede sostener que el deber que este artículo impone á los Gobernadores sea extensivo á los Alcaldes, teniendo, como tienen, ambas Autoridades determinado en las leyes sus atribuciones y deberes respectivos: Considerando, por tanto, que la Audiencia de Pamplona no ha cometido las infracciones legales ni el error de derecho que se le atribuye, etc.» (Sentencia de 22 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 25 de Marzo de 1889, páginas 81 y 82.)

## CAPÍTULO IX

## Cohecho.

## Art. 398.

PENA DEL FUNCIONARIO PÚBLICO QUE RECIBE POR SÍ Ó POR PERSONA INTERMEDIA DÁDIVA Ó PRESENTE, Ó ACEPTA OFRECIMIENTO Ó PROMESA POR ABSTENERSE DE UN ACTO QUE DEBERIA PRACTICAR EN EL EJERCICIO DE LOS DEBERES DE SU CARGO.

**CUESTION I.** *Instruidas diligencias sumariales por un Juez municipal sobre cierto hecho en virtud de denuncia del Alcalde, el Secretario del Juzgado municipal y el del Ayuntamiento proponen á los que fueron objeto del proceso que rompan dichas diligencias si les abonan una cantidad determinada de dinero: ¿cabe alegar que en esta tentativa de cohecho (véase Cuestión II del art. 4.º, página 21) el Secretario del Ayuntamiento no cometió el hecho en el ejercicio de su cargo, y que por tanto no debe ser considerado en este caso como funcionario público?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que aun cuando D. Pedro María Navarro no fuera Secretario del Juzgado municipal donde radica el expediente sobre que versaba el cohecho, lo era del Ayuntamiento cuyo Alcalde incoó dicho expediente, apareciendo evidente de la sentencia recurrida que en tal concepto y con dicho carácter obró de acuerdo con el Secretario del Juzgado municipal para pedir 50 duros, que luego redujeron á 30, por romper y hacer desaparecer las diligencias instruidas, por lo que ha sido bien calificado el hecho como cometido por funcionario público, etc.» (Sentencia de 23 del Abril de 1888, publicada en la Gaceta de 6 de Agosto, pág. 52.)

**CUESTION II.** *Aun cuando se ignore la clase y cuantía de la dádiva entregada ó ofrecida, ¿existirá el delito de cohecho siempre que ésta intervenga?*—No determinándose, como se ha dicho, la clase y cuantía de la dádiva, ¿cabe aplicar al sobornador y al sobornado la pena de multa, que conjuntamente con la de privación de libertad establecen los artículos del 396 al 400 y 402 del Código?—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa sobre el primer punto, y la negativa sobre el segundo, al casar, por este último concepto, cierta sentencia dictada por la Audiencia de lo criminal de Alicante: «Considerando que, según el art. 402, los que con dádivas, presentes, ofrecimientos ó promesas corrompieren á los funcionarios públicos, serán castigados con las mismas penas que los empleados sobornados, estableciendo el 398 la pena de arresto mayor en su grado medio al máximo y multa del tanto al triple del valor de la dádiva prometida ó entregada cuando ésta tenga por objeto que el funcionario se abstenga de un acto que debiera practicar en el ejercicio de los deberes de su cargo, de



lo cual se deduce que el elemento esencial del delito de cohecho lo constituye la dádiva ó oferta de ella, y por lo tanto, existe el delito siempre que aquélla intervenga, aunque no haya podido determinarse su clase y cuantía, por más que en este caso no puede imponerse la multa que, conjunta con la personal, establece la Ley, por la imposibilidad material que hay para fijar el tanto de la dádiva para regular la multa en la proporción debida: Considerando que siendo un hecho declarado probado en la sentencia que los recurrentes, por medio de dádiva, prometida ó entregada, lograron que el carabinero encargado de la custodia de los fardos aprehendidos se abstuviera de realizar un acto que debió practicar en el ejercicio de los deberes de su cargo, no cabe duda que han incurrido en la sanción del citado art. 398; pero que imponiéndose en la sentencia reclamada, además de la pena personal, la de multa por cantidad de 1.250 pesetas, es arbitraria ésta, porque no hallándose determinado el tanto de la dádiva, no se puede regular la cuantía de aquélla, en cuyo extremo ha incurrido la Audiencia sentenciadora en el error de derecho que señala el núm. 6.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal é infringido el 398 del Código penal, etc.» (Sentencia de 9 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 18 de Marzo de 1889, páginas 71 y 72.)

### Art. 400.

À LAS PERSONAS RESPONSABLES CRIMINALMENTE DE LOS DELITOS DE COHECHO COMPRENDIDOS EN LOS ARTÍCULOS DEL 396 AL 399, ADEMÁS DE LAS PENAS SEÑALADAS EN ESTOS, DEBE IMPONÉRSELES LA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL TEMPORAL.

**CUESTION.** *En la tentativa ó delito frustrado de cohecho, deberá rebajarse en dos grados ó en uno respectivamente, con arreglo á los arts. 87 y 88 del Código, la pena accesoria de inhabilitación especial temporal señalada en el 400 para los responsables criminalmente del expresado delito?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que la penalidad del art. 400 del Código es una penalidad especial que acompaña siempre á la que corresponde imponer á los funcionarios que cometen el delito de cohecho, cualesquiera que sean la categoría y graduación del mismo, según se deduce de su contexto, por haber estimado sin duda el legislador que los funcionarios que así obran deben quedar siempre inhabilitados especialmente, etc.» (Sentencia de 23 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 6 de Agosto, pág. 52.)

## CAPÍTULO X

## Malversación de caudales públicos.

## Art. 405.

SUSTRACCIÓN Ó CONSENTIMIENTO PARA ELLA POR FUNCIONARIO PÚBLICO DE CAUDALES Ó EFECTOS PUESTOS Á SU CARGO POR RAZÓN DE SUS FUNCIONES.

Véase la *Cuestión X* del art. 548, núm 5.º

## Art. 406.

ABANDONO Ó NEGLIGENCIA INEXCUSABLES DEL FUNCIONARIO PÚBLICO QUE DA OCASIÓN Á QUE SE EFECTÚE POR OTRA PERSONA LA SUSTRACCIÓN DE CAUDALES Ó EFECTOS PÚBLICOS DE QUE SE TRATA EN LOS NÚMEROS 2.º, 3.º Y 4.º DEL ARTÍCULO ANTERIOR.

**CUESTION.** *Á virtud de autos civiles se embargan bienes de la propiedad de una persona, siendo nombrado depositario un tercero que, aceptado el cargo, los deja en poder de su dueño, por no poderlos tener en su casa; mas fallecido éste, dispone de ellos su mujer, sin que por más gestiones que practique el depositario para recogerlos se los quieran entregar, por lo que pone el hecho en conocimiento del Juzgado: habrá aquí responsabilidad para el depositario, á tenor del art. 406, en relación con el 410, porque al aceptar el cargo y ofrecer cumplirlo fielmente abandonó los bienes embargados al propio interesado, dando lugar á su sustracción por tercera persona?*—Tal fué el concepto por el que interpuso el Ministerio fiscal recurso de casación contra la sentencia absolutoria de la Audiencia que conoció del hecho. Mas el Tribunal Supremo declaró no haber lugar al expresado recurso por los importantes fundamentos siguientes: «Considerando que el art. 406 del Código penal castiga al funcionario público que por abandono ó negligencia inexcusables diere ocasión á que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales ó efectos públicos, cuya disposición, según el 410, es extensiva á los depositarios de caudales embargados por Autoridad pública, aunque pertenezcan á particulares: Considerando que el acto del procesado, que pudo ocasionar la desaparición de la tartana y caballería embargadas á Maturana en autos civiles, en que fué nombrado depositario, no es otro que el de haber dejado las cosas en poder de su dueño;



pero como eso lo ejecutó, según declara la sentencia, por no poderlas tener en su casa; como después de la muerte del deudor practicó ineficaces gestiones para recogerlas de poder de la viuda de aquél, que de ellas dispuso, y dió conocimiento del hecho al Juezado; y como tampoco se expresa si fué designado depositario bajo la responsabilidad del acreedor, como pudo serlo, con arreglo al art. 1.454 de la ley de Enjuiciamiento civil, cualquiera que sea la de García Martínez en el orden civil, no aparece de los datos procesales que haya incurrido en la pena señalada en las disposiciones legales invocadas por el recurrente; primero, por no constar expresamente el carácter especial de su nombramiento de depositario, y consiguientemente las condiciones de su responsabilidad; segundo, porque no todo abandono y negligencia que dé ocasión á la sustracción por un tercero de bienes embargados determina la delincuencia que se afirma, sino el abandono ó la negligencia que son inexcusables; y tercero, porque, sin desconocer la virtualidad de los hechos consignados en la sentencia, no puede decirse que haya abandono ó negligencia en quien practica las gestiones posibles para evitar acto ajeno, y hasta acude á la Autoridad judicial con el propio fin; y porque, en último término, excusa racional sería para no tener á su inmediata disposición y alcance los efectos embargados la imposibilidad que declara la sentencia recurrida; que por todo ello no ha cometido las infracciones ni el error de derecho que se le atribuye, etc.» (Sentencia de 22 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 10 de Enero de 1888, pág. 59.)

### Art. 407.

APLICACIÓN POR EL FUNCIONARIO PÚBLICO Á USOS PROPIOS Ó AJENOS DE LOS CAUDALES Ó EFECTOS PUESTOS Á SU CARGO, CON Ó SIN DAÑO Ó ENTORPECIMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO.

**QUESTION I.** *La existencia por sí sola de un alcance contra el funcionario encargado de caudales públicos, será bastante á determinar la de un delito de malversación, si no resulta que haya aplicado á usos propios ó ajenos la cantidad desfalcada, ni que la haya sustraído ni permitido que otro lo hiciera?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa al casar cierta sentencia condenatoria de la Sala de lo criminal de la Audiencia, en la que ni de los hechos declarados probados, ni de la apreciación que de ellos se hacía en los considerandos, resultaba la concurrencia de dichas circunstancias, y si solo la existencia de un alcance contra el funcionario condenado, ignorándose la causa ó motivos del mismo: «Considerando que el art. 407, en relación con el 405 del Código penal, requiere, para que exista el delito de malversación de caudales públicos, que el funcionario, con daño ó entorpecimiento del servicio público, aplique á usos propios ó ajenos los caudales ó efectos puestos á su cargo, ó bien que los sustraiga ó permí-

ta que otros lo hagan; y de los hechos declarados probados en la sentencia recurrida ni de la apreciación que de ellos se hace en los considerandos resulta haber concurrido en el presente caso dichas circunstancias, y si sólo la existencia de un desfaleo, cuya causa ó motivo se ignora: Considerando que la existencia del desfaleo por sí sola, sin justificarse que procediera de que el recurrente, según ya se ha indicado, aplicase á usos propios ó ajenos, sustrajera ó consintiese que otros sustrajeran los caudales puestos á su cargo, si bien puede dar lugar á una acción ó responsabilidad civil, según los casos, no es constitutiva de delito: Considerando, por lo tanto, que la Sala sentenciadora ha incurrido en el error de derecho que señala el núm. 1.º del art. 849 de la Compilación reformada, y cometido las infracciones de los arts. 407, párrafo segundo, y el núm. 3.º y párrafo final del 405 del Código penal, que se aplican al penar al recurrente Manuel Bermúdez Reguena como autor de un delito de malversación de caudales públicos, y que éste cita entre otros artículos del Código en el recurso, etc.» (Sentencia de 4 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 5 de Junio, págs. 279 y 280.)

**QUESTION II.** *¿Será bastante á determinar la responsabilidad del procesado como autor del delito de malversación, comprendido en el art. 407 del Código, el hecho de haber recibido en custodia determinadas cantidades, no haberlas entregado ni tenerlas, ni explicado racionalmente el motivo de la falta de las mismas?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que es condición esencial de los delitos que prevén los artículos 405 y 407 del Código penal que los caudales á que se refieren se hallaran á cargo del funcionario que los sustraiga, ó consienta la sustracción, ó que los aplique á usos propios ó ajenos, por cuya razón el nuevo alcance resultante de una liquidación de cuentas, cualquiera que sea quien le fije, y los efectos civiles de esta determinación, no implica en todo caso la existencia de alguno de aquellos delitos si no se demuestra á la par la sustracción ó distracción de cantidades: Considerando que si bien por esto el alcance declarado contra el recurrente por la Diputación provincial de Navarra, fuera ó no revocable en la vía administrativa en que se estableció, tiene en esa esfera y en lo tocante á la responsabilidad civil eficacia indiscutible para constituir á aquél deudor de la cantidad á que asciende el saldo de la liquidación, la responsabilidad del orden penal de que ahora se trata, por ser distinta de aquélla en su origen y transcendencia, no deriva, en verdad, necesariamente de aquella declaración; pero con ella como sin ella puede existir, según sean las causas determinantes del mismo alcance: Considerando que establecidos en la sentencia reclamada los hechos de que el Matilla recaudó determinadas cantidades de dinero durante el período de tiempo en que fué Depositario; que pagó con este carácter sumas que resultan inferiores á las recibidas y que carecía de bienes propios con que satisfacer la diferencia, aparece, sin que otros hechos probados lo desvirtúen, que el alcance le determinó el haber quedado en su poder cantidad que no ha entregado, lo cual principal y decisivamente resulta



indudable del hecho consignado por el Tribunal á que, de que aplicó el Depositario la cantidad que se expresa á usos propios ó ajenos, puesto que no la ha satisfecho ni consta que la conserve; cuyo hecho, deducido con evidente competencia de elementos probatorios indiscutibles en casación, no pierde su carácter de tal por expresarse en uno de los considerandos de la sentencia objeto del recurso, y entraña lógicamente la posible y real disposición por Matilla de esos mismos caudales, supuesto del fallo reclamado, contrario á las exculpaciones del procesado, que, además de no estimarse probadas, se fundan en el aserto de no haber llegado á sus manos documentos de descargo, que la propia sentencia declara tenidos en cuenta al practicarse la liquidación; Considerando que de estos hechos surge la responsabilidad del recurrente, como autor del delito previsto en el art. 407 del Código penal, porque el haber recibido en custodia determinadas cantidades y no haberlas entregado ni tenerlas ni explicado racionalmente el motivo de su falta, son hechos que evidencian por sí, además de declararlo la sentencia, lo cual fuera bastante, que las aplicó á usos propios ó ajenos, ya que no se alegó sustracción ó causa semejante de extravío de esos caudales confiados á la fidelidad del Depositario, que no han sido reintegrados, por lo cual, ya se causara daño ó entorpecimiento al servicio público, ó no se produjeran estos perjuicios, son aplicables al caso las penas señaladas en el art. 406 del mismo Código, puesto que, según repetidas decisiones de esta Sala, el párrafo segundo del 407 se refiere de igual modo, en el caso que prevé, al párrafo que le antecede que al que le sigue, etc.» (Sentencia de 21 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 10 de Marzo de 1889, páginas 48 y 49.)

**CUESTION III.** *Para que proceda, en su caso, la aplicación y penalidad del párrafo segundo del art. 407 del Código, ¿será condición precisa que la malversación se haya verificado con daño ó entorpecimiento del servicio público?*—El Tribunal Supremo ha resuelto una vez más la negativa: «Considerando, en orden al primer motivo de casación alegado, que la penalidad establecida en el párrafo segundo del art. 407 del Código, en relación con el 406, es aplicable, según repetidas decisiones de este Supremo Tribunal, lo mismo para el delito comprendido en el párrafo primero del citado art. 407, esto es, cuando la malversación cause daño ó entorpecimiento del servicio público, que para el expresado en el tercero, ó sea cuando, sin producir estos efectos, no se haya reintegrado la cantidad malversada: Considerando que, según los hechos declarados probados en el fallo reclamado, el recurrente D. Juan Nepomuceno Pérez no ha reintegrado á la Hacienda las 46.890 pesetas 69 céntimos á que asciende la malversación, por cuyo motivo es indudable que no se halla comprendido en el párrafo tercero del repetido art. 407, sino en el segundo, háyase ó no producido daño ó entorpecimiento del servicio, por ser suficiente para determinar esta penalidad la falta de reintegro, sin necesidad de que contribuya también el elemento del daño ó entorpecimiento del servicio, y por lo tanto, la Audien-

cia sentenciadora no ha incurrido al calificar el hecho justificable, como supone el recurrente, etc.» (Sentencia de 4 de Diciembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 28 de Marzo de 1889, página 94.)

## CAPÍTULO XI

### Fraudes y exacciones ilegales.

#### Art. 412.

PENA DEL FUNCIONARIO PÚBLICO QUE DIRECTA Ó INDIRECTAMENTE SE INTERESA EN CUALQUIERA CLASE DE CONTRATO Ó OPERACIÓN EN QUE DEBA INTERVENIR POR RAZÓN DE SU CARGO.

**CUESTION.** *Para que exista el delito de fraude, comprendido en el núm. 1.º del art. 198 de la ley Municipal vigente, de 2 de Octubre de 1877, bastará que los Alcaldes, Concejales y asociados paguen en el año que lo son una cuota por repartimiento ó impuesto menor que la del año anterior, sin haber sufrido en su riqueza disminución bastante á justificar aquella baja?—Por el hecho de haber intervenido dichos funcionarios en el reparto de la contribución en este caso, deberá comprendérseles en la sanción del art. 412 del Código, referente al funcionario público que directa ó indirectamente se interesa en cualquiera clase de contrato ó operación en que deba intervenir por razón de su cargo?—Al casar el Tribunal Supremo una sentencia de la Audiencia de Altea, por ambos conceptos condenatoria, ha declarado respecto del primer punto que es también elemento esencial del delito de fraude que prevé el número 1.º del art. 198 de la ley Municipal que sea igual ó mayor la cantidad repartible, y en cuanto al segundo extremo, que es de todo punto improcedente, en el caso de que se trata, la aplicación del art. 412 del Código: «Considerando que conforme á lo dispuesto en el art. 198 de la ley Municipal, de 2 de Octubre de 1877, son culpables de fraude ó exacciones ilegales los Alcaldes, Concejales y asociados cuando en el año que lo son paguen una cuota menor por repartimiento, impuesto ó licencia, comparadas con las del año anterior, siendo igual ó mayor la cantidad repartible, á menos de probar haber sufrido disminución bastante en su riqueza, cuyo acto castiga el referido artículo con imposición de doble cuota, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código penal; y por lo tanto es indispensable, para que el hecho se halle comprendido en la sanción de aquella disposición legal, no sólo que se pague una cuota menor, comparada con la del año anterior, sino también que la cantidad repartida en el año que se paga la menor cuota sea igual ó mayor que la del anterior: Considerando que si bien aparece que al recurrente, siendo Alcalde en el año económico de 1885 al 86, se le impuso en el repartimiento una cuota inferior en cantidad de 18 pesetas 80 céntimos comparada con la satisfecha en el año anterior, sin haber disminuido su ri-*



queza en cantidad bastante á justificar esta baja, no constan en los hechos declarados probados en la sentencia que la cantidad repartida en dicho año económico de 1885 al 86 fuese igual ó mayor que la que sirvió de base para el repartimiento del anterior, factor indispensable y sin el cual falta uno de los dos elementos esenciales para que el hecho pueda estar comprendido en la sanción del citado art. 128: Considerando que tampoco el hecho procesal constituye el delito que castiga el art. 412 del Código penal, como con manifiesto error aprecia la Sala sentenciadora, porque la prohibición que dicho precepto legal impone á los funcionarios públicos de interesarse en contratos ó operaciones en que deban intervenir por razón de su cargo, no comprende ni podía comprender aquellos actos que no son más que el resultado necesario ó inmediato del ejercicio de las funciones propias al cargo oficial que desempeñan, y la intervención del recurrente en la aprobación del reparto fué en cumplimiento del deber que la Ley le impone, como Alcalde que era, sin que haya hecho ni indicación alguna por la que se pueda suponer que lo hiciera con objeto de obtener rebaja en su cuota: Considerando, por lo tanto, que no siendo constitutivos de delito alguno los hechos objeto del proceso, al estimar lo contrario la Sala sentenciadora, ha incurrido en error de derecho é infringido las disposiciones legales que se citan como fundamento del recurso, etc.» (Sentencia de 12 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 4 de Enero de 1888, página 9.)

## CAPITULO XIII

## Disposición general.

## Art. 416.

## QUIÉNES SE REPUTAN FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

**CUESTION.** *El Médico de cabecera que libra certificación acerca del fallecimiento de uno de sus enfermos, ¿incurre en falsedad respecto de uno de los extremos de la misma, será responsable de este delito como simple particular, ó como funcionario público?*—El Tribunal Supremo ha declarado que lo es con este último carácter: «Considerando, en cuanto al recurso interpuesto por D. Santiago de la Torre Boades, que el hecho por éste realizado de haber librado la certificación de defunción de D.<sup>a</sup> Josefa Rodríguez Bruzón, que tenía que servir de fundamento al Juzgado municipal respectivo para autorizar el sepelio del cadáver, consignando á sabiendas y falsamente en ella que la expresada señora había fallecido á las cinco de la tarde del día 17 de Junio de 1885, siendo así que el fallecimiento no ocurrió hasta la una de la mañana del siguiente día, constituye un delito de falsedad cometido en documento oficial, que es el carácter que tiene dicha certificación, atendida la transcendencia y efectos que la Ley

atribuye á esta clase de certificaciones, y por *funcionario público*, cuyo carácter revisten todos cuantos por disposición inmediata de la Ley participan del ejercicio de funciones públicas, cuales son las que los facultativos, autorizados al efecto, desempeñan al extender para los efectos indicados y demás del Registro civil certificaciones de esta clase, etc.» (Sentencia de 7 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 8 de Mayo, pág. 206.) Véase, además, el art. 349.

Véase, además, la *Cuestión II* del art. 264 (párrafo último), página 139.

## TÍTULO VIII

### DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

#### CAPÍTULO I

##### Parricidio.

##### Art. 417.

PENA DEL QUE MATA Á SU PADRE, MADRE Ó HIJO, SEAN LEGÍTIMOS Ó ILEGÍTIMOS, Ó Á CUALQUIERA OTRO DE SUS ASCENDIENTES Ó DESCENDIENTES, Ó Á SU CÓNYUGE.

**CUESTION.** *La mujer que teniendo relaciones con un hombre casado, y de acuerdo con éste para envenenar á su esposa, compra la sustancia tóxica con que intenta su consorte en el crimen producir dicho envenenamiento, ¿será responsable, como éste, del delito de tentativa de parricidio, ó lo será tan sólo del de asesinato por envenenamiento?*—El Tribunal Supremo, reiterando la doctrina establecida en la Sentencia de 11 de Marzo de 1887 (Véase Suplemento 3.º, *Cuestión I*, pág. 303), ha declarado que la segunda y más benigna calificación es la que corresponde: «Considerando que la circunstancia esencial del delito de parricidio consiste en la relación de un parentesco determinado existente entre el ofensor y la persona ofendida, cuya circunstancia, por ser meramente personal y subjetiva, no trasciende á las terceras personas en quienes no concurre, según expresa y terminantemente se consigna en el art. 80 del Código, y según tiene ya declarado esta Sala en Sentencias anteriores: Considerando que la Audiencia de Castellón ha incurrido en error de derecho al calificar como tentativa de parricidio los hechos ejecutados por Eduarda Nebot, no revistiendo, como no revisten, respecto de ella, otro carácter que el de tentativa de asesinato, etc.» (Sentencia de 7 de Febrero de 1888, publicada en las *Gacetas* de 8 y 9 de Mayo, páginas 208 y 209.)



## CAPITULO II

## Asesinato.

## Art. 418.

ES REO DE ASESINATO EL QUE, SIN ESTAR COMPRENDIDO EN EL ARTICULO 417, MATA A OTRO CONCURRIENDO ALGUNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS SIGUIENTES.

## I Alevosía

En cuanto á esta primera circunstancia constitutiva, *esencial* del delito de asesinato, consúltense las Cuestiones todas del artículo 10, núm. 2.º de este *Suplemento*, páginas 62 á 66.

## II Precio ó promesa remuneratoria.

Véase la *Cuestión* única del art. 10 núm. 3.º de este *Suplemento*, pág. 66.

## III Inundación, incendio ó veneno.

**CUESTION.** *El que al reclamarle una joven, con la que acababa de tener carnal ayuntamiento, el pago de la cantidad al efecto conveada, la impone silencio amenazándola de pegarla fuego y al propio tiempo enciende una cerilla que aplica á una lata de petróleo que había en la habitación, arrojando el líquido inflamado á la expresada joven, que al verse envuelta en llamas sale afuera pidiendo socorro, logrando un sujeto cubrirla con sus ropas y sofocar el fuego, no sin que éste la produjera gravísimas lesiones de las que falleció el mismo día, ¿será responsable, por este hecho, del delito de homicidio ó del de asesinato?*—La Audiencia de lo criminal de Huelva estimó lo primero y condenó al procesado á la pena del art. 419. Mas, interpuesto recurso por el Ministerio fiscal, que pretendió debía calificarse el hecho de asesinato, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar á él*: «Considerando que es reo de asesinato, según el art. 418 del Código penal, el que por medio de incendio mata á persona que no le está ligada por ninguno de los vínculos familiares señalados en el 417; Considerando que se entiende empleado el incendio en este concepto jurídico cuando se mata ó intenta matar por medio de fuego aplicado directa ó inmediatamente sobre la persona objeto de la acción criminal, siempre que lo sea con riesgo de propagación á cosas distintas, en cualquiera de las condiciones previstas en el cap. 7.º, título 13 del libro 2.º del Código penal; cuyo medio de ejecución de aquel delito, principal en la intención del culpable, estima la Ley con el grave carácter que atribuyó también á la inundación y al

empleo de veneno, no sólo por los peligros que implica, sino igualmente por la notoria malicia, semejante á la alevosía, que revela la acción del que para su éxito no se detiene ante el respeto de otros derechos que pone en inminente riesgo ó quebranta y lesiona á impulso de decidida resolución. Considerando que todas estas condiciones aparecen manifestas en el acto ejecutado por el procesado, puesto que voluntariamente empleó el petróleo inflamado para lesionar á Gertrudis López, poniendo el fuego, que por su natural poder se propagó al local en que se cometió el delito, al servicio de su propósito punible, etc.» (Sentencia de 29 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 6 de Enero de 1888, páginas 31 y 32.)

#### IV Premeditación conocida.

**CUESTION.** *Una serie no interrumpida de actos múltiples demostrativos del firme y decidido propósito del culpable de dar muerte á una tercera persona, será bastante á determinar la existencia de la circunstancia de premeditación conocida, ora como genérica, ora como cualificativa del asesinato, si por otra parte consta que aquel propósito surgió en la mente del acusado la misma noche en que cometió el delito.*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que la Audiencia sentenciadora no ha cometido las infracciones legales invocadas como primer motivo del recurso, por no haber apreciado concurrente en el delito que castiga, como circunstancia agravante, la premeditación conocida, que se alega en contra del procesado, porque, como acertadamente ha entendido aquel Tribunal, los hechos procesales no revelan que á la ejecución del acto criminal precediera, por espacio suficiente á dar lugar á un juicio sereno, la meditación y fría reflexión que constituye la esencia de aquella circunstancia, ya que la idea y el propósito que declara en Román de matar á Fernández surgió en el ánimo del culpable la misma noche del delito, y que al logro de ese propósito dirigió inmediata é incesantemente sus actos, encaminados á la busca de su adversario y á la realización del designio criminal, etc.» (Sentencia de 16 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 19 de Marzo de 1889, pág. 74.)

Consúltense, además, las *Cuestiones* todas del art. 10, núm. 7.<sup>o</sup> de este *Suplemento*, páginas 69 y 70.



## CAPÍTULO III

## Homicidio.

## Art. 419.

ES REO DE HOMICIDIO EL QUE SIN ESTAR COMPRENDIDO EN EL ARTÍCULO 417 MATARE Á OTRO, NO CONCURRIENDO ALGUNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS NUMERADAS EN EL ARTÍCULO ANTERIOR.

**CUESTION I.** *Aun cuando las lesiones causadas á un sujeto hubieran curado en un hombre sano á los treinta días, produciéndose su muerte á consecuencia de un padecimiento crónico, pero obrando dichas lesiones como causa determinante, ¿será responsable el autor del hecho del delito de homicidio, ó simplemente del de lesiones?*—El Tribunal Supremo ha declarado que la primera calificación más grave es la que le corresponde: «Considerando que afirmándose en el primer resultando de la sentencia recurrida, por ser hecho probado, que Juan Ibáñez falleció á consecuencia de una bronquitis, obrando las lesiones que le fueron inferidas por el procesado, especialmente la fractura de la costilla, como causa determinante, aseveración tan expresa no puede menos de apreciarse como fundamento legal de la calificación del delito de homicidio, sin que deba estimarse de eficacia alguna á los efectos jurídicos, contra lo que se sostiene en el recurso, el que otras causas indeterminadas pudieran haber ocasionado la muerte del referido Ibáñez por la circunstancia de que las lesiones en un hombre sano habrían curado dentro de treinta días, puesto que el procesado es responsable de todas las consecuencias de su acción cuando la complicación de éstas se origina en las condiciones patológicas del ofendido, y consiguientemente el Tribunal á quo no ha incurrido en el error de derecho ni cometido las infracciones alegadas en el recurso, etc.» (Sentencia de 29 de Octubre de 1887, publicada en la Gaceta de 24 de Noviembre, pág. 360.)

**CUESTION II.** *Encuéntranse casualmente dos sujetos, y suscitada entre ambos reyerta ó disputa por anteriores resentimientos, dispara el uno contra el otro una pistola, penetrando el proyectil por el último espacio intercostal del lado derecho y saliendo por la parte inferior de la región epigástrica, cuya lesión tardó en curarse menos de treinta días: ¿puede calificarse semejante hecho de homicidio frustrado?*—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Orense, que condenó al procesado á ocho años y un día de prisión mayor. Mas interpuesto en beneficio del reo, después de haberlo estimado improcedente tres Letrados designados para su defensa, recurso de casación por el Ministerio fiscal, en el sentido de que el hecho procesal constituya el delito, menos grave que el penado, de simple disparo de arma de fuego y lesiones, declaró el Tribunal Supremo haber lugar á él: «Considerando que en el

delito de homicidio frustrado la primera y más esencial condición es que de los hechos probados resulta de una manera clara y evidente que la intención del procesado fué la de matar á la persona contra quien atentó, y que si no llegó á consumarse el delito después de haber hecho el agente cuanto estaba de su parte, fué por causas ajenas á su voluntad: Considerando que de los hechos probados que condensa el primer resultando de la sentencia no aparece el firme y decidido propósito por parte de Angel Doval Azpilcuenta de matar á Jacobo Cerrada Doval, antes al contrario, resulta que el encuentro de ambos fué casual, y que trabándose entre ellos reyerta ó disputa por resentimientos anteriores, aquél disparó contra éste una pistola, causándole una lesión, que tardó en su completa curación veintiocho días, lo cual no es bastante á demostrar con evidencia que la intención de Doval fué la de matar á Cerrada, y ha de estarse aquí, para el efecto de la calificación y penalidad de los hechos, á los que resulten íntegros y consumados, que son los de disparo y lesiones menos graves, siendo el primero medio necesario de cometer el segundo: Considerando que el Tribunal sentenciador ha incurrido en error de derecho al calificar el hecho de homicidio frustrado, infringiendo los artículos que aplica, y los que cita el Ministerio fiscal, por no haberlos aplicado, etc.» (Sentencia de 22 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 25 de Marzo de 1889, página 81.)

**CUESTIÓN III.** *Aun cuando de las lesiones causadas á una persona ninguna de ellas sea mortal, si por la escasa resistencia vital y orgánica de aquella se le produjo, á consecuencia de las mismas, una congestión cerebral y pulmonar que le originó la muerte, deberá calificarse el hecho de homicidio?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que aunque ninguna de las diferentes lesiones que Manuel Francos infligió á Teresa Rodríguez, maltratándola con un palo y con las almadreñas que llevaba puestas, pudiera aisladamente calificarse de grave, habiendo sin embargo recaído en una persona de avanzada edad y sumamente extenuada, que desde aquel momento se fué agravando hasta morir á los tres días á consecuencia de la congestión cerebral y pulmonar, producidas la primera por lesiones de los párpados, sien y parietal derecho, y la pulmonar por la contusión que originó la lesión del costado derecho, y sosteniendo los facultativos que verificaron la autopsia que no habían hallado otra causa, y que si bien ninguna era mortal, puede afirmarse que si obraron como tales fué debida al concurso de todas ellas, y sobre todo á la escasa resistencia vital y orgánica de la interfecta, preciso es aceptar la deducción lógica que en uso de su perfecto y exclusivo derecho saca de esos hechos probados el Tribunal sentenciador, de que habiendo sido voluntario ese acto punible por parte del agente, la calificación jurídica del mismo debe extenderse á todas sus consecuencias, siquiera éstas hayan sobrevenido por predisposición ó por las condiciones físicas de la persona ofendida: Considerando que conociendo el ofensor esas condiciones de la ofendida, inherentes á su persona, su reponsabili-



dad alcanza al resultado que en ella produzca el mal que le cause, por más que en otra persona de más robustez ese resultado no hubiera tenido importancia: Considerando, en su virtud, que ajustada estricta y legalmente á los hechos probados la calificación de homicidio que el Tribunal á quo ha hecho del delito por que se procede, no ha infringido en modo alguno, al aplicarlo, el artículo 419 del Código penal, ni incurrido en el error de derecho que el recurrente le atribuye, etc.» (Sentencia de 26 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 27 de Marzo de 1889, páginas 84 y 85.)

Consúltense, además, las *Cuestiones* todas del art. 3.º de este *Suplemento*, páginas 11 á 18.)

### Art. 420.

HOMICIDIO COMETIDO EN RIÑA CONFUSA Y TUMULTUARIA,  
SIN QUE CONSTE SU AUTOR.

**CUESTION I.** *Salen de una taberna cuatro sujetos disputando, y pasando de las palabras á los hechos, trabase entre uno de ellos por una parte, y los otros tres por otra, una lucha durante la cual aquél causa con un puñal varias lesiones graves á uno de éstos, y éste á su vez y los otros dos con piedras y un palo le producen varias lesiones menos graves en la cabeza al primero, que resulta además con una herida de arma blanca en el cuello, causada no se sabe por quién de los tres, que le origina instantáneamente la muerte: ¿deberán ser considerados los tres procesados como coautores del homicidio, ó deberá estimarse que éste se produjo en riña tumultuaria, sin constar su autor y si tan sólo que los tres ejercieron violencias en la persona del interfecto, siéndoles, por lo tanto, aplicable la sanción más benigna del último párrafo del artículo 420 del Código?—* Aun cuando el Ministerio fiscal pretendió en casación que no debía apreciarse en este caso la riña tumultuaria de que habla el referido artículo, porque no hubo el acometimiento confuso entre varios que requiere su aplicación, correspondiendo al hecho la calificación de homicidio por haber tomado los tres procesados parte directa en su ejecución, declaró el Tribunal Supremo *no haber lugar* al recurso interpuesto, por los importantes fundamentos siguientes: «Considerando que el artículo 420 del Código penal castiga á los que causan lesiones graves ó violencias de menor entidad en ocasión de reñir varios y acometerse entre sí confusa y tumultuariamente, cuando resulta muerte y no consta su autor: Considerando que la aplicación de las disposiciones de este artículo requiere, por tanto, riña, ó sea quimera ó contienda personal entre distintos individuos; que si de ordinario y más general y naturalmente se determinara entre varias personas de cada parte adversaria, puede existir, con idéntico valor jurídico, entre una sola de una parte y más de una de la otra, acometimiento ó agresión recíproca tumultuaria

de los contendientes, si la falta de esclarecimiento de los detalles del suceso y la confusión y desconcierto de la reyerta impiden señalar la participación concreta de cada uno de aquéllos en la muerte que resulte, y, por consiguiente, que no conste quién la causara individual y directamente, si aparece quien produjera lesiones menos graves, ó por lo menos, ejerciera violencias sobre el ofendido: Considerando que por estas condiciones que entraña aquel precepto legal, derivado del 334 del Código penal de 1850, que no exigió expresamente la confusión y el tumulto de que el vigente habla, es de todo punto inaplicable, como ha declarado esta Sala, al caso en que, por concierto expreso ó tácito, y anterior ó de momento, se juntan y suman las voluntades de varios, y se auxilian sus mutuos actos para realizar una determinada agresión contra una ó más personas, en cuyo caso las disposiciones generales del art. 13 señalan á todos una responsabilidad igual en el delito resultante de su acción, á cuyo logro cada uno coopera directamente: Considerando que la falta de este concierto en el hecho procesal y de la unidad de propósito, que es su esencia, no se infiere de los términos de la sentencia reclamada, cual reconoce el propio recurrente, y por ello exige la aplicación de lo dispuesto en el artículo citado 429, por ser evidente que hubo riña entre Fructuoso González y los tres procesados, á uno de los cuales acometió é hirió con arma blanca y éstos á aquél con piedras y palo, desconcertada y confusamente; porque resultó la muerte del primero á consecuencia de herida recibida durante la riña, que el Tribunal á quo declara que no consta quién la causara, y porque si bien tampoco consta el autor de lesiones graves, si que los tres procesados las causaron menos graves al ofendido, sobre cuya persona resulta por lo mismo que ejercieron violencias; y Considerando, por todo ello, que la Audiencia sentenciadora no ha cometido las infracciones legales ni el error de derecho que se le atribuyen, etc.» (Sentencia de 3 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 6 de Abril de 1888, pág. 84.)

**CUESTION II.** *Aun cuando exista pluralidad de agresores y de agredidos, si los primeros obraron con unidad de acción y de intención, deberá calificarse el homicidio que de aquella simultánea acometida resulte como producido en riña confusa y tumultuaria?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que son autores de un acto justiciable todos los que toman parte directa en su ejecución: Considerando que, según los hechos probados, todos los recurrentes, obrando con unidad de acción y de intención, como lo demuestran las palabras «vamos contra es que viene solo,» pronunciadas por Baltasar Requena, tomaron parte directa en lucha armada contra Juan González y sus cinco compañeros, y que todos son, por consiguiente, responsables como autores de la muerte de Juan González Zornoza y de las lesiones graves causadas á Pedro González Monedero: Considerando que al estimarlo así el Tribunal sentenciador no ha incurrido en error de derecho, y que no ha infringido por imprecendente aplicación los arts. 419 y 431 del mencionado Código, ni por indebida emisión el art. 429, etc.» (Sentencia de 5 de Mayo



de 1888, publicada en la *Gaceta* de 23 de Agosto, página 78.)

**CUESTION III.** *Aun cuando cabe el delito de homicidio en riña confusa y tumultuaria entre varias personas, hasta en el caso de ser una sola de una parte y mayor número de la opuesta, siempre que no conste quién sea el autor de aquél (V. la Cuestión I de este artículo), ¿existirá el concepto jurídico á que responde la atenuación de penalidad del art. 420 del Código, si no consta que el interfecto acometiera ni dirigiera agresión alguna á aquellos que por colectivo y simultáneo ataque le produjeron la muerte?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa en un importante fallo en que se explica de un modo magistral el verdadero sentido y alcance del art. 420 del Código: «Considerando que, si bien las disposiciones del art. 420 del Código penal son aplicables al caso en que por consecuencia de riña confusa y tumultuaria entre varias personas, aunque sea una sola de una parte y mayor número de la opuesta, se causa muerte, en condiciones que impidan señalar la participación de cada uno de los contendientes en el hecho que la determina, es preciso para tal aplicación que entre éstos medie agresión recíproca, ó lo que es igual, que unos á otros se acometan; y también que no exista entre algunos concierto expreso ó tácito, anterior ó de momento, para maltratar á determinada persona, juntado con este fin concreto los esfuerzos singulares; porque, de ocurrir esto, el precepto de relativo carácter excepcional en aquel artículo contenido se excluye á virtud del principio más general expresado en el 13 del mismo Código, que reputa autores de delito á cuantos toman parte directa en la ejecución del hecho que lo constituye y á los que cooperan á él con actos necesarios ó por inducción resultante, entre otras causas, de pacto ó convenio: Considerando que, ocasionada por violencia la muerte de Francisco Olivera, tal hecho constituye un delito de homicidio, cuya calificación le corresponde, según lo que se acaba de exponer; porque del resultando segundo de la sentencia reclamada aparece, en términos claros é incontestables en casación, que cuando los cinco procesados, que cooperaban voluntariamente á la acción de Joaquín Caballero, acometieron á Olivera, éste, entonces en lucha desigual con aquél, no les acometió ni dirigió agresión alguna, sino que sus contrarios, con el individual y colectivo propósito de dañarle, y consiguientemente por concierto, siquiera momentáneo, se arrojaron sobre él en el momento en que con Joaquín Caballero se hallaba caído en tierra sobre la cuneta del camino, y le golpearon con los pies y rodillas; lo cual excluye, por sus condiciones materiales y morales, el concepto jurídico á que responde el antes citado art. 420, etc.» (Sentencia de 21 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 29 de Agosto, páginas 105 y 106.)

## CAPÍTULO IV

## Disposiciones comunes á los tres capítulos anteriores.

## Art. 423.

## DISPARO DE ARMA DE FUEGO CONTRA CUALQUIERA PERSONA.

**CUESTION I.** *Aun cuando el arma disparada contra un individuo que se hallaba en un grupo de personas no tenga el alcance de la distancia á que se hizo el disparo, ¿cometerá esta circunstancia á la determinación del delito preciso y penado en el artículo 423 del Código?*—Así lo estimó la Audiencia de la Habana, la que declaró que el hecho sólo constituía una falta y no el delito de disparo de arma de fuego, porque el revólver con que se hicieron éstos no tenía alcance suficiente para llegar al grupo donde se disparó, y porque para que sea penable el disparo de arma como delito es preciso hacerle sobre persona determinada. Mas interpuesto contra dicha sentencia recurso de casación por el Ministerio fiscal, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar á él*: «Considerando que, conforme el art. 421 del Código aplicable á Cuba y Puerto Rico, el acto de disparar un arma de fuego contra cualquiera persona, y sin otras circunstancias que dicho artículo enumera, será castigado con la pena de prisión correccional en su grado mínimo y medio: Considerando que en la mencionada pena ha incurrido el procesado Pablo Suárez y Duarte, porque dada por cierto, según así se consigna en la sentencia recurrida, que dirigiendo la puntería á un individuo desconocido que se hallaba entre un grupo de personas, le hizo dos disparos de revólver, huyendo en el momento y abandonando el instrumento del delito, por modo evidente se demuestra su dolosa y culpable intención, y sin género alguno de duda se ve que realizó los actos que integran dicho delito y que se sintetizan en disparar un arma de fuego contra cualquiera persona: Considerando que de este criterio razonable y jurídico se ha separado la Audiencia de la Habana en la sentencia que ha dictado, suponiendo que Suárez es sólo culpable de una falta y no de un delito, y ha infringido el expresado art. 421 del referido Código, que determina el error de derecho que señala el núm. 2.º de la regla 56 de la ley provisional que le acompaña, según fundadamente opina en su recurso el Ministerio fiscal, etc.» (Sentencia de 30 de Septiembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 16 de Noviembre, páginas 297 y 298.)

**CUESTION II.** *El que dispara un tiro contra una ventana de una casa, con conocimiento de que frente á ella había una cama y durmiendo en ésta una persona, viéndose el proyectil á implantarse en el colchón, ¿será responsable del delito de disparo de arma de fuego contra determinada persona?*—El Tribunal Supremo ha



resuelto la afirmativa: «Considerando que por haber estimado la Audiencia sentenciadora como hecho probado que Gambín, al ejecutarlo, lo hizo con conocimiento de estar colocada frente á la ventana una cama y durmiendo en ella una persona, es responsable el procesado, con arreglo al art. 423 del precitado Código, en cuya infracción no ha incurrido el Tribunal á quo, etc.» (Sentencia de 13 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 30 de Junio, páginas 314 y 315.)

**CUESTION III.** *Tratándose de un delito de lesiones graves previsto en el art. 431, núm. 2.º del Código y castigado con la prisión correccional en sus grados medio y máximo, deberá apreciarse también el disparo de arma de fuego con que aquél se cometió, y penar el más grave en su grado máximo con arreglo al artículo 502.*—Una vez más ha confirmado el Tribunal Supremo nuestra opinión negativa sobre este punto al casar una sentencia de la Audiencia de Calatayud que calificó y penó el doble delito en la forma dicha: «Considerando que con arreglo al art. 423 del Código penal la existencia del delito de disparo de arma de fuego, está subordinada á la condición de que el hecho en sí no constituya un delito más grave, y habiendo quedado impedido de la pluma derecha el ofendido Toribio Francia á consecuencia de las lesiones que le produjo el disparo de arma de fuego que le hizo el procesado José Vergara López, el delito cometido y que ha debido pensarse es el comprendido en el núm. 2.º del art. 431; y por tanto, al calificarlo y castigarlo la Audiencia sentenciadora como disparo de arma de fuego y lesiones graves, con aplicación del art. 50, ha incurrido en el error de derecho é infringido las disposiciones legales que el Ministerio fiscal le atribuye en el recurso; Fallamos que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio fiscal contra la sentencia dictada por la Audiencia de lo criminal de Calatayud, la cual casamos y anulamos, declarando de oficio las costas de este recurso; comuníquese esta resolución y la que á continuación se dicta al Tribunal sentenciador para los efectos procedentes, etc.» (Sentencia de 21 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 28 de Septiembre, páginas 198 y 199.)

**CUESTION IV.** *El acto de disparar contra un grupo de personas, por más que no vaya dirigido á ninguna de ellas determinadamente ó que el proyectil dé á otra distinta, ¿constituirá el delito que prevé y pena el art. 423 del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que no es necesario para que el delito de disparo de arma de fuego esté comprendido en la sanción del art. 423 del Código que se haga contra determinada persona, sino que basta que se dirija contra cualquiera, y por consiguiente el hecho de disparar una pistola contra un grupo de personas, por más que no vaya dirigido á una de ellas determinadamente, ó que el proyectil dé á otra distinta, está comprendido en el delito que pena el citado art. 423; Considerando que siendo un hecho, declarado probado en la sentencia, que el recurrente disparó voluntaria é intencionalmente una pistola contra un grupo de personas que cuestionaban en un balle, y cuyo pro-

yecitil causó lesiones, que tardaron en curar doce días, á una de las concurrentes al baile, es por ello responsable del delito de disparo, y además del de lesiones, que castiga el art. 433 del Código, siéndole en tal concepto aplicable, como delito más grave, la pena correspondiente al de disparo en su grado máximo, conforme á lo establecido en el art. 90 de dicho Código, y al estimarlo así la Audiencia sentenciadora no ha incurrido en error de derecho ni infringido disposición legal alguna, etc.» (Sentencia de 7 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 25 de Febrero de 1889, páginas 31 y 32.)

## CAPÍTULO V

### Infanticidio.

#### Art. 424.

ATENUACIÓN ESPECIAL DE PENALIDAD PARA LA MADRE QUE PARA OCULTAR SU DESHONRA MATA AL HIJO QUE NO HA CUMPLIDO TRES DÍAS Y PARA LOS ABUELOS MATERNOs QUE CON IGUAL FIN COMETEN EL PROPIO DELITO.

**CUESTION.** *La madre que asistiendo al parto de una hija suya soltera, al nacer viva la criatura le corta el cordón umbilical hasta la raíz del abdomen, produciéndose, como consecuencia necesaria, la hemorragia y muerte de aquélla, deberá ser declarada autora voluntaria del delito de infanticidio, previsto y penado en el art. 424 del Código, si no resulta del proceso hecho alguno que desvirtúe la malicia é intención con que debe suponerse que obró?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que, según los hechos que la sentencia declara probados, la cortadura del cordón umbilical á raíz del abdomen, hecha por Idefonsa Domínguez Hernández al dar á luz su hija Clara Carmen Sánchez Domínguez una niña, fué la causa determinante de la muerte de ésta y el medio adecuado para producirla, puesto que no pudiendo hacerse la ligadura del cordón por la forma en que se cortó éste, la hemorragia y la muerte de la criatura eran consecuencias necesarias; no habiendo en la sentencia reclamada hecho alguno que desvirtúe en lo más mínimo la malicia é intención con que obró la recurrente Idefonsa Domínguez, y que se supone siempre en todo delito, salvo la prueba en contrario: Considerando que demostrado como está en la sentencia que la forma en que la Domínguez cortó el cordón fué el medio adecuado que ésta empleó para producir la muerte de la niña, es visto que el Tribunal sentenciador, al calificar y penar como delito de infanticidio el perpetrado por Idefonsa Domínguez Hernández, no ha cometido las infracciones de derecho que por el recurso se le atribuyen, etc.» (Sentencia de 26 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 8 de Septiembre, página 139.)



## CAPÍTULO VI

## Aborto.

## Art. 426.

ABORTO OCASIONADO VIOLENTAMENTE CUANDO NO HA HABIDO  
PROPÓSITO DE CAUSARLO.

**CUESTION.** *El que pistola en mano amenaza á una mujer embarazada, diciéndole que la va á matar, determinándose á ésta el aborto á consecuencia de la impresión y del susto, será responsable del delito de aborto ocasionado violentamente aunque sin propósito de causarlo, comprendido en el art. 426 del Código, ó lo será tan sólo del menos grave de amenaza no condicional, previsto y penado en el 507, núm. 2.º?*—La Audiencia de lo criminal de Málaga estimó lo primero y condenó al procesado, en quien apreció la circunstancia atenuante de embriaguez, á la pena de seis meses y un día de presidio correccional. Mas interpuesto recurso de casación contra dicha sentencia por la defensa del reo, por la indebida calificación del hecho procesal, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar á él*: «Considerando que el art. 426 del Código penal sólo es aplicable cuando violentamente se da ocasión á un aborto sin ánimo de causarlo: Considerando que la violencia ejercida contra las personas, técnica y jurídicamente apreciada, es muy distinta de la intimidación, porque ésta supone coacción moral, y aquélla implica el empleo de fuerza física: Considerando que los actos imputados al recurrente Antonio Arrabal son de mera intimidación, y sólo arguyen responsabilidad penal con arreglo al art. 507, núm. 2.º, del precitado Código, sin perjuicio de la civil á que dé lugar por sus efectos el hecho justificable: Considerando, por consiguiente, que el Tribunal á que ha incurrido en error de derecho al calificar el delito, infringiendo por indebida aplicación el art. 426, y por no haberlo aplicado el artículo 507, en su núm. 2.º; etc.» (Sentencia de 30 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 4 de Abril de 1888, pág. 69.)

## CAPÍTULO VII

## Lesiones.

## Art. 431... 2.º

LESIONES CON PÉRDIDA DE UN OJO Ó MIEMBRO PRINCIPAL Ó IMPEDIMENTO DE ÉSTE, Ó INUTILIDAD DEL OFENDIDO PARA EL TRABAJO Á QUE SE DEDICARA HABITUALMENTE.

**QUESTION.** *Si de resultas de unas lesiones ha quedado el ofendido inutilizado para la mayor parte de los trabajos de su oficio de labrador, aunque no para la práctica de algunos de éstos, deberá comprenderse el delito de lesiones en la sanción del núm. 2.º del artículo 431 del Código, ó en la más benigna del núm. 3.º del mismo?*—El Tribunal Supremo ha declarado que la primera y más grave calificación y penalidad es la que corresponde al referido hecho: «Considerando que ha sido bien aplicado por el Tribunal sentenciador el caso 2.º del art. 431 del Código, porque habiendo quedado Nicanor Gallego inutilizado para la mayor parte de los trabajos á que como labrador venia dedicándose, por consecuencia de la lesión que le infirió Bernabé Martínez, dicha inutilización es la que determina el delito definido en el expresado número y artículo, pues no deja de ser real y efectiva, aunque el Nicanor pueda hacer algún trabajo de su oficio de labrador, si para la mayoría de otros se encuentra imposibilitado, según se afirma en la sentencia recurrida, etc.» (Sentencia de 13 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 19 de Marzo de 1889, pág. 73.)

## Art. 431.... 3.º

LESIONES DE CUYAS RESULTAS HUBIERE QUEDADO EL OFENDIDO DEFORME, Ó PERDIDO UN MIEMBRO NO PRINCIPAL Ó QUEDADO INUTILIZADO DE ÉL, Ó HUBIERE ESTADO INCAPACITADO PARA SU TRABAJO HABITUAL Ó ENFERMO POR MÁS DE NOVENTA DÍAS.

**QUESTION.** *Si á consecuencia de la lesión causada, le quedó al ofendido, según los médicos, un trayecto fistuloso con tendencia á la cronicidad, que sin oponerse por completo á sus habituales ocupaciones le habría de hacer su ejercicio más molesto y difícil en épocas determinadas, deberá calificarse el hecho de delito de lesiones graves con inutilización para el trabajo á que hasta entonces se hubiere dedicado habitualmente el ofendido, comprendido en el núm. 2.º del art. 431 del Código, ó el previsto y penado menos gravemente en el núm. 3.º del mismo?*—La Audiencia de Puerto Príncipe estimó lo primero. Mas el Tribunal Supremo



resolvió lo segundo: «Considerando que no puede estimarse como caso de inutilización para el trabajo el supuesto único que se consigna en la sentencia recurrida de haberle quedado á D. Francisco Recio, por consecuencia de la lesión inferida, un trayecto fistuloso con tendencia á la cronicidad, que no se opondría por completo á sus habituales ocupaciones, aunque en épocas determinadas se le hiciese más molesto y difícil su ejercicio; por lo que el hecho no constituye, consiguientemente, el delito definido en el número 2.º del art. 429 del Código (1), como equivocadamente le califica el Tribunal sentenciador, sino el comprendido en el número 3.º del mismo, etc.» (Sentencia de 18 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 16 de Noviembre, páginas 307 y 308.)

#### Art. 431... 4.º

LESIONES QUE PRODUCEN AL OFENDIDO ENFERMEDAD Ó INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO POR MÁS DE TREINTA DÍAS.

**CUESTION I.** *¿Podrá prosperar el recurso de casación que se interponga contra una sentencia que califica y pena como delito de lesiones graves las que se dice que curaron á los cuarenta días, aun cuando no se exprese cuánto tiempo precisaron de asistencia facultativa é impidieron al ofendido para el trabajo?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que aun cuando en la sentencia reclamada no se expresa, como hubiera debido hacerse, con las locuciones y términos que emplean los artículos 431 y 433 del Código penal, la intensidad del mal producido por los delitos que respectivamente penan, recta y llanamente entendido su concepto, no autoriza las dudas en que se funda el recurso, no solamente por no indicarse siquiera que fuera objeto del juicio en donde se planteó la cuestión de calificación de la propia manera que la sentencia lo resuelve, sino porque el hecho de afirmarse en ésta que la curación de las heridas no tuvo lugar hasta transcurrir los días señalados en las sentencias de las dos instancias, implica cuando, como en el presente caso no se añade expresión ó concepto limitativo, que durante tal período de tiempo hubo enfermedad, que es uno de los términos suficientes para la aplicación del núm. 4.º del citado art. 431, y que era necesaria la asistencia de facultativo, siquiera para prevenir contingencias posibles en la salud del ofendido, mientras no obtuviera la curación, cuya relativa necesidad justifica también la aplicación de lo dispuesto en el art. 433, el cual, por tanto, ni aquél no han sido infringidos, ni consiguientemente el 603, etc.» (Sentencia de 19 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 5 de Agosto, pág. 48.)

Igual doctrina se consigna en otra Sentencia posterior: «Consi-

(1) Art. 431, núm. 2.º del Código de la Península.

derando que el sentido natural y propio de la sentencia, en cuanto dice que las lesiones de que se trata tardaron en curarse más de treinta días y menos de noventa, después de afirmar que curaron dentro de setenta, es seguramente el de que durante ese período de tiempo subsistió la enfermedad de la ofendida, sentido que confirman la invocación expresa del núm. 4.º del artículo 431 del Código penal, hecha en la sentencia como disposición que define el delito, el hecho de no haberse curado las heridas antes, afirmado por la sentencia, lo cual implica existencia de enfermedad hasta lograrse aquel resultado, y el también importante de no haberse impugnado en el juicio la calificación fundada en tal hecho, que es por todo ello base indiscutible ya de la sentencia, etc.» (Sentencia de 15 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 31 de Diciembre, pág. 290.)

**CUESTION II.** *Aun cuando los Facultativos informen que unas lesiones que duraron treinta y cinco días hubieran curado antes de los treinta sin la debilidad física del ofendido, originada principalmente por la falta de alimentación reparadora, deberán dichas lesiones calificarse y penarse como graves, conforme al artículo 431, núm. 4.º, ó como menos graves, con arreglo al 433?*—El Tribunal Supremo ha declarado que la primera más grave calificación es la que corresponde: «Considerando que el autor voluntario de unas lesiones es responsable, civil y criminalmente, de su resultado y consecuencias cuando éstas no han sido agravadas por culpa ó negligencia del lesionado ó por causas imputadas á tercera persona, y que en el caso del presente recurso el estado de debilidad física en que se encontró Angel García durante el tratamiento de las lesiones que le infirieron los recurrentes, producida al parecer por falta de alimentación reparadora, no puede servir para atenuar en ningún sentido la responsabilidad de los agresores, por ser dicho estado propio de las condiciones naturales en que vivía el lesionado al ser agredido, etc.» (Sentencia de 28 de Diciembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 1.º de Mayo de 1889, pág. 149.)

### Art. 433.

LESIONES NO COMPRENDIDAS EN LOS ARTÍCULOS PRECEDENTES, QUE PRODUCEN AL OFENDIDO INUTILIDAD PARA EL TRABAJO POR OCHO DÍAS Ó MÁS, Ó NECESIDAD DE LA ASISTENCIA DE FACULTATIVO POR IGUAL TIEMPO.

**CUESTION.** *Aun cuando en la sentencia en que se consigna que unas lesiones duraron más de ocho días no se exprese ni el tiempo que impidieron al ofendido para el trabajo, ni el que precisaron asistencia facultativa, ¿podrá prosperar el recurso de casación que contra aquella se intenta en el concepto de que las expresadas lesiones penadas como menos graves, debieron serlo tan sólo como leves?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la nega-



tiva: «Considerando que el único motivo de casación alegado en el recurso se funda en no haber declarado el Tribunal sentenciador como hecho probado si las lesiones causadas á Emeterio Platas impidieron á éste para el trabajo ó exigieron asistencia facultativa durante el período de su curación: Considerando que, si bien se advierte esta omisión, es indudable que alguna de aquellas circunstancias concurrió, pues la sentencia consigna terminantemente que los hechos constituyen el delito de lesiones menos graves, tal y como lo define nuestro Código penal, y la misma calificación se consignó en las conclusiones fiscales, sin contradicción alguna por parte de la defensa: Considerando que, en general concepto, ninguna deficiencia puede ser alegada como fundamento de casación por infracción de ley, pues si no se procura subsanarla por los medios que autoriza la de Enjuiciamiento criminal, subsiste la apreciación jurídica del Tribunal á que si los hechos probados no la contradicen y sustancialmente la apoyan, etc.» (Sentencia de 25 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 19 de Noviembre, páginas 327 y 328.)—Igual doctrina vemos consignada en otra Sentencia posterior: «Considerando que derivándose las infracciones alegadas de no haberse expresado en la sentencia recurrida que fuera necesaria la asistencia facultativa, ó que hubiere inutilidad para el trabajo durante los diez y siete días que fueron necesarios para la curación del lesionado, consignándose en el primer resultando como hechos probados que obtuvo la sanidad transcurridos ellos, es indudable que la lesión tardó en curarse dicho tiempo ó hizo necesaria la asistencia facultativa, se le prestare ó no, atendida la gravedad de la lesión inferida y la apreciación de la prueba, condensada en el primer considerando por la Sala sentenciadora, en virtud de su exclusiva competencia: Considerando que por lo expuesto ha sido acertadamente aplicado por la Sala sentenciadora el artículo 433 del Código penal, y que constituyendo el hecho el doble delito de disparo de arma de fuego y lesiones, era también de rigurosa aplicación el 90 del mismo, no habiendo, por lo tanto, incurrido en el error de derecho que se le atribuye, ni cometido las infracciones alegadas, etc.» (Sentencia de 31 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 7 de Mayo, pág. 199.)

Otra Sentencia posterior establece igual doctrina: «Considerando que las lesiones que producen al ofendido inutilidad para el trabajo por ocho días ó más, ó la necesidad de asistencia facultativa por igual tiempo, se reputan menos graves, y serán penadas con arreglo á lo dispuesto en el art. 433 del Código: Considerando que á dicha clase pertenecen las que infringieron á Francisco Cruz Montesinos los recurrentes Victoriano Leal y Eusebio García, pues al decirse en la sentencia reclamada que tardaron en curársele ocho días, y al ser estimadas en ella como comprendidas y castigadas en el citado artículo del Código, no puede darse que le impidieron trabajar ó necesitaron de la asistencia facultativa por el tiempo indicado, aunque no se exprese terminantemente en el mencionado fallo, según así procedía: Considerando que en el concepto expuesto, la Audiencia de Almería, al

condenar á los recurrentes en la pena señalada al delito de lesiones menos graves, no ha infringido el artículo del Código ya citado, ni ha incurrido en el error de derecho que se invoca en el recurso, etc.» (Sentencia de 6 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 24 de Septiembre, páginas 164 y 165.)

## TÍTULO IX

### DELITOS CONTRA LA HONESTIDAD

#### CAPÍTULO I

##### Adulterio.

##### Art. 448.

###### QUIÉNES COMETEN ADULTERIO.

**CUESTION.** *Cuando en la sentencia del Tribunal á quo se declara como hecho probado que una mujer casada ha sostenido relaciones ilícitas con un sujeto, bastará esto á suponer el ayuntamiento carnal que integra el delito de adulterio?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que comete el delito de adulterio, conforme determina el art. 448 del Código penal, la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y el que yace con ella sabiendo que es casada, siendo responsables Francisco Reguera Benítez y Francisca Vázquez Gómez, porque dado por cierto, según así afirma la Sala sentenciadora, que la última era casada y los dos sostenían relaciones ilícitas, éstas suponen el ayuntamiento carnal de ambos, que integra el adulterio: Considerando que en ese concepto jurídico ha fundado su fallo condenatorio la Audiencia de Sevilla, quien no ha infringido los artículos 448 y 22 del indicado Código, ni incurrido en el error de derecho que sin razón se invoca en el recurso, etc.» (Sentencia de 26 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 24 de Noviembre, pág. 357.)

##### Art. 452.

###### AMANCEBAMIENTO DEL MARIDO DENTRO DE LA CASA CONYUGAL Ó FUERA DE ELLA CON ESCÁNDALO.

**CUESTION.** *El escándalo que erige en delito el amancebamiento del marido fuera de la casa conyugal, bastará suficien-*



*temente determinado por el abandono en la miseria de la mujer legítima, por la común vivienda de ambos amantes; por la general creencia de que eran casados; por la escisión ocurrida en un sitio público entre ambos amantes y la cónyuge ofendida, y finalmente por la justificación durante el proceso de la no interrumpida cohabitación de uno y otro culpables?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que según los hechos probados,..... abandonó con su hijo la casa conyugal, dejando en la miseria á la mujer legítima....., y estableció su domicilio en esta....., viviendo en diferentes casas, siempre en compañía de....., y con tanta y tan constante intimidad, que eran tenidos por algunas personas como casados: Considerando que la ilegitimidad de estas relaciones fué notoria, tanto por la presentación de la querrela como por la continuación del trato ilícito durante el proceso, por la escisión ocurrida entre la manceba y la cónyuge agraviada, y por la diligencia judicial practicada en la noche del 10 de Diciembre de 1886: Considerando que la notoriedad de un acto inmoral produce escándalo, porque ofende con el mal ejemplo y lastima los sentimientos honrados de los demás: Considerando que es por consiguiente aplicable el art. 452 del Código penal, por concurrir la segunda de las circunstancias en él determinadas, etc.» (Sentencia de 16 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 27 de Septiembre, páginas 189 y 190.)

## CAPÍTULO II

### Violación y abusos deshonestos.

#### Art. 454.

##### ABUSOS DESHONESTOS.

**CUESTION.** *El que, desoso de yacer con una joven, la coge por el cuello en ademán de echarla al suelo, diciéndole que había de hacer con ella cuanto quisiera, y como aquella se resistiera, desiste también él; pero á manera de burla ó venganza la echa al suelo, le alza las sayas, le pasa la mano por las partes genitales y le da lo que vulgarmente se llama una zurra en el trasero, será responsable por este hecho del delito de tentativa de violación, ó del de abusos deshonestos?*—En contra de la extraña pretensión de la defensa del procesado, que solicitó en casación la calificación de aquel delito más grave, declaró el Tribunal Supremo que el hecho fué debidamente apreciado y penado por la Audiencia sentenciadora como constitutivo del delito de abusos deshonestos: «Considerando que el verdadero acto ejecutado por el recurrente de alzar las enaguas á la joven de diez y siete años....., ponerla las manos en sus partes y darla luego azotes, todo á manera de burla ó de venganza porque se negaba y resistía á yacer con

él, tiene marcadamente el carácter de un abuso deshonesto, con el que ofendió gravemente el pudor de aquella doncella; porque no habiendo ejecutado esos actos para violarla, sino en venganza de su resistencia á acceder á sus torpes deseos, no han llegado á adquirir verdaderamente el de tentativa de violación, como fueron calificados por el Ministerio fiscal; y como, cualquiera que sea la penalidad de uno y otro delito, su naturaleza es idéntica, y la mayor gravedad del de tentativa no admite impugnación, por estar así declarado por este Supremo Tribunal, la Sala sentenciadora ha estado en su derecho al optar por la calificación más leve, que es también la más adecuada, y al ajustar á ella, con estricta sujeción á las disposiciones aplicables al caso, la penalidad que impone, ni ha infringido, cual se supone, el art. 454 del Código penal, ni incurrido en el error de derecho que se le atribuye, etc.» (Sentencia de 22 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 20 de Abril de 1888, páginas 126 y 127.)

### CAPÍTULO III

#### Delitos de escándalo público.

#### Art. 456.

OFENSA AL PUDOR Ó Á LAS BUENAS COSTUMBRES CON HECHOS DE GRAVE ESCÁNDALO Ó TRANSCENDENCIA.

**CUESTION.** *Si alucinados varios sujetos por predicciones y supuestas apariciones anunciando el próximo fin del mundo, hubieron de reunirse en torno de una gran hoguera donde arrojaron muebles y otros efectos, desnudándose todos, hombres, mujeres y niños, para mejor pedir y obtener la gracia del cielo, en cuyo estado completo de desnudez permanecieron todos á presencia unos de otros y de los niños pequeños, hasta que se presentó la Guardia civil en el sitio de la ocurrencia, ¿constituirán tales hechos el delito de escándalo público, comprendido en el art. 456 del Código?—El haber obrado los procesados á estímulos de la superstición, ¿autorizará algo más que la atenuante de arrebató y obcecación apreciada por el Tribunal sentenciador, ó sea la exención de toda responsabilidad criminal?—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa sobre el primer punto, y la negativa, en cambio, al segundo: «Considerando que el delito que define el art. 456 del Código se refiere á aquellos hechos que por su propia índole y naturaleza ofendan el pudor y las buenas costumbres, con grave escándalo, entendiéndose que existe éste desde el instante en que aquellos son públicamente conocidos, de modo que el concepto del escándalo, en el sentido de dicho artículo, significa la ofensa que su conocimiento produce en los sentimientos de recato y morigeración propios de personas cultas: Considerando que los actos rea-*



lizados por los penados, tales cuales se reflejan en los resultados de la sentencia recurrida, son de los que afectan y contradicen gravemente dichos sentimientos, por lo que, y por haberse además realizado sin ninguna clase de reserva, es evidente que la Audiencia de Málaga no ha incurrido en error de derecho al conceptuarlos comprendidos en el expresado artículo del Código: Considerando que de los hechos de la misma sentencia no resulta que ninguno de los penados haya obrado por fuerza alguna irresistible y apreciable que imponiéndose á su voluntad les haya obligado á ejecutar lo que no hubieran querido, sino que obraron espontáneamente, siquiera lo hiciesen estimulados por ideas supersticiosas, por lo cual tampoco ha sido infringido ni el artículo 1.º del Código, ni la circunstancia 2.ª del 8.º, etc.» (Sentencia de 12 de Julio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 26 de Octubre, páginas 246 y 247.)

#### CAPÍTULO IV

##### Estupro y corrupción de menores.

##### Art. 458 (párrafo tercero).

ESTUPRO, INTERVINIENDO ENGAÑO, COMETIDO CON MUJER MAYOR DE DOCE AÑOS Y MENOR DE VEINTITRÉS, POR CUALQUIERA PERSONA QUE NO SEA AUTORIDAD PÚBLICA, SACERDOTE, CRIADO, DOMÉSTICO, TUTOR, MAESTRO Ó ENCARGADO POR CUALQUIER TÍTULO DE LA EDUCACIÓN Ó GUARDA DE LA ESTUPRADA.

**QUESTION I.** *La promesa de matrimonio no cumplida será causa bastante determinante del engaño que caracteriza el delito de estupro?*—El Tribunal Supremo ha resuelto una vez más la afirmativa: «Considerando que el estupro cometido por cualquier persona de las no señaladas en el párrafo primero del artículo 45 del Código Penal con una mujer mayor de doce y menor de veintitrés años, interviniendo engaño, constituye un delito que se castiga en el mismo artículo: Considerando que reconocido y declarado probado en la sentencia recurrida que al estupro de doña....., verificado por D....., á los cinco años de relaciones amorosas aceptadas por la madre, del que resultó un niño que él reconoció como suyo y le dió su nombre en el bautismo, procedió promesa de matrimonio de él á ella, que no cumplió después sin causa que lo justifique, dada la buena posición y excelentes costumbres de la ofendida, es evidente que aquella promesa fué un medio engañoso puesto en juego para lograr vencer la repugnancia de la joven, á quien después de hacerla madre dejó burlada y comprometida, etc.» (Sentencia de 24 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 20 de Abril de 1888, pág. 131.)

**QUESTION II.** *Para que la promesa de matrimonio no cumplida constituya el engaño que caracteriza el delito de estupro?*

**pro**, comprendido en el párrafo tercero del art. 458 del Código Penal, según constante jurisprudencia (V. Código Penal comentado, artículo 458, Cuestión II, y la Cuestión anterior), *¿será preciso que revista aquella alguna solemnidad ó formalidad, ó bastará que se haya hecho en términos tales que deba ser creída por la mujer perjudicada?*—El Tribunal Supremo ha declarado que basta esto último: «Considerando que constituye delito el estupro cometido por cualquiera persona con una mujer mayor de doce años y menor de veintitrés, cuando interviene engaño: Considerando que esta última condición, indispensable del delito, resulta tal cual la estima el Tribunal sentenciador de los hechos por él establecidos, puesto que las relaciones amorosas, consentidas por los padres de....., en cuya casa, y para mantenerlas con fines de casamiento, permitían la entrada del procesado, daban, por la respectiva honradez de ambos, visible carácter de seriedad á la reiterada promesa de matrimonio, que sirvió á..... para lograr en dos ocasiones la satisfacción de sus deseos; la cual promesa, para constituir engaño é integrar por voluntario abandono el indicado delito, no requiere solemnidad ninguna, ni otra formalidad que la de hacerse en términos tales que racionalmente deba de ser creída por la persona ofendida, en contemplación á los antecedentes del caso, á la insistencia y repetición de la oferta, y á cuantas circunstancias semejantes á éstas la haga aparecer como sincera, etc.» (Sentencia de 2 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 1.º de Diciembre, páginas 261 y 262.)

### Art. 459.

PROSTITUCIÓN Ó CORRUPCIÓN DE MENORES DE EDAD PARA SATISFACER LOS DESEOS DE OTRO, PROMOVIDA Ó FACILITADA HABITUALMENTE Ó CON ABUSO DE CONFIANZA.

**CUESTION I.** *¿Bastará un solo acto de prostitución ó corrupción de menores, cuando se realiza ésta con abuso de confianza, para que caiga el hecho bajo la sanción del art. 459 del Código?*—La dueña de un taller de sastrería que promueve la prostitución de una de sus aprendizas ó oficiales menor de edad, *¿será responsable de este delito por abuso de confianza?*—El Tribunal Supremo ha resuelto sobre ambos extremos la afirmativa: «Considerando que la recurrente, al excitar á la menor..... con estímulos de ganancia é indecorosas instrucciones, á concurrir en ocasión determinada á una casa de prostitución para satisfacer deseos de otra persona que allí debía esperar, y prepararla con cambios de ropas, promovió directamente su corrupción, abusando para ello de la natural é implícita confianza con que los padres de la joven se la recomendaron, y supuesta la cual asistía al taller de la primera, y que, por tanto, incurrió ésta en la indicada responsabilidad, fuera en ella ó no habitual el hecho, porque, establecido este término en la Ley en disyuntiva con el de abuso de



confianza, ésto basta para determinar la existencia del delito, acertadamente calificado por el Tribunal *á quo*, etc.» (Sentencia de 8 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 23 de Agosto, página 82.)

**CUESTION II.** *Para que exista el delito consumado de corrupción ó prostitución de menores, será necesario que ésta se realice, ó bastará que el proxeneta haya ejecutado algún acto directamente encaminado á conseguirla?*—El Tribunal Supremo ha resuelto una vez más que esto último basta para determinar la existencia del delito de que se trata: «Considerando que la responsabilidad señalada en este artículo es íntegramente exigible, según ha declarado esta Sala, desde el momento en que se ejecuta algún acto encaminado á conseguir la prostitución ó la corrupción de un menor, realicéase ó no, puesto que la Ley no requiere el logro del fin como condición del delito indicado, sino la de que se procure, ó sea que se intente expresamente, con tal que al servicio del culpable propósito se ponga abuso de autoridad ó de confianza ó se ejecute por quien tenga tal hábito, etc.» (Sentencia de 8 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 23 de Agosto, pág. 82.)

## CAPÍTULO V

### Rapto.

#### Art. 461.

RAPTO DE DONCELLA MENOR DE VEINTITRÉS AÑOS Y MAYOR DE DOCE, EJECUTADO CON SU ANUENCIA.

**CUESTION I.** *Para que exista el delito de rapto de doncella menor de veintitrés años y mayor de doce, ejecutado con su anuencia, deberá entenderse que se haya realizado con miras deshonestas, por más que en el art. 461 no se haga mención de esta circunstancia, como en el 460?*—Al rapto del art. 461 le comprenderá el beneficio del perdón, establecido en el párrafo cuarto del art. 463.—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa sobre el primer punto y, como consecuencia lógica, también sobre el segundo: «Considerando que el art. 460 del Código penal castiga el rapto de una mujer, sin atender á su edad y condición, ejecutado contra su voluntad y con miras deshonestas, y el 461, el de una doncella menor de veintitrés años y mayor de doce, ejecutado con su anuencia; y por más que en este último caso no se habla de miras deshonestas, dedúcese así lógica y legalmente, por el título en que está contenido el rapto, á no constar con evidencia lo contrario: Considerando que consignándose en el auto recurrido que el procesado..... recorrió varios pueblos con la joven....., haciendo vida matrimonial con la misma, es indudable que el hecho de que

se trata fué ejecutado con miras deshonestas, y por tanto que se halla comprendido en el párrafo cuarto del art. 463 del indicado Código, ó sea que el perdón expreso de la parte ofendida extingue la acción penal, toda vez que el concepto jurídico de la Ley no puede ser otro que facilitar á las personas lastimadas por esta especie de delitos los medios de remitir la ofensa, que á ellas esencial y en primer término afecta, y al estimarlo de esta manera el Tribunal sentenciador no ha incurrido en el error de derecho, ni infringido las disposiciones legales que el Ministerio fiscal le atribuye en el recurso, etc.» (Sentencia de 16 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 5 de Junio, páginas 286 y 287.)

**CUESTION II.** *El hecho de convivir un sujeto con una muchacha mayor de doce años y menor de veintitrés, con la que sostenía relaciones amorosas, que en cierta noche se valdria ella de su casa y acudiría á un sitio determinado, como así lo hizo, en donde estuvieron cohabitando hasta que una hora después volvió aquella á su referida casa, ¿constituirá el delito de rapto de una mujer mayor de doce años y menor de veintitrés, ejecutado con su anuencia, que prevé y castiga el art. 461 del Código?—* Así lo estimó la Audiencia que conoció del expresado hecho, la que condenó á su autor, menor de diez y ocho años, á dos meses y un día de arresto mayor, accesorias, reconocimiento y manutención de la prole si la hubiese, y costas. Mas interpuesto por el mismo recurso de casación contra dicha sentencia por infracción del art. 461 del Código, que apoyó in voce el Ministerio fiscal, declaró el Tribunal Supremo que en el caso expuesto no existía el delito de rapto: «Considerando que es nota esencial del delito de rapto, previsto en el art. 461 del Código penal, la sustracción de una doncella menor de veintitrés años y mayor de doce de su domicilio legal, ó del lugar en que se encuentre, con propósito de ocultar su residencia y de ponerla de esa ó de otra manera con algún carácter de permanencia en donde no pueda ejercitarse libre y fácilmente la autoridad y el derecho de vigilancia que corresponde á los guardadores de su persona: Considerando que es también condición del mismo delito la ausencia de la menor, por lo cual se excluye la necesidad de la violencia, así como la de que sea doncella, cuya cualidad debe reconocerse en la mujer soltera de vida honesta anterior al hecho, cuando las pruebas ó circunstancias procesales no destruyan esa presunción: Considerando que el hecho de autos no tiene los elementos jurídicos indispensables para la existencia del delito castigado, puesto que la breve ausencia de la menor de la casa paterna para acudir sola al cercano sitio donde había convenido con el procesado se reunirían, no revela en este caso que los amantes tuvieran el propósito de ocultar su paradero, ni el de que aquella permaneciera por tiempo jurídicamente apreciable fuera de su domicilio ni en otro, ni sustraída á la autoridad de sus padres, cuya vigilancia fácil y libremente pudo ser ejercida: Considerando, en su virtud, que la Audiencia sentenciadora, al calificar y castigar el hecho procesal como un delito de rapto comprendido en el art. 461 del Código, ha infringido ciertamente este artículo, é incurrido en el



error de derecho que el recurrente le atribuye, etc.» (Sentencia de 19 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 26 de Agosto, página 104.)

## CAPÍTULO VI

Disposiciones comunes á los capítulos anteriores.

### Art. 463 (párrafo cuarto).

EN TODOS LOS CASOS DE ESTE ARTICULO (ESTUPRO, VIOLACIÓN Y RAPTO EJECUTADO CON MIRAS DESHONESTAS) EL PERDÓN EXPRESO Ó PRESUNTO DE LA PARTE OFENDIDA EXTINGUE LA ACCIÓN PENAL Ó LA PENA, SI YA SE HUBIERE IMPUESTO AL CULPABLE.

Sobre si al delito de *rapto* ejecutado con *anuencia* de la menor le corresponde ó no el beneficio del *perdón*, véase la *Cuestión I* del art. 461.

## TÍTULO X

DE LOS DELITOS CONTRA EL HONOR.

### CAPÍTULO I

Calumnia.

### Art. 467.

ES CALUMNIA LA FALSA IMPUTACIÓN DE UN DELITO DE LOS QUE DAN LUGAR Á PROCEDIMIENTO DE OFICIO.

**CUESTION I.** *¿Deberá ser considerado como acto lícito el que un periodista se haga eco en un suelto de ciertos rumores acerca de una dádiva valiosa hecha á un funcionario público para que se abstuviera de un acto que debía practicar en el ejercicio de su cargo, ó deberá considerarse este hecho como constitutivo del delito de calumnia, no probándose la verdad de aquella imputación?—¿Podrá eximirle de la pena correspondiente al expresado delito de calumnia la justificación de que otro periódico dijera anteriormente lo mismo que en aquel suelto se consignó?—*El Tribunal Supremo ha resuelto sobre ambos puntos la negativa: «Considerando que en el artículo denunciado no se limita su autor á dar cuenta á sus lectores de la suposición, afirmada al parecer por otro periódico

dico, de haberse hecho á..... por los querellantes..... el regalo de una vajilla valorada en 16.000 duros, en consideración á servicios y favores que éstos recibieron de aquél, como una de tantas noticias de sensación que la prensa diaria recoge con mejor ó peor criterio, ni siquiera para manifestar sencillamente la extrañeza ó escándalo producidos por semejante afirmación, sino que, apoyándose en ella, arguye al expresado Alcalde por su conducta en la causa á que dió lugar el siniestro ocurrido en una fábrica de....., da así un carácter especial á la censura que formula por el abandono en que dice se dejó la acción ejercitada por el Ayuntamiento en la expresada causa, y coopera por semejante manera á difundir, propalar y justificar la imputación referida, como si el particular ó Autoridad tuviesen que descender á explicar los hechos ó actos punibles que caprichosamente pueda atribuirseles, en vez de ejercitar la acción pertinente para que en el correspondiente juicio se esclarezcan y prueben en su caso: Considerando que los querellantes..... serían responsables del delito que define el art. 402 del Código si hubiesen cometido el hecho que se les imputa, y que no habiéndose justificado éste en el juicio seguido á instancia de los mismos contra....., como autor del artículo, es éste responsable á su vez del delito que define el art. 467 del Código, porque no es justificando que otro periódico dijera lo mismo anteriormente como podría quedar exento de pena, sino demostrando la verdad de la imputación que él acogió para darla más publicidad y robustecer las censuras y argumentos formulados especialmente contra el Alcalde de....., etc.» (Sentencia de 28 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 5 de Enero de 1888, páginas 26 y 27.)

**CUESTION II.** *Aun cuando consignada en forma interrogativa, constituirá el delito de calumnia la siguiente frase estampada en un periódico: «Cree el Sr. Juez de instrucción inocente de ese asesinato al procesado D..... (aquí el nombre y apellido) tan empeñadamente reñido con el infeliz..... (aquí el nombre y apellido del asesinado), contra quien tanto ha predicado y hecho?»—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que..... después de referir á su modo los antecedentes que dice precedieron á la muerte violenta del mencionado....., de afirmar que ésta fué debida al partido clerical capitaneado por el..... Sr....., y de indicar que estaba ya preso como culpable de aquélla un partidario de éste, el consignar, aunque sea en forma de pregunta, si el Juez de instrucción creía que aquél que había reñido con empeño, y hecho y predicado tanto contra la víctima, era inocente en el delito de asesinato, demuestra palmariamente y determina la imputación falsa de semejante crimen á dicho Sr....., constituyendo una infundada, voluntaria é intencional calumnia, etcétera.» (Sentencia de 17 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 18 de Abril de 1888, páginas 118 y 119.)*

**CUESTION III.** *Aun cuando sea cierto el hecho que se imputa á una persona, ¿existirá el delito de calumnia, si resulta falsa la calificación que de aquél se haga, si por razón de la misma habría de constituir el expresado hecho un delito perseguible de oficio?»—*



*La absolución fundada en no constituir delito el hecho á en estar exento de responsabilidad su autor, decretada por Tribunal competente á favor de la persona á quien se dirigió la imputación, ¿será bastante á determinar la falsedad de esta?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa sobre ambos puntos: «Considerando que es calumniosa, según el art. 467 del Código penal, la falsa imputación de un delito de los que dan lugar á procedimiento de oficio: Considerando que el hecho, declarado probado por la Audiencia sentenciadora, de haber el recurrente, en un artículo titulado «El asesinato de Astana», publicado en el periódico *El Reformista*, de Castellón de la Plana, correspondiente al día 26 de Agosto de 1886, imputado á los individuos de la Guardia civil de aquel puesto el asesinato del vecino Pascual Sales, arrancándole violentamente de su domicilio para matarle, constituye el delito de calumnia, puesto que es uno de los que dan lugar á procedimiento de oficio; y si bien el hecho de haber dicha fuerza dado muerte al Sales es cierto, no así la calificación que de él hace el articulista, donde toma su origen y fundamento la acusación de calumnia: Considerando que habiendo el Tribunal competente de la jurisdicción de Guerra absuelto unánimemente en sentencia firme al guardia civil Francisco Ribes, por haber obrado en el cumplimiento de su deber al dar muerte á Pascual Sales, es evidente la falsa imputación que del delito de asesinato hace determinadamente el recurrente D. Francisco González Chermá á los individuos de la Guardia civil que prestaban en Astana el servicio propio de su instituto: Considerando que de esta imputación falsa es responsable el autor de la misma por haberla consignado voluntaria é indebidamente, cuando del hecho se hallaba conociendo el Tribunal competente, etc.» (Sentencia de 8 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 13 de Mayo, páginas 246 y 247.)—Igual doctrina, referente á idéntico caso, se consigna en términos aún más explícitos, si cabe, en otra Sentencia posterior: «Considerando que es calumnia la falsa imputación de un delito de los que dan lugar á un procedimiento de oficio: Considerando que en el artículo titulado «Un guardia civil que mata» se imputa á los individuos de este benemérito Cuerpo, que prestaban en Artana el servicio propio de su instituto, la perpetración de un bárbaro asesinato, significando como prudente su traslación: Considerando que el asesinato es delito grave, y que de la falsedad de esta imputación debe responder el autor de la misma, porque la ha consignado voluntaria y arbitrariamente cuando sobre el hecho se estaba siguiendo causa y se hallaba el proceso en sumario: Considerando que no delinque el que obra en cumplimiento de un deber ó en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio ó cargo, y que el Tribunal competente de la jurisdicción de Guerra así lo estimó, absolviendo unánimemente al Guardia civil Francisco Rives y Rives, con arreglo á lo que dispone el art. 7.º, núm. 11 del Código Penal militar: Considerando, por lo expuesto, que es falsa la imputación del delito de asesinato, y que demostrada esta falsedad por un fallo ejecutorio, el autor de la imputación es reo de calumnia: Considerando que la mera relación de los hechos ocurri-

dos en Artana á las ocho y media de la noche del sábado 31 de Julio de 1886 no es el origen de la acusación de calumnia, sino la calificación de estos hechos, producida por el articulista; y que por consiguiente carecía de pertinencia la prueba anunciada sobre los mismos, según lo estimó el Tribunal sentenciador, apreciación firme é indiscutible, por no haberse dado lugar al recurso interpuesto por quebrantamiento de forma, del cual ni directa ni indirectamente puede conocer esta Sala, exceptuados los procesos en que la sentencia definitiva imponga la pena de muerte: Considerando, por tanto, que en la resolución reclamada no han sido infringidos los artículos 1.º, 12 y 467 del Código penal, porque el recurrente es autor confeso de la imputación calumniosa; y que no se puede alegar la infracción del art. 470, párrafo primero, porque la cuestión relativa á esta disposición legal ha sido irrevocablemente resuelta: Considerando que en materia criminal no es dado invocar como infringidas, para los efectos de la casación, ni las doctrinas jurídicas, ni la jurisprudencia preexistente; y que aun supuesta su autoridad, carecería de aplicación al caso procesal, porque González Chermá ha sido debidamente oído en este juicio, porque no ha debido serlo ante el Consejo de Guerra, al que no estaba sometido, y porque la calumnia por él producida lo ha sido clara y directamente contra personas determinadas: Considerando que aun aceptados todos los motivos de casación y excluida la calificación de calumnia, no podría prosperar el recurso, porque habiéndose interpuesto con arreglo al núm. 1.º del artículo 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, bajo la atribución de no constituir delito el hecho procesal, decaería este concepto y quedaría la reclamación desautorizada; pues si el escrito origen del procedimiento no fuera calumnioso, sería evidentemente constitutivo de injuria grave, etc.» (Sentencia de 28 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 16 de Junio, páginas 294 y 295.)

**CUESTION IV.** *El que en presencia de otras personas dice que Fulano de Tal, siendo Alcalde años antes, recibió de la Diputación provincial una determinada cantidad de la prorrata de aguardientes, de cuya inversión no dió cuenta ni razón alguna, ¿será responsable del delito de calumnia?*—La Audiencia que entendió del caso absolvió al autor de la imputación, fundándose en que tales palabras y concepto no constituían injuria ni calumnia, y si sólo acusaban la falta de una formalidad exigida por la ley de Ayuntamientos, en el capítulo que trata de la recaudación, distribución y cuenta de los fondos municipales. Mas, interpuesto contra dicha sentencia recurso de casación por el querellante particular, por infracción del art. 467 del Código, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar á él*: «Considerando que para que haya calumnia es preciso que exista el hecho concreto de atribuir falsamente un delito de los que dan lugar á procedimiento de oficio: Considerando que la imputación terminante hecha por D.... á D...., de que durante fué Alcalde en el bienio de 1879 á 1881 no dió cuenta ni razón alguna de la inversión de 2.492 pesetas 22 céntimos que de la prorrata de aguar-



diente había recibido de la Diputación provincial, revela seguramente en el procesado la voluntad y ánimo de perjudicar la reputación y crédito de la persona aludida, siendo, por tanto, calumniosa dicha imputación. Considerando que, á ser cierto el hecho atribuido al D....., tendría su sanción penal en el párrafo final del art. 407 del Código penal, en cuya virtud la calumnia proferida es relativa á delito menos grave: Considerando, en consecuencia de lo expuesto, que la Audiencia sentenciadora ha cometido el error de derecho é infringido el art. 469, núm. 2.º, del indicado Código, invocado en el recurso, etc.» (Sentencia de 29 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 6 de Septiembre, página 121.)

**CUESTION V.** *La afirmación hecha en una hoja impresa de que en la farmacia del Doctor Tal se despachó una sustancia por otra de propiedades físicas y químicas diferentes y de efectos y acción fisiológica antagónicos, callando que sobre este mismo hecho se formó algunos años antes una causa que terminó por sobrecimiento libre, ¿será constitutiva del delito de calumnia, que define el artículo 467 del Código?—¿Constituirá además el de injurias las apreciaciones que en dicha hoja se hayan sobre la falta de moralidad que á juicio de su redactor revela el expresado hecho?—*La Sala I.ª de la Audiencia que entendió de este asunto estimó que los hechos expuestos constituían los dos expresados delictos. El Tribunal Supremo, al decidir el recurso de casación interpuesto por la defensa del procesado, declaró que sólo existía *hecho calumnia*: «Considerando que el delito de calumnia lo constituye, según el art. 467 del Código penal, la falsa imputación de un delito de los que dan lugar á procedimientos de oficio: Considerando que al decirse en el impreso materia de estos procedimientos que en la botica del Doctor..... se despachó naftalina en vez de naftol, agente terapéutico de propiedades físicas y químicas diferentes, no menos que antagónicos sus efectos y sus acciones fisiológicas, y añadirse que no fué posible el engaño por los conocimientos del médico que recetó, callando el resultado que tuvo el procedimiento judicial que por tal suceso se principió siete años antes, para afirmar que se dió una sustancia por otra, á pesar de lo que el establecimiento continuaba funcionando como si tal hecho no hubiese sucedido, de cuyos términos, y singularmente de los finales del escrito, resulta patente y clara la aservación de que en la botica del Doctor..... se sustituyó un medicamento por otro, no por error más ó menos disculpable, sino por engaño, cuyo hecho, á ser cierto, constituiría el delito público previsto en el art. 353 del Código penal, que castiga á los farmacéuticos que sustituyen unos medicamentos por otros; imputación hecha directamente al Doctor....., á cuyo proceder se atribuye su realidad, productora de responsabilidad, aun siendo repetición de la que originó un proceso terminado por sobrecimiento libre, por no limitarse el escrito á referir tal hecho, sino por afirmar y consiguientemente imputar de nuevo sin probarlo, á pesar de esta resolución judicial, el concreto á que hubo de referirse: Considerando que si el Tribunal sentenciador, al apreciar el hecho antes

referido como constitutivo de calumnia, no ha cometido la infracción legal que el recurrente le atribuye, ha infringido los artículos 471, 472 y 473 del Código, al declarar la existencia además del delito de injuria, puesto que el concepto de que la deriva se halla estrecha é íntimamente enlazado con el de la calumnia, y patentiza ésta y aun le da carácter, toda vez que, en realidad, la falta de moralidad que se supone se refiere á lo que concretamente se imputa, etc.» (Sentencia de 22 de Junio de 1888, publicada en las *Gacetas* de 28 y 29 de Septiembre, páginas 200 y 201.)

**CUESTION VI.** *La imputación hecha por una mujer á otra de haber entrado en su casa para robarla, añadiendo que tenía sobre la mesa de 600 á 700 duros, y que no entraría sin duda para ver á su marido ni para rezar, será suficientemente concreta para constituir el delito de calumnia?—La circunstancia de ser cuñadas la ofensora y la ofendida y de habitar en la misma casa, aunque haciendo vida separada, será obstativa á la existencia de dicho delito de calumnia, por tratarse de hermanos afines y comprenderles la acepción de responsabilidad criminal que determina el artículo 580 del Código?—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa sobre el primer punto y la negativa en cuanto al segundo: «Considerando que la imputación concreta hecha por.....áda de haber entrado en su casa para robarla, añadiendo que tenía sobre la mesa 600 á 700 duros, y que no entraría aquélla pión y á..... marido de la....., ni para rezar, es imputación de delito resguizable de oficio, sea de hurto ó de robo, constitutiva cons del temente, supuesta su falsedad, de calumnia; respecto de lo no tiene aplicación ninguna la disposición del art. 580 del Código penal, ya porque entre los delitos á que se refiere este artículo no se encuentra el de calumnia, ya porque de todas suertes, aunque.....y....., casadas con dos hermanos, habitaban en la misma casa, vivían separadamente, etc.» (Sentencia de 22 de Junio de 1888, publicada en *Gaceta* de 29 de Septiembre, página 205.)*

**CUESTION VII.** *¿Cabe sostener válidamente que la imputación hecha á una mujer, de «que había echado dos criaturas al acusado», no es constitutiva de calumnia, porque la expresión «criaturas» es genérica y comprende todo lo que es obra de la Creación, y aun suponiéndola referente á personas, no se dice si eran hijos de la ofendida ó extraños, si se echaron vivos ó muertos, ó si eran tan solo fetos?—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que la imputación hecha por Maria García á Elvira Griño, refiriéndose con la palabra «criaturas» á seres humanos, como evidencian las circunstancias del caso y la composición de la frase en que consiste, tiene el sentido y significación clara de acto punible, contrario al honor y al deber, y no puede por lo mismo ser estimada, como pretende el recurrente, en el puramente gramatical, porque para ello sería preciso prescindir del que generalmente se le atribuye, y desnaturalizar un concepto que debe ser apreciado en su acepción más usual; Y considerando que tal imputación es de delito público, ya se entienda de infanticidio por acción directa, por menos aceptada cooperación,*



ó por mero encubrimiento, ya de parricidio, de asesinato ó de homicidio en cualquiera de estos grados de participación; y aun también en el de infracción de las leyes sobre inhumaciones, previsto en el Código penal, etc.» (Sentencia de 15 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 31 de Diciembre, páginas 292 y 293.)

**CUESTION VIII.** *Cuando se ha justificado la certeza del hecho punible, perseguible de oficio, imputado á un tercero, y procede, por tanto, la exención de toda pena al imputador, con arreglo al artículo 472 del Código, cabrá alegar en casación que semejante imputación, ya que no constituye calumnia, por no ser falsa, es constitutiva, por lo menos, del delito de injuria grave, si ésta no ha sido objeto del procedimiento, ó de la sentencia dictada por el Tribunal á quo?—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que es calumnia, conforme al art. 467 del Código penal, la falsa imputación de un delito de los que dan lugar á procedimiento de oficio, quedando exento de toda pena el acusado de dicho delito si, según dispone el art. 470, prueba el hecho criminal que hubiere imputado: Considerando que es una verdad indiscutible que los procesados D....., D..... y D..... manifestaron en un comunicado inserto en el periódico titulado *EL.....*, que se publica en....., contestación á otro que había escrito el querellante D....., que éste, como Notario de dicho pueblo, se había ausentado durante el cólera, y que en dos actas de elección para Diputados á Cortes había cometido falsedad, faltando á la narración de los hechos verdaderos, y suponiendo la intervención de personas que no la habían tenido; pero como los tres extremos se hallan justificados á juicio del Tribunal sentenciador, que los declara probados, por modo evidente resulta que los acusados..... y consortes no se hacen responsables del delito mencionado de calumnia, porque no imputaron gratuita é infundadamente actos reprobados y penados por la Ley que no se hubieran realizado: Considerando que en el recurso deducido por la representación de D..... se alega también en segundo lugar que ya que dichas imputaciones no se declaren calumniosas, siempre determinan una injuria grave, digna de represión y castigo; y no se tiene en cuenta que si han sido objeto del mismo procedimiento, lo cual es dudoso y controvertible, la Audiencia, de una manera expresa y terminante, la ha descartado de la sentencia que ha pronunciado; y esta omisión, que hubiera podido dar lugar á un recurso por quebrantamiento en la forma, nunca autoriza el de infracción de ley, que es el interpuesto á nombre de dicho.....: Considerando, en virtud de lo expuesto, que la Audiencia de....., al absolver en la sentencia que ha dictado á los procesados D....., D..... y D....., fundándose en que han justificado las imputaciones hechas al querellante D....., no ha infringido los artículos del Código 467, 468, y 470, en relación con el 314, números 2.º y 4.º, y con el 123 de la ley Electoral de 28 de Diciembre de 1878, ni incurrido, por consiguiente, en el error de derecho que señala el núm. 2.º del artículo 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, que con notorio desacierto se invoca en el recurso, etc.» (Sentencia de 13 de Oc-*

tubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 19 de Noviembre, páginas 320 y 321.)

## CAPÍTULO II

### Injurias.

#### Art. 471.

ES INJURIA TODA EXPRESIÓN PROFERIDA Ó ACCIÓN EJECUTADA EN DESHONRA, DESCREDITO Ó MENOSPRECIO DE OTRA PERSONA.

**CUESTION I.** *¿Cuál es la nota característica que determina la existencia del delito de injurias?*—El Tribunal Supremo ha declarado que para que exista éste es indispensable que la acción que se ejecute ó las frases que se proferan lleven la intención de lastimar á terceras personas de alguna de las maneras determinadas en el art. 471 del Código: «Considerando que el antecedente de existir en tramitación un pleito sobre cumplimiento de un contrato entre D. Carlos Alvarez, como demandante, y D. José María López, como demandado; y la casual ocasión de haberse hallado en la calle y entablado conversación sobre el negocio quita gravedad é importancia á la expresión que en el calor de la disputa y exaltación de ánimo á que llegaron dirigió Alvarez á su contrario, de que pretendía quedarse con lo suyo y lo había puesto en el caso de tener que entablar un pleito para lograr le pagase lo que le debía, puesto que impensado arranque fué más que un agravio la expresión de una queja proferida sin intención ni objeto de ofender, por lo que al apreciar el hecho en estos términos la Sala sentenciadora, no ha infringido, como en el recurso se supone, los artículos 471, 472 y 474 del Código penal, ni incurrido en el error de derecho que el recurrente le atribuye, etc.» (Sentencia de 5 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 23 de Noviembre, pág. 335.)

**CUESTION II.** *La palabra «fanfarrón» constituye injuria?*—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de San Sebastián, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo, á petición de parte, por infracción del art. 471 del Código: «Considerando que para que exista injuria, según el art. 471 del Código penal, es necesario se profiera una expresión en deshonra, descrédito ó menosprecio de una persona, y la de *fanfarrón*, que sólo significa hacer alarde de lo que no se es, dirigida por los recurrentes á D. Francisco Salaverria, no reúne ninguna de aquellas condiciones, ni perjudica la fama, crédito ni interés de la persona á quien se dirige, por lo que no constituyendo verdaderamente injuria, la Audiencia, al apreciar su existencia en el hecho de autos, ha infringido ciertamente al aplicarlos el artículo del Código ya citado, é incurrido en el error que se le atribuye en el recurso: Considerando, además, que el hecho de haber los recurrentes dirigido al mismo D. Francisco Salaverria la amenaza de que habían de sa-



carle las tripas y el de enviarlo atado á la cárcel, encerrándolo en el peor departamento sin motivo conocido, si bien pueden constituir delitos públicos que es necesario depurar, no el de injuria, único de que se ha tratado y conocido en estos procedimientos, etc.» (Sentencia de 3 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 4 de Enero de 1888, pág. 1.)

**CUESTION III.** *La imputación hecha á un Procurador, de que «obra con poderes falsos,» será constitutiva de injuria ó calumnia?—Si es lo primero, deberá calificarse de grave la injuria?*—El Tribunal Supremo ha declarado que semejante imputación no constituye calumnia, pero sí injuria grave: «Considerando que la imputación dirigida por el recurrente al Procurador D...., diciéndole: «Á Ud. ya le arreglaré yo por haber obrado con poderes falsos,» es una imputación gravemente injuriosa, porque afecta en gran manera á la rectitud y moralidad con que debe ejercerse dicho cargo, y que no reviste el carácter de calumniosa por la vaguedad con que la hizo el penado, sin concretar detenidamente el hecho á que pudo referirse, cual fuera preciso para su calificación y existencia, en su caso, de la calumnia, sólo apreciable en relación á un delito específicamente señalado, etc.» (Sentencia de 10 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 12 de Abril de 1888, pág. 97.)

**CUESTION IV.** *El que, después de un altercado habido entre un hermano suyo y un sujeto, dice en alta voz que «los.... (aquí el apellido de la familia de éste) son unos canallas y ladrones,» podrá eximirse de la pena del delito de injurias graves que constituyen estas expresiones, alegando que la injuria debe referirse á persona determinada, y que aquellas palabras no fueron dirigidas concretamente al susodicho sujeto?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que la imputación de un delito de los que no pueden originar un procedimiento de oficio, por no haber sido determinadas sus circunstancias, constituye injuria grave; y que esta misma calificación jurídica comprende la ofensa dirigida, como la anterior, á personas de una familia ó apellido, llamándoles canallas y ladrones: Considerando que los accidentes del caso procesal determinan claramente cuál sea la persona ofendida, y que, aun faltando este esclarecimiento, no dejaría de ser justiciable el hecho, á querella de alguno de los individuos de la familia que ha sido notoriamente ofendida: Considerando que la posible multiplicidad de querellas no excluye la responsabilidad del acto punible: Considerando, por consiguiente, que la Sala sentenciadora, al calificar como delito de injuria grave el caso procesal y al imponer la pena congruente con esta calificación, no ha infringido los artículos 471, 472, núm. 2.º, y 473, párrafo segundo del Código penal, etc.» (Sentencia de 24 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 20 de Abril de 1888, pág. 132.)

**CUESTION V.** *La circunstancia de haberse proferido unas palabras injuriosas en un sitio apartado, en conversación particular, al lamentarse el injuriador de la conducta que con él observaban el ofendido y su familia, será parte á despojar aquéllas de*

*todo carácter delictivo?*—Hablando Joaquina López Puertas, vecino de Lanjar, con el Secretario del Juzgado municipal, en casa del mismo Juez, hubo de lamentarse de lo mal que con ella procedían D. Marcelino Arauce, su hermano y sus sobrinos, de quienes dijo que eran unos canallas y unos ladrones, y seguida causa por injurias á querrela de Arauce, la Audiencia de Almería absolvió á la procesada, fundada en que el sitio, motivo y forma en que se pronunciaron aquellas palabras las despojaban de todo carácter injurioso. Mas interpuesto contra dicha sentencia recurso de casación por la defensa del querellante particular, por infracción del art. 471 del Código, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar á él*: «Considerando que las calificaciones de canallas, ladrones y asesinos, pronunciadas contra determinada persona y contra individuos de su familia, constituyen el delito de injuria grave, según ha estimado el Tribunal sentenciador: Considerando que siendo autora de este delito la procesada Joaquina López, incurrió en responsabilidad criminal, por no resultar de los hechos probados circunstancia alguna eximente: Considerando que las acciones y omisiones penadas por la Ley se reputan siempre voluntarias, á no ser que conste lo contrario: Considerando que la enemistad que pueda existir entre el ofensor y la persona ofendida no excusa de responsabilidad, ni prueba falta de intención, como erróneamente opina el Tribunal á quo, después de consignar que la procesada pronunció aquellas palabras *con conciencia de su notoria inexactitud*: Considerando, por consiguiente, que la sentencia reclamada contiene error de derecho, no penando como delito un acto que lo constituye, con infracción de los artículos 472 y 473 del Código vigente, etc.» (Sentencia de 24 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 6 de Mayo, pág. 186.)

**CUESTION VI.** *¿Cabe calificar y penar como delito de injurias la imputación de hechos que, á ser ciertos, constituirían un delito perseguible de oficio, y por lo tanto, no siéndolo, el de calumnias?*—D....., telegrafista del ferrocarril de....., dirigió una carta á su jefe D....., en la que expresaba: «Habiendo recibido orden de dormir en el gabinete, ayer, á las diez y media de la noche, se presentó en mi cuarto el Sr. D....., mostrándose muy amable y pasándome las manos por mis partes; y temeroso de que hiciera conmigo lo que dicho señor intentó hacer con el Sr..... y con el Sr....., me eché fuera de la cama, y valiéndome de carácter, hice que dicho señor moderara sus impulsos, y además, como á mis voces se sintieran pasos en las habitaciones inmediatas, el Sr..... se marchó escapado, cerrando yo las puertas por dentro para evitar compromisos. Vergüenza me da dar á V. conocimiento de estos hechos; pero V. comprenderá que mi situación al lado del Sr..... es ya demasiado comprometida, y por lo mismo, ruego á V. se me traslade á cualquiera estación donde pueda prestar servicio, pues en las oficinas del.... estaré expuesto á que dicho señor cometa conmigo un acto indecoroso como el que intentó hacer. Ruego á V. que no lo eche en olvido, y queda de V. afectísimo S. S. Q. B. S. M., etc.» Instruida causa por el delito de injurias graves á instancia del sujeto aludido en dicha



carta, la Sala sentenciadora, calificando el hecho de injurias graves hechas por escrito y sin publicidad, de que era autor el procesado D....., concurriendo sólo la circunstancia atenuante de ser, á la comisión del delito, mayor de quince y menor de diez y ocho años: Vistos los artículos 1.º, 11, 18, 9.º, circunstancia 2.ª, 86, 471 y 473 del Código penal, le condenó á la pena de 125 pesetas de multa, con el apremio personal correspondiente y mitad de costas. Mas interpuesto contra dicha sentencia recurso de casación por la defensa del procesado, citando: 1.º, el art. 471 del Código penal, porque siendo condición esencial de la injuria la intención de que la expresión proferida ó acción ejecutada sea con menosprecio de la persona, en el caso actual falta esa intención; 2.º, el art. 472, en relación con el 456 del expresado Código, toda vez que debió aplicarse este último, supuesto que lo que se imputaba era un delito comprendido en el mismo; y 3.º, el art. 1.º del repetido Código, porque la sentencia castigaba como delito hechos que no lo son, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar* al expresado recurso: «Considerando que los actos imputados por el recurrente á D....., caso de ser ciertos, constituirían el delito previsto y penado en el art. 456 del Código penal, y de no serlo, el de calumnia, consistente en la falsa imputación de un delito de los que dan lugar á procedimiento de oficio: Considerando que en conformidad á lo dispuesto en el art. 470 de dicho Código, el acusado de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado, y que habiendo omitido la Sala sentenciadora en la sentencia recurrida el resultado de las probanzas suministradas, faltan los datos necesarios para poder declarar la culpabilidad ó inculpabilidad del procesado, debiendo ser absuelto en su consecuencia: Considerando que por lo expuesto y por no desprenderse del contenido de la carta dirigida por el recurrente á su jefe D....., la intención de injuriar á D....., no merecen estos hechos, en el presente caso, la calificación de injurias graves hecha por el Tribunal sentenciador: Considerando que al no estimarlo así la Sala sentenciadora ha incurrido en el error de derecho que se le atribuye ó infringido los artículos del Código penal á que el recurso se refiere, etc.» (Sentencia de 30 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 7 de Mayo, pág. 198.)

**CUESTION VII.** *El periódico que al ocuparse de la publicación por otro de un programa de fiestas que habían de celebrarse en la población, programa que expresó podía anticiparlo á sus lectores casi de una manera oficial, dice que «aquella publicación constituía un timo inecalicable, pues que ni la Junta de festejos ni el Ayuntamiento podía autorizar á nadie para publicar lo que no estaba acordado», será responsable del delito de injurias?*—De injurias graves calificó el expresado hecho la Sala de lo criminal de la Audiencia de Zaragoza, la que condenó al autor del suelto á dos años, cuatro meses y un día de destierro, multa de 250 pesetas y costas. Mas interpuesto contra dicha sentencia recurso de casación por la defensa del procesado, que coadyuvó en el acto de la vista el Ministerio fiscal, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar* á dicho recurso: «Considerando que el concepto jurídico

de la injuria, según lo define el art. 471 del Código penal, no atribuya exclusivamente en la expresión proferida ó acción ejecutada, sino en la intención de causar deshonra, descrédito ó menosprecio á la persona á quien se dirige: Considerando que la voz *timo*, según el sentido general del suelto objeto de la querrela, no tiene otra significación que la de negar veracidad al programa de los festejos, que antes de acordarse por la Comisión encargada de ellos publicó la Revista *El Chiquero*, y en cuyo sentido no revela intención de causar deshonra ni menosprecio al Director de la expresada Revista, y, por consiguiente, no es constitutiva del delito de injuria, como con error estima la Sala sentenciadora, etc.» (Sentencia de 13 de Abril de 1888, publicada en las *Gacetas* de 15 y 16 de Mayo, páginas 260 y 261.)

**CUESTION VIII.** *Para que exista el delito de injuria contra persona determinada, ¿basta que se le aluda y señale con detalles tales que no quepa duda acerca de su identidad?*—El Tribunal Supremo ha declarado que esto último es suficiente para que el injuriado pueda ejercitar su acción: «Considerando que carece de fundamento legal el primero de los motivos de casación alegados, porque no es preciso que al injuriado se le llame por su propio nombre para que pueda ejercitar la acción que le da la Ley, si se le alude de tal manera y con tales detalles que su persona queda tan determinada y conocida como si se hubiera pronunciado ó escrito su verdadero nombre: Considerando, en orden al segundo motivo del recurso, que el Tribunal sentenciador ha declarado acertadamente que está determinada en el querellante la persona aludida en las frases que constituyen las injurias, porque la persona aludida con el nombre supuesto de D. Tuno Sancho Pintura es el querellante....., y es visto que no falta la determinación de la persona agraviada, etc.» (Sentencia de 13 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 3 de Agosto, pág. 35.)

**CUESTION IX.** *Aun cuando las palabras de «ladrona de mis intereses y de mi sangre, que la Justicia te ha hecho devolver un banco que me habías quitado,» dirigidas por una mujer á otra, sean en sí mismas ofensivas é injuriosas, ¿quedará desvirtuada el concepto injurioso de las mismas por la circunstancia probada de que la que tales expresiones proferió hubo de referirse concretamente á los hechos determinados de haberla privado la aludida, antes de terminar el plazo del arrendamiento, de una finca que llevaba en aparcería con su marido, y de haberse llevado un banco de moter oliva, cuya devolución hubo de conseguir acudiendo á la Autoridad del Juez municipal?*—El Tribunal Supremo ha declarado que tal circunstancia hace desvanecer la injuria que, sin ella, constituirían dichas palabras: «Considerando que tomadas en conjunto para poder apreciarlas debidamente las expresiones dirigidas por la procesada á la recurrente, y explicada con una la idea que envuelven las otras, atenúa notablemente la importancia de la ofensa que aisladamente ofrecería la imputación de ladrona de mis intereses y de mi sangre, pues concretada á los hechos determinados de haberla privado la recurrente, antes de cumplir el



término del arrendamiento, de una finca que llevaba en aparcería con su marido, y haberse ella visto obligada á recurrir á la autoridad del Juez municipal para conseguir de aquélla la devolución de un banco de moler oliva que había quedado en la finca, y que la querellante había sacado de la misma y llevádoselo á otra, estas circunstancias, que se dan como probadas en la sentencia recurrida, y que son indiscutibles por lo tanto, hacen variar la naturaleza jurídica de las indicadas expresiones y que se desvanezca la injuria que sin ellas constituiría ciertamente; y como éste es el juicio desenvuelto y sostenido por el Tribunal sentenciador, que no ha incurrido con ello en error ni cometido las infracciones legales que supone la recurrente, etc.» (Sentencia de 26 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 17 de Mayo, páginas 273 y 274.)

**CUESTION X.** *El que ocupándose en un artículo de periódico del dictamen emitido por unos Facultativos en asunto de interés público, dice entre otras cosas: «Esto afirman cinco hipócritas (léase Hipócrates) en su informe, con el cinismo que dan las conveniencias del estómago», etc., ¿podrá eximirse de la pena del delito de injuria que tales expresiones y conceptos indudablemente constituyen, alegando el derecho natural y legítimo de controversia sobre dictámenes ó opiniones científicas?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que la Audiencia de lo criminal de Huelva, al condenar al recurrente como autor de tal delito por serlo del escrito origen del proceso, no ha cometido las infracciones de ley que se alegan, porque el hecho de atribuir á los Médicos querellantes la emisión de sus informes, no á los dictados de su saber y de su conciencia, sino á móviles absolutamente reprobados, de todo punto inconciliables con la rectitud de intención propia del hombre de honor en asunto de verdadera importancia, es tanto como imputarles la grave falta de moralidad de haber puesto voluntariamente su carácter profesional y técnico, con apariencias de lealtad, al servicio de intereses defendidos por obtener ventajas personales, lo cual afecta á su crédito y honra, pudiendo perjudicar de manera considerable su fama y reputación; y Considerando que por extraordinarias que fueran, caso de serlo, las circunstancias y ocasión del delito y el motivo que le determinara, esas circunstancias y ocasión, como accidentes del mismo, no afectan á su integridad jurídica, porque el hecho que le constituye no consistió en el ejercicio del natural y legítimo derecho de controversia sobre dictámenes ó opiniones científicas; sino en el exceso ilegal de atribuirles origen extraño al técnico y á la buena fe con que todas las opiniones pueden ser profesadas siquiera por juicio existimado, etc.» (Sentencia de 17 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 25 de Agosto, páginas 95 y 96.)

**CUESTION XI.** *¿Será justiciable la injuria aun cuando se infera en carta particular?*—El Tribunal Supremo ha resuelto una vez más la afirmativa: «Considerando que por haberse inferido las injurias en carta particular no dejan de ser justiciables, porque como tiene dicho esta Sala con repetición, para que pueda pensarse la injuria no es necesario que se haga con publicidad, basta

que se hayan proferido las frases que la constituyan, para que tenga aplicación el art. 473 del Código penal, etc.» (Sentencia de 28 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 1.º de Octubre, pág. 215.)

**CUESTION XII.** *El decir en un artículo de periódico que «la deslealtad, la falsía y la facilidad en desfigurar la verdad» son las notas dominantes del carácter de una persona, ¿constituirá el delito de injurias, si dicho aserto no se refiere á sus cualidades morales, sino á sus procedimientos dentro del partido político en que milita?*—Así lo estimó la Sala de lo criminal de la Audiencia que conoció del expresado hecho, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por indebida aplicación en este caso de los artículos 471, 472 y 473 del Código penal: «Considerando que la Sala sentenciadora, al dar por reproducido el escrito originario de la querrela, como único motivo de imputabilidad y de la imposición de pena, debió fundar su juicio en el texto íntegro y en el verdadero espíritu de aquel artículo periodístico, sin atender exclusivamente al valor gramatical de algunas palabras ó expresiones, que aisladamente transcritas no pueden revelar su genuino concepto y transcendencia; Considerando que el aserto de ser notas dominantes del carácter del querellante «la deslealtad, la falsía y la facilidad en desfigurar la verdad» no se refiere á sus cualidades morales, sino á sus procedimientos y actos dentro del partido político en que respectivamente militan el acusador y el acusado; Considerando que así lo demuestran los párrafos precedentes del artículo mencionado á que alude el Tribunal sentenciador, según los cuales, y según expresa el autor del escrito, el motivo de la publicación es para demostrar qué clase de gente ataca al articulista y á sus correligionarios, les niega la patente de carlistas y les llama *mestizos*; Considerando que si en el curso de la polémica ha podido haber dureza y apasionamiento por parte del procesado, los hechos procesales significan que su propósito fué criticar la conducta política del acusador, sin que haya sido su intención vulnerar la honra, crédito y aprecio personales del mismo; Considerando, por consiguiente, que no existen los elementos característicos del delito de injuria, y que el Tribunal á quo, no estimándolo así, ha incurrido en error de apreciación jurídica, é infringido por indebida aplicación los artículos 471, 472 y 473 del Código penal, etc.» (Sentencia de 22 de Septiembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 30 de Noviembre, pág. 253.)

**CUESTION XIII.** *En un artículo de periódico se consigna que «entre los firmantes de cierta carta protesta no había más que dos personas respetables, un ladrón de reses y un falsificador de firmas, y que los demás eran presidiarios del Ingenio España:» ¿cabe absolver al autor de dicho escrito de la querrela interpuesta por dos de los firmantes de la expresada carta, porque aquél haya manifestado que los frases de ladrón de reses y falsificador de firmas no iban dirigidas á los querellantes, y que la de «presidiarios del Ingenio España» por el tono irónico del suelto no puede considerarse ofensiva, perdiendo toda su fuerza toda vez que en el Ingenio España no hay presidiarios, y que además en los delitos de*



*injurias sólo puede procederse á instancia de los injuriados?*—Fundada en estas consideraciones la Audiencia de la Habana absolvió al autor del artículo. Mas interpuesto contra dicha sentencia recurso de casación por los querellantes, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar á él*: «Considerando que al consignarse en el artículo «Política meunda,» publicado en Matanzas en el periódico *El Español* correspondiente al día 4 de Mayo del año último, que entre los firmantes de la carta protesta de Cervantes no había más que dos personas respetables, el uno ladrón de reses y el otro falsificador de firmas, siendo los demás presidiarios del ingenio España, dichos conceptos injuriosos fueron dirigidos á los querellantes por figurar sus firmas en ella, ya fueran unas á otras las imputaciones á ellos referidas, porque si grave y ofensiva es la imputación de ser ladrón de reses y falsificador de firmas, lo es mucho más, después de conceptuar á éstos como los más respetables, la de presidiarios aplicada á los demás firmantes y cuya situación puede tan sólo ser debida á haber cometido delitos de mayor gravedad y transcendencia; Considerando que las expresadas imputaciones se tienen en el concepto público por afrentosas, perjudicando gravemente la honra, crédito y buen nombre de los agraviados, y que constituyen, por lo tanto, el delito de injurias graves hechas por escrito y con publicidad por medio de la imprenta; Considerando que al no haberlo estimado así la Sala sentenciadora ha incurrido en el error de derecho que se la atribuye é infringido los artículos del Código penal de Cuba y Puerto Rico á que el recurso se refiere, etc.» (Sentencia de 23 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 6 de Enero de 1889, página 8.)

**CUESTION XIV.** *El atribuir en un comunicado de periódico á determinada persona «la falta de ilustración y experiencia necesarias para ser jefe de una agrupación política y el propósito de hacer pronta y segura fortuna instalando industrias y establecimientos mercantiles en perjuicio de los pequeños industriales que carecían de medios para hacerle la competencia», ¿constituirá una injuria en el sentido jurídico de esta palabra?*—Así lo estimó la Sala de lo criminal de la Audiencia de la Coruña, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por indebida aplicación del art. 471 del Código: «Considerando que siendo como es la injuria toda expresión proferida ó acción ejecutada en deshonra, descrédito ó menosprecio de otra persona, es indudable que las palabras y conceptos dirigidos por el recurrente á D. Francisco Pardo en el periódico *El Clamor del País*, y que la Sala sentenciadora califica de injuriosas no revisten este carácter, porque limitándose á hacer apreciaciones, acerca de la falta de ilustración é inexperiencia del Pardo para ser jefe de una agrupación política, y al propósito de crearse pronta y segura fortuna instalando industrias y establecimientos mercantiles en perjuicio de los pequeños industriales, que carecían de medios para hacerle competencia, no inferen con ello ninguna ofensa á su honor y crédito, y no son, por lo tanto, injuriosas en el sentido jurídico; Considerando que al no estimarlo así la Sala sentenciadora ha incurrido en el error de derecho que

enumera el núm. 1.º de la ley de Enjuiciamiento criminal, é infringido por indebida aplicación el art. 471 del Código penal, etc.» (Sentencia de 27 de Octubre de 1886, publicada en la *Gaceta* de 12 de Enero de 1889, pág. 15.)

**CUESTION XV.** *El decir en un periódico que «la empresa de un circo teatro se compone de masones, que ha sido construido con dinero de la Masonería con el objeto de crear en él un núcleo de propaganda anticatólica para alimentar la impiedad y organizar un foco de infección para descatolizar el pueblo y corromper las costumbres,» ¿constituye el delito de injurias?—No lo estimó así la Audiencia que conoció del expresado hecho, la que absolvió libremente al procesado. Mas interpuesto recurso de casación contra dicha sentencia por la parte querellante, citando como infringidos los artículos 471 y 472 del Código, declaró el Tribunal Supremo haber lugar á él: «Considerando que, examinado con el debido detenimiento el artículo publicado en el periódico *La Cruz de la Victoria*, y que dió origen á la presente causa, si bien en su concepto general aparenta inspirarse en la idea de atacar los actos y emblemas de una asociación masónica, por creerlos contrarios al dogma católico, y censurar las representaciones teatrales opuestas á la moral, lo cual es perfectamente lícito, y por ello no se incurre en sanción penal, el suponer en el artículo como indudable y comprobado, con testimonios de irrecusable autoridad, que la..... se compone de masones, que lo edificaron con dinero de los masones, con el objeto de crear en él un núcleo de propaganda anticatólica para alimentar la impiedad en nuestro suelo, organizar un foco de infección para descatolizar la ciudad y corromper las costumbres, traspasa los límites de lo lícito en la discusión: pues claramente revela que el objeto que se propuso el articulista, con ocasión de combatir la inmoralidad y la herejía, al incluir innecesariamente para la discusión á la empresa constructora, no fué otro que el de atribuirle actos y tendencias ofensivas á su fama, pues cualesquiera que sean las ideas religiosas de los individuos que la componen, no puede desconocerse que semejantes imputaciones, en especial las que á la inmoralidad se refieren, son realmente en todas partes, y con especialidad en los puntos donde las creencias católicas se profesan por la inmensa mayoría, una ofensa verdaderamente afrentosa, cuyas consecuencias perjudican considerablemente su fama y crédito, y en este concepto constitutivas de injuria grave: Considerando que, según repetidas veces tiene declarado este Supremo Tribunal, para que las imputaciones injuriosas se reputen dirigidas á determinada persona no es necesario que ésta sea designada por su nombre, cuando se señalan datos por virtud de los cuales se precisa la persona ó personas injuriadas, y por lo tanto, refiriéndose el artículo á los individuos de la empresa constructora en el año de 1884, expresando que sus nombres los publicaba el periódico de la localidad *El.....*, como efectivamente dicho periódico publicó los nombres y apellidos de los querellantes por el concepto indicado, no cabe dudar que concreta y especialmente se dirigía á ellas la imputación: Considerando que al no estimarse por la Sala*



sentenciadora como constitutivas del delito de injuria grave las imputaciones contenidas en el artículo objeto del recurso, ha incurrido en el error de derecho que señala el núm. 2 del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, é infringido los artículos 471 y 472 del Código penal, etc.» (Sentencia de 21 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 10 de Marzo de 1889, páginas 49 y 50.)

### Art. 472.

#### Injurias graves.

**CUESTION I.** *Las siguientes palabras, dirigidas á una mujer casada: «Váyase V. de ahí, tía pellejo; vaya á hacer medicinas para matar á su marido, mala mujer; yo no hago lo que V., que es tirar de la capa á los hombres en la calle, de noche», ¿serán constitutivas del delito de injurias graves, á tenor de lo dispuesto en el artículo 472 del Código, ó simplemente de injurias leves?—El Tribunal Supremo ha declarado que la primera calificación es la procedente: «Considerando que el natural sentido de las frases proferidas por..... no es otro que el de atribuir á..... la gran falta de moralidad de requerir libremente á los hombres en la calle, haciendo además suposiciones ofensivas acerca de los propósitos de ésta con su marido, lo cual constituye evidentemente la injuria grave penada como delito en la sentencia reclamada, porque realmente ceden de modo transcendental en deshonra de la misma, etc.» (Sentencia de 8 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 31 de Diciembre, pág. 364.)*

**CUESTION II.** *Las palabras «zorrón de los Jardínillos y tía rabanera», aunque dirigidas por una mujer del pueblo á otra de igual clase, ¿deberán ser calificadas de injurias graves?—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que el único agravio que se determina en este recurso, fundado en el número 1.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, consiste en que, dada la clase y condición de Clara Villares y Ursula Fernández, las palabras que aquélla dirigió á ésta son inofensivas, por ser de uso natural y propio entre verduleras que riñen, y no puede decirse en este caso que cedan en deshonra y descrédito de la persona á quien van dirigidas; Considerando que si bien para apreciar si una expresión proferida ó acción ejecutada cede en desprestigio de la persona contra quien se dirige hay que tener presente, como elementos esenciales para calificar los hechos, no ya sólo el valor gramatical de las palabras que sirven de fundamento á la querrela, sino también, y muy principalmente, la condición de las personas, el grado de relaciones que tengan entre sí, el sitio, la ocasión y el motivo con que fueron proferidas las palabras que se dicen injuriosas, en el caso presente, las frases que dirigió Clara Villares á su compañera de oficio Ursula Fernández constituyen una injuria grave, porque ni la humildad de la ocupación á que ambas están dedicadas, ni*

el lenguaje sucio y hasta soez de la gente de plazuela, autorizan la imputación de la grave falta de moralidad que Clara Villares hizo á Ursula Fernández, etc.» (Sentencia de 18 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 11 de Mayo, páginas 227 y 228.)

**QUESTION III.** *El que, en carta particular dirigida á un Letrado que le habia reclamado el pago de honorarios, devengados en la defensa de cierta causa, dice que «le extraña mucho que tenga tan poca vergüenza de exigirle honorarios que habia ya satisfecho con exceso, y que si él á su vez no le pagaba éste, lo citaría ante los Tribunales por su mala reputación,» ¿será responsable del delito de injurias graves hechas por escrito y sin publicidad, definido en el art. 472 del Código y penado en el párrafo segundo del 473, ó lo será tan sólo de injurias leves, penables como falta, según lo dispuesto en el párrafo segundo del 474, por estar hechas sin publicidad?*—La Audiencia que conoció del asunto estimó esto último. Mas interpuesto contra esta sentencia recurso de casación por el querellante particular, citando como infringido el art. 471 del Código por no haberse aplicado, y el 474 por indebida aplicación, declaró el Tribunal Supremo haber lugar al expresado recurso: «Considerando que es injuria, conforme determina el artículo 471 del Código penal, toda expresión proferida en deshonor, descrédito ó menosprecio de otra persona, reputándose grave, según el núm. 2.º del 472 del mismo Código, la imputación de una falta de moralidad, cuyas consecuencias puedan perjudicar notablemente la fama, crédito ó interés del agraviado: Considerando que al consignar..... en la carta dirigida al..... que le exigía honorarios ya satisfechos, y que por lo mismo tenía poca vergüenza y aun le citaría á los Tribunales por su mala reputación, incurrió indudablemente en el delito de injuria grave anteriormente definido, pues es visto que las frases transcritas determinan calificativos en alto grado ofensivos, é imputan á aquel á quien se dirigen una falta de moralidad, suponiendo que pide cantidad que no se le debe, que ha de redundar de un modo extraordinario en perjuicio de su buena fama y crédito: Considerando que la Audiencia....., en la sentencia contra la que se recurre, se ha separado del criterio legal expuesto, y ha infringido, al aplicarlo, el art. 474, y los anteriormente citados del Código penal al dejarlos de aplicar, incurriendo en el error de derecho que con fundamento se invoca en el recurso, etc.» (Sentencia de 15 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 26 de Septiembre, páginas 183 y 184.)

Véase, además, la *Cuestión III* del art. 471.



## CAPÍTULO III

## Disposiciones generales.

## Art. 480.

PODRÁN EJERCITAR LA ACCIÓN DE CALUMNIA Ó INJURIA LOS ASCENDIENTES, DESCENDIENTES, CÓNYUGE Y HERMANO DEL DIFUNTO AGRAVIADO, SIEMPRE QUE LA CALUMNIA Ó INJURIA TRANSCENDIERE A ELLOS, Y EN TODO CASO EL HEREDERO.

**CUESTION.** *Para que el cónyuge heredero del agraviado difunto pueda querellarse por la injuria ó calumnia inferidas á este, ¿será preciso que las mismas trasciendan á su personalidad?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que para ejercitar la acción de injuria el heredero de la persona agraviada no es circunstancia indispensable que la ofensa trascienda al querellante, porque el art. 480 del Código penal en todo caso le concede este derecho; Considerando que D.<sup>a</sup>..... es heredera de D....., y que por consiguiente la Sala sentenciadora no ha infringido el precitado art. 480, etc.» (Sentencia de 11 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 10 de Mayo, páginas 220 y 221.)

## Art. 482 (párrafo segundo).

NADIE SERÁ PENADO POR CALUMNIA Ó INJURIA SINO Á QUERELLA DE LA PARTE OFENDIDA, SALVO CUANDO LA OFENSA SE DIRIJA CONTRA LA AUTORIDAD PÚBLICA, CORPORACIONES Ó CLASES DETERMINADAS DEL ESTADO, Y LO DISPUESTO EN EL CAPÍTULO V DEL TÍTULO III DE ESTE LIBRO.

**CUESTION.** *¿Deberá ser considerado el clero como clase determinada del Estado, á los efectos del párrafo segundo del artículo 482 del Código?*—A la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Febrero de 1885, inserta en el *Suplemento* 3.<sup>o</sup> (página 346), resolviendo afirmativamente la pregunta, hay que añadir otra posterior en que se establece igual doctrina: «Considerando que como consecuencia lógica y necesaria del precepto constitucional consignado en el art. 11 de la Ley fundamental del Estado, hay que reconocer la organización de la Iglesia católica con sus jerarquías é institutos en relación directa con aquél, tal como se encuentra establecida en España, cuyos miembros, los de la Iglesia, constituyen consiguientemente una clase oficial dentro del mismo Estado, siendo éste el fundamento de la autoridad reconocida de sus jerarquías para los efectos del Código penal, según

este Tribunal Supremo ha declarado en sentencias anteriores: Considerando que por ser evidentemente injurioso para el clero católico el artículo á que el presente recurso se refiere, cuya calificación no se discute, y por constituir el referido clero una determinada clase del Estado, según el fundamento consignado en el considerando anterior, la Audiencia de Santander no ha incurrido en el error de derecho que se la atribuye al procesar á su autor como responsable del delito de injurias graves, etc.» (Sentencia de 28 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 24 de Mayo, páginas 254 y 255.)

## TÍTULO XI

DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS.

### CAPÍTULO I

Suposición de parto y usurpación del estado civil.

#### Art. 483.

SUPOSICIÓN DE PARTO Y SUSTITUCIÓN DE UN NIÑO POR OTRO.

**CUESTION.** *La viuda que para impedir que los bienes de su marido pasasen á una hermana de éste, de conformidad con lo dispuesto en el testamento de un tío de dicho su marido, de quien procedían los precitados bienes, presenta en lugar suyo y con su propio nombre á otra mujer, acreditando por información ad perpetuam su estado de preñez y el subsiguiente nacimiento de un niño, que por el mismo medio hizo aparecer como nacido de ella, será responsable como coautora, ó simplemente como cómplice de ese delito de suposición de parto?*—El Tribunal Supremo ha declarado que la primera y más grave calificación es la que le corresponde: «Considerando que la suposición de parto y la sustitución de un niño por otro son delitos previstos y castigados en el artículo 483 del Código penal; Considerando que de los hechos que la sentencia recurrida reconoce como ciertos aparece evidente que al presentar D.<sup>a</sup> Josefa Boyal en lugar suyo á Josefa Fernández en la información *ad perpetuam* que promovió ante el Juzgado de Buenavista de esta Corte, para demostrar el estado de preñez en que había quedado al fallecimiento de su marido; á fin de que el niño que luego hizo aparecer por el mismo medio como nacido de ella, y que bautizó é inscribió en el Registro como hijo legítimo de ambos, pudiera heredar bienes que en otro caso correspondían á su cuñada D.<sup>a</sup> Engracia Ubach, no sólo



tomó con esos hechos una parte directa en la ejecución de ese plan, concebido con fines tan siniestros, de que ella sola iba á sacar partido, cooperando á más á su desarrollo por medio de la información, sin la cual no hubiera podido llevarlo á cabo, sino que, por el contrario, la inducción á la Fernández á que pasara por ella en el acto del reconocimiento judicial, y luego en el parto verificado á presencia de una comisión del Juzgado, tuvo ciertamente que partir de la misma; por todo lo que, bajo cualquier aspecto que se mire, tiene necesariamente que considerarse autora del delito de suposición de parto, que llevó á efecto hasta su complemento, y comprendida de lleno por lo mismo en el art. 483 del Código penal, etc.» (Sentencia de 31 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 8 de Mayo, páginas 201 y 202.)

## TÍTULO XII

### DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD.

#### Art. 495.

ENCIERRO Ó DETENCIÓN DE UNA PERSONA, PRIVÁNDOLA DE SU LIBERTAD, VERIFICADOS POR UN PARTICULAR.

**CUESTION.** *El encierro de un loco por su familia en una habitación donde permaneció durante algunos años amarrado con una cadena clavada en el suelo, pero que le permitía los movimientos necesarios para todas las operaciones naturales, y atendido además en su alimentación, como lo demostraba su estado físico, ¿constituirá el delito de detención ilegal, previsto y penado en el art. 495 del Código?—* Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de San Sebastián, que condenó á los autores del hecho á catorce años, ocho meses y un día de reclusión. Mas interpuesto por la defensa de los procesados recurso de casación contra dicha sentencia, que apoyó el Ministerio fiscal, por infracción de los artículos 495, 1.º, y 8, núm. 10 del Código penal, declaró el Tribunal Supremo haber lugar al expresado recurso por los fundamentos siguientes: «Considerando que es elemento jurídico del delito de detención ilegal, como de todo hecho justiciable, la lesión ó perturbación de un derecho; y cuando ésta no existe, ni en la intención del agente, ni en el resultado de su acción, no se comete el atentado contra la libertad humana que pena el art. 495 del Código, porque sin tales elementos, la detención no sería ilegal, y podría ser por parte del que la ejecutase, ó el ejercicio de un derecho, ó el cumplimiento de una obligación: Considerando que, no ya un derecho, sino un deber es el que tiene la familia del demente de sujetarlo, bien en su propia casa, bien en hospitales dedicados á

esta clase de enfermos; porque si tales precauciones no tomara el jefe de la familia ó guardador del demente, y en su defecto la sociedad, su estado de libertad podría ser peligroso á las personas y á las propiedades y aun al mismo enfermo. Considerando que los hechos probados de la enajenación mental de Lorenzo Irastorza, cuya enfermedad padeció también su difunto padre; la posibilidad de que pudiera tener alguna exaltación, y los más elocuentes aún de ser la madre, el hermano, los parientes y convecinos del pueblo los que sujetaron con la cadena al demente, evidencian que ni aquella madre, ni su otro hijo Juan Bautista, ya difunto, ni los demás que ayudaron á sujetar y amarrar al desgraciado enfermo, tuvieron intención de cometer ni cometieron el delito de detención ilegal; antes al contrario, la madre y el hermano del enfermo cumplieron un penoso deber, ya que por miedo á los gastos del expediente gubernativo no podían llevar al enfermo á un manicomio, y los demás que al acto concurrieron no hicieron otra cosa que prestar un servicio de amistad y de caridad á aquella infeliz madre, que demandó su auxilio. Considerando que también es de tener presente para la mejor apreciación y calificación de los hechos que se consignan como probados en la sentencia recurrida que al enfermo Lorenzo Irastorza se le halló en condiciones de satisfacer sus necesidades naturales, con un colchón y ropa para abrigarse, denotando su estado físico que estaba atendido en su alimentación; es decir, que aquella infeliz madre no era cruel ni abandonada para con su hijo, y que quizá era menor su dolor asistiendo y cuidando por sí misma á su desventurado hijo que si se hubiera despedido de él llevándolo á un hospital de dementes. Considerando, por lo expuesto, que al calificar y penar la Audiencia de lo criminal de San Sebastián como detención ilegal, prevista y castigada en el art. 495 del Código, los hechos que se expresan en la sentencia recurrida, ha incurrido en el error de derecho ó infracción legal que alegan los recurrentes, etc.» (Sentencia de 30 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 7 de Enero de 1888, páginas 37 y 38.)

## CAPÍTULO V

### Allanamiento de morada.

#### Art. 504.

ENTRADA EN MORADA AJENA CONTRA LA VOLUNTAD DE SU MORADOR.  
—AGRAVACIÓN DE PENA CUANDO EL HECHO SE EJECUTA CON VIOLENCIA Ó INTIMIDACIÓN.

**CUESTION I.** *Unos sujetos penetran en una casa saltando por una de sus ventanas, aprovechando para ello el momento en que sus moradores se encuentran fuera, ocupados en las faenas del*



*campo: aun cuando se les sorprenda y capture dentro de la misma casa, antes que hayan podido realizar acto alguno que evidencie sus propósitos, deberá calificarse el hecho de delito de allanamiento de morada, ó de tentativa de robo en casa habitada!*—La Sala de lo criminal de la Audiencia de la Coruña estimó lo primero. Mas á excitación del Ministerio fiscal recurrente, declaró el Tribunal Supremo lo segundo: «Considerando que el delito de allanamiento de morada se funda exclusivamente en el concepto de la inviolabilidad del domicilio, cuya garantía se establece por medio de la sanción penal señalada en los artículos que definen dicho delito, y sólo la cometen los que invaden la morada ajena contra la voluntad de su morador, sin proponerse ningún otro objeto que modifique dicho concepto y sea determinante de distinto delito, especialmente previsto y penado en el Código: Considerando que, esto supuesto, hay que apreciar con racional criterio en cada caso la significación, transcendencia é índole de los hechos que, siendo en sí punibles, puedan prestarse al mismo tiempo á diversa interpretación de la que dependa su calificación jurídica, para no violentar en ningún sentido dicha significación, ni aceptándolos demasiado materialmente, ni haciendo hipótesis aventuradas acerca del ánimo del criminal al delinquir: Considerando que la intención es un elemento esencial del delito que principalmente se revela en esos mismos hechos que hay que apreciar con racional criterio, y que juzgados así los actos que los recurrentes ejecutaron de entrar por una ventana en la casa de Francisco Gantes, aprovechando para ello el momento en que sus moradores se encontraban fuera, ocupados en las faenas del campo, se demuestra por ellos la intención del robo, como en el mismo recurso se sostiene, cuya interpretación, además de ser la más racional, es también la más favorable en el presente caso á aquéllos; y que la Audiencia de lo criminal de la Coruña ha incurrido, consiguientemente, en error de derecho al calificar como delito de allanamiento lo que sólo constituye delito de tentativa de robo en casa habitada, por confundir en realidad la falta de intención con la falta de un elemento determinante de la consumación del delito, etc.» (Sentencia de 16 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 18 de Abril de 1888, páginas 115 y 117.)

**CUESTION II.** *El hecho de entrar unos sujetos en una casa, descerrajando y abriendo la puerta principal de la misma, durante la ausencia y sin el consentimiento de su morador, ¿será constitutivo del delito de allanamiento de morada?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que el primer motivo en que se funda el recurso de casación interpuesto por la representación de José Guerreiro Parapar consiste en suponer que el penetrar en morada ajena cuando el dueño de ella no manifiesta oposición al hecho no constituye delito, lo cual no es cierto, porque, conforme al art. 504 del Código penal, basta que el agente realice su propósito sin la voluntad del morador para incurrir en la responsabilidad que, según los casos, dicho artículo señala; y como uno y otro procesado, descerrajando y abriendo

la puerta principal de D.<sup>a</sup> Dolores Pardo sin el consentimiento de ésta, entraron en ella, por modo claro aparece que ejecutaron un delito, etc.» (Sentencia de 20 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 18 de Julio, páginas 6 y 7.)

**CUESTION III.** *¿Deberá ser considerado como ejecutado con violencia el allanamiento de morada, por el solo hecho de haber penetrado en ella los culpables descerrajando la puerta que le da acceso?*—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Mondoñedo, la que condenó á los procesados á la pena más grave del segundo párrafo del art. 504. Mas interpuesto recurso de casación por la defensa de aquéllos, que pretendió debía comprenderse el hecho en la sanción más benigna del primer párrafo del susodicho artículo, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar al expresado recurso*: «Considerando que respecto del recurso de éste, y en cuanto al tercero y último motivo de los aducidos en el de Guerreiro, no puede dudarse que tienen su apoyo en la Ley, porque ésta no determina la violencia sino cuando se ejerce contra las personas; y como los procesados, al romper la cerraja de la puerta y penetrar en la morada de la Pardo, no hallaron á nadie que se opusiese de modo alguno á sus propósitos, resulta de una manera clara que cometieron el simple delito de allanamiento de casa ajena, que se castiga en el primer párrafo del mencionado artículo 504 del referido Código, y al no estimarlo así la Audiencia de Mondoñedo, en la sentencia que ha dictado, lo ha infringido, incurriendo en el error de derecho que señala el núm. 3.º del artículo 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, que acertadamente invocan uno y otro recurrente, etc.» (Sentencia de 20 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 18 Julio, páginas 6 y 7.)

**CUESTION IV.** *¿Constituirá el delito de allanamiento de morada la entrada en la ajena, aun cuando no haya precedido el asentimiento expreso ó tácito del morador?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que el particular que entra en morada ajena contra la voluntad de su morador comete, según el art. 504 del Código penal, el delito de allanamiento de morada, manifestándose la falta de voluntad del morador, elemento esencial de este delito, siempre que no haya precedido el asentimiento expreso ó tácito de aquél, y aquí no precedió, ya se tenga en cuenta el resentimiento que había entre ambas familias, ya se atienda á la forma y propósitos con que el recurrente entró en casa de los esposos Malmón y Cánovas, á quienes amenazó é infringió ciertas ofensas, desobedeciendo á los agentes de la Autoridad, faltas que se penan en la sentencia como incidentales del delito, y en este concepto es evidente que el procesado Francisco Izquierdo Gil cometió el hecho justiciable de allanamiento de morada, y que no encuentran apoyo en la sentencia los dos primeros motivos de casación que alega el recurso, etc.» (Sentencia de 17 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 4 de Marzo de 1889, páginas 39 y 40.)

**CUESTION V.** *Si la entrada en la morada ajena se ejecutó sin violencia ni intimidación, ó sea levantando tan sólo el picaporte de la puerta de la casa y sin resistencia en los moradores, aunque sin*



*el asentimiento ni expreso ni tácito de los mismos (V. la Cuestión anterior), los malos tratamientos de obra que ejerza el culpable en las personas de los moradores, ya una vez dentro de la casa, ¿determinarán la existencia del delito de allanamiento de morada ejecutado con violencia, que prevé y castiga más gravemente el segundo párrafo del art. 504 del Código?*—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Alicante, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por entender que el hecho constituía el delito de allanamiento de morada simple, comprendido en la sanción más benigna del primer párrafo del expresado artículo: «Considerando que apreciados en conjunto todos los hechos que como probados sirven de fundamento al fallo reclamado, no puede asegurarse que el hecho se ejecutó con violencia ó intimidación, ya por las facilidades que para la entrada en el domicilio del Maimón le daba á Izquierdo el hecho de levantar el picaporte de la puerta de cristales, no encontrando tampoco resistencia en los moradores, que se hallaban en la cocina, ya porque las violencias de Izquierdo, posteriores al hecho del allanamiento, han sido penadas en la sentencia como faltas incidentales: Considerando que no habiéndose ejecutado con violencia ó intimidación el allanamiento de morada, á este delito ha debido aplicarse el párrafo primero del art. 504 del Código penal, y no el 2.º del mismo artículo, como lo ha hecho la Audiencia de lo criminal de Alicante, por lo cual es procedente el recurso en el tercero y último de sus motivos, etc.» (Sentencia de 17 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 4 de Marzo de 1889, páginas 39 y 40.)

**CUESTION VI.** *¿Será menester que el morador de la casa haya manifestado previamente su voluntad contraria á la entrada en aquélla para que exista el delito de allanamiento de morada, ó bastará que de alguna manera conste ó se revele su oposición?*—El Tribunal Supremo ha declarado que hasta esto último: «Considerando que el delito de allanamiento de morada se comete siempre que se entra en morada ajena contra la voluntad de su morador, sin que sea preciso que éste lo manifieste previamente si de alguna manera consta ó se revela su oposición: Considerando que las circunstancias violentas con que los penados realizaron su entrada en la casa de Rosa Jiménez, es á saber, á deshora de la noche, forzando la puerta, hallándose sola la ofendida, y para maltratarla, como la maltrataron, demuestran evidentemente que tuvo que ser contra su voluntad, siendo preciso prescindir de la realidad de los hechos para hacer en contrario suposiciones que tiendan á negar en el caso de este recurso la existencia de dicho elemento esencial del delito de allanamiento, etc.» (Sentencia de 27 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 10 de Marzo de 1889, pág. 54.)

## CAPÍTULO VI

## De las amenazas y coacciones.

## Art. 507... 1.º

AMENAZA DE UN MAL QUE CONSTITUYA DELITO EXIGIENDO UNA CANTIDAD Ó IMPONIENDO CUALQUIERA OTRA CONDICIÓN, AUNQUE NO SEA ILÍCITA, SEGÚN QUE EL CULPABLE HAYA CONSEGUIDO Ó NO SU PROPÓSITO Y SEGÚN QUE LA AMENAZA SE HAYA HECHO POR ESCRITO Ó POR MEDIO DE EMISARIO.

**CUESTION.** *Los que por medio de anónimo amenazan á una persona con matarla si no apronta y deposita en un sitio determinado la cantidad de 500 á 1.000 duros, y llegado el día y hora en que debía verificarse dicho aprontamiento, se dirigen al sitio designado, y sacan de entre la tierra un talego que con 20 pesetas en calderilla había depositado el amenazado, de acuerdo con la Guardia civil, siendo sorprendidos por ésta en el momento de tener ya en las manos dicho talego, ¿deberán ser castigados con la pena inmediatamente inferior en grado á la señalada por la Ley al delito de homicidio con que amenazaron, en el concepto de haber conseguido su propósito, ó deberán serlo con la pena inferior en dos grados, estimando que no lograron su dicho propósito?—Si á los criminales acompañó una mujer en el acto de ir á recoger el dinero, llevando una cesta bastante grande, reforzada además de metal y suficientemente fuerte para resistir considerable peso, pero sin que conste que hubiera redactado, extendido ó enviado el anónimo, ni inducido á los demás criminales á que lo verificasen, ¿deberá ser considerada como coautora ó como cómplice del delito cometido?—La Audiencia de lo criminal de Lerma estimó que los hechos expuestos constituían el delito de amenazas por escrito y con exigencia de cantidad, habiendo los culpables conseguido su propósito, y calificó á la expresada mujer de coautora del delito y los condenó á todos á diez años de prisión mayor, ó sea á la pena inmediatamente inferior á la señalada al delito de homicidio, en su grado máximo. Mas en virtud del recurso de casación interpuesto por la defensa de los reos, el Tribunal Supremo casó la referida sentencia por el doble concepto de haberse impuesto indebidamente la pena inmediatamente inferior á la del delito de homicidio, en vez de la que lo es en dos grados, y por haberse calificado de coautora, en vez de simple cómplice, á la susodicha mujer: «Considerando respecto al delito de amenazas de muerte, hechas por escrito y exigiendo la cantidad de 1.000 duros, que los delincuentes no lograron su propósito, tanto por haber sido sorprendidos en el acto de apoderarse del saco donde estaba encerrado el dinero, como por ascender única-*



mente el valor metálico allí contenido á la suma de 20 pesetas: Considerando que el Tribunal sentenciador, al estimar equivocadamente que los culpables habían conseguido su propósito, ha incurrido en error de calificación transcendental al grado de la pena, é infringido el art. 507, núm. 1.º del Código vigente, imponiendo la pena inmediata á la señalada para el delito de homicidio, y no la inferior en dos grados, que es la procedente: Considerando que Gaspara Velasco Portela cooperó por un acto simultáneo á la ejecución de delito de amenazas, sin que su auxilio fuese absolutamente indispensable, sin que tomara parte en la amenaza verbal y sin que conste que hubiera forzado directamente al producirla por escrito, ni que hubiera redactado, extendido ó enviado la carta anónima, bajo cuyo concepto merece la calificación de cómplice, y no la de autora que se le atribuye en la sentencia reclamada, con infracción del art. 13 del precitado Código, ni la de encubridora, como se supone en el recurso, por no haber sido su intervención posterior al hecho punible, etc.» (Sentencia de 6 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 16 de Marzo de 1889, páginas 65 á 67.)

### Art. 510.

COMETE EL DELITO DE COACCIÓN EL QUE SIN ESTAR LEGITIMAMENTE AUTORIZADO IMPIDE Á OTRO CON VIOLENCIA HACER LO QUE LA LEY NO PROHIBE Ó LE COMPELE Á EFECTUAR LO QUE NO QUIERE, SEA JUSTO Ó INJUSTO.

**CUESTION.** *¿Constituirá la violencia que caracteriza el delito de coacción cualquier acto mediante el cual se obligue á otro, á la fuerza, á ejecutar lo que no quiere, aun cuando el culpable no haya ejercido precisamente el acto de fuerza sobre la misma persona ni maltratádola?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que siendo un hecho cierto que los recurrentes D. Pedro Pannou y Mató y Juan Mulá y Simón, sin intervención de Autoridad alguna, se propusieron lanzar de la casa en que habitaba á Francisca Marqués, la que se resistió, por cuyo motivo la arrebataron de sus propias manos las ropas de su cama y algunos muebles, que á viva fuerza sacaron del aposento en que se hallaban, obligando á dicha Marqués y á un hijo suyo á dormir en el suelo hasta que al día siguiente abandonó la morada, por modo claro resulta que uno y otro compellieron á ésta, usando de medios violentos y de fuerza, á hacer lo que no quería, fuese ó no legal, y ambos cometieron el delito de que antes se ha hecho mérito, que, bien apreciado en la sentencia por la Audiencia de Girona, no ha infringido dicho artículo del Código, ni el 1.º, ya que no ha incurrido en el error de derecho que señala el núm. 1.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, y que sin fundamento se invoca en el recurso, etc.» (Sentencia de 5 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 28 de Julio, página 27.)

Véase, además, el art. 604, núm. 3.º

## TÍTULO XIII

## DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD.

## CAPÍTULO I

## De los robos.

## Art. 516... 1.º

ROBO CON MOTIVO Ó OCASIÓN DEL CUAL RESULTA HOMICIDIO.

**CUESTION.** *Cuando, en virtud de lo dispuesto en los artículos 339 y 340 de la ley orgánica del Poder judicial, un Tribunal español conoce de un delito cometido por un español en país extranjero, contra un extranjero, que, como el de robo con homicidio, con circunstancias agravantes, exige la imposición de la pena de muerte, la circunstancia de no existir en el país extranjero de que se trata dicha pena para los delitos comunes, será obstáculo á la imposición de la misma por el Tribunal español?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que incoada, seguida y sustanciada la presente causa con arreglo á lo prescrito en el art. 340 y su concordante 339 de la ley orgánica del Poder judicial, la jurisdicción de los Tribunales españoles no tiene otra limitación que la determinada en el 341, ó sea la prohibición de proceder criminalmente si en el caso de que se trata el hecho no fuera delito en el país en que se perpetró; Considerando que este caso difiere del en que los Códigos de los dos países no impusiesen igual pena al hecho, respecto de lo que no hay disposición alguna en nuestras leyes que autorice la distinción, por lo cual ésta no puede hacerse, ni dejar de aplicarse la correspondiente, según nuestra ley penal, que quedaría derogada por un acto judicial, siquiera éste fuese producto de una interpretación aceptable en el terreno constituyente; Considerando que este resultado ofrecería el no poder aplicar la pena de muerte en este proceso, con el fundamento de que en Portugal sólo existe en la jurisdicción de guerra, porque no es el Código penal de aquel país el llamado á castigar el delito de que se trata, etc.» (Sentencia de 21 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 20 de Abril de 1888, pág. 126.)



## Art. 516... 4.º

PENA DEL ROBO CUANDO LA VIOLENCIA Ó LA INTIMIDACIÓN HAYAN TENIDO UNA GRAVEDAD MANIFIESTAMENTE INNECESARIA PARA SU EJECUCIÓN.

**CUESTION I.** *El hecho de penetrar varios malhechores en una casa y arrojarle sobre sus dueños, atarlos con cuerdas, taparles la boca y los ojos, echarles ropa encima y darles diferentes golpes que les ocasionaron varias heridas y contusiones leves, después de lo cual registraron la casa, apoderándose del dinero y efectos que encontraron, ¿deberá calificarse de delito de robo con violencia de una gravedad manifiestamente innecesaria para su ejecución?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que para apreciar si la violencia ó intimidación en las personas que hubieran concurrido en el delito de robo ha tenido una gravedad manifiestamente innecesaria para su ejecución, es preciso tener en cuenta las circunstancias personales de los agresores y de los ofendidos, el número de unos y de otros, la ocasión y condiciones en que se hallaban respectivamente en el acto de la comisión del delito, y la resistencia que los agredidos opongan ó puedan oponer a los criminales: Considerando que teniendo en cuenta todos estos elementos, el hecho de haber atado á los indios y ancianos cónyuges Andrés Alonso y Fermína García, taparles la boca y los ojos y echarles alguna ropa encima, puede estimarse como violencia inherente al delito; pero el hecho de golpearlos, cuando no resulta que opusieran resistencia alguna, infiriéndoles varias heridas y contusiones, siquiera fueran leves, envuelve una gravedad manifiestamente innecesaria; y esta mayor perversidad en el criminal es la que prevé y castiga el número 4.º del art. 516 del Código penal, que acertadamente aplica la Audiencia de lo criminal de Ponferrada, etc.» (Sentencia de 19 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 17 de Noviembre, página 309.)

**CUESTION II.** *Si las violencias graves ejecutadas por los malhechores en la persona del robado lo fueron una vez cometido el robo, ¿obstará á la apreciación de manifiestamente innecesarias que de ellas se haga la circunstancia de haberse verificado las mismas con el propósito de obtener del perjudicado mayor cantidad?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que el presente recurso lo funda la parte recurrente en el supuesto de que la Audiencia sentenciadora ha cometido error de derecho en la calificación del hecho procesal al estimarlo comprendido en el caso 4.º del art. 516, cuando la violencia cometida en la persona del ofendido no tuvo una gravedad manifiestamente innecesaria, por haberse verificado con posterioridad al robo y sólo con el propósito de obtener mayor cantidad de él: Considerando que los hechos declarados probados en la sentencia de haber el recurrente, en unión de otro correo, amordazado al ofendido con

un pañuelo, por no serle posible sostener en la boca la barra de hierro que primero le pusieran, el abofetearlo y desnudarlo después, rociando su cuerpo con petróleo con el intento de prenderle fuego, constituyen una serie de graves violencias, manifiestamente innecesarias para la ejecución del delito, puesto que sin ellas ya habían los criminales conseguido su propósito, y sólo su insaciable codicia les determinó á poner en práctica tan innecesarios medios, sin conseguir por ellos mayor lucro, es visto que el delito está comprendido en la sanción del caso 4.º del art. 516 del Código penal; y al estimarlo así justamente la Sala sentenciadora no ha incurrido en el error de derecho ni infringido las disposiciones legales que se suponen en el recurso, etc.» (Sentencia de 24 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 6 de Mayo, pág. 188.)

### Art. 519.

TENTATIVA Y DELITO FRUSTRADO DE ROBO CON MOTIVO Ó OCASIÓN DEL CUAL RESULTARE HOMICIDIO.

**CUESTION.** *Varios malhechores penetran en una casa con el premeditado propósito de robarla y dar muerte á cuantos en ella se opongan á su plan; y efectivamente, matan alevosamente á tres de sus moradores, sin poder realizar el robo por haber tenido que apelar á la fuga, dada la actitud amenazadora y resuelta del dueño de la casa que pudo apereibirse á tiempo para la defensa: ¿cómo deberán ser calificados estos hechos?*—La Audiencia de lo criminal de Cuenca los calificó de tres delitos de asesinato, y otro además conjunto con los mismos de *tentativa de robo*, comprendidos aquéllos en el art. 418 y el último en el 516, justiciables con arreglo al art. 90, y condenó al autor, único habido, á la pena de muerte. Y aun cuando el Tribunal Supremo declaró *no haber lugar* al recurso admitido de derecho en beneficio del reo, por resultar en todo caso como imposible la pena de muerte, consignó claramente que los hechos debieron calificarse de *un solo delito de tentativa de robo con motivo ó ocasión del cual se cometieron tres asesinatos*, previsto y penado en el art. 519, en relación con el 418 del Código, por lo que no era de aplicar en este caso la prescripción del art. 90 del Código: «Considerando que los hechos relacionados han sido bien calificados como constitutivos de tres delitos de asesinato, ejecutados para robar en casa de Primo Fernández Martínez, puesto que las muertes de Hermenegildo Fernández, Gregoria Jiménez y Blas Blanch se ejecutaron sorprendiéndoles completamente desprevenidos, de improviso, sin que pudieran ni aun prever el atentado de que fueron víctimas, lo que constituye la circunstancia de alevosía que los caracteriza, prevista y definida en el núm. 2.º del art. 10 del Código; Considerando que aun cuando del robo intentado tuvieron que desistir los criminales merced á la actitud de defensa en que se pudo colocar Primo Fernández Martínez, después de realizados los expre-



sados asesinatos, la penalidad aplicable es la del art. 418 por ser mayor que la señalada en el 519, de conformidad con lo que en este último se dispone: Considerando que, si bien no es aplicable la prescripción del art. 90 por tratarse de delito complejo, cual es de tentativa de robo con ocasión del cual se perpetraron los tres asesinatos referidos, ha sido bien impuesta al autor declarado de los mismos la pena de muerte, apreciando las agravantes genéricas de nocturnidad y la de haberse realizado los asesinatos en la morada del ofendido, con las que hubiese también podido estimarse la de premeditación, puesto que, según afirma el Tribunal sentenciador, el penado se puso previamente de acuerdo con dos desconocidos, no sólo para robar, sino para matar á los moradores de la casa, etc.» (Sentencia de 2 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 6 de Abril de 1888, páginas 83 y 84.)

### Art. 520.

PENA DEL QUE, PARA DEFRAUDAR Á OTRO, LE OBLIGA CON VIOLENCIA Ó INTIMIDACIÓN Á SUSCRIBIR, OTORGAR Ó ENTREGAR UNA ESCRITURA PÚBLICA Ó DOCUMENTO.

**CUESTION.** *Si los procesados, operarios de una mina, sorprendieron de noche en la calle al Director de la fábrica de fundición de aquella, y en buenas formas le pidieron les diera anticipados 10 duros á cuenta de su trabajo, ó que les firmase un pagaré, y como se negara á ello el interpelado, le amenazaron, uno de ellos con una pistola que disparó, y el otro con una faza con la que le hizo un corte en el abrigo, americana y chaleco que llevaba puestas, en el lado derecho del pecho, huyendo el agredido en el caballo en que iba montado, constituirá semejante hecho el delito de robo frustrado, previsto y penado en el art. 520, en relación con el 518 del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que, según el art. 515 del Código penal, son reos del delito de robo los que, con propósito de lucro, se apoderan de las cosas muebles ajenas con violencia ó intimidación en las personas, y que son también responsables del mismo delito, según el artículo 520, los que para defraudar á otro le obligaren con violencia ó intimidación á suscribir un documento: Considerando que, cualquiera que fuese la forma en que los procesados revelaran su intención, siempre constituyeron á D. Eduardo Bolton en la alternativa de entregar 10 duros ó de firmar un pagaré de igual cantidad: Considerando que las circunstancias de hora, lugar y número de personas implican verdadera intimidación, y que esta coacción tuvo complemento al hacer uso de sus armas los reos, procurando herir al agredido, sin lograrlo por accidentes extraños á su bien determinada voluntad: Considerando que no exime de responsabilidad criminal á los recurrentes el hecho de haber reclamado la entrega de los 10 duros ó de un pagaré equivalente á esta suma bajo el pretexto de cobrar anticipadamente

los jornales que pudieran corresponderles, porque esta eventualidad de reintegro no desvirtúa ni la transcendencia de la intimidación ni el designio de adquirir coactivamente una cantidad numeraria ajena contra la voluntad de su dueño: Considerando, por consiguiente, que el Tribunal sentenciador no ha incurrido en error de derecho al calificar los hechos procesales como delito frustrado de robo, ni ha infringido la Ley al aplicar los artículos 515 y 520 del precitado Código, etc.» (Sentencia de 4 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 23 de Abril, pág. 148.)

### Art. 521.

ROBO CON ARMAS EN CASA HABITADA Ó EDIFICIO PÚBLICO,  
Ó DESTINADO AL CULTO RELIGIOSO.

**QUESTION I.** *El acto de penetrar unos malhechores en una casa, sorprender á sus moradores, causarles varias violencias determinantes de lesiones menos graves y apoderarse de cierta cantidad de dinero y efectos por valor mayor de 500 pesetas, deberá ser calificado y penado como delito de robo con violencia en las personas, previsto y penado en el núm. 5.º del art. 516 del Código, ó deberá comprenderse en la sanción más grave del 521?—Las lesiones causadas, deberán penarse como delito separado, ó conjuntamente con el robo, con arreglo al art. 90?—*El Tribunal Supremo ha declarado que semejante robo, aun cuando verificado con violencia en las personas, debe castigarse, no con la pena del artículo 516, núm. 5.º, sino con la más grave que al delito de robo en casa habitada, con armas y por valor mayor de 500 pesetas señala el art. 521, y que las lesiones penadas separadamente por el Tribunal sentenciador debieron serlo, en rigor de derecho, conjuntamente con el robo, ó sea aplicando la pena de éste en su grado máximo, con sujeción al art. 90: «Considerando que el artículo 521 del Código penal castiga con la pena de presidio mayor en su grado medio á cadena temporal en el mínimo á los que con armas robaren en casa habitada efectos por valor superior á 500 pesetas y penetraren en ella por rompimiento de pared: Considerando que el acto ejecutado por el recurrente y sus cómplices contiene, según las terminantes declaraciones de la sentencia reclamada, todos los elementos esenciales del delito previsto en ese artículo y además los hechos de lesiones menos graves que separadamente han sido castigados: Considerando que la concurrencia de estos últimos hechos, por sí punibles, no puede producir el absurdo efecto de degradar la penalidad de un delito íntegramente realizado, lo cual resultaría de la calificación pretendida por el recurrente, puesto que entonces las lesiones, sin las cuales el hecho procesal estaría con toda evidencia comprendido en el art. 521 del Código, servirían para mitigar la pena en éste señalada; y además se desatenderían elementos como el del lugar del delito, su modo de ejecución y la cuantía del per-



juicio irrogado, y á los que la Ley otorga debida importancia en casos como el presente: Considerando que aun cuando en rigor de derecho hubiera de aplicarse por la existencia de delitos de robo y de lesiones lo dispuesto en el art. 30 del Código, ó sea condensar en una pena la responsabilidad derivada de todos los delitos, estimándose los últimos medio necesario de la comisión del primero, también sería improcedente el recurso deducido, dado el indispensable supuesto de la aplicación del art. 521, por resolverse la cuestión jurídica en perjuicio del recurrente, á quien correspondería entonces sufrir más larga privación de libertad; puesto que aquella única pena tendría que llegar al tercio superior del grado mínimo de la cadena temporal y, por tanto, que ser impuesta por tiempo superior á la suma de las tres penas á que ha sido condenado, etc.» (Sentencia de 13 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 16 de Noviembre, pág. 305.)

**CUESTION II.** *El robo cometido en una oficina particular donde se reúnen varias personas para ejercer una industria, pero que no es domicilio de nadie, deberá calificarse de robo, comprendido en el art. 521 del Código?*—Así lo estimó la Sala de lo criminal de la Audiencia de Sevilla, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo en virtud del recurso interpuesto por el procesado y apoyado *in voce* por el Ministerio fiscal, por indebida calificación del hecho delictivo: «Considerando que sólo puede entenderse como casa habitada el albergue que constituye morada de una ó más personas, según definición que de la misma se hace en el artículo 523 del Código penal, y que morada no es un lugar cualquiera donde más ó menos accidentalmente concurren ó se reúnen las personas; bien para desempeñar un cargo, bien para ejercer una industria, bien con otro objeto análogo, sino el que sirve para el descanso y cuidado de aquéllas, constituyendo propiamente su domicilio: Considerando que no aparece que la oficina de donde sustrajo Juan Chacón Valle la suma de 223 reales fuese domicilio de nadie, ni dependencia de casa habitada ni edificio público, por cuya razón, al calificar la Audiencia de Sevilla este hecho como delito de robo cometido en casa habitada, y previsto en tal concepto en el último párrafo del art. 521, ha incurrido en el error de derecho señalado en el recurso, etc.» (Sentencia de 28 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 5 de Enero de 1888, página 28.)

**CUESTION III.** *¿Tendrá el carácter jurídico de fractura de objeto cerrado ó sellado, á los efectos del núm. 4.º del art. 521 del Código, la simple apertura de pliegos contentivos de valores remitidos por el correo, y que los culpables sustrajeron de la cartera de la ambulancia de correos de un tren, si no se justifica que dicha cartera estuviese cerrada con algún medio de seguridad ó sellada?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que aunque se prescinda del error no denunciado con que la sentencia reclamada considera edificio público el coche de un tren destinado al servicio de correos, no corresponde la calificación de delito de robo al hecho objeto del proceso, por no declararse en aquélla que la cartera tomada sigilosamente de aquél

por los culpables estuviera entonces cerrada con algún medio de seguridad ó sellada, ni que fuera sola para la extracción de su contenido, y porque no tiene carácter jurídico de fractura de objeto cerrado ó sellado la mera apertura, de todo punto indispensable para el fin criminal, de los pliegos que cubrían los valores; antes como medio de darles destino que con el de asegurárlas, puesto que en realidad la sustracción y consiguientemente el delito recayó en los pliegos, y en nada integra éste el abandono ó conservación de los sobres: Considerando que dicha sustracción no constituye, por tanto, otro delito que el de hurto, definido en el art. 530 del Código penal, etc.» (Sentencia de 2 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 12 de Mayo, pág. 242.)

**CUESTION IV.** *Si al autor de un robo en casa habitada sólo se le ocuparon unas tijeras y una navaja pequeña, deberá dejár de apreciarse que aquel delito se cometió con armas, so pretexto de que aquellos objetos no estaban destinados á la defensa del procesado, y si á los más comunes usos de la vida?*—Así lo estimó la Sala de lo criminal de la Audiencia de Barcelona, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo á excitación del Ministerio fiscal recurrente, por no haber apreciado que el robo se cometió con armas: «Considerando que Luis Sesalón, al cometer el robo de una pieza de tela en dependencia de casa habitada, llevaba armas, según lo consigna en su sentencia, como hecho probado, el Tribunal á quo: Considerando que esta circunstancia específica no permite interpretación restrictiva, porque la disposición de la ley es clara, terminante y absoluta: Considerando que la tenencia de armas por el malhechor al perpetrar un robo constituye siempre un peligro para los moradores del lugar en que se efectúa; que este riesgo personal es el verdadero motivo del precepto de la Ley, y que este precepto no puede ser desatendido, ni decaer por la mera conjetura de no tener el reo propósito de emplear sus armas para la agresión ó defensa, de estar aquéllas destinadas al uso particular del procesado, ó de ser por sus condiciones insuficientes para causar grave daño: Considerando, por lo expuesto, que la Sala sentenciadora ha incurrido en error de calificación, y que por no determinarla con arreglo al párrafo primero del art. 521 del Código penal ha infringido esta prescripción legal, etc.» (Sentencia de 7 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 9 de Abril de 1888, páginas 88 y 89.)

**CUESTION V.** *¿Bastará que, al ser detenido el autor de un robo en casa habitada en la misma tarde en que el delito se perpetró, se le haya encontrado una navaja, para calificar dicho robo como cometido con armas?*—Así lo estimó la Sala de lo criminal de la Audiencia de la Coruña, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por indebida apreciación en este caso de aquel elemento de agravación del delito: «Considerando que por más que sea de sospechar que la navaja que le fué encontrada al recurrente la tarde misma en que cometió el robo en una casa cuyos moradores estaban de paseo la llevara al tiempo de la ejecución del delito, como esa circunstancia daría á éste mayor gravedad, necesita por lo mismo estar probado y así declarado expresamente para que



pueda apreciarse, sin que baste la simple creencia de que pudo concurrir, por lo que el delito sólo puede ser calificado de robo en lugar habitado, *sin armas*, en cantidad inferior á 500 pesetas, comprendido en el último párrafo del art. 521 del Código penal, etc.» (Sentencia de 12 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 30 de Julio, páginas 31 y 32.)

**CUESTION VI.** *Si detenido el autor de un robo en el momento mismo en que acababa de ejecutarlo se le ocupó una navaja, deberá calificarse aquél como realizado con armas?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que es un hecho declarado probado en la sentencia que al recurrente se le ocupó una navaja de su propiedad en el momento de ser detenido en la calle, cuando acababa de ejecutar un robo menor de 500 pesetas en la morada de D. Manuel Salas, y por lo tanto, es evidente que á la comisión del expresado delito concurrió con armas, y se halla en su vista comprendido en la sanción del citado artículo del Código, como acertadamente aprecia la Sala sentenciadora, etc.» (Sentencia de 22 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 10 de Marzo de 1889, pág. 51.)

### Art. 525.

ROBO EN LUGAR NO HABITADO Ó EN EDIFICIO QUE NO SEA DE LOS COMPRENDIDOS EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ART. 521.

**CUESTION I.** *El escalamiento de una huerta aislada y la sustracción de frutos de la misma realizada por aquel medio, constituirán el delito de robo en lugar habitado, comprendido en el art. 525 del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto una vez más la negativa al casar cierta sentencia de la Audiencia de lo criminal de Logroño en que se calificó y penó como tal robo el hecho expuesto: «Considerando que el delito de robo, previsto en el art. 525 y consiguientemente el que pena el 526 del Código penal, se comete, según ha declarado esta Sala, cuando por escalamiento ó empleo de otra de las fuerzas equivalentes en aquél enumeradas, se sustrae cosa ajena en lugar no habitado ó en edificio que no sea público ó destinado al culto religioso; pero no cuando de aquellas ó de otras maneras se penetra, para sustraer, en heredad ó campo cerrado ó cercado; porque la relación de tales artículos con el 521 demuestra que la aplicación de aquéllos exige que el lugar de la sustracción sea no habitado, pero habitable: Considerando que aun cuando no explique la sentencia reclamada las condiciones de la huerta en donde se realizó por los jóvenes procesados la sustracción de las avellanas, que se tasaron en 12 céntimos de peseta, excluido el lugar expresamente, por su propia calidad, de las disposiciones del art. 523, tampoco son aplicables al hecho procesal las de los 525 y 526, por no constituir lugar habitable ni edificio de los antes indicados; y por tanto, al calificarse de robo, se han infringido estos preceptos legales é incu-

rrido la Audiencia sentenciadora en el error de derecho señalado en el núm. 3.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, etc.» (Sentencia de 8 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 23 de Agosto, páginas 82 y 83.)

**CUESTION II.** *La sustracción de una bolsa de dinero, verificada en un carro estacionado en la vía pública, aun cuando se verifique con violencia, esto es, cortando por distintos puntos las cuerdas y esteras que en forma de malla rodeaban y cerraban la bolsa del vehículo, ¿podrá calificarse de delito de robo en lugar inhabitado?*—Así lo estimó la Audiencia de Pamplona, cuya sentencia, que estimaron justa tres Letrados nombrados sucesivamente para la defensa de los reos, casó el Tribunal Supremo á excitación del Ministerio fiscal, que reclamó para los acusados la más benigna calificación y penalidad del delito de hurto: «Considerando que si bien el delito de robo se caracteriza por la fuerza en las cosas ó violencia sobre las personas con que el delincuente realiza la sustracción de cosa ajena con ánimo de lucro, es preciso además que el hecho se halle comprendido en alguno de los casos determinados en el capítulo del Código penal que trata de los robos: Considerando que el lugar no habitado á que se contrae el artículo 525 del expresado Código, en contraposición al lugar ó casa habitada de que trata el 521, se refieren á lugares ó casas que puedan servir de albergue ó habitación para las personas, y no á otros que carezcan de estas condiciones, cual es un carro colocado á las inmediaciones de una venta, que es el caso del presente recurso, y de cuyo vehículo se sustrajo la cantidad de 562 pesetas 50 céntimos que se encontraban en un saco de terliz: Considerando, por tanto, que la indicada sustracción constituye evidentemente un delito de hurto, definido en el núm. 1.º del artículo 530 del referido Código penal y castigado en el 531, número 2.º, y al no estimarlo así el Tribunal sentenciador ha incurrido en el error de derecho ó infringido las disposiciones legales invocadas por el Ministerio fiscal como fundamento de su recurso en beneficio de los procesados, etc.» (Sentencia de 21 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 10 de Marzo de 1889, pág. 46.)

## CAPÍTULO II

### De los hurtos.

#### Art. 530.

##### QUIÉNES SON REOS DE HURTO.

**CUESTION I.** *El que se apodera de la basura recogida por otro y con la que formara un basurero, ¿será responsable del delito de hurto, en el concepto de ser ajena la cosa sustraída?*—El Tri-



bunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que cometen delito de hurto los que con ánimo de lucrarse, y sin violencia ó intimidación en las personas ni fuerza en las cosas, toman las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño: Considerando que el recurrente Jorge Gabezón cometió el expresado delito al apoderarse de las basuras que Juan Serrano Jiménez había anteriormente recogido, formando con ellas un basurero, realizando así un verdadero y adecuado acto de ocupación, y que hizo consiguientemente suyas como primer ocupante, lo que constaba al penado, cual se infiere de los hechos que el Tribunal sentenciador declara probados en el primer resultando, etc.» (Sentencia de 10 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 23 de Noviembre, páginas 338 y 339.)

**CUESTION II.** *La sustracción de una finca de propiedad particular de cantos menudos y rodadizos arrastrados á ella por aluviones, determinará la existencia del delito de hurto, definido en el art. 530 del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que al sustraer el recurrente los catorce carros de cantos rodadizos arrastrados por los aluviones á una tierra que posee en el término del Canto D. Juan Antonio Barona, utilizándolos en el pavimento de una tenada de su pertenencia, incurrió en el expresado delito, por concurrir en el hecho todos y cada uno de los elementos que le constituyen, ó sea carecer para hacerlo del permiso del dueño de la finca á que pertenecían y haberlos utilizado en su beneficio, lucrándose en su valor de 10 pesetas 50 céntimos, según tasación pericial, etc.» (Sentencia de 19 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 19 de Noviembre, pág. 324.)

**CUESTION III.** *¿Será responsable del delito de estafa ó del de hurto el encargado de la custodia de un almacén que sustrae de él varios efectos y los vende á terceras personas, utilizándose de su importe?*—La Sala de lo criminal de la Audiencia de la Habana estimó lo primero. Mas el Tribunal Supremo, á excitación del Ministerio fiscal recurrente, declaró que el hecho merecía la más grave calificación de delito de hurto: «Considerando que el hecho referido en el resultando primero reúne marcadamente todos los caracteres del delito de hurto, que define el núm. 1.º del art. 535 del Código penal, cuales son sustracción de cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueño y ánimo de lucro, sin que para realizarla se haya empleado ninguna clase de fuerza ni violencia, habiendo incurrido en error de derecho la Audiencia de la Habana, que lo ha calificado como delito de estafa, siendo así que los efectos sustraídos no se encontraban por título alguno á disposición de Manuel Guardia Sánchez, encargado meramente de su custodia, quien tuvo consiguientemente que ejecutar un acto de apoderamiento característico del hurto, para llevar á cabo la sustracción, sin que, por el contrario, tuviera que valerse de engaño ninguno, que es á su vez la nota característica del de estafa, cuyo error ha transcendido á la calificación de los cómplices y encubridores del mismo, etc.» (Sentencia de 28 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 22 de Noviembre, pág. 330.)

**CUESTION IV.** *El mozo de un carro de mudanza que al verificar el traslado de muebles de una casa se apropia uno de éstos, será responsable del delito de estafa del art. 548, núm. 5.º del Código, ó del de hurto, que define el 530?*—El Tribunal Supremo ha declarado que lo es de este último delito: «Considerando que apreciándose como hecho probado en la sentencia recurrida que el mozo de los carros de mudanza Celestino Rubio, al efectuar la que el Conde de Cervera llevó á efecto de una casa á otra, se prevaleció de la confianza que en éstos se deposita para sustraer un reloj de sobremesa, valorado en 100 pesetas, es evidente que al tomar con ánimo de lucro, sin violencia, intimidación ni fuerza, una cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueño, cometió un verdadero hurto, cual con acierto ha apreciado la Sala sentenciadora, sin que tal hecho pueda confundirse con la estafa, pues propiamente dicho nada se le entregó que tuviera que devolver, sino que en cumplimiento de su oficio le ordenaron la mudanza de los muebles por el precio que estipularon, etc.» (Sentencia de 19 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 5 de Mayo, página 181.)

**CUESTION V.** *Si al penetrar los procesados en una finca que perteneció á su difunta madre y al cortar unas uvas tasadas en una peseta 75 céntimos, manifestaron que así lo hicieron por creer que pertenecía á la testamentaria, en cuyo inventario judicial estaba, en efecto, comprendida, resultando también haber sido depositado el fruto de dicha viña del año anterior, deberá calificarse, no obstante, el expresado hecho de delito de hurto, si aparece que dicha finca fué vendida por los testamentarios al denunciante un año antes en documento privado?*—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Benavente, que condenó á los procesados como autores del delito de hurto á la pena correspondiente. Mas interpuesto por los mismos recurso de casación contra dicha sentencia por infracción de los artículos 1.º y 530 del Código, á cuyo recurso se adhirió el Ministerio fiscal en el acto de la vista, declaró el Tribunal Supremo haber lugar á él: «Considerando que cometen el delito de hurto, según el núm. 1.º del art. 530 del Código penal, los que con ánimo de lucrarse y sin violencia ó intimidación en las personas ni fuerza en las cosas toman las muebles ajenas sin la voluntad de su dueño, y que deduciéndose de los hechos declarados probados en la sentencia recurrida que los procesados, al penetrar en el majuelo que perteneció á su difunta madre Teresa García y cortar en él uvas tasadas en cantidad de una peseta 75 céntimos, lo hicieron en la creencia de pertenecer á la testamentaria por estar comprendido en el inventario judicial y haber sido depositado el fruto del año último, es visto que, al llevar á efecto dicho acto, no tuvieron voluntad de delinquir, ni mucho menos que les constase que el majuelo ya no les pertenecía por haber sido vendido en documento privado por los testamentarios, ni que la sustracción la realizasen con ánimo de lucro, requisitos esenciales sin la concurrencia de los cuales no puede jurídicamente existir el expresado delito: Considerando que al no estimarlo así la Sala sentenciadora ha incurrido en el error de



derecho que se le atribuye, é infringido los artículos del Código penal á que el recurso se refiere, etc.» (Sentencia de 19 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 26 de Agosto, páginas 103 y 104.)

**CUESTION VI.** *El vigilante del muelle de una estación de ferrocarril que sustrae géneros de una caja depositada en dicho muelle, será responsable del delito de hurto ó del de estafa?*—El Tribunal Supremo ha declarado que la primera y más grave calificación es la que corresponde al hecho: «Considerando que, según el art. 530 del Código penal, cometen el delito de hurto los que con ánimo de lucrarse y sin violencia ó intimidación en las personas ni fuerza en las cosas, toman los muebles ajenos sin la voluntad de su dueño: Considerando que al haberse apoderado el recurrente de varios paquetes de velas sustraídas de las partidas de cajas consignadas á nombre de D. José Nafra, del muelle número 4 de la estación del ferrocarril de las Delicias, estando encargado, como vigilante que era de noche, perpetró el expresado delito, y no el de estafa, porque para el desempeño del servicio que prestaba no se requería una verdadera y detallada entrega de los efectos almacenados, ni mucho menos lo fueron en depósito, circunstancias indispensables para que el hecho pudiese merecer la calificación de estafa, etc.» (Sentencia de 30 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 6 de Septiembre, páginas 123 y 124.)

**CUESTION VII.** *El que en una propiedad particular se encuentra en el suelo un objeto y se apodera de él, ¿podrá alegar que no cometió hurto, por tratarse de una cosa abandonada ó perdida é ignorar quién fuera su dueño?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que el acto de haberse apoderado el recurrente de un conejo que encontró muerto en la Casa de Campo constituye el delito de hurto, previsto y penado en el núm. 5.º del art. 531 del Código penal, acertadamente aplicado por la Sala sentenciadora, y que las cosas que se encuentran dentro de una finca ó propiedad no deben conceptuarse perdidas ó abandonadas, y sí pertenecientes á su dueño: Considerando que no consignándose en la sentencia recurrida que perteneciera á ningún cazador provisto de la correspondiente licencia, es impreseindible conceptuarlo del dueño de la finca en que se hallaba, y que al apoderarse de él el procesado, sin su voluntad, incurrió en la sanción penal de dicho artículo, etc.» (Sentencia de 20 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 28 de Septiembre, pág. 198.)

**CUESTION VIII.** *El dueño de una habitación que para hacer efectivo el alquiler de la misma que le adeudaba el inquilino, aprovechando la ocasión de hallarse éste enfermo en el hospital, penetra en el cuarto, y sin emplear fuerza, violencia ni intimidación, toma un mueble que aquél había dejado en dicha habitación y era propiedad de su hija, será responsable por este hecho del delito de hurto, previsto en el art. 530 del Código?*—Así lo estimó la Sala de Justicia de la Audiencia de Puerto Rico, considerando que el ánimo de lucro lo constituía en el presente caso el mejoramiento cierto por parte del procesado de la condición de su crédito. Mas inter-

puesto recurso de casación contra dicha sentencia por el Ministerio fiscal, que pretendió que el hecho expuesto sólo constituía la falta de coacción ó vejación injusta comprendida en el art. 612, número 5.º del Código de Cuba y Puerto Rico (604, núm. 5.º del de la Península), declaró el Tribunal Supremo *haber lugar* al expresado recurso: «Considerando que el concepto del delito de hurto implica el apoderamiento de cosa mueble ajena contra la voluntad de su dueño, sin violencia en las personas ni fuerza en las cosas, y el ánimo de lucro, cuyos dos elementos han de concurrir conjuntamente para poder afirmar la existencia de dicho delito: Considerando que si en el hecho realizado por Francisco Zayas concurre el primer elemento, no así el segundo, puesto que el único objeto que se propuso al apoderarse sin fuerza ni violencia ninguna de la cama que obraba en poder de su deudora María de la Cruz Aponte, fué el de apremiarla para hacer efectivos 6 pesos que le debía: Considerando que este hecho constituiría el delito previsto y definido en el art. 516 del Código si hubiese sido realizado con violencia, y sin ella sólo constituye la falta prevista y definida en el núm. 5.º del art. 612: Considerando que la Audiencia de Puerto Rico ha incurrido en el error de derecho señalado por el Ministerio fiscal, al calificar como delito un hecho que sólo constituye mera falta, etc.» (Sentencia de 3 de Octubre de 1888, publicada en las *Gacetas* de 10 y 12 de Diciembre, páginas 270 y 271.)

### Art. 533... 2.º

#### HURTO DOMÉSTICO Ó EN EL QUE INTERVIENE GRAVE ABUSO DE CONFIANZA.

**CUESTION I.** *El carrero de una fábrica ó establecimiento industrial, deberá ser considerado como doméstico á los efectos del artículo 533, núm. 2.º del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que, según el núm. 1.º del artículo 530 y 3.º del 531 del Código, serán castigados con la pena de arresto mayor, en su grado medio á presidio correccional en el mínimo, los que con ánimo de lucrar y sin violencia ó intimidación en las personas ó fuerza en las cosas toman sin la voluntad de su dueño cosas muebles ajenas por valor que no exceda de 500 pesetas y pasare de 100; teniendo esos hurtos que castigarse con la pena inmediatamente superior en grado, según el núm. 2.º del artículo 533, si fueren domésticos ó interviniera grave abuso de confianza: Considerando que abusando Ceferino Lobo de la facilidad que le proporcionaba estar de carrero de D. Francisco Prieto, dueño de la antigua fábrica de bujías de la Estrella, para, sin voluntad de éste, y con ánimo de lucro, sustraer de la misma, al ir á la estación con el carro de orden de su amo por un tonel de vino, un saco con cinco arrobas de sebo en panes, valorado en 37 pesetas 50 céntimos, con que fué sorprendido luego un hermano



suyo, á quien se le entregó en el camino, el hecho á modo cierto constituye un verdadero hurto, que adquiere mayor importancia por haber sido cometido por un criado, cual sin contradicción posible reconoce la Sala sentenciadora que al calificarlo de doméstico y aplicar la penalidad en el grado correspondiente, con sujeción al núm. 3.º del art. 531, en combinación con el 2.º del 533, no ha infringido ninguno de estos artículos, ni incurrido en el error de derecho que sin fundamento le atribuye el recurrente, etc.» (Sentencia de 7 de Septiembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 22 de Octubre, pág. 293.)

**CUESTION II.** *Para que pueda calificarse el hurto de doméstico, ¿será indispensable que el criado haya verificado la sustracción en la misma casa donde habita con su amo, ó bastará que lo cometa en cualquiera otra dependencia de la propiedad de éste, aunque separada de aquélla, si ha entrado en la misma por razón de su cualidad de doméstico?*—El Tribunal Supremo ha declarado que, aun en este último caso, afecta el hurto la cualidad de doméstico: «Considerando que debe calificarse de doméstico el hurto ejecutado por cualquiera persona que se halle al servicio interior de la casa del perjudicado, aunque el delito se cometa fuera de la morada, en otra dependencia de la propiedad del amo, y el criado entrare en ella por razón de su cualidad de doméstico: Considerando que en tal concepto, y siendo hechos declarados probados en la sentencia que el recurrente tenía el carácter de criado doméstico, que sustrajo una cantidad perteneciente á su amo en un establecimiento de su propiedad, y en el que penetró por su orden á prestar el servicio que le fué encomendado, propio de su carácter, es visto que el delito debe ser calificado de hurto doméstico, y al no apreciarlo así, la Audiencia sentenciadora ha incurrido en error de derecho, é infringido por su no aplicación el párrafo segundo del art. 533 del Código penal, dando lugar al motivo de casación que establece el caso 3.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, etc.» (Sentencia de 1 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 9 de Enero de 1888, páginas 42 y 43.)

**CUESTION III.** *El que encargado por su amo, en calidad de jornalero ó dependiente, de la custodia de un pajar, toma parte con otros en la sustracción de cierta cantidad de paja del mismo, ¿será responsable del delito de hurto simple con la circunstancia agravante de abuso de confianza, ó del de hurto cualificado por el grave abuso de la misma?*—La Audiencia de lo criminal de Algeciras estimó lo primero. Mas el Tribunal Supremo, á excitación del Ministerio fiscal recurrente, resolvió lo segundo: «Considerando que comete grave abuso de confianza la persona que contrariando la en él depositada por el dueño de una cosa para su guarda y custodia, la sustrae ó consiente que otros la sustraigan, porque faltar de una de estas maneras al más fundamental deber que impone la aceptación de tal encargo, sobre todo cuando es remunerado, implica más graduada malicia que el mero quebrantamiento de obligación semejante, nacida de circunstancias que no ofrecieran al perjudicado la seguridad racional de una lealtad

que en aquella otra resulta prometida: Considerando que, por esta razón, la Audiencia sentenciadora ha cometido el error de derecho y las infracciones legales denunciadas al no declarar que el hecho ejecutado por José Cuenca constituye el delito de hurto calificado que prevé y castiga el núm. 2.º del art. 533 del Código penal, puesto que por su carácter de jornalero y de dependiente encargado de cuidar del local en que se hizo la sustracción, estaba especialmente obligado á la lealtad á que faltó por modo evidentemente grave, etc.» (Sentencia de 12 de Diciembre de 1887, publicada en la Gaceta de 12 de Abril de 1888, páginas 99 y 100.)

**CUESTION IV.** *Cuando concurren varios á la perpetración de un hurto, y uno de los culpables por sus relaciones con el perjudicado hubo de abusar gravemente de la confianza de éste, deberán ser considerados todos como coautores del delito calificado, que prevé y castiga el art. 533, núm. 2.º del Código, por razón del título del delito, ó lo será tan sólo aquel en quien concurre dicha relación personal, siendo los demás responsables meramente del delito de hurto simple, previsto en el 531 del propio Código?*—Contra la opinión del Ministerio fiscal, que sostuvo lo primero, ha declarado el Tribunal Supremo lo segundo: «Considerando que la responsabilidad de los otros tres procesados no es idéntica á la de Cuenca, porque ellos no quebrantaron la relación entre amo y servidor, determinante de la de éste; y porque, conforme á lo dispuesto en el art. 80 del Código penal, las circunstancias que consisten en las relaciones particulares del delincuente con el ofendido sólo afectan á los autores, cómplices ó encubridores en quienes concurren; y circunstancia agravante, siquiera calificada y con valor superior al ordinario, es en los hurtos el grave abuso de confianza: Considerando que la teoría de la indivisibilidad del título de los delitos no se halla sancionada como principio ó doctrina en el Código penal, el cual, si prohíbe la comunicación á todos los reos del aumento de responsabilidad determinado por meras circunstancias agravantes, concurrentes en uno, fuera ilógico afirmar que autoriza la generalización de éstas cuando las confiere mayor eficacia, y que en todo caso, en el presente subsiste la identidad de título, que es el de hurto, siquiera al concretarse y distribuirse la responsabilidad de los delincuentes, sólo se atiende á los derechos y relaciones violados por cada uno de ellos, á fin de que no resulte el exceso de imputar á todos los elementos parciales y privativos de la culpabilidad de alguno, y quebrantamiento de derechos que otros no ofendieron, ó de relaciones que no les ligaban, etc.» (Sentencia de 12 de Diciembre de 1887, publicada en la Gaceta de 12 de Abril de 1888, páginas 99 y 100.)

**CUESTION V.** *El cobrador y comisionado de apremio, nombrado y remunerado por el respectivo recaudador de contribuciones, que sustraen varios de los recibos que para el pago de éstas existen en la oficina de recaudación, y cobrándolos él mismo de los contribuyentes, se apropia su importe sin entregarlo en la oficina, será responsable del delito de estafa, ó del de hurto con grave abuso de confianza?*—El Tribunal Supremo ha declarado que esta última y más grave calificación es la que le corresponde: «Conside-



rando que el haber tomado el recurrente de la oficina de recaudación de contribuciones de que era cobrador nombrado por el recaudador con 75 pesetas mensuales, sin voluntad ni conocimiento de éste, porción de recibos importantes 14.390 pesetas, que hizo efectivas de los contribuyentes, apropiándose su importe, tal hecho reúne, á modo cierto, todas las condiciones que caracterizan de hurto este delito, tal cual se define en el citado artículo 530, siendo oportuna por lo mismo la calificación que de él se ha hecho en la sentencia recurrida: Considerando que verificada por el procesado la sustracción subrepticia de los recibos, prevalléndose del fácil acceso que tenía como empleado en las dependencias de la oficina y del conocimiento que esto le proporcionaba del sitio en que estaban colocados los recibos de contribuciones, abusó, á no dudarlo, gravemente, al llevarla á cabo, de la confianza que, al tenerlo empleado con sueldo, depositara en él su principal, y de la facilidad que ese mismo carácter le proporcionaba para realizar los recibos sin extrañeza de nadie y con notoria deslealtad, que lo hace acreedor á la agravación que el Código prescribe para tales casos en el núm. 2.º del art. 523, que con acierto ha sido aplicado por la Sala sentenciadora, sin incurrir por ello en las infracciones ni errores que el recurrente le atribuye, etc.» (Sentencia de 18 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 11 de Mayo, pág. 228.)

### Art. 533... 3.º

HURTO COMETIDO POR EL QUE ES DOS Ó MÁS VECES REINCIDENTE.

**CUESTION.** *Cuando el procesado por un delito de hurto ha sido condenado anteriormente en una sola sentencia por dos delitos de la misma especie, deberá estimarse que concurre una sola reincidencia ó dos, á los efectos del art. 533, núm. 3.º del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto una vez más que son tantas las reincidencias como los delitos penados anteriormente, al casar una sentencia de la Audiencia de Madrid que en el caso propuesto dejó de penar el hurto calificado por la doble reincidencia del culpable, estimando que ésta era una sola: «Considerando que hay reincidencia, según el art. 10, circunstancia 18, del Código penal, cuando al ser juzgado el culpable por un delito estuviere ejecutoriamente condenado por otro comprendido en el mismo título de este cuerpo legal: Considerando que la precedente definición determina dos conceptos, el de la reiteración de actos punibles de un mismo género y el de la prueba preexistente é indubitante de dichos actos por medio de una sentencia firme: Considerando que cuando concurren estos dos elementos, fundamental el primero y jurídico el segundo, existe la reincidencia técnicamente, y debe ser apreciada al juzgar: Considerando que no excluye la debida aplicación de estos principios, inconcusos en la esfera del derecho vigente, la eventualidad de que dos ó más he-

chos justiciables congéneres sean perseguidos en una sola causa y penados en una sola sentencia, porque esta simultaneidad de procedimiento no confunde ni puede confundir la individualidad de cada delito: Considerando que si consta, como lo declara probado la Sala sentenciadora, que Simeón Valverde fué condenado con anterioridad y ejecutoriamente por hurto consumado á cinco meses de arresto y por hurto frustrado á 125 pesetas de multa, es indudable que al ser penado en este proceso lo había sido antes dos veces por el mismo delito, y que estas tres condenas implican necesariamente dos reincidencias: Considerando que el Tribunal á quo, por no haberse atemperado á esta doctrina, genuinamente legal y consignada en varias Sentencias de esta Sala, ha incurrido en error de derecho, con infracción del art. 535, núm. 3.º, del mencionado Código, etc.» (Sentencia de 26 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 16 de Agosto, páginas 53 y 54.)

### CAPÍTULO III

#### De la usurpación.

#### Art. 535.

ALTERACIÓN DE TÉRMINOS Ó LINDES DE LOS PUEBLOS Ó HEREDADES, Ó DE CUALQUIERA CLASE DE SEÑALES DESTINADAS Á FIJAR LOS LÍMITES DE PREDIOS CONTIGUOS.

**CUESTION.** *¿Constituirá el delito de alteración de términos ó lindes, comprendido en el art. 535 del Código penal, el cambio de linderos entre unos montes públicos y la heredad de un particular, llevado á cabo por el Ayuntamiento de un pueblo, de acuerdo con aquél, aun cuando el deslinde de dichos terrenos se hubiese efectuado anteriormente por expediente instruido en debida forma por el Ingeniero del Cuerpo de Montes y aprobado por el Gobernador, y esta Autoridad no tuviera conocimiento ni diera autorización para ese segundo deslinde?*—La Sala de lo criminal de la Audiencia de Valencia lo estimó así, y condenó al Alcalde y Concejal del Ayuntamiento que intervinieron en él á la multa de 200 pesetas á cada uno y costas, cuya sentencia, á petición de la parte recurrente, apoyada por el Ministerio fiscal en el acto de la vista, casó el Tribunal Supremo por indebida aplicación, en este caso, del art. 535 del Código: «Considerando que la nota característica del delito de alteración de lindes consiste en el despojo cauteloso que de una propiedad inmueble se hace, bien con objeto de lucro, ó con el de dañar á un tercero, y esas condiciones no se encuentran en el hecho ejecutado por el Concejal representante del Ayuntamiento de Antella al señalar, en virtud de convenio celebrado por la Corporación municipal con D. Cristóbal Mompó, los terrenos públicos que agregaba á una finca de éste, en compensación



de la cesión que él hacía al procomún de vecinos de los productos forestales de la finca antedicha; porque no apareciendo que ninguna de las partes sufriera perjuicio por ese convenio consignado en un acta, cuya utilidad no es tampoco estimable, según se determina en la sentencia, aunque para su completa validez faltara á éste el requisito legal de la aprobación del Gobierno, esto, que podría invalidar en un caso el contrato, si ese requisito no se llena, no le da al acto, sin embargo, carácter criminal, porque no reúne las condiciones esenciales del delito de alteración de linderos, previsto en el art. 535 del Código penal, que á los recurrentes se les imputa en la sentencia: Considerando que al hacer base de su condenación el Tribunal sentenciador ese artículo, que no tiene al caso aplicación apropiada, lo infringió ciertamente é incurrió en el error de derecho que señala el núm. 1.º del artículo 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, etc.» (Sentencia de 6 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 28 de Julio, páginas 27 y 28.)

## CAPÍTULO IV

### Defraudaciones.

#### SECCIÓN SEGUNDA

#### ESTAFAS Y OTROS ENGAÑOS

### Art. 547.

PENA DEL QUE DEFRAUDA Á OTRO EN LA CANTIDAD Ó CALIDAD DE LAS COSAS QUE LE ENTREGARE EN VIRTUD DE UN TÍTULO OBLIGATORIO.

**QUESTION 1.** *El que vende á otro como labrantías y de primera calidad unas tierras que resultaron ser salbueras é infructíferas las unas, y las otras de tercera, aunque mala calidad, será responsable del delito de estafa, previsto en el art. 547 del Código?* — Así lo estimó la Audiencia de Avila, que condenó al procesado á la pena de cinco meses de arresto mayor, accesorias, indemnización y costas. Mas interpuesto por su defensa recurso de casación contra dicha sentencia por infracción del art. 547 del Código, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar* á él: «Considerando que la venta (1) de fincas rústicas cuando en la escritura se expresan clara y distintamente su cabida y linderos no constituye el delito de estafa la circunstancia de ser la tierra de inferior calidad á la consignada en el documento, porque esto puede

(1) «En la venta» debiera decir para que resulte la frase sintácticamente construida.

ser objeto de una acción civil: Considerando que no declarándose probado en la sentencia con la debida claridad y precisión que las tierras vendidas por Perrino á la querellante, y que aparecen de la escritura de venta, sean distintas de las que el mismo Perrino designó en el acto de la posesión como las vendidas, faltan los elementos necesarios para que estos hechos constituyan el delito de estafa; y al calificarse y penarse como delito por la Audiencia sentenciadora, ha incurrido en el error de derecho é infringido las disposiciones legales que se invocan como fundamento del recurso, etc.» (Sentencia de 21 de Diciembre de 1887, publicada en las *Gacetas* de 19 y 20 de Abril, páginas 124 y 125.)

**CUESTION II.** *¿Deberá calificarse de estafa y comprenderse en el art. 547 del Código la defraudación que en la cantidad de la leña ó carbón que venden al público cometen los almacenistas de dichos artículos, ó deberá comprenderse dicha falta de peso en la sanción más benigna del art. 592, núm. 4.º del Código?*—El Tribunal Supremo ha declarado que la primera y más grave calificación es la que á tales defraudaciones corresponde: «Considerando que comete el delito de estafa, con arreglo al art. 547 del Código penal, el que defraudare á otro en la sustancia ó calidad de las cosas que le entregare en virtud de un título obligatorio, é incurren en la falta del núm. 4.º del art. 592 los que defraudaren al público en la venta de sustancias, ya sea en cantidad, ya en calidad, por cualquier medio no penado expresamente: Considerando que el contexto y espíritu de uno y otro artículo demuestran evidentemente su diferencia esencial, originada de la naturaleza de los hechos á que se contraen, toda vez que el 592, en su número 4.º, se limita á la venta de sustancias alimenticias, mientras que el 547 comprende todas las demás, según tiene declarado este Supremo Tribunal: Considerando que la Sala sentenciadora, al calificar el hecho de delito de estafa y declararlo comprendido en el art. 547 del Código penal, no incurre en el error de derecho á que se refiere el núm. 1.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, ni infringe los artículos del Código penal que se citan en el recurso, etc.» (Sentencia de 8 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 19 de Junio, páginas 303 y 304.)

### Art. 548... 1.º

DEFAUDACIÓN CAUSADA Á OTRO USANDO DE NOMBRE FINGIDO, ATRIBUYÉNDOSE PODER, INFLUENCIA Ó CUALIDADES SUPUESTAS, APARUNTANDO BIENES, CRÉDITO, COMISIÓN, EMPRESA Ó NEGOCIACIONES IMAGINARIAS, Ó VALIÉNDOSE DE CUALQUIER OTRO ENGAÑO SEMEJANTE QUE NO SEA DE LOS EXPRESADOS EN LOS CASOS SIGUIENTES.

**CUESTION I.** *¿Será condición precisa del delito de estafa que con ella logre su autor un lucro determinado, ó bastará que con la misma se haya inferido un perjuicio á otra persona?*—El Tribunal Supremo ha declarado que basta esto último: «Consideran-



do que no es condición integrante del delito de estafa que su autor reporte para sí propio determinado ó conocido lucro, sino que se realiza siempre que por virtud de engaño genérico ó específico, ó de acto estimado por la Ley equivalente, se causa intencionalmente perjuicio á otra persona en su patrimonio, etc.» (Sentencia de 17 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 4 de Agosto, páginas 42 y 43.)

**CUESTION II.** *La realidad del delito de estafa, previsto en el núm. 1.º del art. 548 del Código, exige, además de la suposición de empresa ó negociación imaginaria, que el perjudicado haya sido inducido á entregar la cantidad en que se le defraudó por la creencia en la empresa ó negociaciones imaginarias, y que ésa sea la causa principal, cuando menos, de la entrega de la cantidad defraudada?*—José Rodríguez, camarero del café de Francia de esta corte, al que concurría también Jerónima Luengo para freagar la vajilla, contrajo con la misma relaciones ilícitas, y con promesa de que irían á Bayona á poner un café, consiguió de aquélla que le entregara hasta la cantidad de 400 pesetas, y como al hacer la última entrega le dijera que ya no podía disponer de más dinero, replicóle el Rodríguez que entonces ya no podrían hacer el viaje hasta el verano inmediato. Denunciado el hecho por la Luengo, por la no realización de la empresa y la no devolución de las cantidades entregadas, y formado el correspondiente sumario, la Audiencia de Madrid calificó el hecho de *estafa*, comprendida en el núm. 1.º del art. 548, y condenó al Rodríguez á cuatro meses y un día de arresto mayor. Mas interpuesto recurso de casación por el procesado, que apoyó el Fiscal en el acto de la vista (1), declaró el Tribunal Supremo *haber lugar á él* por los fundamentos siguientes: «Considerando que si bien comete delito de estafa quien defrauda á otro suponiendo empresa ó negociaciones imaginarias, la realidad de este delito exige, en casos como el presente, que la persona defraudada sea inducida á error por la creencia de semejantes empresas ó negociaciones, afirmadas por el culpable, y que ésa sea la causa principal, cuando menos, de la entrega de cantidades, y además, que realmente no existan esas mismas empresas ó negociaciones: Considerando que de los hechos consignados en la sentencia sólo aparece cierto el proyecto de una empresa, y como no se dice además como resultado del juicio, por las pruebas en él aducidas, que Rodríguez fingiera un propósito que efectivamente no abrigara, de trasladarse á Bayona para establecer el café, del mero hecho de la afirmación del aplazamiento para un tiempo que señaló no debe esto deducirse como consecuencia precisa, ni tampoco que hubiera en su ánimo la intención de perjudicar y de inducir maliciosamente á error perjudicial á sus intereses á persona con quien parece le unían intimidades lícitas, y que sin duda, y por ellas, puso con confianza en sus manos las cantidades de que pudo dis-

(1) La *Gaceta* dice lo contrario pero es un error, pues el autor de esta línea fué quien precisamente instó la providencia del recurso.

poner; y Considerando, por tanto, que la Audiencia sentenciadora, calificando como delitos hechos que no lo son por su propia índole, cualquiera que sea la responsabilidad que en el orden civil ocasione, ha cometido el error de derecho y las infracciones que se le atribuyen, etc.» (Sentencia de 23 de Septiembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 22 de Octubre, pág. 235.)

**CUESTION III.** *El que entra en un café y hace un gasto de tal ó cual cantidad, que al reclamársela el mozo se niega á satisfacer alegando que carece de dinero, será responsable del delito de estafa, comprendido en el núm. 1.º del art. 548 del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto una vez más la afirmativa: «Considerando que al presentarse José Villapoll en el café de Bilbao, aparentando tener con que satisfacer los gastos por él hechos, demandar el servicio, que no sólo no podía ni pensaba pagar, sino que al pedirle el mozo los 19 reales de su importe trató de pegarle, haciendo necesaria la intervención de un guardia municipal que fué preciso buscar, se ve claro en esos hechos su intento de defraudar por medio de ese engaño el valor de lo que había consumido, cometiendo en ello una estafa prevista en el núm. 1.º del artículo 548 del Código y penada en el también 1.º del 547, que cualifica con arreglo al 549 la circunstancia de ser dos veces reincidente en el mismo y semejante especie de delito, sin que desvirtúe ni altere el concepto del que cometió aquella noche el acto posterior á la incoación de estos procedimientos, encaminado á indemnizar, puesto que el perjuicio estaba ya irrogado y la estafa consumada, etc.» (Sentencia de 3 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 4 de Abril, pág. 78.)

**CUESTION IV.** *El menor de edad que toma una cantidad á préstamo, presentando como fiador y principal pagador de la misma á un comerciante que autoriza como tal el pagaré, será responsable del delito de estafa, comprendido en el art. 559, núm. 1.º del Código de Cuba y Puerto Rico (548, núm. 1.º del de la Península), si ejercitada al vencimiento de aquél la correspondiente acción por el acreedor contra el fiador, es éste absuelto por no resultar probado que hubiese garantido el pagaré, constanding además que en la época del otorgamiento no figuraba como comerciante en la matrícula correspondiente?*—Así lo estimó la Sala de Justicia de la Audiencia de Puerto Rico, que condenó á dicho menor á la pena del expresado delito de estafa. Mas interpuesto por la defensa del procesado recurso de casación contra dicha sentencia, alegando la infracción del artículo aplicado, porque siendo nulos los contratos celebrados con los menores, no podía existir defraudación ni delito alguno imputable al procesado, declaró el Tribunal Supremo haber lugar al expresado recurso por los fundamentos siguientes: «Considerando que supuesta la incapacidad legal en que para contratar por sí se encuentran los menores de edad, no cabe afirmar sin contradicción manifiesta la existencia de engaño alguno en contratos de semejante índole, á no ser que hubiera ficción de mayor edad, bastando como basta la minoridad para que sólo por razón de ella se abstenga cualquiera de establecer con el menor por tal medio género alguno de mutuas obligaciones: Consideran-



do que tanto por lo expuesto como por no tener realidad, según se afirma en la sentencia, la razón social de D. Jerónimo Agrait y Compañía, con que aparentemente se garantizaban los pagarés otorgados por D. Tomás Agrait, no es posible suponer que doña Joaquina Juliá fuese inducida á engaño al hacer á un menor los préstamos que se figuran en los pagarés con el interés de uno y medio por 100 mensual, no constando, como no constaba, por otra parte, que D.ª Joaquina Juliá pudiese tener algún motivo, si quiera fuese liviano, para creer en la existencia de dicha supuesta Compañía. Considerando que no constituyendo por lo expuesto delito de estafa los hechos imputados á D. Tomás Agrait, cualquiera que sea el aspecto meramente moral de los mismos, y obligación en que está de devolver las cantidades recibidas, la Audiencia de Puerto Rico ha incurrido en el error de derecho señalado en el recurso al penarlos como delito no siéndolo, etc.» (Sentencia de 12 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 3 de Mayo, páginas 161 y 162.)

**CUESTION V.** *Aun cuando en la sentencia recurrida se diga que los procesados sustrajeron á la perjudicada cierta cantidad que acababa de cobrar en billetes de Banco de la Caja de Ahorros, dejándola algunos paquetes que sólo contenían monedas de cinco céntimos, si de estas palabras, como del contexto todo de la sentencia, se desprende que lo realizado fué un verdadero timo por el procedimiento de los cartuchos, procederá la casación de aquella en que se califica y pena el expresado hecho como constitutivo de un delito de hurto, cuando en realidad merece la calificación del delito, menos grave, de estafa?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que son elementos esenciales y constitutivos del delito de estafa, definido en el núm. 1.º del art. 548 del Código penal, el engaño y la defraudación, aquél como medio de conseguir ésta: Considerando que afirmándose en la sentencia recurrida que los procesados se incorporaron á la perjudicada Leonarda Velázquez, que fingiéndose unos de ellos inglés y que necesitaba cambiar unos paquetes de oro por billetes, les acompañó la Velázquez á una casa de banca, y en la puerta de la misma la sustrajeron los billetes del Banco de España, por valor de 750 pesetas, dejándola en su lugar algunos paquetes de monedas de cinco céntimos, que con anterioridad la manifestaron contenían monedas de oro, estos actos demuestran evidentemente que el hecho procesal constituye el delito de estafa, comprendiéndose, por la forma en que se halla redactada la sentencia, que Leonarda Velázquez entregó los billetes y recibió en cambio el paquete de monedas, que después resultaron de cinco céntimos, no cabiendo en su consecuencia sostener, como se hace en la sentencia reclamada, que los recurrentes sustrajeron los billetes á la Velázquez en el concepto jurídico determinante del hurto que define el núm. 1.º del art. 530 del Código penal, por lo que, al calificar la Sala sentenciadora el hecho de autos como un delito de hurto, ha incurrido en el error de derecho é infringido las disposiciones legales que la atribuyen los recurrentes, etc.» (Sentencia de 14 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 4 de Mayo, páginas 164 y 165.)

**CUESTION VI.** *El dueño de una de esas llamadas agencias de colocaciones que, en connivencia con otro de los del oficio, anuncia en la puerta de su casa la vacante de una plaza de guarda de coto, para cuya obtención le entrega uno de los aspirantes á ella parte de la cantidad exigida, resultando luego que ni existía tal plaza ni el interesado pudo recobrar el dinero que dió á cuenta, ¿será responsable del delito de estafa, previsto y penado en el artículo 548, núm. 1.º del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que según el núm. 1.º del artículo 548 del Código penal, en relación con el 547 del mismo, es reo de estafa el que defrauda á otro valiéndose para ello de engaño, que es precisamente lo que hizo el recurrente Angel Hernán Martín en unión de Antonio de Dios Tornero al suponer una vacante de guarda de coto no existente, á pesar de lo que fué anunciada por este último en la agencia de colocaciones, simulando al hacerlo una comisión imaginaria, en virtud de la que fué defraudado Juan Gómez en la cantidad de 20 pesetas que entregó y no le han sido devueltas, cuya defraudación y engaño constituyen el expresado delito, debidamente calificado por la Sala sentenciadora: Considerando que habiendo tomado el recurrente participación directa en la ejecución del hecho, como lo demuestra la circunstancia de que tanto éste como el otro procesado ofrecieron y hablaron al Gómez de la plaza imaginaria de guarda de coto, afirmando el Tornero que si bien él anunció la vacante fué por indicación del Hernán, todo lo que evidencia que ambos de acuerdo convinieron en llevar á cabo el engaño para conseguir el acto punible que se propusieron, y que en tal concepto ha sido debidamente calificado de autor por el Tribunal á quo, no siendo sostenible la de cómplice que se invoca en el recurso interpuesto, etc.» (Sentencia de 8 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 19 de Junio, pág. 304.)

**CUESTION VII.** *El que entra en una fonda, posada ó venta solicitando alojamiento y servicios que le fueron suministrados, y luego se marcha cautelosamente sin pagar, ¿será responsable del delito de estafa, que prevé el núm. 1.º del art. 548 del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando, respecto al segundo motivo alegado, que la presentación del procesado en la venta de Francisco Fernández solicitando alojamiento y servicios que le fueron suministrados hasta el importe de 5 pesetas, que dejó de pagar por haberse marchado cautelosamente, lleva consigo un engaño, apreciado en el núm. 1.º del artículo 548 del Código, porque al obrar así aparentaba que tenía dinero con que satisfacer el gasto, bajo cuyo supuesto se le facilitó lo que pidió, y por lo mismo, el hecho ejecutado por el recurrente constituye el delito de estafa, castigado acertadamente en la sentencia recurrida con sujeción á aquel artículo, que la Sala sentenciadora no ha infringido al aplicarlo, etc.» (Sentencia de 2 de Julio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 7 de Octubre, páginas 220 y 221.)

**CUESTION VIII.** *La falta de cumplimiento por parte de un empresario ó contratista de quintos de la obligación que me-*



*diante el recibo de cierta cantidad contrajo de proporcionar á un sujeto un sustituto para el servicio de las armas, será constitutiva del delito de estafa, si no constan los motivos á que fué debida la falta de cumplimiento del expresado compromiso?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa al casar cierta sentencia de la Sala de lo criminal de Zaragoza, que calificó y penó como estafa el hecho referido: «Considerando que el hecho de haber recibido Mauricio Gómez Fornies de Antonio Martínez la suma de 300 pesetas por virtud de la obligación que aquél contrajo y no cumplió de sustituir á un hijo de éste si le correspondía servir en el Ejército de Ultramar no constituye el delito de estafa que ha motivado la condenación del recurrente, puesto que al verificarse el contrato no se atribuyó el Mauricio Gómez influencias ó medios supuestos con que pudiera creerse contaba, sino que realmente se obligó en su calidad de contratista de quintos: Considerando que la falta de cumplimiento de la expresada obligación, debida á causas que no se determinan en la sentencia recurrida, y por consiguiente son desconocidas, tampoco revela la existencia del elemento característico del delito de estafa, cual es el dolo ó engaño: Considerando, por tanto, que la Sala de lo criminal de la Audiencia de Zaragoza ha incurrido en error de derecho al calificar y penar como delito un hecho que no lo constituye, etc.» (Sentencia de 11 de Octubre de 1888, publicada en la Gaceta de 29 de Diciembre, páginas 283 y 284.)

#### Art. 548... 4.º

DEFRAUDACIÓN CAUSADA Á OTRO CON PRETEXTO DE SUPUESTAS REMUNERACIONES Á EMPLEADOS PÚBLICOS.

**CUESTION.** *El que pide y recaba de un tercero la entrega de una cantidad de dinero asegurando que cuenta con influencias bastantes para la declaración de la inutilidad de un hijo de aquél, á quien cupiera la suerte de soldado, y cuya cantidad manifestó ser precisa para gratificar á los facultativos que entendían en la curación pretendida, ¿podrá alegar válidamente á su favor que semejante hecho no cae bajo la sanción del Código, por tratarse de un contrato consensual no penable, ó será por el contrario responsable del delito de estafa, comprendido en el art. 548, núm. 4.º del referido cuerpo legal?*—El Tribunal Supremo ha declarado que el hecho expuesto cae de lleno bajo la prescripción del referido artículo: «Considerando que se comete delito de estafa cuando se defrauda á otro, atribuyéndose influencias supuestas para conseguir un objeto determinado, ó con el pretexto de remuneraciones igualmente supuestas á empleados públicos, y que el recurrente D. Ildefonso Villar Cabo, al obtener, como obtuvo, de D. Antonio Montijano 1.320 reales, con el pretexto de que eran para gratificar á los Facultativos encargados del reconocimiento del joven Juan Montijano, y seguridad que dió al perjudicado de que con-

taba con influencias para que lo declarasen inútil, cometió dicho delito, puesto que no sólo no medió causa lícita en semejante convenio, sino que un engaño fué lo que determinó á Montijano para hacer la entrega del dinero, por todo lo cual la Audiencia de Jaén no ha incurrido en el error de derecho que la representación del recurrente le atribuye, etc.» (Sentencia de 22 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 25 de Marzo de 1889, páginas 80 y 81.)

### Art. 548... 5.<sup>o</sup>

APROPIACIÓN Ó DISTRACCIÓN, EN PERJUICIO DE OTRO, DE DINERO, EFECTOS Ó CUALQUIERA OTRA COSA MUEBLE RECIBIDA EN DEPÓSITO, COMISIÓN Ó ADMINISTRACIÓN, Ó POR OTRO TÍTULO QUE PRODUZCA OBLIGACIÓN DE ENTREGARLA Ó DEVOLVERLA, Ó NEGATIVA DE HABERLA RECIBIDO.

**CUESTION I.** *El que al ir á recoger una letra ya pagada recibe, por equivocación, del dependiente de la casa otra de mayor cantidad girada contra el mismo y no satisfecha, habiendo sido infructuosas cuantas gestiones se practicaron repetidamente para deshacer la equivocación, apropiándose de este modo el interesado la diferencia entre una y otra letra, importante 2.500 pesetas, ¿será responsable del delito de estafa, comprendido en el art. 548, número 5.<sup>o</sup> del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que há lugar á la casación en sentencia definitiva, conforme al núm. 1.<sup>o</sup> del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, cuando los hechos que en ella se declaren probados sean calificados de delito no siéndolo, ó cuando se penen apesar de existir una circunstancia de exención de responsabilidad ó motivos posteriores á su ejecución que impidan penarlos: Considerando que la representación legal de Cayetano León Gil, fundándose en el primer extremo del citado número y artículo, pretende que se case la sentencia recurrida, suponiendo que no constituye delito el hecho declarado probado de haber recibido intencionalmente de su parte y equivocadamente de parte del que la entregaba una letra de 3.000 pesetas por otra de 500, ambas expedidas á cargo suyo y que no quiso devolver, apropiándose por este medio 2.500 pesetas, y no tiene en cuenta que para defraudar esa cantidad ha ocultado un documento, y que, como indica el Tribunal sentenciador en su fallo, la equivocación siempre era un título que le obligaba á devolver lo malamente adquirido, incurriendo, al no hacerlo, en la responsabilidad que con relación al art. 548 determina el 547 (1) del Código penal, que no ha sido infringido, según sin fundamento y con poco acierto se sostiene en el recurso, etc.» (Sentencia de 4 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 23 de Noviembre, pág. 333.)

(1) En la *Gaceta* se lee: art. 549, pero debe de ser una errata material ó de imprenta.



**CUESTION II.** *La manifestación del perjudicado de que no se le ha seguido perjuicio de ninguna especie de la falta del dinero que el procesado confesó haber distraído y aplicado á sus usos propios, será bastante á determinar la inexistencia del delito de estafa?*—Así lo estimó la Sala de lo criminal de la Audiencia de Valladolid, la que absolvió al procesado. Mas interpuesto recurso de casación por el Ministerio fiscal contra dicha sentencia por no haberse apreciado y penado el susodicho delito de estafa, declaró el Tribunal Supremo haber lugar á él: «Considerando que, según el núm. 5.º del art. 548 del Código penal, cometen delito de estafa los que en perjuicio de otro se apropian ó distraen dinero recibido en comisión ó administración: Considerando que de las declaraciones de la sentencia reclamada aparece que Narciso Barrio se apropió 125 pesetas de la cantidad que, en su calidad de conserje de una sociedad, había recibido para ésta, destinándolas á usos propios: Considerando que á más de este elemento esencial del delito de estafa indicado, concurren en el caso presente el también integrante del mismo, consistente en haberse causado perjuicio con la apropiación de la cantidad, porque en su cuantía se disminuyó el capital de la sociedad sufriendo sus intereses ese menoscabo, aun cuando no afectara, por su relativa exigüidad, á la marcha de ésta, en cuyo sentido, derivado de los hechos, debió entenderse la expresión á que alude la sentencia del Presidente y Tesorero declarantes; y Considerando que la Sala sentenciadora ha cometido el error de derecho que le atribuye el Ministerio fiscal por la infracción del artículo 548 del Código penal, etc.» (Sentencia de 13 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 23 de Noviembre, páginas 342 y 343.)

**CUESTION III.** *Si del proceso resulta que habiéndose uno de los procesados constituido en fiador personal de un sujeto para garantizar su presentación en el pueblo donde le cupiera la suerte de soldado, hubo de recabar de éste que en garantía de la fianza que por él había dado sacara cierta cantidad que tenía en la Caja de Ahorros y la entregase á un tercero, con quien tenía cuenta pendiente y con el cual se concertó al efecto; y habiendo cesado ya la responsabilidad del quinto, y reclamada por éste á su fiador la devolución de la cantidad que le entregara en garantía, le contestó que se la pidiera á su compañero, quien se negó á devolverla por haberla aplicado al pago de otra mayor que le adeudaba el fiador, deduciéndose de todo lo actuado que éste y su acreedor se concertaron entre sí para aprovecharse de la cantidad que el perjudicado tenía en la referida Caja de Ahorros, para entregarla el uno y recibirla el otro por cuenta de la adeudada por el primero al segundo, constituirá semejante hecho el delito de estafa, previsto y penado en el art. 554 del Código, ó el más grave comprendido en el 548, número 5.º del mismo?*—La Sala de lo criminal de la Audiencia de Madrid estimó lo primero y condenó á los procesados á la multa á cada uno de 1.827 pesetas. Mas en virtud del recurso que por vía de adhesión interpuso el Ministerio fiscal, solicitando la imposición de la pena más grave del art. 548, núm. 5.º del Código, el

Tribunal Supremo casó la referida sentencia por los fundamentos siguientes: «Considerando que los recursos de casación por infracción de ley interpuestos por los procesados Pérez Anguita y Garrouste Danguillon están reducidos á afirmar que los hechos que la sentencia declara probados y califica y pena como delito de estafa carecen de los elementos jurídicos necesarios para que puedan y deban ser calificados de justiciables, estando en este concepto comprendido el problema jurídico planteado por uno y otro recurrente en el núm. 1.º que citan del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, y como infringido el art. 554 del Código penal, que aplica la Sala sentenciadora: Considerando que los hechos que la sentencia recurrida declara probados no constituyen sólo una obligación civil á favor de Pico y contra Pérez Anguita y Garrouste, como éstos pretenden, sino que contienen la demostración del fraude doloso, que es el elemento jurídico de la estafa ó engaño que pena el Código, porque Pérez Anguita estaba obligado á guardar y no distraer aquella cantidad que en garantía del cumplimiento de otra obligación le entregó Pico; y al apropiársela, de acuerdo con Garrouste, y en provecho de ambos, puesto que la destinaron á enjugar parte de la deuda que éste tenía en favor de aquél, y no devolverla á Pico, cuando éste la reclamó legítimamente, ambos cometieron un hecho que cae dentro de la sanción penal del Código; sin que pueda modificar la apreciación del mismo la circunstancia de estar la libreta en la Caja de Ahorros que cobró Pico bajo nombre distinto, porque este hecho, sea cualquiera la calificación que merezca por virtud de las diligencias que se han de instruir, no tiene relación alguna con el que ha sido materia de este juicio, no pudiendo tampoco desvirtuar ni modificar el concepto del delito de estafa los actos posteriores de Garrouste, encaminados á pagar en parte á Pico la cantidad estafada y prometerle pagar el resto; porque el perjuicio debe apreciarse en el momento de perpetrarse el acto ilícito, cualquiera que sea el resultado ulterior de la indemnización: Considerando que en este concepto, los recursos interpuestos por Pérez Anguita y Garrouste Danguillon son improcedentes, porque los hechos contenidos en la sentencia como base y fundamento de la misma constituyen un delito, y no ha cometido el Tribunal sentenciador el error de derecho comprendido en el núm. 1.º del citado art. 849, como aquéllos sostienen: Considerando, en orden al recurso que por vía de adhesión ha interpuesto el Ministerio fiscal, que cometen el delito de estafa, comprendido en el núm. 5.º del art. 548 del Código, los que en perjuicio de otro se apropiaren ó distrajeren dinero, efectos ó cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión ó administración, ó por otro título que produzca obligación de entregarla: Considerando que al apropiarse Pérez Anguita y Garrouste la cantidad que por acuerdo y encargo de éste entregó Pico á aquél en garantía de que se presentaría el Pico en su pueblo á responder al llamamiento que se le hacía como soldado, cometieron el delito que expresa el citado artículo, porque concurrió en el hecho la apropiación de la cantidad recibida, con obligación de guardarla para



devolverla cuando legitimamente fuera reclamada, y al no estimarlo así la Sala sentenciadora y aplicar indebidamente el artículo 554 del Código penal, ha incurrido en el error de derecho reclamado por el Ministerio fiscal, etc.» (Sentencia de 28 Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 7 de Mayo, páginas 196 y 197.)

**CUESTION IV.** *El Alcalde de un pueblo que impone á varios vecinos del mismo una multa por haber desobedecido un bando que mandó publicar, y percibe parte de aquéllas en metálico, utilizándose de estas cantidades sin ingresarlas en las arcas del Municipio ni hacerlas figurar en parte alguna, y hace trabajar un día por su cuenta á uno de los multados, compensando con el jornal que debió satisfacerle la multa impuesta al mismo, será responsable del delito de estafa, comprendido en el núm. 5.º del art. 548 del Código?*—No lo estimó así la Audiencia de lo criminal de Teruel, la que declarando que los hechos expuestos no constituían el delito de estafa, único acusado, porque no medió engaño ni el Alcalde recibió el dinero en comisión, depósito ni administración, ni por otro título que le obligara á devolverlo, absolvió á dicho procesado. Mas interpuesto contra esta sentencia recurso de casación por el Ministerio fiscal, por indebida no aplicación á este caso del citado art. 548, núm. 5.º del Código, declaró el Tribunal Supremo haber lugar á él: «Considerando que si bien el Alcalde procesado pudo no exceder sus atribuciones al imponer las multas, su resolución, no revocada ni aun reclamada, le obligaba á procurar su exacción de la manera prevista en el núm. 9.º del artículo 137 de la ley Municipal, en beneficio de la hacienda del Municipio, por constituir uno de los ingresos de su presupuesto, según el art. 136 de la misma ley: Considerando que con recibir dicho Alcalde una peseta en metálico de cada uno de tres de los multados y obtener del otro el trabajo de un día en su particular beneficio, defraudó á la Hacienda municipal con tan legítima conmutación en el importe de las multas, y con guardar para sí aquella cantidad, es notorio, dentro de los términos de la sentencia y del proceso, que con abuso de su cargo se apropió dinero que tenía obligación de entregar á la caja municipal, á la que correspondía como parte de las multas, lo cual constituye el delito previsto en el núm. 5.º del art. 548 del Código penal: Considerando que al no estimarlo así la Audiencia sentenciadora ha cometido el error de derecho y las infracciones alegadas, etc.» (Sentencia de 31 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 8 de Mayo, pág. 203.)

**CUESTION V.** *La falsa negativa de haber recibido una cantidad en préstamo, constituirá el delito de estafa, comprendido en el art. 548, núm. 5.º del Código?*—Una vez más el Tribunal Supremo ha resuelto el caso en sentido afirmativo en contra de nuestra opinión. (Véase *Código penal concordado y comentado*, art. 548, número 5.º, *Cuestión I*, y *Suplemento 3.º* al mismo, *Cuestión V.*, página 407.) Los fundamentos de esta nueva resolución son los siguientes: «Considerando que, según tiene ya declarado este Supremo Tribunal en sentencias anteriores, el hecho de negar en perjuicio de otro el recibo de una cantidad realmente entregada

constituye el delito de estafa, definido en el núm. 5.º del art. 559 del Código de Cuba y Puerto Rico, cualquiera que sea el título por razón del cual esté el deudor obligado á su devolución, aun cuando dicho título nazca de un préstamo mutuo, ya porque la razón de la ley es la misma, ya porque el último término de dicho número y artículo no se refiere exclusivamente al primero, sino que comprende indistintamente todos los casos en que la obligación del deudor á entregar cierta cantidad proceda de haber recibido anteriormente otra igual, cuya interpretación es la más recta que cabe dar á la generalidad con que el Código habla de cualquier otro título que produzca obligación de devolver la cantidad recibida, puesto que la especie distinta en que pueda hacerse la devolución no altera realmente el carácter esencial de la obligación, etc.» (1) (Sentencia de 14 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 19 de Junio, páginas 308 y 309.)

**CUESTION VI.** *Con motivo de una disputa suscitada en una taberna interviene la policía, y el cabo de Seguridad, con pretexto de abonar un capote y unas botas que se rompieron á uno de los guardias que intervino en la pelea, exige y obtiene del tabernero 100 pesetas, cuya cantidad ni entregó al guardia ni devolvió al tabernero: ¿existe aquí el delito de estafa del art. 548, núm. 5.º del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que, con arreglo á lo dispuesto en el núm. 5.º del art. 548 del Código penal, son reos del delito de estafa los que en perjuicio de otro se apropiaren ó distrajeren dinero, efectos ó cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión ó administración, ó por otro título que produzca obligación de entregarlo ó devolverlo: Considerando que apareciendo probado de los hechos que se consignan en la sentencia recurrida que el procesado Eugenio Padrones, cabo del cuerpo de Seguridad, con el pretexto de abonar un capote y unas botas que se habían roto á uno de los guardias, exigió y obtuvo de Marcelino Pruneda la suma de 100 pesetas, que ni entregó al expresado guardia ni devolvió al Pruneda, es evidente que dicho procesado se apropió ó distrajo la cantidad recibida al objeto indicado, incurriendo por tanto en la responsabilidad criminal que determinan los artículos del Código penal 547, núm. 1.º, y 414, etc.» (Sentencia de 20 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 17 de Mayo, pág. 269.)

**CUESTION VII.** *El que habiendo vendido un piano de su propiedad á un sujeto, de quien lo recibe á su vez en aquilón por un*

(1) Aunque expuesto con suma habilidad el argumento, no podemos en modo alguno estar conformes con él, por las razones que ya expusimos en nuestros comentarios al Código y reproducimos en el Suplemento 3.º, pág. 407. Además, la lógica inflexible del propio argumento exige que si se considera suma estafa la negativa de haber recibido una cantidad en préstamo, se estime como igual delito la no devolución de la cantidad prestada, como sucede en los casos de depósito, administración, comisión ó otros títulos que obligan á la devolución ó entrega de la cosa. Y sin embargo, ya hemos visto (Suplemento 3.º, pág. citada) que el Tribunal Supremo no considera delito la no devolución de la cantidad recibida en préstamo. Aquí de la constada pregunta: ¿*Cur tam varie?*



*tanto mensual, lo enajena nuevamente á distinta persona, apropiándose su precio, ¿podrá eximirse de la responsabilidad aneja al delito de estafa del art. 548, núm. 5.º del Código, aun cuando al venderlo al primer comprador le hubiese éste concedido el derecho de retraerlo?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que el recurrente vendió como propia una cosa mueble recibida en alquiler, y que este título de posesión precaria implicaba la obligación de entregar ó devolver á su legítimo dueño el mueble alquilado: Considerando que al apropiárselo Mariano Torija y recibir el importe de la venta cometió voluntariamente un acto definido como delito en el núm. 5.º del art. 548 del Código penal: Considerando que no le exime de esta responsabilidad la circunstancia de haberle concedido el dueño del piano el derecho de retraerlo, pagando su precio, porque sólo cumpliendo esta condición, que no cumplió, adquirió la facultad de disponer de la cosa alquilada, etc.» (Sentencia de 24 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 17 de Mayo, pág. 270.)

**CUESTION VIII.** *Aun cuando en los documentos de entrega de unos valores por un particular á una casa de comercio se exprese que ésta los recibe en calidad de depósito, ¿podrá perseguirse criminalmente, invocando la sanción del art. 548, núm. 5.º del Código, la no devolución de aquéllos por la expresada casa mercantil, si resulta que ésta hizo con dichos valores una multitud de operaciones bursátiles con conocimiento, conformidad y aquiescencia de su dueño?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que no basta para la existencia legal de un depósito que se dé esta denominación á la entrega de la cosa ó efectos en el documento que se otorgue en garantía, si el contrato por otra parte no reúne las condiciones adecuadas al mismo, ó se desvirtúan por una novación que virtualmente le hace variar aquel carácter por conveniencia del deponente, y mucho menos bastará si en la denominación del contrato únicamente se buscó un pretexto para la más expedita reclamación, que no es la propia y natural del verdadero contrato realizado: Considerando que aun cuando en los documentos privados expedidos primero por la razón social Calsa y Compañía, y luego al disolverse esta Sociedad por la que la sustituyó bajo la de Mascus y Pascual, dando por recibidas diversas obligaciones del Banco Hipotecario Colonial y otras varias de distintas clases que les habían sido entregadas por el recurrente, se expresa que lo fueron en la clase de depósito, habiéndose hecho por la Sociedad con esas obligaciones porción de operaciones bursátiles y venta de algunas para sustituirlas con otras, con conocimiento, conformidad y aquiescencia del que había hecho la entrega, cual se consigna en la sentencia, mal pudo tener ésta el carácter de depósito, que obligaría á la conservación y devolución de las mismas obligaciones entregadas: Considerando que al consentir el recurrente que con los títulos se hicieran aquellas operaciones, ó novó el contrato si efectivamente fué en su origen de depósito, ó sólo le dió este nombre buscando en él una garantía que no le ofrecería la Sociedad, cual se la hubiera ofrecido á haber querido constituir un

verdadero depósito el Banco de Barcelona, ó cualquier otro de los que se hallan sólidamente constituidos en aquella capital: Considerando que no apareciendo ni indicándose siquiera en la sentencia recurrida que esas obligaciones se entregaran á la casa social en comisión ó administración, lo que, por otra parte, no hace presumible ni probable el carácter mismo de esa clase de valores; si al suponer que se hizo con el carácter de depósito, se simuló el verdadero que el contrato tenía, esa simulación no puede jurídicamente servir de fundamento á una acción criminal, y la reclamación que de esos valores se intenta tiene necesariamente que hacerse en otra clase de juicio: Considerando, en su virtud, que al no hacer aprecio la Sala sentenciadora del número 5.º del art. 548, en relación con el 547 del Código penal, que no tienen al caso aplicación adecuada, no ha podido infringirlos ni incurrir en el error de derecho que el recurrente le atribuye, etc.» (Sentencia de 28 de Abril de 1888, publicada en las *Gacetas* de 16 y 18 de Agosto, páginas 60 y 61.)

**CUESTION IX.** *¿Procederá la casación de la sentencia en que se califica y pena el delito de estafa, comprendido en el núm. 5.º del art. 548 del Código, si en aquella no se consigna el título en virtud del cual el supuesto estafador recibió la cantidad ó cosa que se apropiara?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que para la existencia del delito de estafa, que se define en el núm. 5.º del art. 548 del Código, es preciso que la cantidad que se supone apropiada ó distraída haya sido entregada en virtud de un título que produzca obligación de entregar ó devolver la misma cosa cuando se reclama, ó que se niegue su recibo cualquiera que sea el título con que haya sido hecha la entrega, y que en el caso del presente recurso no se expresa en la sentencia con qué título y consiguientemente con qué género de obligación recogió Joaquina Acuña, en virtud de consentimiento de su hermana, 3.130 pesetas, si era para que se las guardara ó dispusiera de ellas libremente, ó con objeto determinado, ni si en todo caso realizó la apropiación ó distracción antes ó después de separarse de su compañía; por todo lo que falta un elemento esencial para la determinación de dicho delito, así como para exigir responsabilidad criminal á la penada, pues no es lo mismo deber una cantidad á título de préstamo que á título de depósito, comisión ó administración; ni la reclamación de la misma, hecha con posterioridad á la separación de las hermanas, excluye la posibilidad de que la apropiación ó distracción de las 3.130 pesetas se hiciera antes por la Joaquina Acuña: Considerando que, esto supuesto, la Audiencia de lo criminal de Lugo ha incurrido en error de derecho al penar como delito un hecho que no presenta todos los caracteres necesarios para poder ser así calificado, etc.» (Sentencia de 9 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 24 de Agosto, páginas 85 y 86.)

**CUESTION X.** *El depositario de efectos embargados, nombrado por la Autoridad judicial, que se los apropia ó distrae, será responsable del delito de estafa del art. 548, núm. 5.º del Código, ó del de malversación de caudales públicos, comprendido en*



el 405, núm. 2.º del mismo?—La Sala de lo criminal de la Audiencia de esta Corte estimó lo primero. Mas el Tribunal Supremo declaró lo segundo al casar dicha sentencia, en virtud del recurso interpuesto contra la misma por el Ministerio fiscal: «Considerando que el depositario nombrado por la Autoridad judicial que dispone en provecho propio ó ajeno de los caudales puestos á su cargo por consecuencia de un embargo, aun cuando pertenezcan á particulares, comete el delito especial que define el art. 410 del Código, en relación con los definidos en los artículos 405, 406 y 407 del mismo, según los respectivos casos: Considerando que el acto realizado por D. José Antonio Carlier es constitutivo de verdadera sustracción de los efectos embargados judicialmente á D. Roque Satrón, de los que era depositario, bien lo realizara en provecho propio, bien en provecho del otro penado D. Román Rincón, por lo que el delito cometido es el definido en el art. 405, número 2.º, en relación con el 410, por razón de la cuantía de los efectos sustraídos, según sostiene el Ministerio fiscal en su adhesión al recurso principal, y que la Sala sentenciadora ha incurrido en error de derecho al calificar el acto punible como delito de estafa, comprendido en el núm. 5.º del art. 548 del Código, etc.» (Sentencia de 11 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 24 de Agosto, páginas 86 y 87.)

**CUESTION XI.** *El que ofrece á otro participación en un billete de lotería, y aceptada aquélla, pero sin entrega de la cuota por el partícipe, por habérsela compensado el tenedor del billete como baja en las cuentas entre ambos existentes, y habiendo salido premiado el billete se niega á entregar á dicho partícipe la parte que le corresponde, ¿será responsable del delito de estafa, comprendido en el núm. 5.º del art. 548 del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que el recurrente don José Vázquez Pérez, Administrador subalterno de Loterías de Cieza, ofreció espontáneamente á Manuel Segura la participación de 10 pesetas en el residuo de billetes correspondientes á la rifa titulada del Niño Jesús; y que, aceptada la proposición, quedó, por compensación, cobrada aquella cantidad, y por su importe determinado el beneficio relativo al premio ó premios que se pudieran obtener: Considerando que este convenio, celebrado en el mismo día del sorteo, imponía la obligación á Vázquez, como portador y cobrador del billete ó billetes premiados, de entregar á cada partícipe la cantidad correspondiente, no pudiendo apropiársela ó distraerla sin incurrir en responsabilidad criminal: Considerando que el núm. 5.º del art. 548 del Código vigente define esta responsabilidad, y entre otros casos la impone al que en perjuicio de otro se apropie dinero recibido, con la obligación de entregarlo ó devolverlo; Considerando que D. José Vázquez, al retirar los décimos premiados de poder de D. Francisco Candel y hacer efectivos los premios en la ciudad de Murcia, obró como mandatario comisionado ó agente de los partícipes, y, por consiguiente, bajo un título ó carácter que le obligaba á entregar á cada interesado la cantidad que le correspondiera, como lo hizo con todos menos con el querellante Segura, cuya partici-

pación estima el Tribunal sentenciador en 1.434 pesetas 50 céntimos: Considerando que al apropiarse Vázquez esta suma delinquió, sin que pueda excusar su responsabilidad alegando el pretexto de haberle dado el día anterior la corazonada de llevar por sí los décimos que le quedaban, porque no sólo es notoria la falsedad de esta manifestación, sino del todo ineficaz, pues no podía faltar sin motivo alguno al cumplimiento del compromiso contraído: Considerando, por tanto, que el Tribunal á quo no ha infringido el art. 1.º del Código penal, porque los hechos procesales constituyen delito, ni el art. 548, núm. 5.º, porque al delito cometido es aplicable esta disposición de la Ley, etc.» (Sentencia de 28 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 30 de Agosto, páginas 119 y 120.)

### Art. 548... 6.º

DEFRAUDACIÓN CAUSADA ABUSANDO DE FIRMA DE OTRO EN BLANCO Y EXTENDIENDO CON ELLA ALGÚN DOCUMENTO EN PERJUICIO DEL MISMO Ó DE UN TERCERO.

**QUESTION.** *Para que exista el delito de estafa, comprendido en el núm. 6.º del art. 548 del Código, será menester que el autor de la firma en blanco la haya entregado ó confiado al que abusó de ella?*—Al escribir y publicar en 1874 nuestros comentarios al Código, expusimos ya, ocupándonos en el de dicho artículo y número, nuestra opinión en sentido afirmativo, alegando que aun cuando nada dice el artículo sobre esa entrega, dedúcese esta interpretación de su mismo texto, pues que el abuso de la firma supone que se dió ésta para un uso determinado y que el poseedor de ella, faltando á la confianza que en él depositara su autor, ha hecho de la misma un uso fraudulento, inscribiendo en el papel en blanco una obligación distinta de la convenida. Esta nuestra humilde opinión ha venido á sancionarla el Tribunal Supremo con su irrevocable autoridad: «Considerando que los actos ejecutados por el recurrente no se hallan comprendidos en la sanción del número 6.º del art. 548 del Código penal, ni por lo tanto merecen la calificación de estafa, por no reunir los elementos necesarios para ello, toda vez que no se ha justificado que D. Juan María Muñoz hubiera entregado á Julián García Delgado el papel en que fué extendido el documento, con la firma en blanco, cuya autenticidad no consta á juicio de la Sala sentenciadora, y que éste, abusando de ella, se extendiera en perjuicio de aquél ó de un tercero, con engaño ó ánimo de defraudar, etc.» (Sentencia de 27 de Marzo de 1885, publicada en la *Gaceta* de 21 de Julio, páginas 17 y 18.)



## Art. 548... 9.º

DEFRAUDACIÓN COMETIDA SUSTRAYENDO, OCULTANDO Ó INUTILIZANDO EN TODO Ó EN PARTE ALGÚN PROCESO, EXPEDIENTE, DOCUMENTO Ó OTRO PAPEL DE CUALQUIERA CLASE.

**CUESTION.** *Aun cuando el sustractor de unos documentos justificativos de un crédito sólo los haya tenido en su poder breves momentos, devolviéndolos después al acreedor, será no obstante responsable del delito de estafa, comprendido en el núm. 9.º del artículo 548 del Código, si verificó la devolución no espontáneamente, sino en virtud de la reiterada intimación de una pareja de la Guardia civil cuyo auxilio impetró el acreedor?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que los hechos declarados probados en la sentencia de haberse apoderado y ocultado Manuel Ibarra los documentos justificativos del crédito que en su contra tenía D. Cristóbal Belda, y cuyos documentos se negó obstinadamente á devolverle significándole que nada le debía, constituyen el delito de estafa, previsto en el núm. 9.º del art. 548 del Código, porque con el apoderamiento y ocultación de los documentos defraudó á su acreedor, privándole de los justificantes del crédito, por más que fuera por corto espacio de tiempo, y aunque se los devolvió después, esta circunstancia, además de no afectar á la existencia del delito, que estaba ya consumado con el hecho de la sustracción maliciosa, no fué debido á su espontánea voluntad, sino en virtud de intimación que reiteradamente le hizo para que lo efectuase la pareja de la Guardia civil, cuyo auxilio había impetrado el acreedor, y por cuya razón no ha sido infringido dicho artículo por la Audiencia sentenciadora, como se supone en el recurso, etc.» (Sentencia de 4 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 23 de Septiembre, pág. 159.)

## Art. 550 (párrafo primero).

PENA DEL QUE FINGIÉNDOSE DUEÑO DE UNA COSA INMUEBLE LA ENAJENA, ARRENDATA, GRAVA Ó EMPEÑA.

**CUESTION I.** *Aun cuando por dos escrituras públicas resulta que unos testamentarios vendieron sucesivamente á dos sujetos una misma finca, si resulta por otra que sólo cobraron de cada uno de ellos la parte de precio relativamente á la porción que se les adjudicaba, consignando además el Tribunal sentenciador que sin duda por equivocación del Notario que extendió dichas escrituras se expresó en ellas que lo que se vendía á los compradores era la totalidad de la finca, en vez de parte de ella á cada cual, ¿cabrá calificar semejante hecho de delito de estafa?*—Así lo estimó la Sala de

lo criminal de la Audiencia de Burgos, la que condenó á cada uno de los otorgantes, como autores del delito comprendido en el artículo 550 del Código, á la pena de dos meses y un día de arresto mayor, multa de 400 pesetas, accesorias, indemnización y costas. Mas interpuesto recurso de casación contra dicha sentencia por el Ministerio fiscal, por faltar en el caso de que se trata todos los elementos componentes del delito de estafa en general y lo que en particular determina el 550, no habiendo existido tampoco en los procesados voluntad ni intención de delinquir, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar* al expresado recurso: «Considerando que incurre en la responsabilidad penal que señala el art. 550 del Código el que, fingiéndose dueño de una cosa inmueble, la enajenare, arrendare, gravare ó empeñare, responsabilidad que no puede exigirse á los procesados D. Florentín Díaz Ubierna, don Gabriel Villanueva y Villanneva, D. Manuel Zumel del Barrio y D. Miguel Mata y Mata, porque no hay dato alguno consignado en la sentencia de cuya casación se trata del que se deduzca que ellos, sin serlo, aparentaron que eran dueños de la era, y sí que como testamentarios, y autorizados por esto, del difunto D. Francisco Mansilla, á quien aquélla pertenecía, la enajenaron por partes á D. José Campo y al querellante D. Carlos Arnáiz, no originándose de las premisas que como hechos ciertos se sientan en dicho fallo, al suponer que por equivocación sin duda del Notario que autorizaba la escritura de venta se consignó en una y otra que así Campo como Arnáiz adquirían el todo de la finca, la consecuencia de que aquéllos vendieron dolosamente á uno y otro una misma cosa, pues además de lo expuesto hay que tener en cuenta que el documento ó documentos públicos no eran los contratos; y que también la cantidad con anterioridad cobrada de cada uno de los adquirentes era la convenida y proporcionada á la parte que relativamente se les había adjudicado: Considerando que la Audiencia de Burgos, separándose del concepto jurídico de que se ha hecho mérito, ha condenado á los procesados, como culpables del delito de estafa, en la pena de dos meses y un día de arresto y en la multa de 400 pesetas, con la indemnización y costas, y ha infringido el art. 550 del Código ya citado, incurriendo en el error de derecho que señala el núm. 1.º del artículo 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, y que con fundamento invocan en sus recursos el Ministerio fiscal y la representación de aquéllos, etc.» (Sentencia de 24 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 5 de Enero de 1888, páginas 22 y 23.)

**CUESTION II.** *Aun cuando el art. 550 del Código sólo se refiere al que, fingiéndose dueño de una cosa inmueble, la enajena, arrienda, grava ó empeña, deberá ser considerado como coautor del delito el comprador que conviene con el vendedor en comprarle una finca que sabía que con anterioridad había sido vendida á tercera persona, prevaleciéndose uno y otro de la circunstancia de no haberse inscrito en el Registro de la Propiedad la primitiva venta.*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que si constituye delito el hecho de enajenar una cosa inmueble, fingiéndose dueño de ella, no sólo es responsable del



mismo el supuesto dueño y vendedor de la cosa, sino el que coopera con conocimiento del fraude á la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado, cual es el realizado por el recurrente Simón Fuster y Caballer, al convenir con el vendedor Vicente Marco Nevot en comprarle una finca que con anterioridad había vendido éste á tercera persona, prevaleciéndose uno y otro de la circunstancia de no haberse inscrito en el Registro la primitiva venta: Considerando que han sido consiguientemente bien aplicados á Simón Fuster y Caballer por el Tribunal sentenciador los artículos del Código 550 y núm. 3.º del 13, como coautor del delito que ha motivado la condena, y que no se ha infringido el art. 1.º del mismo Código al penar al recurrente en tal concepto, etc.» (Sentencia de 2 de Julio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 7 de Octubre, páginas 223 y 224.)

### Art. 550 (párrafo segundo).

PENA DEL QUE DISPONE DE UNA COSA COMO LIBRE SABIENDO QUE ESTÁ GRAVADA.

**CUESTION I.** *La disposición del art. 561, párrafo segundo del Código penal de Cuba y Puerto Rico, concordante con igual párrafo del 550 de la Península, que califica de autor de estafa «al que dispone de una cosa como libre sabiendo que está gravada,» será aplicable al deudor de cierta cantidad recibida en préstamo que vende á un tercero una finca que dió en garantía de aquél, en documento no inscrita en el Registro de la Propiedad?—*La Sala de Justicia de la Audiencia de Puerto Rico, considerando que sin la garantía dada por el procesado no se hubiera realizado el préstamo, y que si bien los gravámenes de cosas inmuebles constituidos sin los requisitos que exige la ley Hipotecaria carecen de valor y eficacia, esto debe de entenderse cuando se trata de terceras personas, pero no en cuanto á los que convinieron y pactaron, para los que la obligación se ha de cumplir forzosamente en los términos en que se otorgó, calificó el expresado hecho de *estafa* y condenó á su autor á dos meses y un día de arresto mayor, accesoria, multa de 135 pesetas, indemnización y costas. Mas interpuesto contra dicha sentencia por la defensa del procesado recurso de casación por infracción del art. 561 del Código de Cuba y Puerto Rico (550 del de la Península), declaró el Tribunal Supremo *haber lugar* al expresado recurso: «Considerando que para gravar la propiedad inmueble establece el derecho formalidades esenciales, de que por lo mismo no es dable prescindir si el gravamen ha de producir resultados legales; por lo que no se puede conceptuar gravada ninguna finca, á los efectos de lo dispuesto en el núm. 2.º del art. 561 del Código de Cuba y Puerto Rico, cuando no se han observado en su constitución dichas formalidades: Considerando que la obligación contraída por D. José Sar-

dina en documento, al parecer privado, de pagar á D. Ramón Llarger cierta cantidad que recibiera en préstamo, señalando como garantía del pago 30 cuerdas de terreno de su propiedad, es una obligación de carácter meramente personal, sujeta, consiguientemente, á todas las eventualidades que pueden tener esta clase de obligaciones: Considerando que si al contraerla no hubo engaño de ninguna especie, puesto que en el momento de su otorgamiento obraba en poder del deudor el terreno que quiso afectar al pago de la deuda, el hecho posterior de haber dispuesto del expresado terreno para pago de otra deuda no determina tampoco la existencia de engaño alguno punible, porque supuesta la legalidad de este acto con arreglo al derecho positivo, la desaparición de una garantía de dicha naturaleza, como la de cualquier otra especie de crédito, son accidentes que pueden entrar en la previsión de los acreedores ó prestamistas: Considerando que, esto supuesto, la Audiencia de Puerto Rico ha incurrido en error de derecho al calificar y penar como delito un hecho que no le constituye, etc.» (Sentencia de 7 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 2 de Mayo, páginas 151 y 152.)

Véase la *Cuestión II* del art. 554.

**CUESTION II.** *El arrendatario de una finca gravada con la pensión del pago anual de la mitad de sus productos á una persona determinada, que sabedor de este gravamen, puesto que él mismo satisface dicha pensión por espacio de varios años, la adquiere por compra del dueño de la misma, haciendo constar, vendedor y comprador, en la escritura pública que aquella estaba libre de toda carga, será responsable, al par que el vendedor, del delito de estafa, comprendido en el art. 550 del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que, según el artículo 550 del Código penal, comete el delito de estafa el que dispone de una cosa como libre, sabiendo que está gravada, y que al otorgar Pedro Freire Blanco á favor de Francisco Naya escritura de venta de una finca, consignando en ella que era libre de toda carga, constanding á ambos que estaba gravada, con el propósito, sin duda, de negarse luego al pago del gravamen, como lo hizo el adquirente Vázquez Naya, según se consigna en la sentencia recurrida, incurrieron en el expresado delito en concepto de autores, el primero, por haber tomado parte directa en la ejecución del hecho, y el segundo, por haber cooperado á ella por un acto sin el que no se hubiera ejecutado, etc.» (Sentencia de 27 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 16 de Agosto, página 54.)

#### Art. 551... 1.º

**SUSTRACCIÓN POR EL DUEÑO DE UNA COSA MUEBLE DE QUIEN LA TENGA LEGÍTIMAMENTE EN SU PODER, CON PREJUICIO DE ÉSTE Ó DE UN TERCERO.**

**CUESTION.** *El que mediante dádica ofrecida ó entregada obtiene de un carabínero encargado de la vigilancia de unas cajas de*



*mercancías de su propiedad que le permita abrir una de ellas, como así lo verificó, sacando varios géneros que contenía, de procedencia extranjera y sin marchamo que acreditase su legítima introducción, los que sustituyó por otros no afectos á adeudo, causando con ello un perjuicio á la Hacienda de mil y tantas pesetas, á la vez que del delito de cohecho (Véase la Cuestión del art. 308), será responsable del de estafa, aun cuando en el expediente administrativo se le impusiera una multa de cinco veces los derechos de Arancel de los géneros sustraídos?—El Tribunal Supremo ha declarado que la multa impuesta administrativamente no empeece á la calificación y castigo del referido delito de estafa: «Considerando que sustraídos por los recurrentes, como dueños, siquiera lo fueran por un título precario, los efectos contenidos en uno de los bultos que la Administración de la Aduana de Alicante retenía legítimamente, con el propósito que realizaron de cambiarlos por otros que devengaban menos adeudos, perjudicando con ello los intereses de la Hacienda, han cometido también el delito de estafa que castiga el párrafo primero del art. 551, en relación con el 550, por existir en este hecho los elementos característicos de la estafa, cuales son el engaño y perjuicio causado ó intentado causar; Considerando que el testimonio remitido al Juzgado por la Administración, y que dió lugar á la presente causa, no tenía otro objeto que la persecución y castigo por la Autoridad competente de los delitos comunes que pudieran existir independientes de la falta gubernativa, ya corregida por la Junta arbitral que establece el art. 242 de las Ordenanzas de Aduanas de 19 de Noviembre de 1884; y por consiguiente, al penar la Sala sentenciadora los delitos comunes cometidos con ocasión de la referida falta, no ha incurrido en error de derecho ni infringido disposición legal alguna, etc.» (Sentencia de 9 de Noviembre de 1888, publicada en la Gaceta de 18 de Marzo de 1889, páginas 71 y 72.)*

### Art. 551... 2.º

OTORGACION, EN PERJUICIO DE OTRO, DE UN CONTRATO SIMULADO.

**CUESTION I.** *La simulación de un contrato de préstamo entre dos personas, para burlar el pago de costas á que fué condenada una de éstas en pleito con un tercero, será constitutiva del delito de estafa, previsto y penado en el núm. 2.º del art. 551 del Código, aun cuando al realizarse el contrato simulado no hubiere recaído todavía sentencia firme en dicho pleito?—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que limitados los motivos alegados en el presente recurso á determinar si, dados los hechos declarados probados en la sentencia, hubo defraudación en perjuicio de tercero con la simulación de préstamo hecha por los hermanos Alvarez Fragoso, único que ha sido admitido; Considerando que es un hecho probado, según declara la sentencia, que por la simulación de varios préstamos hecha por D. Fer-*

mín y D. Valentín Álvarez Fragoso, dejó de cobrar D. Luis Escribá de Romaní la cantidad de 10.840,37 pesetas que el D. Fermín era en deberle, como importe de las costas á que fué condenado en la tercera de dominio interpuesta por éste en la ejecución sustentada por Escribá contra D. Víctor Garay, y por lo tanto, es evidente el perjuicio sufrido por Escribá con esta simulación, y manifiesta por ella la existencia del delito de estafa, que define y castiga el párrafo segundo del art. 551 del Código, por concurrir en el hecho que se pena la simulación de contrato y el perjuicio causado á tercero: Considerando que los Tribunales no crean derechos, sino que declaran los ya preexistentes, y por consiguiente, la sentencia de que el recurrente supone nacido el crédito de D. Luis Escribá contra D. Fermín Álvarez no hizo otra cosa que declarar el que ya tenía, por más que el incumplimiento de la obligación que afectaba al D. Fermín lo pusiera en la necesidad de acudir á los Tribunales para que, declarando éstos su derecho, pudieran hacerlo efectivo por los procedimientos adecuados; pero todavía existiría el delito de estafa, aun en el caso de que el engaño doloso fuera anterior al derecho burlado, si el criminal preparó contratos simulados para eludir, tanto las obligaciones que contra él tuviera, como otras que contrajera después: Considerando por lo expuesto que la Sala sentenciadora no ha incurrido en el error de derecho ni infringido las disposiciones legales que se suponen en el recurso, etc.» (Sentencia de 28 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 23 de Abril de 1888, pág. 143.)

**CUESTION II.** *¿Existirá el delito de simulación de contrato, si la acción de la persona que se considera perjudicada nace de un acto que no guarda relación directa con la simulación realizada y es posterior á la misma?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa, al casar cierta sentencia de la Sala de lo criminal de la Audiencia de esta Corte, en que se calificó y penó como delito definido en el art. 551, núm. 2.º del Código, la otorgación de un contrato simulado, á la que faltaba, para ser punible, alguno de aquellos elementos esenciales: «Considerando que para que exista el delito definido en el núm. 2.º del art. 551 del Código penal, es preciso que quien simula un contrato lo haga con la idea de causar un perjuicio determinado á tercera persona, estableciéndose por semejante medio una relación directa entre el acto de la simulación y la persona perjudicada, y que no puede decirse consiguientemente que existe esta relación ni el elemento del perjuicio cuando la acción de la persona que se conceptúa lastimada nace de un acto independiente y posterior al acto de la simulación: Considerando que aun cuando en la sentencia recurrida se afirma como hecho probado que Monzón é Izo Perpetta simularon la adquisición por compra á favor de éste de un almacén de vinos que en realidad fué adquirido por aquél, ni se expresa la época en que fuera otorgado dicho contrato simulado, ni la relación que tuviera en la obligación personal que D. Mariano Monzón y D. Mariano Puilla contrajeron con D. Andrés Fernández Ollero, por lo que, según la doctrina consignada en el conside-



rando anterior, faltan algunos de los elementos esenciales necesarios para la constitución del delito que define y pena el mencionado art. 551 en su núm. 2.º: Considerando que la Audiencia de Madrid ha incurrido por lo tanto en error de derecho, al penar como delito un hecho que no reviste todos los caracteres necesarios para calificarlo así, etc.» (Sentencia de 18 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 27 de Septiembre, pág. 192.)

### Art. 552.

#### DEPRAUDACIÓN DE LA PROPIEDAD LITERARIA Ó INDUSTRIAL.

**CUESTION.** *El editor tipógrafo que constándole que cierta hoja ilustrada era propiedad de un tercero, por habérsela transferido con todos los requisitos legales su autor, sin obtener licencia de su dueño la reproduce aunque en tamaño menor, encargando á un dibujante la ejecución material en piedras litográficas que al efecto le facilitó, ¿será responsable del delito de defraudación de la propiedad intelectual, previsto y penado en el art. 552 del Código?—¿Podrá caberle alguna responsabilidad en este delito al dibujante que lo ejecutó materialmente?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa sobre el primer punto y la negativa sobre el segundo: «Considerando que según el art. 552, en relación con el 550 del Código penal, comete el delito de defraudación de la propiedad literaria ó industrial el que publicare una obra de arte de ajena pertenencia sin la correspondiente autorización del dueño, con objeto de lucrarse y beneficiarse expendiéndola; y que constando á D. Florencio Murúa y Estillar que la hoja ilustrada denominada «Baraja política» era de la propiedad de D. Mariano Sánchez y Sánchez, por haberle sido transferida con todos los requisitos legales por su autor D. Eloy Perillán, y sin obtener licencia del dueño, la reprodujo en tamaño menor, acomodándola en pliegos destinados á revestir cajas de cerillas, encargando al efecto al dibujante D. Victoriano Iraola la ejecución material en las piedras litográficas que al efecto le facilitó, incurrió en el expresado delito: Considerando que el art. 45 de la ley de 10 de Enero de 1879 sobre propiedad intelectual, posterior en su publicación al 14 del Código penal, cualquiera que sea el valor y alcance que á éste se dé, conceptúa autor del expresado delito al que lo es de la defraudación en primer término, y no al impresor ó grabador, ejecutor material de la obra defraudada, cuya disposición legal es, en el presente caso, de rigurosa é ineludible aplicación, habiéndose hecho, en su consecuencia, el recurrente acreedor á las penas que le han sido impuestas en la sentencia recurrida: Considerando que con arreglo á este artículo, cuando sea conocido el autor de la defraudación, no puede ser dirigido el procedimiento contra el editor ó impresor, á los cuales en todo caso se admite la prueba de su inculpabilidad: Considerando que,

al estimario así acertadamente la Sala sentenciadora, no ha incurrido en el error de derecho que se la atribuye, ni infringido los artículos del Código penal y la ley de 10 de Enero de 1879 á que el recurso se refiere, etc.» (Sentencia de 16 de Febrero de 1888, publicada en las *Gacetas* de 10 y 11 de Mayo, páginas 224 y 225.)

### Art. 554.

DEFRAUDACIÓN Ó PERJUICIO CAUSADOS Á OTRO USANDO DE CUALQUIER ENGAÑO NO EXPRESADO EN LOS ARTÍCULOS ANTERIORES DE ESTA SECCIÓN.

**CUESTION I.** *Al apearse un sujeto en la estación de un ferrocarril, toma un coche para que lo conduzca á su casa, colocando en él el conductor el equipaje, compuesto de un baúl, una maleta, unas alforjas con capones y una bota de vino; llegado el coche á su destino, sin haberse detenido en el fletato, y después de subido el equipaje á la habitación, le exige el cochero tres duros por el viaje, que después de alguna resistencia del viajero logra que le pague, expresando que cinco pesetas eran importe del carruaje y las diez restantes por haberse introducido efectos sujetos al impuesto de consumos, llevándose, al retirarse, sin ser visto, los dos capones; además del delito de hurto de éstos, ¿existirá el de estafa por la obtención en la forma dicha de las diez pesetas entregadas?—Así lo estimó la Sala de lo criminal de la Audiencia de Madrid, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por haberse calificado y penado indebidamente el expresado delito de estafa: «Considerando respecto al otro motivo que siendo condición precisa en el delito de estafa que aparezca que el culpable ha empleado engaño con el fin de defraudar á otros, esa condición no aparece en el hecho de haber los recurrentes reclamado á D. Indalecio Hernández por haberle traído sus efectos, sin pagar derechos de consumos, 40 reales, cuyo abono resistió primero, discurrió después y pagó al fin, porque lo tuvo por conveniente, por lo que faltando el engaño, falta el delito, y el Tribunal sentenciador, al calificar el hecho de una estafa ha infringido el art. 554 del Código penal, caso de casación previsto en el núm. 1.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, etc.» (Sentencia de 25 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 17 de Noviembre, páginas 311 y 312.)*

**CUESTION II.** *El hecho de enajenar un deudor una finca que en documento no inscrita en el Registro de la Propiedad diera á un tercero en garantía de una cantidad de dinero recibida de éste en préstamo, si bien no constituye el delito de estafa, previsto y penado en el párrafo segundo del art. 550 (V. la Cuestión I de dicho artículo), ¿constituirá por sí sólo, cuando menos, el delito de engaño, comprendido en el art. 554?—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando en cuanto á la tercera infracción que el mero incumplimiento de una obligación contraída no*



constituya el engaño á que se refiere el art. 565 (1), y que aparte de esto, el acto realizado por D. Mariano Godoy al enajenar la finca con que contaba la acreedora para satisfacer su crédito no resulta como hecho probado que fuera fraudulento ni simulado, etc.» (Sentencia de 14 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 19 de Junio, páginas 308 y 309.)

**CUESTION III.** *En el delito de estafa del art. 554 del Código, ¿será condición precisa que el engaño preceda á la obligación que lo origina?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa al casar cierta sentencia de la Sala de lo criminal de la Audiencia de esta Corte, en que se calificó y penó como estafa, comprendida en el expresado artículo, un hecho que, por no haber sido el engaño causa de la obligación, no revestía los caracteres de tal delito: «Considerando que el hecho de hacer figurar el recurrente la cacharrería de que era dueño á nombre de su cuñado, después de la espera que le fué concedida para el pago de 395 pesetas 60 céntimos, importe de la factura de 18 de Junio de 1885, tiene tan sólo el carácter de una obligación personal contraída por el procesado con la casa libradora, que no le impedía por su índole y naturaleza disponer libremente de sus bienes, y que dicho acto no integra los elementos necesarios de engaño y defraudación, para constituir el delito de estafa, previsto y penado en el art. 554 del Código penal, mucho más si se tiene en cuenta que el procesado no aparece insolvente, por tener algunos bienes embargados: Considerando además de lo expuesto que, atendida la índole de dicho delito, el engaño ha de preceder á la obligación que le origina y no surgir con posterioridad á ella: Considerando que al no estimarlo así la Sala sentenciadora ha incurrido en el error de derecho que se le atribuye, é infringido los artículos del Código penal á que el recurso se refiere, etc.» (Sentencia de 23 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 8 de Septiembre, pág. 138.)

## CAPÍTULO V

De las maquinaciones para alterar el precio de las cosas.

### Art. 556.

COLIGACIÓN CON EL FIN DE ENCARECER Ó ABARATAR ABUSIVAMENTE EL PRECIO DEL TRABAJO Ó REGULAR SUS CONDICIONES.

**CUESTION.** *El autor de un artículo de periódico cuya síntesis no es otra que la de aconsejar á la clase obrera que emplee la fuer-*

(1) Artículo 565 del Código penal para Cuba y Puerto Rico, concordante con el 534 del de la Península.

za para imponer de este modo á los fabricantes é industriales la reducción á ocho horas del trabajo del obrero, *perd responsable, cuando menos, del delito de provocación directa por medio de la imprenta á la perpetración del delito de coligación con el fin de encarecer abusivamente el precio del trabajo y regular sus condiciones!*—Si en el propio artículo se injuria y amenaza también á la Autoridad, *deberá imponerse al culpable la pena del delito más grave en su grado máximo, con arreglo al art. 30 del Código?*—Sobre ambos puntos ha resuelto el Tribunal Supremo la afirmativa: «Considerando que es punible, según el art. 582 del Código, la provocación directa por medio de la prensa para la perpetración de los delitos comprendidos en el mismo, castigándose en el 556 á los que se coligaren con el fin de encarecer ó abaratar abusivamente el precio del trabajo ó regular sus condiciones: Considerando que todo el concepto del artículo que con el epígrafe «Las ocho horas» se halla inserto en el periódico *El Grito del Pueblo*, que se publica en San Martín de Provensals, correspondiente al día 16 de Septiembre del año último, se encamina y dirige directamente á promover y organizar la coligación de los obreros con el fin de regular las condiciones del trabajo y de encarecerlo abusivamente, pues tal concepto merece el pretender sustituir la libre contratación y la natural competencia con la intimidación consiguiente á la amenaza que se hace de emplear la fuerza é imponer de esta manera la reducción á ocho horas de trabajo para el obrero, excitándole á la lucha contra el capital para obtenerle, deduciéndose de todo su contenido una evidente excitación para ejercitar actos ilegales dirigidos al logro de un propósito criminal, que si bien pudieran ser constitutivos de otro delito más grave, no puede declararse en casación por no haber sido objeto del recurso: Considerando que, si bien pudiera caber duda respecto á las injurias inferidas á las Autoridades constituidas en el artículo referido, no cabe dudar en cuanto á las amenazas que se le hacen, lo cual constituiría un delito más grave que el de injurias apreciado por la Sala sentenciadora: Considerando que, ejecutados ambos delitos en un solo acto, debe imponerse la pena del más grave en el grado máximo, conforme á lo dispuesto en el art. 30 del Código, y al apreciarlo así el Tribunal sentenciador no ha incurrido en el error de derecho ni en las infracciones legales que se suponen en el recurso, etc.» (Sentencia de 5 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 9 de Abril de 1888, páginas 87 y 88.)



## CAPÍTULO IX

## Disposiciones generales.

## Art. 580.

QUIÉNES ESTÁN EXENTOS DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL POR LOS HURTOS, DEFRAUDACIONES Ó DAÑOS QUE RECÍPROCAMENTE SE CAUSEN.

**QUESTION.** *El nieto por afinidad que comete un hurto en perjuicio de su abuela, ¿está comprendido en la exención de responsabilidad criminal que determina el número 1.º del artículo 580 del Código?*—No lo estimó así la Audiencia de lo criminal de Lerma, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por infracción del citado artículo y número: «Considerando que están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente á la civil por los hurtos, defraudaciones ó daños que recíprocamente se causaren los cónyuges, ascendientes y descendientes ó afines en la misma línea, según se preceptúa en el art. 580, núm. 1.º del Código penal: Considerando que según la forma en que se halla consignado en la sentencia recurrida es indudable que Pascual Esteban es nieto por afinidad de la perjudicada, y por lo tanto, se halla comprendido en la excepción consignada en el referido número 1.º del art. 580, porque siendo descendiente por afinidad de la perjudicada, se halla sólo sujeto á responsabilidad civil por el hurto ejecutado á su abuela, y al no apreciarse así por la Audiencia sentenciadora ha incurrido en error de derecho é infringido el párrafo primero del art. 580 del Código penal, que se invoca en el motivo de casación alegado, etc.» (Sentencia de 18 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 11 de Mayo, páginas 228 y 229.)

## TÍTULO XIV

## DE LA IMPRUDENCIA TEMERARIA.

## Art. 581 (párrafo primero).

EJECUCIÓN, POR IMPRUDENCIA TEMERARIA, DE UN HECHO QUE, SI MEDIASE MALICIA CONSTITUIRÍA UN DELITO GRAVE Ó MENOS GRAVE.

**QUESTION I.** *El que sólo por creer que un sujeto se llama como dice, recaba para él el conocimiento de un comerciante en una*

*letra de la que resultó luego no ser el legítimo portador, ¿será responsable de este delito de falsedad por imprudencia temeraria?*

—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que establecido en la sentencia reclamada como hecho ya indiscutible que San Román, en la creencia de que á su paisano Manuel correspondiera el apellido de Urosa, requirió personalmente á D. León Yeves para consignar en la letra cobrada en el Banco de España el conocimiento determinante de su pago; y resultando también cierto que dicho Manuel no era su legítimo tenedor, y que el recurrente desconocía su apellido, al asegurar éste la identidad de uno y otro Manuel procedió con marcada ligereza y temeridad, induciendo á Yeves á prestar un conocimiento que éste no tenía, ni tenía tampoco el mismo en cuya aseveración absoluta descansó para hacerlo, lo cual ha sido acertadamente calificado de delito, previsto en el art. 581 del Código penal, por concurrir en el caso las condiciones que éste requiere, que son las de ejecutar un acto con temeraria imprudencia, que en el de mediar malicia constituiría delito grave; circunstancias aquí determinadas por la afirmación de hecho ignorado, guiado el que la hizo, no por malicia, sino por la aventurada, vaga é infundada esperanza de no ser engañado por persona en quien no tenía motivos serios de confianza: Considerando que la calificación jurídica contenida en la sentencia es procedente, porque de haber obrado el recurrente con intención maliciosa sería responsable del delito de falsedad en que aquélla se funda, puesto que con su acto hubiera cooperado directamente á la realización de tal delito, constituido por el recibo de pago que se supuso hecho á quien no lo fué, en un documento mercantil; y Considerando que por estas razones no es procedente el recurso deducido, que en sus tres primeros motivos sostiene como legítimo y excusable el acto del procesado; en el cuarto, supone un simple engaño, prescindiendo de la falsedad, y en el último, no expresa el concepto de la infracción alegada, etc.» (Sentencia de 8 de Noviembre de 1887, publicada en la Gaceta de 9 de Enero de 1888, páginas 44 y 45.)

**CUESTION II.** *Cuando de la causa resulta que habiéndole encargado al procesado su amo la conducción de un carro al que iba atada una perra, con la advertencia de que no la soltara; y sin embargo la soltó, dando ello lugar á que en el tránsito el animal se abalanzara á un niño y le causara lesiones graves en una pierna, ¿será responsable de este hecho por imprudencia temeraria, ó lo será tan sólo de la falta de imprudencia simple, penada en el número 3.º del art. 605 del Código?*—El Tribunal Supremo ha declarado que la primera calificación más grave es la procedente: «Considerando que se incurre en la responsabilidad que señala taxativamente el art. 561 (1) del Código cuando por imprudencia temeraria ó por imprudencia simple con infracción de reglamentos, pero sin mediar malicia, se comete un hecho que constituye delito: Considerando que son hechos indiscutibles que al encargarse

(1) Así dice la Gaceta, debiendo decir el art. 581.



el procesado Angel Romanillos Vega del carro que le confió su amo, la perra estaba atada; que aquél la soltó, no obstante de advertirle éste que no hiciera tal cosa, y que debido á ello, en el tránsito que desde Guadalajara conduce á la estación del ferrocarril se abalanzó el animal al niño Angel Palomino, infiriéndole las heridas graves que ha padecido; y en ese concepto, no puede dudarse que el sitio donde el suceso ocurrió estaba dentro del radio de la población, siendo de aplicarse al mismo los reglamentos municipales de ésta; y que Romanillos, más que por imprudencia simple, como benignamente concede el Tribunal sentenciador, por imprudencia temeraria, que revela su terquedad é inobediencia á lo ordenado por su amo, dió ocasión á las lesiones, que, de inferirse maliciosamente, constituirían un delito menos grave: Considerando que, por las razones expuestas, la Audiencia de Guadalajara, en la sentencia condenatoria que ha dictado, no ha infringido los artículos de los reglamentos que se citan, ni el 581 y demás del Código que con relación á éste ha aplicado, porque no ha incurrido en los errores de derecho que desacertadamente se invocan en el recurso, etc.» (Sentencia de 23 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 20 de Abril de 1888, página 128.)

**CUESTION III.** *La mujer que, encargada por ausencia de su marido de la tienda de ultramarinos de éste, al despachar en la trastienda cierta cantidad de espíritu de vino que se le pidiera, y al encender una cerilla para ver si la medida estaba llena, sin saber cómo se le inflama el alcohol, prendiéndose el fuego en sus vestidos, que pudieron apagar algunos vecinos, produciéndose el incendio de la casa, del cual resultaron varias personas lesionadas y el consiguiente daño del edificio, ¿será responsable de este hecho como autora de un delito de imprudencia, ó simplemente de la falta del mismo nombre, comprendida en el art. 605, núm. 3.º del Código?*—La Audiencia de lo criminal de Vitoria estimó lo primero. Mas interpuesto contra dicha sentencia recurso de casación por la defensa de la procesada, que pretendió que el hecho debía castigarse, á lo sumo, como una simple falta de imprudencia, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar á él*: «Considerando que el hecho de haber encendido la recurrente una cerilla en la trastienda estando despachando media cántara de espíritu de vino para ver si la medida estaba llena, cuyo acto produjo la inflamación del alcohol, y consiguientemente el incendio, daños y lesiones sufridas por varias personas á que se refieren los resultandos de la sentencia recurrida, acto que, á mediar malicia, merecería la calificación de delito, constituye tan sólo una falta prevista en el núm. 3.º del art. 605 del Código penal, cometida por simple imprudencia ó negligencia, sin infracción de reglamento, toda vez que, cualesquiera que fueran las prescripciones consignadas en ellos respecto á la existencia de materias inflamables y sitio donde debían depositarse, su observancia y cumplimiento obligan tan sólo al dueño del establecimiento donde ocurrió el siniestro, y no á la procesada: Considerando que al no estimarlo así la Sala sentenciadora ha incurrido en el error de derecho que se

le atribuye é infringido el párrafo segundo del art. 581 del Código penal, aplicándole indebidamente, y el núm. 3.º, por no haberle aplicado, etc.» (Sentencia de 14 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 16 de Mayo, páginas 263 y 264.)

**CUESTION IV.** *Si el procesado convino con un sujeto que iría á casa de éste para que le enseñase unos rejonos de sacrificar reses que tenía de venta, y al verificarlo, y ver dichos rejonos, pretendió llevárselos diciendo que eran los mismos que un mes antes le habían sustraído, y al intentar su dueño quitárselos, los agarró por parte del hierro hacia las cortas, en cuyo momento el procesado, que los tenía cogidos por sus mangos, dió un tirón tan brusco que causó con él una herida en el dedo meñique de aquél, que casi se lo cortó, de la cual quedó curado á los cuarenta días sin ulterior impedimento ni deformidad, ¿constituirá este hecho el delito de imprudencia temeraria, ó la falta de imprudencia simple?*—El Tribunal Supremo ha declarado que la primera y más grave calificación es la procedente: «Considerando que la forma en que tiró el recurrente de las puntillas ó rejonos de sacrificar reses, que sin derecho quería llevarse, constituye una imprudencia temeraria, porque teniéndolas el lesionado José María Deira cogidas cerca del corte, necesariamente había de lesionarlo Preciados al dar éste el tirón brusco con que resistió que Deira se las llevara hasta que su padre resolviera la reclamación de aquél; por lo cual el Tribunal sentenciador no ha incurrido en las infracciones legales que por el recurrente se le atribuyen al calificar y penar el hecho justificable en la forma que lo ha hecho, etc.» (Sentencia de 26 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 8 de Septiembre, pág. 138.)

**CUESTION V.** *Después de haber estado jugando unos muchachos en la calle, al separarse uno de ellos, joven de quince años, arroja sobre el grupo una piedra, diciéndoles en broma, «aguantar eso,» la que dió en la frente á uno de los chicos, produciéndole una pequeña herida sin importancia al exterior, pues sólo interesó los tejidos blandos, pero que á consecuencia de complicaciones ulteriores le produjo la muerte á los cuarenta y un días: ¿deberá calificarse ésta de delito de homicidio, ó simplemente de imprudencia temeraria?*—La Audiencia de lo criminal de Huelva estimó lo primero y condenó al procesado, mayor de quince y menor de diez y ocho años, y con la atennante, además, genérica de no intención de causar un mal tan grave, á la pena de seis años y un día de prisión mayor. Mas el Tribunal Supremo, llamado á decidir el recurso interpuesto por la defensa de aquél, declaró que el hecho no constituía más que una *imprudencia temeraria*: «Considerando que la imprudencia temeraria que prevé el art. 581 del Código la caracteriza esencialmente la falta de malicia con que se ejecuta un mal que el Código castiga, y que se ha cometido sin la previsión que debe poner en todos sus actos una persona dotada de razón; Considerando que aunque la lesión ocasionada en la frente al muchacho Francisco Ramos por una piedra que tiró el recurrente, joven de quince años, al separarse del grupo de otros de su edad con quienes había estado jugando, diciéndoles en broma «aguantar eso,» ocasionara, á pesar de la poca importancia que



presentara el exterior por haber sólo lesionado los tejidos blandos, la muerte del lesionado á los cuarenta días, á consecuencia de una esquirla pequeña y delgada que por contragolpe se levantó en la cara interna del hueso frontal, tal hecho, sin embargo, ejecutado sin malicia ni intención preconcebida de dañar á nadie, no constituye por lo mismo el delito de homicidio que determina el art. 419 del Código penal; pero como el recurrente, á pesar de su corta edad, pudo ya y debió prever que una piedra lanzada á un grupo de personas podía dañar á alguna de las que lo formaban, por más que no fuera ése su pensamiento y su deseo, está patente que obró con una temeridad imprudente que el Código prevé en el art. 581, que ha sido infringido al no apreciarse en la sentencia recurrida su necesaria aplicación, en vez del 419 indebidamente aplicado; caso de casación previsto en el núm. 3.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, etc.» (Sentencia de 5 de Julio de 1888, publicada en la Gaceta de 8 de Octubre, páginas 229 y 230.)

### Art. 581 (párrafo segundo).

#### IMPRUDENCIA CON INFRACCIÓN DE REGLAMENTOS.

**CUESTION I.** *Estando trabajando un peón de albañil en la obra de la fachada de una casa, se le cae una palanqueta de hierro al andamio y de éste á la calle, hiriendo á un transeúnte en la cabeza, de cuya lesión fallece: ¿quién será el responsable de este hecho, el susodicho peón de albañil, ó el maestro director de la obra, si resulta que el andamio carecía de la tabla vertical que debiera tener, y que además no se había colocado en la parte de acera correspondiente á la fachada donde se estaba obrando el aviso reglamentario, tabla ó cuerda, para advertir el peligro y prohibición de pasar por aquel sitio?*—El Tribunal Supremo ha declarado que en tal caso toda la responsabilidad es *exclusivamente* del director de la obra: «Considerando que lo mismo se delinque por acción que por omisión cuando las acciones ú omisiones son justiciables con arreglo al Código penal, y que, esto supuesto, la única diferencia entre el delito malicioso y el delito por imprudencia consiste en la intención que acompaña á la acción ú omisión determinante del daño causado; Considerando que, según aparece de la sentencia de la Audiencia de Sevilla, el recurrente D. Antonio Rodríguez del Real incurrió en la omisión de no haber dispuesto la colocación de los andamios con su respectiva tabla vertical y la de los avisos reglamentarios en la parte de la acera correspondiente á la fachada donde se estaba obrando, para indicar el peligro y prohibición de pasar por allí, á cuyas precauciones estaba obligado con arreglo á las Ordenanzas municipales, porque la obra nueva, en realidad, no consistía sencillamente en revocar la fachada, sino en reformarla, deshaciendo su armadura, que es la operación que se encontraba ejecutando el oficial cuando cayó la

palanqueta que produjo la muerte de D. Manuel Salvaresa y Rodríguez: Considerando que la omisión de las referidas precauciones fué la causa determinante de la desgracia, puesto que la caída de la palanqueta no fué sino uno de tantos accidentes como pueden ocurrir en las obras, y cuyos efectos se trata de evitar con prudentes medidas preventivas, por lo que el autor voluntario de la omisión es el responsable criminal y civilmente del daño producido, con arreglo al núm. 1.º del art. 13 del Código, en relación con los artículos 1.º y 581: Considerando que, esto supuesto, la Audiencia de Sevilla no ha incurrido en error de derecho al calificar y penar como delito el hecho que motivó la condena de D. Antonio Rodríguez del Real, estimando á éste autor del mismo, etc.» (Sentencia de 28 de Septiembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 15 de Octubre, páginas 290 y 291.)

**QUESTION II.** *El Jefe de estación que manda salir una máquina á un punto determinado de la línea para su recomposición, sin que en el tren que partiera poco antes hubiera mandado poner señal alguna que anunciara al personal de la línea la salida de dicha máquina, dando ella lugar á que la guarda-barrera de un paso á nivel se retirara luego de haber pasado el tren, y que por haber atravesado por allí un carro, la máquina lo atropellara, matando á las mulas y causándole otros desperfectos por valor de unas 2.000 pesetas, ¿será responsable de este delito de daños por imprudencia con infracción de reglamentos?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que la simple imprudencia con infracción de los reglamentos, que pena el párrafo segundo del art. 581 del Código, se caracteriza por la acción que se ejecuta ó omisión en que se incurre, con riesgo de producir un mal que puede y debe preverse, y no se evita por la falta de observancia de los reglamentos: Considerando que el hecho probado en la sentencia de haber dispuesto el recurrente, como Jefe de la estación de La Encina, la salida de una máquina extraordinaria, sin que el tren que la precedía llevara el banderín de aviso que previene el art. 19 del reglamento de señales de los ferrocarriles de 8 de Agosto de 1872, le hace responsable, como autor por imprudencia simple con infracción de reglamentos, por lo menos del delito de daño causado con dicha máquina, puesto que la falta del banderín de aviso fué la determinante del daño causado, toda vez que sin ella la barrera del paso á nivel hubiera estado cerrada al pasar la máquina, impidiendo al carro atravesar la vía, y con esto el daño no se hubiera producido: Considerando que la Audiencia sentenciadora no ha incurrido en error de derecho al calificar y penar como autor del delito de daño cometido por imprudencia á D. Daniel Aranda y Morató, etc.» (Sentencia de 7 de Abril de 1888, publicada en las *Gacetas* de 28 y 30 de Julio, páginas 28 y 29.)

**QUESTION III.** *El vigilante de consumos que yendo custodiando unos carros cargados de vino desde un felato á otro, entra en una taberna para beber unas copas de vino que le ofrecieron, y al salir, á los pocos minutos, del establecimiento, se encuentra con que los carros y los carreteros habían desaparecido, ¿será responsa-*



*ble del delito de defraudación á la Hacienda ó al Municipio por imprudencia con infracción de los reglamentos del ramo de consumos, por el perjuicio que se causó á esta renta, en el caso probable, pero no seguro, de que dichos carros penetraran en la población?*—Así lo estimó la Sala de lo criminal de la Audiencia de Madrid, la que condenó al procesado á cuatro meses de arresto mayor. Mas interpuesto contra esta sentencia por la defensa del procesado recurso de casación, que apoyó en el acto de la vista el Ministerio fiscal por infracción, entre otros, del art. 581 del Código, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar á él*: «Considerando que por reprehensible que sea el acto ejecutado por Tomás Ruiz de admitir convites en dos tabernas distintas de los carreteros cuyos vehiculos cargados de vino iba custodiando como vigilante de consumos en el tránsito desde el fielato de la carretera de Aragón al de Toledo, dando lugar á que la última vez, interin bebía con otros, desaparecieran los carreteros y los carros, con perjuicio de la renta de consumos, si penetraron en la población; sin embargo de ello, como esta circunstancia no aparece *aclarada, ni demostrada* por lo mismo la *defraudación* que en caso afirmativo se ocasionaría al Ayuntamiento, estando como está reconocida la falta de malicia con que obró el vigilante, y no apareciendo evidenciado que su descuido diera ocasión á un delito grave ó menos grave, no puede tampoco calificarse el hecho ni aun de simple imprudencia, ni pensarse criminalmente, por más que hay que reconocer su abandono, que debe haber sido corregido gubernativamente por sus jefes: Considerando que al apreciar en este caso la Sala sentenciadora la existencia de un delito de imprudencia con infracción de reglamentos, infringió al aplicarlo el párrafo segundo del art. 581 del Código penal, incurriendo en el error de derecho que el recurrente le atribuye, etc.» (Sentencia del 17 de Abril de 1888, publicada en las *Gacetas* de 4 y 5 de Agosto, páginas 44 y 45.)

#### Art. 581 (párrafo último).

APLICACIÓN DE LAS PENAS DE LA IMPRUDENCIA CUANDO LA SEÑALADA AL DELITO PRODUCIDO POR ÉSTA ES IGUAL Ó MENOR QUE LAS CONTENIDAS EN EL PÁRRAFO PRIMERO DE ESTE ARTÍCULO.

**CUESTION.** *Cuando por imprudencia temeraria se produce un hecho que á ser malicioso constituiría un delito castigado en el Código con las penas de suspensión y multa (como el del artículo 324, referente al funcionario público que libra certificación falsa de buena conducta), ¿procederá imponer al responsable de dicha imprudencia la pena de arresto mayor en sus grados mínimo y medio, señalada en la última parte del párrafo primero del art. 581, ó la inmediatamente inferior á dichas penas de suspensión y multa?*—El Tribunal Supremo ha declarado que en este caso procede aplicar la pena del párrafo primero y no la ex-

excepcional del párrafo último: «Considerando que tampoco ha incurrido dicho Tribunal en el error ni en las infracciones en segundo término expuestas, porque señalada, como se ha dicho, al delito de falsedad cometido por el recurrente por imprudencia temeraria, á juicio de aquél, las penas de suspensión y de multa, ha aplicado acertadamente la de arresto mayor en sus grados mínimo y medio, que es la marcada en la última parte del párrafo primero del art. 581 del Código para el caso de delito menos grave, que es el actual, sin que debiera, cual se pretende, comprenderse en la excepción expresada en el párrafo último del mismo artículo, porque la primera de las citadas penas no es igual ni menor que la segunda, pues aunque pudiera prescindirse de la multa para la comparación entre ambas á pesar de su calidad de pena conjunta con la de suspensión, ésta por sí es mayor que el arresto de tal nombre, y como tal precediendo á la última se contiene en la escala general del art. 26 del Código, en donde se enumeran todas las penas por orden evidente de respectiva gravedad, sin que contradiga esta relación el hecho de no hallarse confundidas ambas en una sola de las escalas del art. 92 por responder éstas á otros bienes y estar formadas en consideración á la índole de cada una de las allí designadas, etc.» (Sentencia de 31 de Diciembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 2 de Mayo de 1889, pág. 158.)

## TÍTULO XV

### DISPOSICIONES GENERALES.

#### Art. 582.

PROVOCACIÓN DIRECTA, POR MEDIO DE LA IMPRENTA, EL GRABADO U OTRO MEDIO MECÁNICO DE PUBLICACIÓN, Á LA PERPETRACIÓN DE LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN ESTE CÓDIGO.

**CUESTION I.** *¿Será responsable del delito de provocación directa por medio de la imprenta á la perpetración del delito contra la forma de gobierno, definido en el art. 181 del Código, el autor de un mensaje dirigido á D. Carlos, que después de multitud de frases encomiásticas á la persona del Pretendiente y deprecativas para los Gobiernos liberales, expresa que, «para llevar á cabo el triunfo de aquél, 100.000 valientes le ofrecen de nuevo resueltamente su sangre, intereses y vida?»—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que incurren en responsabilidad penal los que provocaren directamente por medio de la imprenta á la perpetración de alguno de los delitos comprendidos en el Código vigente, según prescribe el art. 582 del mismo: Considerando que los artículos y poesías insertos en el número 162 del periódico *Lo Crit de la Patria* provocan directamente á la*



perpetración del delito de rebelión, llamando á las armas y ofreciendo los intereses y vidas de 100.000 hombres, para conseguir por la fuerza y fuera de las vías legales el objeto de reemplazar el Gobierno monárquico constitucional por otro monárquico absoluto, de variar el orden legítimo de sucesión á la Corona y privar á la dinastía de los derechos que la Constitución le otorga: Considerando que es, por consiguiente, aplicable al caso procesal el artículo 181 del precitado Código, y que al aplicarlo rectamente, no lo ha podido infringir la Sala sentenciadora, etc.» (Sentencia de 8 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 19 de Noviembre, pág. 319.)

**CUESTION II.** *La circunstancia de no haber sido denunciado ni penado el periódico del que se transcribe en otro un artículo cuyo contenido constituye un delito de provocación por medio de la imprenta á la perpetración del delito contra la forma de gobierno, ¿será un obstáculo á la persecución y castigo del autor de la reproducción?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que la reproducción en un periódico de un artículo publicado en otro, si su contenido es punible, constituye delito, aun cuando no haya sido denunciado ni penado el periódico de que se transcribe, porque caracterizando los delitos de imprenta la publicación de los sueltos y artículos sujetos á sanción penal, son constitutivos de tantos delitos como voces sean reproducidos, etc.» (Sentencia de 30 de Diciembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 4 de Abril de 1888, pág. 77.)

**CUESTION III.** *Un mensaje dirigido á D. Carlos de Borbón, en que después de felicitarle por el restablecimiento de su hijo se dice que los firmantes «sólo ambicionan entrar pronto en.... para morir al grito de viva....» y aunque indignos le piden un puesto de honor á vanguardia de su augusto hijo para responder con sus vidas de la de éste, ¿constituirá el delito de provocación á cometer el contra la forma de gobierno, que pena el art. 582 del Código, en relación con el 181?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que el sentido del artículo ó suelto á que se refiere este recurso no sólo patentiza la actitud rebelde que atribuye el articulista al partido carlista, sino que excita y provoca directamente, aun cuando no señale momento determinado, á una lucha material para la que se brindan los que al parecer felicitan á D. Carlos de Borbón por el restablecimiento de su hijo, á ocupar en vanguardia un puesto de honor ofreciendo sus vidas como garantía de su fe y entusiasmo, cuya excitación constituye el delito que define y pena el art. 582 del Código penal, en relación con el 181, y cuando menos el que ha sido penado; no habiendo consiguientemente incurrido la Audiencia de Burgos en el error de derecho que la representación del recurrente le atribuye, etc.» (Sentencia de 11 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 30 de Julio, pág. 31.)

**CUESTION IV.** *¿Será responsable del delito de provocación por medio de la imprenta á variar la forma de gobierno, previsto y penado en el art. 582 del Código, en relación con el 181, el autor de un artículo, publicado en un periódico republicano, en el*

que «se aconseja la unión bajo una sola bandera de todos los que profesan aquellas ideas, como medio de llegar al logro de las aspiraciones del partido?»—Así lo estimó la Sala de lo criminal de la Audiencia de esta Corte, cuya sentencia casó el Tribunal Supremo por indebida aplicación, en este caso, de los artículos citados del Código: «Considerando que, concretándose el artículo publicado en el periódico *El País*, bajo el epígrafe «La Unión republicana,» á conseguir la de todos los que profesan esas opiniones bajo una sola bandera, como medio de llegar al logro de las aspiraciones del partido, nada puede decirse contra esa exposición de doctrina, dada la existencia legal del periódico y su significación política, á la que naturalmente ha de ajustarse su contenido; porque en él no se provoca directamente á reemplazar por medio alguno violento el gobierno monárquico, infringiendo el art. 181 del Código penal; por lo que, por más que el escrito sea ardorosamente republicano, no cae bajo la sanción penal de ningún artículo de ese cuerpo legal: Considerando que, al apreciar en otros términos el Tribunal sentenciador el referido artículo, ha infringido las disposiciones legales indicadas por el recurrente y cometido el error de derecho que le atribuye, etc.» (Sentencia de 16 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 25 de Agosto, páginas 92 y 93.) —Igual doctrina se establece en otra Sentencia posterior: «Considerando que no puede afirmarse que el artículo objeto del presente recurso, publicado en el periódico *La Discusión*, provoque directamente á la comisión del expresado delito, ni por las afirmaciones que contiene, ni por los fines á que se encamina, sino que, apasionadamente republicano, en armonía con el ideal político de su autor, se dirige á procurar la unión del partido republicano bajo esta sola bandera ó denominación, y á conseguir por este medio el triunfo de la forma de gobierno republicana: Considerando que no reuniendo el mencionado artículo los elementos constitutivos para la existencia del delito de que se trata, por más que en él se combate la Monarquía y se proclame como la mejor forma la republicana, sin que esto tenga sanción en la ley penal, es visto que la Sala sentenciadora, al estimarlo así, no ha cometido el error de derecho ni las infracciones que se le atribuyen en el recurso, etc.» (Sentencia de 25 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 30 de Agosto, pág. 114.)

Véanse, además, los artículos 181 y 183.



## LIBRO TERCERO

### De las faltas y sus penas.

#### TÍTULO I

DE LAS FALTAS DE IMPRENTA Y CONTRA EL ORDEN PÚBLICO.

#### CAPÍTULO II

Faltas contra el orden público.

#### Art. 586... 1.º

PERTURBACIÓN DE LOS ACTOS DE UN CULTO Ó OFENSA DE LOS SENTIMIENTOS RELIGIOSOS DE LOS CONCURRENTES Á ELLOS DE UN MODO NO PREVISTO EN LA SECCIÓN TERCERA, CAPÍTULO II, TÍTULO II DEL LIBRO SEGUNDO DE ESTE CÓDIGO.

**CUESTION I.** *El que permaneciendo cubierto al paso de una procesión é invitado por el cura que la preside á que se descubra ó retire, se niega resueltamente á verificarlo, será responsable de la falta de ofensa á los sentimientos religiosos de los concurrentes á los actos de un culto?*—El Tribunal Supremo ha resuelto una vez más la afirmativa: «Considerando que cometen la falta definida en el núm. 1.º del art. 586 del Código penal los que ofenden los sentimientos religiosos de los concurrentes al acto de un culto, si el hecho no reviste mayor gravedad según las prescripciones de la sección tercera, tit. 2.º, libro 2.º del mismo Código; Considerando que debe estimarse ofensivo á los sentimientos de los que profesan la religión católica el hecho irreverente de permanecer José Farré con la cabeza cubierta al pasar una procesión solemne, y de persistir en su irrespetuoso comportamiento sin embargo de haber sido invitado para que se descubriese ó se retirase; Considerando, por consiguiente, que el Juez sentenciador ha fallado con arreglo á derecho y con debida aplicación de los artículos 1.º y 586, núm. 1.º del Código vigente, cuyas disposiciones no han sido infringidas, como se supone en el recurso con manifiesto error; Considerando que tampoco resulta infringido el art. 11 de la Constitución del Estado, notoriamente inaplicable al caso procesal, porque José Farré no ha sido penado por

sus opiniones ó creencias, sino por haber ofendido el sentimiento público que el mismo artículo y la ley penal garantizan y amparan, etc.» (Sentencia de 16 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 25 de Agosto, pág. 92.)

**CUESTION II.** *El que permanece cubierto al paso del Vídico llevado en procesión á los enfermos pobres, á pesar de las amonestaciones que se le hacen para que se descubra, ¿será responsable de la falta comprendida en el núm. 1.º del art. 586 del Código, aun cuando se hallase á la sacón en el dintel de la puerta de su casa, si estaba á la vista de los concurrentes á dicho acto religioso?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que al permanecer cubierto el recurrente á la vista de todos en el dintel de la puerta de su casa al pasar bajo palio la Majestad llevada á los enfermos, sin haber permitido (1) descubrirse á pesar de las excitaciones del Párroco, necesariamente tuvo que herir con ese alarde de irrespetuosidad los sentimientos religiosos de las personas que presenciaron ese acto de desprecio á un objeto tan sagrado para los católicos, incurriendo con ello en la falta prevista en el núm. 1.º del art. 586 del Código penal, sin que sea aceptable la excusa de que sólo por costumbre tenía puesto el sombrero al pasar la procesión, pues al querer evitarlo pudo haberse introducido en la casa y excusar el efecto que produjo ser (2) su insistencia en contrariar los sentimientos religiosos de los concurrentes: Considerando, que al apreciar en este sentido el hecho el Juez sentenciador no ha infringido las disposiciones legales citadas, ni incurrido en el error de derecho que se le atribuye, etc.» (Sentencia de 14 de Diciembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 22 de Abril de 1889, páginas 112 y 113.)

### Art. 589... 5.º

FALTA DE RESPETO Y CONSIDERACIÓN Á LA AUTORIDAD Ó DESOBEDIENCIA LEVE Á LA MISMA.

**CUESTION I.** *El que requerido de comparecencia ante el Juez municipal de un pueblo, que había de confiarle cierto servicio que urgía prestar, por un vecino del mismo á quien para ello diera orden verbal el susodicho Juez, ¿será responsable de la falta de desobediencia, prevista y penada en el núm. 5.º del art. 589 del Código, por su incomparecencia y por haber dado motivo con ella á que el Juez le reiterara personalmente dicha orden?*—Así lo estimó el Juez de Instrucción de Santa María de Nieva, quien condenó al procesado á la multa de cinco pesetas, reprensión y costas. Mas interpuesto contra dicha sentencia recurso de casación por infrac-

(1) Así se lee en la *Gaceta*, debiendo decir, sin duda alguna, «querido».

(2) Así dice la *Gaceta*, en vez de «con».



ción de ley por la defensa del procesado, citando como infringido el art. 589, núm. 5.º del Código, declaró el Tribunal Supremo haber lugar á él: «Considerando que la orden de comparecencia dictada personalmente por el Juez municipal de Basila no fué transmitida de una manera oficial á Francisco Martín Ayuso, y que reiterada personalmente por aquel funcionario, no consta fuese desobedecida ni que tuviera carácter obligatorio: Considerando que por no resultar de la sentencia reclamada que el enjuiciado dejase de cumplir la orden del Juez municipal respecto al servicio requerido, es notoriamente inaplicable el núm. 5.º del artículo 589 del Código penal, y que al aplicarlo el Juez sentenciador ha incurrido en el error de derecho de calificar como falta un hecho que no la constituye, etc.» (Sentencia de 16 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 11 de Mayo, pág. 225.)

**CUESTION II.** *El que requerido en forma para que, de orden de un Juzgado, retenga á disposición del mismo la cuarta parte del sueldo ó retribución que daba á un dependiente suyo, contesta que no reconoce competencia en el Juez para dicha retención, por no ser su dependiente empleado público, por no pagarle además sueldo alguno en el sentido gramatical ó jurídico de esta palabra, y que para no tener que hacer tal retención despide en el acto á dicho dependiente, conatando que después lo volvió á tomar á su servicio, ¿será responsable de la falta prevista y penada en el art. 589, número 5.º del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que según los hechos que la sentencia reclamada declara probados, los términos en que el recurrente Solano Vial contestó cuando en virtud de providencia del Juez municipal de Santander fué requerido para que retuviera á disposición del Juzgado la cuarta parte del sueldo ó retribución que diera á su dependiente D. Enrique Morilla, envuelven falta de respeto y consideración á la autoridad del Juez que mandó hacer la retención, y al propio tiempo desobediencia por no haber cumplido las órdenes que dictara la misma, etc.» (Sentencia de 13 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 26 de Septiembre, páginas 178 y 179.)

Véanse, además, las *Cuestiones* del art. 365, páginas 140 á 146 de este *Suplemento*.

## TÍTULO II

DE LAS FALTAS CONTRA LOS INTERESES GENERALES Y RÉGIMEN  
DE LAS POBLACIONES.

### Art. 592... 4.º y 5.º

DEFRAUDACIÓN AL PÚBLICO EN LA VENTA DE SUSTANCIAS, YA SEA  
EN CANTIDAD, YA EN CALIDAD, POR CUALQUIER MEDIO NO PE-  
NADO EXPRESAMENTE.—APREHENSIÓN Á TRAFICANTES Ó VENDE-  
DORES DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS QUE NO TENGAN EL PESO,  
MEDIDA Ó CALIDAD QUE CORRESPONDA.

**CUESTION I.** *La aprehensión de piezas de pan destinadas á la venta pública, por cuenta del fabricante del mismo, faltas del peso correspondiente, ¿determinará la responsabilidad, en contra de aquel, que establece el núm. 5.º del art. 592 del Código, aun cuando peritos manifiesten que la falta de peso en el pan es debida generalmente á la clase de harina ó cantidad de la levadura, á la manera como se fabrica la masa, á la clase de leña con que se caldea el horno y á otra multitud de causas?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que el art. 592 del Código penal señala la pena en que incurrirán entre otros: «núm. 5.º, los traficantes ó vendedores á quienes se aprehendieren sustancias alimenticias que no tengan el peso, medida ó calidad que correspondan; Considerando que la sentencia reclamada establece como hechos indiscutibles en casación que piezas de pan destinadas á la venta pública, por cuenta del fabricante D. José García Fernández, se hallaron faltas de peso correspondiente, en el reconocimiento practicado ante el Fiscal municipal del respectivo distrito: Considerando que, siendo por tanto traficante y realmente vendedor el recurrente, incurrió en la responsabilidad declarada en la sentencia, sin que le excuse de ella la alegada falta de intención ó voluntad de defraudar, porque la ley penal presume libres é intencionales los actos punibles, salvo prueba contraria, y la disposición aplicada requiere sólo la aprehensión de sustancias destinadas á la venta; porque la afirmación de que la escasez del peso del pan se debiera á circunstancias independientes de la voluntad del enjuiciado, además de no considerar éstas la sentencia sino como causas posibles de carácter general, de existir en concreto, hubiera obligado al recurrente á hacer conocer al público su resultado, lo prevenido en el art. 308 de las vigentes Ordenanzas municipales, cuya omisión pone de manifiesto un propósito contrario al alegado, ya que el hecho no puede racionalmente



estimarse desconocido de persona dedicada ordinariamente á la elaboración del pan por piezas de peso determinado; y Considerando por lo expuesto que el Juez sentenciador no ha incurrido en el error ni en las infracciones legales que se le atribuyen, etc.» (Sentencia de 4 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 8 de Mayo, pág. 204.)

**CUESTION II.** *Aun cuando la aprehensión de piezas de pan faltas del peso debido, en local destinado á la venta pública por cuenta del procesado, determine en contra de éste (V. la Cuestión anterior) la responsabilidad establecida en el núm. 5.º del art. 592 del Código, ¿procederá la casación de la sentencia que se pretenda porque el Juez sentenciador haya estimado comprendido el hecho en el núm. 4.º del propio artículo?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que si bien el Juez sentenciador ha estimado comprendido el hecho en el núm. 4.º de dicho artículo, no procede por ello la casación pretendida, á causa de que el error de derecho atribuido á su resolución, que es el señalado en el núm. 1.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, no la consiente, según repetidas declaraciones de esta Sala, de acuerdo con sus términos y sentido jurídico, cuando el hecho es por sí punible, y menos todavía en casos como el actual, en que la calificación consignada en la sentencia, y la procedente en rigor, son modos distintos de comisión de una misma falta, sometida por el mismo precepto legal á idéntica penalidad, etc.» (Sentencia de 4 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 8 de Mayo, páginas 204 y 205.)

### Art. 596... 7.º

**PENA DE LOS QUE ARROJAN ANIMALES MUERTOS, BASURAS Ó ESCOMBROS EN LAS CALLES Y EN LOS SITIOS PÚBLICOS DONDE ESTÁ PROHIBIDO HACERLO, Ó ENSUCIAN LAS FUENTES Ó ABREVADEROS.**

**CUESTION.** *Al que por haber colocado en la calle abonos y basuras y algunas piedras para sostenerlas y formar así como una especie de estercolero, además de la falta consistente en haber obstruido la calle con dicho acto ó artefacto (art. 599, núm. 6.º), ¿podrá condenarse también por la falta que consigna el art. 596, número 7.º, y que consiste en arrojar basuras á la calle ó otros sitios públicos donde esté prohibido hacerlo?*—Así lo estimó el Juez de instrucción de Murias de Paredes, que condenó al autor del hecho á las penas correspondientes á cada una de las expresadas infracciones. Mas interpuesto recurso de casación contra dicha sentencia por la defensa del reo, en cuanto se habían penado como dos faltas lo que en realidad sólo constituía una, declaró el Tribunal Supremo haber lugar á él: «Considerando que si bien al colocar el recurrente abonos y varias piedras para contenerlos en la calle de la Iglesia, de la villa de Murias de Paredes, obstruyendo el libre tránsito de parte de ella, cuyos hechos se declaran probados en la

sentencia recurrida, ha cometido la falta prevista en el núm. 6.º del art. 599 del Código penal, calificada debidamente por el Juez de instrucción de Murias de Paredes, ha incurrido éste en error de derecho al estimar que ese solo acto es constitutivo además de la falta á que se refiere el núm. 7.º del art. 596, cuya sanción penal no es aplicable al procesado, infringiendo dicho artículo al aplicarle indebidamente al presente caso, etc.» (Sentencia de 3 de Abril de 1888, publicada en la *Gaceta* de 15 de Mayo, pág. 257.)

### Art. 599... 3.º

PENA DE LOS DUEÑOS DE ANIMALES FEROCES Y DAÑINOS QUE LOS DEJAN SUELTOS Ó EN DISPOSICIÓN DE CAUSAR MAL.

**CUESTION.** *¿Será responsable de la falta en que incurren los dueños de animales feroces y dañinos que los dejan sueltos ó en disposición de causar mal, el dueño de un perro que habiendo ya acometido y mordido con anterioridad á varias personas sin provocación alguna, lo deja abandonado y suelto, á consecuencia de lo cual muere á un niño, causándole lesiones que duraron más de ocho días y menos de treinta?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que de los hechos que han servido de fundamento al fallo de la sentencia reclamada no consta ni puede inferirse la existencia de la circunstancia eximente 8.ª del art. 8.º del Código penal, invocada por el recurrente, y sus alegaciones en orden á la misma están en oposición con los elementos probatorios, apreciados por el Juez sentenciador; puesto que conocidas las condiciones especiales del perro que produjo las lesiones al niño Miguel Llibra, no cabe estimar como acto lícito el que ejecutó el procesado, dejando en libertad por las calles al expresado animal, sin adoptar precauciones de ningún género, con lo cual dió ocasión al suceso de autos, y consiguientemente no se ha infringido la indicada disposición: Considerando que en el concepto jurídico con que viene calificado y penado el hecho de que se trata no ha habido tampoco infracción del núm. 3.º del art. 599, porque al dejar suelto el perro con los instintos de fiera que demostraba en determinados casos, como en el que precedió al de que se trata, era de esperar causase el mal que produjo á otro de igual naturaleza, etc.» (Sentencia de 19 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 17 de Noviembre, pág. 310.)



## TITULO III

## DE LAS FALTAS CONTRA LAS PERSONAS.

## Art. 604... 5.º

COACCIÓN Ó VEJACIÓN INJUSTA NO PENADA EN EL LIBRO SEGUNDO DE ESTE CÓDIGO.

**QUESTION.** *El Notario que, en vista de la negativa de un sujeto á asistir como testigo al otorgamiento de una escritura pública, requiere á un agente de la Autoridad para que bajo su responsabilidad conduzca á aquél á su estudio, como así lo hizo, firmando el mencionado sujeto como tal testigo, aunque bajo la protesta de que lo hacía á la fuerza, ¿será responsable cuando menos (1) de la falta de coacción ó vejación injusta, prevista y penada en el artículo 604, núm. 5.º del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que consignándose en la sentencia reclamada que el enjuiciado D. Francisco Hernández, Notario de la ciudad de Cádiz, obligó bajo su responsabilidad, por medio de un guardia municipal, á D. Adolfo González á comparecer en su estudio para que asistiese como testigo al otorgamiento de un documento público, sin que las alegaciones del González de hallarse á la sazón desempeñando su cargo de expendedor de billetes del teatro bastaran á disuadir al Hernández de su insistente é injustificado propósito, es evidente que estos hechos constituyen, cuando menos, la falta prevista y penada en el núm. 5.º del art. 604 del Código penal, toda vez que se compelió al expresado González á efectuar lo que no quería: Considerando, por tanto, que el Juzgado sentenciador no ha incurrido en el error de derecho ni infringido las disposiciones legales que se le atribuyen en el recurso, etc.» (Sentencia de 16 de Febrero de 1888, publicada en la Gaceta de 10 de Mayo, pág. 222.)

(1) Decimos cuando menos, como así lo dice el propio Tribunal Supremo en el considerando primero de su sentencia, porque es evidente que, dada la violencia que concurrió en el hecho, éste debió calificarse y penarse como verdadero delito de coacción, comprendido en el art. 519 del Código; error que no pudo subsanar dicho Supremo Tribunal, por no haber podido su corrección quien podía y debía hacerlo.

## TÍTULO IV

## DE LAS FALTAS CONTRA LA PROPIEDAD.

## Art. 611.

ENTRADA DE GANADOS EN HEREDAD AJENA, CAUSANDO DAÑO QUE EXCEDA DE CINCO PESETAS.

**CUESTION.** *La entrada de ganados de un particular en heredad del común, sin permiso ó autorización del Municipio, será penable como falta, según los casos, con arreglo á los artículos 611, 612 y 613 del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que siendo atribución de los Ayuntamientos, según la ley Municipal, arreglar el modo de división, aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales del pueblo, es visto que se hace necesario su permiso ó autorización á los vecinos para que puedan entrar sus ganados en heredades del común; y no constando en el caso de autos que á D. Simón Ceballos se le hubiera concedido este beneficio, la denuncia contra él fué procedente: Considerando que, conforme á lo prescrito en la primera parte del art. 612 del Código penal, en relación con el núm. 1.º del 611, el dueño de ganado vacuno que entrare sin causar daño en heredad ajena, incurre en la penalidad que como falta determina el expresado artículo, que es el caso del presente recurso, puesto que en el segundo considerando de la sentencia recurrida se consigna no haberse justificado con intervención del denunciado D. Simón Ceballos la existencia de daño alguno, ni tampoco su importe, etc.» (Sentencia de 27 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 1.º de Octubre, pág. 214.)

## Art. 612.

ENTRADA DE GANADOS, COMPRENDIDOS EN LOS NÚMEROS 1.º, 2.º Y 3.º DEL ARTÍCULO ANTERIOR, SIN CAUSAR DAÑO EN HEREDAD AJENA Ó CAUSÁNDOLO INFERIOR DE CINCO PESETAS, SIN PERMISO DEL DUEÑO.

**CUESTION.** *Aun cuando no se haya practicado tasación alguna del daño que causara la intrusión en heredad ajena de 113 cabezas de ganado cabrio y 7 de lanar, será revocable en casación la sentencia del Juez que condena al dueño de dicho ganado á la*



*multa de 14,12 pesetas, con arreglo al art. 612 del Código.*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando, en lo concerniente al motivo 4.º y último de casación, que el art. 611 del Código penal no ha podido ser aplicado por faltar y ser hoy imposible el avalúo del daño causado; que atendida esta deficiencia sólo puede regir la penalidad del acto justiciable el art. 612, menos severo que el anterior y más beneficioso para el enjuiciado; que siendo un hecho indudable y no discutido la introducción del ganado de Benito González en la propiedad de D.ª María Micaela Bringas, es incontestable también la acertada calificación de la falta por el Juez sentenciador; y que aun subordinada la entidad de la multa á la cualidad de las reses, la impuesta se refiere exclusivamente al número de cabezas de ganado cabrio, de modo que no se ha incurrido en error de derecho al determinar el grado de la pena, etc.» (Sentencia de 16 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 11 de Mayo, pág. 226.)

Véase el artículo siguiente y el 619.

### Art. 613.

INTRODUCCIÓN DE GANADOS EN HEREDAD AJENA, CAUSADA DE PROPOSITO Ó POR ABANDONO Ó NEGLIGENCIA DE LOS DUEÑOS Ó GANADEROS.

**CUESTION.** *¿Será penable como falta la entrada de ganado lanar en heredad ajena, sin causar daño ó causándole inferior á 5 pesetas?*—A las Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de Octubre de 1878, 9 de Febrero de 1885 y otras que citamos en el *Suplemento* 3.º, pág. 463, resolviendo la cuestión en sentido negativo, hay que añadir la siguiente casando la sentencia condenatoria dictada por el Juez de instrucción de Sagunto en el caso de que se trata: «Considerando que circunscrito el hecho procesal, tal cual aparece de la sentencia recurrida, á haber sido sorprendido Ramón Pérez por el guarda de una villa apacentando dentro de ella 50 cabezas de ganado lanar, causando daño que fué valorado en 25 céntimos de peseta, ello sólo no constituye falta ni delito, porque el art. 608 del Código penal, que se aplica en la sentencia, no guarda relación ni congruencia con el hecho cometido, y el 611 no castiga la entrada de ganado lanar en heredad ajena cuando el daño causado por él es inferior á 5 pesetas, aunque la entrada del ganado fuera intencional, ó por culpa ó negligencia de los dueños ó ganaderos, porque el art. 613 aprecia esas circunstancias sólo en relación con los dos artículos anteriores, según se desprende de la letra y espíritu de todos ellos y tiene declarado con repetición este Supremo Tribunal: Considerando, en su virtud, que al separarse el Juez sentenciador de este criterio jurídico ha infringido el artículo en que se apoya é incurrido en el error de derecho que el recurrente le atribuye, etc.» (Sen-

tencia de 22 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 19 de Julio, pág. 12.)

Igual doctrina se consigna en otra Sentencia *casando* también el fallo condenatorio del Juez de instrucción de Almendralejo: «Considerando que el hecho atribuido á Santiago Buenavida y Palomo no constituye acción alguna penal, porque consiste en haber entrado con el ganado lanar que custodiaba en heredad ajena, causando un daño cuyo importe no llega á 5 pesetas, y semejante hecho se halla exceptuado en el núm. 4.º del art. 611 del Código, así como lo está igualmente en el 612 y 613 del mismo, que se relacionan con aquél, habiendo sido infringido este último artículo en la sentencia recurrida, por indebida aplicación, cometiéndose en ella el error de derecho que señala el núm. 1.º del artículo 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, y que con acierto se invoca en el recurso, etc.» (Sentencia de 22 de Marzo de 1888, publicada en las *Gacetas* de 19 y 20 de Julio, páginas 12 y 13.)

Véase, además, el art. 619.

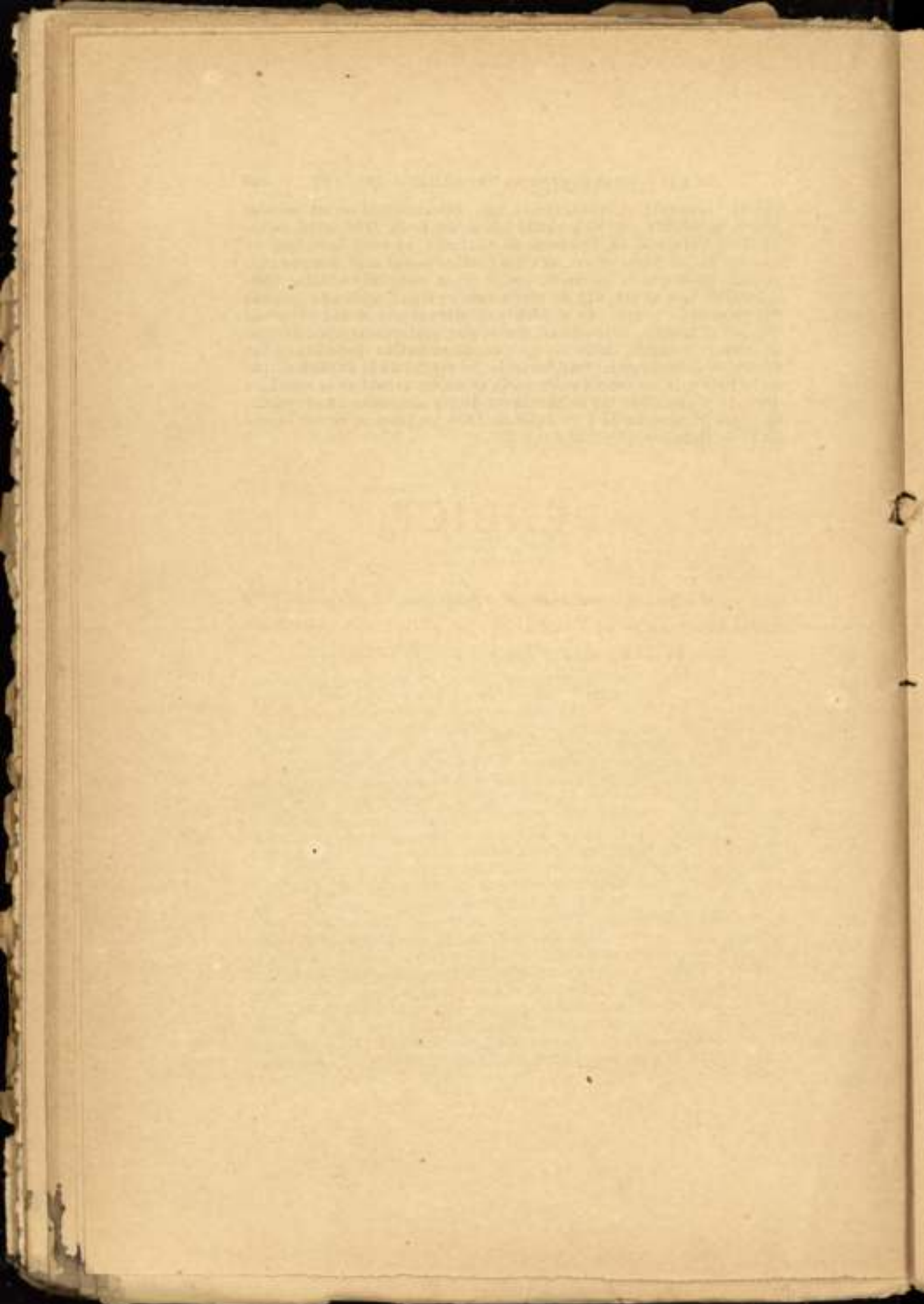
### Art. 619.

DAÑO CUALQUIERA NO PENADO EN ESTE LIBRO NI EN EL ANTERIOR, CAUSADO INTENCIONALMENTE, POR NEGLIGENCIA Ó POR DESCUIDO.

**CUESTION.** *Ya que no penable con arreglo al art. 613, la entrada de ganado lanar en heredad ajena sin causar daño ó causándolo inferior á 5 pesetas, ¿lo será con arreglo al 619 del propio Código?*—Así lo estimó el Juez de instrucción de Azpeitia, contra cuya sentencia condenatoria interpuso recurso de casación el Ministerio fiscal, que contradijo (pásmense nuestros lectores! el Abogado defensor nombrado al procesado, apreciando que estaba aquélla arreglada á los preceptos del Código. Mas el Tribunal Supremo, interpretando la Ley cual lo hiciera el Representante de la misma, declaró *haber lugar* al expresado recurso, con tan grande desconocimiento de aquélla como de sus propios deberes impugnado por dicho *soci-díant* Letrado defensor del procesado: «Considerando que el art. 619 del Código penal no es aplicable á los daños causados por la entrada de ganados en heredad ajena, previstos, según les determina intención ó negligencia, en los 611, 612 y 613, los cuales, por virtud de la rectificación acordada en el decreto de 1.º de Enero de 1871, excluyen de sus sanciones los que no llegan á 5 pesetas, producidos por ganado lanar, cuyas condiciones especiales tuvo en cuenta la ley para no atribuir á estos hechos, entre los que se halla el procesal, el carácter de falta que declara á otros semejantes, etc.» (Sentencia de 16 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 1.º de Octubre, página 213.)—Igual resolución, reclamada por el Representante del Ministerio fiscal del Tribunal Supremo, se consigna en otra Sen-



tencia posterior: «Considerando que determinándose en la sentencia recurrida que el ganado lanar de León Odriozola causó un daño valorado en 2 pesetas 50 céntimos, es visto que éste no excede de las 5 que el art. 611 del Código penal marca como tipo mínimo para que el hecho de que se trata constituya falta: Considerando que el art. 619 de dicho cuerpo legal, aplicado al caso del presente recurso, se refiere exclusivamente á las personas que por sí mismas, intencionalmente, por negligencia ó por descuido causaren algún daño de los que no se hallan penados en los artículos precedentes: Considerando, en virtud de lo expuesto, que en la indicada sentencia reclamada se ha incurrido en el error de derecho y cometido las infracciones de ley alegadas en el recurso, etc.» (Sentencia de 7 de Julio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 16 de Octubre, páginas 236 y 237.)





## APÉNDICE

QUE COMPRENDE

LAS LEYES PENALES ESPECIALES DE CONTRABANDO Y DEFRAUDACIÓN,  
LEYES ELECTORALES DE 20 DE AGOSTO DE 1870 Y 28 DE DICIEMBRE  
DE 1878, CAZA Y PESCA Y LEY MUNICIPAL

## APPENDICE

DE LA MANIÈRE D'ÉCRIRE  
LES LETTRES EN GÉNÉRAL  
ET EN PARTICULIER  
LES LETTRES DE COMMERCE  
ET DE FINANCES



## CONTRABANDO Y DEFRAUDACIÓN

Real decreto de 20 de Junio de 1852.

### Art. 18... 3.º

DETENTACIÓN DE EFECTOS DE LA CLASE DE ESTANCADOS QUE CAREZCAN DE SIGNOS POSITIVOS DE LEGÍTIMA PROCEDENCIA, SI NO SE ACREDITA SU ADQUISICIÓN LEGAL CON AREGLO Á LAS LEYES Y REGLAMENTOS DEL FISCO, SIEMPRE QUE LA CANTIDAD DETENTADA EXCEDA DE LA QUE PERMITAN LAS INSTRUCCIONES DE RENTAS Á CADA PARTICULAR PARA SU USO Y CONSUMO.

**CUESTION.** *¿Constituirá el delito de contrabando, comprendido en el núm. 3.º del art. 18 del Real decreto de 20 de Junio de 1852, la ocupación en poder de un particular de cierto número de tabacos habanos menor de 300, precintados á nombre de personas distintas?*—Contra la opinión del Abogado del Estado que recurrió en casación contra el fallo absolutorio de la Audiencia de Madrid, ha resuelto el Tribunal Supremo la negativa: «Considerando que se incurre en el delito de contrabando, según el número 3.º del art. 18 del Real decreto de 20 de Junio de 1852, que invoca el recurso, por la detentación de efectos de la clase de estancados que carecen de signos positivos de legítima procedencia si no se acredita su adquisición legal, siempre que la cantidad detentada exceda de la que permiten las instrucciones de Rentas á cada particular para su uso y consumo: Considerando que según el art. 2.º del apéndice noveno de las Ordenanzas generales de la Renta de Aduanas, aprobadas por Real decreto de 19 de Noviembre de 1884, sólo se podrá decomisar el tabaco elaborado fuera de la Península que se encuentre en poder de particulares, siempre que no se halle precintado y adendado á su nombre, en cuanto exceda de 300 tabacos torcidos, dos millares de cigarillos de papel y dos kilogramos de picadura: Considerando que no excediendo la cantidad de tabacos detentada á D. Antonio Suárez Sanjuán de la determinada en las instrucciones de Rentas, que en este caso son las Ordenanzas generales de Aduanas en su apéndice noveno, art. 2.º, no se ha cometido el delito de contrabando; y al estimarlo así el Tribunal sentenciador, no ha infringido las disposiciones legales que en el recurso propuesto invoca el Abogado del Estado, etc.» (Sentencia de 22 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 25 de Marzo de 1889, pág. 80.)

## DELITOS ELECTORALES

Ley electoral de 20 de Agosto de 1870.

Repetiremos una vez más lo que ya hemos dicho en los anteriores SUPLEMENTOS, es á saber: que esta ley es la que está hoy vigente en punto á sanción penal respecto á las elecciones de *Senadores, Diputados provinciales y Ayuntamientos*.

### TÍTULO III

DE LA SANCIÓN PENAL

#### CAPÍTULO I

De las falsedades.

#### Art. 167... 1.º

ALTERACIÓN DE LAS LISTAS ELECTORALES, DEL LIBRO DEL CENSO ELECTORAL, DEL TALONARIO Ó DE LAS CÉDULAS SACADAS DE ESTE, CON EL FIN DE DAR Ó QUITAR EL DERECHO ELECTORAL.

**QUESTION.** *El Alcalde que, á pesar del acuerdo del Ayuntamiento de su presidencia desestimando la solicitud de un vecino y elector referente á que se incluyera en las listas electorales á varios sujetos, desestimación que hubo de confirmar la Comisión provincial, los comprende, no obstante, en las listas definitivas, expidiéndoles las oportunas cédulas, á pretexto de no haber recibido el acuerdo confirmatorio de dicha Comisión provincial y de haber la misma resuelto en aquellos días que tenían derecho á ser electores otros vecinos que se hallaban en el mismo caso que aquéllos, ¿será responsable del delito de falsedad electoral, previsto en el número 1.º del art. 167 de la ley de 20 de Agosto de 1870 y penado en el 1667—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que el hecho procesal está comprendido como delito de*



falsedad en el art. 167, núm. 1.º de la ley de 20 de Agosto de 1870, porque D. Cayetano Zabaleta, como Alcalde de Lagaspia, mandó incluir en las listas electorales los nombres de tres individuos cuya capacidad legal como electores había sido desestimada por el Ayuntamiento de aquella población: Considerando que esta impropcedente inclusión alteró las listas en el número de electores con el fin de dar derecho electoral á personas que no lo tenían según las resoluciones dictadas por el mencionado Ayuntamiento en 22 de Febrero de 1885 y por la Comisión provincial en 15 de Marzo siguiente: Considerando, en su consecuencia, que no ha sido infringido el precitado art. 167, porque, según su núm. 1.º, concurren todas las circunstancias integrantes del delito de falsedad electoral; ni el art. 166, porque éste determina la pena aplicable, sin que sobre la calidad y grado de la sanción penal se haya alegado motivo alguno para la casación de la sentencia: Considerando que tampoco ha sido infringido el art. 1.º del Código penal, porque todas las acciones ó omisiones definidas como delito ó falta se reputan siempre voluntarias, á no ser que conste lo contrario: Considerando que el recurrente, además de no haber probado la falta de voluntad consciente y de intención dolosa, invoca un pretexto que arguye malicia, porque las circunstancias del caso y el mismo art. 23 de la ley Electoral, ni le permitían revocar el acuerdo del Ayuntamiento, ni le autorizaban para invadir las atribuciones de la Comisión provincial, que funcionaba como Tribunal de alzada, y no había pronunciado su decisión, etc.» (Sentencia de 27 de Diciembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 30 de Abril de 1889, pág. 143.)

### CAPÍTULO III

**De las faltas en el cumplimiento de sus deberes por los funcionarios de todas clases que intervienen en las elecciones y sus actos preparatorios.**

#### Art. 173... 4.º

LOS QUE DEJEN DE PROCLAMAR SECRETARIOS ESCRUTADORES, COMISIONADOS PARA ASISTIR Á LOS ESCRUTINIOS, CONCEJALES, DIPUTADOS PROVINCIALES, COMPROMISARIOS PARA ELECCIÓN DE SENADORES Ó SENADORES Á QUIENES HUBIESEN SIDO ELEGIDOS PARA CUALQUIERA DE ESTOS CARGOS SEGÚN LA LEY, Ó LOS QUE INDEBIDAMENTE PROCLAMEN Á OTROS.

**CUESTION.** *El Alcalde y concejales de un Ayuntamiento que pasado el término de los quince primeros días del octavo mes del año económico, establecido por el art. 22 de la ley de 20 de Agosto de 1870, admiten y resuelven reclamaciones de inclusión y exclusión de las listas electorales, incurrirán en la falta prevista en el número 4.º del art. 173, y castigada en el 172 de la expresada ley?*

*Caso afirmativo, ¿podrán alegar á su favor la exención completa ó incompleta de responsabilidad criminal procedente de la obediencia debida, porque consultaron previamente con el Gobernador de la provincia, y el Subgobernador, en ausencia de éste, les manifestara que no sólo podían alterar y modificar las listas, sino que debían hacerlo?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa sobre el primer punto y la negativa por lo que hace al segundo: «Considerando que conforme al art. 22 de la ley de 20 de Agosto de 1870, actualmente vigente, los Ayuntamientos formarán con arreglo al padrón de vecindad las listas electorales, fijándolas al público durante los quince primeros días del octavo mes de cada año económico, para que los interesados hagan las reclamaciones que crean oportunas, sin que pasado dicho término puedan admitirse ninguna de éstas: Considerando que, con arreglo al número 4.º del art. 173 de la mencionada ley, incurrir en la falta que castiga el 172 con la pena de arresto mayor, multa de 250 pesetas á 2.500 é inhabilitación temporal para derechos políticos, los funcionarios públicos que alterasen los plazos ó términos señalados para la formación y rectificación de las listas electorales, lo cual hicieron los recurrentes D. Pedro Alegret y Presas y D. Juan de Pablo y Blanch, así como los demás individuos del Ayuntamiento de Figueras procesados, sin librarse de la responsabilidad penal antes señalada, aunque consultasen previamente con el Gobernador de la provincia, y el Subgobernador, en ausencia de éste, les manifestara que no sólo podían alterar y modificar las listas ultimadas en Febrero, sino que debían hacerlo, porque tal parecer no era un mandato expreso que por obediencia debida les obligaba á su cumplimiento, habiendo faltado voluntaria é intencionalmente, según así declara el Tribunal sentenciador, á lo preceptuado en el citado art. 22 de la expresada ley, no sólo al rectificar las listas electorales y variar en un todo los términos que señala, sino también al admitir desde luego y en tiempo inoportuno reclamaciones improcedentes: Considerando que descartados de la sentencia recurrida los demás delitos que fueron igualmente objeto de la querrela y por los que han sido abaueltos los procesados y circunscrito el recurso á la falta electoral ya defnida para su estimación y castigo, no puede tenerse en cuenta, como pretenden en segundo lugar los reclamantes, que ya que no se aprecie la obediencia debida como motivo de exención penal, se la dé el valor de la circunstancia 1.ª del artículo 9.º del Código penal, porque aquélla, si existe, ha de ser completa y no limitada, surtiendo todos los efectos legales, á diferencia de otros de que se ocupa igualmente el art. 8.º del mencionado Código, que, componiendo un hecho complejo y divisible, puede existir íntegro ó sólo alguna ó muchas partes del mismo: Considerando, en su virtud, que la Audiencia de Barcelona, al condenar á los recurrentes y demás procesados como culpables de la falta electoral ya defnida, no ha infringido, al aplicar los artículos de la ley de 20 de Agosto de 1870 que se han citado, ni los artículos 1.º, 8.º y 9.º, circunstancia 1.ª, y 87 del Código al dejarlos de aplicar ya que no ha incurrido en el error de dere-



cho que sin fundamento legal se invoca en el recurso, etc.» (Sentencia de 28 de Noviembre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 6 de Enero de 1888, páginas 30 y 31.)

### Art. 173... 14.

EL PRESIDENTE Y SECRETARIOS QUE ADMITAN A VOTAR AL QUE NO PRESENTE CÉDULA LEGÍTIMA Ó QUE NO FIGURE EN EL LIBRO TALONARIO Y LISTA DEL COLEGIO Ó SECCIÓN EN QUE PRETENDA EMITIR SU VOTO, Y LOS QUE NO ADMITAN EL VOTO DE QUIEN FIGURE EN DICHO LIBRO Y LISTA, AUNQUE NO PRESENTE CÉDULA, SIEMPRE QUE EN AQUEL EXISTA EL DUPLICADO DE ÉSTA Y LA PIDA.

**CUESTION.** *¿Será responsable de la falta comprendida en el art. 173, núm. 14 de la ley de 20 de Agosto de 1870 la Mesa electoral que impide que dos electores emitan su voto, el primero porque había sido condenado á pena correccional por sentencia de la Audiencia, pendiente aún de recurso de casación, y el segundo porque con anterioridad había roto voluntariamente la cédula que se le había entregado?*—La Audiencia de Lérida absolvió á los individuos que formaban dicha Mesa electoral, fundada en que habían procedido sin intención dolosa al negar al primero el derecho de emitir su voto, y con arreglo á la ley al no entregar el duplicado de la cédula al segundo, puesto que rompió voluntariamente la primera. Mas interpuesto contra dicha sentencia recurso de casación por infracción de ley por la defensa de uno de los querellantes, citando como infringidos los artículos 1.º del Código penal y 173, número 14 de la ley Electoral de 20 de Agosto de 1870, en relación con el 172, declaró el Tribunal Supremo haber lugar al referido recurso: «Considerando que se comete el delito definido en el número 14 del art. 173 de la ley Electoral de 1870 cuando un Presidente y Secretario de Mesa no admiten el voto de un elector que figura en el libro talonario y lista del colegio ó sección en que pretende emitirlo, aunque no presente cédula, siempre que en aquél exista el duplicado de ésta y la pida; y que los acusados D. Jaime Anglés, José Riba Balcells y José Duch Vidal cometieron dos distintos delitos de esta clase al impedir que Joaquín Bosch y José Balcells Miró emitieran su sufragio en las elecciones para Concejales, correspondientes al 2 de Mayo de 1887, pretextando que el primero estaba inhabilitado por haber sido condenado en causa sobre desacato á una pena correccional, y que el segundo había roto su cédula, siendo así que la condena del Bosch no sólo no había llegado á ser ejecutoria, sino que fué dejada sin efecto por esta Sala en recurso de casación, y que el segundo pidió en uso de su derecho un duplicado de su cédula: Considerando que las acciones y omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias, si no constase lo contrario, y que si bien el Tribunal sentenciador estima que los tres acusados referidos obraron sin malicia por los fundamentos que expone, no son

éstos de tal naturaleza que por ellos se revele la falta de malicia apreciada, puesto que la ley exige formalidades determinadas para hacer constar la incapacidad de los electores que no cumplieron, respecto del Joaquín Boscá, porque no llegó á perder su derecho, y porque siendo absoluto el derecho de reclamar el segundo talón cuando se pierde la primera cédula talonaria, no es atendible el pretexto dado por los procesados para negársela á José Balcells, sin que por otra parte se preste la ley á dudas é interpretaciones contrarias á esta doctrina que sean racionales: Considerando que, esto supuesto, la Audiencia de Lérida ha incurrido en error de derecho al absolver á los acusados, fundada en que, si bien el primer hecho realizado por los mismos se hallaba definido como delito, había sido perpetrado sin malicia, y en el segundo se habían ajustado á disposición legal estricta, etc.» (Sentencia de 6 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 12 de Diciembre, pág. 275.)

### Art. 173... 16.

EL ALCALDE Ó FUNCIONARIO PÚBLICO, DE CUALQUIERA CATEGORÍA, QUE SE NEGASE Ó RETARDESE ADMITIR Ó DAR CURSO Á RECLAMACIONES ELECTORALES DE CUALQUIERA INDOLE, Ó QUE REMITASE PROVEER EN EL ACTO AL QUE PRESENTE LA RECLAMACIÓN, DE UN RECIBO EXPRESIVO DE SU ENTREGA AUNQUE NO LO SOLICITE.

**CUESTION.** *El Alcalde que se asocia para formar la Mesa interina, para la elección de la definitiva, á cuatro electores, como los más ancianos y más jóvenes de los presentes; y habiendo reclamado en el acto varios electores contra tal designación, pretendiendo que en el local se hallaban otros con preferente derecho por ser más ancianos y más jóvenes que algunos de los designados, y solicitando que para la comprobación de tal derecho se consultara el libro talonario del censo electoral, contesta que no había tal censo y que ya estaba constituida la Mesa interina, ¿será responsable de la falta electoral que prevé el núm. 2.º del art. 173 de la ley Electoral de 20 de Agosto de 1870, ó cuando menos de la comprendida en el núm. 16 del propio artículo?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que el art. 52 de la ley Electoral de 1870 manda que á cada Colegio ó Sección se lleve por la Autoridad que haya de presidir y se coloque sobre la mesa el libro talonario del censo electoral que le corresponda, y el 53 establece que á la hora señalada para comenzar la elección, que, según el 50, es la de las nueve de la mañana, el Presidente ocupará su puesto é invitará á los dos más ancianos y á los dos más jóvenes de los electores presentes, entre los que sepan leer y escribir, á tomar asiento en la mesa para ejercer las funciones de Secretarios escrutadores interinos, añadiendo al terminar: «Si hubiere reclamaciones sobre la edad que declaren tener estos Secretarios,



se estará á lo que resulte del libro talonario del censo electoral:» Considerando que el núm. 2.º del art. 173 de la propia ley dice que comete la falta que castiga el precedente «el Presidente de Mesa electoral que deje de nombrar Secretarios para la Mesa interina á los electores de mayor ó menor edad á quienes corresponda, con arreglo á los artículos 53 y 54 de esta ley:» Considerando que conforme á estas disposiciones, así como desde el momento en que ante el funcionario Presidente de la Mesa interina se formula reclamación acerca del nombramiento de Secretarios en razón de la edad, deben ser designados para este cargo los electores que, sabiendo leer y escribir, aparezca del libro talonario ser los mayores y más jóvenes de los presentes, y no puede, por tanto, decirse que corresponda el nombramiento á otros sin esa necesaria é inmediata comprobación, á cuyo fin se halla el libro de censo sobre la mesa, bajo la responsabilidad de Alcalde, así también es claro que al desatender el procesado la reclamación hecha, excusándola con el pretexto de no existir allí tal libro, y al constituir la Mesa interina con Secretarios cuyo derecho no acreditaba el censo, dejó de nombrar arbitrariamente á los que correspondía, cometiendo la falta indicada; y Considerando que aun cuando la indeterminación de la edad en la sentencia obligara á suponer que los designados fueran los de mayor y menor edad, y que solamente se había infringido el precepto legal en cuanto al procedimiento, y no en cuanto al resultado, el recurso sería también improcedente, porque, fundado en el núm. 1.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, esto es, en no ser punible el hecho, el delito resultaría, constituyendo la falta prevista en el núm. 16 del mismo art. 173 aplicado, del mero hecho de haberse negado el Alcalde á dar el curso debido á la reclamación; cuya consecuencia era precisamente la comprobación documental que se negó, infracción que es uno de los modos distintos por que se comete la falta castigada, etc.» (Sentencia de 16 de Mayo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 25 de Agosto, página 93.)

## CAPÍTULO V

## Disposiciones comunes á este título.

## Art. 178.

LA ACCIÓN PARA ACUSAR POR LOS DELITOS PREVISTOS EN ESTA LEY SERÁ POPULAR Y PODRÁ EJERCITARSE HASTA DOS MESES DESPUÉS DE HABER SIDO APROBADA Ó ANULADA EL ACTA DEFINITIVAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO Ó DIPUTACIÓN PROVINCIAL, SI LA ELECCIÓN FUERE PARA CONCEJALES Ó DIPUTADOS PROVINCIALES, Y POR EL CONGRESO Ó POR EL SENADO, SI HUBIERE SIDO PARA DIPUTADOS Ó SENADORES.

EL ACUSADOR NO SE OBLIGARÁ Á PRESTAR OTRA PIANZA QUE LA DE ESTAR Á DERECHO Y SOSTENER SU ACCIÓN, HASTA QUE RECAIGA SENTENCIA EJECUTORIA, Y TODAS LAS ACTUACIONES SE ENTENDERÁN DE OFICIO Y EN PAPEL DE ESTA CLASE, SIN PERJUICIO DEL REINTEGRO EN SU DÍA POR EL ACUSADOR Ó ACUSADO QUE HUBIESEN SIDO CONDENADOS.

**QUESTION.** *La acción para acusar los delitos electorales que, según el art. 178 de la ley de 20 de Agosto de 1870, es popular, podrá ejercitarse, en defecto de querellante particular, el Representante del Ministerio público?*—En una causa por alteración de los plazos ó términos señalados para la formación y rectificación de las listas para las elecciones, en que ninguno de los que produjeron la queja se mostró parte, formuló el Fiscal escrito de querrela, y sustanciada aquélla por sus trámites, la Audiencia de Zamora, si bien apreció que el hecho constituía la falta electoral, prevista y penada en el núm. 5.º del art. 173 de la ley de 20 de Agosto de 1870, absolvió al procesado fundándose en que siendo popular la acción para perseguir los delitos y faltas electorales, no podía ejercitarla el Ministerio fiscal. Mas interpuesto por éste contra dicha sentencia recurso de casación en reivindicación de su derecho para querrellarse y acusar, aun en esta clase de delitos y faltas, independientemente de toda gestión particular ó privada, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar* al expresado recurso: «Considerando que el único problema jurídico planteado en este recurso por el Ministerio fiscal consiste en declarar si la acción para acusar por los delitos previstos y penados en la ley de 20 de Agosto de 1870 puede ó no ejercitarse, conforme á lo dispuesto en el art. 178 de la misma, dicho Ministerio: Considerando que ni la ciencia ni la ley reconocen otra distinción en la acción penal, en cuanto á su ejercicio se refiere, que la de pública, cuando lo sea el delito de que nace, y privada siempre que se dirija á perseguir alguno de esta clase; y lo que en los ciudadanos que tienen capacidad legal es el ejercicio de un derecho, tratándose



de un delito público, es en el Ministerio fiscal el cumplimiento de un deber: Considerando que la acción que da el art. 178 de la ley Electoral á todos los ciudadanos para acusar por los delitos previstos en la misma no la podía negar al Ministerio fiscal tratándose de delitos públicos, y llamando á la acción *popular*, adjetivo que tiene aquí el mismo significado y valor técnico que el de pública, de que se vale el art. 101 de la ley de Enjuiciamiento criminal: Considerando que la inteligencia que da la Audiencia de lo criminal de Zamora al citado art. 178 de la ley de 20 de Agosto de 1870 pugna contra la letra y sentido jurídico del mismo, porque tratándose de delitos públicos, pública habría de ser la acusación, aunque no lo dijera, como clara y expresamente lo dice el repetido art. 178, y teniendo este carácter, es legalmente imposible negar su ejercicio al Ministerio fiscal, cuya principal misión es procurar que no queden impunes los delitos públicos: Considerando que según los hechos que la sentencia recurrida declara probados, D. Crisanto Bragado, en su carácter de Alcalde del pueblo de Bustillo del Oro, cometió la falta electoral prevista en el núm. 6.º del art. 173 de repetida ley Electoral; y al no aplicarle la pena señalada en el 172, la Audiencia de lo criminal de Zamora ha incurrido en el error de derecho ó infracciones legales que sirven de fundamento al recurso entablado por el Ministerio fiscal, etc.» (Sentencia de 28 de Enero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 7 de Mayo, páginas 195 y 196.)—Igual doctrina se consigna en otra Sentencia posterior: «Considerando que la acción para perseguir las infracciones cometidas en las elecciones municipales y á que se refiere la ley de 20 de Agosto de 1870 es popular, conforme al art. 178 de la misma, y por consiguiente no puede dudarse que si cualquiera individuo sin excepción está facultado para incoar la oportuna querrela, con doble razón ha de poder hacerlo el Ministerio fiscal, quien por su oficio y en cumplimiento de lo que dispone el art. 105 de la ley de Enjuiciamiento criminal, tiene obligación de perseguir los delitos públicos, como lo son en verdad aquellos que la expresada ley Electoral comprende, ya que su comisión afecta á la certeza y legitimidad de una institución social y á los intereses generales que con la misma se amparan y defienden, etc.» (Sentencia de 9 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 5 de Junio, página 283.)

Véase además la Sentencia del propio Tribunal Supremo de 24 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 16 de Junio, página 291.

# LEY ELECTORAL PARA DIPUTADOS A CORTES

de 28 de Diciembre de 1878.

## TÍTULO VI

DE LA SANCIÓN PENAL.

### CAPÍTULO I

De las falsedades.

#### Art. 123.

TODA ALTERACIÓN O OMISIÓN INTENCIONADA EN LOS LIBROS, REGISTROS, ACTAS, CERTIFICACIONES, TESTIMONIOS Ó DOCUMENTOS DE CUALQUIER GÉNERO QUE SIRVAN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ELECTORALES Y REALIZADA PARA IMPEDIR Ó DIFICULTAR SU PRÁCTICA Y VARIAR Ó OSCURECER LA VERDAD DE SUS RESULTADOS, CONSTITUYE EL DELITO DE FALSEDAD EN MATERIA ELECTORAL Y SERÁ CASTIGADA CON LAS PENAS DE PRISIÓN MAYOR Y MULTA DE 100 Á 5.000 PESETAS.

**CUESTION I.** *Los electores que con arreglo al art. 65 de la ley Electoral de 28 de Diciembre de 1878 garantizan con sus firmas la autenticidad de las contenidas en el pliego de propuesta de interventores, serán responsables del delito de falsedad, previsto y penado en el art. 123 de la mencionada ley, si resultan falsas algunas de dichas firmas del pliego, ya por no saber escribir algunos de los electores, ya por negar otros que lo verificasen?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que por consecuencia de haber los procesados D. Ramón Mañes y D. Pascual Roca respondido, con arreglo á lo prescripto en el art. 65 de la ley Electoral de 28 de Diciembre de 1878, de la autenticidad de las firmas contenidas en el pliego de propuesta de interventores para la Mesa que en su día debía constituirse en la sección de Alcalá de Chisvert para la elección de un Diputado á Cortes que había de celebrarse el 4 de Abril de 1886, se computaron tantos votos como firmas contenía la expresada propuesta: Considerando que habiendo resultado falsa la mitad próximamente de las refe-



ridas firmas, ya por no saber escribir algunos electores que aparecían haberlo hecho, ya también por negar otros que lo verificasen, no reconociendo éstos las supuestas firmas, es evidente que los procesados han cometido el delito de falsedad, previsto y penado en el art. 123 de la mencionada ley Electoral; y si no se hallan comprendidos en ésta, lo estarían en el núm. 4.º del siguiente, 124; y consiguientemente, el Tribunal sentenciador, al calificar y penar de esta manera el hecho procesal, no ha incurrido en el error de derecho ni infringido las disposiciones legales que se le atribuyen en el recurso, etc.» (Sentencia de 11 de Febrero de 1888, publicada en la *Gaceta* de 10 de Mayo, páginas 219 y 220.)

**CUESTION II.** *¿Serán responsables, por imprudencia temeraria, del delito de falsedad electoral comprendido en el art. 123 de la ley de 28 de Diciembre de 1878, los individuos de la Comisión inspectora del censo que sin cotejarlas ni confrontarlas autorizan con su firma las listas formadas por un escribiente de la secretaría municipal, en las que se incluyó á varios individuos que no figuraban en las publicadas en el año anterior, ni se les había declarado previamente y por los trámites de la ley el derecho electoral, y se excluyó en cambio á un vecino que tenía este derecho, por lo que votaron aquellos y dejó éste de votar en la siguiente elección de Diputados á Cortes?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que, según los hechos que como probados sirven de fundamento al fallo reclamado, los recurrentes, como individuos de la Comisión inspectora del censo electoral de Luarca, formaron las listas, cometiendo en ellas la evidente falsedad de incluir á doce individuos que ni estaban en las publicadas en el año anterior, ni se les había declarado previamente y por los trámites de la ley el derecho electoral, excluyendo, en cambio, de las listas á un vecino que tenía este derecho: Considerando que aun cuando el mero hecho de hacer inclusiones ó exclusiones en las primeras listas destinadas á ser justificadas por virtud de reclamaciones de quien tenga derecho á pedir las no constituye delito si no aparecen determinadas por un hecho justificable con arreglo á las prescripciones del Código, en el caso del presente recurso resulta perfectamente determinado el hecho punible, por la imprudencia que cometieron los penados al autorizar las listas sin cotejarlas ni comprobarlas, imprudencia tanto más temeraria por haber desaparecido los antecedentes necesarios que facilitarían al escribiente el encargo que se le confió; esto aparte de no explicarse de ninguna manera cómo pudo hacer dicho escribiente sin malicia las inclusiones y exclusiones que hizo, etc.» (Sentencia de 16 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 30 de Junio, páginas 312 y 313.)

## Art. 124... 1.º

SERÁN REOS DEL DELITO DE FALSEDAD EN MATERIA ELECTORAL, ADEMÁS DE AQUELLOS QUE COMETAN ACTOS QUE LOS TRIBUNALES CONSIDEREN COMPRENDIDOS EN LA ANTERIOR DEFINICIÓN:

1.º LOS FUNCIONARIOS Ó PARTICULARES QUE CON EL FIN DE DAR Ó QUITAR EL DERECHO ELECTORAL ALTEREN LAS LISTAS, LOS ASIENTOS DEL LIBRO DEL CENSO Ó SUS MODIFICACIONES, Ó CERTIFIQUEN INEXACTAMENTE HOMENajes, TÍTULOS Y CUALIDADES EN QUE SE FUNDE EL DERECHO Ó LA INCAPACIDAD ELECTORAL, Y LOS INTERESADOS Ó SUS REPRESENTANTES QUE CON IGUALES FINES FALTEN Á SABIENDAS Á LA VERDAD DE SUS ACTOS, PETICIONES Ó DECLARACIONES.

**CUESTION.** *El Secretario de Ayuntamiento que habiendo sido pedido por un aspirante á la diputación á Cortes certificación expresa de los individuos que teniendo capacidad como contribuyentes para votar en la elección no estuvieran inscritos en las listas, á fin de poder entablar ante el Juzgado la correspondiente reclamación de inclusión, certifica que son vecinos y contribuyentes de la localidad por cuota mayor de 25 pesetas un número determinado de individuos, algunos de los cuales no están vecindados en el pueblo, y otros pagan menor cuota de contribución que la expresada, ¿podrá eximirse de la pena del delito de falsedad electoral, comprendido en el art. 124, núm. 1.º de la ley de 28 de Diciembre de 1878 y castigado en el 123: 1.º, porque castigando aquel artículo la falsedad que se cometa para dar ó quitar el derecho electoral, la antedicha certificación no podía producir ese resultado por carecer del V.º B.º del Alcalde, según lo dispuesto en el art. 125, núm. 7.º de la ley Municipal; 2.º, porque correspondiendo á las oficinas de Hacienda el certificar sobre lo relativo á contribuciones, la expedida por el Secretario no podía dar ni quitar el derecho electoral; y 3.º, porque para que tengan aplicación los artículos 123 y 124, es preciso que por medio de la certificación se haya logrado la declaración del derecho electoral, lo que no sucedió en el caso de que se trata?—A pesar de estas consideraciones expuestas en casación por la defensa del recurrente, el Tribunal Supremo declaró no haber lugar al recurso interpuesto contra la sentencia condenatoria dictada por la Sala de lo criminal de la Audiencia de Oviedo: «Considerando en orden al primero de los motivos de casación alegados que, tuvieran ó no el V.º B.º del Alcalde las certificaciones que han sido materia del juicio, este hecho, sobre el cual nada dice la sentencia reclamada, no modifica en poco ni en mucho la falsedad de aquellos documentos, que se presentaron al Juzgado de Avilés como fundamento de la demanda de inclusión en el censo electoral de los individuos que constan de las mismas: Considerando respecto al segundo de los motivos alegados que aparte de que los certificados sobre lo que de los amillaramientos resulte lo mismo se pueden expedir por las oficinas de Hacienda*



de provincia que por las Secretarías de Ayuntamientos, que también guardan aquellos documentos, no se trata aquí de la validez y eficacia de aquellas certificaciones, sino de que un funcionario público, cual es el Secretario del Ayuntamiento, con el fin de dar el derecho electoral á quienes no lo tenían, certificó inexactamente sobre bienes y condiciones en que fundasen el derecho ó capacidad electoral; Considerando que las falsedades que califica y pena la sentencia recurrida son sustanciales, como que ellas iban encaminadas á dar el derecho electoral á quienes por la ley carecían de las condiciones necesarias para obtenerlo, y en este concepto no tiene apoyo legal el tercero de los motivos alegados; Considerando que basta para desechar el cuarto de los motivos del recurso tener presente que no hay necesidad de que por medio de la certificación falsa se haya logrado la declaración del derecho electoral, para que tengan aplicación los artículos 123 y 124 de la ley Electoral, como pretende el recurrente, porque claramente dice el art. 124 que son reos de delito de falsedad en materia electoral, penado en el 123, los funcionarios ó particulares que con el fin de dar ó quitar el derecho electoral ejecuten cualquiera de los hechos que en el mismo se expresan, no importando nada para la calificación y penalidad del delito que se haya logrado ó no el fin objetivo del mismo, etc.» (Sentencia de 19 de Marzo de 1888, publicada en la *Gaceta* de 18 de Julio, páginas 3 y 4.)

#### Art. 124... 2.º

LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES INSPECTORAS QUE HABIENDO RECIBIDO LOS AVISOS PARA ANOTAR LAS VARIACIONES EN LAS CASILLAS DEL CENSO DE SU DISTRITO DEJAREN INTENCIONADAMENTE DE ANOTARLAS.

**CUESTION.** *La Comisión inspectora del censo que habiendo recibido con posterioridad al día 1.º y antes del 10 de Diciembre, por conducto del Gobernador civil de la provincia, varios expedientes con certificación de sentencia firme sobre inclusión y exclusión respectivamente de varios electores, resuelve en sus sesiones del 10 y 30 del expresado mes no hacer las rectificaciones en el censo relativas á dichos testimonios de sentencias, reservándolas para la operación del 1.º de igual mes de Diciembre del año siguiente, será responsable del delito de falsedad electoral, comprendida en el núm. 2.º del art. 124 de la ley de 28 de Diciembre de 1878?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la negativa: «Considerando que, como base y fundamento de la operación para la rectificación de las listas electorales, prescribe el art. 55 de la precitada ley que el día 1.º de Diciembre de cada año se publiquen por edictos en todos los Ayuntamientos de cada sección, y se inserten en el *Boletín Oficial* de la provincia las anotaciones de alta y baja del censo que se hubiesen hecho durante el año, con arreglo al artículo 54, para todo el distrito: cuyo precepto demuestra, por modo claro, que los datos ó antecedentes que no existieren el

día 1.º de Diciembre para hacerlos públicos de la manera que expresa el mencionado art. 55, no deben estimarse en las operaciones sucesivas, sino reservarlos para la rectificación del año siguiente; y esto mismo halla confirmación en la letra y espíritu del art. 56, al establecer que las reclamaciones que se hicieren por cualquier elector inscrito en las listas vigentes, ó por los interesados en las anotaciones de alta y baja publicadas, contra la exactitud de las mismas, habrá de admitir hasta el día 10 del referido mes la Comisión inspectora, y devolverlas con vista de sus antecedentes en la Secretaría; deduciéndose legal y lógicamente de todo lo expuesto que la publicación el 1.º de Diciembre de las anotaciones de alta y baja que se hubiesen hecho durante el año es el elemento primordial é indispensable de las operaciones para la rectificación del censo electoral, y que en este día principia el período para rectificar las inexactitudes cometidas en dichas anotaciones publicadas, y que no pueden en modo alguno hacerse después nuevas anotaciones ni adicionar las publicadas: Considerando que habiendo llegado á poder de la Comisión inspectora del distrito de Almadén, por conducto del Gobernador civil de la provincia, los cinco expedientes con sentencia firme sobre inclusión y exclusión respectivamente de varios electores, con posterioridad al día 1.º y antes del 10 de Diciembre de 1875, dicha Comisión, al resolver en sus sesiones del 10 y 30 del expresado mes que ya por entonces carecía de facultades para hacer las rectificaciones con relación á los cinco testimonios de sentencias, y que se tuvieran éstos presentes para la operación de 1.º de igual mes del año 1876, se ajustó á las prescripciones de la ley Electoral, y cumplió en forma debida y como podía hacerlo las ejecutorias y órdenes judiciales, etc.» (Sentencia de 11 de Julio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 26 de Octubre, páginas 244 y 245.)

#### Art. 124... 4.º

LOS QUE ALTERABEN LAS FIRMAS Ó SELLOS Ó VERIFICASEN CUALQUIERA MODIFICACIÓN Ó MANEJO FRAUDULENTO EN LAS PROPUESTAS DE INTERVENTORES, APERTURA DE SUS PLIEGOS, ACTAS DE SU CONTENIDO, DESIGNACIÓN DE SUPLENTE Y DEMÁS OPERACIONES RELATIVAS Á LA CONSTITUCIÓN DEL COLEGIO ELECTORAL.

**CUESTION.** *¿Constituirá el delito de falsedad electoral, comprendido en el núm. 4.º del art. 124 de la ley de 28 de Diciembre de 1878, la sustitución fraudulenta de uno ó más de los Interventores nombrados por la Comisión inspectora del censo, bajo el falso pretexto de no haberse presentado oportunamente, sin embargo de haber sido los primeros que se presentaron en el local designado para la elección al abrirse la puerta del mismo?—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que, según el núm. 4.º del art. 124 de la ley de 28 de Diciembre de 1878, son reos del delito de falsedad electoral los que verificasen cualquiera modificación ó manejo fraudulento en las operaciones relativas*



A la constitución del colegio: Considerando que incurrieron en este caso justiciable los recurrentes al sustituir fraudulentamente dos de los Interventores nombrados, bajo el falso pretexto de no haberse presentado oportunamente, sin embargo de haber sido los primeros que lo verificaron al ser abierta la puerta del local designado para la elección: Considerando que las operaciones concernientes á la sustitución de Interventores son complementarias y relativas á la constitución del colegio electoral, y que si no se practican con arreglo á la ley, usando de medios fraudulentos en la designación de suplentes, se incurre en responsabilidad penal, conforme al expresado caso 4.º del art. 124: Considerando que los casos enumerados en este artículo son específicos, pero sin quedar por ellos afectada la disposición general del art. 123, que castiga con prisión mayor y multa de 100 á 5.000 pesetas toda alteración ó omisión intencionadas en los libros, registros, actas, certificaciones, testimonios ó documentos que sirvan para el ejercicio de los derechos electorales, y realizada *para impedir ó dificultar su práctica y variar ó oscurecer la verdad de sus resultados*: Considerando que si los recurrentes no hubiesen delinquido en la forma prevista específicamente, serían responsables conforme á las disposiciones generales mencionadas, porque alteraron la verdad de los hechos, consignando en el acta que no se habían presentado con oportunidad los querellantes, cuyo derecho en materia electoral, como Interventores, fué impedido por medio de aquella falsedad: Considerando, en su consecuencia, que los recurrentes, ya en términos generales, ya en caso concreto, son reos del delito de falsedad electoral, etc.» (Sentencia de 24 de Octubre de 1887, publicada en la *Gaceta* de 24 de Noviembre, páginas 354 y 355.)

## CAPÍTULO II

### De las coacciones.

#### Art. 125.

TODO ACTO, OMISIÓN Ó MANIFESTACIÓN, ASÍ DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS COMO DE PARTICULARES, QUE TENGAN POR OBJETO COHIBIR Ó EJERCER PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES PARA QUE USEN DE SU DERECHO Ó LE ABANDONEN CONTRA EL IMPULSO LIBRE DE SU VOLUNTAD, CONSTITUYE DELITO DE COACCIÓN ELECTORAL, SIEMPRE QUE Á JUICIO Y CONCIENCIA DEL TRIBUNAL QUE DE ÉL HAYA DE ENTENDER CONCURRA AL MENOS UNA DE LAS DOS CIRCUNSTANCIAS SIGUIENTES: PRIMERA, QUE EL ACTO, OMISIÓN Ó MANIFESTACIÓN SEAN CONTRARIOS Á LA LEY Ó REGLAMENTO; SEGUNDA, QUE EL ACTO, OMISIÓN Ó MANIFESTACIÓN, AUNQUE SEAN LICITOS EN SÍ MISMOS, SE HAYAN REALIZADO CON EL OBJETO PRINCIPAL Y DETERMINANTE DE COHIBIR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ELECTORALES, DE SUERTE QUE DE NO EXISTIR ESE FIN EL ACTOR NO LO HUBIERA EJECUTADO.

**CUESTION.** *Aun cuando el acto ó manifestación ejecutado sea lícito en sí, constituirá el delito de coacción electoral si en*

*objeto principal y determinante fue cohibir ó ejercer presión sobre los electores?—¿Será por tanto responsable de dicho delito el que ofrece á ciertos electores dinero y otras especies para que voten una candidatura determinada?—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que el delito de coacción electoral que castiga el art. 126 de la ley de 28 de Diciembre de 1878 se constituye, según el artículo precedente á éste, por todo acto ó manifestación que tenga por objeto cohibir ó ejercer presión sobre los electores para que usen de su derecho contra el impulso libre de su voluntad, siempre que á juicio del Tribunal competente el acto ó manifestación sean contrarios á la ley, ó aunque sean lícitos en sí mismos, se realicen con el objeto principal y determinante de cohibir el ejercicio de los derechos electorales, de suerte que de no existir ese fin el actor no lo hubiera ejecutado, y según el número 5.º del art. 127 de la propia ley cometen también idéntico delito, aunque no conste ni aparezca la intención de ejercer presión sobre los electores; los que por medio de soborno intenten adquirir votos en favor de un candidato, etc.» (Sentencia de 14 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 4 de Marzo de 1889, páginas 34 y 35.)*

### Art. 127... 5.º

COMETEN DELITO DE COACCIÓN ELECTORAL, AUNQUE NO CONSTE NI APAREZCA LA INTENCIÓN DE EJERCER PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES:

5.º LOS QUE POR MEDIO DE SOBORNO INTENTEN ADQUIRIR VOTOS Á FAVOR DE UN CANDIDATO; LOS ELECTORES QUE RECIBAN DINERO, DÁDIVAS Ó REMUNERACIONES DE CUALQUIERA CLASE, Y LOS QUE DIRECTA Ó INDIRECTAMENTE EXCITAREN Á LA EMBRIAGUEZ Á LOS ELECTORES EN LOS DÍAS EN QUE HAYAN DE HACER USO DE SUS DERECHOS.

**QUESTION.** *El ofrecimiento de dádivas á electores para que voten cierta candidatura, ¿constituirá el delito consumado que prevé el art. 127, núm. 5.º, en relación con el 126 de la ley de 28 de Diciembre de 1878, aun cuando no haya llegado á entregarse la dádiva?—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que la impugnación de la sentencia objeto del recurso, establecida aquélla en el concepto de no haberse consumado el delito procesal que ésta incluye en la citada disposición del artículo 127, no es procedente, porque consistiendo la consumación de todo delito en la realidad del hecho material que le constituye, el grado de ejecución á que asciendan individualmente los medios dirigidos al éxito de la acción es indiferente, siempre que este éxito se logre por virtud de los empleados, á condición de que sea de la naturaleza de los previstos en la ley para integrar el mismo delito; y constituyéndose el de que se trata por el intento de adquirir votos por soborno, intento que si en la esfera doctrinal ofrece los caracteres propios de la tentativa, en la del*



derecho positivo la expresa determinación de la ley le confiere los de delito acabado, quedó perfecto y consumado consiguientemente desde que se intentó tal adquisición, poniendo al servicio del propósito el estímulo del lucro, que es en esta circunstancia el soborno, ó sea la dádiva, siquiera ésta no llegara á ser entregada, porque lo mismo cuando pasa á mano del elector que cuando sólo es ofrecida, hay verdadero soborno realizado ó intentado, acerca de lo cual la ley no distingue en su expresión genérica y comprensiva para influir en el ánimo de determinada persona, causando en ella la coacción que por este carácter, y con este nombre jurídico y no con otro, la ley castiga: Considerando que aun cuando el delito ejecutado debiera estimarse mera tentativa del previsto en el núm. 5.º del art. 127, castigado con la sanción señalada en el 126, en el supuesto de no constar ni aparecer la intención de ejercer presión en el ánimo de los electores, el recurso tampoco sería procedente, porque los actos ejecutados por el procesado no podrían dejar de calificarse como delito consumado de coacción electoral, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 125, y de punirse consiguientemente con la misma sanción con que lo han sido, que es la del art. 126, por evidenciar aquellos, tal como se consignan y relacionan en la sentencia, que el recurrente al ofrecer dinero y grano á determinados electores se propuso por este medio cohibir y ejercer presión sobre ellos á fin de que emitieran su voto en favor de la persona que les indicó; oferta que hay mérito y razón suficiente para afirmar que tuvo tal objeto, y que por sí sola es sin duda un acto y una manifestación que hace al recurrente responsable del delito de coacción electoral en la más principal y característica de sus realidades, etc.» (Sentencia de 14 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 4 de Marzo de 1889, páginas 34 y 55.)

### CAPÍTULO III

#### De las infracciones de la ley electoral.

##### Art. 128.

TODA FALTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y FORMALIDADES QUE ESTA LEY PRESCRIBE Á LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, PRESIDENTES, SECRETARIOS É INTERVENTORES DE LAS MESAS, INDIVIDUOS DE LA COMISIÓN DEL CENSO Y DEMÁS PERSONAS Á QUIENES SE CONFÍE ALGUNA FUNCIÓN RELACIONADA CON EL EJERCICIO DEL DERECHO ELECTORAL, QUE NO LLEGUE Á CONSTITUIR DELITOS DE LOS ENUMERADOS EN LOS ARTÍCULOS ANTERIORES, SERÁ CASTIGADA CON LA PENA DE ARRESTO Y MULTA DE 50 Á 5.000 PESETAS.

**CUESTION 1.** *El Alcalde presidente de una Mesa electoral que no habiendo recibido la certificación del nombramiento de Interventores, invita en alta voz á los que tengan la credencial de ta-*

les que la exhiban y tomen asiento, verificándolo tres de aquéllos; y como al cuarto le faltase la credencial, nombra á otro elector para sustituirle, constituyendo así la Mesa, será responsable de la falta comprendida en el art. 128 de la ley Electoral de 28 de Diciembre de 1878?—Así lo estimó la Audiencia de lo criminal de Seo de Urgel, que lo condenó á dos meses y un día de arresto mayor, accesoria, multa de 50 pesetas y costas. Mas interpuesto contra dicha sentencia recurso de casación por la defensa del procesado, citando como infringido dicho artículo por aplicación indebida, declaró el Tribunal Supremo haber lugar á él: «Considerando que para que el Presidente de una Mesa electoral pueda completar el número de los Interventores necesarios para formarla, nombrándolos libremente entre los electores presentes, es indispensable, según se determina en el art. 78 de la ley Electoral de 28 de Diciembre de 1878, que falten todos ó la mayor parte de los proclamados por la Comisión inspectora del censo electoral; Considerando que al verificar el recurrente como Presidente de la Mesa electoral de la Sección de Fornols el nombramiento de un Interventor entre los electores presentes, á fin de completar el número que era necesario para la constitución de la misma en el momento en que iba á verificarse la elección, ajustóse en ello estrictamente á las facultades que le concede el artículo 78 de la ley Electoral antes citada; pues no habiéndose presentado debidamente más que tres, en vez al menos de cuatro que constituían la mayor parte de los seis Interventores designados para dicha Sección por la Comisión inspectora del censo, es visto que en todo ello obró precisamente dentro del círculo de las atribuciones que le concede el referido art. 78, sin haberse extralimitado en lo más mínimo ni hacerse reo de la falta determinada en el art. 128 de la misma ley, como con error manifestó se ha supuesto por el Tribunal sentenciador, que al aplicar indebidamente ese artículo lo ha infringido, caso de casación previsto en el núm. 1.º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, etc.» (Sentencia de 16 de Marzo de 1888, publicada en la Gaceta de 30 de Junio, páginas 311 y 312.)

**CUESTION II.** *El Presidente é Interventores de una Mesa electoral que dejan de remitir al Gobernador de la provincia el duplicado de las copias de las listas numeradas de los electores que han votado y del resumen de los votos obtenidos por los candidatos, siendo preciso para obtenerlos, después de una orden por escrito de dicha Autoridad, no cumplido, que los recogiera la Guardia civil, serán responsables, todos por igual, de la falta comprendida en el art. 128 de la ley Electoral de 28 de Diciembre de 1878?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que el artículo 92 de la ley Electoral de 28 de Diciembre de 1878 previene que antes de las diez de la mañana del día inmediato siguiente al de la votación se expondrán al público fuera de las puertas del Colegio electoral copias de las listas numeradas de los electores que hubiesen votado y del resumen de los votos obtenidos por los candidatos, y que estas copias serán certificadas por el Presidente y los Interventores de la Mesa, y un dupli-



cado de las mismas será remitido en el propio día al Gobernador de la provincia, quien mandará publicarlas inmediatamente por suplemento en el *Boletín Oficial*: Considerando que establecida la sentencia reclamada sobre el supuesto ya intalterable, de hecho, de que el duplicado á que se refiere el expresado artículo no se remitió al Gobernador de la provincia en el día que allí se manda, ó sea en el siguiente al de la votación, puesto que esta Autoridad, para obtenerle, después de ineffectual orden escrita, hubo de hacerle recoger por la Guardia civil, tal emisión, que el Tribunal á quo dice voluntaria, en contra de la exculpación no probada de los acusados, es imputable por igual al Presidente y á los Interventores de la Mesa electoral; porque al primero y á éstos, sin distinción del respectivo carácter, impone la ley idéntico deber en esta parte, como ha declarado esta Sala en casos semejantes, estimando que el precepto, dirigido á evitar posibles alteraciones de la verdad del sufragio, comprende á todos por su generalidad, opuesta precisamente á la determinación con que en otros individualiza y circunscribe las obligaciones: Considerando que según el art. 128 de dicha ley, «toda falta en el cumplimiento de las obligaciones y formalidades que esta ley prescribe á los empleados públicos, Presidentes, Secretarios ó Interventores de las Mesas, individuos de la Comisión del censo y demás personas á quienes se confía alguna función relacionada con el ejercicio del derecho electoral, que no llegue á constituir delito de los enumerados en los artículos anteriores, será castigada con la pena de arresto y multa de 50 á 500 pesetas.» Considerando que la infracción del citado art. 92, no enumerada especialmente en ningún otro artículo de la misma ley, se halla comprendida en la provisión más general del precedentemente transcrito, comprensiva de toda falta á las obligaciones impuestas á los Presidentes y á los Interventores de las Mesas electorales; y Considerando, por tanto, que la Audiencia sentenciadora no ha cometido las infracciones legales ni los errores de derecho que se le atribuyen, etc.» (Sentencia de 19 de Junio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 28 de Septiembre, páginas 195 y 196.)

**CUESTION III.** *¿Serán responsables de la falta definida en el art. 128 de la ley Electoral de 28 de Diciembre de 1878 los individuos de la Mesa que consienten que anoten los nombres de los votantes dos personas ajenas á ella, y que se instalan para verificar la elección en local distinto de aquel en que se procedió á la apertura de los pliegos del nombramiento de Interventores?*—No lo estimó así la Audiencia de lo criminal de Pontevedra, que absolvió á los procesados por no constituir delito el hecho. Mas interpuesto recurso de casación contra dicha sentencia por los querellantes particulares por infracción, entre otros, del art. 128 de la ley Electoral citada, declaró el Tribunal Supremo haber lugar al expresado recurso: «Considerando que el art. 128 de la propia ley estima justiciable toda falta cometida en el cumplimiento de las obligaciones y formalidades prescritas á los empleados públicos, Presidentes, Secretarios ó Interventores de las Mesas, individuos de la Comisión del Censo y demás personas á quienes se

confía alguna función relacionada con el ejercicio del derecho electoral: Considerando que en este concepto señalan los recurrentes como faltas y congruentes infracciones: primera, la del artículo 79, por haber permitido á dos escribientes anotar los nombres de los electores; segunda, la del art. 69, por impedir á los dos Interventores que se presentaron con retraso el ejercicio de su cargo, sin embargo de autorizar la ley la asistencia del funcionario de esta clase, y tercera, la de haber variado para la elección el local ó dependencia del edificio designado para las operaciones electorales: Considerando que si bien no puede estimarse falta la exclusión de los dos Interventores que no se presentaron con oportunidad, pues el art. 69 se refiere al número de los propuestos y nombrados, y no al de los que deban concurrir al acto de la elección, constituyen indudablemente infracción de la ley Electoral los hechos de haber anotado los nombres de los votantes dos personas que no formaban parte de la Mesa, y de haber variado el local de la elección, porque el art. 79 previene que dos de los Interventores anotarán en lista duplicada los nombres de los votantes, y el art. 66 que la Comisión inspectora del Censo se constituya en el local destinado para la instalación del Colegio, ó sea en la misma dependencia ó estancia del edificio previamente designado por el Ayuntamiento, y el art. 78 prescribe que la Mesa electoral se instale en el local correspondiente, que indudablemente es el mismo en que se procedió á la apertura de los pliegos del nombramiento de Interventores: Considerando, por lo expuesto, que los cuatro procesados D. José Gil López, D. Juan Antonio Rodríguez Sánchez, D. Vicente Reinaldo y don Antonio Rodríguez Suárez, que funcionaron como Interventores, faltaron al cumplimiento de las obligaciones y formalidades que prescribe la ley Electoral, consintiendo y autorizando la infracción de sus artículos 79 y 66: Considerando que el Tribunal sentenciador ha incurrido en error de derecho no calificando y penando como falta electoral hechos probados que la constituyen, etc.» (Sentencia de 2 de Julio de 1888, publicada en la *Gaceta* de 8 de Septiembre, páginas 141 y 142.)

### Art. 129... 3.º

SE ENTIENDE QUE CONETEN TAMBIÉN FALTA EN EL EJERCICIO DEL DERECHO ELECTORAL:

- 3.º LOS QUE NEGAREN LA ADMISIÓN DE LOS RECURSOS Y PROTESTAS QUE SE FORMULEN, CUALQUIERA QUE SEA SU ÍNDOLE, Ó DEJABEN DE PROVEER AL QUE PRESENTE ALGUNA DE ESAS RECLAMACIONES DEL OPORTUNO RECIBO DE ELLA, Ó SE RESISTIEREN Á INSERTAR EN EL ACTA TODAS LAS DUDAS, RECLAMACIONES Y PROTESTAS MOTIVADAS, YA SE HAYAN HECHO DE PALABRA Ó POR ESCRITO.

**CUESTION.** *¿Incurrida en la falta electoral prevista en el núm. 3.º del art. 129 de la ley de 28 de Diciembre de 1878 los Se-*



*cretarios escrutadores que se niegan á admitir, devolviéndola, una protesta por escrito presentada por varios electores de la Sección?—¿Podrá servirles de exculpación la razón que alegaran de que no quisieron recibirla en aquel momento por no interrumpir la votación empezada?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa sobre el primer punto y la negativa en cuanto al segundo: «Considerando que se entiende que cometen también falta contra el ejercicio del derecho electoral, conforme á lo dispuesto en el art. 129, párrafo tercero, de la ley de 28 de Diciembre de 1878, los que negaren la admisión de los recursos y protestas que se formulen, cualquiera que sea su índole, ó dejaren de facilitar recibo al que presente alguna de esas reclamaciones, ó se resistieren á insertar en el acta todas las dudas, reclamaciones y protestas motivadas, ya se hayan hecho por escrito ó de palabra: Considerando que es un hecho declarado probado en la sentencia que el recurrente, como Secretario escrutador que era de la Mesa electoral de la Sección de Marañón, en unión de los demás Secretarios, se negaron á admitir y devolvieron una protesta que por escrito presentaron varios electores de la Sección, cuyo hecho constituye la falta contra el ejercicio del derecho electoral, que define el párrafo tercero del art. 129, y castiga el 128 de la citada ley, sin que pueda servir de exculpación la razón dada por los Secretarios de no interrumpir la votación empezada, porque además de ser absoluto el precepto de la ley, que no consiente en ningún caso, bajo ningún pretexto ni en ningún momento, el desechar las protestas y recursos que se formulen, con la admisión de la presentada por escrito ningún entorpecimiento sufría la votación con que la Mesa la hubiera recogido, para después hacer mención de ella en el acta ó discutirla: Considerando que siendo ineludible la obligación que tienen las Mesas electorales de admitir las protestas fundadas de los electores, es improcedente también el segundo motivo de casación, fundado en la exención de responsabilidad que determinan los casos 10, 11 y 13 del art. 8.<sup>o</sup> del Código penal, porque ni el recurrente obró al ejecutar el delito por miedo insuperable de un mal mayor, ni en cumplimiento de un deber, ó en ejercicio legítimo de un derecho, antes, por el contrario, faltó al deber que su cargo le imponía, ni tampoco incurrió en omisión alguna por hallarse impedido por causa legítima é insuperable, etc.» (Sentencia de 11 de Enero de 1888, publicada en la Gaceta de 3 de Mayo, páginas 160 y 161.)

# LEY MUNICIPAL DE 2 DE OCTUBRE DE 1877

## TÍTULO. V

RECURSOS Y RESPONSABILIDADES QUE NACEN DE LOS ACTOS  
DE LOS AYUNTAMIENTOS

### CAPÍTULO II

**Dependencia y responsabilidad de los Concejales  
y sus agentes.**

#### Art. 190.

La suspensión gubernativa de los Regidores no excederá de cincuenta días.

Pasado este plazo sin que se hubiese mandado proceder á la formación de causa, volverán los suspensos de hecho y derecho al ejercicio de sus funciones.

Los que los hubiesen reemplazados serán considerados como culpables de usurpación de atribuciones si ocho días después de espirado aquel plazo y de requeridos para cesar por los Concejales propietarios, continuaran desempeñando funciones municipales.

**CUESTION.** *Para que el requerimiento de los Concejales propietarios á los interinos surta sus efectos según el art. 190 de la ley Municipal, será menester que se haga personalmente, ó bastará que los segundos tengan conocimiento de cualquiera manera de las gestiones que hayan practicado los segundos para ser reintegrados en sus cargos?*—El Tribunal Supremo ha declarado que no es preciso ese requerimiento personal: «Considerando que según la inteligencia y espíritu del párrafo tercero del art. 190 de la ley Municipal, el requerimiento de los Concejales propietarios á los interinos para que éstos cesen en sus funciones no se limita á que sea hecho personalmente, sino que basta que de cualquier manera tengan conocimiento los expresados Concejales interinos de los actos ó gestiones practicadas por los suspensos



como manifestación de su deseo para que aquéllos cesen en sus funciones: Considerando que de la apreciación de los hechos consignados en la sentencia reclamada se infiere que el recurrente Pedro Vega Pérez tuvo noticia del requerimiento hecho á don Melchor Martín, como Alcalde y representante á la sazón del Ayuntamiento Interino, para que éste cesara en sus funciones, cuyo extremo no niega el expresado Pedro Vega, limitándose á manifestar que no fué requerido por los Concejales suspensos para cesar en sus cargos, etc.» (Sentencia de 21 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 10 de Marzo de 1889, páginas 46 y 47.)

Véanse además las *Cuestiones* todas del art. 385 del Código, páginas 297 á 300.

### Art. 198.

Además de los recursos administrativos establecidos por la presente ley, cualquier vecino ó hacendado del pueblo tiene acción ante los Tribunales de justicia para denunciar y perseguir criminalmente á los Alcaldes, Concejales y asociados, siempre que éstos en el establecimiento, distribución y recaudación de los arbitrios ó impuestos se hayan hecho culpables de fraude ó de exacciones ilegales, y muy especialmente en los casos siguientes:

1.º Si cualquiera de los Concejales y asociados, en el año que le son, pagan una cuota menor por repartimiento, impuesto ó licencia, comparada con el año anterior al desempeño de su cargo, siendo igual ó superior la cantidad total repartible, á menos de probar que han sufrido en su riqueza disminución bastante á justificar aquella baja.

2.º Cuando el producto total de los repartimientos y arbitrios distribuidos excediese de la cantidad presupuesta y 6 por 100 de recargo, autorizado por la regla 8.ª, art. 138 de esta ley.

3.º Cuando las cuotas determinadas por los arbitrios fuesen superiores á lo que la ley permite.

4.º Cuando establecieren y recaudaren cualquiera clase de impuestos no comprendidos en la presente ley.

Los Tribunales de Justicia, una vez probado el hecho, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Código penal, harán las declaraciones siguientes:

Primer caso. Imposición de doble cuota á los culpables.

Segundo y tercer caso. Anulación del repartimiento en lo que exceda á la cantidad autorizada y devolución de las recaudadas, con multa igual al sobrante, mancomunadamente impuesta á los Concejales y asociados culpables.

Cuarto caso. Anulación del arbitrio impuesto y devolución de las cantidades recaudadas, con multa igual á su importe, exigida en la forma expresada en el caso anterior.

**CUESTION 1.** ¿El art. 198 de la ley Municipal vigente se refiere tan sólo á los arbitrios repartidos y percibidos, ó sea á ac-

tos definitivos, firmes y obligatorios para el contribuyente, á comprende también los repartos verificados, aun cuando estén pendientes de aprobación de la Autoridad superior, ó hayan sido dejados sin efecto por ésta en tiempo oportuno?—El Tribunal Supremo ha declarado que cae bajo la sanción del referido artículo todo señalamiento ó reparto de cuota menor, no justificada, háyase ó no llevado á efecto, háyase ó no aprobado por la Superioridad: «Considerando que el repetido art. 198 castiga el simple señalamiento ó repartición de cuota menor, no justificada, sin distinción de si se ha llevado ó no á efecto, é independiente de su aprobación ó anulación, porque de lo contrario, la penalidad especial contenida en el mismo sería de todo punto inútil y falto de sentido tal precepto, encaminado, más bien que á corregir hechos punibles realizados, á evitar con prescripciones preventivas, y por modo excepcional, abusos que, una vez llevados á cabo con la sanción administrativa, podrían constituir responsabilidades distintas, etc.» (Sentencia de 13 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 31 de Diciembre, páginas 289 y 290.)

**CUESTION II.** *Aun cuando el art. 198 de la ley Municipal sólo habla de los Concejales y asociados, ¿debe hacerse extensiva su sanción á los repartidores del impuesto de consumos nombrados por la Administración provincial, con arreglo al art. 252 de la Instrucción de 16 de Junio de 1885?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que la diferencia que se pretende establecer entre los asociados y repartidores, y en la que se funda la infracción del art. 252 de la Instrucción de 16 de Junio de 1885, es de todo punto inaceptable, porque lo mismo unos que otros están llamados en cada caso al desempeño de las funciones á que se refiere el artículo citado de la ley Municipal, etc.» (Sentencia de 13 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 31 de Diciembre, páginas 289 y 290.)

**CUESTION III.** *Entre los arbitrios é impuestos de que habla el art. 198 de la ley Municipal, ¿deberá comprenderse también la contribución de consumos, aun cuando se haya hecho su repartimiento con arreglo á los artículos 1.º y 6.º de la ley de 16 de Junio de 1885 y los 260, 261, 263 y 264 de la Instrucción de la misma fecha?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que la contribución de consumos está comprendida en la ley Municipal, que indudablemente se refiere á toda clase de arbitrios é impuestos, sobre todo cuando está afecta al Municipio, y comprende todas las operaciones de distribución y repartimiento encomendadas á los Concejales y asociados, etc.» (Sentencia de 13 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 31 de Diciembre, páginas 289 y 290.)



## LEY DE CAZA DE 10 DE ENERO DE 1879

### Arts. 47 y 48.

En las infracciones de esta ley se impondrá siempre la pérdida del arma ó del objeto con que se pretenda cazar. El arma podrá recuperarse mediante la entrega de 50 pesetas en papel de pagos.

En todo caso el infractor será condenado á la indemnización del daño según tasación pericial, á la pérdida de la caza y á una multa que por primera vez será de 5 á 25 pesetas, por la segunda de 25 á 50, y por la tercera de 50 á 100, siempre en papel de pagos.

**QUESTION.** *La ocupación en poder de un sujeto de un hurón, con gabiola, y de una hurena con cinco crías en poder de otro, constituirán otras tantas infracciones del art. 26 de la ley de Caza, penales con arreglo á los artículos 47 y 48 de la misma?*—Así lo estimó el Juez de instrucción de Novelda, fundado en que, según dicha ley y lo aclarado en la Real orden de 14 de Marzo de 1881 (1), sólo es lícito criar y tener hurones á los arrendatarios de montes y á los que se dediquen á la industria de la saca de conejos, y aun en este caso con el permiso previo del Gobernador, y con arreglo á este criterio condenó á los procesados á 15 pesetas de multa á cada uno y en las costas. Mas interpuesto por la defensa de éstos recurso de casación contra dicha sentencia, citando como infringidos los mismos artículos de la ley de Caza que la sirvieron de fundamento, declaró el Tribunal Supremo *haber lugar á él*: «Considerando que por el mero hecho de tener un hurón sin permiso del Gobernador de la provincia, y por lo mismo sin que se haya anotado ese permiso en los oportunos registros, no se incurre en la responsabilidad que señalan los artículos 47 y 48 de la ley de Caza vigente, porque sean cuales fueren las prevenciones hechas á las Autoridades superiores gubernativas de las provincias en la Real orden de 14 de Marzo de 1881, no derogó ni pudo derogar el art. 26 de la expresada ley de Caza, que sólo obliga al cumplimiento de aquel requisito á los que tengan dichos animales y sean arrendatarios de montes ó se dedi-

(1) Pueden verse en el Suplemento 1.º, pág. 815

quen á la industria de la saca de conejos: Considerando que no hallándose en este caso el recurrente D. Gregorio Rizo y Ferrándiz, y habiéndosele condenado en la sentencia, por el solo hecho de tener un hurón, como inobservante de la mencionada ley, se ha infringido ésta en los artículos que se citan é incurrido en el error de derecho alegado en el recurso, etc.» (Sentencia de 28 de Diciembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 1.º de Mayo de 1889, pág. 146.)

### Art. 58.

EL QUE ENTRANDO EN PROPIEDAD AJENA SIN PERMISO DEL DUEÑO SEA COGIDO INFRAGANTI CON LAZOS, HURONES Ó OTROS ARDIDES PARA DESTRUIR LA CAZA, SERÁ CONSIDERADO COMO DAÑADOR Y ENTREGADO Á LOS TRIBUNALES ORDINARIOS PARA QUE LE CASTIGUEN CON ARREGLO AL ARTICULO 530 DEL CÓDIGO PENAL.

**QUESTION.** *Para que exista el delito consumado, comprendido en la sanción del art. 50 de la ley de Caza de 10 de Enero de 1879, será necesario que el delincuente se haya apoderado de la caza, ó bastará que haya sido sorprendido infraganti en el acto de recoger unos lazos con los que pretendía cazar en ajena heredad y sin licencia de su dueño?*—El Tribunal Supremo ha declarado que la consumación del delito se determina por este solo último hecho, sin necesidad de que se realice la ocupación ó apoderamiento de la caza: «Considerando que el solo hecho de haber sido cogido infraganti en heredad ajena sin permiso de su dueño con lazos, hurones ó otros ardides para destruir la caza, se halla comprendido en la sanción del art. 50 de la ley de Caza de 10 de Enero de 1879, y su autor incurre por este solo acto en la penalidad establecida para los dañadores en el art. 530 del Código penal: Considerando que el hecho probado de ser sorprendido infraganti el recurrente en el soto de caza denominado Casa Blanca en el acto de recoger catorce lazos, que con anterioridad había colocado sin licencia del dueño, constituye el delito previsto en el citado art. 530, sin que para consumarse sea preciso el apoderamiento de la caza; porque la ley castiga la entrada sin licencia con ardides propios para destruirla, y este hecho fué consumado por el recurrente: Considerando, por lo tanto, que la Audiencia sentenciadora no ha incurrido en el error de derecho, ni cometido las infracciones legales que en el recurso se suponen, etc.» (Sentencia de 19 de Octubre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 6 de Enero de 1889, páginas 5 y 6.)

Igual doctrina se consigna en otra sentencia posterior: «Considerando que el hecho procesal está comprendido en el art. 50 de la ley de Caza, porque el recurrente fué sorprendido en el acto de colocar trece lazos en propiedad ajena y sin permiso del dueño de la misma: Considerando, por consiguiente, que no es aplicable el art. 48 de la misma ley, invocado en el recurso como infringido



por omisión, pues sólo surte efecto legal este artículo cuando no rijan las disposiciones de los señalados con los números 50, 51 y 52: Considerando que tampoco ha sido infringido por indebida aplicación el precitado art. 50, porque el hecho definido en el mismo constituye delito consumado, haya ó no el cazador logrado su objeto, según respetuosamente se ha determinado en varias sentencias por este Supremo Tribunal, etc.» (Sentencia de 13 de Diciembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 22 de Abril de 1889, páginas 110 y 111.)

---

**Art. 182... 1.º**

(DEL CÓDIGO PENAL)

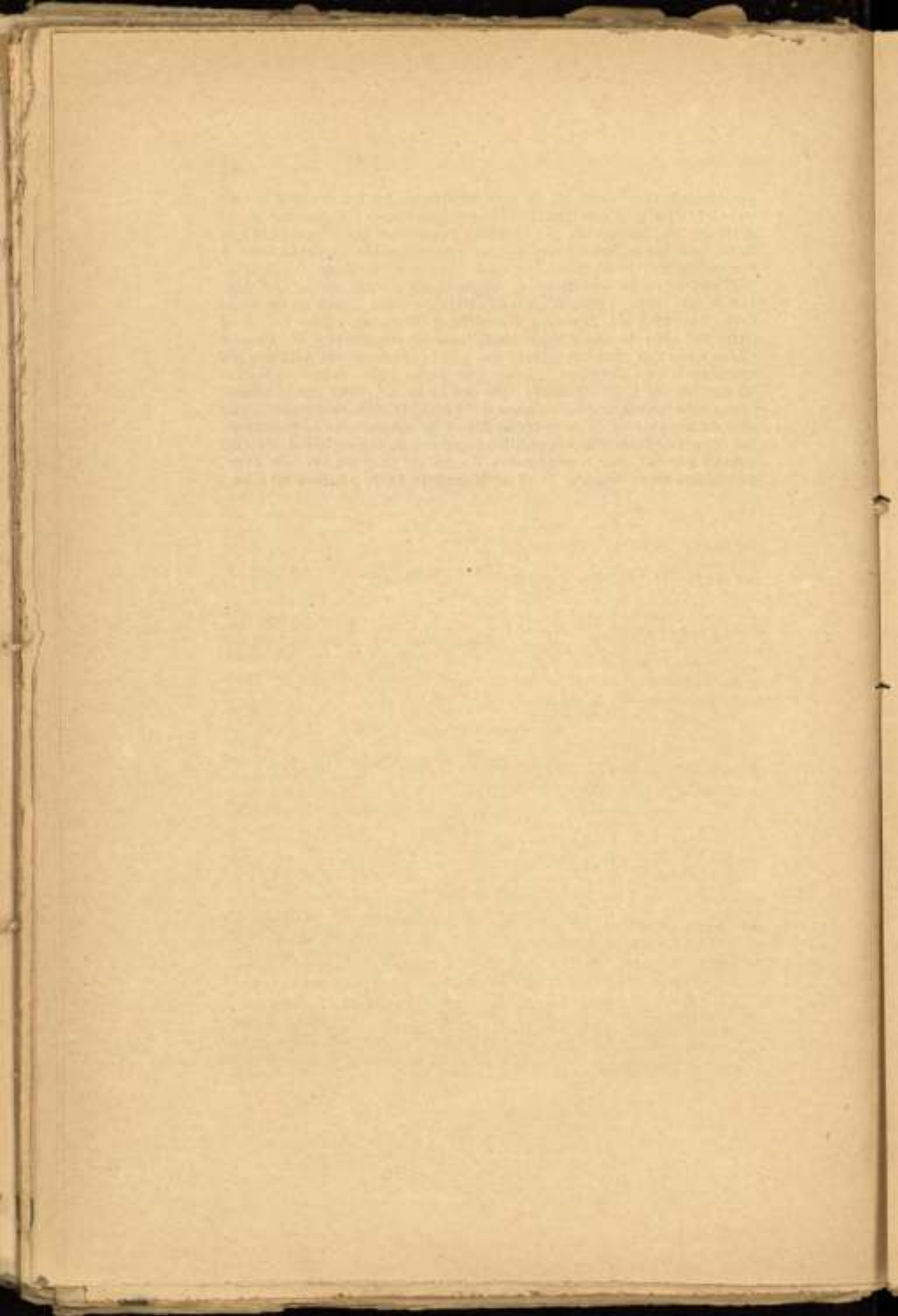
Por la importancia del caso á que la siguiente *Cuestión* se refiere la publicamos á continuación, ya que no pudimos hacerlo al ocuparnos de dicho artículo y número del Código por haberse insertado dicha sentencia en la *Gaceta* con posterioridad.

**CUESTION.** *El grito de «Viva la República» dado en una reunión numerosa y contestado por todos ó casi todos los concurrentes á la misma, ¿será constitutivo del delito contra la forma de gobierno, definido en el núm. 1.º del art. 182 del Código?*—El Tribunal Supremo ha resuelto la afirmativa: «Considerando que consignado, lo mismo en la Constitución de 1869, cuyo espíritu es el que informa el Código penal vigente, que en la de 1876, el derecho de todo español para emitir libremente sus ideas y opiniones como para reunirse pacíficamente, se observa en la estructura toda de aquél el cuidado puesto por el legislador para que á la sombra de los derechos individuales no se atente por manera alguna á las instituciones fundamentales del Estado, ni por actos de fuerza, ni por actos de astucia, ni por gritos ningunos, que, aparte del desentono que con ellos se produce en el ejercicio pacífico de tales derechos, encierran un sentido de protesta y provocación contra lo que debe estar tanto más garantido cuanto mayor es la libertad que se reconoce para la exposición y propaganda pacífica de todos los ideales, según se revela en las disposiciones de los artículos 182, 185, 248 y 273 del expresado Código: Considerando que el grito de viva la República, que no es realmente forma de propaganda, lanzado en reunión numerosa para producir aclamaciones, es por su naturaleza, dentro de las instituciones vigentes, grito de protesta y provocación contra las mismas, relacionado directamente con el objeto que constituye el delito definido en el art. 181, con la diferencia de que si por éste se castigan los actos de fuerza que tienden á la consecución de cualquiera de los fines en él enumerados, por el 182 se penan los meros gritos que significan propósitos de realizarlos, aun cuando no se traduzcan en actos, lo que haría variar la índole del delito, pues si pretendiera extenderse dicho artículo en el sentido de que para constituir el delito en el mismo definido fuera preciso que el grito y las aclamaciones se emplearan para sustituir directa é inmediatamente una forma de gobierno por otra, además de ser esto contrario al espíritu y tendencia del Código, tal cual queda explicado, obligaría á creer que el legislador supuso la



posibilidad poco racional de que semejante medio era por sí sólo suficiente para la consecución de los objetos determinados en el artículo 181, siendo así que la única condición que exige el 182 es la de que las aclamaciones vayan encaminadas directamente á la realización de aquéllos, lo cual significa la mera tendencia, siquiera haya de ser directa, según queda explicado: Considerando que, esto supuesto, la Audiencia de esta Corte no ha incurrido en error de derecho al calificar y penar como delito el grito de viva la República dado por el recurrente D. Ramón Chies ante una reunión numerosa, que le contestó por aclamación unánime ó casi unánime, puesto que dicho grito reúne todos los elementos del hecho punible que define el art. 182 del Código, tanto más marcados en el caso del presente recurso, cuanto que uno de los objetos de la reunión fué el de concentrar la fuerza de las diversas fracciones republicanas para la consecución del fin común á todas, etc.» (Sentencia de 26 de Noviembre de 1888, publicada en la *Gaceta* de 27 de Marzo de 1889, páginas 83 y 84.)

---





## REPERTORIO ALFABÉTICO

### A

**Abogado.**—V. *Desacato*.—*Proposición*.

**Aborto.**—Ocasionado violentamente cuando no ha habido propósito de causarlo.—Art. 426, pág. 223.

—El que pistola en mano amenaza á una mujer embarazada, diciéndole que la va á matar, determinándosele á ésta el aborto á consecuencia de la impresión y del susto, ¿será responsable del delito de *aborto* ocasionado violentamente aunque sin propósito de causarlo, comprendido en el art. 426 del Código, ó lo será tan sólo del menos grave de *amenaza no condicional*, previsto y penado en el 507, núm. 2.º?—Cuest. única, pág. 223.

**Abuso de confianza.**—Circunstancia agravante.—Art. 10... 10.ª, página 74.

—El conductor de un carruaje de los que se colocan en las estaciones de ferrocarril para el servicio de los viajeros, que al conducir el equipaje de uno de éstos le sustrae algún efecto, ¿será responsable del delito de *hurto*, con la circunstancia agravante de *abuso de confianza*?—Cuest. I, pág. 74.

—El mozo de *carros de mudanza* que al verificar el traslado de muebles de una casa sustrae uno de éstos, ¿será responsable del delito cometido, con la circunstancia agravante de *abuso de confianza*?—Cuest. II, pág. 74.

—El sepulturero de una iglesia parroquial que habiéndose quedado oculto en la escalera que desde la iglesia conduce á la torre, y saliendo á la misma iglesia siendo ya de noche y estando cerradas las puertas, violenta los cepillos de las limosnas y se

apodera de su contenido, resultando además que días antes sustrajo los pendientes de una Virgen de la propia iglesia, sin que consten los medios de que se valió para cometer esta sustracción, ¿será responsable de estos dos delitos, de robo el uno y de hurto el otro, con la circunstancia agravante de *abuso de confianza*?—Cuest. III, pág. 74.

**Abuso de la firma de otro en blanco.**—Art. 548... 6.º, pág. 294.

—Para que exista el delito de *estafa*, comprendido el núm. 6.º del art. 548 del Código, ¿será menester que el autor de la firma en blanco la haya *entregado ó confiado* al que abusó de ella?—Cuestión única, pág. 294.

**Abuso de superioridad.**—Circunstancia agravante.—Art. 10... 9.º, pág. 71.

—La circunstancia de hallarse el ofendido encorvado á causa de un antiguo padecimiento reumático y de no poder apenas correr, encontrándose además inerte, ¿será bastante á determinar la existencia de la circunstancia agravante de *abuso de superioridad*, aun cuando sea *uno solo* quien le acometa y hiera mortalmente en tal situación?—Cuest. I, pág. 71.

—El que en estado de embriaguez se dirige arma en mano á herir á un sujeto que iba de paseo por una carretera con varios amigos, y huyendo el amenazado le persigue, y por haber éste tropezado, le alcanza y le clava el arma en la espalda, produciéndole la muerte, ¿será responsable de este homicidio con la circunstancia agravante de *abuso de superioridad*?—Cuest. II, pág. 71.

—Cuando *dos* acometen á uno por mero accidente, ó sea á consecuencia de una riña sobrevenida de improviso, ¿deberá apreciarse en el hecho la circunstancia agravante de *abuso de superioridad*?—Cuest. III, pág. 72.

—En el delito de robo, con motivo á ocasión del cual resulta homicidio, ¿cabe aplicar la circunstancia agravante de *abuso de superioridad*?—Cuest. IV, pág. 72.

—Aun cuando sea *uno solo* el agresor, si asestó con arma blanca un golpe al ofendido, que le produjo la muerte, cuando éste estaba luchando con *dos* personas, de quienes tenía que defenderse, ¿deberá apreciarse en contra de aquél la circunstancia agravante de *abuso de superioridad*?—Cuest. V, pág. 73.

—El que acomete y hiere con una vara de hierro á un sujeto indefenso á quien otro derribara al suelo y seguía maltratando, ¿será responsable del delito, con la circunstancia agravante de *abuso de superioridad*?—Cuest. VI, pág. 73.



**Abusos deshonestos.**—Art. 454, pág. 229.

—El que, deseoso de yacer con una joven, la coge por el cuello en ademán de echarla al suelo, diciéndole que había de hacer con ella cuanto quisiera, y como aquélla se resistiera, desiste también él; pero á manera de burla ó venganza la echa al suelo, le alza las sayas, le pasa la mano por las partes genitales y le da lo que vulgarmente se llama una zurra en el trasero, ¿será responsable por este hecho del delito de *tentativa de violación*, ó del de *abusos deshonestos*?—Cuest. única, pág. 229.

**Acometimiento.**—V. *Agresión ilegítima*.

**Acusación ó denuncia falsa.**—Art. 340, pág. 179.

—El que imputa falsamente á su contrario en un pleito que trataba de sobornar á varios testigos para que se retractaran de las declaraciones prestadas en aquél, por cuyo hecho se incoó la correspondiente causa que terminó por sentencia absolutoria, ¿será responsable del delito de *denuncia falsa*, comprendido en el art. 340 del Código?—Cuest. I, pág. 179.

—El que ordena á un hijo suyo que vaya á dar parte á la Guardia civil de que un sujeto le había *detenido* unos cerdos, ¿será responsable del delito de *denuncia falsa* si habiendo el hijo encontrado por el camino y dado cuenta del encargo de su padre á su abuelo y á otro pariente, éstos denunciaron á la Guardia civil que el expresado sujeto había *robado* á aquél una porción de cerdos, por cuyo hecho se instruyó causa que fué sobreseída libremente?—Cuest. II, pág. 180.

—Aun cuando alguno de los hechos denunciados sea cierto, si el desfiguramiento ó silencio de algunos detalles indujo á la Autoridad judicial á creer que se trataba verdaderamente de un delito perseguible de oficio, por no ser otros el natural sentido y clara tendencia de la denuncia formulada, y por esto se incoó el oportuno proceso que hubo de terminar por auto de sobreseimiento libre motivado por la no existencia del delito objeto de la denuncia ó querella, ¿procederá declarar la *falsedad* de éstas, y aplicar á su autor la pena del art. 340 del Código?—Cuest. III, pág. 181.

—La resolución de un Tribunal *desestimando* la querella de *antejuicio* necesaria para exigir responsabilidad criminal á los Jueces y Magistrados, ¿será equivalente á un *auto de sobreseimiento*, á los efectos del párrafo segundo del art. 340 del Código penal, de tal suerte que si entiendo que hay fundamentos para creer que son *falsos* los hechos imputados al funcionario judicial, pueda, al par que desestima la querella, mandar proceder contra el querellante por *acusación ó denuncia falsa*?—Cuest. IV, página 181.

—V. *Desprecio de la dignidad del ofendido.*

**Administrador de Correos.**—V. *Detención de la correspondencia privada confiada al correo.*

**Adulterio.**—Art. 448, pág. 228.

—Cuando en la sentencia del Tribunal *à quo* se declara como hecho probado que una mujer casada ha sostenido *relaciones ilícitas* con un sujeto, ¿basta esto á suponer el *ayuntamiento carnal* que integra el delito de *adulterio*?—Cuest. única, pág. 228.

—V. *Amancebamiento del marido.*

**Agente de la Autoridad.**—V. *Atentado.*—*Injurias, insultos ó amenazas, etc.*—*Prevalerse del carácter público que tenga el culpable.*

**Agresión ilegítima.**—Art. 8.º, núm. 4.º, pág. 23.

—¿Será posible apreciar la *exención incompleta* de responsabilidad criminal á los efectos del art. 87 del Código, ó cuando menos la circunstancia atenuante 1.ª del art. 9.º, si no ha habido verdadera agresión ilegítima por parte del damnificado?—¿Podrán considerarse como tal las palabras más ó menos groseras que éste pronunciara?—Cuest. única, pág. 23.

—Si hallándose el procesado con tres sujetos más jugando al dominó en una taberna, se promovió cuestión sobre una jugada, recibiendo con tal motivo aquél una bofetada de uno de los jugadores, en cuyo acto, acercándosele un amigo de éstos lo *agarró fuertemente retirándolo con violencia* hasta la trastienda, donde cayeron ambos al suelo forcejeando, y en esta situación, por desasirse del que así le acometiera, dióle un mordisco en la oreja, causándole una lesión grave, ¿deberá apreciarse en este hecho tan sólo la circunstancia atenuante de *arrebato y obcecación*, ó bien declararse la *exención completa* del procesado por haber obrado en defensa de su persona con todos los requisitos de la Ley?—Cuest. única, pág. 24.

—Si habiendo sospechado un sujeto que un compañero suyo de tienda había dicho al dueño de la misma que iba tarde al establecimiento, le invitó á salir á la calle, y ya en ella le pidió una satisfacción, y acto seguido le pegó una *bofetada*, en vista de lo cual el ofendido sacó un revólver y disparó un tiro contra su adversario, aunque sin herirlo, ¿deberá apreciarse en este hecho la concurrencia tan sólo de la circunstancia atenuante de *provocación*, ó bien la *eximente incompleta* del art. 8.º, núm. 4.º (agresión ilegítima y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende)?—Cuest. I, pág. 24.



- Una mujer embarazada, despechada contra una convecina suya por razón de un juicio instado por ésta y en el que había sido condenada en las costas, profiere *insultos* contra la misma, y como la advirtiera que se callase, se dirige hacia ella *navaja en mano* en actitud amenazadora, estrechándola contra una pared, por lo cual la ofendida la cogió por el pelo y la dió en el vientre con un instrumento punzante un golpe que no necesitó asistencia facultativa, produciéndose sin embargo á los pocos días el aborto de la agresora á consecuencia de esta lucha y de la impresión moral que la causó, ¿deberá apreciarse á favor de la autora del hecho la *exención completa* de toda responsabilidad criminal?—Cuest. única, pág. 26.
- Si de la causa resulta que yendo varios mozos por la calle de un pueblo tocando la guitarra, uno de ellos entonó una copla pretendiendo que los demás se parasen ó le acompañasen con la guitarra, y como no hicieran caso de esta excitación, se ofendió, y dirigiéndose á uno de dichos compañeros le infirió una herida incisa, quien entonces le disparó dos tiros de pistola, hiriéndole menos gravemente, ¿deberá apreciarse á favor de este último la circunstancia de *exención completa de responsabilidad criminal* por haber obrado en *justa defensa* de su persona con todos los requisitos de la Ley?—Cuest. única, pág. 27.
- En caso de *riña*, cuando dos ó más se maltratan mutuamente, ¿la circunstancia de ser uno el que pague primero determinará la *agresión ilegítima*, según los términos del art. 8.º, núm. 4.º del Código?—Cuest. única, pág. 27.
- Varios golpes dados con un estoque y *de plano* por un sujeto á otro, con quien estaba disputando, ¿determinan una verdadera *agresión ilegítima*, ó tan sólo una *provocación*?—Cuest. única, página 28.
- El que cuestionando con otro por motivos fútiles, saca una pistola y *apunta* á éste, ¿deberá ser considerado como *agresor ilegítimo*, determinando, por ende, su acometimiento, el requisito 1.º del art. 8.º, núm. 4.º del Código, con respecto al procesado que en tal situación saca una faca y mata á su adversario?—Cuest. única, pág. 28.
- Si hallándose la procesada recogiendo trapos en la calle, llegó otra mujer, trapera también de oficio, y después de *insultar* á aquélla duramente se fué hacia la misma *para maltratarla de obra*, dando esto lugar á que ambas se agarraran y resultasen lesionadas, la procesada levemente, y la agresora de un morisco que ésta le dió, habiendo tardado en quedar sana diez y siete días, ¿procederá apreciar á favor de la procesada la *exención de responsabilidad* por haber obrado en defensa de su persona con todos los requisitos del art. 8.º, núm. 4.º del Código?—Cuest. única, pág. 29.

- Cuando del proceso resulta que habiendo ido un sujeto á una taberna y hechoso servir varias copas de aguardiente, al reclamarle el tabernero su pago se negó á verificarlo, profiriendo malas palabras y ejecutando movimientos que demostraban su propósito de sacar un arma, por lo que el tabernero se echó sobre él y comenzaron á luchar, saliendo el sujeto herido gravemente y el tabernero con unas lesiones leves, ¿deberá ser declarado este exento de toda responsabilidad?—Cuest. única, página 30.
- El que insultado y amenazado por un sujeto le requiere para que le deje y no le comprometa, y al verse acometido por el mismo, saca en mano, le dispara dos tiros de pistola, hiriéndole gravemente, ¿deberá ser declarado exento de responsabilidad criminal por haber obrado en justa defensa de su persona con todos los requisitos de la Ley?—Cuest. única, pág. 30.
- El salir una persona al encuentro de otra con ánimo decidido y resuelto de ofenderla y el acto de echar mano de un revólver, ¿constituirán suficientemente á los efectos de la Ley un acto de verdadera agresión?—Cuest. única, pág. 31.
- El guarda de una finca que al ver de noche á un hombre subido á un árbol cogiendo fruta le apunta con la escopeta y le dispara un tiro, infiriéndole una lesión que le produjo la muerte una hora después, ¿deberá ser considerado como habiendo obrado en defensa de los derechos dominicales de su padre, á quien pertenecía la finca que guardaba, contra la agresión ilegítima constituida por el acto de hurtar la fruta, sin provocación por su parte, si bien no empleando para ello medio racionalmente necesario?—Cuest. única, pág. 32.
- ¿Cabe apreciar la agresión ilegítima si no se determina en la sentencia del Tribunal á quo quién de los dos contendientes que se hirieron mutuamente precedió al otro en su actitud agresiva?—Cuest. única, pág. 33.
- El arrojar un cubo de agua á una persona desde un balcón; el presentarse el autor del hecho á ésta cuando, dentro de la casa, averiguaba quién lo era y decirle en tono agresivo que había sido él, dándole al propio tiempo un puñetazo, acompañado de una blasfemia, ¿serán actos constitutivos tan sólo de provocación, ó de verdadero acometimiento?—Cuest. única, pág. 33.
- Cuando salen dos sujetos de un sitio en actitud de desafío, dispuestos á acometerse mutuamente, el golpe que dé primero el uno, ¿podrá constituir agresión ilegítima respecto del otro?—Cuestión única, pág. 34.
- Dos sujetos, después de haber comido en una posada, al presentarles la cuenta el posadero, pareciéndoles ésta excesiva,



empiezan á insultarlo y se salen á la calle sin pagar; van tras ellos el posadero y su criado, y en vez del dinero reciben sendas pedradas que les dirigen aquéllos; desisten de perseguirlos, pero vuelven á tropezar en otra calle con los deudores, que les vuelven á tirar piedras, y entonces amo y criado, con un palo y borca que llevaban, causan á uno de sus perseguidores varias lesiones graves: ¿deberán los autores de éstas ser declarados *exentos de responsabilidad criminal*?—Cuestión única, pág. 34.

—El que, en actitud hostil, da á otro varios *empellones* con un *palo ó cayada*, ¿realiza una *agresión ilegítima* que, no siendo provocada por el que es objeto de ella, determinará, por lo menos, á favor de este último la *exención incompleta de responsabilidad* y, por lo tanto, la aplicación de la *disminución especial de penalidad* que establece el art. 87 del Código penal?—Cuestión única, pág. 35.

**Alcalde de cárcel ó Jefe de establecimiento penal.**—Pena en que incurre cuando impone á los presos ó sentenciados privaciones indebidas ó usa con ellos de un rigor innecesario.—Artículo 213... 6.º, pág. 114.

—El Director ó Jefe de un establecimiento penal que por haber inferido uno de los penados una lesión al Vigilante del mismo, y produciéndose con este motivo un tumulto entre los reclusos, castiga con calabozo á varios y amarra con cadena á la pared á dos más, amenazándoles con revólver y pegándoles con un bastón de hierro, con cuyos golpes les produjo varias lesiones que no necesitaron para su curación asistencia facultativa, ¿será responsable por este hecho del delito consistente en la imposición á presos ó sentenciados de privaciones indebidas ó uso con los mismos de un *rigor innecesario*?—Cuest. única, página 114.

—V. *Infidelidad en la custodia de presos.*

**Alcalde.**—V. *Detención arbitraria.*—*Detención de la correspondencia privada confiada al correo.*—*Infidelidad en la custodia de presos.*

**Alevosía.**—Circunstancia agravante.—Art. 10... 2.º, pág. 62.

—Entra un sujeto en una taberna donde se jugaba al monte, pide cinco duros, y como nadie le contestara, los toma de la banca y trata de salir con ellos; mas apercibido de esto uno de los jugadores, le sale al encuentro y le sujeta por el cuello, llevándolo hacia el mostrador, con ánimo de que soltara el dinero sustraído; y estando en la expresada situación, otro de los espectadores saca una pistola y á muy corta distancia le hace un disparo, causándole en la sien una herida de la que falleció al

- siguiente día: ¿deberá calificarse de *alevosa* esta muerte, aun cuando realmente el interfecto no pudo defenderse de la agresión de que fué objeto?—Cuest. I, pág. 62.
- En la muerte violenta causada á una persona por medio de una caja contentiva de materias explosivas que al efecto le fué remitida por el ofensor, ¿cabrá alegar la inexistencia de la circunstancia cualificativa de *alevosa*, bajo el supuesto de que ésta exige que el agresor se encuentre en contacto más ó menos inmediato ó á presencia del agredido?—Cuest. II, pág. 63.
- Cuando se ha calificado un hecho como delito de *asesinato* por medio de *incendio*, ¿cabrá apreciar además como concurrente en la comisión del delito la circunstancia agravante genérica de *alevosía*?—Cuest. III, pág. 63.
- El que se estime á favor del autor de un delito contra las personas la circunstancia atenuante de *arrebato y obcecación*, ¿obstará á que se aprecie en contra del mismo la agravante de *alevosía* si, aunque sin buscarlo, empleó en la ejecución del delito un medio que la constituye?—Cuest. IV, pág. 64.
- El que estando guardando una finca de la propiedad de su padre, al ver de noche subido á una higuera á un hombre que estaba cogiendo brevas, le apunta con la escopeta y le dispara un tiro, infiriéndole una lesión que le produce la muerte, ¿deberá ser calificado de autor del delito de *asesinato*, ó simplemente de *homicidio*?—Cuest. V, pág. 64.
- El guarda de un término municipal que yendo de orden del Juez en busca de un sujeto sobre quien recaían sospechas de ser autor de un hurto, y al avistarlo y ordenarle que se fuera con él, como no quisiera detenerse, le advierte que si da un paso más le enciende de un tiro, y, como echase á correr, le dispara su escopeta por la espalda, dejándole cadáver en el acto, ¿será responsable de esta muerte, como autor del delito de *asesinato* por *alevosía*?—Cuest. VI, pág. 65.
- Al que obra en defensa de un tercero, con el mayor número de los requisitos que exige la Ley para eximir de responsabilidad criminal, por muy *rápida é inesperada* que sea su acción de matar al agresor, ¿podrá calificársele nunca de autor de *asesinato* por *alevosía*?—Cuest. VII, pág. 65.
- Allanamiento de morada.**—Art. 504, pág. 256.
- Unos sujetos penetran en una casa saltando por una de sus ventanas, aprovechando para ello el momento en que sus moradores se encuentran fuera, ocupados en las faenas del campo: aun cuando se les sorprenda y capture dentro de la misma casa, antes que hayan podido realizar acto alguno que eviden-



cio sus propósitos, ¿deberá calificarse el hecho de delito de *allanamiento de morada*, ó de *tentativa de robo en casa habitada*?—Cuest. I, pág. 256.

- El hecho de entrar unos sujetos en una casa, descerrajando y abriendo la puerta principal de la misma, durante la ausencia y sin el consentimiento de su morador, ¿será constitutivo del delito de *allanamiento de morada*?—Cuest. II, pág. 257.
- ¿Deberá ser considerado como ejecutado con *violencia* el *allanamiento de morada*, por el solo hecho de haber penetrado en ella los culpables *descerrajando la puerta* que le da acceso?—Cuestión III, pág. 258.
- ¿Constituirá el delito de *allanamiento de morada* la entrada en la ajena, aun cuando no haya precedido el asentimiento *expreso* ó *tácito* del morador?—Cuest. IV, pág. 258.
- Si la entrada en la morada ajena se ejecutó sin violencia ni intimidación, ó sea levantando tan sólo el picaporte de la puerta de la casa y sin resistencia en los moradores, aunque sin el asentimiento ni expreso ni tácito de los mismos (V. la Cuestión anterior), los malos tratamientos de obra que ejerza el culpable en las personas de los moradores, ya una vez dentro de la casa, ¿determinarán la existencia del delito de *allanamiento de morada* ejecutado con *violencia*, que prevé y castiga más gravemente el segundo párrafo del art. 504 del Código?—Cuest. V, página 258.
- ¿Será menester que el morador de la casa haya manifestado previamente su voluntad contraria á la entrada en aquélla para que exista el delito de *allanamiento de morada*, ó bastará que de alguna manera conste ó se revele su oposición?—Cuestión VI, pág. 259.

**Alteración de términos ó lindes.**—V. *Usurpación*.

**Amancebamiento del marido.**—Art. 452, pág. 228.

- El *escándalo* que erige en delito el *amancebamiento* del marido *fuera de la casa conyugal*, ¿estará suficientemente determinado por el abandono en la miseria de la mujer legítima, por la común vivienda de ambos amantes, por la general creencia de que eran casados, por la *escisión* ocurrida en un sitio público entre ambos amantes y la cónyuge ofendida, y finalmente por la justificación durante el proceso de la no interrumpida cohabitación de uno y otro culpables?—Cuest. única, pág. 228.

**Amenaza adecuada por parte del ofendido.**—V. *Provocación inmediata*.

**Amenaza no condicional.**—V. *Aborto*.

**Amenazas.**—De un mal que constituya delito exigiendo una cantidad ó imponiendo cualquiera otra condición, aunque no sea ilícita, según que el culpable haya conseguido ó no su propósito y según que la amenaza se haya hecho por escrito ó por medio de emisario.—Art. 507... 1.º, pág. 260.

—Los que por medio de anónimo amenazan á una persona con matarla si no apronta y deposita en un sitio determinado la cantidad de 500 á 1.000 duros, y llegado el día y hora en que debía verificarse dicho apuntamiento, se dirigen al sitio designado, y sacan de entre la tierra un talego que con 20 pesetas en calderilla había depositado el amenazado, de acuerdo con la Guardia civil, siendo sorprendidos por ésta en el momento de tener ya en las manos dicho talego, ¿deberán ser castigados con la *pena inmediatamente inferior en grado* á la señalada por la Ley al delito de homicidio con que amenazaron, en el concepto de haber conseguido su propósito, ó deberán serlo con la *pena inferior en dos grados*, estimando que no lograron su dicho propósito?—Si á los criminales acompañó una mujer en el acto de ir á recoger el dinero, llevando una cesta bastante grande, reforzada además de metal y suficientemente fuerte para resistir considerable peso, pero sin que conste que hubiera redactado, extendido ó enviado el anónimo, ni inducido á los demás criminales á que lo verificasen, ¿deberá ser considerada como *coautora* ó como *cómplice* del delito cometido?—Cuestión única, pág. 260.

**Animales feroces y dañinos.**—Pena de los dueños que los dejan sueltos ó en disposición de causar mal.—Art. 599... 3.º, página 320.

—¿Será responsable de la falta en que incurren los dueños de animales feroces y dañinos que los dejan sueltos ó en disposición de causar mal, el dueño de un perro que habiendo ya acometido y mordido con anterioridad á varias personas sin provocación alguna, lo deja abandonado y suelto, á consecuencia de lo cual muere á un niño, causándole lesiones que duraron más de ocho días y menos de treinta?—Cuest. única, pág. 320.

**Animales muertos.**—V. *Arrojar animales muertos, etc.*

**Antejuicio.**—V. *Acusación ó denuncia falsa*.

**Aplicación de la pena.**—Cuando concurren dos ó más circunstancias atenuantes muy calificadas y ninguna agravante.—Artículo 82, regla 5.ª, pág. 102.

—¿Deberán ser consideradas como *muy calificadas*, á los efectos de la regla 5.ª del art. 82 del Código, las circunstancias ate-



nuantes de *provocación* y *arrebato* cuando concurren simultáneamente en la comisión de un delito?—Cuest. única, pág. 102.

—Cuando un solo hecho constituye dos ó más delitos, ó cuando uno de ellos es medio necesario para cometer el otro.—Art. 90, página 105.

—Cuando por la explosión de una materia de gran potencia se produce por el culpable alevosa y premeditadamente la muerte de dos personas en el mismo instante, y se aplica por el Tribunal sentenciador al procesado la pena del delito de asesinato en el grado máximo, ¿cabrá alegar válidamente en casación la infracción del art. 90 del Código por aplicación indebida y extensiva interpretación, y la del 88, que sería en su caso el aplicable, porque el precepto de aquél se contrae á delitos de *diferente gravedad*, pero no á delitos idénticos?—Cuest. única, página 105.

**Aplicación de la pena compuesta de dos indivisibles.**—Artículo 81, pág. 101.

—En el caso de un *parricidio* ó otro delito castigado con la pena de *cadena perpetua ó muerte*, aun cuando concurren *dos ó más circunstancias atenuantes y ninguna agravante*, ¿podrá tomarse como regla supletoria del art. 81 la 5.<sup>a</sup> del 82, é imponer en su virtud al culpable la *pena inmediata inferior* á la señalada por la Ley al delito, ó deberá limitarse la atenuación de la pena á la imposición de la misma en su *grado mínimo*?—Cuest. única, página 101.

**Aprehensión á traficantes ó vendedores de sustancias alimenticias que no tengan el peso, medida ó calidad que corresponda.**—Art. 592... 5.<sup>o</sup>, pág. 318.

—La aprehensión de piezas de pan destinadas á la venta pública, por cuenta del fabricante del mismo, faltas del peso correspondiente, ¿determinará la responsabilidad, en contra de aquél, que establece el núm. 5.<sup>o</sup> del art. 592 del Código, aun cuando peritos manifiesten que la falta de peso en el pan es debida generalmente á la clase de harina ó cantidad de la levadura, á la manera como se fabrica la masa, á la clase de leña con que se caldea el horno y á otra multitud de causas?—Cuest. I, página 318.

—Aun cuando la aprehensión de piezas de pan faltas del peso debido, en local destinado á la venta pública por cuenta del procesado, determine en contra de éste (V. la Cuestión anterior) la responsabilidad establecida en el núm. 5.<sup>o</sup> del art. 592 del Código, ¿procederá la casación de la sentencia que se pretenda porque el Juez sentenciador haya estimado comprendido el hecho en el núm. 4.<sup>o</sup> del propio artículo?—Cuest. II, pág. 319.

**Apremio personal.**—Art. 50, pág. 98.

—Cuando la Ley castiga un delito con las penas de *destierro* y *multa*, como sucede, por ejemplo, en el caso del art. 473 del Código, ¿deberá estimarse la *multa* como pena *principal* y condenarse al reo insolvente, respecto del pago de la misma y de las costas del acusador privado, á que sufra en la cárcel de partido la detención que establece la regla 3.<sup>a</sup> del art. 50 del Código, ó deberá, por el contrario, entenderse que la pena principal es, en este caso, la de *destierro*, y suplirse por lo tanto el pago de la multa y costas antedichas con la continuación del propio *destierro*, con sujeción á la regla 2.<sup>a</sup> del art. 50 y por el tiempo señalado en la regla 1.<sup>a</sup> del mismo?—Cuest. única, pág. 98.

**Arrebató y obcecación.**—Circunstancia atenuante. — Artículo 9.<sup>o</sup>... 7.<sup>o</sup>, pág. 57.

—El que, llamado á una diligencia judicial, acude puntualmente, y no habiéndolo verificado las demás personas con quienes había aquélla también de practicarse, y viéndose desatendido en su manifestación de que le precisaba marcharse á los quehaceres de su oficio, profiere expresiones más ó menos injuriosas contra la Autoridad judicial fuera de su presencia, ¿será responsable de este delito de *injurias*, con la atenuante de *arrebató y obcecación*?—Cuest. I, pág. 57.

—La mujer que al hacérsele un requerimiento, en ausencia de su marido, para el pago de contribución al Estado que adeudaba, profiere palabras injuriosas y amenazas contra el comisionado de apremio, encargado de la práctica de aquella diligencia, ¿podrá invocar válidamente á su favor que obró en este caso con *arrebató y obcecación*?—Cuest. II, pág. 57.

—La circunstancia atenuante de *arrebató y obcecación*, ¿podrá fundarse en un hecho lícito y legal, por más que éste impresione más ó menos el ánimo del agente?—Cuest. III, pág. 58.

—En el delito de *infanticidio*, previsto y penado en el art. 424 del Código, ¿cabe apreciar á favor de la madre la circunstancia atenuante de *arrebató y obcecación*?—Cuest. IV, pág. 58.

—El que, al intentar embargársele bienes de su propiedad para el pago de unas costas, insulta ó injuria á los agentes de la Autoridad encargados de aquella diligencia, ¿podrá alegar válidamente á su favor la circunstancia atenuante de *arrebató y obcecación*?—Cuest. V, pág. 59.

—La simple vista de un adversario ó enemigo, ¿basta para determinar la circunstancia atenuante de *arrebató y obcecación* en el homicidio que se perpetre en la persona de aquél?—Cuestión VI, pág. 59.



—El empleado que por haber sido amonestado por su superior jerárquico por una falta que éste creyó había cometido en el desempeño de su cargo, le dirige una carta injuriosa, ¿podrá alegar válidamente á su favor, para atenuar la pena de este delito de *desacato*, que obró con *obcecación y arrebató*?—Cuestión VII, pág. 59.

—El que hiere á un sujeto por haber pegado á una hermana suya una bofetada el *día antes*, ¿podrá invocar válidamente á su favor la circunstancia atenuante de *arrebato y obcecación*?—Cuestión VIII, pág. 59.

—¿Deberá estimarse la circunstancia atenuante de *arrebato y obcecación* á favor del guarda de una heredad que al sorprender en ella á un cazador furtivo, á quien había sorprendido ya y denunciado varias veces, le dispara su escopeta y le hiere?—Cuestión IX, pág. 60.

—El acto de sujetar los brazos á un individuo que estaba riñendo con otro, si bien no puede considerarse como agresión violenta al sujetado, y por tanto no puede legitimar el homicidio que éste realice en la persona del que lo sujeta, ¿será, sin embargo, bastante á determinar un *estímulo poderoso de arrebató y obcecación*?—Cuest. X, pág. 60.

—El hombre *casado* que mata por *celos* á una mujer con quien sostuviera relaciones ilícitas, ¿podrá invocar á su favor la circunstancia atenuante de *arrebato y obcecación*?—Cuest. XI, página 61.

—El que hiere á una persona por el solo hecho de negarle ésta cierta cantidad que le reclama, ¿podrá invocar á su favor la circunstancia atenuante de haber obrado con *arrebato y obcecación*?—Cuest. XII, pág. 61.

—V. *Alevosía*.

**Arrojar animales muertos, basuras ó escombros en las calles y en los sitios públicos donde está prohibido hacerlo.**

—Falta contra los intereses generales y régimen de las poblaciones.—Art. 596... 7.º, pág. 319.

—Al que por haber colocado en la calle abonos y basuras y algunas piedras para sostenerlas y formar así como una especie de estercolero, además de la *falta* consistente en haber obstruido la calle con dicho acto ó artefacto (art. 599, núm. 6.º), ¿podrá condenársele también por la *falta* que consigna el art. 596, número 7.º, y que consiste en arrojar basuras á la calle ó otros sitios públicos donde esté prohibido hacerlo?—Cuest. única, página 319.

**Asesinato.**—Artículo 418, pág. 213.

—El que al reclamarle una joven, con la que acababa de tener carnal ayuntamiento, el pago de la cantidad al efecto convenida, la impone silencio amenazándola de pegarle fuego y al propio tiempo enciende una cerilla que aplica á una lata de petróleo que había en la habitación, arrojando el líquido inflamado á la expresada joven, que al verse envuelta en llamas sale afuera pidiendo socorro, logrando un sujeto cubrirla con sus ropas y sofocar el fuego, no sin que éste la produjera gravísimas lesiones de las que falleció el mismo día, ¿será responsable por este hecho del delito de homicidio ó del de asesinato?—Cuestión única, pág. 213.

—Una serie no interrumpida de actos múltiples demostrativos del firme y decidido propósito del culpable de dar muerte á una tercera persona, ¿será bastante á determinar la existencia de la circunstancia de *premeditación conocida*, ora como genérica, ora como cualificativa del asesinato, si por otra parte consta que aquel propósito surgió en la mente del acusado la misma noche en que cometió el delito?—Cuest. única, pág. 214.

—V. *Alevosía*.—*Precio, recompensa ó promesa*.—*Premeditación conocida*.

**Asesinato frustrado.**—V. *Delito frustrado*.

**Astucia, fraude ó disfraz.**—Circunstancia agravante.—Artículo 10... 8.º, pág. 70.

—El que concurre á la perpetración de un delito con un pañuelo puesto en la cabeza en la forma que lo llevan las mujeres, para no ser conocido, ¿será responsable del delito, con la circunstancia agravante de *empleo de disfraz*?—Cuest. I, pág. 70.

—Si el procesado, sin motivo alguno, disparó con bala y perdigones contra un sujeto á quien sacó de su casa con el engañoso pretexto de que le acompañara á vigilar la suya, ¿deberá apreciarse en este delito la circunstancia agravante de *empleo de astucia*?—Cuest. II, pág. 70.

**Atentado contra la Autoridad y sus agentes.**—Artículos 263 y 264, págs. 127 á 140.

*I Acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave, resistencia grave.*

—El Alcalde de un pueblo que, al presentársele un comisionado de apremio, nombrado por el Ayuntamiento de la cabeza de partido, para el cobro de ciertos atrasos de fondos carcelarios, manifiesta deseos de enterarse del expediente, y al serle entre-



gado por el comisionado intenta romperlo; y al pretender éste quitárselo se agarran ambos, forcejeando cada cual por quedarse con él, terminando la lucha con la presentación del Juez municipal y entrega del expediente. ¿será responsable por este acto del delito de *atentado á un agente de la Autoridad*?—Cuestión I, pág. 127.

- La amenaza á un Juez municipal, al presentarse en el sitio donde se hacían unas descargas de fusil contra paisanos por la Guardia civil, dirigida por el cabo de la propia fuerza, de disparar contra dicho Juez si no se retiraba, y la descarga hecha inmediatamente por la misma en la dirección que la expresada Autoridad tomara por virtud de la actitud rebelde de aquélla, ¿constituirán el delito de *atentado*, comprendido en el artículo 263 del Código?—¿Podrá eximirse el expresado cabo de la responsabilidad criminal derivada de este delito, si pretexto de que obró en el cumplimiento de su deber, ó en el ejercicio legítimo de su derecho, oficio ó cargo, ó por su obligación de sostener el orden público y sofocar y reprimir cualquiera desorden, debiendo emplear la fuerza desde luego, sin esperar órdenes de la Autoridad civil, cuando los amotinados hacen uso de cualquier medio violento, conforme á los artículos 26, 27 y 39 del Reglamento de la Guardia civil, aprobado por Real decreto de 2 de Agosto de 1852, y á lo dispuesto en la Cartilla de su Instituto, aprobada por Real orden de 30 de Octubre de 1879, en cuya virtud, tomada por la Guardia civil la actitud militar que tomó, era allí entonces la única Autoridad y podía haber disparado contra el Juez municipal y sus acompañantes si aquél persistía en mandarles retirar?—Cuest. II, página 128.

## II *Á la Autoridad ó á sus agentes.*

- Para que los *dependientes del resguardo de consumos* puedan ser considerados como *agentes de la Autoridad*, ¿será indispensable que lleven la *chapa* que, como distintivo propio de su cargo, previene el art. 31 del reglamento de 29 de Septiembre de 1885?—Cuest. I, pág. 130.
- Además de hallarse cumpliendo acto de su servicio y de llevar el distintivo de su cargo, ¿será precisa condición que los *individuos del resguardo de consumos* hayan prestado el debido *juramento*, para que gocen del carácter de *agentes de la Autoridad*, á los efectos del art. 263 y siguientes del Código?—Cuest. II, página 131.
- El haber omitido el arrendatario de consumos poner en conocimiento de las Autoridades que expresan los artículos 3.º y 16 del reglamento de 29 de Septiembre de 1885 los nombramientos de sus dependientes, ¿será parte á despojar á éstos de su carácter de *agentes de la Autoridad* en los atentados que se co-

metan contra los mismos cumpliendo actos del servicio y llevando el distintivo de su cargo?—Cuest. III, pág. 131.

*III En el ejercicio de las funciones de sus cargos ó con ocasión de ellas.*

—Si se desconoce de todo punto el origen y circunstancias de una lucha habida entre un particular y un agente de la Autoridad, lucha de la cual resultó el primero lesionado, y el segundo despojado de uno de los distintivos de su cargo, ¿cabrá apreciar el hecho como constitutivo del delito de *atentado* ó del de *resistencia*, definido en el art. 265, ni aun de mera *falta* prevista en el número 6.º del art. 589 del Código?—Cuest. I, pág. 132.

—Aun cuando el agente de la Autoridad se halle prestando el servicio de su cargo, si no intervino en el acto ocasional del golpeamiento de que fué objeto por parte de una persona *poniendo en ejercicio sus funciones*, sino como compañero y allegado de aquélla y de otra que estaban disputando y con las cuales estuvo bebiendo y bromeando en una taberna, ¿podrá calificarse el hecho de *atentado*?—Cuest. II, pág. 133.

—Aun cuando los *vigilantes del ramo de consumos* ejerzan en un momento dado sus funciones *fuera del radio de adeudo*, ¿constituirá el delito de *atentado* el acometimiento que contra los mismos se verifique?—Cuest. III, pág. 134.

—El que resentido contra un guarda jurado por haberle denunciado éste en varias ocasiones por determinadas faltas, de noche ya, y oculto detrás de un montón de piedras y en acecho, le dispara al pasar un trabuco cargado con varios proyectiles, causándole en un muslo una lesión grave, además del delito de *asesinato frustrado*, ¿será responsable del de *atentado*, por haber acometido al referido agente de la Autoridad *con ocasión del ejercicio de sus funciones*?—Cuest. IV, pág. 134.

—Pena del delito de atentado.—Art. 264, pág. 135.

*I Si la agresión se verifica á mano armada.*

—¿Deberá calificarse de *á mano armada* la agresión que se verifica contra un agente de la Autoridad dándole un *palo*?—Cuestión I, pág. 135.

—Cuando varios acometen simultáneamente á los agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones, y por uno de los agresores se causa á aquéllos con arma lesiones más ó menos graves, ¿serán responsables de la *agresión verificada á mano armada* y del delito complejo de *lesiones*, según el art. 90, aun aquellos de los procesados que *no llevaban armas ni infirieron daño alguno á los agentes*?—Cuest. II, pág. 136.



—Si al pretender los conductores de un carro introducirlo en la ciudad sin pagar los derechos de los géneros que conducían, el Inspector de consumos trató de detener el caballo y apoderarse de la escopeta que llevaba uno de los conductores, resistiendo éste la entrega y forcejeando con aquél para no entregársela ni detenerse, en cuyo momento otro de los conductores del carro que iba un poco más atrás hizo un disparo contra dicho Inspector sin causarle daño, ¿deberá hacerse extensiva al primero la responsabilidad de este delito de *atentado á mano armada* ejecutado por el segundo, ó será aquél responsable del delito de *resistencia grave*, comprendido en el art. 265 del Código?—Cuest. III, pág. 136.

*III Si los delincuentes pusieren manos en la Autoridad.*

—¿Deberá ser calificado de atentado con imposición de manos en la *Autoridad*, previsto y penado en el núm. 3.º del art. 264 del Código, el hecho de abofetear un preso al *Alcaide* de la cárcel en el ejercicio de sus funciones?—Cuest. única, pág. 137.

—El dar un *mordisco* á un agente de la *Autoridad* en el ejercicio de sus funciones, ¿deberá estimarse como *imposición de manos* en el mismo, á los efectos del último párrafo del art. 264 del Código?—Cuest. I, pág. 138.

—Aun cuando al hablar el art. 263, núm. 2.º, de los sujetos *pasivos* del delito de *atentado*, sólo hace mención de la *Autoridad* ó de sus *agentes*, y no de los *funcionarios públicos*, ¿deberá calificarse de *atentado con imposición de manos*, con arreglo al último párrafo del art. 264, el acto de acometer á un *funcionario público* en el ejercicio de sus funciones ó con ocasión de ellas, y de producirle con un arma lesiones de mayor ó menor gravedad?—El *Director de un Hospicio* nombrado por la Diputación provincial, ¿tendrá el carácter de *funcionario público* á los efectos expresados?—Cuest. II, pág. 139.

—El que con objeto de evitar que unos guardias de seguridad aprehendieran á un sujeto á quien perseguían, da á uno de aquéllos un empujón que casi le derribó al suelo, ¿será responsable del delito de *atentado* á los agentes de la *Autoridad* con *imposición de manos* en los mismos?—Cuest. III, pág. 140.

**Autores de un delito ó falta.**—Quiénes lo son.—Art. 13, página 85.

*I Los que toman parte directa en la ejecución del hecho.*

—Promuévese cuestión entre A y B, tomando también parte á favor del último C, de cuyas resultas B da un golpe de puñal á A, agujereándole la faja sin causarle lesión, y C tira un vaso á la cabeza del mismo, causándole una lesión que tarda cuaren-

ta días en curarse: ¿deberán ser declarados B y C *coautores* de las lesiones graves causadas á A, ó será tan sólo responsable de éstas el segundo, y el primero de la falta comprendida en el artículo 604 del Código?—Cuest. I, pág. 85.

—Varios mozos de la estación de un ferrocarril se reparten entre sí varios efectos, que uno de ellos, á presencia de los demás, sustrae de un bulto que estaba en el muelle: ¿deberá calificarse á todos de *autores* del hurto, ó tan sólo al que verificó la sustracción, reservando para los demás la más benigna calificación de meros *encubridores* por propio aprovechamiento de los efectos del delito?—Cuest. II, pág. 86.

—Cuando varios acometen á un tercero con palos y navajas, obrando todos á una y en combinación contra el agredido, ¿será cada cual responsable del daño que haya inferido á éste, ó lo serán todos del mal mayor que se le haya causado?—Cuest. III, página 86.

—Si el que dispara por tres veces una pistola contra un sujeto que luchaba con otro, y que pereció en la refriega, no lo hizo de acuerdo con el matador, y no causó con dichos disparos lesión alguna al interfecto, ¿deberá ser declarado responsable tan sólo del delito de *disparo de arma de fuego*, ó calificado de *coautor* del homicidio perpetrado?—Cuest. IV, pág. 87.

*II Los que fuerzan ó inducen directamente á otro á ejecutar el hecho.*

—El que instiga á un niño de quince años para que sustraiga unas alhajas á su abuela, y verificada la sustracción se encarga de empeñarlas en varias casas de préstamos, entregando á aquél la cantidad obtenida por el empeño y recibiendo, á su vez, del mismo una pequeña suma por su comisión, ¿será responsable del delito como simple *encubridor*, ó como *coautor* por *inducción directa*?—Cuest. I, pág. 87.

—Porque un Secretario de Ayuntamiento haya aconsejado al Alcalde que no cumpla cierta orden del Gobernador, ¿podrá ser declarado *autor* por *inducción* de la *desobediencia* en que incurra el susodicho Alcalde?—Cuest. II, pág. 88.

*III Los que cooperan á la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado.*

—El que se queda vigilando las inmediaciones del lugar donde otro compañero suyo, con quien está de acuerdo, se halla verificando un robo, ¿deberá ser considerado como *coautor*, ó simplemente como *cómplice* del expresado delito?—Cuest. I, página 88.



- El que facilita á otro la llave falsa con que verifica un robo, quedándose á la puerta mientras éste tiene lugar, ¿deberá ser calificado de *coautor* ó de *cómplice* del delito?—Cuest. II, página 89.
- El que facilita al autor material de un hurto datos acerca de la existencia de la cantidad que obra en poder de un tercero y del lugar en que la tiene guardada, y mientras aquél realiza la sustracción, le espera frente á la casa en que la perpetra, recibiendo del mismo parte del dinero hurtado, ¿deberá ser calificado como simple *encubridor* del delito, ó como *coautor* del mismo?—Cuest. III, pág. 89.
- Aun cuando uno de los procesados no haya ejecutado acto alguno material de agresión contra el ofendido, si estaba unido y de concierto con el autor material del delito, y juntos y armados esperaron y acecharon á la víctima, y además enseñó á su compañero quién era ésta, ¿deberá ser considerado como *coautor* ó como *cómplice* del homicidio ó asesinato cometido?—Cuestión IV, pág. 89.
- La mujer que teniendo relaciones con un hombre casado, y de acuerdo con éste para envenenar á su esposa, compra la sustancia tóxica con que intenta su consorte en el crimen producir dicho envenenamiento, ¿será responsable del delito por ella cometido en concepto de *autora*, ó meramente *cómplice*?—Cuestión V, pág. 90.
- En el caso de la *Cuestión II* del art. 10-11.º (V. *Prevalerse del carácter público*, etc.), aun cuando el cartero no haya concurrido á la ejecución material del delito, ¿deberá ser declarado responsable como *coautor* ó como *cómplice* del mismo?—Cuestión VI, pág. 90.
- El dueño de una finca que, llamado por su colono, que estaba golpeando á un sujeto, coge á éste por la chaqueta y excita repetida é insistentemente á aquél para que le pegue más y lo mate, dándole, en efecto, el colono otro golpe en el brazo con unos garfios que llevaba, causándole una lesión grave, aun cuando él por su parte no produjera materialmente lesión alguna al ofendido, ¿deberá ser considerado como *coautor*, ó como *cómplice* de la causada?—Cuest. VII, pág. 90.

**Ayuntamiento.**—V. *Impuesto provincial ó municipal no aprobado legalmente.*

**Ayuntamiento interino.**—V. *Ley municipal.*—*Prolongación de funciones.*

## B

**Basuras.**—V. *Arrojar animales muertos, etc.*

**Billetes de Banco.**—Adquisición, sin connivencia con los falsificadores ó introductores, de billetes de Banco ó otros títulos al portador ó sus cupones, para ponerlos en circulación, sabiendo que son falsos.—Art. 304, pág. 164.

—La venta hecha á un tercero de billetes de Banco falsos, aun sin ocultarle esta circunstancia de su falsedad, ¿será constitutiva del delito consumado de *expedición* de dichos billetes, que prevé y castiga el art. 304 del Código?—Cuest. única, página 164.

—Expendición de billetes de Banco falsos ó otros títulos al portador ó sus cupones, adquiridos de buena fe, pero expendidos sabiendo su falsedad.—Art. 306, pág. 165.

—La expendición de un solo billete de Banco, mas que sea de 50 pesetas, hecha con conocimiento de su falsedad, y aun cuando se haya adquirido aquél de buena fe, ¿constituirá el delito comprendido en el art. 306 del Código?—Cuest. única, pág. 165.

—V. *Delito frustrado.*

## C

**Calumnia.**—Falsa imputación de un delito de los que dan lugar á procedimiento de oficio.—Art. 467, pág. 235.

—¿Deberá ser considerado como acto lícito el que un periodista se haga eco en un suelto de ciertos rumores acerca de una dádiva valiosa hecha á un funcionario público para que se abstuviera de un acto que debía practicar en el ejercicio de su cargo, ó deberá considerarse este hecho como constitutivo del delito de calumnia, no probándose la verdad de aquella imputación?—¿Podrá eximirse de la pena correspondiente al expre-



sado delito de calumnia la justificación de que otro periódico dijera anteriormente lo mismo que en aquel suelto se consiguió?—Cuest. I, pág. 235.

- Aun cuando consignada en forma *interrogativa*, ¿constituirá el delito de calumnia la siguiente frase estampada en un periódico: ¿Cree el Sr. Juez de Instrucción inocente de ese asesinato al procesado D.... (aquí el nombre y apellido), tan empeñadamente refido con el infeliz.... (aquí el nombre y apellido del asesinado), contra quien tanto ha predicado y hecho?—Cuestión II, pág. 236.
- Aun cuando sea cierto el hecho que se imputa á una persona, ¿existirá el delito de calumnia, si resulta falsa la calificación que de aquél se haga, si por razón de la misma habría de constituir el expresado hecho un delito perseguible de oficio?—La absolución fundada en no constituir delito el hecho ó en estar exento de responsabilidad su autor, decretada por Tribunal competente á favor de la persona á quien se dirigió la imputación, ¿será bastante á determinar la falsedad de ésta?—Cuestión III, pág. 236.
- El que en presencia de otras personas dice que Fulano de Tal, siendo Alcalde años antes, recibió de la Diputación provincial una determinada cantidad de la prorrata de aguardientes, de cuya inversión no dió cuenta ni razón alguna, ¿será responsable del delito de calumnia?—Cuest. IV, pág. 238.
- La afirmación hecha en una hoja impresa de que en la farmacia del Doctor Tal se despachó una sustancia por otra de propiedades físicas y químicas diferentes y de efectos y acción fisiológica antagónicos, callando que sobre este mismo hecho se formó algunos años antes una causa que terminó por sobreesamiento libre, ¿será constitutiva del delito de calumnia, que define el artículo 467 del Código?—¿Constituirán además el de injurias las apreciaciones que en dicha hoja se hagan sobre la falta de moralidad que á juicio de su redactor revela el expresado hecho?—Cuest. V, pág. 239.
- La imputación hecha por una mujer á otra de haber entrado en su casa para robarla, añadiendo que tenía sobre la mesa de 600 á 700 duros, y que no entraría sin duda para ver á su marido ni para rezar, ¿será suficientemente concreta para constituir el delito de calumnia?—La circunstancia de ser cuñadas la ofensora y la ofendida y de habitar en la misma casa, aunque haciendo vida separada, ¿será obstativa á la existencia de dicho delito de calumnia, por tratarse de hermanos afines y comprenderles la exención de responsabilidad criminal que determina el art. 580 del Código?—Cuest. VI, pág. 240.
- ¿Cabe sostener válidamente que la imputación hecha á una mu-

jer, de «que había echado dos criaturas al excusado,» no es constitutiva de calumnia, porque la expresión «criaturas» es genérica y comprende todo lo que es obra de la creación, y aun suponiéndola referente á personas, no se dice si eran hijos de la ofendida ó extraños, si se echaron vivos ó muertos, ó si eran tan sólo fetos?—Cuest. VII, pág. 240.

—Cuando se ha justificado la certeza del hecho punible, perseguible de oficio, imputado á un tercero, y procede, por tanto, la exención de toda pena al imputador, con arreglo al art. 472 del Código, ¿cabrá alegar en casación que semejante imputación, ya que no constituye calumnia, por no ser falsa, es constitutiva, por lo menos, del delito de injuria grave, si ésta no ha sido objeto del procedimiento, ó de la sentencia dictada por el Tribunal á quo?—Cuest. VIII, pág. 241.

—V. *Cónyuge heredero.*—*Desprecio de la dignidad del ofendido.*

**Calumnia, injuria ó insulto á la Autoridad.**—Art. 269, página 152.

—Las expresiones «tío, cara de caballo, que hacia falta meterle en el pilón,» aplicadas á un Juez de Instrucción, ¿constituirán el delito de *injurias á la Autoridad*, previsto y penado en el artículo 269, ó simplemente la falta de respeto y consideración á la misma, comprendida en el núm. 5.º del 589?—Cuest. I, página 152.

—¿Se cometerá el delito de *injurias á la Autoridad* en un suelto de periódico en el que, después de quejarse su autor de varios abusos que dice se cometían en el felato de consumos del pueblo y de que el Alcalde no los corregía, se da como razón para esto el tener dicho Alcalde interés en el asunto?—Cuest. II, página 152.

—En un suelto de periódico se dice: «Han sido condenados á reclusión perpetua 84 soldados y cabos de Albuera y 83 de Garellano: total 167; mas cuatro sargentos de Albuera, 171 hombres que no han hecho tanto contra la Ordenanza como los que les condenan; irresponsables por su clase, como héroes anónimos de esos que han servido á los Generales de las rebeliones indisculpables, Martínez Campos, Dabán, Pavía y Primo de Rivera. ¡Castigo á estos inconscientes y premio á los otros!» ¿constituirán estas frases y conceptos el delito de *injurias á la Autoridad*?—Cuest. III, pág. 153.

—En un suelto de periódico se dice: «No se desacata al funcionario del orden judicial señalándolo ante la sociedad que sufre y gime por su ineptitud atrevida. Los hechos de este funcionario por prevaricato se repiten, y pocas veces se habrá visto en los anales del foro escándalos de naturaleza análoga en unos autos



que tienden á consumir la ruina y deshonra de dos familias. ¿Ponen los conocimientos teóricos y prácticos de la jurisprudencia D. Pedro Agüero?» ahora bien: siendo éste Juez de uno de los distritos de la capital donde se publica el periódico, ¿cabe afirmar que no existe aquí el delito de *injurias á la Autoridad* porque no se determina y concreta la persona contra quien se dirigen?—Cuest. IV, pág. 153.

- El periodista que tratando de la suspensión gubernativa de un Ayuntamiento dice en un suelto «calculamos desde luego que es una *iniquidad* del Sr. .... (el Gobernador) ó de sus inspiradores: en algo había de conocerse que las elecciones municipales se avecinan.» ¿será responsable del delito de *injurias á la Autoridad*, comprendido en el art. 269 del Código?—Cuest. V, página 154.

- El que estampa en un suelto de periódico las frases siguientes: «Se ha de hacer una recluta forzosa entre los mozos de 1885 porque así lo ordena el Ministro de la Guerra, sin obligar antes á una Empresa á embarcar 1.000 voluntarios que viene obligada á embarcar; pero ya se ve, esa Empresa habrá hecho callar al Ministro tapándole la boca con unos cuantos miles de.....» ¿podrá eximirse de la pena señalada en el art. 269 al delito de *injuria y calumnia á la Autoridad*, aun cuando se alegue y justifique que no había habido ningún Ministro que hubiera mandado reclutar gente para Cuba, y por consiguiente, no pudo haber en el suelto denunciado materia de censura ni injuria á persona determinada?—Cuest. VI, pág. 155.

- Al ocuparse del Gobernador general de Puerto Rico, dice un periódico de aquella isla: «que aunque al oírlo es una estupidez pedirle peras, aquella Autoridad debió haber hecho sobreseer por delicadeza cierta causa para atenuar los errores que por falta de talento cometiera»; ¿deberán estimarse estas frases y conceptos como constitutivos del delito de *injurias á la Autoridad*, previsto y penado en el art. 265 del Código de Cuba y Puerto Rico, 269 del de la Península?—Cuest. VII, pág. 156.

- El que al ocuparse en un artículo de periódico de dos Ministros de la Corona y al apreciar los actos propios de sus cargos los califica de «dos pobres hombres, dos Juan Lanas, que no hay más que pedir», ¿será responsable del delito de *injurias á la Autoridad*, comprendido en el art. 269 del Código?—Cuest. VIII, página 156.

- El autor de un artículo de periódico que ocupándose de los representantes de la Hacienda dice que «bien pudieran llamarse verdugos sin más ley que su capricho,» y que «no reparan en llevar á cabo todo género de arbitrariedades, atropellando á los contribuyentes,» y califica de ineficaz la apelación de tales resoluciones á la Delegación de Hacienda, porque «preside el

—Calificado un delito de asesinato por haberse verificado por medio de incendio, ¿deberá estimarse además este último delito y castigar al culpable con la pena del más grave en su grado máximo, con arreglo al art. 90 del Código?—Cuest. única, página 100.

**Circunstancias atenuantes.**—V. *Provocación inmediata ó amenaza adecuada.*—*Vindicación próxima de una ofensa grave.*—*Arrebato y obcecación.*—*No intención de causar un mal tan grave.*—*Circunstancias atenuantes de igual entidad y analogía.*

**Circunstancias atenuantes de igual entidad y analogía.**—Artículo 9.º... 8.º, pág. 61.

—La devolución espontánea por los autores de un robo de los efectos sustraídos al perjudicado, ¿podrá estimarse como circunstancia atenuante análoga, según el núm. 8.º del art. 9.º del Código penal?—Cuest. única, pág. 61.

**Circunstancias eximentes.**—Art. 8.º, págs. 22 á 51.—V. *Agresión ilegítima.*—*Falta de provocación suficiente.*—*Necesidad racional del medio empleado para impedir ó repeler la agresión.*—*Cumplimiento de un deber.*—*Defensa de la persona ó derechos de los parientes.*—*Ejecución de un acto lícito con la debida diligencia,* etc.

**Clase determinada del Estado.**—Art. 482, pág. 253.

—¿Deberá ser considerado el clero como clase determinada del Estado, á los efectos del párrafo segundo del art. 482 del Código?—Cuest. única, pág. 253.

**Clero.**—V. *Clase determinada del Estado.*

**Coacción.**—Artículo 510, pág. 261.

—¿Constituirá la violencia que caracteriza el delito de coacción cualquier acto mediante el cual se obligue á otro, á la fuerza, á ejecutar lo que no quiere, aun cuando el culpable no haya ejercido precisamente el acto de fuerza sobre la misma persona ni maltratádola?—Cuest. única, pág. 261.

**Coacciones electorales.**—V. *Ley electoral de 20 de Agosto de 1870 y de 28 de Diciembre de 1878.*

**Coacción ó vejación injusta.**—Artículo 604... 5.º, pág. 321.

—El Notario que, en vista de la negativa de un sujeto á asistir como testigo al otorgamiento de una escritura pública, requiere á un agente de la Autoridad para que bajo su responsabilidad conduzca á aquél á su estudio, como así lo hizo, firmando



el mencionado sujeto como tal testigo, aunque bajo la protesta de que lo hacía á la fuerza, ¿será responsable cuando menos de la falta de *coacción ó vejación injusta*, prevista y penada en el art. 604, núm. 5.º del Código?—Cuest. única, pág. 321.

**Cohecho.**—Pena del funcionario público que percibe por sí ó por persona intermedia dádiva ó presente, ó acepta ofrecimiento ó promesa por abstenerse de un acto que debiera practicar en el ejercicio de los deberes de su cargo.—Art. 398, pág. 204.

—Instruidas diligencias sumariales por un Juez municipal sobre cierto hecho en virtud de denuncia del Alcalde, el Secretario del Juzgado municipal y el del Ayuntamiento proponen á los que fueron objeto del proceso que romperán dichas diligencias si les abonan una cantidad determinada de dinero; ¿cabe alegar que en esta *tentativa de cohecho* el *Secretario del Ayuntamiento* no cometió el hecho en el ejercicio de su cargo, y que, por tanto, no debe ser considerado en este caso como funcionario público?—Cuest. I, pág. 204.

—Aun cuando se ignore la clase y cuantía de la dádiva entregada ó ofrecida, ¿existirá el delito de *cohecho* siempre que ésta intervenga?—No determinándose, como se ha dicho, la clase y cuantía de la dádiva, ¿cabe aplicar al sobornador y al sobornado la pena de multa, que juntamente con la de privación de libertad establecen los artículos del 396 al 400 y 402 del Código?—Cuest. II, pág. 204.

—Á las personas responsables criminalmente de los delitos de *cohecho*, comprendidos en los artículos del 396 al 399, además de las penas señaladas en éstos, debe imponérseles la de inhabilitación especial temporal.—Art. 400, pág. 205.

—En la *tentativa ó delito frustrado de cohecho*, ¿deberá rebajarse en dos grados ó en uno respectivamente, con arreglo á los artículos 67 y 66 del Código, la pena accesoria de *inhabilitación especial temporal*, señalada en el 400 para los responsables criminalmente del expresado delito?—Cuest. única, pág. 205.—V. *Proposición*.

**Coligación con el fin de encarecer ó abaratar abusivamente el precio del trabajo ó regular sus condiciones.**—V. *Maquinaciones para alterar el precio de las cosas*.

**Cómplices.**—Quiénes son cómplices de un delito ó falta.—Art. 15, página 91.

—El que aconseja á varios sujetos que cometan un robo y les facilita noticias sobre la situación y condiciones de la casa en que había aquél de perpetrarse, sus moradores y medios de que podían valerse para penetrar en ella, ¿podrá decirse que no de-

terminó acto alguno de verdadera cooperación á la ejecución del hecho criminal, como exige el art. 15 del Código para calificarlo de *cómplice* del expresado delito?—Cuest. I, pág. 91.

—¿Cabe determinar la *complicidad* en un delito de homicidio, respecto de actos anteriores ó simultáneos del procesado, si éste no procedió de acuerdo con el matador ni aquéllos contribuyeron al fatal resultado producido?—Cuest. II, pág. 92.

—Cuando en la sentencia no resulta que los calificados de *cómplices* de un homicidio tomaran parte en la agresión que lo produjo ni hicieran otra cosa más que presenciaria, y si bien habla de la actitud hostil de los mismos, no así se dice en qué consistía ésta, ni se determina tampoco en qué consistió el anterior concierto que se dice rompieron al no tomar parte en la agresión, ¿deberá prosperar el recurso que contra dicha calificación de culpabilidad se interponga?—Cuest. III, pág. 93.

—V. *Autores de un delito ó falta. — Encubridores.*

**Condenados por sentencia firme.**—Pena en que incurren cuando durante el tiempo de la condena delinquen de nuevo.—Artículo 131, pág. 107.

—La agravación especial de penalidad que impone el art. 131 del Código á los que cometen un delito después de haber sido condenados por sentencia firme no empezada á cumplir ó durante el tiempo de su condena, ¿será extensiva al caso en que el culpable del nuevo delito hubiere sido condenado ejecutoriamente ó estuviere cumpliendo su condena por un delito exclusivamente militar?—Cuest. única, pág. 107.

**Contrabando y defraudación.**—Real decreto de 20 de Junio de 1852, pág. 329.

—Detentación de efectos de la clase de estancados que carezcan de signos positivos de legítima procedencia, si no se acredita su adquisición legal con arreglo á las leyes y reglamentos del fisco, siempre que la cantidad detentada exceda de la que permitan las instrucciones de Rentas á cada particular para su uso y consumo.—Art. 18... 3.ª, pág. 329.

—¿Constituirá el delito de *contrabando*, comprendido en el número 3.º del art. 18 del Real decreto de 20 de Junio de 1852, la ocupación en poder de un particular de cierto número de tabacos habanos menor de 300, precintados á nombre de personas distintas?—Cuest. única, pág. 329.

**Contrato simulado.**—V. *Otorgamiento, en perjuicio de otro, de un contrato simulado.*



**Cónyuge heredero.**—Para que el *cónyuge heredero* del agraviado difunto pueda querellarse por la injuria ó calumnia inferidas á éste, ¿será preciso que las mismas trasciendan á su personalidad?—Cuest. única, pág. 253.

**Correspondencia privada.**—V. *Detención de la correspondencia privada confiada al correo.*

**Corrupción de menores.**—V. *Prostitución ó corrupción de menores.*

**Cuadrilla.**—V. *Noche.*

**Culpable de dos ó más delitos ó faltas.**—Debe imponérsele todas las penas correspondientes á las diversas infracciones que ha cometido.—Art. 88, pág. 103.

—¿La *unidad del móvil* será bastante á determinar la *unidad del delito* cuando los actos ejecutados lo han sido en *sitios distintos*, han recaído en *diferentes personas* y mediado entre unos y otros *cierto espacio de tiempo*?—Cuest. I, pág. 103.

—Aun cuando se haya perpetrado el delito de robo en una *misma habitación* y siendo *uno mismo el perjudicado*, si se realizó aquél en *dos noches distintas*, ¿deberán calificarse y penarse *dos delitos de robo ó uno solo*?—Cuest. II, pág. 103.

—El que con una pistola dispara dos tiros á un sujeto é inmediatamente con arma cortopunzante le inflige lesiones menos graves, ¿deberá ser responsable separadamente de cada uno de dichos *dos delitos*, de *disparo* el uno, y de *lesiones* el otro, ó tan solo del más grave en el grado máximo, con arreglo al art. 90?—Cuest. III, pág. 103.

**Cumplimiento de un deber ó ejercicio legítimo de un derecho.**—Circunstancia eximente.—Art. 8.º, núm. 11, pág. 49.

—¿Cuándo podrá alegar válidamente que ha obrado en el *ejercicio legítimo de su cargo* la *Autoridad* que al hacer uso de la fuerza contra el ciudadano le causa un mal material mayor ó menor?—Cuest. I, pág. 49.

—El que al *preparar un recurso de responsabilidad criminal contra una Sala de justicia*, dice en su escrito que ésta ha faltado á sabiendas á la verdad y que «la sentencia se había redactado antes de la celebración del juicio», ¿podrá eximirse de la pena del delito de *desacato* so pretexto de que obró en el *ejercicio legítimo de su derecho*?—Cuest. II, pág. 49.

—El guarda de un término municipal que yendo de orden del Juez en busca de un sujeto sobre quien recaían sospechas de

ser autor de un hurto, al avistarlo y ordenarle que se fuera con él, pues le llamaba el Juez municipal, como no quisiera detenerse, le advierte que si daba un paso más le encendía de un tiro, y como echase á correr, le disparó su escopeta por la espalda, dejándole cadáver en el acto, ¿podrá alegar válidamente á su favor la *exención de responsabilidad criminal* que determina el art. 8.º, núm. 11 del Código, por haber obrado en el cumplimiento de su deber?—Cuest. III, pág. 49.

—La circunstancia 11.ª del art. 8.º del Código ¿es susceptible de ser apreciada en el concepto de *eximente incompleta*?—Cuestión IV, pág. 50.

—V. *Desacato*.

## CH

**Cheques.**—V. *Falsedad cometida por el particular en documento público ó oficial, ó en letras de cambio, etc.*

## D

**Daño cualquiera no penado en los libros 2.º y 3.º del Código, causado intencionalmente, por negligencia ó por descuido.**—Artículo 619, pág. 324.

—Ya que no penable con arreglo al art. 613 la entrada de ganado lanar en heredad ajena sin causar daño ó causándolo inferior á 5 pesetas, ¿lo será con arreglo al 619 del propio Código?—Cuest. única, pág. 324.

**Defensa de la persona ó derechos de los parientes.**—Artículo 8.º... 5.º, pág. 47.

—El que al ver á un primo suyo acosado por un sujeto que le acometía navaja en mano, y de cuyos golpes se defendía con un palo y un tapabocas, da al agresor dos puñaladas que le derriban al suelo y le producen la muerte, ¿deberá ser declarado



*exento de responsabilidad criminal*, en el supuesto de no haber provocado ni en poco ni en mucho el suceso, por haber obrado en justa defensa de su pariente, con todos los requisitos de la Ley?—Cuest. I, pág. 47.

—Aun cuando el procesado haya obrado en defensa de su hermano, al verle en peligro, si ésta fué quien acometió y se colocó en esta situación peligrosa por la defensa que contra su ataque hiciera al agredido, ¿podrá aquél alegar á su favor la *exención de responsabilidad criminal* del art. 8.º, núm. 5.º del Código, ó será responsable del propio delito cometido por su dicho hermano, atenuado, empero, por la circunstancia de arrebato y obcecación?—Cuest. II, pág. 47.

**Defensa de los derechos dominicales.**—V. *Agresión ilegítima*.

**Defensa personal.**—V. *Agresión ilegítima*.—*Necesidad racional del medio empleado para impedir ó repeler la agresión*.

**Defraudación.**—V. *Contrabando y defraudación*.—*Estafa*.

**Defraudación al público en la venta de sustancias, ya sea en cantidad, ya en calidad.**—V. *Aprehensión á traficantes ó vendedores, etc.*

**Defraudación de la propiedad literaria ó industrial.**—Artículo 552, pág. 301.

—El editor tipógrafo que constándole que cierta hoja ilustrada era propiedad de un tercero, por habérsela transferido con todos los requisitos legales su autor, sin obtener licencia de su dueño la reproduce aunque en tamaño menor, encargando á un dibujante la ejecución material en piedras litográficas que al efecto le facilitó, ¿será responsable del delito de *defraudación de la propiedad intelectual*, previsto y penado en el art. 552 del Código?—¿Podrá caberle alguna responsabilidad en este delito al *dibujante* que lo ejecutó materialmente?—Cuest. única, página 301.

**Delegado de Hacienda.**—V. *Calumnia, injuria ó insulto á la Autoridad*.

**Delito.**—Su definición.—Art. 1.º, pág. 7.

—La responsabilidad de los actos constitutivos de delito ó falta, ¿habrá de estar subordinada á la intención especial del agente de quebrantar la ley, ó bastará que siendo libre la acción produzca este resultado?—Cuest. I, pág. 7.

—Si habiéndose propuesto el criminal realizar la muerte de una sola persona, por medio de una materia explosiva de gran po-

tencia, contenida en una caja que al efecto le remitiera, al estallar ésta en el acto de abrirla no sólo se produce la muerte de aquel á quien el culpable quiso hacer víctima de su venganza, sino además la de otra persona que casualmente se hallaba en la misma habitación, ¿cabrá alegar válidamente que por la especialidad del caso en cuanto al pensamiento generador, medio de ejecución ideado y usado y resultado producido en un solo momento, no es posible apreciar legalmente más que la existencia de un solo delito?—Cuest. II, pág. 8.

—El que incomodado con una persona la acomete dándole un empujón que la derriba al suelo, produciéndose en la caída varias lesiones graves, ¿será responsable de este delito *intencional* y *malicioso*, ó lo será tan sólo de una simple *imprudencia*?—Cuestión III, pág. 8.

**Delito cometido por quien ha sido condenado por sentencia firme no empezada á cumplir ó durante el tiempo de su condena.**—V. *Condenados por sentencia firme*.

**Delito contra la forma de gobierno.**—Vivas ó otros gritos, en manifestaciones políticas, reuniones públicas ó sitios de numerosa concurrencia, que provoquen aclamaciones directamente encaminadas á la realización de cualquiera de los objetos determinados en el art. 181 del Código.—Art. 182... 1.º, pág. 356.

—El grito de «Viva la República» dado en una reunión numerosa y contestado por todos ó casi todos los concurrentes á la misma, ¿será constitutivo del delito *contra la forma de gobierno*, definido en el núm. 1.º del art. 182 del Código?—Cuest. única, página 356.

**Delito contra la forma de gobierno, sin alzamiento ni hostilidad abierta contra éste.**—Artículo 185, pág. 111.

—Aun cuando la *coalición republicana* no tenga en definitiva más objeto que el reemplazar con esta forma de gobierno el monárquico-constitucional que rige en España, la defensa que de aquélla se haga en periódicos ó discursos, ¿constituirá el delito *contra la forma de gobierno*, previsto y penado en el art. 185 del Código, en relación con el 181, núm. 1.º del mismo?—Cuestión única, pág. 111.

**Delito distinto del que se propuso ejecutar el culpable.**—Artículo 65, pág. 99.

—¿Qué circunstancias se requieren para que proceda la aplicación del art. 65 del Código penal?—Cuest. única, pág. 99.

**Delito frustrado.**—Página 9.



- Cuando el procesado es sorprendido en el mismo campo ó dehesa donde acaba de coger frutos ó leñas, ¿deberá calificarse el hurto de *frustrado* ó *consumado*?—Cuest. I, pág. 9.
- El que en el momento mismo de apoderarse de la cosa ajena, viéndose sorprendido la arroja al suelo, ¿será responsable del delito de hurto *frustrado* ó *consumado*?—Cuest. II, pág. 9.
- El que habiendo sido nombrado Comisionado de apremios para el cobro de débitos á la Hacienda pública por derechos de superficie que adeudaba cierta sociedad minera, se presenta en una tienda y exige de su dueño una cantidad determinada para no presentar denuncia, en virtud de la cual habria de pagar una fuerte multa por no estar clasificado el establecimiento en la clase correspondiente, logrando así que se le entregue parte de la cantidad pedida, siendo sorprendido en aquel acto por los agentes de la Autoridad apostados al efecto, ¿será responsable del delito de estafa *consumada* ó simplemente *frustrada*?—Cuestión única, pág. 10.
- El que presentándose en un comercio y concertada la compra de un objeto, entrega para su pago un billete de Banco falso, y siendo rechazado, da otros tres igualmente falsos, por lo que se le detuvo en el acto, ocupándosele dichos cuatro billetes y otro más, también falso, ¿será responsable de *tentativa de expendición* de dichos billetes, ó de delito *frustrado*?—Cuest. única, página 10.
- ¿Cuándo constituirá el delito de *homicidio* ó *asesinato frustrado* el acto de disparar un arma de fuego contra una persona?—Cuestión I, pág. 11.
- La *reiteración de disparos de arma de fuego* hechos contra determinada persona, ¿será por sí sola suficientemente inductiva de que la intención del que los hizo fué *matar* á su contrario, para calificar el hecho de *homicidio frustrado*?—Cuest. II, pág. 12.
- Aun cuando al disparo de arma de fuego hecho contra determinada persona y consiguiente lesionamiento de ésta preceda la *amenaza de matarla*, ¿deberá calificarse el hecho de *homicidio frustrado*, si la forma y términos en que aquél se ejecutó y el resultado del acto no guardan relación con la amenaza proférica por el agente?—Cuest. III, pág. 13.
- El que al ver á una hija suya derribada al suelo por un sujeto que estando jugando con otro tropezó con ella, le coge por el cuello y con una pistola le hace un disparo en la región posterior del mismo, infiriéndole una lesión de la que sanó sin defecto ni deformidad á los cincuenta y cinco días, ¿deberá ser calificado de *homicidio frustrado*, ó simplemente de *disparo de arma de fuego y lesiones*?—Cuest. IV, pág. 14.

- Un disparo de arma de fuego, aun cuando sea *reiterado*, hecho á quemarropa y dirigido á la cabeza, ¿determinará suficientemente, sin otros datos acerca de la verdadera intención del agente, la existencia del delito de homicidio ó asesinato frustrado?—Cuest. V, pág. 15.
- El que arrebatado y obcecado porque dos sujetos habían intentado subir á casa de su novia para hablar y divertirse con ella, sin tener cuestión ni palabra con los mismos, les dispara sucesivamente un tiro de revólver á cada uno, á tres pasos de distancia, causándole al uno una herida en el cuello, de la que sanó á los ciento cincuenta y nueve días, y al otro una lesión en la cara de la que curó á los ciento setenta, ¿será responsable del delito de homicidio frustrado, ó del doble delito de disparo de arma de fuego y lesiones graves, penable con arreglo al art. 90 del Código?—Cuest. VI, pág. 15.
- Si el culpable cargó primero friamente la escopeta con bala y perdigones; sacó después de su casa al ofendido con el pretexto de que le acompañara á vigilar la suya, y después de haber andado un rato y á cinco pasos de aquél le disparó un tiro dirigiendo la puntería hacia el centro de la cavidad torácica, aun cuando, por causa inexplicable, el tiro sólo le atravesara el muslo, ¿deberá calificarse este hecho de simple disparo de arma de fuego y lesiones, ó de homicidio frustrado?—Cuest. I, pág. 17.
- El que de noche llama desde la calle á un sujeto que estaba tranquilamente sentado en una taberna, diciéndole que salga fuera; y haciéndolo así y sin mediar disputa ni motivo conocido, le dispara un tiro de revólver á muy corta distancia y á la cabeza, causándole lesiones que tardaron en curar más de treinta días, con pérdida completa de la visión de un ojo, ¿será responsable del delito de lesiones graves, ó del de homicidio ó asesinato frustrado?—Cuest. II, pág. 17.

**Delito militar.**—V. *Condenados por sentencia firme.*

**Delitos contra el libre ejercicio de los cultos.**—V. *Escarnio público, etc.*

**Delitos contra la libertad y seguridad.**—Encierro ó detención de una persona, privándola de su libertad, verificados por un particular.—Art. 495, pág. 255.

- El encierro de un loco por su familia en una habitación donde permaneció durante algunos años amarrado con una cadena clavada en el suelo, pero que le permitía los movimientos necesarios para todas las operaciones naturales, y atendido además en su alimentación, como lo demostraba su estado físico, ¿constituirá el delito de detención ilegal, previsto y penado en el artículo 495 del Código?—Cuest. única, pág. 255.



**Delitos contra la salud pública.**—Artículos 351 y 356, páginas 187 y 188.

—El que, sin la competente autorización, expone entre varias sustancias algunas exclusivamente medicinales, y otras venenosas, cuyo uso sin prescripción facultativa puede ser nocivo á la salud, ¿será responsable del delito *contra la salud pública*, comprendido en el art. 251 del Código, ó quedará sujeto á las penas que en el capítulo VIII de las Ordenanzas de Farmacia, de 18 Abril de 1860, se señalan á sus infractores?—Cuest. única, pág. 187.

—Para que exista la *consumación* del delito contra la salud pública, comprendido en la sanción del art. 356 del Código, ¿será indispensable, tratándose de quien está habitualmente dedicado á la expendición de un artículo, que la aprehensión de este mismo género adulterado se haga precisamente *en el acto de su venta*, ó bastará que se le encuentre en el almacén ó puesto donde lo expone ó exhibe para su expendición?—Cuestión única, pág. 188.

**Delitos de escándalo público.**—V. *Ofensa al pudor ó á las buenas costumbres*.

**Delitos distintos.**—V. *Culpable de dos ó más delitos*, etc.

**Delitos electorales.**—V. *Ley electoral de 20 de Agosto de 1870*. — *Ley electoral de 28 de Diciembre de 1878*.

**Delitos penados por leyes especiales.**—Artículo 7.º, pág. 22.—Véase *Ordenanzas de Farmacia*.

**Denuncia falsa.**—V. *Acusación ó denuncia falsa*.

**Dependientes del resguardo de consumos.**—V. *Atentado contra la Autoridad y sus agentes*.

**Desacato.**—Artículo 266, pág. 147.

—El que en un acto de la vida social dice á un sujeto, á la sazón Alcalde interino de la población, «que es un chismoso, enredador, que lleva todo el pueblo revuelto,» y al contestarle el aludido «que calle y no maltrate á la Autoridad,» replica «que no le reconoce por tal y que lo mismo que le había dicho allí se lo diría en cualquiera otra parte,» ¿será responsable del delito de *desacato á la Autoridad*?—Cuest. I, pág. 147.

—El que llamado á prestar declaración en un proceso ante un Juez municipal, se resiste á declarar en el fondo, expresando desconfianza en dicho Juez y sus suplentes, afirmando «que tanto aquella oficina como las demás dependencias públicas

eran manejadas bajo fines particulares,» ¿será responsable del delito de *desacato á la Autoridad*?—Caso afirmativo, ¿podrá eximirle de la pena de este delito la alegación de que obró en el ejercicio legítimo de un derecho al recusar de este modo al Juez?—Cuest. II, pág. 147.

—Una simple disputa ó altercado con una Autoridad; el pediría en tono más ó menos agrio ó destemplado explicaciones por un acto que aquélla realizara en el ejercicio de sus funciones, ¿será bastante para determinar la existencia del delito de *desacato*?—¿Cabrán ni aun calificar el hecho como simple *falta*, si no se precisan en la sentencia los hechos que en su caso pudieran determinar la falta de consideración y de respeto á dicha Autoridad?—Cuest. III, pág. 148.

—En un escrito dirigido á un Juez pidiéndole su recusación se consigna el párrafo siguiente: «La enemistad de V. S., dada nuestra respectiva posición de Juez y Abogado, la deducimos de una latente prevención que hemos advertido en los actos de V. S. hacia nosotros, que determinan prevenciones y correcciones disciplinarias impuestas, algunas de las cuales lo fueron con tal precipitación, que V. S. propio las revocó, y sobre otras existen recursos:» ¿determinarán tales frases y conceptos el delito de *desacato á la Autoridad judicial*?—Cuest. IV, pág. 149.

—El *Letrado* defensor de un querellante por injuria, que en escrito interponiendo recurso de súplica contra un auto dictado por el Juez de instrucción, dice entre otras cosas «que no puede consentirse la equivocada teoría que contiene la providencia suplicada, en la que la parcialidad de V. S. por el procesado (protesto mi respeto) le lleva á sostener que el delito no denigra al procesado,» ¿será responsable por estas frases y conceptos del delito de *desacato á la Autoridad judicial*?—Cuest. V, pág. 150.

—El que enfurecido con un contrincante en un juicio verbal al sentirse insultado por éste, y al correr tras él, desatiende las exhortaciones del Juez municipal, y por haberle entonces sujetado éste, dice con referencia al mismo: «Me c..... en D..... y en el Juez, y esto pasa porque no tienes c..... de Juez,» ¿será responsable del delito de *desacato ó de la falta de ofensa á la Autoridad*, comprendida en el núm. 5.º del art. 589 del Código?—Cuestión VI, pág. 151.

—El que en un escrito dirigido á un Tribunal pidiendo testimonio de ciertos particulares para entablar un recurso de responsabilidad contra el mismo, califica de injustas sus providencias y de *prevaricadores* á sus individuos, ¿podrá eximirse de la pena del delito de *desacato* alegando que obró en el ejercicio de un derecho?—Cuest. VII, pág. 151.

—V. *Calumnia, injuria ó insulto á la Autoridad*.



**Desistimiento voluntario del culpable.**—V. *Tentativa*.**Desobediencia de los funcionarios públicos á órdenes de Autoridad superior.**—Artículo 380, pág. 193.

—El Alcalde que habiendo recibido orden del Gobernador de la provincia de reponer á los Concejales dimitentes del año anterior, pone en conocimiento de dicho Superior que no le era posible darles posesión por ser deudores á los fondos públicos; y reiterada la orden por el Gobernador para que la cumpliera en el término de veinticuatro horas, deja de hacerlo, dando la posesión, empero, dentro de dicho plazo el Teniente de Alcalde, y ratificándola el propio Alcalde tres días después, ¿será responsable del delito de *desobediencia*, comprendido en el art. 380 del Código?—Cuest. I, pág. 193.

—¿Podrá calificarse y penarse como delito de *desobediencia*, comprendido en el art. 380 del Código, el incumplimiento por parte de una Municipalidad de órdenes reiteradas del Gobernador de la provincia sobre el cierre de una calleja y otorgamiento de la escritura de venta de varias parcelas al comprador de las mismas, si no se corrigió antes gubernativamente la conducta resistente de dicho Ayuntamiento, con arreglo á lo dispuesto en los arts. 180, 181 y 182 de la ley Municipal vigente?—Cuestión II, pág. 194.

—¿Será responsable del delito de *desobediencia*, previsto y penado en el art. 380 del Código, ó de algún otro, el Alcalde que manda retirar del local señalado como colegio electoral á un Notario no elector, que con el distintivo de su cargo, y á requerimiento de uno de los electores, se constituyera allí para presenciar y dar fe de cuanto ocurriera desde la constitución de la Mesa Interina hasta la votación y escrutinio de la definitiva?—Cuest. III, página 194.

—El Alcalde de un pueblo que se opone y resiste á que por el de otro pueblo se proceda á la corta de leñas de un monte de su término jurisdiccional, que al segundo le fuera concedido por el Gobernador civil de la provincia, cuyo acuerdo, así como el nombramiento del Ayudante de montes que había de autorizar la corta, no consta que se le comunicara, ¿será responsable, aun suponiéndosele conocedor de dicha resolución del Gobernador, del delito de *desobediencia*, previsto y penado en el art. 380 del Código?—Cuest. IV, pág. 196.

**Desobediencia grave á la Autoridad ó á sus agentes.**—Véase *Resistencia á la Autoridad*.**Desobediencia leve á la Autoridad.**—V. *Falta de respeto y consideración á la Autoridad*.**Desórdenes públicos.**—Tumulto ó grave turbación del orden en

la Audiencia de un Tribunal ó Juzgado, en los actos públicos propios de cualquiera Autoridad ó Corporación, en algún colegio electoral, oficina ó establecimiento público, en espectáculos ó solemnidad ó reunión numerosa.—Art. 271, pág. 162.

—Celebrándose una romería en el campo, promuévese un tumulto por varios de los concurrentes, haciéndose al aire un disparo de arma de fuego y empuñando algunas armas blancas, por lo que se ocasiona tan grave alarma, que la gente se dispersa, al- quiera transcurrido algún tiempo vuelve á reunirse: ¿deberá calificarse á los autores del hecho como responsables del *delito de desorden público*, previsto y penado en el art. 271 del Código, ó simplemente de la *falta* comprendida en el núm. 1.º del 588?—Cuest. única, pág. 162.

**Despoblado.**—V. *Noche*.

**Despoblado ó cuadrilla.**—V. *Noche*.

**Desprecio de la dignidad del ofendido.**—Circunstancia agravante.—Art. 10... 20.º, pág. 81.

—En un delito de *calumnia* inferida á un *Sacerdote*, ¿deberá apreciarse la circunstancia agravante de *ofensa de la dignidad del ofendido*?—Cuest. 1, pág. 81.

—En el delito de *denuncia falsa* hecha contra un *Juez ó Magistrado*, y por el cual se mandó proceder de oficio contra el denunciador ó acusador al desestimar el Tribunal la querrela de *antejuicio* interpuesta por aquél, ¿deberá apreciarse la circunstancia agravante de haberse cometido el delito con *ofensa del respeto* que por su *dignidad* merecía el perjudicado?—Cuest. II, página 82.

**Desprecio ó ofensa de la Autoridad pública.**—Circunstancia agravante.—Art. 10... 16, pág. 80.

—La circunstancia agravante de ejecutar el delito *en desprecio ó con ofensa de la Autoridad pública*, ¿deberá apreciarse en un homicidio perpetrado en la persona de una Autoridad, aun cuando sea por motivo no relacionado con sus funciones oficiales?—Cuest. única, pág. 80.

**Destierro.**—V. *Apremio personal*.

**Detención arbitraria ó ilegal.**—Cometida por funcionario público.—Arts. 210 y 212, páginas 112 y 113.

—Los *Alcaldes ó Gobernadores civiles*, están autorizados por alguna Ley del Reino para detener á los ciudadanos españoles por carecer en un determinado momento de documentos justifi-



cativos de su personalidad?—Aun cuando hayan procedido á la detención del ciudadano por presunta responsabilidad criminal de éste, ¿incurrirán en el delito de *detención arbitraria ó ilegal* si no lo pusieron á disposición de la Autoridad judicial?—¿Será imputable á los mismos la *total duración de la detención*, aun cuando se haya dilatado ésta sin culpa de otras personas, por razón de los mismos medios empleados por dichas autoridades para la conducción del detenido de un punto á otro?—Cuestión única, pág. 112.

- El Teniente Alcalde de un pueblo que, encargado del mando por delegación del Alcalde que había de presidir una mesa electoral, con el cometido especial de que velara por la conservación del orden público que había fundado temor de que alguien se proponía alterar, al encontrar en la esquina de una calle un grupo de cinco personas, las intima que se disuelvan, y no siendo obedecido, las manda detener y conducir á la casa de la villa, donde permanecieron ocho horas, después de las cuales las puso en libertad, aunque sin dar conocimiento del hecho á la Autoridad judicial, ¿será responsable del delito de *detención arbitraria*, previsto y penado en el art. 212 del Código?—Cuest. única, pág. 113.

**Detención de la correspondencia privada confiada al Correo.**—Pena del funcionario público que, no siendo Autoridad judicial, la lleva á cabo.—Art. 218, pág. 115.

- El Alcalde de un pueblo que, á virtud de quejas producidas por varios particulares contra el cartero y el peatón de la correspondencia, respecto á faltas en el servicio, y que la correspondencia no se recogía y conducía por dichos funcionarios, sino por otros, al personarse al buzón de la ambulancia y cerciorarse de la verdad de esta queja, detiene el paquete que había recogido un sujeto que no era el cartero, aunque, al parecer, con autorización de éste, y lo deposita en poder de un vecino que para ello nombró en el acto, previo inventario y recibo de la correspondencia que dicho paquete contenía, ¿será responsable por este hecho del delito de *detención de la correspondencia privada*, previsto y penado en el art. 218 del Código?—Cuestión I, pág. 115.

- ¿Será responsable del delito de *detención de la correspondencia*, comprendido en el art. 218 del Código, el Administrador de Correos que por sospechas de que se hubiesen sustraído algunas cartas del paquete de correspondencia dirigido á cierto punto, manda á un subalterno de un pueblo por donde debía dirigirse la correspondencia que abra la valija y le remita el paquete antedicho, sufriendo éste por tal devolución el consiguiente retraso?—Cuest. II, pág. 116.

**Detención ilegal.**—V. *Delitos contra la libertad y seguridad.*

**Devolución espontánea de los efectos sustraídos.**—V. *Circunstancias atenuantes de igual entidad y analogía.*

**Diputación provincial.**—V. *Prolongación de funciones.*

**Director de establecimiento penal.**—V. *Alcaide de cárcel ó Jefe de establecimiento penal.*

**Director de un hospicio.**—V. *Atentado contra la Autoridad y sus agentes.*

**Disfraz.**—V. *Astucia, fraude ó disfraz.*

**Disolución de una reunión ó manifestación pacífica.**—V. *Reunión ó manifestación pacífica.*

**Disparo de arma de fuego.**—Artículo 423, pág. 220.

—Aun cuando el arma disparada contra un individuo que se hallaba en un grupo de personas no tenga el alcance de la distancia á que se hizo el disparo, ¿compeceará esta circunstancia á la determinación del delito previsto y penado en el art. 423 del Código?—Cuest. I, pág. 220.

—El que dispara un tiro contra una ventana de una casa, con conocimiento de que frente á ella había una cama y durmiendo en ésta una persona, viniendo el proyectil á implantarse en el colchón, ¿será responsable del delito de *disparo de arma de fuego* contra determinada persona?—Cuest. II, pág. 220.

—Tratándose de un delito de *lesiones graves*, previsto en el artículo 431, núm. 2.º del Código y castigado con la prisión correccional en sus *grados medio y máximo*, ¿deberá apreciarse también el *disparo de arma de fuego* con que aquél se cometió, y penar el más grave en su grado máximo con arreglo al artículo 90?—Cuest. III, pág. 221.

—El acto de disparar contra un grupo de personas, por más que no vaya dirigido á ninguna de ellas *determinadamente* ó que el proyectil dé á otra distinta, ¿constituirá el delito que prevé y pena el art. 423 del Código?—Cuest. IV, pág. 221.

—V. *Delito frustrado.*

**Dogmas de la Religión.**—V. *Escarnio público de alguna de los dogmas, etc.*



## E

**Ejecución con escándalo, en un lugar religioso, de actos que ofenden el sentimiento religioso de los concurrentes.**—Artículo 241, pág. 125.

—Al pasar unos sujetos algo borrachos por un camino llamado de los Pasos, en las afueras de una ciudad, donde existen las casetas del Calvario ó Via Crucis, arrojan piedras contra algunas de las puertas que las cierran, fuerzan una de ellas, ó introduciéndose en la caseta, rompen un vaso de vidrio destinado á alumbrar, y tomando uno de ellos un Cristo, al querer apoderarse otro de él, forcejeando ambos lo rompen, cayendo al suelo un trozo de dicho Crucifijo, cuyos hechos, presenciados por dos mujeres y llegados á noticia del público, produjeron la consiguiente alarma ó escándalo; ¿deberán los mismos calificarse como delito de *profanación pública de imágenes sagradas*, previsto y penado en el núm. 4.º del art. 240, ó como delito de *escándalo con ofensa de los sentimientos religiosos*, comprendido en la sanción más benigna del 241?—Cuest. única, pág. 125.

**Ejecución de un acto lícito con la debida diligencia causando un mal por mero accidente, sin culpa ni intención de causarlo.**—Artículo 8.º... 8.º, pág. 48.

—El que hallándose entretenido en tirar al blanco y á los pajarillos en el patio jardín de su casa con una escopeta de las llamadas de salón, aprovechando la ocasión en que, con motivo de la lluvia, los trabajadores habían suspendido sus tareas, hiere gravemente de un disparo á uno de éstos que por casualidad se asomara en aquel instante á una de las ventanas del patio, ¿será responsable del delito de *lesiones por imprudencia temeraria*, ó deberá ser declarado *exento de responsabilidad* por haber ejecutado un acto lícito, con la debida diligencia, y sin culpa ni intención de causar el mal producido?—Cuestión única, pág. 48.

**Ejercicio legítimo de un derecho, oficio ó cargo.**—V. *Cumplimiento de un deber*.

**Ejercicio, sin título ó causa legítima, de actos propios de una Autoridad ó funcionario público, atribuyéndose carácter oficial.**—Artículo 342, pág. 183.

- ¿Serán responsables del delito de *usurpación de atribuciones*, previsto y penado en el art. 342 del Código, el Concejal de Ayuntamiento y varios electores que después de verificada la elección bajo la presidencia del Alcalde, con arreglo á la Ley, constituyen nueva Mesa y verifican segunda elección, firmando las actas que lo justifican?—Cuest. I, pág. 183.
- ¿Cabe calificar de delito de *usurpación de funciones*, previsto y penado en el art. 342 del Código, el hecho de haber un Concejal de Ayuntamiento, en ausencia del Alcalde y Teniente de Alcalde, pero sin corresponderle funcionar por existir en la localidad antes que él otro individuo del Ayuntamiento, mandado reconocer por facultativo al Secretario de la Corporación municipal por no haber concurrido á la oficina alegando enfermedad?—Cuest. II, pág. 184.

**Empresa de ferrocarril.**—V. *Responsabilidad civil subsidiaria*.

**Enajenación, arriendo ó gravamen de cosa inmueble por quien se finge dueño de ella.**—Artículo 550, párrafo primero, página 295.

- Aun cuando por dos escrituras públicas resulta que unos testamentarios vendieron sucesivamente á dos sujetos una misma finca, si resulta por otra que sólo cobraron de cada uno de ellos la parte de precio relativamente á la porción que se les adjudicaba, consignando además el Tribunal sentenciador que sin duda por equivocación del Notario que extendió dichas escrituras se expresó en ellas que lo que se vendía á los compradores era la totalidad de la finca, en vez de parte de ella á cada cual, ¿cabrá calificar semejante hecho de delito de *estafa*?—Cuestión I, pág. 295.
- Aun cuando el art. 550 del Código sólo se refiere al que, fingiéndose dueño de una cosa inmueble, la enajena, arrienda, grava ó empeña, ¿deberá ser considerado como *coautor* del delito el comprador que conviene con el vendedor en comprarle una finca que sabía que con anterioridad había éste vendido á tercera persona, prevalléndose uno y otro de la circunstancia de no haberse inscrito en el Registro de la Propiedad la primitiva venta?—Cuest. II, pág. 296.

**Encubridores.**—Quiénes son encubridores de un delito.—Art. 16, página 94.

- El que se concierta con otro para comprarle el trigo que pudiera robar á un tercero, ¿deberá ser calificado de *coautor* del delito, ó simplemente de *encubridor* del mismo?—Cuest. I, pág. 94.
- Cométese un delito de sangre en una calle, y uno de los transeúntes recoge del sitio mismo del suceso donde se halla tendido



el herido un cuchillo ensangrentado y un estoque y los entrega, para evitar compromisos, al dueño de una tienda para que los guarde, quien, al saber el hecho, tira el cuchillo al pozo y manda á un su dependiente que eche el estoque donde nadie lo coja: ¿determinarán estos actos el *encubrimiento* que define el número 2.º del art. 16 del Código?—Cuest. II, pág. 94.

—El que se concierta con unos sujetos para que éstos perpetren un robo, comprometiéndose él á poner en seguridad en su casa los efectos sustraídos, ¿deberá ser considerado como *coautor* del delito, como *cómplice* del mismo, ó simplemente como *encubridor*?—Cuest. III, pág. 95.

—Cuando en la sentencia recurrida sólo se consigna á cargo del procesado que en su poder se hallaron unos bocoyes de vino hurtados que introdujo en su casa de noche, borrándoles sus marcas distintivas y pintándolas con otro color, sin que diera razón de su legítima procedencia, ¿deberá calificarse la responsabilidad de aquél en concepto de *autor* del delito, ó de mero *encubridor* del mismo?—Cuest. IV, pág. 96.

—V. *Autores de un delito ó falta.*

**Engaño.**—Defraudación ó perjuicio causados á otro usando de cualquier engaño no expresado en los artículos anteriores de esta sección.—Art. 554, pág. 302.

—Al apearse un sujeto en la estación de un ferrocarril, toma un coche para que le conduzca á su casa, colocando en él el conductor el equipaje, compuesto de un baúl, una maleta, unas alforjas con capones y una bota de vino; llegado el coche á su destino, sin haberse detenido en el fiato, y después de subido el equipaje á la habitación, le exige el cochero tres duros por el viaje, que después de alguna resistencia del viajero logra que le pague, expresando que cinco pesetas eran el importe del carruaje y las diez restantes por haberse introducido efectos sujetos al impuesto de consumos, llevándose, al retirarse, sin ser visto, los dos capones: además del delito de *hurto* de éstos, ¿existirá el de *estafa* por la obtención, en la forma dicha, de las diez pesetas entregadas?—Cuest. I, pág. 302.

—El hecho de enajenar un deudor una finca que en documento no inscrita en el Registro de la Propiedad dió á un tercero en garantía de una cantidad de dinero recibida de éste en préstamo, si bien no constituye el delito de *estafa*, previsto y penado en el párrafo segundo del art. 550, ¿constituirá por sí sólo, cuando menos, el delito de *engaño*, comprendido en el art. 554?—Cuest. II, pág. 302.

—En el delito de *estafa* del art. 554 del Código, ¿será condición precisa que el engaño preceda á la obligación que lo origina?—Cuestión III, pág. 303.

**Entrada de determinados ganados en heredad ajena, sin causar daño ó causándole inferior de 5 pesetas.**—Artículo 612, página 322.

—Aun cuando no se haya practicado tasación alguna del daño que causara la intrusión en heredad ajena de 113 cabezas de ganado *cabrío* y 7 de *lanar*, ¿será revocable en casación la sentencia del Juez que condena al dueño de dicho ganado á la multa de 14 pesetas, con arreglo al art. 612 del Código?—Cuestión única, pág. 322.

**Entrada de ganados en heredad ajena, causando daño que exceda de 5 pesetas.**—Falta contra la propiedad.—Art. 611, página 322.

—La *entrada de ganados* de un particular en *heredad del común*, sin permiso ó autorización del Municipio, ¿será penable como *falta*, según los casos, con arreglo á los artículos 611, 612 y 613 del Código?—Cuest. única, pág. 322.

**Entrada de ganados en heredad ajena, causada de propósito ó por abandono ó negligencia de los dueños ó ganaderos.**—Artículo 613, pág. 323.

—¿Será penable como falta la entrada de *ganado lanar* en heredad ajena, *sin causar daño ó causándole inferior á 5 pesetas*?—Cuestión única, pág. 323.

**Escalamiento.**—Circunstancia agravante.—Art. 10... 21.<sup>a</sup>, página 84.

—¿Dejará de existir el *escalamiento* cuando se entra en una casa ó corral por una brecha ó abertura que se encuentra practicada en ella?—Cuest. única, pág. 84.

**Escándalo.**—V. *Amancebamiento del marido*.

**Escándalo público.**—V. *Ofensa al pudor y las buenas costumbres*.

**Escarnio público de alguno de los dogmas ó ceremonias de la Religión.**—Artículo 240... 3.<sup>o</sup>, pág. 121.

—¿Constituirán el delito de *escarnio público de los dogmas y ceremonias de la Religión católica* las frases y conceptos siguientes consignados en un artículo de periódico: «Esas catedrales soberbias en que altísimas dignidades se congregan para insultar la miseria del pueblo con fastuosas ostentaciones.... El dogma católico es un monstruoso cuerpo de doctrina que rayando en el absurdo ó en el ridículo fomenta la hipocresía y determina los más criminales atentados, así en la vida particular como en la pública, etc.?»—Cuest. 1, pág. 121.



- Un artículo de periódico cuya tendencia no es otra que el hacer burla y mofa de una peregrinación católica, y en el que á la vez se ridiculizan las bendiciones del Obispo que la preside y se hace otro tanto con el dogma de las indulgencias, ¿será constitutivo del delito de *escarnio público de las ceremonias y dogmas de la Religión católica*?—Cuest. II, pág. 121.
- El que en un suelto de periódico, refiriéndose al caso del hallazgo en un buhardilla del cadáver de un niño que había estado tres días insepulto, porque era pobre y no figuraba en el padrón, dice «que los pobres se mueren de hambre y frío, mientras los muñecos de los templos católicos están cubiertos de alhajas y piedras preciosas,» ¿será responsable del delito de *escarnio público de dogma de la Religión católica*?—Cuest. III, página 122.
- ¿Caerá bajo la sanción del art. 240, núm. 3.º del Código, como *escarnio de los dogmas de la Religión católica*, el artículo de periódico en que se califica á la *Santísima Trinidad* de «*rompecabezas* que nos representa un mismo ser bajo tres formas distintas» y al *bautismo* y al *matrimonio* de *majaderías*?—Cuestión IV, pág. 122.
- El suelto de periódico en que, hablando de otro que había sido denunciado por escarnio de la Religión, se dice á manera de cuento que «cierto cura, cansado ya de oír muchas trojes que le refería otro de su misma especie, hubo de exclamar colérico: «*To eso es hostia consagrâ,*» es decir, «todo eso es mentira,» ¿será constitutivo del delito de *escarnio público de un dogma de la Religión católica*, comprendido en el núm. 3.º del art. 240 del Código?—Cuest. V, pág. 123.
- El decir en un periódico que «los curas han inventado el purgatorio, esa gran cárcel modelo, con las paredes y techo de fuego infernal, cuyos carceleros son todos los curas, con su correspondiente director de cárceles, adonde van á parar todos ó casi todos los católicos difuntos (según ellos), y ya no se sale de allí sin aflojar la morsa,» ¿constituirá el delito de *escarnio público de un dogma de la Religión católica*?—Cuest. VI, pág. 123.
- Un artículo de periódico en que, entre otras cosas, se dice «que el Dios de los cristianos es un Dios de contradicciones, preparado siempre á disputas, y que sólo sirve de pretexto para alterar la tranquilidad; que la Trinidad la han encontrado aquéllos en apretadas interpretaciones; que la Encarnación es una noción absurda; que el Dios de la redención, por el hecho de la resurrección, se parece al Osiris de los egipcios, y que en el Dios de Moisés sólo se advierte un déspota colérico, poseído de crueldad, injusticia, parcialidad y malignidad, cuya conducta debe confundir á todo hombre que lo medite, ¿será constitutiva

del delito de *escarnio* de los *dogmas de la Religión católica*, comprendido en el art. 240 del Código?—Cuest. VII, pág. 124.

—V. *Imprenta, litografía, etc.*

**Escombros.**—V. *Arrojar animales muertos, etc.*

**Estafas y otros engaños.**—Defraudación en la cantidad ó calidad de las cosas entregadas en virtud de título obligatorio.—Artículo 547, pág. 279.

—El que vende á otro como labrantías y de primera calidad unas tierras que resultaron ser salbueras é infructíferas las unas; y las otras de tercera, aunque mala calidad, ¿será responsable del delito de *estafa*, previsto en el art. 547 del Código?—Cuestión I, pág. 279.

—¿Deberá calificarse de *estafa* y comprenderse en el art. 547 del Código la *defraudación* que en la cantidad de la *leña ó carbón* que venden al público cometan los almacenistas de dichos artículos, ó deberá comprenderse dicha *falta de peso* en la sanción más benigna del art. 592, núm. 4.º del Código?—Cuest. II, página 280.

—Defraudación causada á otro usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia ó cualidades supuestas, aparejando bienes, crédito, comisión, empresa ó negociaciones imaginarias, ó valiéndose de cualquier otro engaño semejante que no sea de los expresados en los casos siguientes.—Art. 548... 1.º, página 280.

—¿Será condición precisa del delito de *estafa* que con ella logre su autor un *lucro* determinado, ó bastará que con la misma se haya inferido un *perjuicio* á otra persona?—Cuest. I, pág. 280.

—La realidad del delito de *estafa*, previsto en el núm. 1.º del artículo 548 del Código, ¿exigirá, además de la suposición de empresa ó negociación imaginaria, que el perjudicado haya sido inducido á entregar la cantidad en que se le defraudó por la creencia en la empresa ó negociaciones imaginarias, y que ésa sea la causa principal, cuando menos, de la entrega de la cantidad defraudada?—Cuest. II, pág. 281.

—El que entra en un café y hace un gasto de tal ó cual cantidad, que al reclamársela el mozo se niega á satisfacer alegando que carece de dinero, ¿será responsable del delito de *estafa*, comprendido en el núm. 1.º del art. 548 del Código?—Cuest. III, página 282.

—El *menor de edad* que toma una cantidad á préstamo, presentando como fiador y principal pagador de la misma á un co-



merciante que autoriza como tal el pagaré, ¿será responsable del delito de *estafa*, comprendido en el art. 539, núm. 1.º del Código de Cuba y Puerto Rico (548, núm. 1.º del de la Península), si ejercitada al vencimiento de aquél la correspondiente acción por el acreedor contra el fiador, es éste absuelto por no resultar probado que hubiese garantido el pagaré, constando además que en la época del otorgamiento no figuraba como comerciante en la matrícula correspondiente?—Cuest. IV, página 282.

- Aun cuando en la sentencia recurrida se diga que los procesados *sustraieron* á la perjudicada cierta cantidad que acababa de cobrar en billetes de Banco de la Caja de Ahorros, dejándola algunos paquetes que sólo contenían monedas de cinco céntimos, si de estas palabras, como del contexto todo de la sentencia, se desprende que lo realizado fué un verdadero *tímo* por el procedimiento de los cartuchos, ¿procederá la casación de aquélla en que se califica y pena el expresado hecho como constitutivo de un delito de *hurto*, cuando en realidad merece la calificación del delito, menos grave, de *estafa*?—Cuest. V, página 283.
- El dueño de una de esas llamadas *agencias de colocaciones* que, en connivencia con otro de los del oficio, anuncia en la puerta de su casa la vacante de una plaza de guarda de coto, para cuya obtención le entrega uno de los aspirantes á ella parte de la cantidad exigida, resultando luego que ni existía tal plaza ni el interesado pudo recobrar el dinero que dió á cuenta, ¿será responsable del delito de *estafa*, previsto y penado en el artículo 548, núm. 1.º del Código?—Cuest. VI, pág. 284.
- El que entra en una fonda, posada ó venta solicitando alojamiento y servicios que le fueron suministrados, y luego se marcha cautelosamente sin pagar, ¿será responsable del delito de *estafa*, que prevé el núm. 1.º del art. 548 del Código?—Cuestión VII, pág. 284.
- La falta de cumplimiento por parte de un *empresario ó contratista de quintos* de la obligación que mediante el recibo de cierta cantidad contrajo de proporcionar á un sujeto un sustituto para el servicio de las armas, ¿será constitutiva del delito de *estafa*, si no constan los motivos á que fué debida la falta de cumplimiento del expresado compromiso?—Cuest. VIII, página 284.
- Defraudación causada á otro con pretexto de supuestas remuneraciones á empleados públicos.—Art. 548... 4.º, pág. 285.
- El que pide y recaba de un tercero la entrega de una cantidad de dinero asegurando que cuenta con influencias bastantes para la declaración de la inutilidad de un hijo de aquél, á quien

- cupiera la suerte de soldado, y cuya cantidad manifestó ser precisa para gratificar á los facultativos que entendían en la exención pretendida, ¿podrá alegar válidamente á su favor que semejante hecho no cae bajo la sanción del Código, por tratarse de un contrato consensual no penable, ó será por el contrario responsable del delito de *estafa*, comprendido en el art. 548, número 4.º del referido cuerpo legal?—Cuest. única, pág. 285.
- Apropiación ó distracción, en perjuicio de otro, de dinero, efectos ó cualquiera otra cosa mueble recibida en depósito, comisión ó administración, ó por otro título que produzca obligación de entregarla ó devolverla, ó negativa de haberla recibido.—Artículo 548... 5.º, pág. 286.
- El que al ir á recoger una letra ya pagada recibe, por equivocación, del dependiente de la casa otra de mayor cantidad girada contra el mismo y no satisfecha, habiendo sido infructuosas cuantas gestiones se practicaron repetidamente para deshacer la equivocación, apropiándose de este modo el interesado la diferencia entre una y otra letra, importante 2,500 pesetas, ¿será responsable del delito de *estafa*, comprendido en el artículo 548, núm. 5.º del Código?—Cuest. I, pág. 286.
- La manifestación del perjudicado de que no se le ha seguido perjuicio de ninguna especie de la falta de dinero que el procesado confesó haber distraído y aplicado á sus usos propios, ¿será bastante á determinar la inexistencia del delito de *estafa*?—Cuest. II, pág. 287.
- Si del proceso resulta que habiéndose uno de los procesados constituido en fiador personal de un sujeto para garantir su presentación en el pueblo donde le cupiera la suerte de soldado, hubo de recabar de éste que en garantía de la fianza que por él había dado sacase cierta cantidad que tenía en la Caja de Ahorros y la entregase á un tercero, con quien tenía cuenta pendiente y con el cual se concertó al efecto; y habiendo cesado ya la responsabilidad del quinto, y reclamada por éste á su fiador la devolución de la cantidad que le entregara en garantía, le contestó que se la pidiera á su compañero, quien se negó á devolverla por haberla aplicado al pago de otra mayor que le adendaba el fiador, deduciéndose de todo lo actuado que éste y su acreedor se concertaron entre sí para aprovecharse de la cantidad que el perjudicado tenía en la referida Caja de Ahorros, para entregarla el uno y recibirla el otro por cuenta de la adeudada por el primero al segundo, ¿constituirá semejante hecho el delito de *estafa*, previsto y penado en el art. 554 del Código, ó el más grave comprendido en el 548, núm. 5.º del mismo?—Cuest. III, pág. 287.
- El Alcalde de un pueblo que impone á varios vecinos del mismo una multa por haber desobedecido un bando que mandó



publicar, y percibe parte de aquéllas en metálico, utilizándose de estas cantidades sin ingresarlas en las arcas del Municipio ni hacerlas figurar en parte alguna, y hace trabajar un día por su cuenta a uno de los multados, compensando con el jornal que debió satisfacerle la multa impuesta al mismo, ¿será responsable del delito de *estafa*, comprendido en el núm. 5.º del artículo 548 del Código?—Cuest. IV, pág. 289.

—La falsa negativa de haber recibido una cantidad en *préstamo*, ¿constituirá el delito de *estafa*, comprendido en el art. 548, número 5.º del Código?—Cuest. V, pág. 289.

—Con motivo de una disputa suscitada en una taberna interviene la policía, y el cabo de Seguridad, con pretexto de abonar un capote y unas botas que se rompieron a uno de los guardias que intervino en la pelea, exige y obtiene del tabernero 100 pesetas, cuya cantidad ni entregó al guardia ni devolvió al tabernero: ¿existe aquí el delito de *estafa* del art. 548, núm. 5.º del Código?—Cuest. VI, pág. 290.

—El que habiendo vendido un piano de su propiedad a un sujeto, de quien lo recibe a su vez en alquiler por un tanto mensual, lo enajena nuevamente a distinta persona, apropiándose su precio, ¿podrá eximirse de la responsabilidad aneja al delito de *estafa* del art. 548, núm. 5.º del Código, aun cuando al venderlo al primer comprador le hubiese éste concedido el derecho de retraerlo?—Cuest. VII, pág. 290.

—Aun cuando en los documentos de entrega de unos valores por un particular a una casa de comercio se exprese que ésta los recibe en calidad de *depósito*, ¿podrá perseguirse criminalmente, invocando la sanción del art. 548, núm. 5.º del Código, la no devolución de aquéllos por la expresada casa mercantil, si resulta que ésta hizo con dichos valores una multitud de operaciones bursátiles con conocimiento, conformidad y aquiescencia de su dueño?—Cuest. VIII, pág. 291.

—¿Procederá la casación de la sentencia en que se califica y pena el delito de *estafa*, comprendido en el núm. 5.º del art. 548 del Código, si en aquélla no se consigna el *título* en virtud del cual el supuesto estafador recibió la cantidad ó cosa que se apropió?—Cuest. IX, pág. 292.

—El depositario de efectos embargados, nombrado por la Autoridad judicial, que se los apropia ó distrae, ¿será responsable del delito de *estafa* del art. 548, núm. 5.º del Código, ó del de *malversación de caudales públicos*, comprendido en el 405, número 2.º del mismo?—Cuest. X, pág. 292.

—El que ofrece a otro participación en un billete de lotería, y acepta aquélla, pero sin entrega de la cuota por el partícipe,

por habérsela compensado el tenedor del billete como baja en las cuentas entre ambos existentes, y habiendo salido premiado el billete se niega á entregar á dicho partícipe la parte que le corresponde, ¿será responsable del delito de *estafa*, comprendido en el núm. 5.º del art. 548 del Código?—Cuest. XI, página 293.

—V. *Abuso de la firma de otro en blanco*.—*Sustracción, ocultación ó inutilización en todo ó en parte de algún proceso, expediente, documento ó otro papel de cualquiera clase*.—*Enajenación, arriendo ó gravamen de cosa inmueble por quien se finge dueño de ella*.—*Otorgamiento en perjuicio de otro de un contrato simulado*.—*Sustracción por el dueño de una cosa mueble de quien la tiene legítimamente en su poder*.—*Venta de una cosa como libre, sabiendo que está gravada*.—*Engaño*.—*Proposición*.—*Delito frustrado*.—*Falsedad cometida por el particular en documento público, etc.*—*Hurto*.

**Estímulo poderoso.**—V. *Arrebató y obcecación*.

**Estupro.**—Artículo 458, pág. 231.

—La *promesa de matrimonio no cumplida*, ¿será causa bastante determinante del *engaño* que caracteriza el delito de *estupro*?—Cuestión I, pág. 231.

—Para que la *promesa de matrimonio no cumplida* constituya el *engaño* que caracteriza el delito de *estupro*, comprendido en el párrafo tercero del art. 458 del Código penal, según constante jurisprudencia, ¿será preciso que revista aquélla alguna solemnidad ó formalidad, ó bastará que se haya hecho en términos tales que deba ser creída por la mujer perjudicada?—Cuest. II, página 231.

**Exacciones ilegales.**—V. *Fraudes y exacciones ilegales*.—*Impuesto provincial ó municipal*.—*Ley municipal*.

**Exención de responsabilidad criminal.**—V. *Agresión ilegítima*.—*Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende*.—*Necesidad racional del medio empleado para impedir ó repeler la agresión*.

**Exención de responsabilidad criminal por los hurtos, defraudaciones ó daños que recíprocamente se causen determinadas personas.**—Artículo 580, pág. 305.

—El *nieto por afinidad* que comete un hurto en perjuicio de su *abuela*, ¿estará comprendido en la *exención de responsabilidad criminal* que determina el núm. 1.º del art. 580 del Código?—Cuestión única, pág. 305.



**Expendición de billetes de Banco falsos.**—V. *Billetes de Banco.*—*Delito frustrado.*—*Tentativa.*

**Expendición de moneda falsa.** Sin connivencia con los falsificadores ó introductores, de monedas falsas ó cercenadas, adquiridas sabiendo que eran falsas, para ponerlas en circulación.—Artículo 300, pág. 164.

—Aun cuando no en los resultandos de una sentencia, pero sí en un considerando de la misma, se consigna que las circunstancias todas que precedieron y acompañaron á la comisión del delito evidencian que los procesados adquirieron las monedas falsas expendidas *con perfecto conocimiento de su falsedad* y con el propósito de ponerlas en circulación, ¿podrá prosperar el recurso de casación que se intento para recabar que el hecho se comprenda en la sanción más benigna del art. 301 del Código, establecida para el que habiendo recibido *de buena fe* moneda falsa la expende después de constarle su falsedad?—Cuest. única, página 164.

**Expendición de sustancias medicinales y venenosas.**—V. *Delitos contra la salud pública.*

## F

**Facultativo de cabecera.**—V. *Médico de cabecera.*

**Falsedad en documento privado.**—Artículo 318, pág. 175.

—El que deseando imponer en la Caja de Ahorros 1.500 pesetas, y por ser la suma de 500 pesetas el límite máximo de cada imposición, hace tres de éstas, una á su propio nombre y las dos restantes á nombre de otras personas, de una de las cuales se finga ser el marido, haciendo efectivas á su tiempo dichas imposiciones y sus réditos valiéndose de igual engaño, ¿será responsable del delito de *falsedad en documento privado*, ó del de *estafa*, comprendido en el núm. 1.º del art. 548, ó por lo menos en el 554?—Cuest. única, pág. 175.

**Falsificación de documentos públicos.**—Artículos 314 y 315, página 166.

—Falsificación de documento público, cometida por funcionario público, con abuso de su oficio.—Art. 314, pág. 166.

- La inscripción hecha por un Registrador de la Propiedad en los libros del Registro, de unas fincas en nombre de los herederos de una persona, sin que se presentara por éstos la partida de defunción de la misma, pero sí por su viuda un poder para testar que otorgara su difunto marido y además las escrituras acreditativas de la propiedad de los inmuebles inscritos; la anotación por el propio Registrador de un embargo, sin el mandamiento judicial, pero practicado por el Juez municipal en virtud de exhorto del de primera instancia, en los expresados bienes; la nota consignada por el mismo Registrador en un mandamiento librado por otro Juez de primera instancia para la toma de razón de un embargo practicado en parte de dichos inmuebles, de que los mismos estaban afectos á un gravamen por mandamiento del primer Juez de primera instancia antes mencionado; y finalmente, la intercalación en una certificación literal expedida por el expresado Registrador de las palabras «un mandamiento despachado,» que no constan en el asiento del libro diario, ¿constituirán el delito de *falsedad en documento público*, cometido por funcionario público con abuso de su oficio, que define y castiga el caso 4.º del art. 310 del Código penal de Cuba y Puerto Rico, concordante con igual núm. del 314 del de la Península?—Cuest. I, pág. 166.
  
- ¿Deberá ser considerado como *documento oficial* la certificación expedida por el *Facultativo* de cabecera acerca del *fallecimiento de una persona* que exige la Ley para autorizar el sepelio del cadáver?—Siendo *falsa* la certificación en su contenido, ¿deberá calificarse la falsedad como cometida por *funcionario público*?—Cuest. II, pág. 167.
  
- No obstante de que por el art. 330 del Código se establece que cuando sea estimable el lucro que hubieren reportado ó se hubiesen propuesto los reos de falsificación se les impondrá una multa del tanto al triple del lucro, si una *falsedad en documento público ó oficial* se ha cometido, perjudicando y defraudando á un tercero, á la vez que el expresado delito de *falsedad*, ¿deberá apreciarse el de *estafa*, y pensarse el más grave en el grado máximo, con arreglo al art. 90 del Código?—Cuestión III, pág. 168.
  
- Falsedad cometida por el particular en documento público ó oficial, ó en letras de cambio ó otra clase de documentos mercantiles.—Art. 315, pág. 169.
  
- El detentador de una letra de cambio, que fingiéndose legítimo tenedor de la misma, la endosa y firma con el nombre y apellido de aquel á cuya orden está librada, y la presenta al cobro, que no hizo efectivo por haberse descubierto la trama, aun cuando no haya fingido ni contrahecho la letra y firma de la persona cuyo nombre tomó, ¿será responsable tan sólo de un de-



lito de *estafa frustrada*, ó del de *falsedad en letra de cambio*?—Cuestión I, pág. 169.

—La *falsedad* cometida en las matrices y talones de un libro talarario destinado para la recaudación de un impuesto municipal, ¿deberá considerarse como cometida en documento *privado* ó en documento *oficial*?—Si los autores de la falsedad, aunque Administrador ó Interventor respectivamente del expresado arbitrio ó impuesto, no tenían á su cuidado y custodia el libro talarario en que aquélla se cometió, ¿deberá estimarse el delito como de *falsedad* realizada por *funcionario público con abuso de su oficio*, comprendida en el art. 314 del Código, ó de *falsedad* cometida por un *particular*, aunque con la circunstancia agravante de haberse prevalido de su carácter público para realizar el hecho?—Cuest. II, pág. 169.

—El que al otorgar un poder para pleitos, de que hizo uso su Procurador presentando la correspondiente demanda contra un tercero, supone en él tener la edad de veinticinco años cumplidos, no teniéndolos, prevaleándose para ello de un borrón que tenía su cédula personal, que impidió al Notario cerciorarse de la verdad de su aserto, ¿será responsable del delito de *falsedad en documento público*, comprendido en el art. 315 del Código?—Cuestión III, pág. 170.

—Después de la publicación del nuevo Código de Comercio, ¿deberá reputarse como *falsedad en documento mercantil* la que se cometa en los *cheques ó talones* que se suponen expedidos contra un Banco por quien tiene cuenta corriente con el mismo?—Cuest. IV, pág. 171.

—El tenedor de libros y á la vez apoderado de una casa mercantil que recibe para sí de un sujeto una cantidad en préstamo mediante un abonaré firmado por el mismo, pero con estampación, antes de la firma, de la estampilla expresiva del poder de dicha casa, cuya cantidad ni devolvió al que se la prestó, ni reintegró en la caja social, ¿será responsable por este hecho del delito de *falsedad* y del de *estafa*, ó lo será tan sólo de este último?—Cuest. V, pág. 172.

—El que asociado mercantilmente con otra persona y autorizado por ésta para hacer giros, pero con la condición indispensable de su previo conocimiento ó permiso, sabedor de que su socio tiene un crédito contra un tercero, gira una letra á cargo de éste y á su propia orden, firmada con el nombre de su socio, cuya letra aceptó el librado, si bien no llegó á pagarla por haber recibido aviso de haber sido suplantada la firma del supuesto librador, ¿será responsable del delito de *estafa*, ó del más grave de *falsedad en documento mercantil*?—Cuest. VI, página 173.

—El que en un expediente instruido ante un Tribunal de quintas se da á conocer con un nombre que no es el suyo y se atribuye condiciones y cualidades que no tiene; y los testigos que identifican su supuesta personalidad corroborando conscientemente sus falsas manifestaciones, ¿serán responsables del delito de *falsedad en documento oficial*, ó lo serán tan sólo del de *falso testimonio en causa civil*, comprendido en el art. 335 del Código?—Cuest. VII, pág. 174.

**Falsedad en documento mercantil.**—V. *Falsedad cometida por el particular en documento público, etc.*

**Falsedad en letra de cambio.**—V. *Falsedad cometida por el particular en documento mercantil, etc.*

**Falsificación de moneda.**—Fabricación de moneda falsa, imitando moneda que no tenga curso legal en el Reino.—Art. 297, página 163.

—Aun cuando en Cuba y Puerto Rico se ha admitido generalmente la moneda mejicana y peruana, y que por un Decreto del Gobernador general se acordara que la moneda de plata mejicana circulante en la Isla se tomase á razón de 90 centavos por peso, la fabricación de esta moneda falsa hecha con anterioridad á la publicación de aquel Decreto, ¿podrá comprenderse en el art. 290 del Código de Cuba y Puerto Rico, concordante con el 294 de la Península, ó sea como *fabricación de moneda que tiene curso legal*?—Cuest. única, pág. 163.

—V. *Espedición de moneda falsa.*

**Falso testimonio, dado en causa criminal por delito, que no perjudica ni favorece al reo.**—Artículo 334, pág. 178.

—El testigo que en el acto del juicio oral, no obstante haberse acreditado en el mismo que no sólo presencié el suceso, sino que levantándose del asiento en que estaba se interpuso entre los que refían y los separó, y por lo tanto debió ver como los demás que el herido arrojaba sangre por la nariz, manifiesta en su declaración «que no se movió del sitio en que estaba sentado y no vió al herido echar sangre,» ¿será responsable del delito de *falso testimonio dado á favor del reo*, previsto y penado en el art. 333 del Código, ó incurrirá en la sanción más benigna que establece el art. 334 para el que en causa criminal por delito da falso testimonio que no perjudica ni favorece al reo?—Cuest. única, pág. 178.

**Falso testimonio, en causa criminal, á favor del reo.**—Artículo 333, pág. 177.

—¿Cabe calificar y penar el delito de *falso testimonio en causa*



*criminal* sólo por la diferencia existente entre la primera declaración de un testigo prestada en el sumario, y la segunda prestada en el acto del juicio oral, si por el Tribunal que conoció de éste no se ha declarado cuál de las dos es verdadera, si una y otra son falsas, ó sin que conste si en el sumario se consignaron manifestaciones no comprendidas en el testimonio del actual proceso?—Cuest. única, pág. 177.

**Falso testimonio que no perjudica ni favorece al reo.**—*V. Falso testimonio dado en causa criminal, etc.*

**Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.**—Artículo 8.º, núm. 4.º, pág. 45.

—¿Deberá estimarse como *provocación bastante*, y por ende como exclusión de la exención total de responsabilidad criminal, la negativa del procesado á entregar al ofendido, con quien servía en calidad de cochero en un establecimiento, parte de la propina que recibiera de un parroquiano, á quien con el coche que guiaba venía sirviendo semanalmente?—Cuestión I, pág. 45.

—Cuando en la sentencia recurrida no se expresa si el que hirió ó mató á otro en su justa defensa provocó ó no con sus palabras ó con sus actos la agresión de que fué objeto y que repelió, ¿podrá decirse que, en la duda, debe ésta resolverse á favor del reo, estimando, por tanto, que no hubo provocación por su parte, y que por lo mismo procede su total exención de responsabilidad criminal?—Cuest. II, pág. 46.

—El solo hecho de haber rehusado el agredido ilegítimamente el ofrecimiento de aguardiente que le hiciera el agresor, ¿deberá estimarse como *provocación bastante* para la agresión de que fué objeto y de que se defendió por medio racionalmente necesario?—Cuest. III, pág. 46.

**Falta de respeto y consideración á la Autoridad ó desobediencia leve á la misma.**—Artículo 589... 5.º, pág. 316.

—El que requerido de comparecencia ante el Juez municipal de un pueblo, que había de confiarle cierto servicio que argía prestar, por un vecino del mismo á quien para ello diera orden verbal el susodicho Juez, ¿será responsable de la *falta de desobediencia*, prevista y penada en el núm. 5.º del art. 589 del Código, por su incomparecencia y por haber dado motivo con ella á que el Juez le reiterara personalmente dicha orden?—Cuestión I, pág. 316.

—El que requerido en forma para que, de orden de un Juzgado, reteaga á disposición del mismo la cuarta parte del sueldo ó retribución que daba á un dependiente suyo, contesta que no

reconoce competencia en el Juez para dicha retención, por no ser su dependiente empleado público, por no pagarle además sueldo alguno en el sentido gramatical ó jurídico de esta palabra, y para no tener que hacer tal retención despierte en el acto á dicho dependiente, constando que después lo volvió á tomar á su servicio, ¿será responsable de la falta prevista y penada en el art. 589, núm. 5.º del Código?—Cuest. II, pág. 317.

**Firma de otro en blanco.**—V. *Abuso de la firma de otro en blanco.*

**Fraude.**—V. *Astucia, fraude ó disfraz.*

**Fraudes y exacciones ilegales.**—Pena del funcionario público que directa ó indirectamente se interesa en cualquiera clase de contrato ó operación en que deba intervenir por razón de su cargo.—Art. 412, pág. 210.

—Para que exista el delito de *fraude*, comprendido en el núm. 1.º del art. 198 de la ley Municipal vigente, de 2 de Octubre de 1877, ¿basta que los Alcaldes, Concejales y asociados paguen en el año que lo son una cuota por repartimiento ó impuesto menor que la del año anterior, sin haber sufrido en su riqueza disminución bastante á justificar aquella baja?—Por el hecho de haber intervenido dichos funcionarios en el reparto de la contribución en este caso, ¿deberá comprendérseles en la sanción del art. 412 del Código, referente al funcionario público que directa ó indirectamente se interesa en cualquiera clase de contrato ó operación en que deba intervenir por razón de su cargo?—Cuest. única, pág. 210.

—V. *Ley Municipal.*

**Funcionarios públicos.**—Quiénes se reputan funcionarios públicos.—Art. 416, pág. 211.

—El *Médico de cabecera* que libra certificación acerca del fallecimiento de uno de sus enfermos, é incurra en *falsedad* respecto de uno de los extremos de la misma, ¿será responsable de este delito como simple particular, ó como *funcionario público*?—Cuestión única, pág. 211.

## G

**Gobernador civil.**—V. *Detención arbitraria.*

**Grave abuso de confianza.**—V. *Hurto doméstico.*



## H

**Homicidio.**—Artículo 419, pág. 215.

—Aun cuando las lesiones causadas á un sujeto hubieran curado en un hombre sano á los treinta días, produciéndose su muerte á consecuencia de un padecimiento crónico, pero obrando dichas lesiones como causa determinante, ¿será responsable el autor del hecho del delito de homicidio, ó simplemente del de lesiones?—Cuest. I, pág. 215.

—Encuéntrense casualmente dos sujetos, y suscitada entre ambos reyerta ó disputa por anteriores resentimientos, dispara el uno contra el otro una pistola, penetrando el proyectil por el último espacio intercostal del lado derecho y saliendo por la parte inferior de la región epigástrica, cuya lesión tardó en curarse menos de treinta días: ¿cabe calificar semejante hecho de homicidio frustrado?—Cuest. II, pág. 215.

—Aun cuando de las lesiones causadas á una persona ninguna de ellas sea mortal, si por la escasa resistencia vital y orgánica de aquélla se le produjo, á consecuencia de las mismas, una congestión cerebral y pulmonar que le originó la muerte, ¿deberá calificarse el hecho de homicidio?—Cuest. III, pág. 216.

**Homicidio cometido en riña confusa y tumultuaria.**—Artículo 420, pág. 217.

—Salen de una taberna cuatro sujetos disputando, y pasando de las palabras á los hechos, trábase entre uno de ellos por una parte, y los otros tres por otra, una lucha durante la cual aquél causa con un puñal varias lesiones graves á uno de éstos, y éste á su vez y los otros dos con piedras y un palo le producen varias lesiones menos graves en la cabeza al primero, que resulta además con una herida de arma blanca en el cuello, causada no se sabe por quién de los tres, que le origina instantáneamente la muerte: ¿deberán ser considerados los tres procesados como *coautores* del homicidio, ó deberá estimarse que éste se produjo en *riña tumultuaria*, sin constar su autor, y si tan sólo que los tres ejercieron violencia en la persona del interfecto, siéndoles, por lo tanto, aplicable la sanción más benigna del último párrafo del art. 420 del Código?—Cuest. I, pág. 217.

—Aun cuando exista pluralidad de agresores y de agredidos, si los primeros obraron con unidad de acción y de intención, ¿deberá calificarse el homicidio que de aquella simultánea acometida resulte como producido en riña confusa y tumultuaria?—Cuestión II, pág. 218.

—Aun cuando cabe el delito de homicidio en riña confusa y tumultuaria entre varias personas, hasta en el caso de ser una sola de una parte y mayor número de la opuesta, siempre que no conste quién sea el autor de aquél (V. la Cuest. I de este artículo), ¿existirá el concepto jurídico á que responde la atenuación de penalidad del art. 420 del Código, si no consta que el interfecto acometiera ni dirigiera agresión alguna á aquellos que por colectivo y simultáneo ataque le produjeron la muerte?—Cuest. III, pág. 219.

**Homicidio de dos ó más personas en un solo acto.**—V. *Muerte de dos ó más personas en un solo acto.*

**Homicidio frustrado.**—V. *Delito frustrado.*

**Hurto.**—¿Quiénes son reos de este delito.—Art. 530, pág. 270.

—El que se apodera de la basura recogida por otro y con la que formara un basurero, ¿será responsable del delito de hurto, en el concepto de ser ajena la cosa sustraída?—Cuest. I, pág. 270.

—La sustracción en una finca de propiedad particular de cantos menudos y rodadizos arrastrados á ella por aluviones, ¿determinará la existencia del delito de hurto, definido en el art. 530 del Código?—Cuest. II, pág. 271.

—¿Será responsable del delito de estafa ó del de hurto el encargado de la custodia de un almacén que sustrae de él varios efectos y los vende á terceras personas, utilizándose de su importe?—Cuest. III, pág. 271.

—El mozo de un carro de mudanza que al verificar el traslado de muebles de una casa se apropia uno de éstos, ¿será responsable del delito de estafa del art. 548, núm. 5.º del Código, ó del de hurto, que define el 530?—Cuest. IV, pág. 272.

—Si al penetrar los procesados en una finca que perteneció á su difunta madre y al cortar unas uvas tasadas en 1 peseta 75 céntimos, manifestaron que así lo hicieron por creer que pertenecía á la testamentaria, en cuyo inventario judicial estaba, en efecto, comprendida, resultando también haber sido depositado el fruto de dicha viña del año anterior, ¿deberá calificarse, no obstante, el expresado hecho de delito de hurto, si aparece que dicha finca fué vendida por los testamentarios al denunciante un año antes en documento privado?—Cuest. V, pág. 272.



- El *vigilante del muelle de una estación de ferrocarril* que sustrae géneros de una caja depositada en dicho muelle, ¿será responsable del delito de *hurto* ó del de *estafa*?—Cuest. VI, pág. 273.
- El que en una propiedad particular se encuentra en el suelo un objeto y se apodera de él, ¿podrá alegar que no cometió *hurto*, por tratarse de una cosa abandonada ó perdida ó ignorar quién fuera su dueño?—Cuest. VII, pág. 273.
- El dueño de una habitación que para hacer efectivo el alquiler de la misma que le adeudaba el inquilino, aprovechando la ocasión de hallarse éste enfermo en el hospital, penetra en el cuarto, y sin emplear fuerza, violencia ni intimidación, toma un mueble que aquél había dejado en dicha habitación y era propiedad de su hija, ¿será responsable por este hecho del delito de *hurto*, previsto en el art. 530 del Código?—Cuest. VIII, página 273.

—V. *Abuso de confianza.*

**Hurto cometido por el que es dos ó más veces reincidente.**—Artículo 533... 3.º, pág. 277.

- Cuando el procesado por un delito de *hurto* ha sido condenado anteriormente en una sola sentencia por dos delitos de la misma especie, ¿deberá estimarse que concurre una sola reincidencia ó dos, á los efectos del art. 533, núm. 3.º del Código?—Cuestión única, pág. 277.

**Hurto de frutos ó leñas.**—V. *Delito frustrado.*

**Hurto doméstico ó con grave abuso de confianza.**—Artículo 533... 2.º, pág. 274.

- El *carrero* de una fábrica ó establecimiento industrial, ¿deberá ser considerado como *doméstico* á los efectos del art. 533, número 2.º del Código?—Cuest. I, pág. 274.
- Para que pueda calificarse el hurto *doméstico*, ¿será indispensable que el criado haya verificado la sustracción en la misma casa donde habita con su amo, ó bastará que lo cometa en cualquier otra dependencia de la propiedad de éste, aunque separada de aquélla, si ha entrado en la misma por razón de su calidad de doméstico?—Cuest. II, pág. 275.
- El que encargado por su amo, en calidad de *jornalero* ó *dependiente*, de la custodia de un pajar, toma parte con otros en la sustracción de cierta cantidad de paja del mismo, ¿será responsable del delito de *hurto simple* con la circunstancia agravante de *abuso de confianza*, ó del de *hurto cualificado* por el *grave abuso* de la misma?—Cuest. III, pág. 275.

- Cuando concurren varios á la perpetración de un hurto, y uno de los culpables por sus relaciones con el perjudicado hubo de abusar gravemente de la confianza de éste, ¿deberán ser considerados *todos* como *coautores* del delito calificado, que prevé y castiga el art. 533, núm. 2.º del Código, por razón del título del delito, ó lo será tan sólo aquel en quien concurre dicha relación personal, siendo los demás responsables meramente del delito de *hurto simple*, previsto en el 531 del propio Código?—Cuestión IV, pág. 276.
- El cobrador y comisionado de apremio, nombrado y remunerado por el respectivo recaudador de contribuciones, que sustrae varios de los recibos que para el pago de éstas existían en la oficina de recaudación, y cobrándolos él mismo de los contribuyentes, se apropia su importe sin entregarlo en la oficina, ¿será responsable del delito de *estafa*, ó del de *hurto con grave abuso de confianza*?—Cuest. V, pág. 276.

## I

**Imprenta, litografía, fotografía ú otro medio análogo que facilite la publicidad.**—Circunstancia agravante ó atenuante según los casos.—Art. 10... 5.ª, pág. 67.

- En el delito de *escarnio á la Religión*, previsto y penado en el artículo 240 del Código, ¿deberá apreciarse, al efecto de aumentar la pena, la circunstancia de haberse realizado por medio de la imprenta?—Cuest. I, pág. 67.
- En un delito de *injurias á la Autoridad* cometido en un suelto de periódico, sin que su autor haya intervenido para ello en debate alguno político mantenido por la prensa, ¿deberá apreciarse como circunstancia agravante la de haberse cometido el delito por medio de la imprenta?—Cuest. II, pág. 67.
- En la *calumnia* inferida por medio de la imprenta, ¿deberá estimarse esta circunstancia como de agravación del delito?—Cuestión III, pág. 67.
- En el delito de *injurias graves hechas por escrito y con publicidad* (párrafo primero del art. 473), ¿cabe apreciar como circunstancia agravante la de haberse cometido por medio de la imprenta?—Cuest. IV, pág. 68.



**Imprudencia con infracción de reglamentos.**—Artículo 581 (párrafo segundo), pág. 309.

—Estando trabajando un peón de albañil en la obra de la fachada de una casa, se le cae una palanqueta de hierro al andamio y de éste á la calle, hiriendo á un transeúte en la cabeza, de cuya lesión fallece: ¿quién será el responsable de este hecho, el susodicho peón de albañil, ó el maestro director de la obra, si resulta que el andamio carecía de la tabla vertical que debiera tener, y que además no se había colocado, en la parte de la acera correspondiente á la fachada donde se estaba obrando, el aviso reglamentario, tabla ó cuerda, para advertir el peligro y prohibición de pasar por aquel sitio?—Cuest. I, pág. 309.

—El *Jefe de Estación* que manda salir una máquina á un punto determinado de la línea para su recomposición, sin que en el tren que partiera poco antes hubiera mandado poner señal alguna que anunciara al personal de la línea la salida de dicha máquina, dando ello lugar á que la guarda-barrera de un paso á nivel se retirara luego de haber pasado el tren, y que por haber atravesado por allí un carro, la máquina lo atropellara, matando á las mulas y causándole otros desperfectos por valor de unas 2.000 pesetas, ¿será responsable de este delito de *daños por imprudencia con infracción de reglamentos*?—Cuest. II, página 310.

—El vigilante de consumos que yendo custodiando unos carros cargados de vino desde un fielato á otro, entra en una taberna para beber unas copas de vino que le ofrecieron, y al salir, á los pocos minutos, del establecimiento, se encuentra con que los carros y los carreteros habían desaparecido, ¿será responsable del delito de *defraudación á la Hacienda ó al Municipio por imprudencia con infracción de los reglamentos* del ramo de consumos, por el perjuicio que se causó á esta renta, en el caso probable, pero no seguro, de que dichos carros penetraran en la población?—Cuest. III, pág. 310.

**Imprudencia temeraria.**—Artículo 581, pág. 305.

—El que sólo por creer que un sujeto se llama como dice, recaba para él el conocimiento de un comerciante en una letra de la que resultó luego no ser el legítimo portador, ¿será responsable de este delito de *falsedad por imprudencia temeraria*?—Cuestión I, pág. 305.

—Cuando de la causa resulta que habiéndole encargado al procesado su amo la conducción de un carro al que iba atada una perra, con la advertencia de que no la soltara; y sin embargo la soltó, dando ello lugar á que en el tránsito el animal se abalanzara á un niño y le causara lesiones graves en una pierna, ¿será responsable de este hecho por *imprudencia temeraria*, ó

lo será tan sólo de la *falta de imprudencia simple*, penada en el núm. 3.º del art. 605 del Código?—Cuest. II, pág. 306.

- La mujer que, encargada por ausencia de su marido de la tienda de ultramarinos de éste, al despachar en la trastienda cierta cantidad de espíritu de vino que se le pidiera, y al encender una cerilla para ver si la medida estaba llena, sin saber cómo se le inflama el alcohol, prendiéndose el fuego en sus vestidos, que pudieron apagar algunos vecinos, produciéndose el incendio de la casa, del cual resultaron varias personas lesionadas y el consiguiente daño del edificio, ¿será responsable de este hecho como autora de un delito de *imprudencia*, ó simplemente de la *falta* del mismo nombre, comprendida en el art. 605, número 3.º del Código?—Cuest. III, pág. 307.
- Si el procesado convino con un sujeto que iría á casa de éste para que le enseñase unos rejonos de sacrificar reses que tenía de venta, y al verificarlo, y ver dichos rejonos, pretendió llevárselos diciendo que eran los mismos que un mes antes le habían sustraído, y al intentar su dueño quitárselos, los agarró por parte del hierro hacia los cortes, en cuyo momento el procesado, que los tenía cogidos por sus mangos, dió un tirón tan brusco como causó con él una herida en el dedo meñique de aquél, que casi se le cortó, de la cual quedó curado á los cuarenta días sin ulterior impedimento ni deformidad, ¿constituirá este hecho el delito de *imprudencia temeraria*, ó la *falta de imprudencia simple*?—Cuest. IV, pág. 308.
- Después de haber estado jugando unos muchachos en la calle, al separarse uno de ellos, joven de quince años, arroja sobre el grupo una piedra, diciéndoles en broma, «aguantar eso,» la que dió en la frente á uno de los chicos, produciéndole una pequeña herida sin importancia al exterior, pues sólo interesó los tejidos blandos, pero que á consecuencia de complicaciones posteriores le produjo la muerte á los cuarenta y un días: ¿deberá calificarse ésta de delito de *homicidio*, ó simplemente de *imprudencia temeraria*?—Cuest. V, pág. 308.
- Cuándo por *imprudencia temeraria* se produce un hecho que á ser malicioso constituiría un delito castigado en el Código con las penas de *suspensión y multa* (como el del art. 524, referente al funcionario público que libra certificación falsa de buena conducta), ¿procederá imponer al responsable de dicha imprudencia la pena de *arresto mayor en sus grados mínimo y medio*, señalada en la última parte del párrafo primero del art. 581, ó la *inmediatamente inferior* á dichas penas de *suspensión y multa*?—Cuest. única, pág. 311.
- V. Delito.—Ejecución de un acto lícito con la debida diligencia, etc.



**Impuesto provincial ó municipal no aprobado legalmente.**—

Pena de la Autoridad que lo manda pagar.—Art. 224, pág. 117.

- ¿Será responsable del delito de *exacciones ilegales*, comprendido en el art. 224 del Código, el *Ayuntamiento* que habiendo procedido al nombramiento de unos guardas de campo para la custodia del término municipal, verifica un reparto entre los vecinos terratenientes para obtener la suma fijada y destinada á retribuir á aquéllos, y la hace efectiva por medio del recaudador nombrado al efecto, sin haber sido incluida ni aprobada esta partida en presupuesto alguno, ni ordinario ni adicional?—Cuest. única, pág. 117.

**Incendio.**—V. *Asesinato.*—*Circunstancias agravantes que no producen el efecto de aumentar la pena.*

**Inducción.**—V. *Autores de un delito ó falta.*

**Infanticidio.**—Atenuación especial de penalidad para la madre que para ocultar su deshonra mata al hijo que no ha cumplido tres días y para los abuelos maternos que con igual fin cometen el propio delito.—Art. 424, pág. 222.

- La madre que asistiendo al parto de una hija suya soltera, al nacer viva la criatura le corta el cordón umbilical hasta la raíz del abdomen, produciéndose, como consecuencia necesaria, la hemorragia y muerte de aquélla, ¿deberá ser declarada *autora voluntaria del delito de infanticidio*, previsto y penado en el art. 424 del Código, si no resulta del proceso hecho alguno que desvirtúe la malicia ó intención con que debe suponerse que obró?—Cuest. única, pág. 222.

—V. *Arrebato y obcecación.*

**Infidelidad en la custodia de presos.**—Artículo 373, pág. 191.

- El Alcalde que se pone de acuerdo con el Alcalde de la cárcel donde un penado se halla extinguiendo una pena de arresto, para que éste salga del establecimiento de día para ganar un jornal, como así lo verificó en varias ocasiones, ¿será responsable, lo mismo que el Alcalde, del delito de *infidelidad en la custodia de presos*?—Cuest. I, pág. 191.
- El Alcalde de cárcel que permite que un preso condenado por ejecutoria, y cuya custodia le fuera confiada hasta que tuviera efecto su conducción al establecimiento penal correspondiente, salga de la cárcel y ayude en las faenas agrícolas á ciertas familias del pueblo, ¿será responsable del delito de *infidelidad en la custodia de presos*, aun cuando el de que se trata no se haya fugado?—Cuest. II, pág. 192.

**Infracción de las leyes sobre inhumaciones.**—Artículo 349, página 186.

—El Médico de cabecera que expide certificación expresiva de que uno de sus enfermos ha fallecido *algunas horas antes* de la en que realmente tuvo lugar la muerte, con el fin de complacer á la familia del finado á fin de que pudiera dársele sepultura al cadáver en la tarde del mismo día en que ocurrió su fallecimiento, además del delito de *falsedad*, ¿será responsable como coautor de la *inhumación practicada antes de tiempo*, según los términos del art. 349 del Código penal?—Cuest. única, pág. 186.

**Inhabilitación especial temporal.**—V. *Cohedo*.

**Inhumaciones ilegales.**—V. *Infracción de las leyes sobre inhumaciones*.

**Injurias.**—Artículo 471, pág. 242.

—¿Cuál es la nota característica que determina la existencia del delito de *injurias*?—Cuest. I, pág. 242.

—La palabra «*fanfarrón*» ¿constituirá *injuria*?—Cuest. II, página 242.

—La imputación hecha á un procurador, de que «obra con poderes falsos», ¿será constitutiva de *injuria* ó *calumnia*?—Si es lo primero, ¿deberá calificarse de *grave* la *injuria*?—Cuest. III, página 243.

—El que, después de un altercado habido entre un hermano suyo y un sujeto, dice en alta voz que «los..... (aquí el apellido de la familia de éste) son unos canallas y ladrones», ¿podrá eximirse de la pena del delito de *injurias graves* que constituyen estas expresiones, alegando que la *injuria* debe referirse á *persona determinada*, y que aquellas palabras no fueron dirigidas concretamente al susodicho sujeto?—Cuest. IV, pág. 243.

—La circunstancia de haberse proferido unas palabras injuriosas en un sitio apartado, en conversación particular, al lamentarse el injuriador de la conducta que con él observaban el ofendido y su familia, ¿será parte á despojar aquéllas de todo carácter delictivo?—Cuest. V, pág. 243.

—¿Cabe calificar y penar como delito de *injurias* la imputación de hechos que, á ser ciertos, constituirían un delito perseguible de oficio, y por lo tanto, no siéndolo, el de *calumnia*?—Cuestión VI, pág. 244.

—El periódico que al ocuparse de la publicación por otro de un programa de fiestas que habían de celebrarse en la población,



programa que expresó podía anticiparlo á sus lectores casi de una manera oficial, dice que «aquella publicación constituía un *tíno incalificable*, pues que ni la Junta de festejos ni el Ayuntamiento podía autorizar á nadie para publicar lo que no estaba acordado, ¿será responsable del delito de *injurias*?—Cuestión VII, pág. 245.

—Para que exista el delito de injuria contra persona determinada, ¿será menester que se la designe *por su propio nombre*, ó bastará que se le aluda y señale con detalles tales que no quepa duda acerca de su identidad?—Cuest. VIII, pág. 246.

—Aun cuando las palabras de «ladrona de mis intereses y de mi sangre, que la Justicia te ha hecho devolver un banco que me habías quitado,» dirigidas por una mujer á otra, sean en sí mismas ofensivas é injuriosas, ¿quedará desvirtuado el concepto injurioso de las mismas por la circunstancia probada de que la que tales expresiones profrío hubo de referirse concretamente á los hechos determinados de haberla privado la aludida, antes de terminar el plazo del arrendamiento, de una finca que llevaba en aparcería con su marido, y de haberse llevado un banco de moler oliva, cuya devolución hubo de conseguir acudiendo á la Autoridad del Juez municipal?—Cuest. IX, pág. 246.

—El que ocupándose en un artículo de periódico del dictamen emitido por unos Facultativos en asunto de interés público, dice entre otras cosas: «Esto afirman cinco hipócritas (léase Hipócrates) en su informe, con el cinismo que dan las conveniencias del estómago,» etc., ¿podrá eximirse de la pena del delito de *injuria* que tales expresiones y conceptos indudablemente constituyen, alegando el derecho natural y legítimo de controversia sobre dictámenes ó opiniones científicas?—Cuest. X, pág. 247.

—¿Será justiciable la injuria aun cuando se infiera en *carta particular*?—Cuest. XI, pág. 247.

—El decir en un artículo de periódico que «la deslealtad, la falsía y la facilidad en desfigurar la verdad» son las notas dominantes del carácter de una persona, ¿constituirá el delito de *injurias*, si dicho aserto no se refiere á sus cualidades morales, sino á sus procedimientos dentro del partido político en que milita?—Cuest. XII, pág. 248.

—En un artículo de periódico se consigna que «entre los firmantes de cierta carta protesta no había más que dos personas respetables, un ladrón de reses y un falsificador de firmas, y que los demás eran presidiarios del ingenio España;» ¿cabe absolver al autor de dicho escrito de la querrela interpuesta por dos de los firmantes de la expresada carta, porque aquél haya manifestado que las frases de ladrón de reses y falsificador de firmas no iban dirigidas á los querellantes, y que la de «presidia-

rios del ingenio España,» por el tono irónico del suelto no puede considerarse ofensiva, perdiendo toda su fuerza toda vez que en el ingenio España no hay presidiarios, y que además en los delitos de injurias sólo puede procederse á instancia de los injuriados?—Cuest. XIII, pág. 248.

—El atribuir en un comunicado de periódico á determinada persona «la falta de ilustración y experiencia necesarias para ser jefe de una agrupación política y el propósito de hacer pronta y segura fortuna instalando industrias y establecimientos mercantiles en perjuicio de los pequeños industriales que carecían de medios para hacerle la competencia,» ¿constituirá una *injuria* en el sentido jurídico de esta palabra?—Cuest. XIV, pág. 249.

—El atribuir en un comunicado de periódico á determinada persona «la falta de ilustración y experiencia necesarias para ser jefe de una agrupación política y el propósito de hacer pronta y segura fortuna instalando industrias y establecimientos mercantiles en perjuicio de los pequeños industriales que carecían de medios para hacerle la competencia,» ¿constituirá una *injuria* en el sentido jurídico de esta palabra?—Cuest. XIV, pág. 250.

—V. *Clase determinada del Estado.*—*Cónyuge heredero.*

**Injurias graves.**—Artículo 472, pág. 251.

—Las siguientes palabras, dirigidas á una mujer casada: «Váyase usted de ahí, tía pellejo; vaya á hacer medicinas para matar á su marido, mala mujer; yo no hago lo que V., que es tirar de la capa á los hombres en la calle, de noche,» ¿serán constitutivas del delito de *injurias graves*, á tenor de lo dispuesto en el artículo 472 del Código, ó simplemente de *injurias leves*?—Cuestión I, pág. 251.

—Las palabras «zorrón de los Jardinillos y tía rabanera,» aunque dirigidas por una mujer del pueblo á otra de igual clase, ¿deberán ser calificadas de *injurias graves*?—Cuest. II, pág. 251.

—El que, en carta particular dirigida á un Letrado que le había reclamado el pago de honorarios devengados en la defensa de cierta causa, dice que «le extraña mucho que tenga tan poca vergüenza de exigirle honorarios que había ya satisfecho con exceso, y que si él á su vez no le pagaba éste, lo citaría ante los Tribunales por su mala reputación,» ¿será responsable del delito de *injurias graves* hechas por escrito y sin publicidad, definido en el art. 472 del Código y penado en el párrafo segundo del 473, ó lo será tan sólo de *injurias leves*, penables como falta, según lo dispuesto en el párrafo segundo del 474, por estar hechas sin publicidad?—Cuest. III, pág. 252.



—V. *Arrebató y obcecación*.—*Cónyuge heredero*.

**Injurias ó insultos á la Autoridad.**—V. *Calumnia, injuria ó insulto á la Autoridad*.

**Injurias, insultos ó amenazas de hecho ó de palabra á los funcionarios públicos ó á los agentes de la Autoridad en su presencia ó en escrito que se les dirigiere.**—Artículo 270, página 160.

—El hecho de pasar un sujeto por delante de un Fiel de consumos y sin mediar palabra alguna arrancarle la chapa que ostenta en el sombrero como distintivo del cargo, ¿constituirá el delito de *insulto á un agente de la Autoridad*, previsto y penado en el artículo 270 del Código, ó la *falta de ofensa leve* al mismo, comprendida en el núm. 6.º del 589?—Cuest. I, pág. 160.

—El decir á un agente de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones que salga á la calle «para romperle el alma», ¿constituirá una verdadera *amenaza*, á los efectos del art. 270 del Código?—Cuest. II, pág. 161.

—Al ser requerido un sujeto que iba dando voces por las calles por los agentes de la Autoridad para que se calle, contesta que no se calla por ningún guardia; y dirigiéndose á éstos, los apostrofa con las frases de «Valientes plantones; si creerán que les voy á obedecer; mañana hablaré yo con el Alcalde y quedarán ustedes cesantes», ¿constituirán estos hechos el delito de *injurias ó amenazas á los agentes de la Autoridad*, previsto y penado en el art. 270 del Código, ó simplemente la *falta de ofensa y desobediencia leve*, comprendida en el núm. 6.º del 589?—Cuestión III, pág. 161.

## J

**Jefe de establecimiento penal.**—V. *Alcaide de cárcel*.

**Jefe de estación.**—V. *Imprudencia con infracción de reglamentos*.

**Juegos prohibidos.**—Artículo 358, pág. 189.

—El jugar á los prohibidos en una *casa particular*, ¿constituirá el delito definido en el art. 358 del Código?—Cuest. única, pág. 189.

## L

**Lesma majestad.**—Injurias ó amenazas al Rey por escrito y con publicidad fuera de su presencia.—Art. 162, pág. 109.

—¿Será constitutiva de *injuria*, y, por ende, del delito de *lesa majestad*, comprendido en el art. 162 del Código, la siguiente frase estampada en un artículo de periódico: «Y si por acaso alguna voz se levantara á defender tímida y vergonzosamente á la actual dinastía, es seguro que el que tal haga lo hace defendiendo sus intereses. Sin temor de equivocarse, es un empleado público ó un poseedor de papel del Estado?»—Cuest. I, página 109.

—El decir en un periódico que «el liberalismo, ó sea el *alfonsismo*, en contraposición al carlismo, está condenado por la Iglesia y no es lícita su defensa desde ningún lugar, ni por católico alguno,» ¿constituirá el delito de *injurias á S. M. el Rey*, previsto y penado en el art. 162 del Código?—Cuest. II, pág. 110.

—V. *Regente del Reino*.

**Lesiones.**—Con pérdida de un ojo ó miembro principal ó impedimento de éste, ó inutilidad del ofendido para el trabajo á que se dedicara habitualmente.—Art. 431... 2.º, pág. 224.

—Si de resultas de unas lesiones ha quedado el ofendido inutilizado para la mayor parte de los trabajos de su oficio de labrador, aunque no para la práctica de algunos de éstos, ¿deberá comprenderse el delito de lesiones en la sanción del número 2.º del art. 431 del Código, ó en la más benigna del núm. 3.º del mismo?—Cuest. única, pág. 224.

—Lesiones de cuyas resultas hubiere quedado el ofendido deforme, ó perdido un miembro no principal ó quedado inutilizado de él, ó hubiere estado incapacitado para su trabajo habitual ó enfermo por más de noventa días.—Art. 431... 3.º, pág. 224.

—Si á consecuencia de la lesión causada, le quedó al ofendido, según los médicos, un trayecto fistuloso con tendencia á la cronicidad, que sin oponerse por completo á sus habituales ocupaciones le habría de hacer su ejercicio más molesto y difícil en épocas determinadas, ¿deberá calificarse el hecho de delito de



lesiones graves con inutilización para el trabajo á que hasta entonces se hubiere dedicado habitualmente el ofendido, comprendido en el núm. 2.º del art. 431 del Código, ó el previsto y penado menos gravemente en el núm. 3.º del mismo?—Cuest. única, pág. 224.

—Lesiones que producen al ofendido enfermedad ó incapacidad para el trabajo por más de treinta días.—Art. 431... 4.º, página 225.

—¿Podrá prosperar el recurso de casación que se interponga contra una sentencia que califica y pena como delito de *lesiones graves* las que se dice que curaron á los cuarenta días, aun cuando no se exprese cuánto tiempo precisaron de asistencia facultativa ó impidieron al ofendido para el trabajo?—Cuest. I, página 225.

—Aun cuando los facultativos informen que unas lesiones que duraron treinta y cinco días hubieran curado antes de los treinta sin la debilidad física del ofendido, originada principalmente por la falta de alimentación reparadora, ¿deberán dichas lesiones calificarse y pensarse como *graves*, conforme al art. 431, número 4.º, ó como *menos graves*, con arreglo al 433?—Cuest. II, página 226.

—Lesiones no comprendidas en los artículos precedentes, que producen al ofendido inutilidad para el trabajo por ocho días ó más, ó necesidad de la asistencia de facultativo por igual tiempo.—Art. 433, pág. 226.

—Aun cuando en la sentencia en que se consigna que unas lesiones duraron más de ocho días no se exprese ni el tiempo que impidieron al ofendido para el trabajo, ni el que precisaron asistencia facultativa, ¿podrá prosperar el recurso de casación que contra aquélla se intente en el concepto de que las expresadas lesiones, penadas como *menos graves*, debieron serlo tan sólo como *leves*?—Cuest. única, pág. 226.

**Letras de cambio.**—V. *Falsedad cometida por el particular en documento público ó oficial ó en letras de cambio*, etc.

**Ley de caza de 10 de Enero de 1879.**—Página 353.

—Penalidad y procedimientos.—Artículos 47 y 48, pág. 353.

—La ocupación en poder de un sujeto de un hurón, con gabiola, y de una hurona con cinco crías en poder de otro, ¿constituirán otras tantas infracciones del art. 26 de la ley de Caza, penables con arreglo á los artículos 47 y 48 de la misma?—Cuestión única, pág. 353.

- El que entrando en propiedad ajena sin permiso del dueño sea cogido infraganti con lazos, hurones ú otros ardides para destruir la caza, será considerado como dañador y entregado á los Tribunales ordinarios para que le castiguen con arreglo al artículo 530 del Código penal.—Art. 50, pág. 354.
- Para que exista el delito consumado comprendido en la sanción del art. 50 de la ley de Caza, de 10 de Enero de 1879, ¿será necesario que el delincuente se haya apoderado de la caza, ó bastará que haya sido sorprendido infraganti en el acto de recoger unos lazos con los que pretendía cazar en ajena heredad y sin licencia de su dueño?—Cuest. única, pág. 354.

**Ley Electoral de 20 de Agosto de 1870.**—Página 330.

- Falsedades electorales.—Pág. 330.
- Alteración de las listas electorales, del libro del censo electoral, del talonario ó de las cédulas sacadas de éste, con el fin de dar ó quitar el derecho electoral.—Art. 167... 1.º, pág. 330.
- El Alcalde que, á pesar del acuerdo del Ayuntamiento de su presidencia desestimando la solicitud de un vecino y elector referente á que se incluyera en las listas electorales á varios sujetos, desestimación que hubo de confirmar la Comisión provincial, los comprende, no obstante, en las listas definitivas, expidiéndoles las oportunas cédulas; á pretexto de no haber recibido el acuerdo confirmatorio de dicha Comisión provincial y de haber la misma resuelto en aquellos días que tenían derecho á ser electores otros vecinos que se hallaban en el mismo caso que aquéllos, ¿será responsable del delito de falsedad electoral, previsto en el núm. 1.º del art. 167 de la ley de 20 de Agosto de 1870 y penado en el 168?—Cuest. única, pág. 330.
- Faltas electorales.—Pág. 331.
- Los que dejen de proclamar Secretarios escrutadores, comisionados para asistir á los escrutinios, Concejales, Diputados provinciales, compromisarios para elección de Senadores ó Senadores á quienes hubiesen sido elegidos para cualquiera de estos cargos según la ley, ó los que indebidamente proclamen á otros.—Art. 173... 4.º, pág. 331.
- El Alcalde y Concejales de un Ayuntamiento que pasado el término de los quince primeros días del octavo mes del año económico, establecido por el art. 22 de la ley de 20 de Agosto de 1870, admiten y resuelven reclamaciones de inclusión y exclusión de las listas electorales, ¿incurrirán en la falta prevista en el núm. 4.º del art. 173, y castigada en el 172 de la expresada ley?—Caso afirmativo, ¿podrán alegar á su favor la exención completa ó incompleta de responsabilidad criminal proce-



dente de la *obediencia debida*, porque consultaron previamente con el Gobernador de la provincia, y el Subgobernador, en ausencia de éste, les manifestara que no sólo podían alterar y modificar las listas, sino que debían hacerlo?—Cuest. única, página 331.

- El Presidente y Secretarios que admitan á votar al que no presente cédula legítima ó que no figure en el libro talonario y lista del colegio ó sección en que pretenda emitir su voto, y los que no admitan el voto de quien figure en dicho libro y lista, aunque no presente cédula, siempre que en aquél exista el duplicado de ésta y la pida. —Artículo 173... 14.º, pág. 333.
- Será responsable de la *falta* comprendida en el art. 173, número 14 de la ley de 20 de Agosto de 1870 la *Mesa electoral* que impide que dos electores emitan su voto, el primero porque había sido condenado á pena correccional por sentencia de la Audiencia, pendiente aún de recurso de casación, y el segundo porque con anterioridad había roto voluntariamente la cédula que se le había entregado?—Cuest. única, pág. 333.
- El Alcalde ó funcionario público, de cualquiera categoría, que se negase ó retardase admitir ó dar curso á reclamaciones electorales de cualquiera índole, ó que rehusare proveer en el acto al que presente la reclamación, de un recibo expresivo de su entrega aunque no lo solicite. —Artículo 173... 16, pág. 334.
- El Alcalde que se asocia para formar la Mesa interina, para la elección de la definitiva, á cuatro electores, como los más ancianos y más jóvenes de los presentes; y habiendo reclamado en el acto varios electores contra tal designación, pretendiendo que en el local se hallaban otros con preferente derecho por ser más ancianos y más jóvenes que alguno de los designados, y solicitando que para la comprobación de tal derecho se consultara el libro talonario del censo electoral, contesta que no había tal censo y que ya estaba constituida la Mesa interina, ¿será responsable de la *falta electoral* que prevé el núm. 2.º del artículo 173 de la ley Electoral, de 20 de Agosto de 1870, ó cuando menos de la comprendida en el núm. 16 del propio artículo?—Cuest. única, pág. 334.
- La acción para acusar por los delitos previstos en esta ley será popular y podrá ejercitarse hasta dos meses después de haber sido aprobada ó anulada el acta definitivamente por el Ayuntamiento ó Diputación provincial, si la elección fuere para Concejales ó Diputados provinciales, y por el Congreso ó por el Senado, si hubiere sido para Diputados ó Senadores. —Artículo 178, pág. 336.
- La acción para acusar los delitos electorales, que según el artículo 178 de la ley de 20 de Agosto de 1870, es popular, ¿podrá

ejercitarla, en defecto de querellante particular, *el Representante del Ministerio público?*—Cuest. única, pág. 336.

**Ley electoral para Diputados á Cortes, de 28 Diciembre de 1878.**—Página 338.

—De las falsedades electorales, pág. 338.

—Alteración ó omisión intencionada en los libros, registros, actas, certificaciones, testimonios ó documentos de cualquier género que sirvan para el ejercicio de los derechos electorales y realizada para impedir ó dificultar su práctica y variar ó oscurecer la verdad de sus resultados.—Art. 123, pág. 338.

—Los electores que con arreglo al art. 65 de la ley Electoral de 28 de Diciembre de 1878 garantizan con sus firmas la autenticidad de las contenidas en el pliego de propuesta de interventores, ¿serán responsables del delito de *falsedad*, previsto y penado en el art. 123 de la mencionada ley, si resultan falsas algunas de dichas firmas del pliego, ya por no saber escribir algunos de los electores, ya por negar otros que lo verificasen?—Cuestión I, pág. 338.

—¿Serán responsables, por *imprudencia temeraria*, del delito de *falsedad electoral*, comprendido en el art. 123 de la ley de 28 de Diciembre de 1878, los individuos de la Comisión inspectora del censo que sin cotejarlas ni confrontarlas autorizan con su firma las listas formadas por un escribiente de la secretaría municipal, en las que se incluyó á varios individuos que no figuraban en las publicadas en el año anterior, ni se les había declarado previamente y por los trámites de la ley el derecho electoral, y se excluyó en cambio á un vecino que tenía este derecho, por lo que votaron aquéllos y dejó éste de votar en la siguiente elección de Diputados á Cortes?—Cuest. II, pág. 339.

—Los funcionarios ó particulares que con el fin de dar ó quitar el derecho electoral alteren las listas, los asientos del libro del censo ó sus modificaciones, ó certifiquen inexactamente sobre bienes, títulos y cualidades en que se funde el derecho ó la incapacidad electoral, y los interesados ó sus representantes que con iguales fines falten á sabiendas á la verdad de sus actos, peticiones ó declaraciones.—Art. 124... 1.º, pág. 340.

—El *Secretario de Aguantamiento* que habiéndosele pedido por un aspirante á la diputación á Cortes certificación expresiva de los individuos que teniendo capacidad como contribuyentes para votar en la elección no estuvieran inscritos en las listas, á fin de poder entablar ante el Juzgado la correspondiente reclamación de inclusión, certifica que son vecinos y contribuyentes de la localidad por cuota mayor de 25 pesetas un número determinado de individuos, algunos de los cuales no están avocinda-



dos en el pueblo, y otros pagan menor cuota de contribución que la expresada, ¿podrá eximirse de la pena del delito de *falsedad electoral*, comprendido en el art. 124, núm. 1.º de la ley de 28 de Diciembre de 1878 y castigado en el 123: 1.º, porque castigando aquel artículo la falsedad que se cometa para dar ó quitar el derecho electoral, la antedicha certificación no podía producir ese resultado por carecer del V.º B.º del Alcalde, según lo dispuesto en el art. 125, núm. 7.º de la ley Municipal; 2.º, porque correspondiendo á las oficinas de Hacienda el certificar sobre lo relativo á contribuciones, la expedida por el Secretario no podía dar ni quitar el derecho electoral; y 3.º, porque para que tengan aplicación los artículos 123 y 124, es preciso que por medio de la certificación se haya *logrado* la declaración del derecho electoral, lo que no sucedió en el caso de que se trata?—Cuest. única, pág. 340.

- Los Presidentes de las Comisiones inspectoras que habiendo recibido los avisos para anotar las variaciones en las casillas del censo de su distrito dejaren intencionadamente de anotarlas.—Artículo 124... 2.º, pág. 341.
- La Comisión inspectora del censo que habiendo recibido con posterioridad al día 1.º y antes del 10 de Diciembre, por conducto del Gobernador civil de la provincia, varios expedientes con certificación de sentencia firme sobre inclusión y exclusión respectivamente de varios electores, resuelve en sus sesiones del 10 y el 30 del expresado mes no hacer las rectificaciones en el censo relativas á dichos testimonios de sentencias, reservándolas para la operación del 1.º de igual mes de Diciembre del año siguiente, ¿será responsable del delito de *falsedad electoral*, comprendido en el núm. 2.º del art. 124 de la ley de 28 de Diciembre de 1878?
- Los que alteraren las firmas ó sellos ó verificaren cualquiera modificación ó manejo fraudulento en las propuestas de interventores, apertura de sus pliegos, actas de su contenido, designación de suplentes y demás operaciones relativas á la constitución del colegio electoral.—Art. 124... 4.º, pág. 342.
- ¿Constituirá el delito de *falsedad electoral*, comprendido en el número 4.º del art. 124 de la ley de 28 de Diciembre de 1878, la sustitución fraudulenta de uno ó más de los Interventores nombrados por la Comisión inspectora del censo, bajo el falso pretexto de no haberse presentado oportunamente, sin embargo de haber sido los primeros que se presentaron en el local designado para la elección al abrirse la puerta del mismo?—Cuestión única, pág. 342.
- Coacciones electorales.—Artículo 126, pág. 343.
- Aun cuando el acto ó manifestación ejecutado sea *Hecho* en sí,

¿constituirá el delito de *coacción electoral* si su objeto principal y determinante fué cohibir ó ejercer presión sobre los electores?—¿Será por tanto responsable de dicho delito el que ofrece á ciertos electores dinero y otras especies para que voten una candidatura determinada?—Cuest. única, pág. 343.

—El ofrecimiento de dádivas á electores para que voten cierta candidatura, ¿constituirá el delito *consumado* que prevé el artículo 127, núm. 5.º, en relación con el 126 de la ley de 28 de Diciembre de 1878, aun cuando no haya llegado á entregarse la dádiva?—Cuest. única, pág. 344.

—Infracciones de la ley Electoral.—Art. 128, pág. 345.

—El Alcalde presidente de una Mesa electoral que no habiendo recibido la certificación del nombramiento de Interventores, invita en alta voz á los que tengan la credencial de tales que la exhiban y tomen asiento, verificándolo tres de aquéllos y como al cuarto le faltase la credencial, nombra á otro elector para sustituirle, constituyendo así la Mesa, ¿será responsable de la *falta* comprendida en el art. 128 de la ley Electoral, de 28 de Diciembre de 1878?—Cuest. I, pág. 345.

—El Presidente ó Interventores de una Mesa electoral que dejan de remitir al Gobernador de la provincia el duplicado de las copias de las listas numeradas de los electores que han votado y del resumen de los votos obtenidos por los candidatos, siendo preciso para obtenerlo, después de una orden por escrito de dicha Autoridad, no cumplida, que lo recogiera la Guardia civil, ¿serán responsables, todos por igual, de la *falta* comprendida en el art. 128 de la ley Electoral, de 28 de Diciembre de 1878?—Cuest. II, pág. 346.

—¿Serán responsables de la *falta* definida en el art. 128 de la ley Electoral, de 28 de Diciembre de 1878, los individuos de la Mesa que consienten que anoten los nombres de los votantes dos personas ajenas á ella, y que se instalan para verificar la elección en local distinto de aquel en que se procedió á la apertura de los pliegos de nombramiento de Interventores?—Cuest. III, pág. 347.

—Negativa de admisión de los recursos y protestas que se formulen, cualquiera que sea su índole, ó de proveer al que presente alguna de esas reclamaciones del oportuno recibo de ella, ó resistencia á insertar en el acta todas las dudas, reclamaciones y protestas motivadas, ya se hayan hecho de palabra ó por escrito.—Art. 123... 3.º, pág. 348.

—¿Incurrirán en la *falta electoral* prevista en el núm. 3.º del artículo 129 de la ley de 28 de Diciembre de 1878 los Secretarios escrutadores que se niegan á admitir, devolviéndola, una pro-



testa por escrito presentada por varios electores de la Sección?  
—¿Podrá servirles de exculpación la razón que alegaran de que no quisieron recibirla en aquel momento por no interrumpir la votación empezada?—Cuest. única, pág. 348.

**Ley Municipal, de 2 de Octubre de 1877.**—Página 350.

—Término máximo de la suspensión gubernativa de los Regidores.—Art. 190, pág. 350.

—Para que el requerimiento de los Concejales propietarios á los interinos surta sus efectos según el art. 190 de la ley Municipal, ¿será menester que se haga *personalmente*, ó bastará que los segundos tengan conocimiento *de cualquiera manera* de las gestiones que hayan practicado los primeros para ser reintegrados en sus cargos?—Cuest. única, pág. 350.

—Fraudes y exacciones ilegales cometidas por los Alcaldes, Concejales y asociados en el establecimiento, distribución y recaudación de los arbitrios ó impuestos.—Art. 198, pág. 351.

—¿El art. 198 de la ley Municipal vigente se refiere tan sólo á los arbitrios *repartidos y percibidos*, ó sea á actos definitivos, firmes y obligatorios para el contribuyente, ó comprende también los repartos verificados, aun cuando estén pendientes de aprobación de la Autoridad superior, ó hayan sido dejados sin efecto por ésta en tiempo oportuno?—Cuest. I, pág. 351.

—Aun cuando el art. 198 de la ley Municipal sólo habla de los *Concejales y asociados*, ¿debe hacerse extensiva su sanción á los *repartidores del impuesto de consumos* nombrados por la Administración provincial, con arreglo al art. 252 de la Instrucción de 16 de Junio de 1885?—Cuest. II, pág. 352.

—Entre los *arbitrios é impuestos* de que habla el art. 198 de la ley Municipal, ¿deberá comprenderse también la *contribución de consumos*, aun cuando se haya hecho su repartimiento con arreglo á los artículos 1.º y 6.º de la ley de 16 de Junio de 1885, y los 260, 261, 263 y 264 de la Instrucción de la misma fecha?—Cuestión III, pág. 352.

—V. *Prolongación de funciones*.

**Ley penal especial.**—V. *Ordenanzas de farmacia*.

**Libre ejercicio de los cultos.**—V. *Escarnio público*, etc.

## M

**Malversación de caudales públicos.**—Artículo 406, pág. 206.

—A virtud de autos civiles se embargan bienes de la propiedad de una persona, siendo nombrado depositario un tercero que, aceptado el cargo, los deja en poder de su dueño, por no poderlos tener en su casa; mas fallecido éste, dispone de ellos su mujer, sin que por más gestiones que practique el depositario para recogerlos se los quieran entregar, por lo que pone el hecho en conocimiento del Juzgado: ¿habrá aquí responsabilidad para el depositario, á tenor del art. 406, en relación con el 410, porque al aceptar el cargo y ofrecer cumplirlo fielmente abandonó los bienes embargados al propio interesado, dando lugar á su sustracción por tercera persona?—Cuest. única, pág. 206.

—La existencia por sí sola de un *alcance* contra el funcionario encargado de caudales públicos, ¿será bastante á determinar la de un delito de *malversación*, si no resulta que haya aplicado á usos propios ó ajenos la cantidad desfalcada, ni que la haya sustraído ni permitido que otro lo hiciera?—Cuest. I, pág. 207.

—¿Será bastante á determinar la responsabilidad del procesado como autor del delito de *malversación*, comprendido en el artículo 407 del Código, el hecho de haber recibido en custodia determinadas cantidades, no haberlas entregado ni tenerlas, ni explicado racionalmente el motivo de la falta de las mismas?—Cuestión II, pág. 208.

—Para que proceda, en su caso, la aplicación y penalidad del párrafo segundo del art. 407 del Código, ¿será condición precisa que la malversación se haya verificado con *daño ó entorpecimiento del servicio público*?—Cuest. III, pág. 209.

**Manifestaciones pacíficas.**—V. *Reunión ó manifestación pacífica*.**Maquinaciones para alterar el precio de las cosas.**—Coligación con el fin de encarecer ó abaratar abusivamente el precio del trabajo ó regular sus condiciones.—Art. 556, pág. 303.

—El autor de un artículo de periódico cuya síntesis no es otra que la de aconsejar á la clase obrera que emplee la fuerza para imponer de este modo á los fabricantes é industriales la reduc-



ción á ocho horas del trabajo del obrero, ¿será responsable, cuando menos, del delito de *provocación directa* por medio de la imprenta á la perpetración del delito de *coligación con el fin de encarecer abusivamente el precio del trabajo y regular sus condiciones?*—Si en el propio artículo se injuria y amenaza también á la Autoridad, ¿deberá imponerse al culpable la pena del delito más grave en su grado máximo, con arreglo al art. 90 del Código?—Cuest. única, pág. 303.

**Marido.**—V. *Amancebamiento del marido.*

**Máximo de duración de la condena del culpable.**—No puede exceder del triple de tiempo por que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, dejando de imponérsele las que procedan, desde que las ya impuestas cubran el máximo del tiempo predicho.—Art. 89, regla 2.ª, pág. 104.

—La limitación en la imposición de las penas establecidas en la regla 2.ª del art. 89 del Código, ¿será sólo aplicable á los delitos que se persigan en un mismo procedimiento?—Cuest. única, página 104.

**Médico de cabecera.**—V. *Falsificación de documentos públicos.*—*Funcionarios públicos.*—*Infracción de las leyes sobre inhumanidades.*

**Medios adecuados y eficaces.**—V. *Tentativa.*

**Ministerio fiscal.**—V. *Ley Electoral, de 20 de Agosto de 1870.*

**Moneda.**—V. *Expendición de moneda falsa.*—*Falsificación de moneda.*

**Morada del ofendido.**—Circunstancia agravante.—Art. 10...20.ª, página 84.

—Cuando el delito de robo, con motivo ó ocasión del cual resulta homicidio, se ha cometido en la propia casa de la víctima, ¿deberá estimarse la circunstancia agravante de haberse ejecutado el hecho en la *morada del ofendido?*—Cuest. única, pág. 84.

**Muerte de dos ó más personas en un solo acto.**—El que al querer matar á una sola persona, mata á dos, ¿será responsable de un solo delito, ó de dos?—Cuest. II, pág. 8.

**Multa.**—Regla para elevarla ó bajarla uno ó más grados.—Artículo 95, pág. 105.

—¿Cómo deben formarse los grados inferiores de la pena de multa con arreglo al art. 95 del Código?—Cuest. única, pág. 105.

**Multa.**—V. *Apremio personal.*

## N

**Necesidad racional del medio empleado para impedir ó repeler la agresión.**—Artículo 8.º, núm. 4.º, pág. 36.

- El haberse rechazado con *arma blanca* la acometida que con un *palo* hiciera el agresor, causándole de aquel modo la muerte, ¿determinará acaso un *exceso* en la defensa, y por ende la imposibilidad de apreciar el requisito de la *necesidad racional* del medio empleado para repeler la agresión?—Cuest. I, pág. 36.
- ¿Deberá estimarse como *excesiva*, y por lo tanto *racionalmente innecesaria*, la defensa que con *arma de fuego* se oponga á una agresión legítima verificada con *arma blanca*?—Cuest. II, página 37.
- El que sin provocación alguna por su parte se siente golpeado de pronto con un *palo* en la cabeza, y repele esa agresión con una *navaja ó faca*, con la que infiere á su contrario una lesión en la cabeza, curada en trece días sin impedimento ni deformidad, ¿habrá empleado un *medio racionalmente necesario* para rechazar el injustificado acometimiento de que fué objeto?—Cuestión III, pág. 38.
- La circunstancia de no haberle alcanzado al agredido los palos que le descargara el agresor, ¿será obstáculo para apreciar que empleó un *medio racionalmente necesario* al rechazar aquel ataque con un palo que dió á su vez á la cabeza de su adversario, aun cuando le produjera así la muerte?—Cuest. I, pág. 38.
- Si sorprendido *infraganti* un ladrón, de noche, en el campo, por el Alcalde pedáneo del lugar y dos individuos del somatén comisionados al efecto por el Alcalde para descubrir á los autores de varios hurtos, al requerirle aquéllos para que les siguiera á casa del Alcalde, se les encaró el ladrón diciendo con tono airado: «qué Alcalde ni qué c..... de Alcalde;» y echando mano á la faja en *además* que *creyeron* de sacar un arma, arrojando al suelo el bulto que en la cabeza llevaba, se lanzó hacia los individuos del somatén, en cuyo instante, dos de éstos dispararon contra el que suponían agredirles, produciéndole la muerte: ¿deberán ser declarados los autores de este homicidio exentos de responsabilidad *in totum*?—Cuest. II, pág. 39.



—La poca ó ninguna entidad del mal causado por el agresor al agredido, ¿será bastante á determinar la *innecesidad* del medio empleado por éste para repeler la agresión, aun cuando sea de importancia y gravedad el daño que á su vez haya producido con este repelimiento al agresor?—Cuest. I, pág. 40.

—Unos golpes dados con un *roncal* por un hombre de cuarenta años á un muchacho de diez y ocho, ¿autorizarán como *medio racional* el disparo que haga éste de una pistola contra aquél, aun cuando á consecuencia del mismo se produzca la muerte del agresor?—Cuest. II, pág. 41.

—Sean cuales fueren las consecuencias del acto de defensa, si ésta fué proporcionada é indispensable para impedir ó repeler el acometimiento, ¿deberá estimarse la *necesidad racional* de la misma?—Cuest. III, pág. 41.

—¿Será alguna vez *medio racional y adecuado* de defensa el rechazar con un *disparo* productor de *lesiones menos graves* el *bofetón* que en la cara recibe una persona?—Cuest. IV, pág. 42.

—¿Podrá dejar de apreciarse el requisito de la *necesidad racional* del medio empleado para impedir ó repeler la agresión, porque al defenderse el agredido pudo dirigir la puntería del arma de fuego á otra parte menos importante del cuerpo de su agresor, y por lo tanto causarle un mal menos grave que el de la muerte?—Cuest. V, pág. 42.

—¿Podrá invocar válidamente á su favor la *necesidad racional* del medio empleado para repeler la agresión el que al recibir un puñetazo de otro, que no consta tuviera arma ó la sacara, le infliere con una lanceta ó bisturí una lesión productora de la muerte?—Cuest. única, pág. 43.

—El haber el procesado dado muerte á su agresor después de haberse apoderado del cuchillo que éste esgrimía contra él, ¿excluirá *ipso facto* la *necesidad racional* del medio empleado para repeler la agresión?—Cuest. única, pág. 43.

—¿Excluirá la *necesidad racional* del medio empleado para impedir ó repeler una agresión el que personas extrañas puedan acudir en auxilio del agredido?—Cuest. única, pág. 44.

**Nieto por afinidad.**—V. *Exención de responsabilidad criminal por los hurtos*, etc.

**Noche, despoblado, ó despoblado y cuadrilla.**—Circunstancia agravante.—Art. 10., 15.ª, pág. 77.

—Aun cuando el art. 10. núm. 15 del Código deja al criterio de los Tribunales la apreciación, según la naturaleza y efectos del

delito, de las circunstancias agravantes de *nocturnidad y despoblado*, ¿procederá la casación de la sentencia cuando en la determinación de aquel juicio se ha procedido sin sujeción á las reglas de la crítica racional y por conjeturas incongruentes con la resultancia de los hechos?—Cuest. I, pág. 77.

—En un delito de homicidio causado en *riña tumultuaria*, ¿cabe apreciar la circunstancia agravante de haberse ejecutado *de noche*?—Cuest. II, pág. 78.

—Aun cuando no haya el culpable buscado *ex profeso* la noche, ¿bastará para apreciarla como circunstancia agravante que *se haya aprovechado* de ella para perpetrar más fácilmente el delito y lograr, á ser posible, su impunidad?—Cuest. III, pág. 78.

—En el delito de *estupro*, ¿deberá apreciarse como agravante la circunstancia de haberse ejecutado *de noche*?—Cuest. IV, página 79.

—Para que se estime el *despoblado* como circunstancia agravante, ¿será menester que se haya buscado *de propósito*?—Cuest. V, página 79.

**Nocturnidad.**—V. *Noche*.

**No intención de causar un mal tan grave.**—Circunstancia atenuante.—Art. 9.º... 3.º, pág. 51.

—El mero hecho de no haber sido mortal de necesidad una herida que produjo, no obstante, la muerte del que la recibió, la cual hubiera podido tal vez evitarse con el inmediato auxilio y asistencia del lesionado, ¿será bastante á determinar en este homicidio la existencia de la circunstancia atenuante de *no intención de causar un mal tan grave*?—Cuest. I, pág. 51.

—¿Es compatible con el delito de *injurias* la circunstancia atenuante de *no intención de causar un mal tan grave*?—Cuestión II, pág. 51.

—Al que mata á otro de un golpe de *ahijada* descargado sobre la cabeza, ¿deberá apreciársele la circunstancia atenuante de *no intención de causar un mal tan grave*?—Cuest. III, pág. 52.

—En el delito de *falsedad en documento público*, y en cualesquiera otros en que la entidad ó importancia del mal causado no afecta en nada á la calificación y penalidad del hecho delictivo, ¿cabrá estimar en el agente la circunstancia atenuante 3.ª del art. 9.º del Código?—Cuest. IV, pág. 52.

—Si al reclamarle al procesado una joven, con la que acababa de tener acceso carnal, el pago de la cantidad al afecto conve-



nida, la impuso silencio amenazándola de pegarle fuego, y al propio tiempo, encendiendo una cerilla que aplicó á una lata de petróleo que había en la habitación, la arrojó el líquido inflamado á la expresada joven que, al verse envuelta en llamas, salió afuera pidiendo socorro, logrando un sujeto cubrirla con sus ropas y sofocar el fuego, no sin que éste la causara gravísimas lesiones, de las que falleció el mismo día, ¿cabrá apreciar en este asesinato por medio de *incendiola* circunstancia atenuante de *no haber tenido el culpable intención de causar un mal tan grave como el producido?*—Cuest. V, pág. 53.

—El que disputando con una señora la descarga un puñetazo en la cara, ocasionándole una lesión con hundimiento del pómulo, que exige cuarenta días de asistencia facultativa y le produce deformidad incurable, ¿podrá invocar válidamente á su favor la circunstancia atenuante de *no intención de causar un mal tan grave?*—Cuest. VI, pág. 53.

—En un homicidio realizado por varios al tomar parte á favor de un sujeto que estaba luchando con otro, sobre quien, caído al suelo, se arrojaron golpeándole con los pies y rodillas en el pecho, cuello y vientre, produciéndole su muerte á los pocos momentos de haber llegado por su propio pie á su casa, á consecuencia de conmoción cerebral, efecto de dicho golpeamiento, ¿deberá apreciarse la circunstancia atenuante de *no intención de causar un mal tan grave como el producido?*—Cuest. VII, página 53.

—El que disputando con otro coge una banqueta y con ella le da un golpe en la cabeza, causándole lesiones de más de treinta días, con pérdida completa de la visión de un ojo, ¿podrá invocar válidamente á su favor la circunstancia atenuante de *no intención de causar un mal tan grave?*—Cuest. VIII, pág. 54.

—El que da á otro un palo en la cabeza, causándole lesiones menos graves, ¿podrá invocar á su favor la *no intención de causar un mal tan grave?*—Cuest. IX, pág. 55.

—¿Cabe admitir que *no tuvo intención de causar un mal tan grave* el que asesta á una joven de doce años un golpe con el puño de un arma blanca, fracturándole una clavícula?—Cuest. X, página 55.

**Notario.**—V. *Coacción á vejación injusta.*

## O

**Ofensa á la Autoridad.**—V. *Desacato*.

**Ofensa de la edad del ofendido.**—Circunstancia agravante.—Artículo 10... 20.ª, pág. 82.

—La circunstancia agravante de *ofensa del respeto* que por su edad merezca el ofendido, ¿deberá estimarse como embebida en la de *alevosía*, de modo que apreciado el hecho como *asesinato* por la concurrencia de esta última, haya de hacerse caso omiso de aquélla para la correspondiente agravación de la penalidad?—Cuest. única, pág. 82.

**Ofensa al pudor ó á las buenas costumbres con hechos de grave escándalo ó trascendencia.**—Artículo 456, pág. 230.

—Si alucinados varios sujetos por predicaciones y supuestas apariciones anunciando el próximo fin del mundo, hubieron de reunirse en torno de una gran hoguera donde arrojaron muebles y otros efectos, desnudándose todos, hombres, mujeres y niños, para mejor pedir y obtener la gracia del cielo, en cuyo estado completo de desnudez permanecieron todos á presencia unos de otros y de los niños pequeños, hasta que se presentó la Guardia civil en el sitio de la ocurrencia, ¿constituirán tales hechos el delito de *escándalo público*, comprendido en el artículo 456 del Código?—El haber obrado los procesados á estímulo de la superstición, ¿autorizará algo más que la atenuante de arrebató y obcecación apreciada por el Tribunal sentenciador, ó sea la exención de toda responsabilidad criminal?—Cuestión única, pág. 230.

**Ofensa de los sentimientos religiosos.**—V. *Ejecución con escándalo, en lugar religioso, de actos que ofenden, etc. Perturbación de los actos de un culto, etc.*

**Ofensa del sexo.**—Circunstancia agravante.—Art. 10... 20.ª, pág. 83.

—En el delito de robo con motivo ó ocasión del cual resulta el homicidio de una mujer, ¿deberá apreciarse la circunstancia agravante de *ofensa del sexo*?—Cuest. I, pág. 83.



—El que mata alevosamente á una mujer sólo por *resentimiento ó venganza*, ¿será responsable de este asesinato con la circunstancia agravante de *ofensa del sexo*?—Cuest. II, pág. 83.

**Ordenanzas de farmacia.**—Las vigentes de 18 de Abril de 1860, tienen el carácter de *ley penal especial*, á los efectos del artículo 7.º del Código?—Cuest. única, pág. 22.

**Otorgamiento, en perjuicio de otro, de un contrato simulado.**—Art. 551... 2.º, pág. 299.

—La simulación de un contrato de préstamo entre dos personas, para burlar el pago de costas á que fué condenada una de éstas en pleito con un tercero, ¿será constitutiva del delito de *estafa*, previsto y penado en el núm. 2.º del art. 551 del Código, aun cuando al realizarse el contrato simulado no hubiere recaído todavía sentencia firme en dicho pleito?—Cuest. I, página 299.

—¿Existirá el delito de *simulación de contrato*, si la acción de la persona que se considera perjudicada nace de un acto que no guarda relación directa con la simulación realizada y es posterior á la misma?—Cuest. II, pág. 300.

## P

**Pan falso de peso.**—V. *Aprehensión á traficantes ó vendedores*, etc.

**Parentesco.**—Circunstancia *agracante ó atenuante*, según la naturaleza y efectos del delito.—Art. 10... 1.º, pág. 62.

—En el delito de *suposición de parto* cometido por una viuda con objeto de privar á una cuñada suya de los bienes que poseyera su marido y que, según disposición testamentaria de un tío de éste, de quien procedían aquéllos, debían pasar, en el caso de fallecer sin hijos, á la susodicha cuñada, ¿deberá estimarse el *parentesco* de la procesada con la perjudicada como circunstancia *atenuante ó agravante*?—Cuest. única, pág. 62.

**Parricidio.**—Artículo 417, pág. 212.

—La mujer que teniendo relaciones con un hombre casado, y de acuerdo con éste para envenenar á su esposa, compra la sus-

tancia tóxica con que intenta su consorte en el crimen producir dicho envenenamiento, ¿será responsable, como éste, del delito de *tentativa de parricidio*, ó lo será tan sólo del de *asesinato por envenenamiento*?—Cuest. única, pág. 212.

—V. *Aplicación de la pena compuesta de dos indivisibles*.

**Perro.**—V. *Animales feroces y dañinos*.

**Perturbación á un ciudadano ó extranjero en la posesión de sus bienes.**—Pena del funcionario público que lo verifica no siendo en virtud de mandato judicial.—Artículo 228 (párrafo segundo), pág. 118.

—El Alcalde que prohíbe extraer grava de terrenos de propiedad particular, no obstante la autorización dada para ello por los dueños de las respectivas fincas, ¿será responsable del delito de *perturbación en la posesión de bienes*, previsto y penado en el segundo párrafo del art. 228 del Código, aun cuando alegue en su descargo que obró dentro de las facultades que le conceden los artículos 114 y 115 de la ley Municipal, porque, según la denuncia que se le hizo, la grava se sacaba de la ribera del río, y con las excavaciones se perjudicaba á las fincas colindantes, ocasionando peligro de hundimiento?—Cuest. I, pág. 118.

—El Alcalde de un pueblo que sin respetar la antigua posesión de un sujeto en cierto terreno, como rotorador del mismo, destruye los bardos que lo acotaban y pega fuego á la leña y ramaje que tenía aquél preparados para la construcción del chozo en el propio sitio, ¿podrá eximirse de la pena aneja al delito de *perturbación en la posesión de bienes*, comprendido en el artículo 228 del Código, aun cuando la base del reparto hecho de la dehesa en que estaba enclavada el terreno en cuestión hubiese sido la de que las suertes no pudiesen ser poseídas por forasteros, cuya calidad tenía el desposeído, y aun cuando por el núm. 5.º del art. 73 de la ley Municipal correspondiera al Alcalde la administración, custodia y conservación de las fincas, bienes y derechos del pueblo, á cuyo objeto iban encaminados los actos ejecutados por el mismo?—Cuest. II, pág. 119.

**Perturbación de los actos de un culto ú ofensa de los sentimientos religiosos de los concurrentes á ellos de un modo no previsto en la sección tercera, capítulo II, título II del libro segundo de este Código.**—Art. 586... 1.º, pág. 315.

—El que permaneciendo cubierto al paso de una procesión ó invitado por el cura que la preside á que se descubra ó retire, se niega resueltamente á verificarlo, ¿será responsable de la *falta de ofensa á los sentimientos religiosos* de los concurrentes á los actos de un culto?—Cuest. I, pág. 315.



—El que permanece cubierto al paso del Viático llevado en procesión á los enfermos pobres, á pesar de las amonestaciones que se le hacen para que se descubra, ¿será responsable de la falta comprendida en el núm. 1.º del art. 586 del Código, aun cuando se hallase á la sazón en el dintel de la puerta de su casa, si estaba á la vista de los concurrentes á dicho acto religioso?—Cuest. II, pág. 316.

**Pluralidad de delitos.**—V. *Delito*.—Cuest. II.

**Precio, recompensa ó promesa.**—Circunstancia agravante.—Artículo 10... 3.ª, pág. 66.

—La recompensa posterior pedida por el ejecutor material de un delito al instigador ó inductor del mismo, ¿será bastante á determinar la circunstancia agravante de haberse ejecutado aquél mediante precio, recompensa ó promesa?—Cuest. única, pág. 66.

**Premeditación conocida.**—Circunstancia agravante.—Artículo 10... 7.ª, pág. 69.

—La existencia de un móvil apasionado, ¿excluirá la circunstancia agravante de *premeditación*, cuando se demuestra que para preparar el crimen en todos sus detalles y pormenores necesitó el delincuente un tiempo extraordinario, y que á su consumación precedió, tres ó cuatro meses antes, el frustramiento de idéntico hecho punible dirigido contra la misma persona?—Cuestión I, pág. 69.

—¿Es incompatible con el delito de robo ó inherente al mismo la circunstancia agravante de *premeditación conocida*?—Cuest. II, página 69.

—La circunstancia de *premeditación conocida*, ¿es compatible con la de *alevosía*, ó deberá estimarse que, cuando concurre ésta, aquélla está embebida y es inherente á la misma?—Cuest. III, página 70.

—V. *Asesinato*.

**Prescripción de los delitos.**—Artículo 133, pág. 108.

—La circunstancia agravante de *reincidencia*, ¿será prescriptible con arreglo al art. 133 del Código?—Cuest. única, pág. 108.

**Prevalerse el culpable del carácter público que tenga.**—Circunstancia agravante.—Art. 10... 11.ª, pág. 75.

—El agente de orden público que, hallándose vestido de uniforme en una taberna, y puesto de acuerdo con el dueño, pretextando que un forastero que allí había adeudaba una cantidad por con-

sumo hecho en dicho establecimiento, le compele á su abono, y oponiéndose el engañado, lo derriba al suelo, y mientras le sujeta, el tabernero le sustrae del pecho un pañuelo contentivo de una cantidad de dinero, ¿será responsable de este delito de robo con violencia en la persona, con circunstancia agravante de haberse prevalido para cometerlo del carácter público que tenía?—Cuest. I, pág. 75.

—El cartero de una oficina de Correos que, concertado con otros sujetos para llevar á cabo la sustracción de valores declarados conducidos en un tren, aprovechando para realizarla el abandono en que quedaba ordinariamente la cartera en que dichos valores eran conducidos, por la mala costumbre del ambulante de meterse por las dependencias de la estación hasta la señal de aviso de la salida del tren; y valido de la facilidad que para el acceso al despacho de certificados y de los expresados valores tenía como tal cartero, da previo aviso á los ejecutores materiales del hecho de la expedición en que había de tener lugar la salida de valores de alguna importancia, ¿será responsable de la sustracción que de éstos se realice, con la circunstancia agravante de haberse prevalido del carácter público que tenía?—Cuestión II, pág. 76.

—En las estafas ó otros delitos que por razón de sus cargos cometan los *agentes matriculados de negocios*, ¿deberá estimarse la circunstancia agravante de haberse prevalido los culpables del carácter público que como tales agentes matriculados tienen?—Cuest. III, pág. 76.

—El *agente de la Autoridad* que al intervenir como tal para poner coto á una disputa, es insultado por uno de los que la sostienen, por lo que desenvainando el sable inflere con él una lesión menos grave al que lo insultó, ¿será responsable de este hecho, con la circunstancia agravante de haberse prevalido del carácter público que tenía?—Cuest. IV, pág. 77.

**Prevaricación.**—Providencia ó resolución injusta dictada ó consultada por funcionario público en negocio contencioso-administrativo ó meramente administrativo.—Art. 369, pág. 190.

—¿Será responsable del delito de *prevaricación*, previsto y penado en el art. 369 del Código, el Alcalde que, habiéndosele presentado en el día y antes de la hora señalada para la subasta de unos bienes el propio deudor de fondos municipales á quien habían sido éstos embargados, con el objeto de hacer pago de la deuda principal y obligarse al del importe de las costas, se niega á recibir el dinero, así como á suspender el remate?—Cuest. única, pág. 190.

**Prolongación de funciones.**—Artículos 385 y 386, páginas 197 á 201.



- El delito de *prolongación de funciones* en que incurren los Concejales interinos que no reintegran á los propietarios en sus cargos dentro del plazo marcado en el art. 190 de la ley Municipal, ¿dejará de existir por razón de procesamiento que no sea el que se mande formar en virtud de lo que resulte del expediente gubernativo que determinó la suspensión?—Cuest. I, página 197.
- Suspendida por Real orden una Diputación provincial; nombrados los Diputados interinos; confirmada dicha suspensión por Real decreto, previa consulta del Consejo de Estado; mandado pasar el oportuno tanto de culpa á los Tribunales; declarado por éstos no haber lugar por entonces á proceder criminalmente contra la Diputación suspendida, acordando poner esta resolución en conocimiento del Gobernador civil de la provincia á los efectos oportunos, y requeridos los Diputados interinos, con notificación del auto antedicho, para que cesen en el desempeño de sus cargos, continúan en ellos hasta algunos meses después, en que cesan á virtud de Real orden del Ministerio de la Gobernación, resolviendo en este sentido la consulta del Gobernador de la provincia: ¿serán responsables esos Diputados interinos del delito de *prolongación de funciones*, comprendido en el art. 385 del Código?—Cuest. II, pág. 198.
- ¿Bastará á los efectos del art. 190 de la ley Municipal que el *requerimiento* de los Concejales propietarios suspendidos á los interinos se haga por simple *manifestación verbal* á presencia de dos ó más testigos?—¿Incurrirán los Concejales interinos en la responsabilidad que determina el art. 385 del Código penal si, después de requeridos en la forma antedicha, continúan desempeñando sus cargos, aun cuando hubiesen declarado á los propietarios incapacitados por ser deudores á los fondos municipales como segundos contribuyentes, y aun cuando por tal razón les hubiese ordenado el Gobernador de la provincia que siguieran en el ejercicio de sus funciones?—Cuest. III, pág. 199.
- El art. 386 del Código, que condena al funcionario á restituir con la multa del 10 al 50 por 100 de su importe los derechos ó emolumentos que hubiere percibido por razón de su cargo después de haber debido cesar en él, ¿será aplicable á los Diputados interinos de una Diputación provincial que hubieran continuado desempeñando sus cargos después que debieron cesar en ellos, con sujeción á la regla 3.ª del art. 138 de la ley provincial, de 29 de Agosto de 1882, por lo que hace relación á las dietas que hubieran percibido por su asistencia á las sesiones durante dicho tiempo, aun cuando hicieran de ellas donativo á favor de un Establecimiento de beneficencia de la provincia?—Cuestión única, pág. 201.

—V. *Ley Municipal, de 2 de Octubre de 1877.*

**Promesa de matrimonio no cumplida.**—V. *Estupro*.

**Propiedad industrial.**—V. *Defraudación de la propiedad literaria ó industrial*.

**Propiedad literaria.**—V. *Defraudación de la propiedad literaria ó industrial*.

**Proposición.**—Artículo 4.º, pág. 20.

—El acto de dirigirse un sujeto á la señora de un Gobernador civil para que interese á su marido á fin de que consienta el juego, mediante la promesa de cierta cantidad que se obligaba á entregarle por decenas ó quincenas adelantadas, ¿constituirá tan sólo una *proposición de cohecho*, y por lo tanto no penable según el art. 4.º del Código, ó deberá calificarse de verdadera *tentativa* del propio delito?—Cuest. I, pág. 20.

—Instruidas diligencias sumariales por un Juez municipal sobre cierto hecho en virtud de denuncia del Alcalde, el Secretario del mismo Juzgado y el del Ayuntamiento proponen á los que fueron objeto del proceso que rompan dichas diligencias si les abonan una cantidad determinada de dinero, á cuya exigencia se niegan los interesados: ¿hay aquí *tentativa* del delito de *cohecho*, ó meramente la *proposición* del mismo, y por lo tanto no penable según la regla general del art. 4.º del Código?—Cuestión II, pág. 21.

—El hecho de ofrecer un *Abogado* á un penado la obtención del informe favorable del Tribunal en un expediente de indulto, mediante la entrega de cierta cantidad para cuyo cobro practicó algunas gestiones, sin que llegara á realizarlo empero, por haber desistido de las mismas al comprender que el interesado y su familia recelaban algún engaño, ¿será constitutivo de una mera *proposición* del delito de *estafa*, y por lo tanto no penable según los términos del párrafo primero del art. 4.º del Código, ó constituirá una verdadera *tentativa* del expresado delito?—Cuestión III, pág. 21.

**Prostitución ó corrupción de menores.**—Artículo 459, página 232.

—¿Bastará un solo acto de *prostitución ó corrupción de menores*, cuando se realiza ésta con *abuso de confianza*, para que caiga el hecho bajo la sanción del art. 459 del Código?—La dueña de un taller de sastrería que promueve la prostitución de una de sus aprendizas ó oficiales menor de edad, ¿será responsable de este delito por *abuso de confianza*?—Cuest. I, pág. 232.

—Para que exista el delito consumado de *corrupción ó prostitución de menores*, ¿será necesario que ésta se realice, ó bastará



que el proxeneta haya ejecutado algún acto directamente en-  
caminado á conseguirla?—Cuest. II, pág. 233.

**Provocación directa, por medio de la imprenta, el grabado  
ó otro medio mecánico de publicación, á la perpetración  
de los delitos comprendidos en este Código.—Artículo 582,  
página 312.**

—¿Será responsable del delito de *provocación directa por medio  
de la imprenta* á la perpetración del delito *contra la forma de  
gobierno*, definido en el art. 181 del Código, el autor de un men-  
saje dirigido á D. Carlos, que después de multitud de frases  
encomiásticas á la persona del Pretendiente y depresivas para  
los Gobiernos liberales, expresa que, «para llevar á cabo el  
triumfo de aquél, 100.000 valientes le ofrecen de nuevo resuel-  
tamente su sangre, intereses y vida?»—Cuest. I, pág. 312.

—La circunstancia de no haber sido denunciado ni penado el pe-  
riódico del que se transcribe en otro un artículo cuyo conte-  
nido constituye un delito de *provocación por medio de la im-  
prenta* á la perpetración del delito *contra la forma de gobierno*,  
¿será un obstáculo á la persecución y castigo del autor de la  
*reproducción*?—Cuest. II, pág. 313.

—Un mensaje dirigido á *D. Carlos de Borbón*, en que después de  
felicitarle por el restablecimiento de su hijo se dice que los fir-  
mantes «sólo ambicionan entrar pronto en..... para morir al  
grito de viva..... y aunque indignos le piden un puesto de ho-  
nor á vanguardia de su angusto hijo para responder con sus  
vidas de la de éste,» ¿constituirá el delito de *provocación* á co-  
meter el *contra la forma de gobierno*, que pena el art. 582 del  
Código, en relación con el 181?—Cuest. III, pág. 313.

—¿Será responsable del delito de *provocación por medio de la im-  
prenta* á variar la forma de gobierno, previsto y penado en el  
artículo 582 del Código, en relación con el 181, el autor de un  
artículo, publicado en un periódico republicano, en el que «se  
aconseja la unión bajo una sola bandera de todos los que pro-  
fesan aquellas ideas, como medio de llegar al logro de las as-  
piraciones del partido?»—Cuest. IV, pág. 313.

**Provocación inmediata ó amenaza adecuada por parte del  
ofendido.—Artículo 9.º... 4.º, pág. 55.**

—El haber el perjudicado promovido la cuestión y excitado en  
son de desafío al procesado á que le siguiese á un monte próxi-  
mo, donde éste disparó contra aquél una pistola, ¿serán hechos  
bastantes á determinar la existencia de la circunstancia ate-  
nuante de haber precedido inmediatamente *provocación* de par-  
te del ofendido?—Cuest. I, pág. 55.

— La *grosera manifestación* del ofendido hecha al procesado de «que tenía tantos tales como él,» y al contestarle éste «que tendría tantos,» el *retarle* á que saliera fuera para verlo, verificado lo cual, el procesado le dió un navajazo que le produjo la muerte, ¿constituirán la circunstancia atenuante de *provocación*, comprendida en el núm. 4.º del art. 9.º del Código?—Cuestión II, pág. 56.

## Q

**Quebrantamiento de condena.**—Artículo 129, pág. 106.

—¿Será responsable del delito de *quebrantamiento de condena* el penado que, aprovechando un descuido de los vigilantes, sale del establecimiento penal, da algunos paseos por el pueblo y al cabo de una hora vuelve espontáneamente á la cárcel?—Cuestión única, pág. 106.

**Querrela de antejuicio.**—V. *Acusación ó denuncia falsa*.

## R

**Rapto.**—De doncella menor de veintitrés años y mayor de doce, ejecutado con su anuencia.—Artículo 461, pág. 233.

—Para que exista el delito de *rapto* de doncella menor de veintitrés años y mayor de doce, ejecutado *con su anuencia*, ¿deberá entenderse que se haya realizado *con miras deshonestas*, por más que en el art. 461 no se haga mención de esta circunstancia, como en el 460?—¿Al rapto del art. 461 le comprenderá el beneficio del *perdón*, establecido en el párrafo cuarto del artículo 463?—Cuest. I, pág. 233.

—El hecho de convenirse un sujeto con una muchacha mayor de doce años y menor de veintitrés, con la que sostenía relaciones amorosas, que en cierta noche se saldría ella de su casa y acudiría á un sitio determinado, como así lo hizo, en donde estuvieron cohabitando hasta que una hora después volvió aquélla á su referida casa, ¿constituirá el delito de *rapto* de una mujer



mayor de doce años y menor de veintitrés, *ejecutado con su ausencia*, que prevé y castiga el art. 461 del Código?—Cuestión II, pág. 234.

**Real decreto de 20 de Junio de 1852.**—V. *Contrabando y defraudación*.

**Rebelión ó sedición.**—Artículo 258, pág. 126.

—Cuando por haberse disuelto los grupos de sediciosos y restableciéndose la tranquilidad á la intimación que les hiciera el Coronel jefe de la zona militar, no es posible ya pensar la sedición, según el art. 258 del Código, ¿cabrá calificar el propio hecho del tumulto como delito de *desorden público*, comprendido en el art. 271 del Código?—Cuest. única, pág. 126.

**Regente del Reino.**—Injurias ó amenazas hechas al mismo por escrito y con publicidad fuera de su presencia.—Art. 164, página 111.

—El llamar «extranjera» á la Reina Regente, y después de calificar de «bochornosos» ciertos proyectos de ley votados en Cortes, decir que dicha augusta señora los sancionará y firmará todos, ¿constituirá el delito de *injurias á la Reina Regente*, comprendido en el art. 164 del Código?—Cuest. única, pág. 111.

**Registrador de la Propiedad.**—V. *Falsificación de documentos públicos*.

**Reincidencia.**—Circunstancia agravante.—Artículo 10... 18.<sup>a</sup>, página 81.

—¿Será susceptible de casación por infracción del art. 10, número 18 del Código la sentencia que afirmando que el procesado ha sido penado anteriormente por el mismo delito, aunque sin añadir *ejecutoriamente*, estima en contra de aquél la circunstancia agravante de *reincidencia*?—Cuest. única, pág. 81.

—V. *Prescripción de los delitos*.

**Reincidente.**—V. *Hurto cometido por el que es dos ó más veces reincidente*.—*Reincidencia*.

**Reiteración.**—Circunstancia agravante.—Artículo 10... 17.<sup>a</sup>, página 80.

—Al que fué penado antes de 1870 por *vagancia*, ¿cabrá apreciarle, en un delito menor que cometa, la circunstancia agravante de haber sido castigado el culpable anteriormente por delito á que la ley señale mayor pena?—Cuest. única, pág. 80.

**Resguardo de consumos.**—V. *Dependientes del resguardo de consumos.*

**Responsabilidad civil subsidiaria.**—Artículo 20, pág. 97.

—En un delito de robo de efectos de un tren, ¿deberá ser considerada responsable civil y subsidiariamente la Empresa del ferrocarril, por el hecho de haber sus empleados ó dependientes dejado de colocar, con arreglo al Reglamento privado de orden interior de la Compañía, el candado correspondiente en la clavija de la puerta del vagón en donde iban los equipajes, materia del robo?—Cuest. única, pág. 97.

**Responsabilidad personal subsidiaria.**—V. *Apremio personal.*

**Resistencia á la Autoridad ó á sus agentes, ó desobediencia grave á los mismos en el ejercicio de las funciones de sus cargos.**—Artículo 265, pág. 140.

—El contribuyente moroso que al ser requerido por el comisionado de apremio, previas las formalidades de la Ley, á fin de que franquee la puerta de su casa para realizar el embargo, se niega resueltamente á ello, pero sin proferir injuria ó amenazas, por cuyo motivo hubo de retirarse el comisionado con las personas que le acompañaban, ¿será responsable del delito de desobediencia, previsto y penado en el art. 265 del Código, ó tan sólo de la falta comprendida en el núm. 5.º del 589?—Cuestión I, pág. 140.

—La circunstancia de haberse la Autoridad judicial atemperado más ó menos á las disposiciones legales al dictar una resolución, ¿será obstativa á la calificación y castigo del delito de desobediencia grave, determinada por la reiterada negativa del procesado á cumplir y ejecutar dicho mandato?—Cuest. II, página 141.

—El arrendatario de unas fincas rústicas que después de haber sido desahuciado y lanzado con las prevenciones y apercibimientos de ley y prohibición expresa de que volviera á penetrar en ellas, sigue cultivándolas y en posesión de las mismas, ¿será responsable del delito de desobediencia grave, previsto y penado en el art. 265 del Código, ó lo será tan sólo de la falta comprendida en el núm. 5.º del 589?—Cuest. III, pág. 141.

—El que se niega reiteradamente á la exhibición de sus libros mercantiles ordenada por la Autoridad judicial en juicio civil, ¿podrá eximirse hoy de la responsabilidad criminal inherente al delito de desobediencia grave, comprendido en el art. 265 del Código?—Cuest. IV, pág. 142.

—El no cumplimiento de la orden judicial de lanzamiento hecha



saber á una mujer para que deje á disposición de su dueño una finca que su difunto marido había llevado en arrendamiento, ¿constituirá por sí sólo el delito de *desobediencia grave*, aun cuando á dicho su marido se le hubiesen hecho ya diferentes intimaciones para la dejación del susodicho inmueble?—Cuestión V, pág. 142.

—Si de la causa resulta que constituida en la tienda de los procesados una Comisión del Ayuntamiento del pueblo para examinar el peso con que despachaban la carne, se ordenó al alguacil que lo recogiera, bajo el concepto de que estaba defectuoso, y al tratar de verificarlo se negó la dueña, echando el peso debajo del mostrador y luego dentro de un cuarto de la casa, y llegando el marido, resistióse también á que se le llevaran, acreditándose que el motivo de la resistencia de ambos esposos fué porque el peso no tenía ningún defecto, pues si caía algo del lado del plato donde se colocaba la carne era por las partículas que se van adhiriendo con el uso del mismo, en términos que colocados tres gramos en el plato contrario quedaba al fiel, y habiéndose probado además que en la localidad la Comisión de repeso no estima el peso falso mientras no exceda de cinco gramos, ¿habrá aquí términos hábiles para calificar esta *desobediencia* como *grave*, según el art. 265 del Código, ó simplemente como *falta*, comprendida en el núm. 5.º del 589?—Cuestión VI, pág. 143.

—La resistencia de un tabernero á obedecer la orden que le da en persona el Alcalde del pueblo de que cierre su establecimiento por ser ya las doce de la noche, teniéndolo abierto una hora más, ¿constituirá el delito de *desobediencia grave* del artículo 265, ó la *falta de desobediencia leve* del 589, núm. 5.º?—El permiso que verbalmente le diera el Gobernador de la provincia para tener abierta la taberna hasta la una de la noche, ¿podrá ser parte á desvirtuar la índole de dicha *desobediencia*?—Cuestión VII, pág. 144.

—Al que, una vez comparecido ante la Autoridad judicial, desobedece insistente y gravemente sus mandatos, ¿podrá eximirle de la responsabilidad criminal, determinada en el art. 265 del Código, la circunstancia de que la citación de comparecencia se efectuase ó no con las debidas formalidades?—Cuest. VIII, página 145.

—¿Constituirá el delito de *desobediencia* á los agentes de la Autoridad el hecho de hacer desaparecer un comerciante de su almacén unos comestibles averiados que, descubiertos por la policía, dejó ésta en su custodia y bajo su responsabilidad, para inutilizarlos el día siguiente, dando lugar esa ocultación á que no pudiera procederse al comiso de los mismos?—Cuest. IX, página 146.

—La verdadera *resistencia* constituida por tenaz oposición á hacer lo que la Autoridad ó sus agentes mandan, hasta el punto de tener que apelar éstos á la fuerza para compeler al ciudadano á hacer lo que se le ordena, ¿podrá constituir una simple falta de *desobediencia*, aun cuando la resistencia haya sido meramente pasiva, ó sea no caracterizada por acto alguno de fuerza ejercido por el procesado contra la Autoridad ó sus agentes?—Cuest. X. pág. 146.

**Restitución espontánea de los efectos sustraídos.**—V. *Circunstancias atenuantes de igual entidad y analogía*.

**Reunión ó manifestación pacífica.**—Pena del funcionario público que ordena su disolución.—Art. 231... I.º, pág. 120.

—¿Será responsable del delito de *disolución de una reunión lícita*, comprendido en el núm. 1.º del art. 231 del Código, el Alcalde que manda suspender un baile dado en un Casino de recreo por los socios del mismo, fundado en que no se le dió parte de la celebración de aquél, conocimiento que estimó necesario por haber asistido á dicha reunión algunas personas forasteras y además dos individuos que, si bien habían sido presentados como socios del Casino, no lo eran aún?—Cuest. única, pág. 120.

**Rigor innecesario con los presos.**—V. *Alcalde ó Jefe de establecimiento penal*.

**Riña confusa y tumultuaria.**—V. *Homicidio cometido en riña confusa y tumultuaria*.

**Robo con armas en casa habitada, ó edificio público ó destinado al culto religioso.**—Artículo 521, pág. 266.

—El acto de penetrar unos malhechores en una casa, sorprender á sus moradores, causarles varias violencias determinantes de lesiones menos graves y apoderarse de cierta cantidad de dinero y efectos por valor mayor de 500 pesetas, ¿deberá ser calificado y penado como delito de *robo con violencia en las personas*, previsto y penado en el núm. 5.º del art. 516 del Código, ó deberá comprenderse en la sanción más grave del 521?—Las lesiones causadas, ¿deberán pensarse como delito separado, ó conjuntamente con el robo, con arreglo al art. 90?—Cuest. I, página 266.

—El robo cometido en una oficina particular donde se reúnen varias personas para ejercer una industria, pero que no es domicilio de nadie, ¿deberá calificarse de *robo*, comprendido en el artículo 521 del Código?—Cuest. II, pág. 267.

—¿Tendrá el carácter jurídico de *fractura de objeto cerrado ó sellado*, á los efectos del núm. 4.º del art. 521 del Código, la sim-



ple *apertura de pliegos* contentivos de valores remitidos por el correo, y que los culpables sustrajeron de la cartera de la ambulancia de correos de un tren, si no se justifica que dicha cartera estuviese *cerrada* con algún medio de seguridad ó *sellada*?—Cuest. III, pág. 267.

—Si al autor de un *robo en casa habitada* sólo se le ocuparon unas *tijeras* y una *navaja pequeña*, ¿deberá dejár de apreciarse que aquel delito se cometió *con armas*, so pretexto de que aquellos objetos no estaban destinados á la defensa del procesado, y sí á los más comunes usos de la vida?—Cuest. IV, pág. 268.

—¿Bastará que, al ser detenido el autor de un *robo en casa habitada* en la misma tarde en que el delito se perpetró, se le haya encontrado una *navaja*, para calificar dicho robo como cometido *con armas*?—Cuest. V, pág. 268.

—Si detenido el autor de un robo *en el momento mismo en que acababa de ejecutarlo* se le ocupó una *navaja*, ¿deberá calificarse aquél como realizado *con armas*?—Cuest. VI, pág. 269.

**Robo con motivo ó ocasión del cual resulta homicidio.**—Véase *Abuso de superioridad*.—*Robos*.

**Robo en lugar no habitado ó en edificio no público ni destinado al culto religioso.**—Artículo 525, pág. 269.

—El *escalamiento* de una *huerta aislada* y la *sustracción* de frutos de la misma realizada por aquel medio, ¿constituirán el delito de *robo en lugar habitado*, comprendido en el art. 525 del Código?—Cuest. I, pág. 269.

—La sustracción de una bolsa de dinero, verificada en un *carro* estacionado en la vía pública, aun cuando se verifique con *violencia*, esto es, cortando por distintos puntos las cuerdas y esteras que en forma de malla rodeaban y cerraban la bolsa del vehículo, ¿podrá calificarse de delito de *robo en lugar inhabitado*?—Cuest. II, pág. 270.

**Robos.**—Robo con motivo ó ocasión del cual resulta homicidio.—Artículo 516... 1.º, pág. 262.

—Cuando, en virtud de lo dispuesto en los artículos 339 y 340 de la ley orgánica del Poder judicial, un Tribunal español conoce de un delito cometido por un español en país extranjero, contra un extranjero, que, como el de *robo con homicidio*, con circunstancias agravantes, exige la imposición de la pena de *muerte*, la circunstancia de no existir en el país extranjero de que se trata dicha pena para los delitos comunes, ¿será obstáculo á la imposición de la misma por el Tribunal español?—Cuest. única, página 262.

- Robo cuando la violencia ó la intimidación hayan tenido una gravedad manifestamente innecesaria para su ejecución.—Artículo 516... 4.º, pág. 263.
- El hecho de penetrar varios malhechores en una casa y arrojar sobre sus dueños, atarlos con cuerdas, taparles la boca y los ojos, echarles ropa encima y darles diferentes golpes que les ocasionaron varias heridas y contusiones leves, después de lo cual registraron la casa, apoderándose del dinero y efectos que encontraron, ¿deberá calificarse de delito de robo con violencia de una gravedad manifestamente innecesaria para su ejecución?—Cuest. I, pág. 263.
- Si las violencias graves ejecutadas por los malhechores en la persona del robado lo fueron una vez cometido el robo, ¿obstará á la apreciación de manifestamente innecesarias que de ellas se haga la circunstancia de haberse verificado las mismas con el propósito de obtener del perjudicado mayor cantidad?—Cuestión II, pág. 263.
- Tentativa y delito frustrado de robo con motivo á ocasión del cual resultare homicidio.—Art. 519, pág. 264.
- Varios malhechores penetran en una casa con el premeditado propósito de robarla y dar muerte á cuantos en ella se opongan á su plan; y efectivamente, matan alevosamente á tres de sus moradores, sin poder realizar el robo por haber tenido que apelar á la fuga, dada la actitud amenazadora y resuelta del dueño de la casa, que pudo aperebirse á tiempo para la defensa: ¿cómo deberán ser calificados estos hechos?—Cuest. única, pág. 264.
- Defraudación á un tercero obligándole con violencia ó intimidación á suscribir, otorgar ó entregar una escritura pública ó documento.—Art. 520, pág. 265.
- Si los procesados, operarios de una mina, sorprendieron de noche en la calle al Director de la fábrica de fundición de aquella, y en buenas formas le pidieron les diera anticipados 10 duros á cuenta de su trabajo, ó que les firmase un pagaré, y como se negara á ello el interpelado, le amenazaron, uno de ellos con una pistola que disparó, y el otro con una faca con la que le hizo un corte en el abrigo, americana y chaleco que llevaba puestos, en el lado derecho del pecho, huyendo el agredido en el caballo en que iba montado, ¿constituirá semejante hecho el delito de robo frustrado, previsto y penado en el art. 520, en relación con el 518 del Código?—Cuest. única, pág. 265.



## S

**Secretario de Ayuntamiento.**—V. *Autores de un delito ó falta.*  
—*Cobhecho.*

**Sedición.**—V. *Rebelión ó sedición.*

**Simulación de contrato.**—V. *Otorgamiento, en perjuicio de otro, de un contrato simulado.*

**Superioridad.**—V. *Abuso de superioridad.*

**Suposición de parto y sustitución de un niño por otro.**—  
Artículo 483, pág. 254.

—La viuda que para impedir que los bienes de su marido pasasen á una hermana de éste, de conformidad con lo dispuesto en el testamento de un tío de dicho su marido, de quien procedían los precitados bienes, presenta en lugar suyo y con su propio nombre á otra mujer, acreditando por información *ad perpetuam* su estado de preñez y el subsiguiente nacimiento de un niño, que por el mismo medio hizo aparecer como nacido de ella, ¿será responsable como *coautora*, ó simplemente como *cómplice* de ese delito de *suposición de parto*?—Cuest. única, página 254.

—V. *Parentesco.*

**Sustancias alimenticias.**—V. *Aprehensión á traficantes ó vendedores, etc.*

**Sustracción, ocultación ó inutilización en todo ó parte de algún proceso, expediente, documento ó otro papel de cualquiera clase.**—Artículo 548... 9.º, pág. 295.

—Aun cuando el sustractor de unos documentos justificativos de un crédito sólo los haya tenido en su poder *breves momentos*, devolviéndolos después al acreedor, ¿será no obstante responsable del delito de *estafa*, comprendido en el núm. 9.º del artículo 548 del Código, si verificó la devolución no espontáneamente, sino en virtud de la reiterada intimación de una pareja de la Guardia civil cuyo auxilio impetró el acreedor?—Cuest. única, página 295.

**Sustracción por el dueño de una cosa mueble de quien la tiene legitimamente en su poder, con perjuicio de éste ó de un tercero.**—Artículo 551... 1.º, pág. 298.

—El que mediante dádiva ofrecida ó entregada obtiene de un carabinero encargado de la vigilancia de unas cajas de mercancías de su propiedad que le permita abrir una de ellas, como así lo verificó, sacando varios géneros que contenía, de procedencia extranjera y sin marchamo que acreditase su legítima introducción, los que substituyó por otros no afectos á adeudo, causando con ello un perjuicio á la Hacienda de mil y tantas pesetas, á la vez que del delito de *cohecho* (Véase la Cuestión del art. 398), ¿será responsable del de *estafa*, aun cuando en el expediente administrativo se le impusiera una multa de cinco veces los derechos de Arancel de los géneros sustraídos?—Cuestión única, pág. 298.

## T

**Talones de cuenta corriente.**—V. *Falsedad cometida por el particular en documento público ó oficial, ó en letras de cambio, etc.*

**Tenencia de útiles ó instrumentos destinados conocidamente á la falsificación, sin dar descargo suficiente sobre su adquisición ó conservación.**—Artículo 327, pág. 177.

—Aun cuando á ninguno de los procesados se le haya ocupado individual y determinadamente útil alguno destinado á la falsificación, ¿deberán ser considerados, sin embargo, como *autores* del delito previsto y penado en el art. 327, si todos tenían á su disposición dichos instrumentos y trataban de utilizarlos formando para ello expresa ó tácitamente una sociedad ilegítima?—Cuest. única, pág. 177.

**Tentativa.**—Página 18.

—Cuando por el culpable no se han empleado los *medios adecuados ó eficaces* para producir el mal del delito, aun siendo indudable la intención con que practicó los actos de ejecución, ¿podrán éstos calificarse de *tentativa de delito*?—Cuest. única, página 18.

—Si los procesados sólo concertaron la compra de billetes del Banco falsos á ciertos sujetos para expendierlos ellos después por su cuenta, practicando gestiones y celebrando conferen-



cias para adquirirlos y revenderlos luego, siendo sorprendidos cuando aun no habían adquirido dichos billetes, ¿deberá calificarse el hecho de delito frustrado de *expedición de billetes falsos*, comprendido en el art. 304 del Código, ó de mera *tentativa* del mismo?—Cuest. única, pág. 19.

- ¿Podrá estimarse como *propio y voluntario desistimiento*, á los efectos del último párrafo del art. 3.º del Código, ó sea para librar de pena al agente, el hecho de desistirse éste de los actos de violencia empezados á ejecutar para cohabitar con una mujer, por el sobrecogimiento y temor de que acudiera alguna persona á las voces y gritos de la perjudicada?—Cuest. única, página 20.

—V. *Proposición*.

**Tentativa de robo en casa habitada.**—V. *Allanamiento de morada*.

## U

**Uso de nombre supuesto.**—Con objeto de ocultar algún delito, eludir una pena ó causar algún perjuicio al Estado ó á los particulares.—Art. 346 (párrafo segundo), pág. 185.

- Para que exista el delito previsto y penado en el párrafo segundo del art. 346 del Código, ¿será preciso que el culpable haya usado el nombre supuesto *públicamente*, aun cuando en él no se haga mérito de esta circunstancia, como se hace en el párrafo primero?—El haber usado el procesado un nombre supuesto en una venta donde paró, con objeto de ocultar su condición de cumplido de presidio, sin que conste que lo hubiera usado antes ni después ante otras personas ni en otros sitios, ¿constituirá el expresado delito?—Cuest. única, pág. 185.

**Usurpación.**—Alteración de términos ó lindes de los pueblos ó heredades, ó de cualquier clase de señales destinadas á fijar los límites de predios contiguos.—Art. 533, pág. 278.

- ¿Constituirá el delito de *alteración de términos ó lindes*, comprendido en el art. 535 del Código penal, el cambio de linderos entre unos montes públicos y la heredad de un particular, llevado á cabo por el Ayuntamiento de un pueblo, de acuerdo con aquél, aun cuando el deslinde de dichos terrenos se hubiese efectuado anteriormente por expediente instruido en debida

forma por el Ingeniero del Cuerpo de Montes y aprobado por el Gobernador, y esta Autoridad no tuviera conocimiento ni diera autorización para ese segundo deslinde?—Cuest. única, página 278.

**Usurpación de atribuciones.**—Artículo 389, pág. 201.

—El Alcalde que, á pesar del mandato del Juez municipal de que se pusiera en libertad á un detenido que lo estaba á su disposición, prolonga su detención en el depósito municipal, donde se hallaba, por espacio de ocho días más, ¿será responsable, además del delito de detención ilegal, previsto y penado en el artículo 210 del Código, del de *usurpación de atribuciones*, comprendido en el párrafo segundo del 389?—Cuest. I, pág. 201.

—El Alcalde que por desobediencia á sus mandatos impone á un particular una multa, mas que sea en la cantidad ínfima de 15 pesetas, ¿será responsable del delito de *usurpación de atribuciones judiciales*, previsto y penado en el párrafo segundo del artículo 389 del Código?—Cuest. II, pág. 202.

**Usurpación de funciones.**—V. *Ejercicio sin título*, etc.

## V

**Vagancia.**—V. *Reiteración*.

**Vejación injusta.**—V. *Coacción ó vejación injusta*.

**Venta de una cosa como libre sabiendo que está gravada.**—Artículo 550, párrafo segundo, pág. 297.

—La disposición del art. 561, párrafo segundo del Código penal de Cuba y Puerto Rico, concordante con igual párrafo del 550 de la Península, que califica de autor de estafa «al que dispone de una cosa como libre sabiendo que está gravada,» ¿será aplicable al dador de cierta cantidad recibida en préstamo que vende á un tercero una finca que dió en garantía de aquél, en documento no inscrito en el Registro de la Propiedad?—Cuestión I, pág. 297.

—El arrendatario de una finca gravada con la pensión del pago anual de la mitad de sus productos á una persona determinada, que sabedor de este gravamen, puesto que él mismo satisfizo



dicha pensión por espacio de varios años, la adquiere por compra del dueño de la misma, haciendo constar, vendedor y comprador, en la escritura pública que aquélla estaba libre de toda carga, ¿será responsable, al par que el vendedor, del delito de estafa, comprendido en el art. 550 del Código?—Cuestión II, pág. 298.

**Vigilantes de consumos.**—V. *Atentado contra la Autoridad y sus agentes.*

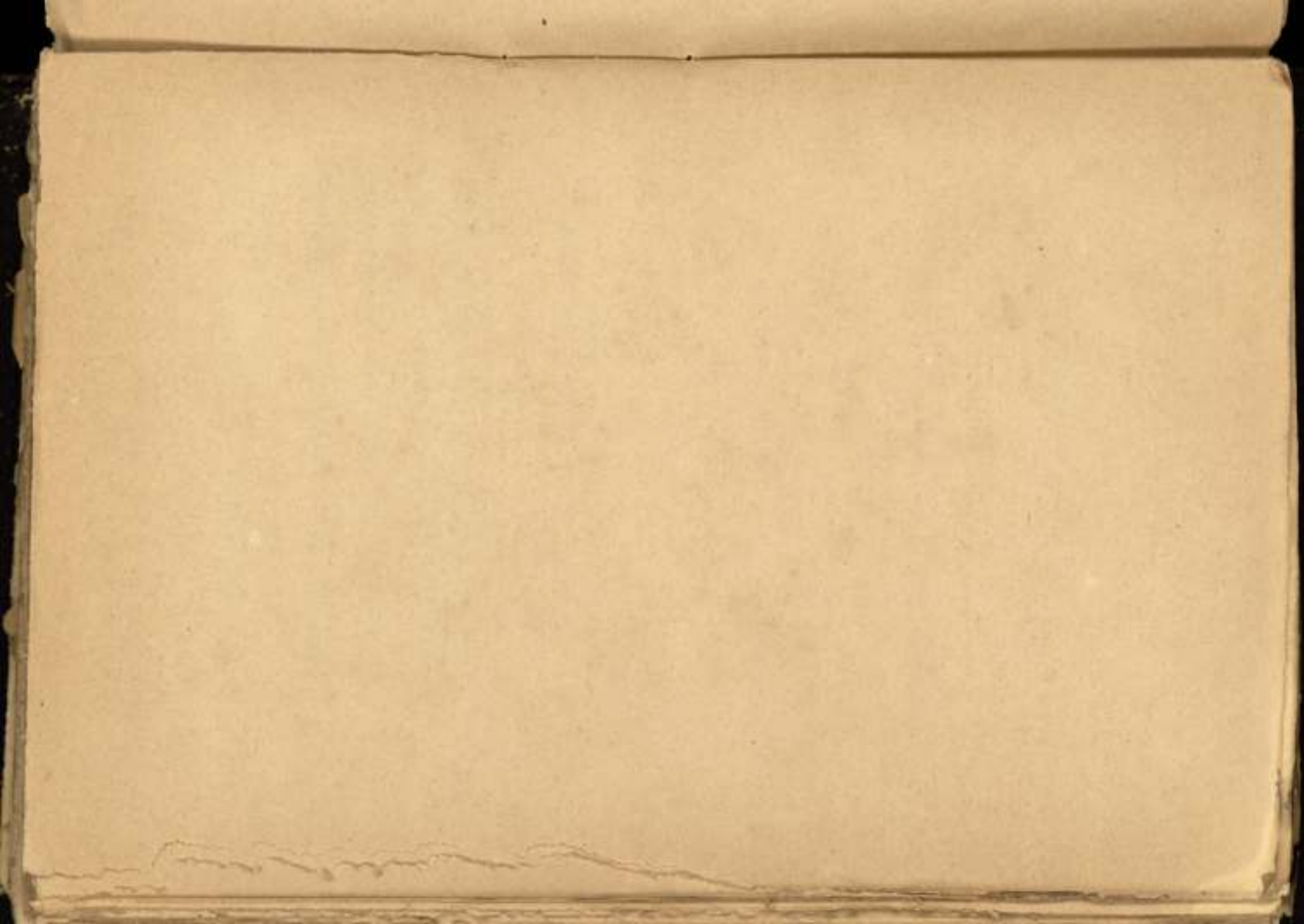
**Vindicación próxima de una ofensa grave.**—Circunstancia atenuante.—Art. 9.º... 5.º, pág. 56.

—¿Cabe estimar que obró en *vindicación de una ofensa grave* el que mata á un sujeto porque éste dijera momentos antes á otro que si no le había contestado al saludo era porque estaba en compañía de aquél, con quien tenía enemistad?—Cuest. única, página 56.

**Violación.**—V. *Abusos deshonestos.*

**Visto bueno.**—V. *Certificación falsa de méritos, etc.*

**Viuda.**—V. *Suposición de parto.*





# INDICE

PRÓLOGO.....	Página	v
--------------	--------	---

## LIBRO PRIMERO

<b>DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS DELITOS Y FALTAS, LAS PERSONAS RESPONSABLES Y LAS PENAS.....</b>		<b>7</b>
<b>TÍTULO I.....</b>	<b>DE LOS DELITOS Y FALTAS Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL, LA ATENUAN O LA AGRAVAN.....</b>	<b>7</b>
<b>CAPÍTULO I....</b>	<i>De los delitos y faltas (arts. 1.º, 3.º, 4.º y 7.º).....</i>	<b>7</b>
—	<b>II....</b> <i>De las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal (arts. 8.º, números 4.º, 5.º, 8.º y 11).....</i>	<b>22</b>
—	<b>III....</b> <i>De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal (art. 9.º, números 1.º, 3.º, 4.º, 5.º, 7.º y 8.º).....</i>	<b>51</b>
—	<b>IV....</b> <i>De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal (art. 10, números 1.º, 2.º, 3.º, 5.º, 7.º a 11, 15, 16, 17, 18, 20 y 21).....</i>	<b>62</b>
<b>TÍTULO II.....</b>	<b>DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS DELITOS Y FALTAS.....</b>	<b>85</b>
<b>CAPÍTULO I....</b>	<i>De las personas responsables criminalmente de los delitos y faltas (arts. 13, 15 y 16).....</i>	<b>85</b>
—	<b>II....</b> <i>De las personas responsables civilmente de los delitos y faltas (art. 20).....</i>	<b>97</b>

	Páginas
TÍTULO III..... DE LAS PENAS.....	98
CAPÍTULO III... <i>De la duración y efectos de las penas..</i>	98
SECCIÓN SEGUNDA. Efectos de las penas según su naturaleza respectiva (art. 50... 2. <sup>a</sup> ).....	98
CAPÍTULO IV... <i>De la aplicación de las penas.....</i>	99
SECCIÓN PRIMERA. Reglas para la aplicación de las penas a los autores de delito consumado, de delito frustrado y tentativa y a los cómplices y encubridores (arts. 65 y 66).....	99
SECCIÓN SEGUNDA. Reglas para la aplicación de las penas, en consideración a las circunstancias atenuantes y agravantes (arts. 79, 80, párrafo segundo, 81, 82, regla 5. <sup>a</sup> , 88, 89, regla 2. <sup>a</sup> , 90 y 95).....	100
TÍTULO V..... DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS QUE QUEBRANTAN LAS SENTENCIAS Y LOS QUE DURANTE UNA CONDENA DELINQUEN DE NUEVO (art. 129, regla 3. <sup>a</sup> )..	106
CAPÍTULO II.... <i>De las penas en que incurren los que después de haber sido condenados por sentencia firme no cumplida ó durante el tiempo de su condena delinquen de nuevo (art. 131).....</i>	107
TÍTULO VI..... DE LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (art. 133).....	108

## LIBRO SEGUNDO

DELITOS Y SUS PENAS.....	109
TÍTULO II..... DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN.....	109
CAPÍTULO I.... <i>Delitos de lesa majestad, contra las Cortes, el Consejo de Ministros y contra la forma de gobierno.....</i>	109
SECCIÓN PRIMERA.. Delitos de lesa majestad ( arts. 162 y 164).....	109



	Páginas
SECCIÓN TERCERA. Delitos contra la forma de gobierno (artículos 181 y 185).....	111
CAPÍTULO II... <i>De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos individuales garantizados por la Constitución....</i>	112
SECCIÓN SEGUNDA. De los delitos cometidos por los funcio- narios públicos contra el ejercicio de los derechos individuales sanciona- dos por la Constitución (arts. 210, 212, 213... 6.º, 218, 224, 228, párrafo segundo, y 231... 1.º).....	112
SECCIÓN TERCERA. Delitos relativos al libre ejercicio de los cultos (arts. 240, núm. 3.º, y 241).	121
TÍTULO III..... DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO....	126
CAPÍTULO III... <i>Disposiciones comunes á los dos capítu- los anteriores (art. 258).....</i>	126
— IV... <i>De los atentados contra la Autoridad y sus agentes, resistencia y desobediencia</i> (arts. 263 al 265).....	127
— V.... <i>De los desacatos, insultos, injurias y amenazas á la Autoridad, y de los in- sultos, injurias y amenazas á sus agentes y á los demás funcionarios públicos</i> (arts. 266, 269 y 270).....	147
— VI... <i>Desórdenes públicos</i> (art. 271).....	162
TÍTULO IV..... DE LAS FALSEDADES.....	163
CAPÍTULO II... <i>De la falsificación de moneda</i> (arts. 297 y 300).....	163
— III... <i>De la falsificación de billetes de Banco, documentos de crédito, papel sellado, se- llos de telégrafos y correos y demás efec- tos timbrados, cuya expendición esté reservada al Estado</i> (arts. 304 y 306).	164
— IV... <i>De la falsificación de documentos.....</i>	166
SECCIÓN PRIMERA. De la falsificación de documentos pú- blicos, oficiales y de comercio, y de los despachos telegráficos (arts. 314 y 315).....	166

	Páginas
SECCIÓN SEGUNDA. De la falsificación de documentos privados (art. 318).....	175
SECCIÓN TERCERA. De la falsificación de cédulas de vecindad y certificados (art. 324).....	176
CAPÍTULO V.... Disposiciones comunes d los cuatro capítulos anteriores (art. 327).....	177
— VI... De la ocultación fraudulenta de bienes ó de industria, del falso testimonio y de la acusación y denuncia falsas (artículos 333, 334, 335 y 340).....	177
— VII... De la usurpación de funciones, calidad y títulos y uso indebido de nombre, trajes, insignias y condecoraciones (artículos 342 y 346, párrafo segundo). .	183
TÍTULO V..... DE LA INFRACCIÓN DE LAS LEYES SOBRE INHUMACIONES, DE LA VIOLACIÓN DE SEPULTURAS Y DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA.....	186
CAPÍTULO I.... De la infracción de las leyes sobre inhumaciones y de la violación de sepulturas (art. 349).....	186
— II... De los delitos contra la salud pública (artículos 351 y 356).....	187
TÍTULO VI..... DE LOS JURGOS Y RIFAR (art. 358).....	189
— VII..... DE LOS DELITOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS.....	190
CAPÍTULO I.... Prevaricación (art. 369).....	190
— II... Infidelidad en la custodia de presos (artículo 373).....	191
— V.... Desobediencia y denegación de auxilio (artículo 380).....	193
— VI... Anticipación, prolongación y abandono de funciones públicas (arts. 385 y 386) .	197
— VII... Usurpación de atribuciones y nombramientos ilegales (art. 389, párrafo segundo).....	201



	Páginas
CAPÍTULO IX... <i>Cohecho</i> (arts. 398 y 400).....	204
— X... <i>Malversación de caudales públicos</i> (artículos 405, 406 y 407).....	206
— XI... <i>Fraudes y exacciones ilegales</i> (art. 412).....	210
— XIII. <i>Disposición general</i> (art. 416).....	211
TÍTULO VIII..... DELITOS CONTRA LAS PERSONAS.....	212
CAPÍTULO I... <i>Parricidio</i> (art. 417).....	212
— II... <i>Asesinato</i> (art. 418).....	213
— III... <i>Homicidio</i> (arts. 419 y 420).....	215
— IV... <i>Disposiciones comunes a los tres capítulos anteriores</i> (art. 423).....	220
— V... <i>Infanticidio</i> (art. 424).....	222
— VI... <i>Aborto</i> (art. 426).....	223
— VII... <i>Lesiones</i> (arts. 431 y 433).....	224
TÍTULO IX..... DELITOS CONTRA LA HONESTIDAD.....	228
CAPÍTULO I... <i>Adulterio</i> (arts. 448 y 452).....	228
— II... <i>Violación y abusos deshonestos</i> (artículo 454).....	229
— III... <i>Delitos de escándalo público</i> (art. 456).....	230
— IV... <i>Estupro y corrupción de menores</i> (artículos 458 y 459).....	231
— V... <i>Rapto</i> (art. 461).....	233
— VI... <i>Disposiciones comunes a los capítulos anteriores</i> (art. 463, párrafo cuarto).....	235
TÍTULO X..... DE LOS DELITOS CONTRA EL HONOR.....	235
CAPÍTULO I... <i>Calumnia</i> (art. 467).....	235
— II... <i>Injurias</i> (arts. 471 y 472).....	242
— III... <i>Disposiciones generales</i> (arts. 480 y 482).....	253

	Páginas
TÍTULO XI..... DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS.....	254
CAPÍTULO I.... <i>Suposición de parto y usurpación del estado civil</i> (art. 483).....	254
TÍTULO XII..... DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD.....	255
CAPÍTULO I.... <i>Detenciones ilegales</i> (art. 495).....	255
— V.... <i>Allanamiento de morada</i> (art. 504)....	256
— VI.... <i>De las amenazas y coacciones</i> (artículos 507... 1.º y 510).....	260
TÍTULO XIII..... DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD.	262
CAPÍTULO I.... <i>De los robos</i> (arts. 516, 519, 520, 521 y 525).....	262
CAPÍTULO II.... <i>De los hurtos</i> (arts. 530 y 533... 2.º y 3.º).	270
— III.... <i>De la usurpación</i> (art. 535).....	278
— IV.... <i>Defraudaciones</i> .....	279
SECCIÓN SEGUNDA. <i>Estafas y otros engaños</i> (arts. 547, 548, 550, 551, 552 y 554).....	279
CAPÍTULO V.... <i>De las maquinaciones para alterar el precio de las cosas</i> (art. 556).....	303
— IX.... <i>Disposiciones generales</i> (art. 580).....	305
TÍTULO XIV..... DE LA IMPRUDENCIA TENERARIA (artículo 581).....	305
TÍTULO XV..... DISPOSICIONES GENERALES (art. 582)...	312

### LIBRO TERCERO

DE LAS FALTAS Y SUS PENAS .....	315
TÍTULO I..... DE LAS FALTAS DE IMPRENTA Y CONTRA EL ORDEN PÚBLICO.....	315



	Páginas
CAPÍTULO II.... <i>De las faltas contra el orden público</i> (artículos 586... 1.º y 589... 5.º).....	315
TÍTULO II..... DE LAS FALTAS CONTRA LOS INTERESES GENERALES Y RÉGIMEN DE LAS POBLACIONES (arts. 592... 4.º y 5.º, 596... 7.º y 599... 3.º).....	318
— III..... DE LAS FALTAS CONTRA LAS PERSONAS artículo 604... 5.º).....	321
— IV..... DE LAS FALTAS CONTRA LA PROPIEDAD (artículos 611, 612, 613 y 619).....	322

## APÉNDICE

(Leyes penales especiales)

I. CONTRABANDO Y DEFRAUDACIÓN.....	329
Real decreto de 20 de Junio de 1852.....	329
Art. 18... 3.º.....	329
II. DELITOS ELECTORALES.....	330
Ley electoral de 20 de Agosto de 1870.....	330
TÍTULO III..... DE LA SANCIÓN PENAL.....	330
CAPÍTULO I..... <i>De las falsedades</i> .....	330
Art. 167... 1.º.....	330
— III... <i>De las faltas en el cumplimiento de sus deberes por los funcionarios de todas clases que intervienen en las elecciones y sus actos preparatorios</i> .....	331
Art. 173... 4.º.....	331
Art. 173... 14.º.....	333
Art. 173... 16.º.....	334
Art. 178.....	336

	Página.
Ley electoral para Diputados á Cortes de 28 de Diciembre de 1878. . . .	338
TÍTULO VI..... DE LA RANCION PENAL.....	338
CAPÍTULO I..... <i>De las falsedades</i> .....	338
Art. 123.....	338
Art. 124... 1.º.....	340
Art. 124... 2.º.....	341
Art. 124... 4.º.....	342
— II.... <i>De las coacciones</i> .....	343
Art. 125.....	343
Art. 127... 3.º.....	344
— III... <i>De las infracciones de la ley Electoral.</i> ..	345
Art. 128.....	345
Art. 129... 3.º.....	348
Ley municipal de 2 de Octubre de 1877.....	350
Art. 190.....	350
III. LEY DE CAZA DE 10 DE ENERO DE 1879.....	353
SECCIÓN OCTAVA.. Penalidad y procedimientos.....	353
Arts. 47 y 48.....	353
Art. 50.....	354
REPERTORIO ALFABETICO.....	359